LÍNEAS Y CRITERIOS JURISPRUDENCIALES DE LA SALA DE LO CIVIL

ÓRGANO JUDICIAL

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

2022

Gerente General de Asuntos Jurídicos
Lcda. Quiriam Geraldina Pinto Quintanilla

Director de Servicios Técnicos Judiciales
Lic. Carlos Rafael Pineda Melara

Jefa de la Unidad Gestora de Procesos de Documentación Jurídica y Judicial
Lcda. Evelin Carolina Del Cid Flores

Jefe del Departamento de Documentación Judicial
Lic. Carlos René Castillo Hernández

Jefe del Departamento de Publicaciones
Lic. José Alejandro Cubías Bonilla

Jefa de la Sección de Diseño Gráfico
Lcda. Roxana Maricela López Segovia

Diagramación
Fabiola Vanessa Segura Cortez

Diseño de portada
Mgtr. Andrea Nathalia García Peña

© Corte Suprema de Justicia
Centro de Gobierno
San Salvador
El Salvador.

Corte Suprema de Justicia
2024

Lic. Óscar Alberto López Jerez
PRESIDENTE

Sala de lo Constitucional

Lic. Óscar Alberto López Jerez
PRESIDENTE

MSc. Elsy Dueñas Lovos
VOCAL

Lic. José Ángel Pérez Chacón
VOCAL

MSc. Luis Javier Suárez Magaña
VOCAL

MSc. Héctor Nahún Martínez García
VOCAL

Sala de lo Civil

Lic. Alex David Marroquín Martínez
PRESIDENTE

Dra. Dafne Yanira Sánchez de Muñoz
VOCAL

MSc. Leonardo Ramírez Murcia
VOCAL

Sala de lo Penal

MSc. Alejandro Antonio Quinteros Espinoza
PRESIDENTE

MSc. Sandra Luz Chicas Bautista
VOCAL

Lic. Roberto Carlos Calderón Escobar
VOCAL

Sala de lo Contencioso Administrativo

Lic. José Ernesto Clímaco Valiente
PRESIDENTE

MSc. Sergio Luis Rivera Márquez
VOCAL

Lcda. Paula Patricia Velásquez Centeno
VOCAL

Dr. Henry Alexander Mejía
VOCAL

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SALA DE LO CIVIL
2022

Presidente:	Lic. Alex David Marroquín Martínez
Vocal:	Dra. Dafne Yanira Sánchez de Muñoz
Vocal:	MSc. Leornado Ramírez Murcia

SECCIÓN DE DERECHO SOCIAL
DEPARTAMENTO DE DOCUMENTACIÓN JUDICIAL

Coordinador: Lic. Francisco José Martínez Regalado

Colaboradores: Lcda. Karina María Rodríguez Martínez
Lcda. Sandra Hernández de Vega

SECCIÓN DE DERECHO PRIVADO
DEPARTAMENTO DE DOCUMENTACIÓN JUDICIAL

Coordinadora: Lcda. Lizbeth Avilés de Carrillo

Colaboradores: Lcda. Sandra Bonilla Durán
Lic. Óscar Antonio Canales Cisco
Lic. Manuel Morán

CONTENIDO

PRÓLOGO i

MATERIA: CIVIL Y MERCANTIL 1

MATERIA: FAMILIA 190

MATERIA: LABORAL 225

PRÓLOGO

La presente edición pretende ser, más que un documento informativo, un texto útil para los interesados en conocer y aplicar la jurisprudencia como fuente de derecho.

La recopilación y tratamiento jurídico de la información se lleva a cabo en el Departamento de Documentación Judicial, oficina cuyo objetivo fundamental es divulgar este material, tanto a través de las revistas, como mediante el uso de medios automatizados para cuyos efectos cuenta con una base de datos que puede ser consultada por toda la comunidad jurídica nacional e internacional y otras personas interesadas en el quehacer judicial. Con este esfuerzo la Corte Suprema de Justicia, pretende dar a conocer las Líneas y Criterios Jurisprudenciales, que están constituidas por la extracción literal, entrecomillada del punto jurídico relevante, obtenido de la sentencia, después de una lectura integral y profunda, en el que se refleja el aporte del juzgador al análisis del caso sometido a su consideración, sin cortar la idea principal.

En algunos casos, la sentencia puede contener análisis de distintos temas que, aunque relacionados con el principal, se separa en subtemas para que el lector pueda visualizarlos de mejor forma, sin afectar la comprensión general de lo resuelto.

Desde el punto de vista del lector, las Líneas y Criterios Jurisprudenciales representan una información valiosa para conocer, desarrollar o investigar determinados temas jurídicos.

Esperamos con esta edición y las siguientes satisfacer una de las demandas principales de la sociedad, como es la transparencia en el ámbito de la justicia salvadoreña.

El contenido de esta publicación es un extracto literal
de las sentencias pronunciadas por la Sala de lo Civil.
Los temas y subtemas son responsabilidad de las Secciones
de Derecho Social y de Derecho Privado del Departamento
de Documentación Judicial.

ACCIÓN REIVINDICATORIA DE DOMINIO SOBRE BIENES AFECTADOS CON SERVIDUMBRE DE ELECTRODUCTO Y TRÁNSITO

IMPOSIBILIDAD DE ESTIMAR LA PRETENSIÓN DEBIDO A QUE SE TIENE CERTEZA DE LA CONSTITUCIÓN DE UN DERECHO REAL SOBRE LA PROPIEDAD QUE SE PRETENDE REIVINDICAR, Y NO SE DETERMINÓ LA ILEGALIDAD DE LA SERVIDUMBRE SOBRE LA MISMA

"VI. Resolución que corresponde

1. Tal como se ha dicho antes, la acción reivindicatoria requiere para su estimación, que se pruebe la propiedad, la pérdida de la posesión y la singularidad de la cosa (art. 891 CC).

La base normativa de la pretensión a su letra determina lo siguiente: "*La reivindicación a acción de dominio es la que tiene el dueño de una cosa singular, de que no está en posesión, para que el poseedor de ella sea condenado a restituírsela".*

En este caso, dado el cuadro fáctico planteado en la demanda y que se relaciona a la cronología establecida en esta sentencia, se advierte que la propiedad se conjuga con la posesión, debido a que esta última se justifica según la parte demandada por la constitución de la servidumbre en el año 1969.

De manera que, el dominio no puede ser apreciado en la forma típica u ordinaria con la cual se analizan otros casos, en los cuales no hay reconocimiento previo de un gravamen sobre la propiedad cuya posesión no se ejerce.

En efecto, en este litigio el interés patrimonial entre particulares, tiene un componente superlativo que lo difiere de lo común, pues hay interés público que puede verse afectado tras el reconocimiento del derecho de propiedad y posesión que se reclama. Y es por dicha razón, que tienen que haber bases sólidas de prueba con la cual pueda inferirse con certeza el reconocimiento del derecho de dominio.

Ahora, en lo que atañe a la posesión, debe tenerse en cuenta que tiene que apreciarse sobre la base de que el propietario no la ejerce, sino que es otra persona, a la que se considera como el actual poseedor (salvo prueba en contrario).

Por esa razón, se tienen que probar los elementos fundantes de la causa de pedir en este tipo de pretensiones, relativos a que el propietario ha sido despojado, o no tiene la posesión de la cosa, por detentarla o tenerla una persona diferente (actual poseedor), lo cual impide que haga efectiva su posesión.

2. Retomando el análisis de la prueba mediante la cual se ha llegado establecer que en el presente caso se ha constituido una servidumbre voluntaria de electroductos, con la cual se ha pretendido justificar la posesión de una porción de la propiedad del actor, se advierte lo siguiente:

Como premisa esta Sala considera que se debe tener un grado de convicción certero para acreditar los elementos integrantes de la acción reivindicatoria, y con ello, tomar la decisión sobre bases probatorias sólidas.

2.1 En ese sentido, junto con la demanda se incorporó al proceso el testimonio de escritura pública de compraventa (número ***, del libro ***) otorgada ante los oficios de la notario […], en la cual comparecieron el señor JERA, en calidad de vendedor, y la sociedad […], en calidad de comprador, sobre un inmueble con matrícula ********-00000, inscrito en el Registro de la Propiedad Raíz e Hipotecas de la Primera Sección del Centro de San Salvador, situado en el punto "*La* ********", de la jurisdicción de Mejicanos, el cual se vende libre de gravamen.

Además, se tiene el testimonio escritura pública de compraventa (número ***, del libro ***) otorgada ante los oficios de la notario […], en la cual comparecieron el señor JERA, en calidad de vendedor, y la sociedad […], en calidad de comprador, sobre un inmueble con matrícula ********-00000, inscrito en el Registro de la Propiedad Raíz e Hipotecas de la Primera Sección del Centro de San Salvador, situado en el cantón de San Antonio Abad, jurisdicción de Cuscatancingo, en el lugar denominado "La ********", el cual se vende libre de gravamen.

Sobre dichos inmuebles, según el Estudio Registral Catastral, emitido por el Centro Nacional de Registros, el quince de agosto de 2019, se consigna el tracto sucesivo sobre dichos inmuebles y se determina que los mismos, están comprendidos en las parcelas ***, *** y ***, en las cuales se ubica la servidumbre voluntaria de electroducto y tránsito.

En ese sentido, debe tenerse en cuenta que la constitución de la servidumbre voluntaria, fue otorgada de forma espontánea y libre de cualquier vicio de consentimiento, la cual fue inscrita y que se *"hace de conformidad y como lo ordena la Ley de constitución de servidumbre para las obras de electrificación nacional" derogada (sic), tal* como aparece consignado en la certificación que contiene dicho acto jurídico.

La ley que se menciona, tenía como propósito, tal como se justificaba en sus considerandos, que: *"Que entre esas dificultades se encuentra en primer lugar la incomprensión de algunos propietarios o poseedores de bienes raíces que ponen obstáculos a la constitución de las diversas servidumbres que necesita la CEL, para la construcción, operación y mantenimiento de las líneas de transmisión de los equipos indispensables para el tendido de conducto de energía eléctrica" (sic).*

De lo anterior, se deriva el interés público de la ley, mediante el cual se justifica la necesidad de cubrir un servicio nacional para los particulares, y además, se dispone en el art. 15 lit. a) y b) de la ley en mención, lo siguiente:

Los títulos de constitución de las servidumbres a que se contrae la presente ley, se inscribirán a favor de la C.E.L.:

"a) Aunque los predios carezcan de antecedente inscrito, siempre que los propietarios o poseedores constituyentes no hayan sido perturbados en su posesión por medio de acciones posesorias o reivindicatorias o procedimiento administrativos, durante los dos años anteriores a la publicación de la presente ley, circunstancia que se acreditará en el registro respectivo con certificaciones expedidas por el alcalde municipal y juez de primera instancia de lo civil de la jurisdicción;

b) Aunque las colindancias no concuerden con los antecedentes, siempre que aquellas hayan sido tomadas de los planos topográficos levantados por la C.E.L."

Por consiguiente, logra advertirse la flexibilidad para la constitución de estos gravámenes en interés público, ya que se prescinde de requisitos para la formalización del acto, entre ellos, el antecedente inscrito y sus colindancias.

Para el caso, debe tenerse en cuenta, como reflejo de ese interés, que cuando se constituyó el gravamen, tal como se extrae del estudio registral que se ha relacionado, en el cual se advirtió: *"El gravamen efectuado por el Sr. LA Hijo a favor de la CEL, en los inmuebles denominados "La Chila" y "La ********", fue otorgado en el año de 1969, cuando aún no habían sido declarados herederos del causante Dr. LA, por esa porción razón manifestó que dicha porción carecía de documento inscrito" (sic).*

De manera que se tiene certeza de la existencia de constitución de la servidumbre bajo un interés público, sobre la propiedad de la parte actora. Y por ende, hay una circunstancia que limita legalmente el derecho de dominio que se pretende hacer valer.

Por ello, se conjuga la propiedad y la posesión respecto de una porción de esa propiedad destinada a cubrir un servicio público. Es decir, se advierte que hay una posesión legal, con la cual se vuelve imposible que se pretenda reivindicación alguna, ya que uno de los requisitos de la pretensión es que el propietario no esté en posesión de la cosa.

2.2 Cabe destacar que el dictamen pericial y la declaración del perito en audiencia probatoria, es la prueba que cuestiona la *"ubicación de la servidumbre";* sin embargo, en audiencia probatoria, el ingeniero FFRM, expresó, según consta en el registro del acta de audiencia, lo siguiente: [...]

Por consiguiente, la prueba pericial no descarta que la servidumbre esté ubicada en el inmueble objeto de litigio, cuya posesión se atribuye que es ilegítima. Además, tampoco se logró desacreditar mediante esta prueba la certeza que se tiene respecto de la constitución de la servidumbre, con la cual se provoca la posesión legal ejercida por la parte demandada. Siendo por dicha razón, que no puede estimarse la pretensión reivindicatoria de dominio.

2.3 Finalizado el análisis relativo a la acción reivindicatoria, ahora, en cuanto a la pretensión resarcitoria, esta Sala advierte que por tener conexión con dicha acción o vinculada con la causa de pedir que la fundamenta, la misma debe desestimarse, por cuanto que si la que provoca dicha consecuencia no se estima, cualquier petición vinculada con la misma, no podría prosperar.

2.4 En conclusión, no es posible estimar la acción reivindicatoria, debido a que se tiene certeza de la constitución de un derecho real sobre la propiedad que se pretende reivindicar; y además, tampoco se determinó la ilegalidad de la servidumbre sobre la propiedad que se reclama."

Sala de lo Civil, número de referencia: 173-CAC-2022, fecha de la resolución: 13/09/2022

ACCIÓN REIVINDICATORIA

NO PUEDE PROBARSE EL DERECHO DE DOMINIO CON LA CERTIFICACIÓN REGISTRAL, EN VIRTUD QUE ESTA NO PRUEBA EL DOMINIO SIN JUSTIFICAR LA IMPOSIBILIDAD DE LA OBTENCIÓN TÍTULO EN SU REPOSICIÓN, LO CUAL TIENE LUGAR SIEMPRE QUE SE COMPRUEBA LA PÉRDIDA DEL MISMO

"VII. Infracción de ley por la errónea aplicación del art. 16 LRRPRH

1. El art. 16 LRRPRH expresa: *"Se podrá expedir certificación de las inscripciones, utilizando las copias obtenidas del microfilme de las mismas. Estas certificaciones tendrán el mismo valor legal que el de las expedidas de las inscripciones originales".*

2. La Cámara sostuvo que le resulta incoherente considerar que una certificación literal actualizada no haga prueba sobre la inscripción y la existencia del asiento para probar el derecho de propiedad. En ese sentido, a fin de tener por acreditado el mismo, le dio aplicación al art. 16 LRRPRH, considerando que la ley posterior prevalece sobre la ley anterior; es decir que al seria LRRPRH, más reciente a la LRTODARPRH, con base en el principio de cronología, le resultó de mejor aplicación.

Por lo que, bajo ese argumento, la Cámara confirmó la sentencia dictada por el juez de primera instancia, mediante el cual se tuvo por acreditado el derecho de propiedad, con el instrumento mencionado, accediendo a la pretensión reivindicatoria.

3. Las recurrentes para demostrar la infracción, argumentan que la Cámara hace una interpretación errónea del art. 16 LRRPRH, al manifestar que las certificaciones de las inscripciones a que hace referencia dicha disposición tienen el mismo valor legal que el de las expedidas de las inscripciones originales, y que no establece un valor subsidiario a las certificaciones, y que al ser la LRRPRH, más reciente que la LRTODARPRH, con base al principio de cronología se entenderá que resulta ésta de mejor y obligatoria aplicabilidad, y que habiendo una heterointegración con los arts. 330, 331 y 341 todos CPCM, es permisible probar el derecho de propiedad del inmueble que se pretende reivindicar, con el instrumento público como lo es la certificación literal presentada.

Contrario a lo que expone la Cámara, consideran las recurrentes que para acreditar el derecho de propiedad, a favor de una persona determinada, debe agotarse lo previsto en el art. 35 LRTODARPRH, y no el art. 16 LRRPRH, ya que el primero no ha sido derogado por el segundo como lo ha hecho ver la Cámara.

4. Al respecto, este tribunal ya se ha pronunciado en lo relativo a la acreditación del derecho de dominio, como requisito del art. 891 CC, en la acción reivindicatoria, y respecto de la presentación de la certificación expedida por el registrador, regulada en el art. 16 LRRPRH, estableciéndose en su jurisprudencia, lo siguiente: "[...] que la aplicación de dicha disposición con respecto al valor legal que se le asigna a una certificación, es pertinente cuando se refiere a certificaciones sobre las inscripciones de los negocios jurídicos que afecten bienes inmuebles, siempre que éstas no puedan obtenerse de su original; en cuyo caso, dicha norma prevé la posibilidad de percibir su fuente de los microfilmes, que al efecto lleve el Registro [...] que lo anterior es en concordancia con lo establecido en el art. 681 CC, el que define uno inscripción registral, como "el asiento que se hace en los libros del Registro de los títulos sujetos a este requisito, con el objeto de que consten públicamente los actos y contratos consignados en dichos títulos, para los efectos que este título determina", por lo que la certificación de la inscripción de un inmueble, únicamente prueba la existencia del asiento de inscripción de un inmueble, y los efectos de oposición contra terceros (art. 683 CC). Sin embargo, tal certificación no prueba el título de propiedad, ya que la trasferencia de dominio de un inmueble, a fin de amparar dicho derecho, se reputa perfecto ante la ley hasta que se otorgue en escritura pública (art. 1605 inc. 2 CC) […] Que la excepción de la obligación de probar con el instrumento antes mencionado, para efectos de acreditar la propiedad de un inmueble puede obtenerse subsidiariamente de lo previsto en el art. 35 inc. 4^{0} LRTODARPRH, y que dicho cuerpo normativo no ha sido derogado por la Ley de Reestructuración del Registro de la Propiedad Raíz e Hipotecas, pues en ella no se dispone algo distinto con relación a las certificaciones expedida por el mencionado registro, sino más bien complementario (.4" (sic). (Sentencia pronunciada en el incidente de casación clasificado bajo referencia 86-CAC-2016, del veintiocho de octubre de dos mil dieciséis).

5. De lo anterior, esta Sala a fin de establecer la titularidad del propietario en una acción de dominio, ha adoptado el criterio arriba citado, entendiendo que la titularidad, puede acreditarse a través de instrumentos tales como: escritura pública de compraventa, titulo supletorio, certificación del acta de remate y la adjudicación en pago, la que conforman un solo instrumento, cualquiera que sea en original y debidamente inscrito. Solamente ante la imposibilidad del actor de obtener el título original inscrito, subsidiariamente debe seguir el procedimiento establecido en el art. 35 inc. 4° LRTODARPRH, y así la certificación de la inscripción registral tendrá el valor que le otorga el art. 16 de LRRPRH.

6. Bajo dicho contexto interpretativo, la aplicación errónea se configura cuando el tribunal de segunda instancia, comete errores de interpretación sobre las normas de derecho pertinentes para resolver el caso, bien porque se restringe o se amplía el alcance de las mismas, o porque se otorga a las expresiones normativas, un significado que no tienen.

Para esta Sala, la Cámara cometió interpretación errónea, otorgándole un sentido que no tiene al art. 16 LRRPRH, al ampliar su alcance, ya que el demandante que promueve acción de dominio, sin presentar el título original debida-

mente inscrito, o la certificación registral bajo los supuestos previstos en el art. 35 inc. 4 LRTODARPRH, no acredita el dominio, por lo que la pretensión carece de un presupuesto establecido en el art. 891 CC.

Tal como quedó establecido en párrafos anteriores, no puede probarse el derecho de dominio con la certificación registral, en virtud que esta no prueba el dominio sin justificar la imposibilidad de la obtención título en su reposición, lo cual tiene lugar siempre que se comprueba la pérdida del mismo."

LA PRUEBA DE LA PROPIEDAD NO SE ACREDITA CON CUALQUIER TIPO DE INSTRUMENTO, SINO CON EL TÍTULO ORIGINAL DEBIDAMENTE INSCRITO EN EL REGISTRO RESPECTIVO

"Además, esta Sala estima pertinente aclarar que en el presente caso, no es necesario realizar un análisis sobre la clasificación de instrumentos en públicos y auténticos, para tener por acreditado el dominio, en el sentido de que basta la certificación extendida por un funcionario en el ejercicio de sus funciones para incorporar al proceso la prueba pertinente de la propiedad, y que por ser un instrumento auténtico hace plena prueba del dominio, sino que principalmente debe tenerse en cuenta que la prueba de la propiedad, no se acredita con cualquier tipo de instrumento, ya que si bien es cierto la certificación registral es un instrumento que hace prueba, no es la idónea para este caso, ya que el instrumento útil y pertinente para acreditar el dominio, es el título original debidamente inscrito en el Registro respectivo."

LA PARTE ACTORA, EN EL SUPUESTO DE ENCONTRARSE IMPOSIBILITADA DE TENER EN SU PODER EL TÍTULO ORIGINAL, DEBIÓ REPONER EL MISMO DIRIGIENDO SU PETICIÓN AL FUNCIONARIO CORRESPONDIENTE, A FIN DE QUE LE EMITA UNA NUEVA CERTIFICACIÓN DEL ACTA DE REMATE Y ADJUDICACIÓN EN PAGO

"7. Por otra parte, es importante traer a colación que el objeto de la Ley de Reestructuración del Registro de la Propiedad Raíz e Hipotecas, se encuentra regulado en el art. 1 de la misma, y en el que se establece que su finalidad, es regular el registro de los bienes inmuebles, aprovechando las técnicas modernas para la conservación y resguardo de la información.

Para el caso en particular, siendo que el título de propiedad, lo constituye *"una certificación que contiene el acta de remate y auto de adjudicación en pago",* de dos inmuebles, librada por el Juzgado Segundo de lo Civil de San Miguel, el nueve de julio de dos mil once, e inscrita en el Registro a las 10:34:03 horas, del día 15/08/201: dicho título, es decir, la mencionada certificación, tuvo que presentarse junto a la demanda, para acreditar el dominio en su original, como consta a fs. 12 de la primera pieza, sino que se presentó una certificación literal, extendida por el Registro.

La parte actora en este proceso, en el supuesto de encontrarse imposibilitada de obtener en su poder el título original, debió reponer el mismo, dirigiendo su petición, al funcionario correspondiente, a fin de que se le emitiera una nueva certificación del acta de remate y adjudicación en pago.

Siendo que la funcionaria que emitió la certificación de adjudicación en pago, que sirve de título de propiedad, en este caso fue la Jueza Segundo de lo Civil de San Miguel; pero, que por decreto número 59, del 12/07/2012, D.O. 146, tomo 396, del 10/08/2012, se convirtió a Juzgado Cuarto de Familia de San Miguel, es que se advierte, que es a éste último, a quien debió solicitársele la reposición del título mencionado, ya que con base en el art. 13 del decreto 372 del 27/05/2010, D.O. 100, tomo 387, del 31/05/2020, y el art. 2 del decreto 892 de 12/12/2014. D.O. 240, tomo 405, del 23/12/2014, es dicho juzgado quien continúa los trámites iniciados en el Juzgado Segundo de lo Civil de San Miguel; situación que no quedó demostrada en autos.

Por lo que la ley de Reestructuración del Registro de la Propiedad Raíz e Hipotecas, no viene a suplantar ni a derogar normas sustantivas del Código Civil, ni la Ley Relativa o las Tarifas y Otras Disposiciones Administrativas del Registro de la Propiedad Raíz e Hipotecas, en los que regula el derecho a la propiedad, sino más bien a complementarla.

8. En conclusión, de conformidad con los conceptos expresados, en el presente caso, esta Sala sostiene que el tribunal de alzada, al tener por acreditado el derecho de propiedad, únicamente con la certificación literal extendida por el Registro, bajo el argumento de que la certificación literal de la inscripción registral, tiene el mismo valor legal que las expedidas de las inscripciones originales, con base en el art. 16 LRRPRH, y asimismo, sostener que es permisible probar el derecho de propiedad sobre el inmueble que se pretende reivindicar con ésta, por ser un instrumento público, se amplía un alcance que no tiene el art, 16 LRRPRH, configurándose así el vicio invocado, razón por la cual procede casar la sentencia de mérito" [...]

NO SE ACREDITÓ DEBIDAMENTE EL DERECHO DE DOMINIO, POR LA INOBSERVANCIA DE LA JURISPRUDENCIA DICTADA POR LA SALA DE LO CIVIL, RESPECTO DE LAS REGLAS ESTABLECIDAS EN EL ART. 35 LTODARPRH

"X. FUNDAMENTO JUR1DICO DE LA RESOLUCIÓN QUE CORRESPONDE

1. Establecida la existencia de las infracciones relativas a la interpretación errónea del art. 16 LRRPRH, y por la infracción a la doctrina legal, en cuanto a la inobservancia de los precedentes de esta Sala, emanados sobre la interpretación del art. 35 LRTODARPRH, a este tribunal le corresponde de conformidad a lo previsto en el art. 537 CPCM, entrar al fondo del asunto controvertido y realizar el pronunciamiento correspondiente.

2. En lo tocante a la acción reivindicatoria de dominio, esta Sala, que el art. 891 CC, exige presupuestos sin los cuales no prospera la pretensión, tales son: a) el derecho de dominio en el reivindicante: b) que no esté en lo posesión del bien inmueble el pretensor; y, c) la singularidad de la cosa.

Esta Sala ha sostenido en jurisprudencias pasadas, que uno de los requisitos fundamentales para que opere la acción de dominio, es la titularidad de la cosa, para lo cual, la prueba del dominio debe acreditarse con la presentación del instrumento en que conste la adquisición del derecho de dominio inscrito en

el Registro de la Propiedad Raíz e Hipotecas, tal como lo establecen los arts. 651, 656, 667, 680, 683 y 717 CC; y, solamente ante la imposibilidad del demandante de obtener el título original, puede recurrir a lo establecido en el ord. 4° del art. 35 LRTODARPRH, disposición que establece que a falta del título de propiedad original, tendrá el mismo valor probatorio, un nuevo testimonio o una certificación expedida por el funcionario respectivo, siempre que lleve la razón de inscripción por certificación; y, solo en el caso que no pueda hacer la reposición (o en el caso excepcional del inc. 3° del art. 718 CC), tendrá valor probatorio la certificación literal que a solicitud de parte expida el Registrador de la respectiva acta de inscripción. (Sentencia pronunciada en el incidente de casación clasificado bajo referencia 77-CAC-2010, del quince de febrero dos mil doce).

3. En el presente caso, la parte demandante, para probar la titulad d del dominio, presentó una certificación literal, extendida por el Registro la Propiedad Raíz e Hipotecas de la Primera Sección de Oriente, San Miguel, inscrita bajo la matricula **********, asiento ***, de la **"certificación del acta de remate y auto de adjudicación en pago"** sin justificar la imposibilidad de la reposición del título original inscrito.

Por su parte, la parte demandada, dentro del término de contestar la demanda, objetó dicha prueba, alegando la improponibilidad de la demanda, por no haberse acreditado el derecho de dominio con el título original inscrito en el Registro respectivo, o en su defecto la certificación literal expedida por el Registro, incumpliendo los presupuestos establecidos en el art. 35 LTODARPRH.

4. Ahora bien, analizada que ha sido la prueba para acreditar el dominio, de parte de la actora, esta Sala, al respecto sostiene, que si bien es cierto, de conformidad con los cris. 331 y 341 del CPCM, las certificaciones extendidas por el Registro de la Propiedad Raíz e Hipotecas, constituyen documentos públicos, ya que han sido extendidos por una autoridad o funcionario público en el ejercicio de sus funciones; y tienen valor de plena prueba en los términos expuestos en los artículos relacionados, para el caso en particular no es el instrumento correspondiente, a efecto de acreditar el domino, ya que no puede desatenderse lo regulado en el art. 35 de la Ley Relativa a las Tarifas y Otras Disposiciones Administrativas del Registro de la Propiedad Raiz e Hipotecas, la cual por ser una ley de carácter especial priva sobre la ley general, teniendo que las certificaciones literales del acta de inscripción, que hayan sido extendidas por el Registro de la Propiedad tendrán el mismo valor, que el de las escrituras originales, siempre y cuando no fuere posible presentar el título original.

Asimismo, no podemos dejar de lado la jurisprudencia que ha venido sosteniendo esta Sala al respecto, y que constituye doctrina legal para el efecto.

Lo anterior es en razón que los títulos de transferencia o traslativos, son los instrumentos que materializan la causa, es decir, son aquellos en virtud de los cuales se transfiere el derecho o el paso de un titular llamado tradente a otro titular llamado adquirente, citándose como ejemplos la compraventa, permuta, donación, aporte o sociedad, disolución de sociedad, dación o adjudicación en pago, cesión de derechos ya inscritos, etc. Estos títulos suponen un derecho

de dominio o posesión existente y que se pasa a otro quien llega a ser dueño mediante lo tradición, que, en nuestra legislación, es modo derivativo de adquisición del dominio, posesión y demás derechos reales, por lo que la certificación registral como tal, únicamente sirve para probar la inscripción registral.

De todo lo antes expuesto, esta Sala concluye, que la pretensión reivindicatoria de dominio, incoada en este proceso, deviene en improponible, de conformidad con el art. 277 CPCM, por falta de un presupuesto esencial, pues no se acreditó debidamente el dominio, por la inobservancia de la jurisprudencia dictada por esta Sala, respecto a las reglas establecidas en el art. 35 LTODAR-PRH, imposibilitando a esta Sala, a conocer el fondo del asunto, ya que no existe certeza de la titularidad de la parte actora.

Con lo anterior, se advierte, por el resultado de esta sentencia, que le queda expedito el derecho a la parte demandante para interponer su demanda con la prueba pertinente, a fin de acreditar el derecho de domino sobre el inmueble que pretende reivindicar."

Sala de lo Civil, número de referencia: 270-CAC-2022, fecha de la resolución: 17/11/2022

PROCEDE CASAR LA SENTENCIA POR APLICACIÓN INDEBIDA DEL ARTÍCULO 375 DEL CÓDIGO PROCESAL CIVIL Y MERCANTIL, YA QUE LA PRUEBA PERICIAL NO ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO PARA SINGULARIZAR EL INMUEBLE OBJETO DE UN PROCESO REIVINDICATORIO

"IV. Análisis del recurso por el motivo de fondo respecto a aplicación indebida del art. 375 CPCM

1. El profesional que recurre, fundamenta la infracción en cuanto que la Cámara ha sostenido, que hay insuficiencia de prueba para acreditar el elemento de la singularidad y la identidad entre el inmueble reclamado y el poseído por la demandada.

Y alega que en el romano XXIV), de la sentencia impugnada, la Cámara manifestó: "[…] el medio idóneo para singularizarse es el peritaje practicado por persona con conocimientos técnicos especializados en agrimensura destinada a delimitar superficies y mediciones de áreas; casos para los cuales el Código procesal Civil y Mercantil en el inc. 1° de! art. 375 estipula: "si lo apreciación de algún hecho controvertido en el proceso, requiere conocimientos científicos, artísticos o de alguna técnica especializada, las portes podrán proponer la práctica de prueba pericial [...]" (sic).

Según el recurrente, la Cámara aplicó indebidamente el art. 375 CPCM, al volver necesario el medio probatorio pericial, para determinar la singularidad de la cosa a reivindicar. Y según él, la prueba pericial no es un requerimiento imperativo, para comprobar la singularidad del inmueble que se pretende reivindicar.

2. Al respecto, la Cámara sostuvo lo siguiente: [...].

3. Respecto a esta infracción, la Sala considera lo siguiente:

3.1 La aplicación indebida de la ley es el resultado del proceso lógico-jurídico que realiza el juzgador, a fin de establecer si el caso particular está o no contenido en la norma, concluyendo que lo está, a pesar de que la norma que fue aplicada no era la idónea para resolver el caso. Es decir, que la aplicación indebida se configura, cuando el precepto o preceptos jurídicos que se hacen valer, se aplican a pesar de no ser los pertinentes para resolver el asunto que es objeto de decisión.

3.2 Al estudiar la sentencia impugnada, se denota que la Cámara claramente ha dicho que el peritaje es la prueba idónea para determinar la singularidad del inmueble a reivindicar.

3.3 Los medios de prueba pueden definirse como las herramientas legales para acreditar la existencia de los hechos controvertidos, con relación a los cuales se pretende hacer valer un derecho. Dentro de dichos medios se encuentra la prueba pericial.

La práctica de peritajes es una actividad procesal desarrollada por personas distintas de las partes del juicio, especialmente calificadas por sus conocimientos técnicos o científicos, que suministran al juez, argumentos o razones para la formación de su convencimiento respecto de ciertos hechos cuya percepción o cuyo entendimiento escapa a las aptitudes del común de la gente.

Lo que distingue a la pericia del resto de los medios de prueba, es que la misma intenta lograr la convicción del tribunal respecto de hechos técnicamente complejos, o sobre aspectos especializados de hechos determinados.

La prueba pericial se enmarca dentro de lo que se denomina la prueba científica, la que goza de una alta fiabilidad.

La finalidad de la prueba pericial es demostrar hechos que no son del común saber de las partes o del juez, de modo que el perito mediante su informe o dictamen, proporciona al tribunal conocimientos técnicos necesarios para la valoración de los hechos objeto de la controversia.

La valoración que el juez efectúa sobre el informe de los peritos, se debe realizar conforme a las reglas de la sana crítica, por lo que esta prueba pericial no prevalece sobre el resto de las pruebas incorporadas al proceso, pues la misma debe valorarse en su conjunto (art. 389 CPCM).

3.4 En virtud de lo anterior, esta Sala considera que para singularizar el inmueble objeto de reivindicación, no es obligatorio que se realice a través de una prueba científica como es la prueba pericial, pues para determinar su ubicación, capacidad superficial, medidas y colindancias, se debe acreditar con la descripción del inmueble realizada en la demanda, la cual debe coincidir exactamente con la descripción del título de dominio debidamente inscrito, y valorarse conjuntamente con el resto de pruebas, ya sea documental, testimonial, declaración de parte contraria, reconocimiento judicial o prueba pericial, si hubiera sido incorporada al proceso, y con la cual se puede complementar o reafirmar la descripción consignada en la demanda.

En ese sentido, la prueba pericial no es de obligatorio cumplimiento, para singularizar un inmueble objeto de un proceso reivindicatorio.

Por consiguiente, la infracción denunciada se ha configurado en el caso de mérito, al haberse aplicado indebidamente el art. 375 CPCM, por lo que la sentencia impugnada será casada, y se pronunciará la que a derecho corresponda, conforme lo establece el art. 537 inc. 1º CPCM."

LA LEY HA CONCEDIDO LA ACCIÓN REIVINDICATORIA COMO UNA MEDIDA DE PROTECCIÓN AL DOMINIO, LA CUAL TIENE POR OBJETO EL RECONOCIMIENTO DEL DOMINIO Y LA RESTITUCIÓN DE LA COSA A SU DUEÑO POR EL TERCERO QUE LA POSEE

"V. JUSTIFICACION DE LA SENTENCIA

1. El licenciado [...], actuando como apoderado general judicial de la señora VGGDP, promovió proceso declarativo común reivindicatorio de dominio, en el Juzgado de lo Civil de Cojutepeque, en contra de la señora MDRZDS, a fin de que en sentencia sea condenada a restituir una porción de un inmueble de su propiedad.

Para establecer los extremos de la demanda, la parte actora se hizo valer de los medios de prueba siguientes: título de dominio debidamente inscrito a su favor, certificación extractada del inmueble emitida por el Registro de la Propiedad Raíz e Hipotecas de la sexta sección del centro. departamento de Cuscatlán; reconocimiento judicial y declaración de parte contraria (prescindiendo de la prueba testimonial en la audiencia probatoria).

2. El art. 891 del Código Civil (en lo sucesivo, CC), constituye la base legal que franquea la interposición de la acción reivindicatoria, la cual establece: "La reivindicación o acción de dominio es la que tiene el dueño de una cosa singular, de que no está en posesión, para que el poseedor de ella sea condenado a restituírsela".

Disposición que exige para el éxito de la misma, la configuración de tres elementos: 1) Que el que reivindica sea el propietario del inmueble; 2) Que el demandado tenga la posesión de la cosa; y, 3) Que la cosa sea singular. La exigibilidad de tales requisitos tiene como finalidad, evitar juicios estériles, puesto que de faltar uno de ellos, la acción promovida tiende al fracaso.

3. En cuanto al primero de los requisitos mencionados, o sea el de ser propietario del inmueble a reivindicar, se tiene que esta calidad se debe acreditar sin duda alguna, con el título de dominio debidamente inscrito, requisito que se ha establecido con el testimonio de escritura pública numero ********** otorgada en Cojutepeque, a las nueve horas del veintiuno de agosto de dos mil diecinueve, ante los oficios notariales de la licenciada [...], inscrito a la matrícula **********, en el Registro de la Propiedad Raíz e Hipotecas de la sexta sección del centro, departamento de Cuscatlán, presentada con la demanda, otorgada por la señora DMCG, conocida por DMG, a favor de la señora VGGDP.

4. Respecto al segundo requisito, relativo a la posesión de la cosa por el demandado, lo que se requiere es que se pruebe que el demandado es el actual

poseedor del bien, pues contra él se dirige la acción, no importa cuánto tiempo lo ha tenido en su poder, sino que la tiene en el momento de solicitarla.

Dicho criterio ha sido sostenido por esta Sala, en el incidente de casación clasificado bajo referencia 64-CAC-2021, en sentencia de las ocho horas dieciséis minutos del trece de septiembre de dos mil veintiuno, en la cual se sostuvo: "[...] De tal manera que para que prospere la reivindicación, no es necesario probar que el demandado realiza una serie de actos posesorios continuados en el tiempo, con ánimo de ser señor o dueño de la cosa poseída, como seria en el caso de la prescripción extraordinaria adquisitiva de dominio; sino que basta probar que el actor no está en posesión de la cosa, por ser el demandado el actual poseedor por estar ocupando o habitando el inmueble, del cual el dueño reclama su restitución, a través de la acción reivindicatoria [...]" (sic).

Tomando en consideración dicho precedente, consta en el reconocimiento judicial de folios 149 de la pieza principal, que la demandada es la poseedora actual del inmueble a reivindicar, ya que el juez que realizó dicha diligencia manifestó: "[...] Se determina que la posesión material de la parcela objeto del presente Reconocimiento, la detenta actualmente la demandada, señora MDRZDS [...]" (sic).

Además, la parte demandada en la contestación de la demanda, folios 35 al 40 de la pieza principal, y en declaración de parte contraria, folios 233 de la pieza principal, admitió estar en posesión, alegando legitimidad en la propiedad de dicho inmueble, y para lo cual presentó testimonio de compraventa agregado de folios 49 al 51 de la pieza principal, otorgada el doce de abril de dos mil dos, por la señora DMG (vendedora), a favor del señor RESC (comprador).

Es de hacer notar, que el título de propiedad que presentó la parte demandada, carece de su respectiva razón de inscripción registral, el cual está otorgado a favor del señor RESC, esposo de la demandada, quien actuó como tercero coadyuvante y reside actualmente en los Estados Unidos de América.

Al respecto, se estima conveniente examinar lo concerniente a las consecuencias que produce la inscripción en el Registro de la Propiedad Raíz e Hipotecas de ciertos actos jurídicos, como es el caso, de una compraventa de bien inmueble.

El art. 667 inc. 1° CC, preceptúa: "La tradición del dominio de los bienes raíces y de los derechos reales constituidos en ellos, salvas las excepciones legales, se efectuará por medio de un instrumento público, en que el tradente exprese verificarla y el adquirente recibirla. Este instrumento podrá ser el mismo del acto o contrato, y para que surta efecto contra terceros, deberá inscribirse en el Registro público de la Propiedad".

El art. 680 CC, establece que: "Los títulos sujetos a inscripción no perjudican a terceros, sino mediante la inscripción en el correspondiente Registro". Además, el art. 683 CC, regula que: "La tradición del dominio de los bienes raíces y su posesión no producirán efecto contra terceros, sino por la inscripción del título en el correspondiente Registro".

En ese mismo sentido, el art. 686 CC, expresa: “En el Registro de la Propiedad se inscribirán: 1° Los títulos o instrumentos en que se reconozca, transfiera, modifique o cancele el dominio o posesión sobre inmuebles [...]”

Y el art. 717 CC, preceptúa: “No se admitirá en los tribunales o juzgados de la República, ni en las oficinas administrativas, ningún título ni documento que no esté registrado, si fuere de los que conforme a este título están sujetos a registro: siempre que el objeto de la presentación fuere hacer valer algún derecho contra tercero [...] Si no obstante se admitiere, no hará fe”.

En virtud de lo anterior, preciso es concluir, que el título de propiedad presentado por la parte demandada no es oponible contra terceros, ya que no está inscrito en el Registro de la propiedad correspondiente. En ese sentido, su apreciación y valoración no es pertinente para considerarlo como prueba para legitimar la posesión de la demandada, la cual ha quedado plenamente demostrada, por las razones antes apuntadas en el caso en estudio.

5. Con relación al tercer requisito, referente a la singularización del inmueble, esta Sala en sentencia de las once horas del veintitrés de febrero de dos mil nueve, en el incidente de casación clasificado bajo referencia 251-CAC-2008, ha sostenido lo siguiente: “[...] al estudiar el proceso y examinar la demanda, se encuentra que la porción de terreno objeto de la acción reivindicatoria está perfectamente singularizado por medio de la descripción de la extensión superficial, de las medidas de sus linderos, de su ubicación e identificación de los propietarios de los terrenos colindantes, de manera que el objeto litigioso de la acción reivindicatoria está singularizado como lo exige el Art.891 C., ya que esta señalización es la forma de singularizar una porción de terreno, delimitándolo en el espacio y el tiempo, dotándolo de una determinación cuantitativa y cualitativa individual, que lo coloquen en la categoría de lo singular, ya que esta categoría expresa lo que distingue a un objeto de otro, lo que es propio únicamente al objeto dado [...]” (sic).

En el caso de mérito, el inmueble se describió claramente en la demanda con ubicación, capacidad superficial, rumbos y colindancias, lo cual coincide exactamente con la descripción consignada en el título de dominio debidamente inscrito presentado por la parte actora, habiéndose realizado en esa ubicación, el reconocimiento judicial. De manera que el objeto litigioso de la acción reivindicatoria, está singularizado como lo exige el art. 891 CC.

En virtud de todo lo anterior, esta Sala concluye que se han acreditado todos los supuestos consagrados para estimar la acción reivindicatoria.

En ese sentido, la ley ha concedido la acción reivindicatoria como una medida de protección al dominio, la cual tiene por objeto el reconocimiento del dominio y la restitución de la cosa a su dueño por el tercero que la posee. El actor no pretende que se declare su derecho de dominio, puesto que afirma tenerlo, sino que demanda del juzgador que su derecho de dominio sea reconocido, y como consecuencia, que ordene la restitución de la cosa a su poder por quien la posee ilegalmente.”

Sala de lo Civil, número de referencia: 289-CAC-2022, fecha de la resolución: 01/12/2022

CERTIFICACIONES EXTENDIDAS POR EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD RAÍZ E HIPOTECAS

VALOR PROBATORIO

"VI. Análisis del recurso por infracción de ley, relativa a la inaplicación del art. 35 LRTODARPRH

1. El art. 35 LRTODARPRH, literalmente establece lo siguiente: *"El Registrador expedirá las certificaciones que se le pidan ya sean literales o en relación de los asientos de los libros que estén a su cargo.*

La solicitud se presentará por escrito y la certificación se extenderá al pie de éste.

En la certificación se incluirán las notas marginales que tenga el asiento que se certifique.

A falta del título de propiedad original inscrito, tendrá el mismo valor fuerza la nueva certificación del acta de remate o adjudicación o el nuevo testimonio que, para reponerlos, expidieren el Juez de la 1° Instancia, Alcalde Municipal, Gobernador, Cartulario o Presidente de la Corte Suprema de Justicia, en su caso, siempre que tuviere al pie extendida por la oficina del Registro, la razón de la inscripción, por certificación.

Pero sí no se pudiere hacer la reposición del título en los casos y por las autoridades y cartularios antes expresados, la certificación literal que, a solicitud de parte, expida el Registrador de la respectiva acta de inscripción, tendrá el mismo valor y producirá los mismos efectos que el título primitivo inscrito.

Respecto de los títulos hipotecarios, *se estará a lo dispuesto por el art. 1222 Pr"*,

2. Las recurrentes plantean la inaplicación al art. 35 LRTODARPRH, bajo los siguientes argumentos:

En lo medular exponen, que el vicio en que incurre la Cámara consistió en que tuvo por probado el derecho de propiedad sobre el inmueble que se pretende reivindicar, con la aportación de un instrumento público como lo es la certificación literal presentada, inobservando y dejando de aplicar lo establecido en el 35 en los incisos 4° y 5° de la Ley relativa a las tarifas y otras disposiciones administrativas del Registro de la Propiedad Raíz e Hipotecas.

Consideran las recurrentes que en el presente caso para que dicho documento sea efectivo, debe cumplir determinados presupuestos los cuales están señalados en el art. 35 LRTODARPRH, ya que, en dicha norma, se establece claramente las condiciones en las cuales las certificaciones registrales tendrán el mismo valor probatorio que el título de dominio originalmente inscrito; asimismo, establecer la circunstancia que impide presentar el título original.

Para las recurrentes, la inobservancia manifiesta de ley se configura, al haberle otorgado la Cámara, el estatus probatorio a la certificación literal, y tener por acreditado el dominio, inobservando así las condiciones de aplicación de la normativa señalada.

3. Dicho lo anterior, esta Sala considera:

Sobre el motivo invocado, este tribunal ha sostenido en su jurisprudencia que el vicio contenido en el mismo, se configura cuando la Cámara de segunda instancia inobserva la aplicación de una norma de derecho pertinente para la solución del caso.

Respecto del precepto legal que se considera infringido, conviene aclarar que, en el mismo, queda claro que la certificación literal de una inscripción extendida por el registrador, tendrá el mismo valor y fuerza que el título de propiedad original inscrito, siempre y cuando se justifique la imposibilidad de reponer el título original por los medios establecidos en el inciso quinto de la norma en comento.

De lo anterior, esta Sala concluye que la Cámara no obvió la aplicación de la norma señalada como infringida para darle solución al caso; al contrario, dicho tribunal hizo una interpretación de la misma, cuya conclusión ha sido darle validez a los documentos incorporados para acreditar el dominio, por lo que no se configura el vicio que se le ha atribuido.

En consecuencia, no procederá casar la sentencia en cuanto a este submotivo."

Sala de lo Civil, número de referencia: 270-CAC-2022, fecha de la resolución: 17/11/2022

CONTRATO DE PROMESA DE VENTA

INEXISTENCIA DE APLICACIÓN ERRÓNEA DE LOS ARTÍCULOS 1360 Y 1425 DEL CÓDIGO CIVIL; PUES, EN EL CASO PARTICULAR, AL NO FORMALIZARSE LA VENTA POR CAUSA IMPUTABLE A CUALQUIERA DE LAS PARTES, LA ACCIÓN PERTINENTE A EJERCER ES LA DEL ARTÍCULO 1424 DEL CÓDIGO CIVIL

"En atención al cuadro fáctico visto en las instancias, se procederá al análisis del motivo admitido, realizando un análisis conjunto del asunto, dado que los mismos tienen conexión.

V. Análisis del submotivo relativo a la aplicación errónea de los arts. 1425 y 1360 CC

1. El art. 1425 CC, establece que: *"La promesa de celebrar un contrato no produce obligación alguna; salvo que concurran las circunstancias siguientes: 1ª Que la promesa conste por escrito; 2ª Que el contrato prometido no sea de aquellos que las leyes declaran ineficaces; 3ª Que la promesa contenga un plazo o condición que fije la época de la celebración del contrato; 4ª Que en ella se especifique de tal manera el contrato prometido, que sólo falten para que sea perfecto la tradición de la cosa, o las solemnidades que las leyes prescriban. Concurriendo estas circunstancias habrá lugar a lo prevenido en el artículo precedente".*

Respecto del precepto legal que se invoca como infringido, conviene traer a cuenta la definición que del contrato de promesa nos proporciona la doctrina, en

el sentido siguiente: *"El contrato preparatorio por el que una o las dos partes se obligan a celebrar, dentro de un cierto plazo, un contrato futuro cuyos elementos esenciales se determinan al efecto".* (Sánchez Medal, Ramón. *"De los Contratos Civiles"*, editorial Porrúa, pág.129).

A partir de los conceptos vertidos, esta Sala considera que la promesa de celebrar un contrato también puede calificarse como preparatorio o preliminar, ya que por medio del mismo se deja establecidas las bases del contrato que en el futuro se otorgará. Una vez celebrado el contrato prometido, da lugar al nacimiento de otras obligaciones. Estos aspectos propios de cada contrato deben tenerse en cuenta para efecto de determinar el tipo de pretensión que se puede ejercer ante un incumplimiento, ya sea en esa negociación previa (promesa) o posterioriormente, con relación al contrato prometido.

Siguiendo esa línea de pensamiento, hay otros autores que estiman, que la promesa, es un contrato base, en el que se fijan sólo los elementos característicos que después habrá de desarrollar el contrato futuro, o bien que la promesa, es únicamente la etapa inicial en el *"iter"* contractual que desemboca en el contrato definitivo. En ese sentido, el profesor Rafael Rojina Villegas, en su libro Derecho Civil Mexicano, tomo sexto, Contratos vol. I, editorial Porrúa, S.A., pág. 112, expresa que la promesa bilateral de compra y venta no se confunde con el contrato definitivo de ese nombre, pues sólo crea obligaciones de hacer, consistentes en celebrar en el futuro dicho contrato.

Estos elementos doctrinarios se adaptan a las características del contrato que nos ocupa, ya que con la promesa se inició ese *"iter"* contractual; en el que no debemos confundir lo estipulado para celebrar un contrato a futuro, que permita ejercer acciones legales cuando no se cumple con lo previsto en la promesa; con el contrato cuya celebración se ha prometido.

2. La recurrente fundamenta la infracción al art. 1425 CC, bajo los siguientes argumentos:

En primero lugar sostiene que el contrato suscrito entre su mandante y la señora […], es un contrato bilateral, que no genera obligaciones únicamente para su mandante, como lo hace ver la Cámara en la resolución impugnada, sino que ambas partes tienen obligaciones recíprocas. Que en ese contrato la señora […] se compromete a pagar seis cuotas, cada una de mil seiscientos ochenta y siete dólares de los Estados Unidos de América, en el plazo de seis meses, contados a partir del día ocho de enero de dos mil veintiuno, y por otra parte su mandante se compromete a otorgar el correspondiente contrato de compraventa una vez finalizado el plazo, lo cual se desprende de los romanos II y III del referido contrato.

Para la recurrente, la aplicación errónea que alega, se fundamenta en que la Cámara supuestamente interpreta la institución de la promesa de venta como un contrato unilateral, en la cual una sola de las partes, en este caso la promitente vendedora, se compromete a vender un inmueble de su propiedad a la promitente compradora.

Agrega la recurrente que del análisis integral de lo expresado por la Cámara, se advierte que según esta, la obligación de la señora […], de pagar el precio del inmueble surge a partir del momento de celebración del contrato de compra-

venta, restando importancia a lo estipulado por la autonomía de la voluntad en el contrato de promesa.

1. Por otra parte, el art. 1360 CC, dispone que: *"En los contratos bilaterales va envuelta la condición resolutoria de no cumplirse por uno de los contratantes lo pactado. Pero en tal caso podrá el otro contratante pedir a su arbitrio o la resolución o el cumplimiento del contrato, con indemnización de perjuicios en uno u otro caso".* Respecto de esta disposición legal, se expone como concepto de la infracción lo siguiente:

Para la recurrente no se puede negar que el contrato de promesa de venta objeto del proceso, es un contrato bilateral, por medio del cual, si bien es cierto su mandante se obliga a vender, la promitente compradora se obliga a dar seis cuotas de dinero en un lapso de tiempo, y ante el incumplimiento de ese pago, el contrato de promesa de venta, encaja a la perfección para hacer uso de la condición resolutoria tácita establecida en el art. 1360 CC.

Sostiene que, siendo que la promitente compradora no entregó ninguna cuota de dinero a cuyo pago se obligó en el contrato de promesa de venta, es que la Cámara hace una interpretación errónea del art. 1360 CC, al fundamentar su decisión bajo el argumento de que a la demandante no le asiste el derecho a promover la resolución de contrato, sino la acción contenida en los arts. 1424 y 1425 CC.

2. Sobre el motivo invocado, esta Sala ha sostenido en su jurisprudencia que este se configura cuando el tribunal de segunda instancia comete errores de interpretación de las normas jurídicas, bien porque se restringe o se amplía el alcance de las mismas, o porque se otorga a las expresiones normativas, un significado que no tienen.

En ese sentido, de lo argumentado por la recurrente esta Sala advierte que no es posible concluir que el contenido de los arts. 1425 y 1360 ambos CC, se han visto alterados en el auto pronunciado por la Cámara.

En efecto, lo alegado por la impetrante no demuestra cómo dicho tribunal le dio a las disposiciones legales que se consideran infringidas, un alcance que no tienen, ya sea restringiendo o ampliando su sentido, ya que su argumento se enfoca en sostener que el contrato de promesa de venta es un contrato bilateral, en el que se generan obligaciones para ambas partes, y que al haber incumplimiento en el pago de la primera cuota de las pactadas, dentro del plazo estipulado en el mismo, se ha caído en un incumplimiento de parte de la promitente compradora, y que opera la condición resolutoria tácita establecida en el art. 1360 CC.

De la lectura de las consideraciones expuestas por la Cámara, mediante las cuales se confirma el auto de improponibilidad, pero por razones diferentes a las formuladas por el juzgado de primera instancia, esta Sala advierte que en ninguno de sus argumentos se establece que el contrato de promesa de venta no es un contrato bilateral.

Al contrario, la Cámara en su fundamento concretamente se avoca a la naturaleza del contrato de promesa de venta, y establece que la obligación que se genera del contrato, atendiendo a su naturaleza, es la de dar cumplimiento a la celebración del contrato prometido en el mismo.

Para el caso que nos ocupa, si bien es cierto se promete la compraventa de un inmueble, por el hecho de que se describa el mismo y se estipule el precio que deberá pagarse al formalizar la compraventa prometida, no significa que ese precio sea parte esencial del contrato de promesa de venta.

Asimismo, deja claro la Cámara que la acción que le asiste a las partes contratantes, en caso de incumplimiento del contrato de promesa es la establecida en los arts. 1424 y 1425 ambos CC, ya que el contrato de promesa de celebrar un contrato, crea una obligación de hacer, y no de dar.

3. Dicho criterio ha sido sostenido por esta Sala, en el caso bajo referencia 141-C-2004, de las once horas del trece de diciembre de dos mil cuatro, en la cual se expresó lo siguiente:

«[...] esta Sala, al analizar la promesa de celebrar un contrato, resulta que el objeto de la obligación es, precisamente, celebrarlo, hacerlo, y no es dar alguna cosa; en el presente caso, el objeto de las obligaciones de las partes, nacidas de la promesa, es una obligación de hacer: celebrar un contrato de compraventa, del cual, a su vez, si se celebra, nacerán para las partes, respectivamente, las obligaciones de hacer la tradición de la cosa y de pagar el precio, las cuales sí son obligaciones de dar. Por consiguiente, cuando el tribunal Ad quem afirma que de la promesa de celebrar el contrato de compraventa nacieron obligaciones de hacer, está apegado al derecho y especialmente, al texto de los Arts. 1525 y 1524 C [...] La promesa de celebrar un contrato, como ya se expresó, está regulada en Art. 1425 C., en el cual se dispone, expresamente, que la promesa de celebrar un contrato no produce obligación alguna; salvo que concurran las circunstancias enumeradas en la misma norma jurídica [...] En el caso de autos, la promesa de compraventa originó obligaciones para ambas partes, como ya se relacionó; es decir, que se trata de un acto jurídico bilateral, pero por ser una promesa de celebrar un contrato, está regulado en forma específica, tanto en lo relacionado con su forma, como con sus efectos; razón por la cual, la acción que debe ejercitarse es la conferida por los Arts. 1425 y 1424 C., y no la que concede el Art. 1360 C [...]» (sic).

5.1 En ese sentido, el art. 1424 CC, regula lo relativo a la resolución del contrato de promesa de venta de la siguiente forma: *"Si la obligación es de hacer y el deudor se constituye en mora, podrá pedir el acreedor, junto con la indemnización de la mora, cualquiera de estas dos cosas, a elección suya: 1ª Que se apremie al deudor para la ejecución del hecho convenido; 2ª Que se le autorice a él mismo para hacerlo ejecutar por un tercero a expensas del deudor. También podrá pedir que se rescinda la obligación y que el deudor le indemnice de los perjuicios resultantes de la infracción del contrato".*

5.2 Dado el contenido de la norma transcrita, debe tenerse en cuenta que para el caso de incumplimiento de cualquier promesa, se conceden dos acciones, la acción de cumplimiento para obtener la ejecución forzada, o bien, pedir la indemnizacion por daños y perjuicios, cuando el acreedor opte por esa acción, en caso de mora.

En caso de reclamar el cumplimiento, puede exigirse además el pago de daños y perjuicios y, si se decide por "la rescisión", esto es, dejar sin efecto los

términos del contrato, procede el pago de daños y perjuicios por la mora imputable al deudor.

De ahí que el contrato de promesa, retomando la definición relacionada en párrafos anterior, la misma constituye una garantía para asegurar el cumplimiento del contrato definitivo.

Tal como se ha expresado con anterioridad el art. 1425 CC, dispone las exigencias para la validez y eficacia y cuyo texto en su inciso último, lo liga con lo dispuesto en el art. 1424 del mismo Código, al expresar que: *"Concurriendo estas circunstancias habrá lugar a lo prevenido en el artículo precedente".* La ley limita, en caso de desaveniencias entre los contratantes, a las acciones que contiene dicho artículo.

4. Es por ello, que a juicio de esta Sala, la Cámara no hace una interpretación errada de los arts. 1360 y 1425 ambos CC, ya que en el caso analizado, en caso de no formalizarse la venta, por causa imputable a cualquiera de las partes contratantes, la acción pertinente a ejercer es la establecida en el art. 1424 CC."

EL PRECIO Y EL OBJETO SON PARTE DE LA PROMESA DE VENTA; POR TANTO, EL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO SE VERIFICA HASTA LA FINALIZACIÓN DEL PLAZO ESTABLECIDO

"Con respecto a la interpretación errónea del art. 1425 CC, la Cámara a consecuencia del anterior argumento, deja claro cuál es el derecho que asiste, a los promitentes, pero sólo si se incumpliese el contrato de promesa una vez finalizado el plazo establecido.

De manera que, en el presente caso, en el contrato de promesa de venta, ha sido manifiesta la voluntad de las partes en el pacto de cuotas como parte del precio, pero lo que sí es cierto, es que las mismas no son de la naturaleza del contrato en referencia, por ello esta Sala comparte el criterio adoptado por la Cámara, en el sentido de que tanto el precio como el objeto descritos en el mismo, son partes de la descripción de la promesa de compraventa.

Por lo tanto, el incumplimiento del contrato de promesa de venta se verifica hasta la finalización del plazo establecido, para el caso que nos ocupa es hasta el día seis de julio de dos mil veintiuno.

5. En conclusión, esta Sala considera que la Cámara no ha realizado una errónea interpretación de las normas sustantivas mencionadas, por lo que no se configura la aplicación errónea de los arts. 1360 y 1425 CC, no siendo procedente casar la resolución de que se ha hecho mérito."

INEXISTENCIA DE LA INAPLICACIÓN DEL ARTÍCULO 1431 DEL CÓDIGO CIVIL, AL COMPROBARSE QUE LA CÁMARA EN NINGÚN MOMENTO DESCONOCE LA INTENCIÓN DE LAS PARTES CONTRATANTES, ATENDIENDO A LA NATURALEZA DEL CONTRATO DE PROMESA DE VENTA

"VI. Análisis del submotivo de fondo relativo a la inaplicación del art. 1431 CC

1. La disposición legal infringida literalmente dispone: *"Conocida claramente la intención de los contratantes, debe estarse a ella más que a lo literal de las palabras".*

2. La infracción a dicha disposición legal se expone de la siguiente forma:

La recurrente considera que a consecuencia de haberse aplicado erróneamente en el auto impugnado el art. 1425 CC, se dejó de aplicar el art. 1431 CC, del cual se extrae la intención de las contratantes, ya que la Cámara en su resolución interpreta cláusulas contractuales; y según esta disposición conocida claramente la intención de los contratantes, debe estarse a ella, más que a lo literal de las palabras. Que para este caso, la promitente compradora se comprometió a pagar cierta cantidad de dinero a la promitente vendedora, antes de la formalización de la compraventa.

3. Al respecto esta Sala considera, que la recurrente invoca la inaplicación de esta norma, justificando que debe respetarse la intención de las contratantes que consiste en el pago anticipado del precio la compraventa prometida.

Al revisar la resolución impugnada, respecto a la estipulación del precio consignado en el contrato de promesa de venta, la Cámara en lo medular sostuvo que a pesar de que en el contrato se haya establecido el pago de cuotas que la señora […] prometió pagar, a partir del día de la celebración del contrato de promesa, debiendo pagarse la primera el día ocho de enero de dos mil veintiuno y teniendo como vencimiento ese día. El mismo tribunal de alzada consideró la redacción deficiente del contrato, concluyendo que interpreta el contrato, en el sentido de que las cuotas se pagarán a partir del ocho de enero de dos mil veintiuno y que éstas vencerían ese mismo día, por lo que esa cláusula para la Cámara es incompatible con la institución de la promesa, que es la convención que las señoras […] y […], han querido celebrar y han celebrado.

Para la Cámara el hecho de que en el contrato de promesa de compraventa, se haya estipulado que el precio comenzaría a pagarse antes de la formalización de la venta, que es lo prometido, va en contra del contrato de promesa de compraventa, porque no es ese el objeto del contrato celebrado, ya que el precio y el objeto descritos en el mismo, son elementos esenciales de compraventa, celebrado a través de en una escritura pública (art. 1605 CC); por lo que a consecuencia de la promesa, atendiendo a la naturaleza de la misma, solo se puede exigir el cumplimiento de la obligación que consiste en otorgar la venta una vez agotado el plazo.

Por otra parte, la Cámara para fundamentar el anterior criterio, aplicó la regla interpretativa establecida en el art. 1434 CC, en la que deberá estarse a la interpretación que mejor cuadre con la naturaleza del contrato.

4. Esta Sala, en su jurisprudencia ha sostenido que la inobservancia de ley, que puede interpretarse como inaplicación de ley, se configura cuando el juzgador no aplicó la norma aplicable al caso concreto; es decir, no fue considerada la norma que contempla la situación que se trata de resolver y que afecta el fondo del asunto.

Para el caso que nos ocupa, la recurrente atribuye a la Cámara, la inobservancia del art. 1431 CC, pero analizada que ha sido la resolución impugnada, esta Sala advierte que el tribunal de segunda instancia en ningún momento desconoce la intención de las partes contratantes, por el contrario, al considerar confusa la cláusula que establece el plazo en el contrato de promesa de venta,

se remitió a aplicar la regla interpretativa establecida en el art. 1434 CC, es decir, a la naturaleza del contrato de promesa de venta, aclarando que lo pretendido en este proceso en la demanda, es propio de un contrato derivado de una compraventa, y lo que las partes celebraron es una promesa.

En consecuencia para esta Sala, la Cámara no ha cometido la infracción señalada, porque la intención de las contratantes era la promesa de celebrar un contrato de compraventa de inmueble.

Por otro lado, debe tenerse en cuenta que en la práctica, en la realización de esta clase de contrato, se acostumbra para prever los perjuicios y garantizar la promesa, ante un posible incumplimiento, abonar una cantidad de dinero, debiendo establecerse bajo qué concepto se realiza dicho abono, ya que el mismo puede ser como reserva o parte del precio (arras), y al incumplirse el contrato prometido a la finalización del plazo establecido, se demanda en resolución de contrato por incumplimiento, más los daños ocasionados, que para eso sirven las arras dadas como parte del precio.

Por consiguiente, la infracción denunciada no ha sido cometida por la Cámara, ya que la intención manifiesta en el contrato presentado con la demanda, es de promesa de celebrar un contrato de compraventa de inmueble el día ocho de julio de dos mil veintiuno, no siendo procedente casar la sentencia por este motivo."

Sala de lo Civil, número de referencia: 281-CAC-2021, fecha de la resolución: 14/02/2022

CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES

AUSENCIA DE LA INFRACCIÓN DEL ARTÍCULO 98 INCISO 1° CPCM, PUESTO QUE HA SIDO APLICADO POR AMBAS INSTANCIAS

"V. Análisis del recurso por el motivo de fondo referente a la inaplicación del art. 98 inc. 1º CPCM

1. La disposición legal señalada como infringida establece que: "El demandante podrá ejercitar a la vez en la demanda cuantas pretensiones tenga contra un mismo demandado, con el único límite de que no sean incompatibles entre sí".

2. Respecto a esta infracción, el recurrente manifiesta que el tribunal sentenciador no le permitió ejercer la pretensión del pago de intereses por mora de la obligación. Que él no estaba solicitando el pago de intereses convencionales, pues no se habían pactado en los contratos de servicios profesionales; que el pago solicitado de esos intereses, se trata de una pretensión adicional al pago de la suma adeudada, en razón de que los demandados tienen que pagar intereses por el retardo en el cumplimiento de su obligación.

Agrega, que la Cámara sentenciadora ignoró el texto del inciso primero del artículo 98 CPCM, pues no consideró esta regla fundamental, que proporcionaba la solución correcta a la pretensión de condena al pago de intereses legales y exigió el cumplimiento de condiciones no establecidas por la ley, sosteniendo

que para que fuera válida la reclamación de intereses por mora de la parte demandante, debía haberse contemplado el pago de intereses de forma convencional en los contratos de servicios profesionales y haber iniciado el reclamo de la indemnización de daños y perjuicios.

Y continúa diciendo: "[...] Este artículo era aplicable al caso concreto porque se trataba de una pluralidad de pretensiones contra unos mismos demandados, sin que fueran contrarias entre sí. Sin embargo, la Cámara dejó de aplicar este artículo, rechazando reconocer el ejercicio de dos pretensiones: el cumplimiento de la obligación de pago de honorarios y la pretensión de pago de intereses legales debido a la mora de los demandados en cumplir su obligación, pues solo aceptó la primera" (sic).

3. Al estudiar el proceso, en la audiencia preparatoria, a folios [...] pieza principal, esta Sala constató que las pretensiones fijadas en dicha audiencia fueron las mismas que planteó el actor en la demanda, y quedaron establecidas así:

a) Que se condene a los demandados al cumplimiento de la obligación derivada de los contratos de servicios profesionales, celebrados, el primero, con fecha quince de agosto de mil novecientos noventa y cinco, y el segundo, el día veintiséis de mayo de mil novecientos noventa y seis; y,

b) Que se condene a los demandas al pago de los intereses legales civiles del seis por ciento anual a partir del veinticuatro de agosto de dos mil nueve.

El juez de primera instancia accedió a ambas pretensiones, lo cual fue objeto de apelación. En sentencia de apelación, la Cámara confirmó la condena al cumplimiento de la obligación de pagar los honorarios por servicios profesionales y revocó la condena del pago de los intereses legales civiles del seis por ciento.

Lo anterior evidencia, que el demandante ejercitó a la vez en la demanda, cuantas pretensiones estimó necesarias contra los mismos demandados; y tanto el juez de primera instancia como la Cámara sentenciadora, dieron trámite a dichas pretensiones, y se pronunciaron al respecto, tal como quedó establecido en el párrafo anterior.

En ese sentido, el art. 98 inc. 1º CPCM, ha sido aplicado por ambas instancias, por consiguiente se impone declarar no haber lugar a casar la sentencia."

Sala de lo Civil, número de referencia: 261-CAC-2021, fecha de la resolución: 24/03/2022

COSA JUZGADA

LA CANCELACIÓN DE LA INSCRIPCIÓN REGISTRAL DE LA HIPOTECA Y DE LA DACIÓN EN PAGO NO PUEDEN SER OBJETO DE UN NUEVO JUZGAMIENTO; DEBIDO A LA COSA JUZGADA Y A LA IMPOSIBILIDAD DE QUE UN JUEZ PUEDA ANULAR LA DECISIÓN DE OTRO JUEZ, A TRAVÉS DE UN PROCESO DECLARATIVO COMÚN

"Al estudiar el proceso de mérito, se advierte que las pretensiones contenidas en la demanda son las siguientes:

1. Que se declare nulo de nulidad absoluta el testimonio de la escritura matriz de dación en pago, otorgada a las doce horas del veintiocho de agosto de mil novecientos noventa y ocho, por el señor JRMC, a favor de la sociedad demandante.

2. Que se ordene la cancelación registral de la matrícula ********** asientos *** y *** del Registro de la Propiedad Raíz e Hipotecas de la Cuarta Sección del Centro, departamento de La Libertad, inscritas a favor de la sociedad demandante, que se refieren a la cancelación del gravamen hipotecario y dación en pago respectivamente, y que las cosas vuelvan al estado jurídico en que se encontraban antes del otorgamiento de la dación en pago.

3. Que se decrete como efecto restitutorio lo siguiente:

3.1 Ordenar cancelar el asiento número *** de la matrícula **********, que canceló la inscripción hipotecaria número ***, del libro número ***, la cual fue trasladada al sistema de folio real automatizado a la matrícula **********, asiento ***.

3.2 Ordenar se reconozca a favor de la sociedad demandante la obligación contenida en el documento base de la acción (testimonio de escritura matriz de préstamo mercantil con garantía hipotecaria), que fue sustento del proceso ejecutivo mercantil ref. E-97-98-4, promovido por la sociedad demandante contra el ahora demandado, en el Juzgado de lo Civil de Zacatecoluca.

3.3 Se ordene, reconozca, restituya y reponga a favor de la sociedad demandante, el gravamen hipotecario que existió sobre el inmueble propiedad del demandado, cuya cancelación fue ordenada por el juez de Zacatecoluca, en el proceso ejecutivo mercantil ref. E-97-98-4, promovido por la sociedad demandante contra el ahora demandado.

4. En virtud de todo lo antes relacionado, esta Sala considera que la declaratoria de improponibilidad proveída por la Cámara sentenciadora, ha sido decretada conforme a derecho, ya que las pretensiones contenidas en la demanda respecto a la cancelación de la inscripción registral de la hipoteca y de la dación en pago, no podían ser objeto de un nuevo juzgamiento, debido a la cosa juzgada y a la imposibilidad de que un juez pueda anular la decisión de otro juez, a través de un proceso declarativo común."

SE CONFIGURA CUANDO LAS PARTES INTERVINIENTES, EL OBJETO DEL LITIGIO Y LA CAUSA DE PEDIR SON LOS MISMOS EN AMBOS PROCESOS

"Sin embargo, en lo concerniente a la pretensión de nulidad del instrumento de la dación en pago y el reconocimiento de la obligación de que causó la ejecución del juicio ejecutivo mercantil bajo referencia E-97-98-4, no se ha provocado un efecto de cosa juzgado, lo cual será analizado a continuación.

En ese sentido, en cuanto a la cosa juzgada, el art. 230 CPCM, establece lo siguiente: "La cosa juzgada se extiende a las pretensiones de la demanda y de la reconvención y comprenderá todos los hechos anteriores al momento en que hubieran precluído las alegaciones de las partes. La cosa juzgada afectará a las partes del proceso en que se dicte y a sus sucesores; y se puede extender a los terceros cuyos derechos dependen de los de las partes, si hubieran sido citados a raíz de la demanda".

Para determinar que estamos en presencia de cosa juzgada, debemos tener en cuenta que esta tiene lugar cuando coinciden en un segundo proceso, los sujetos (actor y demandado), el objeto (cosa en litigio) y la causa (hechos y petición respecto de los mismos). Es decir, es necesario que esa triple identidad de elementos sea sometida a un nuevo juzgamiento.

Al estudiar las referencias citadas por la Cámara sentenciadora, se advierte que esta constató que la referencia E-97-98-4 y O-255-08-3, corresponden al mismo inmueble en disputa, y fueron conocidas y resueltas por el mismo Juzgado de lo Civil de Zacatecoluca. Este inmueble es el mismo que se está litigando en el presente caso.

4.1 La referencia E-97-98-4, que corre agrega de folios [...], corresponde a un proceso ejecutivo mercantil, cuyo documento base era un mutuo con garantía hipotecaria, siendo el actor la Caja de Crédito Rural de Zacatecoluca, Sociedad Cooperativa de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, ahora Caja de Crédito de Zacatecoluca, Sociedad Cooperativa de Responsabilidad Limitada de Capital Variable; y el demandado, el señor JRMC.

En dicho proceso, la parte actora pidió el sobreseimiento y que se cancelara el embargo y la hipoteca, debido a que habían llegado a un acuerdo extrajudicial, en la que el demandado había otorgado en dación en pago el mismo inmueble embargado y que había servido de garantía hipotecaria, razón por la que el juez de la causa resolvió sobreseer al demandado, cancelar el embargo y cancelar la inscripción registral de la hipoteca.

4.2 En el juicio con referencia O-255-08-3, agregado de folios [...], que corresponde a un juicio civil ordinario de nulidad de inscripción registral del instrumento de dación en pago, las partes fueron, el señor JRMC como actor, y la Caja de Crédito Rural de Zacatecoluca, Sociedad Cooperativa de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, ahora Caja de Crédito de Zacatecoluca, Sociedad Cooperativa de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, como demandada.

En dicho proceso, la primera instancia declaró nulo el asiento registral del instrumento de dación en pago, ordenó su cancelación y condenó en daños y perjuicios a la parte demandada. De esta sentencia hubo apelación por la parte demandada, y la Cámara confirmó la sentencia; posteriormente la declaró ejecutoriada.

4.3 Lo anterior evidencia la existencia de la cosa juzgada, por cuanto las partes intervinientes en los procesos E-97-98-4 y O-255-08-3, son las mismas que en el presente caso.

Asimismo, el objeto de litigo es el mismo inmueble y la causa de pedir respecto a la cancelación registral del instrumento de dación en pago y cancelación registral de la hipoteca, ya fueron conocidas y juzgadas por el tribunal de lo civil de Zacatecoluca.

4.4 Ahora bien, en cuanto a las pretensiones en el proceso de mérito, que el actor ha denominado en la demanda como efecto restitutorio, en el sentido de que se ordene cancelar el asiento que ordenó el juez de lo civil de Zacatecoluca, para la cancelación de la hipoteca; y que se ordene y restituya el gravamen hipotecario que existió sobre el inmueble propiedad del demandado, a favor de

la sociedad demandante, esta Sala advierte que dichas pretensiones son imposibles de resolver, ya que son actos procesales que fueron proveídos por un juez distinto al que está conociendo en el presente proceso.

En ese sentido, no es posible pretender que a través de un proceso declarativo común, un juez anule decisiones dictadas por otro juez, proveídas en procesos distintos.

De manera que, es imposible dejar sin efecto, a través del presente proceso declarativo común, actos procesales ordenados por el juez de lo civil de Zacatecoluca."

Sala de lo Civil, número de referencia: 213-CAC-2021, fecha de la resolución: 01/03/2022

DECLARATORIA INDEBIDA DE LA IMPROCEDENCIA DE APELACIÓN

PROCEDE ORDENAR A LA CÁMARA DE SEGUNDA INSTANCIA LA ADMISIÓN DE LA ALZADA RESPECTO DE LAS FINALIDADES CONTEMPLADAS EN LOS NUMERALES 2° Y 3° DEL ARTÍCULO 510 DEL CÓDIGO PROCESAL CIVIL Y MERCANTIL, UNA VEZ CASADO EL AUTO IMPUGNADO

"V. Análisis del recurso por la causa genérica concerniente al quebrantamiento de las formas esenciales del proceso, por el submotivo relativo a haberse declarado indebidamente la improcedencia de una apelación, en el que señalan como precepto legal infringido el art. 513, en relación con el art. 511 ambos CPCM.

1. Las disposiciones legales infringidas establecen lo siguiente: […]

2. En el presente caso, se advierte que la relación entre las normas de derecho que se consideran infringidas, se debe a que la Cámara, no dio trámite a la alzada, por cuanto consideró que el recurso de apelación no estaba fundamentado como corresponde, y por dicha razón, al realizar el examen de admisibilidad según el contenido del art. 513 CPCM, puede afectarse el trámite de ley, por no haberse observado el cumplimiento de los requisitos formales para la admisión del recurso de apelación. [...]

4. Con base en el concepto de la infracción, esta Sala advierte que el motivo invocado tiene cabida tanto cuando el recurso de apelación se declara improcedente por falta de concurrencia de presupuestos objetivos (falta de recurribilidad y agravio) y subjetivos (falta de legitimación o competencia), como cuando se inadmite el mismo por no cumplirse con los requisitos de forma (modo, tiempo y lugar) o de contenido (determinar la finalidad, fundamentar la infracción y señalamiento de normas de derecho transgredidas).

Lo determinante es, que la argumentación que se exponga respecto de la vulneración de las disposiciones legales que se consideran infringidas, esté orientada a demostrar que se exigen requisitos no previsto en la ley (error de interpretación), o que estos no fueron analizados como corresponde (error de comprensión del requisito); incluso, resulta viable sostener que la Cámara ignoró el cumplimiento de ellos en el escrito (error de apreciación).

En este caso, según lo advierten los recurrentes, al declarar inadmisible el recurso de apelación, la Cámara *"se ha extralimitado en el análisis de dicho recurso, sin entrar a valorar la fundamentación del mismo"* (sic), lo cual encaja en el tercer supuesto de los antes mencionados, ya que afirman, que efectivamente, la alzada tenía los argumentos necesarios para darle admisión a la misma y revisar lo decidido en la primera instancia.

5. Ahora bien, este tribunal advierte que en el auto de inadmisión de la apelación, la Cámara concluyó que: *"[...] no basta con que el apelante cite las cuatro finalidades previstas en el Art. 510 CPCM; sino que debe separar sus argumentos en atención a cada una de ellas y fundamentarlas con la debida claridad y precisión; al no haberlo efectuado con esa técnica, lo expuesto en el escrito de apelación, no es suficiente para admitir el recurso, pues no se ha cumplido con los requisitos que el Código Procesal Civil y Mercantil en técnica de recurso de apelación exige; por lo tanto únicamente se aprecia una clara inconformidad con la sentencia impugnada [...]"* (sic).

6. Al revisar el recurso de apelación, esta Sala observa que los apelantes expresaron que el mismo, tenía como finalidad las cuatro contenidas en el art. 510 CPCM, las cuales literalmente están reguladas de la siguiente forma:

"El recurso de apelación tendrá como finalidad revisar 1°. La aplicación de las normas que rigen los actos y garantías del proceso 2°. Los hechos probados que se fijen en la resolución, así como la valoración de la prueba 3°. El derecho aplicado para resolver las cuestiones objeto de debate 4°. La prueba que no hubiera sido admitida".

Ahora bien, cada finalidad determina un ámbito de argumentación distinto, el cual tiene que distinguirse e incluirse en el concepto de la infracción, de tal manera que se incluyan todos los elementos necesarios para que se pueda decidir en sentencia el planteamiento que se presenta en la segunda instancia.

7. Con base en la premisa antes apuntada, se observa en el recurso de apelación, que no hay un orden por medio del cual se verifique el desarrollo de cada finalidad, sino que se ha realizado un conglomerado de argumentos dentro de los cuales tendría que corroborarse por separado el agravio que se pretende sostener.

En ese sentido, se procederá a estudiar la alzada, a efecto de identificar si la misma contiene argumentos que distingan una finalidad de otra y, además, si incluye los elementos necesarios para examinar en segunda instancia, la infracción que se invoca. [...]

8. En conclusión, al revisar el conglomerado de argumentos proporcionados en el recurso de apelación, solo ha sido posible para esta Sala, verificar el cumplimiento de los arts. 510 y 511 CPCM, respecto de la *revisión de los hechos probados y valoración de la prueba* relacionada con el documento base de la pretensión, en relación con el art. 341 inc. 2° CPCM, y la revisión del derecho aplicado para resolver el objeto del debate, respecto de los arts. 230 y 231 CPCM, y art. 240 Cn.

Por consiguiente, con base en el art. 537 inc. 2° CPCM, el cual se dispone que *"Si se casare por vicio de forma, se anulará el fallo y se devolverá el proceso al tribunal correspondiente, a fin de que se reponga la actuación desde el acto viciado; pero si el vicio se refiriera a cuestiones relativas a la jurisdicción, competencia o vía procesal, sólo procederá la anulación".*

Se procederá a ordenarle a la Cámara de mérito, la admisión de la alzada, respecto a las finalidades contempladas en los numerales 2° y 3° del art. 510 CPCM, bajo los términos expuestos en esta sentencia."

Sala de lo Civil, número de referencia: 252-CAM-2022, fecha de la resolución: 27/09/2022

PROCEDENCIA

"4.4 No obstante lo anterior, esta Sala considera que no queda excluido el control de oficio de nulidades procesales sobre actuaciones realizadas en la segunda instancia, incluso, a partir de las alegaciones vertidas en dicha instancia, tiene las potestades para revisar aquéllas de contenido sustantivo que se hayan sostenido en el proceso, respecto del documento base en el que se fundamenta la pretensión. Ello con fundamento en el interés público otorgado por el precepto jurídico antes señalado (art. 1553 CC).

Dicho interés el que deja sin límites el momento procesal en el que puede declararse la nulidad de oficio, debido a que es posible verificar toda lesión de intereses generales en las instancias y grados de conocimiento superior, razón por la cual la facultad del juzgador de declarar la nulidad de oficio no puede sufrir límites procesales, ya que lo que se pretende con dicho instituto es restablecer el orden público que rige en las actuaciones de los particulares.

En ese sentido, la única limitante para examinar actuaciones bajo la modalidad en comento, es que el recurso sea admisible, puesto que la admisión del mismo da la apertura necesaria a efecto de examinar el contenido pleno del proceso. Esto es así, debido a que la procedencia del recurso está vinculada a presupuestos procesales que no tienen conexión con el fondo del proceso, ya que verificar que la resolución sea impugnable, que cause un agravio o que el recurso haya sido interpuesto para que lo conozca el tribunal competente por la parte agraviada, son cuestiones procesales que deben concurrir en la causa respectiva.

Sin embargo, el examen relativo a los requisitos de fondo implica pasar a otro nivel de análisis, es decir, al que su contenido es más cercano al objeto del proceso o asunto que haya sido sometido a conocimiento en la segunda instancia. Por ello, los requisitos comprendidos en el art. 528 CPCM, contemplan la necesidad de fundamentar una interrelación entre el motivo, las disposiciones infringidas y el concepto de la infracción.

Dicha articulación es la que habilita, verificada su armonía, claridad y pertinencia, que pueda examinarse el proceso, pues solo con tal apertura como ha quedado demostrado, es la que está más próxima al asunto de fondo, y no la sola procedencia, que es la más próxima a verificar los requisitos de admisión del recurso.

Las consideraciones antes expuestas resultan también aplicables por parte de los tribunales de segunda instancia, adaptando los requisitos de admisión al recurso de apelación, los cuales se extraen de la articulación de los arts. 510 y 511 CPCM.

1. Con base en las premisas antes establecidas, se advierte que se invoca un motivo de forma relativo a los rechazos indebidos de la apelación, lo cual tal como lo ha sostenido anteriormente esta Sala, tiene cabida cuando se declara improcedente y también cuando se inadmite la alzada.

Lo determinante para su admisión, es que se invoquen preceptos jurídicos pertinentes vinculados al rechazo de la alzada y que la argumentación respecto de la infracción de las disposiciones legales, esté orientada a demostrar que se exigen requisitos no previsto en la ley (error de interpretación), o que éstos no estén siendo analizados como corresponde (error de comprensión del requisito), incluso que se inobservó el cumplimiento de ellos (error de apreciación).

5.1 En este caso, según lo advierten los recurrentes, se declaró inadmisible el recurso de apelación por falta de fundamentación de los agravios, lo cual encaja en el tercer supuesto, ya que afirman que efectivamente la alzada tenía los argumentos necesarios para darle entrada a la misma y revisar lo decidido en la primera instancia.

En ese sentido, esta Sala considera que el recurso cumple con los requisitos del art. 528 CPCM, ya que se ha sostenido la infracción del art. 511 CPCM, siendo viable su estudio en casación, en la forma y contenido propuesto por los litigantes.

5.2 Ahora bien, este tribunal advierte que en el auto de inadmisión de la apelación, se expuso que: *« [...] los argumentos del apelante se han centrado en hacer una exposición en los que mezcla distintos motivos y finalidades, con razones más bien de conveniencia a sus intereses, por las que consideran adversa la resolución que impugnan, dichas argumentaciones no pueden constituir fundamento del recurso de apelación, pues el art. 511 inc. 2° CPCM, señala que se debe distinguir la finalidad a que se refieren las razones expuestas en el escrito, esto es, que si se alega una sola infracción cometida en la primera instancia se debe enmarcar en alguno de los supuestos del Art. 510 CPCM f..] » (sic).*

5.3 En el recurso de apelación, se ha señalado la finalidad relativa a la revisión de la interpretación del derecho y su aplicación, señalándose como infringidos los art. 17 y 417 CPCM.

Además, se ha señalado la finalidad concerniente a la revisión de los hechos y valoración de la prueba, con infracción a los arts. 218 y 416 CPCM.

Al revisar el contenido del recurso se advierte que no hay fundamento respecto de la primera finalidad y por ella, si procedía declarar inadmisible el mismo. Sin embargo, en lo que atañe a la segunda, se observa que hay fundamento del agravio sustentado en la nulidad del contrato base de la pretensión.

De manera concreta, se sostiene dicha nulidad por falta de capacidad para contratar por parte del señor HLLP, lo cual se encaja en el contenido de los arts.

10 y 1553 CC. Ello en virtud de que el actor no tenía facultades ni autorización para subarrendar un inmueble propiedad del Estado. Por tanto, consideran que debió valorar las facultades de los contratantes, pues de no probarse el derecho a subarrendar, el único que podía hacer un reclamo era el Estado mismo, por medio de la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma. Por otro lado, sostienen que al haber quedado establecido lo anterior, debió desestimarse la demanda.

Luego, relacionan una serie de prueba instrumental con la cual se pretendía demostrar la infracción del art. 416 CPCM.

6 Con base en lo alegado por los impetrantes, se advierte que se suministraron suficientes razones para admitir la alzada y con ello proceder a revisar lo sostenido en la misma, ya que está claro que el argumento principal que fundamenta la finalidad invocada sobre la revisión de hechos y valoración de la prueba, es que se ha inobservado en el proceso de mérito, la nulidad del contrato base de la pretensión, lo cual como se ha dicho antes, puede ser revisado incluso de oficio, bajo la condición de que el recurso interpuesto sea admitido, y con ello, se habilitaba a la Cámara, para examinar dichos alegatos.

En ese sentido, esta Sala procederá al análisis de los argumentos esgrimidos para sostener dicha nulidad, sentando previamente las bases respecto de la que ha sido alegada, la cual se fundamenta en la falta de capacidad para contratar y lo relativo al control de oficio previsto en el art. 1553 CC."

Sala de lo Civil, número de referencia: 13-CAC-2022, fecha de la resolución: 09/03/2022

PROCEDE CASAR EL AUTO DEFINITIVO IMPUGNADO, EN VIRTUD QUE NO SE DETERMINA LA INOBSERVANCIA DE FORMA SUSTANCIAL DE LOS REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD, RESULTANDO INJUSTIFICADO EL RECHAZO DE LA APELACIÓN POR RAZONES FORMALES

"4. En cuanto a la razón de *inadmisión* dada por la Cámara, esta Sala considera lo siguiente:

Dentro de los requisitos de admisión de un recurso, por regla general, se hace la distinción entre los de forma y de fondo.

Los requisitos de forma son el lugar, tiempo y modo, que constituyen formalidades para la interposición del recurso, ya que ha de presentarse el escrito en la sede del tribunal que pronunció la resolución impugnada, dentro del plazo establecido en la ley para cada recurso.

Los requisitos de fondo o contenido, son aquellos mediante los cuales se define el ámbito de conocimiento para resolver las infracciones procesales o de fondo atribuidas al juez o tribunal respectivo.

En el caso del recurso de apelación, el legislador ha establecido una forma de denunciar los vicios que se comenten por los jueces de primera instancia, a través de finalidades que se adecuan a la clase de infracción que puede ser objeto de revisión por parte de la segunda instancia.

El cumplimiento de estos requisitos es necesario para demostrar que, en determinada resolución se configura una infracción. Es razonable que se citen disposiciones jurídicas transgredidas, y que se motive la existencia del vicio que se invoca, es decir, que se argumente de manera clara, completa y coherente sobre el mismo.

Con el cumplimiento de tales requisitos, el tribunal que conozca de un recurso, está habilitado para pronunciarse sobre el fondo del mismo, resolviendo sobre la infracción alegada, de manera congruente, según lo exige el art. 515 inc. 2º CPCM, el cual establece que: *"La sentencia que se dicte en apelación deberá pronunciarse exclusivamente sobre los puntos y cuestiones planteados en el recurso y, en su caso, en los escritos de adhesión".*

Por otra parte, tal como se ha referido en párrafos anteriores, la fundamentación de la infracción debe estar acorde a las finalidades previstas en el art. 510 CPCM, y la misma debe estar encaminada a demostrar la infracción que se alegue.

5. En ese contexto, se alega por la recurrente que la Cámara sentenciadora ha vulnerado el art. 511 CPCM, debido a que estima haber cumplido, en el escrito de apelación, con las *finalidades* establecidas en el art. 510 CPCM, y con las formalidades de interposición del recurso contempladas en el art. 511 CPCM; pues en el mismo queda claro que tendría por finalidad revisar: el derecho aplicado *para resolver cuestiones objeto del debate y los actos y garantías del proceso.*

Ahora bien, al relacionar el escrito que contiene el recurso de apelación, se puede advertir que en el mismo la recurrente desarrolla dos puntos, en los que fundamenta el vicio que invoca. A continuación, se presenta el análisis de los mismos.

5.1 Con respecto a la revisión del derecho aplicado, cabe señalar que las finalidades del recurso de apelación, son las establecidas en el art. 510 CPCM.

En cuanto al caso de mérito, esta Sala advierte que, de la lectura del recurso de apelación, queda de manifiesto que los recurrentes han desarrollado un argumento relativo a una aplicación indebida, no obstante que, en el acápite de dicha finalidad, consignaron que denuncian una "aplicación e interpretación equivocada", pero dentro del contenido de dicha finalidad, se entiende que desarrolla una aplicación indebida del art. 995 romano IV CCom, con lo que cumplen con el requisito del art. 511 CPCM.

Por lo tanto, la Cámara ha exigido más requisitos de los que la referida disposición legal establece, pues los recurrentes sí manifestaron en *qué sentido quieren que se revise* el derecho aplicado, por lo que el recurso de apelación en análisis debió ser admitido por dicha finalidad.

5.2 Por otro lado, en lo que respecta a la segunda finalidad de la apelación, la recurrente señaló, dentro del apartado relativo a la revisión de normas que rigen los actos y garantías del proceso, la falta de motivación, y que con la misma se infringe lo dispuesto en los arts. 216 y 217 CPCM, en cuanto al deber de fundamentación que se exige en las decisiones judiciales, entre ellas la *sentencia*.

Argumenta la recurrente que la motivación, se vincula al debido proceso y al derecho de defensa, y que la vulneración de ese derecho, hace que incurra en el supuesto de nulidad insubsanable previsto en el art. 232 nº. 3 CPCM, por infringirse el derecho constitucional de defensa, previsto en los arts. 11 y 12 Cn.

La recurrente, en el desarrollo de la finalidad invocada, ha argumentado por qué considera que la resolución de la Cámara carece de motivación, manifestando lo siguiente: "[...] el Art. 216 Inc. 2 CPCM dispone que *"La motivación será completa...", sin embargo, al verificar el contenido del apartado "Fundamentos de derecho", no encontramos alguna motivación respecto a la razón por la cual se desestimaron las pretensiones relacionadas a la cancelación de asiento de inscripción de Hipoteca Abierta y asiento de inscripción de embargo, desconociéndose cómo es que el señor Juez llegó a concluir que tales pretensiones debían ser desestimadas, ya que en el fallo se pronuncia desestimando las mismas, sin que previamente en sus fundamentos de derecho haya hecho referencia a las razones, pues únicamente se refirió a una prescripción de la acción de nulidad de la Escritura Pública de Apertura de Crédito Rotativo. No se sabe en sí cuáles son los argumentos y causas que llevaron al juzgador a desestimar las referidas dos pretensiones. [...]" (sic) [...].*

Del referido argumento, esta Sala advierte que, en vista de lo sucedido en el caso particular, la recurrente efectivamente ha sido puntual en establecer en qué radicó la falta de motivación de la sentencia apelada, y con ello cumplió con los requisitos mínimos para establecer la finalidad de *la revisión* de normas *que rigen* los actos y garantías del proceso, pues la decisión impugnada en este grado de conocimiento, no ha sido motivada con bases legales y llega a una conclusión carente de fundamento, en cuanto a que el escrito de apelación no está estructurado de la forma exigida en el Código Procesal Civil y Mercantil. Por tanto, para esta Sala, no se determina la inobservancia de forma sustancial de los requisitos de admisibilidad, y en ese sentido, resulta injustificado el rechazo de la apelación por razones formales."

LOS JUZGADORES, A FIN DE POTENCIAR EL DERECHO DE DEFENSA Y CONTRADICCIÓN, AL MOMENTO DE ANALIZAR UN RECURSO, DEBEN EVITAR RIGORISMOS FORMALES EXCESIVOS, Y SE ENCUENTRAN EN LA OBLIGACIÓN DE HACER UN ESFUERZO INTELECTIVO EN SU CONJUNTO

"Por tanto, se concluye que la Cámara sentenciadora ha quebrantado una forma esencial del proceso, al haber rechazado indebidamente el recurso de apelación de mérito a través de la declaratoria de inadmisibilidad, por lo que el recurso de apelación en análisis deberá ser admitido por dicha finalidad.

5.3 Asimismo, es pertinente acotar que los juzgadores, a fin de potenciar el derecho de defensa y contradicción, al momento de analizar un recurso, deben evitar rigorismos formales excesivos, y se encuentran en la obligación de hacer un esfuerzo intelectivo en su conjunto, tanto de la parte expositiva como de la parte conclusiva y petitoria de aquél. En tal sentido, no es posible fundar el rechazo de un recurso de apelación en la valoración rígida de peticiones de natu-

raleza genérica, cuando las peticiones concretas se encuentran contenidas en el libelo recursivo, y se pueden deducir de los argumentos y fundamentaciones planteados por la parte apelante.

En ese sentido, este tribunal no encuentra elementos contradictorios entre la fundamentación jurídica del recurso de apelación y la petición realizada, que puedan dar lugar al rechazo liminar de dicho recurso."

EN APLICACIÓN DEL PRINCIPIO *JURA NOVIT CURIA*, EL JUZGADOR SE ENCUENTRA FACULTADO PARA SUPLIR LA FALTA DE PRECISIÓN PETITORIA, CUANDO ESTÉ COMPRENDIDA EN UNA PETICIÓN DE NATURALEZA GENÉRICA

"A juicio de esta Sala, no obstante, que la petición no se realizó en forma clara con respecto a *"revocar o anular la sentencia impugnada"*, tal situación no implica una falta de concreción que conlleve al incumplimiento de requisitos formales, pues en aplicación del principio *jura novit* curia, el juzgador se encuentra facultado para suplir dicha falta de precisión petitoria, cuando esté comprendida en una petición de naturaleza genérica; y, para el caso, de la parte expositiva de cada punto de apelación puede deducirse la consecuencia jurídica inmediata pretendida.

Finalmente, es menester señalar, que si bien es cierto puede declararse la inadmisibilidad de un recurso, la obligación principal de la Cámara, es ahondar en el análisis con respecto al cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley, para la admisión o inadmisión de dichos recursos, sin violentar el acceso a la justicia, respetando de esta manera lo previsto en los arts. 8 nº 1 y 2 literal h), y 25 nº 1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

V. Como consecuencia de lo expuesto, y habiéndose configurado la infracción al art. 511 CPCM, por el motivo de forma relativo a haberse declarado *indebidamente* la improcedencia de una apelación (art. 523 ord. 13º CPCM), esta Sala concluye que se debe casar el auto definitivo impugnado, y ordenar el trámite de la alzada de mérito.

Sala de lo Civil, número de referencia: 53-CAM-2022, fecha de la resolución: 26/04/2022

DECLARATORIA INDEBIDA DE LA INADMISIBILIDAD DE LA APELACIÓN

PROCEDE CASAR EL AUTO IMPUGNADO, AL HABER NEGADO LA CÁMARA EL ACCESO A LA JUSTICIA EN SEGUNDA INSTANCIA, CONCULCANDO A LOS RECURRENTES DERECHOS CONSTITUCIONALES Y LA NORMA INVOCADA COMO INFRINGIDA

"V) Habiéndose admitido el recurso por el único motivo invocado por el impetrante, se procede al análisis del mismo.

En razón de que la parte recurrente ha realizado un análisis conjunto de los artículos que considera infringidos, por estar referidos a la inadmisibilidad de la apelación, esta Sala procederá a estudiar dichas normas también de manera conjunta.

Previo a consideraciones específicas para este caso concreto, debe tenerse en cuenta que el motivo invocado por los recurrentes está configurado para analizar los rechazos del recurso de apelación, mediante resoluciones que ponen fin al proceso, ya sea porque ha sido declarado improcedente o inadmitido de forma indebida.

El rechazo del recurso de apelación, es impugnable en casación, y el mismo habilita a este tribunal, según sea el caso, a verificar si concurren los presupuestos procesales de la procedencia de la alzada, (la competencia del tribunal que debe conocer en segunda instancia, la legitimación de las partes para recurrir, que la resolución sea impugnable en apelación conforme a la ley y, que cause agravios), o los requisitos de admisión del recurso, tanto los formales como los de contenido, los cuales se encuentran regulados en el art. 511 CPCM."

REQUISITOS FORMALES Y DE CONTENIDO DE LA ALZADA

"Cabe mencionar que los *requisitos formales* de la alzada, son el modo, tiempo y lugar; y, *los de contenido*, en términos generales, según la finalidad de la alzada, es que se exprese el tipo de infracción que se atribuye, ya sea procesal o de fondo, las disposiciones jurídicas que deben revisarse y las razones de dicha revisión (fundamentación).

Para el caso que nos ocupa, la Cámara reconoce que el recurso de apelación cumple con los requisitos objetivos o de contenido para la interposición de la apelación, pero no los requisitos formales.

No obstante, esta Sala advierte que la impugnación cumple con el requisito formal establecido en la norma señalada como infringida, en la que expresamente se determina que el recurso de apelación deberá presentarse ante el juez que dictó la resolución impugnada, como ocurrió en el caso de mérito.

En ese orden, los impetrantes expresan, en síntesis, lo siguiente: [...]

Con relación al punto señalado por los impetrantes, el tribunal de alzada, concluyó que, en virtud de que el recurso de apelación fue dirigido al juez inferior y que en el petitorio no se realizó ninguna petición en concreto a la Cámara, no podían entrar a conocer del libelo recursivo, pues bajo el principio de congruencia, solo se puede resolver lo pedido, no pudiendo suplir la omisión del recurrente; por lo que rechazó liminarmente el recurso, por falta de cumplimiento de requisitos formales.

Al respecto, es importante establecer que el art. 511 CPCM, en relación a los arts. 3 y 18 del mismo cuerpo legal, señalados como vulnerados, contemplan respectivamente los requisitos de interposición del recurso, el principio de legalidad y la regla de interpretación de las disposiciones procesales, que es precisamente lo que considera la parte recurrente ha sido conculcada por parte del tribunal de segunda instancia, al no admitir el recurso, que cumple los requisitos legales.

Para el presente análisis, debe partirse del derecho a la protección jurisdiccional como manifestación del debido proceso (arts. 2, 12 Cn), el que a la vez está integrado por otros derechos, tales como el derecho de defensa, audiencia, petición y prueba, y que en la medida de su verificación pueden incidir en otros

de igual trascendencia, en el caso particular, el derecho de recurrir, el cual se vio afectado como consecuencia de esa disparidad en la interpretación por parte de la Cámara de concluir que el recurso de apelación no fue interpuesto para ser resuelto por la misma, por el hecho de no haberse dirigido hacia ella y no haber realizado peticiones concretas a dicho tribunal de segunda instancia.

En ese orden de ideas, resulta preciso acotar que de conformidad al artículo 18 Cn, toda persona tiene derecho a dirigir sus peticiones por escrito, de manera decorosa, a las autoridades legalmente establecidas, a que se le resuelvan, y a que se le haga saber lo resuelto. En consonancia con lo anterior, el artículo 1 CPCM, le otorga a todo sujeto, el derecho a plantear su pretensión ante los tribunales, oponerse a la ya incoada, ejercer todos los actos procesales que estime convenientes para la defensa de su posición, y a que el proceso se tramite y decida conforme a la normativa constitucional y a las disposiciones legales vigentes.

Dichas disposiciones, contemplan el derecho a la protección jurisdiccional, y concretan el derecho al debido proceso, basado en el artículo 11 de nuestra Carta Magna, estableciendo, a su vez, para todos los jueces un límite de sujeción a la legalidad, por cuanto toda actividad procesal, independientemente de quién la realice, debe sujetarse a las regulaciones correspondientes.

Por otra parte, de la lectura del escrito de apelación se advierte, específicamente en la finalidad del recurso, que los recurrentes se refieren a la sentencia dictada por el "juez a quo", respecto de la que argumentan que es errónea en su motivación y fundamentación.

Asimismo, los impetrantes en el escrito que contiene el recurso de apelación, son contundentes al expresar que: *"Es por ello que el presente recurso tiene como finalidad que el Tribunal Ad Quem, tomando como base los fundamentos que se expondrá a continuación, pueda realizar una valoración de la prueba ofertada y admitida en el proceso, conforme a las reglas de la sana crítica, art. 276 CPCM, así como admita la prueba útil y pertinente propuesta por esta representación" (sic).*

De ese manera, con base en lo antes expresado, se advierte que el razonamiento de la Cámara es insostenible y contradictorio a la vez, pues se limita a señalar que el recurso no se planteó según lo previsto por los arts. 501 y 511 CPCM. Sin embargo, al mismo tiempo afirma que cumple con los requisitos objetivos de interposición, entre los que se encuentran el relativo a la competencia del tribunal para conocer del recurso. Es decir, reconoce tácitamente su competencia respecto del recurso de apelación, a pesar que expresa que no está dirigido a ese tribunal. En consecuencia, no lo conoce por falta de cumplimiento a los requisitos formales, consistente en no haberse dirigido la apelación ni el petitorio de la misma a dicha Cámara, sin tomar en cuenta los argumentos jurídicos vertidos por los impetrantes en la estructura y petitorio del recurso.

Tal argumentación de la Cámara, no tiene sustento legal, ya que resultaría contrario a lo dispuesto en los arts. 512 y 513 CPCM, y a la naturaleza misma de la apelación, concluir que el recurrente pretende que el mismo juez que dictó la sentencia -la cual está impugnando la parte recurrente-, sea a quien le corres-

ponda decidir el recurso, máxime si en el mismo petitorio los impetrantes señalan específicamente las normas que rigen el recurso de apelación, las cuales son aplicables por el tribunal de segunda instancia.

Esta Sala advierte que, en su resolución, el tribunal de alzada ha incurrido en excesivo ritualismo, lo cual, de conformidad a lo que manda el Código Procesal Civil y Mercantil en su Art. 18, debe evitarse. Según esta disposición debe evitarse "las interpretaciones que *supediten* la eficacia del derecho a aspectos meramente formales", situaciones que estima este tribunal han sucedido en el caso que nos ocupa, al negarse la admisibilidad del recurso de apelación por el tribunal de segunda instancia, por un rigorismo excesivo. Lo anterior tiene relación con lo que establece el Art. 11 Cn.

Por lo antes dicho, se advierte que se han transgredido los derechos consagrados en los arts. 11 y 12 de la Constitución de la República, en virtud de los cuales, se exige que antes de proceder a limitar la esfera jurídica de una persona o a privársele por completo de un derecho, debe ser oída y vencida con arreglo a las leyes, asegurándose todas las garantías necesarias para su defensa.

La protección de los derechos subjetivos de los que es titular una persona, obliga a las autoridades a proceder de conformidad con lo previsto en la ley de la materia, o en su ausencia, la aplicación directa de la disposición constitucional; para el caso, el derecho de audiencia se encuentra integrado junto con el derecho de defensa, en nuestro ordenamiento procesal civil y mercantil vigente, en el art. 4 inc. 2°, el cual establece que: *"cada parte tiene derecho a contar con la oportunidad de exponer su argumentación y rebatir la de la contraria"*

Al respecto, la Sala de lo Constitucional ha sostenido que: *"[...] Sucede entonces que el derecho de audiencia puede verse desde un doble enfoque a saber: desde la inexistencia de proceso o procedimiento previo, o desde el incumplimiento de formalidades de trascendencia constitucional necesarias al interior del mismo. En el primer supuesto, la cuestión queda clara en tanto que la inexistencia de proceso o procedimiento dá lugar, habiendo existido la necesidad de seguirlo, a la advertencia directa e inmediata de la violación a la Constitución. En el segundo supuesto, sin embargo, necesario es analizar el porqué de la vulneración alegada pese a la existencia de un proceso, el fundamento de la violación y específicamente el acto que se estima fue la concreción de ella […]".* (sic). (Proceso de amparo 368-98, de las doce horas con treinta minutos del día veinticinco de febrero del año dos mil)."

ESTA SALA CONSIDERA QUE SE CONFIGURA LA VULNERACIÓN AL DERECHO DE AUDIENCIA Y DEFENSA, YA QUE LIMITÓ A LA PARTE RECURRENTE EL SER OÍDA EN LA SEGUNDA INSTANCIA, CON LO CUAL TAMBIÉN VULNERÓ SU DERECHO A LA PROTECCIÓN JURISDICCIONAL

"Para el caso en particular, es necesario hacer referencia al segundo caso, cuando la violación acontece al interior de un proceso, esta puede ser por acción o por omisión del juzgador, en cuyo caso, regularmente sucede por el incumplimiento de las formalidades, a veces esenciales, exigidas para la realización de los actos.

Por consiguiente, esta Sala considera que se configura la vulneración al derecho de audiencia y defensa, ya que limitó a la parte recurrente, el ser oída en la segunda instancia, con lo cual también vulneró su derecho a la protección jurisdiccional, debido a que impidió la obtención de una resolución motivada respecto del cumplimiento de los requisitos de contenido de la alzada.

En suma, se observa que la Cámara ha negado a los recurrentes, el acceso a la justicia en la segunda instancia, con vulneración al derecho de la protección jurisdiccional.

Por lo tanto, procede casar la resolución impugnada por este motivo invocado, por haberse conculcado a los recurrentes derechos constitucionales y la norma invocada como infringida.

Como consecuencia de que se casará el auto de inadmisión de la alzada, la Cámara deberá proceder al análisis de admisión del recurso en cuanto al cumplimiento de los requisitos de contenido establecidos en el art. 511 CPCM, en relación con la finalidad que haya sido invocada en la apelación según el art. 510 CPCM. De modo que procede ordenar a dicho tribunal, que realice dicho estudio, y de su resultado, disponga lo pertinente según las potestades resolutivas que la ley le confiere."

Sala de lo Civil, número de referencia: 244-CAM-2022, fecha de la resolución: 04/10/2022

PROCEDE CASAR EL AUTO IMPUGNADO POR VULNERACIÓN DEL DERECHO A LA PROTECCIÓN JURISDICCIONAL, AL HABER RECHAZADO LA CÁMARA LA ALZADA BAJO UN ARGUMENTO RIGORISTA QUE LIMITA EL DERECHO A RECURRIR

"IV. Análisis del recurso por quebrantamiento de las formas esenciales del proceso, por haberse declarado indebidamente la improcedencia de una apelación, art. 523 ord. 13° CPCM, con infracción del art. 511 inciso 2° CPCM

1. En primer término, debe tenerse en cuenta que el motivo invocado por los recurrentes está configurado para impugnar los rechazos del recurso de apelación, que ha sido declarado improcedente o inadmitido de forma indebida.

En ese sentido, el rechazo del recurso de apelación es impugnable en casación, y el mismo habilita a este tribunal, para verificar si concurren los presupuestos procesales de la procedencia de la alzada (esto es, la competencia del tribunal que debe conocer en segunda instancia, la legitimación de las partes para recurrir, que la resolución sea impugnable en apelación conforme a la ley, y que cause agravios), o el cumplimiento de los requisitos de admisión del recurso, tanto los formales como los de contenido (los cuales se encuentran regulados en el art. 511 CPCM).

Cabe mencionar que los requisitos formales de la alzada, son el modo, tiempo y lugar; y, los de contenido, en términos generales, según la finalidad de la alzada, es que se exprese el tipo de infracción que se atribuye, ya sea procesal o de fondo, las disposiciones jurídicas que deben revisarse y las razones de dicha revisión (fundamentación de la infracción).

2. Para el caso que nos ocupa, la Cámara reconoce que el recurso de apelación cumple con los requisitos objetivos o de contenido para la interposición de la apelación, pero considera que no se ha dado cumplimiento a los requisitos formales.

Sin embargo, esta Sala concluye que la alzada cumple con el requisito formal establecido en la norma señalada como infringida, en el sentido de que el recurso de apelación deberá presentarse ante el juez que dictó la resolución impugnada, pues así ocurrió en el caso de mérito (art. 511 inc. 1° CPCM).

En ese orden, los impetrantes expresan, en síntesis, lo siguiente: *«[...] si bien es cierto el Recurso de apelación presentado contenía errores en cuanto a los requisitos formales, pero si cumplía con los requisitos objetivos de interposición, siendo estos de mera importancia para su admisión, por lo cual la interposición de recurso de Apelación de acuerdo al art. 511, si cumplía con los requisitos que exige el Código Procesal Civil y Mercantil, puesto que fue presentado ante el Juez que dictó la resolución impugnada, siendo presentado dentro del plazo de los cinco días contados a partir del siguiente, el Recurso de Apelación contenía con toda claridad y precisión las razones en que se funda el recurso [...]» (sic).*

Con relación al punto señalado por los recurrentes, el tribunal de alzada concluyó que el recurso de apelación fue dirigido al juez inferior para ante el tribunal de lo civil de Soyapango, y que, en consecuencia, en dicho escrito no se realizó ninguna petición en concreto a la Cámara. Que por tal razón no podía entrar a conocer del libelo recursivo, pues bajo el principio de congruencia, solo se puede resolver lo pedido, no pudiendo suplir la omisión del recurrente. En consecuencia, rechazó liminarmente el recurso, por falta de cumplimiento de requisitos formales.

3. Al respecto, es importante considerar que el art. 511 CPCM, señalado como vulnerado, contempla los requisitos de interposición del recurso. El recurrente argumenta que tal disposición ha sido vulnerada por parte del tribunal de segunda instancia, al no admitir el recurso, que, según afirman, cumple los requisitos legales.

3.1 Para el presente análisis, debe partirse de una consideración al derecho a la protección jurisdiccional, en su manifestación del debido proceso derivados de los arts. 2 y 12 Cn, el que a la vez está integrado por otros derechos, entre los que se encuentran el derecho de recurrir.

En consonancia con lo anterior, el art. 1 CPCM, le otorga a todo sujeto, el derecho a plantear su pretensión ante los tribunales, oponerse a la ya incoada, ejercer todos los actos procesales que estime convenientes para la defensa de su posición, y a que el proceso se tramite y decida conforme a la normativa constitucional y a las disposiciones legales vigentes.

3.2 De esa manera, con base en lo antes expresado, se advierte que el razonamiento de la Cámara es insostenible y contradictorio a la vez, pues se limita a señalar que el recurso no se planteó según lo previsto en los arts. 501 y 511 CPCM. Sin embargo, al mismo tiempo afirma que cumple con los requisitos objetivos de interposición, sin entrar a conocer de la apelación que fue planteada

por la falta de cumplimiento a un requisito de forma, consistente en no haberse dirigido el petitorio de la misma a dicha Cámara.

Ahora bien, respecto de que la alzada no se interpuso expresamente para ante la Cámara, esta Sala advierte que la consecuencia dada por ese tribunal, es excesivamente rigorista, al grado que limita el derecho a recurrir.

Esta Sala considera que la argumentación del tribunal de segunda instancia, no tiene sustento legal, pues la competencia de la Cámara para conocer de la alzada interpuesta viene fijada atendiendo al órgano que conoció en la primera instancia.

En concordancia con lo anterior, el tribunal de primera instancia que dictó la sentencia apelada es el Juzgado Cuarto de lo Civil y Mercantil de San Salvador, juez tres, y de acuerdo con el art. 6 de la Ley Orgánica Judicial, la Cámara Segunda de lo Civil de la Primera Sección del Centro, es la competente para conocer de los asuntos tramitados por dicho tribunal inferior en grado.

Congruente con lo expresado en el párrafo anterior, el operador judicial de primera instancia, cuando recibe el recurso de apelación que le es presentado, actúa de acuerdo a la estructura y naturaleza misma de la alzada, y con fundamento en la ley, la remite a la Cámara competente para que conozca de la impugnación interpuesta.

Al no existir ninguna duda ni conflicto en torno a la competencia de la Cámara para conocer de la alzada interpuesta, por ser este un aspecto resuelto expresamente por la ley, resulta evidente que dicho tribunal privilegió un aspecto formal del escrito de apelación interpuesto, prescindiendo realizar el análisis que corresponde sobre los requisitos de contenido regulados en el art. 511 inc. 2° CPCM, por ello, se advierte que dicha disposición legal ha sido vulnerada, al haberse inobservado su contenido, ya que no se ha evaluado, si efectivamente, la alzada contiene los elementos necesarios para ser admitida.

Por consiguiente, esta Sala concluye que, en su resolución, el tribunal de alzada ha incurrido en excesivo ritualismo, que según el Código Procesal Civil y Mercantil, debe evitarse (art. 18 CPCM).

3.3 Según esta disposición el juez deberá evitarse “las interpretaciones que supediten la eficacia del derecho a aspectos meramente formales”.

En suma, se concluye que la Cámara ha negado a los recurrentes, el acceso a la justicia en la segunda instancia, vulnerando el derecho a la protección jurisdiccional.

Por lo tanto, procede casar la resolución impugnada por el motivo invocado, con infracción al art. 511 inc. 2° CPCM.

Como consecuencia de que se casará el auto de inadmisión de la alzada, la Cámara deberá proceder al análisis de admisión del recurso, respecto del resto de requisitos de contenido previsto en el art. 511 CPCM, en relación con el art. 510 CPCM, y de su resultado, disponga lo pertinente según las potestades resolutivas que la ley le confiere.”

Sala de lo Civil, número de referencia: 311-CAC-2022, fecha de la resolución: 17/11/2022

DENEGACIÓN DE PRUEBA LEGALMENTE ADMISIBLE

EL AUTO IMPUGNADO DEBE CONFIRMARSE, PUES NO SE VERIFICA UN CONCEPTO CONCRETO QUE DESARROLLE LA INFRACCIÓN INVOCADA Y QUE ESTÉ RELACIONADO CON LA FINALIDAD ESPECÍFICA RELATIVA A REVISAR UNA DENEGACIÓN DE PRUEBA

"7.4 En lo que concierne a la revisión de la ***prueba denegada indebidamente,*** tiene que señalarse el medio de prueba inadmitido, y argumentar sobre la legalidad, pertinencia y utilidad del medio probatorio rechazado. Además, indicar el hecho que se pretendía probar con el mismo, cuya trascendencia puede cambiar la decisión impugnada.

Tal como se había indicado en párrafos anteriores, no hay una argumentación que corresponda a la premisa antes afincada, a efecto de que el tribunal de alzada verificara la inadmisión indebida de un medio probatorio necesario para decidir y cambiar el fallo adoptado en la primera instancia. Razón por la cual se confirma el auto impugnado

En la siguiente transcripción, nuevamente, puede apreciarse lo único que ha sido alegado para tratar de sostener la denegación de prueba que han mencionado, así: *"[...]La no valoración de la prueba, Art. 416 Inc. 1° y 2° CPCM, es un punto medular el cual no se quiso conocer en base a la sana crítica y prueba tasada, no dándole el debido valor probatorio, no atribuyéndole el significado a cada prueba en particular, en el caso sub-júdice, la presentada en el proceso contra nuestros mandantes,* ***el rechazo de la prueba debe acordarse en resolución debidamente motivada, Art. 320 CPCM, lo cual no fue de esa forma, en el presente proceso*** *[...] fue el documento base de la acción en este proceso, el cual fue presentado FRAUDULENTAMENTE y es una prueba de ese tipo, no estableciendo su fundamento el señor Juez A quo, el PORQUE LO ADMITE DE ESA FORMA. SIENDO ESTO UN HECHO EVIDENTE. Artículo 314, Ordinal 3° CPCM [...]"* (sic) (resaltado de la Sala).

Por consiguiente, no hay un concepto concreto que desarrolle la infracción que han invocado, y que esté relacionado con la finalidad específica relativa a revisar una denegación de prueba; sino que, tal como se advierte, no hay argumentos que *refuten la inadmisión* de prueba como corresponde, es decir, ilustrando la legalidad, pertinencia y utilidad de un medio probatorio específico."
Sala de lo Civil, número de referencia: 252-CAM-2022, fecha de la resolución: 27/09/2022

ESTA SALA ESTÁ FACULTADA PARA DETERMINAR QUE EL MOTIVO CONCRETO POR RECHAZO INDEBIDO DE LA PRUEBA NO CUMPLE CON EL ELEMENTO DE PERTINENCIA NECESARIO PARA EL ANÁLISIS DE LA REFERIDA INFRACCIÓN, POR LO QUE DEBERÁ DECLARARSE SU INADMISIBILIDAD

"VI. Análisis del motivo de forma, relativo a la inadmisión indebida de prueba, con infracción a los arts. 313 numeral 1°, 317 inc. 2°, 341 inc. 1° CPCM, en relación con el art. 416 incs. 1°, 2° y 3° CPCM.

1. A criterio del recurrente el medio de prueba que le ha sido rechazado indebidamente, es prueba instrumental, consistente en dos certificaciones relacionadas con la personería jurídica, y los estatutos de constitución de la institución a la que representa. Argumenta que, de haber admitido esa prueba, y darle el valor probatorio a la misma, el fallo sería diferente, pues resulta relevante para resolver la pretensión de ACACU DE R.L, la cual consiste en determinar que no está inscrita en el Registro de Comercio, sino que lo está en el Registro Nacional de Asociaciones Cooperativas que lleva el Instituto Salvadoreño de Fomento Cooperativo (INSAFOCOOP), y que por lo tanto no le es aplicable el Código de Comercio, probando con ello, que no es un comerciante social, sino que, es una "asociación de derecho privado".

El recurrente manifiesta que la prueba fue presentada en el momento procesal oportuno, argumentando sobre su pertinencia, utilidad y el hecho que pretendía probar con el medio de prueba.

2. Ahora bien, esta Sala advierte que este submotivo está relacionado con el anterior, en cuanto que una de las finalidades previstas en la apelación era precisamente revisar la inadmisión de la prueba instrumental que ha sido relacionada.

En ese sentido, cabe señalar que, en este apartado del recurso, el litigante admite que la Cámara no resolvió nada respecto de la inadmisión de la prueba rechazada en la primera instancia, y eso a criterio del recurrente constituye la infracción invocada.

Al respecto, debe tenerse en cuenta que el motivo invocado procede cuando la Cámara rechaza la prueba, pero al no haber pronunciamiento respecto de la finalidad invocada en apelación, no es posible analizar los demás argumentos con los que se trata de demostrar la infracción que se origina desde la primera instancia, por lo que no se ha configurado adecuadamente el motivo señalado, y conduce a concluir que fue admitido indebidamente en el estudio liminar.

En concordancia con lo anterior, esta Sala con base al principio de legalidad está facultada para determinar que el motivo concreto por rechazo indebido de la prueba, no cumple con el elemento de pertinencia necesario para el análisis de la referida infracción, por lo que deberá declararse su inadmisibilidad, art. 528 CPCM.

VII. En virtud de lo anterior, se advierte que la sentencia impugnada será casada por el motivo de forma relativo a la infracción de requisitos internos de la sentencia (art. 523 ord. 14° CPCM), por lo que de conformidad al art. 535 CPCM, esta Sala no se pronunciará sobre los motivos de fondo que fueron admitidos.

Ahora, en cuanto al efecto de esta sentencia, procede anular el fallo de la misma y devolver el proceso al tribunal de alzada correspondiente, ordenándole que reponga el acto que será anulado y proceda a pronunciar la sentencia que a derecho corresponde, de manera congruente y motivada.

Lo anterior de conformidad con lo estipulado en el art. 537 inc. 2° CPCM, el cual determina que: *"Si se casare por vicio de forma, se anulará el fallo y se devolverá el proceso al tribunal correspondiente, a fin de que se reponga la actuación desde el acto viciado".*

Sala de lo Civil, número de referencia: 33-CAM-2022, fecha de la resolución: 29/03/2022

LA SENTENCIA IMPUGNADA SERÁ CASADA POR ESTE MOTIVO DE FORMA

"Análisis del motivo de forma, relativo a la *inadmisión indebida de prueba,* con infracción a los arts. 313 numeral 1º, 317 inc. 2º y 341 inc. 1º CPCM, en relación con el art. 416 incs. 1º, 2º y 3º CPCM.

1. A criterio del recurrente, el medio de prueba que le ha sido rechazado indebidamente, es prueba instrumental, consistente en dos certificaciones relacionadas con la personería jurídica, y los estatutos de constitución de la entidad a la que representa. Argumenta que, de haber admitido dicha prueba y se le hubiera dado valor probatorio a la misma, el fallo sería diferente, pues resulta relevante para resolver la pretensión de [...], la cual consiste en determinar que no está inscrita en el Registro de Comercio, sino que lo está en el Registro Nacional de Asociaciones Cooperativas, que lleva el Instituto Salvadoreño de Fomento Cooperativo (INSAFOCOOP); y que, por lo tanto, no le es aplicable el Código de Comercio; probando con ello, que no es un comerciante social, sino que, es una "asociación de derecho privado".

El recurrente manifiesta que la prueba fue presentada en el momento procesal oportuno, fundamentando su pertinencia y utilidad, así como el hecho que pretendía probar con el medio probatorio.

Concluye, en el sentido de que la Cámara cometió el vicio alegado, al desestimar el punto planteado en el recurso de apelación, por una supuesta falta de denuncia de la prueba que no fue admitida; cuando según el recurrente, dicha prueba está claramente determinada en el motivo de apelación invocado.

2. Sobre las alegaciones planteadas, esta Sala advierte en primer término, que la denegación de prueba legalmente admisible, se produce cuando alguna de las partes solicita la práctica o incorporación de una prueba pertinente, legalmente admisible, y el juez la deniega o rechaza, es decir, que la prueba se deniega, aunque sea concerniente al hecho que se pretende establecer, y que se haya presentado o solicitado en tiempo y forma.

Los arts. 317, 318 y 319 CPCM, establecen requisitos para la proposición y admisibilidad de la prueba. Asimismo, determinan que el medio de prueba debe dirigirse a acreditar o descartar un hecho alegado por las partes, y además, que tal hecho sea idóneo para el triunfo de la pretensión o de la oposición procesal planteada. Determinan que, serán consideradas impertinentes las pruebas que no guardan relación con los hechos que las partes alegan en el proceso; y que, ha de considerarse inútil, la prueba que no genera ningún resultado real para acreditar la pretensión, o cuando resulta excesiva o redundante para contribuir a esclarecer los hechos controvertidos por las partes.

En síntesis, debe considerarse que la prueba es legalmente admisible, cuando goce de libertad, cuando cumple con los requisitos de tiempo y forma (art. 317 CPCM), y de orden material, pertinencia y utilidad probatoria, arts. 316, 318 y 319 CPCM.

2.1 En el caso de mérito, se advierte que en la audiencia preparatoria, se procedió a establecer los requisitos de admisión de la prueba, de conformidad al art. 310 CPCM; y se resolvió rechazar la prueba ofrecida por la parte demanda-

da, que se circunscribe a los siguientes documentos: 1) certificación judicial que contiene el documento privado reconocido, de mutuo con garantía solidaria, así como el estado de cuenta del crédito, y 2) certificación de la personería jurídica de la institución demandada y de los estatutos de constitución. Estos documentos no fueron admitidos por el juez a quo, argumentando que los mismos no son pertinentes para los fines de la pretensión. Asimismo, denegó la admisión del acta notarial que contiene información de un seguro de personas fallecidas, aduciéndose que, no es relevante para el proceso.

Los documentos antes relacionados y que han sido denegados, fueron presentados por la asociación cooperativa demandada para probar la oposición a la prescripción de la acción ejecutiva, la cual se fundamenta en que el contrato de mutuo es un contrato mercantil y, por lo tanto, le era aplicable el Código de Comercio. Al respecto, el recurrente manifiesta que al momento de contestar la demanda, claramente alegó que ACACU DE R.L., no es un comerciante y que la prueba para demostrar que no es comerciante, es la prueba que el juez no admitió, con lo cual además pretendía probar que no es el Registro de Comercio quien autoriza y le da personalidad jurídica a su representada, sino el INSAFOCOOP; y que por lo tanto ACACU DE R.L., es una asociación de derecho privado con un interés social y que en sus estatutos, en el art. 5 literal c), se estipula que el objetivo de la cooperativa es procurar el mejoramiento socio económico del asociado, y esto se logra a través de la concesión de préstamos.

2.2 Por su parte, la Cámara sostuvo lo siguiente: [...]

De lo argumentado por la Cámara, se advierte que tal como lo manifiesta el recurrente, de la lectura del escrito del recurso de apelación, claramente se puede establecer que las pruebas a las cuales se refiere y manifiesta que han sido denegadas, son las siguientes: 1) certificación de la personería jurídica de la institución demandada y de los estatutos de constitución, y, 2) acta notarial que contiene información de un seguro de personas fallecidas.

Aunado a lo anterior, el recurrente, desarrolla y argumenta la utilidad y pertinencia de dichas pruebas, y cuál hubiera sido el resultado si las mismas hubiesen sido analizadas y tomadas en cuenta en la argumentación de la sentencia.

Asimismo, es importante destacar que la referida prueba fue presentada en tiempo y en legal forma, en el presente proceso.

2.4 Por lo tanto, esta Sala concluye que se ha quebrantado el proceso al haber denegado la prueba documental presentada por la parte demandada, ya que, con el resultado de dicha prueba, se estaría constatando la naturaleza de la actividad realizada por ACACU DE R.L., y se determinaría cual es la normativa aplicable al caso para efectos del cómputo del plazo de la prescripción.

Como consecuencia de las razones expuestas, se impone casar la sentencia de mérito por este motivo.

VI. En virtud de lo anterior, se advierte que la sentencia impugnada será casada por el motivo de forma relativo a la denegación de prueba legalmente admisible (art. 523 ord. 10º CPCM), por lo que de conformidad al art. 535 CPCM, esta Sala no se pronunciará sobre los motivos de fondo que fueron admitidos.

Ahora, en cuanto al efecto de esta sentencia, procede anular el fallo de la misma y devolver el proceso al tribunal de alzada correspondiente, ordenándole que proceda a pronunciar la sentencia que a derecho corresponde, resolviendo respecto de la prueba indebidamente rechazada.

Lo anterior de conformidad con lo estipulado en el art. 537 inc. 2º CPCM, el cual determina que: "Si se casare por vicio de forma, se anulará el fallo y se devolverá el proceso al tribunal correspondiente, a fin de que se reponga la actuación desde el acto viciado".

Sala de lo Civil, número de referencia: 331-CAM-2022, fecha de la resolución: 13/12/2022

DOCTRINA LEGAL

SE PRODUCE INFRACCIÓN AL VULNERAR LA JURISPRUDENCIA PRONUNCIADA POR LA SALA DE LO CIVIL, SURGIDA DE LA APLICACIÓN E INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 35 DE LA LEY RELATIVA A LAS TARIFAS Y OTRAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD RAÍZ E HIPOTECAS

"VIII. Análisis de la infracción a la doctrina legal, por inaplicación de la jurisprudencia 86-CAC-2016, 363-CAC-2014 y 270-CAC-2013

1. Las recurrentes interpusieron en el recurso de casación, el motivo de fondo, relativo a la infracción de una doctrina legal, invocando la inaplicación de tres precedentes, en los cuales esta Sala, se ha pronunciado respecto a la interpretación que debe dársele al art, 35 LRTODARPRH,

Por lo que, esta Sala casacional, con base en el art. 522 inc. 3° CPCM, hará una relación circunstanciada de los hechos que fundamentan el motivo de casación e identificación de los precedentes aplicables, ya que este motivo, efectivamente, tiene finalidad que se verifique por este tribunal la concurrencia de un supuesto de doctrinal legal.

2. En relación con lo anterior, las recurrentes para fundamentar el vicio atribuido al tribunal de alzada, en lo medular exponen que se ha incurrido en la violación de las sentencias pronunciadas por esta Sala, todas dentro de procesos declarativos común de acción reivindicatoria de dominio, siendo la primera, la clasificada bajo referencia 86-CAC-2016, dictada el veintiocho de octubre de dos mil dieciséis; la segunda, con referencia 363-CAC-2014, de fecha nueve de diciembre de dos mil dieciséis; y, la tercera sentencia, bajo referencia 270-CAC-2013, de fecha veintisiete de noviembre de dos mil diecisiete.

Sostienen las impetrantes que en la jurisprudencia señalada, esta Sala, ha considerado que la prueba útil e idónea para demostrar el requisito establecido en el art. 891 CC, relativo a la propiedad de un inmueble, es el instrumento que le sirve como título traslaticio de dominio, cumpliendo además con los requerimientos fijados por la ley para la validez de tales documentos, habida cuenta que la certificación del Registro, es una prueba que no puede suplir la obligación de presentar el instrumento público que demuestre los actos y contratos en que la ley requiere dicha solemnidad de otorgamiento.

Asimismo, expresaron que las sentencias invocadas, tratan sobre el tema de las certificaciones registrales, las cuales no suplen la obligación de presentar el documento original de propiedad y que estas solo son válidas al justificarse la imposibilidad de reponer el título.

Agregan, que estas sentencias son constantes y uniformes en la interpretación de la pertinencia de la prueba de dominio sobre bienes inmuebles, estableciendo los supuestos en los cuales se debe de presentar la prueba idónea documental para acreditar el derecho de propiedad sobre bienes inmuebles. Que en el presente caso, el documento idóneo es la certificación de adjudicación original extendida por el juzgado correspondiente, ya que en esta es que se hace la transferencia del dominio.

Concluyen, que de haberse aplicado dichos precedentes por parte de la Cámara, se habrían acatado las reglas contenidas en el art. 35 LRTODARPRH, y hubiese advertido que la parte demandante, en la acción reivindicatoria no presentó el título original inscrito, el que constituye la adjudicación en pago original debidamente inscrita, y que además no consta en el proceso la imposibilidad para presentar el titulo original debidamente inscrito.

3. Establecido lo anterior, habilitan las recurrentes a invocar el motivo de infracción a la doctrina legal, por inaplicación de la jurisprudencia dictaminada por este tribunal de casación.

En lo tocante al fondo de la cuestión, previo estudio de la jurisprudencia reciente, esta Sala advierte que los precedentes señalados han regulado casos semejantes al que hoy nos ocupa, en las sentencias invocadas e identificados bajo referencias: 270-CAC-2013, de fecha veinticuatro de julio de dos mil quince; 86-CAC-2016, de fecha veintiocho de octubre de dos mil dieciséis; y, 363-CAC-2014, de fecha nueve de diciembre de dos mil dieciséis.

De tal manera, se hace constar:

a) Que dichas sentencias fueron dictadas en la hora y fecha indicadas, las cuales se han pronunciado en dicho orden;

b) Que se remitieron en su oportunidad a la Cámara respectiva, con la certificación de lo proveído; y,

c) Que dentro del período comprendido entre el veinticuatro de julio de dos mil quince al nueve de diciembre de dos mil dieciséis, hasta la fecha consignada en la presente sentencia, no hay otras resoluciones que regulen de forma distinta el asunto contenido en ellas.

Por consiguiente, en el presente caso, los hechos descritos por las abogadas recurrentes, se adaptan a los precedentes antes descritos, ya que en los mismos esta Sala ha sostenido que para efectos de acreditar la propiedad de un inmueble, a favor de una determinada persona, debe presentarse el título original inscrito, y lo más relevante es en cuanto a la certificación registral, que es el punto controvertido en este caso, y sobre la cual esta Sala ha sido conteste en sostener que la certificación registral puede obtenerse subsidiariamente de lo previsto en el art. 35 LRTODARPRH, y que adquieren el estatus probatorio del título original, bajo la condición de justificar la imposibilidad de reponer el mismo, es decir, que es necesario que se acredite dentro del proceso que se solicitó su reposición a la autoridad competente, y sólo así tendrá el mismo valor y producirá los efectos que el título inscrito.

De lo anterior, se advierte que dentro de este proceso, no se agregó la certificación que contiene acta de remate y auto de adjudicación en pago, en original, librada por el funcionario competente; la que constituye el título de propiedad, y oponible frente a terceros inscrito en el Registro; y tampoco se comprobó la imposibilidad de obtener la misma ante el Juzgado Cuarto de Familia de San Miguel, que es ese juzgado facultado para sustanciar los procesos del extinto juzgado Segundo de lo Civil de San Miguel, quien fue que emitió la certificación del acta de remate y auto de adjudicación, que sirve de legal título."

FINALIDAD DEL RECURSO DE CASACIÓN

"En este momento es oportuno acotar, que la finalidad que se persigue en el recurso de casación es resolver sobre la existencia de una infracción invocada, de tal modo que si el recurso se estima, se casa la sentencia, pronunciándose sobre el fondo del asunto planteado, tratándose de un asunto de fondo, y así dar uniformidad a la jurisprudencia, cumpliendo una función de seguridad jurídica y esto se confirma en lo establecido en el art. 524 CPCM, que contiene el principio teleológico de este instituto y en el que literalmente se establece: *"Las normas sobre el recurso de casación deberán aplicarse en la forma que más favorezca la uniformidad de la jurisprudencia como medio para asegurar la igualdad ante la ley, así como la seguridad y la certidumbre jurídica".*

A partir de lo anterior, esta Sala advierte que, en la sentencia impugnada, se ha infraccionado la jurisprudencia, ya que se ha resuelto en discrepancia con ésta.

Por tanto, siendo que el motivo invocado por las recurrentes, relativo a la infracción de doctrina legal, se configura cuando se hubiera inobservado la jurisprudencia establecida por el tribunal de casación, surgida de la aplicación e interpretación de las leyes y que esté contenida en tres o más sentencias constantes, uniforme y no interrumpidas, esta Sala concluye, que con el desconocimiento de parte de la Cámara de la Primera Sección de Oriente con sede en la ciudad y departamento de San Miguel, de la jurisprudencia establecida en este tribunal de casación, respecto del alcance de los efectos jurídicos establecidos en el art. 35 LRTODARPRH, y dictados en más de tres sentencias contestes, uniformes no interrumpidas con diferente criterio, incurre en el vicio invocado por las recurrentes, por lo que procede casar la sentencia de mérito, siendo dicha interpretación normativa, la misma que fue adoptada en los precedentes que han sido relacionados."

DEFINICIÓN DE DOCTRINA LEGAL

"IX. Definición de doctrina legal

1. Siendo consecuentes con la solución normativa que se adoptará, y la doctrina legal definida en el art. 522 inc. 3° CPCM, esta Sala considera que se ha definido tal, lo relativo a la interpretación del art, 35 LRTODARPRH.

2. Esto tiene como fundamento garantizarlo igualdad en la aplicación de ley frente a casos similares, lo cual no puede ser obviado por los tribunales de instancia. Siendo que hay infracción a la doctrina legal cuando se ha omitido de parte de los tribunales de instancia la aplicación de la jurisprudencia establecida por el tribunal casacional, contenida en más de tres sentencias constantes, uniformes y no interrumpidas.

En ese sentido, la doctrina legal está definida en el art. 522 inc. 3° CPCM como: *"la jurisprudencia establecida por el tribunal de casación, surgida de la aplicación e interpretación de las leyes y que esté contenida en tres o más sentencias constantes, uniformes y no interrumpidas por otra doctrina legal".*

3. Para ello, se procederá a enunciar en su orden los precedentes invocados en los que esta Sala ha establecido su pronunciamiento respecto a la interpretación del art. 35 LRTODARPRH, y la forma en que se debe probar el derecho de propiedad o dominio.

3.1 El primer precedente está clasificado bajo referencia 270-CAC-2013, cuya sentencia fue proveída a las diez horas del veinticuatro de julio de dos mil quince, en lo relativo a la presentación de certificaciones regístrales en el proceso de acción reivindicatoria de dominio, para comprobar la propiedad del bien reclamado, en la cual esta Sala, sostuvo:*"[...] de conformidad al art. 331 C.P.C.M., la certificación de la inscripción registral es un instrumento público, el cual has sido expedido por un funcionario público en el ejercicio de su función, el cual se considera auténtico mientras no se pruebe su falsedad, art. 334 C.P.C.M., y como tal hace plena prueba. Sin embargo, para su efectividad dicho documento debe cumplir determinados presupuestos señalados en el art. 35 inc. 4° de la Ley Relativa o las Tarifas y Otras Disposiciones Administrativas del Registro de la Propiedad Raíz e Hipotecas; en dicha norma se establece claramente las condiciones en las que las certificaciones regístrales tendrán el mismo valor probatorio que el título de dominio originalmente inscrito, de manera que para poder hacer uso de este medio de prueba, es preciso que el actor establezca procesalmente que le impide presentar el original (…)"* (sic).

3.2 Además, se tiene el precedente pronunciado por este tribunal, a las diez horas cincuenta y ocho minutos del día veintiocho de octubre de dos mil dieciséis, bajo la referencia 86-CAC-2016, en lo relativo al mismo punto, es decir, a la presentación de certificación registral en proceso de acción de dominio, para acreditar la titularidad del inmueble a reivindicar, en el cual sostuvo lo siguiente: *"[…] con respecto al valor legal que le asigna a una certificación, es pertinente cuando se refiera a certificaciones sobre las inscripciones de los negocios jurídicos que afecten bienes inmuebles, siempre que éstas no puedan obtenerse de su original; y en cuyo caso dicha norma, prevé la posibilidad de percibir su fuente de los microfilmes, que al efecto lleve el Registro de la Propiedad […] es preciso entender que nuestra legislación civil ha definido en el art. 681 C.C., el significado de una inscripción registral, expresando en su tenor que: "la inscripción es el asiento que se hace en los libros del Registro de los títulos sujetos a este requisito, con* el objeto de que consten públicamente los actos y contratos consignados en dichos títulos, para los efectos que este título determina"[…] la parte recurrente y también demandante, presentó una certificación de la inscrip-

ción de un inmueble a favor de la señora MND., expedida por el Registrador encargado, pero con ella según la disposición antes analizada, únicamente prueba la existencia del asiento de inscripción de un inmueble -art. 8 del mismo cuerpo legal- y los efectos de oposición contra terceros, -art.683 C.C.-; pero tal certificación, no prueba en sí misma el título de propiedad, ya que la transferencia del dominio de un inmueble, especialmente tratándose de un título contractual como el invocado por la parte actora, a fin de amparar su derecho, se reputa perfecto ante la ley hasta que se otorgue en escritura pública. Art. 1605 inc.2° C.C. De ahí que, esta Sala considera que la prueba útil e idónea para demostrar el requisito establecido en el art.891 C.C., relativo a la propiedad de un inmueble, es el instrumento que le sirve como título traslaticio de dominio [...] esta Sala considera que la excepción a la obligación de probar con el instrumento antes mencionado, para efectos de acreditarlo propiedad de un inmueble a favor de una determinada persona, puede obtenerse subsidiariamente de lo previsto en el art. 35 inciso 4 de la Ley de Tarifas y Otras Disposiciones Administrativas del Registro de la Propiedad Raíz e Hipoteca, cuerpo normativo que cabe aclarar, no ha sido derogado por las disposiciones de la Ley de Reestructuración del Registro de la Propiedad Raíz e Hipotecas, pues en ella no se dispone algo distinto con relación a las certificaciones expedidas por el mencionado Registro, sino más bien las complementa […]”(sic).

3.3 Para finalizar, tenemos el precedente clasificado bajo referencia 363-CAC-2014, en el que esta Sala, a las once horas doce minutos del nueve de diciembre de dos mil dieciséis; con respecto al mismo punto señalado en párrafos anteriores también sostuvo: “[...] La disposición señalada como infringida, art. 35 inc. 3.° y 4.° LTODARPRH, se relaciona con los hechos litigiosos, ya que se cuestiono el requisito relativo al dominio de la cosa, el cual regula que: “Á falta del título de propiedad original inscrito, tendrá el mismo valor y fuerza la nuevo certificación del acta de remate o adjudicación o el nuevo testimonio que, para reponerlos, expidieren el Juez de 1ª instancia, Alcalde Municipal, Gobernador, C. o P. de la Corte Suprema de Justicia, en su caso, siempre que tuviere al pie, extendida por lo oficina del registro la razón de la inscripción, por certificación. Pero si no se pudiere hacer la reposición del título en los casos y por las autoridades y cartularios antes expresados, la certificación literal que, a solicitud de parte, expida el registrador de la respectiva acta de inscripción, tendrá el mismo valor y producirá los mismos efectos que el título primitivo inscrito”. Del precepto bajo estudio, se aprecia que el estatus probatorio de las certificaciones literales, únicamente se adquiere baja la condición de justificar la imposibilidad de reponer el título original, lo cual impone una carga de prueba a la parte que pretenda probar su derecho con los referidos instrumentos regístrales. En esa línea, será necesario que se acredite en el proceso, que se solicitó su reposición a la autoridad competente, para el caso, resultaba pertinente dirigirlo petición al delegado por el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, en la. Sección de N., quien estaría sujeto a responder la misma, mediante un informe, en el que se relacionen las circunstancias lácticas y jurídicas que impiden extender el nuevo testimonio. Dicho escrito, debe acompañarse con la demanda, junto con el informe e comento, a efectos de probar la debida diligencia y gestión del propietario para obtener la reposición de su título [...] “ (sic).

4. Bajo la premisa antes descrita, esta Sala considera:

Que los precedentes identificados bajo referencias: 270-CAC-2013, 86-CAC-2016 y 363-CAC-201 4, y la presente sentencia, son constantes, es decir, no hay otras decisiones que varíen el contenido regulado en las mismas.

Además, se advierte la uniformidad en el criterio adoptado para resolver el problema jurídico presentado en el recurso, habiendo identidad en las normas jurídicas que se aplican e interpretan, siendo estas los arts. 35 LRTODARPRH y el art. 16 LRRPRH.

Por otro lado, no existe otra jurisprudencia, primigenia, que se vea interrumpida por ésta, y que estuviere vinculada a los hechos y precepto antes transcrito.

En consecuencia, la jurisprudencia antes citada, constituye una doctrina legal, en la que se establece que para acreditar el derecho de dominio, es pertinente presentar el título original debidamente inscrito en el Registro de la Propiedad respectivo; y ante la imposibilidad de obtener el mismo, será necesario acreditar dentro del proceso, que se solicitó su reposición a la autoridad correspondiente, todo de conformidad al art. 35 inc. 3.° y LTODARPRH, el cual regula que: *"A falta del título de propiedad original inscrito, tendrá el mismo valor y fuerza la nueva certificación del acta de remate o adjudicación o el nuevo testimonio que, para reponerlos, expidieren el Juez de 1° instancia, Alcalde Municipal, Gobernador, C. o P. de la Corte Suprema de Justicia, en su caso, siempre que tuviere al pie, extendida por la oficina del registro la razón de la inscripción, por certificación. Pero si no se pudiere hacer la reposición del título en los casos y por las autoridades y cartularios antes expresados, la certificación literal que, a solicitud de parte, expida el registrador de la respectiva acta de inscripción, tendrá el mismo valor y producirá los mismos efectos que el título primitivo inscrito".*

Finalmente, esta Sala le advierte a la Cámara de mérito, que en sucesivos casos, observe el contenido de la jurisprudencia emanada por esta Sala, y que ha sido relacionada en esta sentencia, la que constituye doctrina legal, ya que surge de la interpretación y aplicación del art. 35 LRTODARPRH, y como complemento de éste el art. 16 LRRPRH; jurisprudencia contenida en más de tres sentencias constantes, uniformes y no ininterrumpidas: cuyo efecto jurídico tiene fuerza normativa dentro del ordenamiento jurídico, la cual debe ser considerada por los juzgadores de instancia, al igual que las partes que identifiquen su caso a la hipótesis que ha sido descrita."

Sala de lo Civil, número de referencia: 270-CAC-2022, fecha de la resolución: 17/11/2022

EJECUCIÓN FORZOSA

IMPROCEDENCIA DEL RECURSO DE CASACIÓN CONTRA LAS RESOLUCIONES DICTADAS EN ESTA FASE

"2. Al respecto, esta Sala advierte en primer término, que en el proceso de ejecución forzosa únicamente se pretende la realización de actos procesales tendentes al cumplimiento de una sentencia, que, de acuerdo con lo establecido

en el ordenamiento jurídico, permitan al acreedor obtener efectivamente el derecho que le reconoce la sentencia ejecutoriada, a causa de que el deudor no la cumplió voluntariamente.

De tal manera que la ejecución forzosa no es parte constitutiva del proceso principal, mismo que finaliza con el pronunciamiento de la sentencia; siendo únicamente el complemento eventual de aquélla, encaminado al cumplimiento de la misma.

De ahí que, entre las decisiones recurribles en casación de acuerdo a lo regulado en el art. 519 ordinal 1° CPCM, no se contemplan las que se emiten durante la fase de ejecución, puesto que el objeto procesal se encuentra ejecutoriado; y por ende, en el caso analizado el recurso de mérito es legalmente improcedente, lo que así debe declararse.

Asimismo, es menester precisar que las razones de la improcedencia en el caso en análisis, se refieren a las resoluciones dictadas en fase de la ejecución forzosa, en cuyo fundamento se basa esta providencia, y no en la Ley de Mediación, Conciliación y Arbitraje, pues la resolución impugnada no es el laudo arbitral, sino que es un auto dictado dentro de la fase de ejecución de dicho laudo.

Finalmente, esta Sala estima necesario aclarar para casos como el presente, que tampoco procederá el recurso de casación con respecto a la impugnación de un laudo arbitral de derecho, ya que, contra la decisión emitida por la Cámara en esos casos, solo podrá interponerse recurso de apelación, art. 66 A de la Ley de Mediación, Conciliación y Arbitraje. Por su parte, el supuesto de un laudo arbitral de equidad, este puede ser objeto del recurso de nulidad según el art. 67 de la normativa citada, incluso puede impugnarse por esta vía el de derecho, pero en ambos casos, la misma ley niega que procedan otros recursos (arts. 66 A inc. 3° y 70 inc. 3° LMCA)."

Sala de lo Civil, número de referencia: 28-CAM-2022, fecha de la resolución: 09/02/2022

EXTEMPORANEIDAD DEL RECURSO DE CASACIÓN

TRAE COMO CONSECUENCIA LA DECLARATORIA DE INADMISIBILIDAD

"4. Respecto del cumplimiento de los requisitos formales, para la admisión del recurso de casación, debe tomarse en cuenta que los arts. 525, 526 y 528 CPCM, establecen que el mismo se interpondrá de forma escrita y debidamente fundamentado, dentro del plazo perentorio de quince días contados a partir del día siguiente de la notificación de la resolución que se impugna.

Además, que se interpondrá ante el tribunal que dictó la resolución impugnada, identificándose dicha resolución, y se mencionarán los motivos concretos en que se funde el recurso; así mismo se hará mención de las normas de derecho que se consideren infringidas, y se razonará en párrafos separados la fundamentación de los motivos alegados.

5. Dicho lo anterior, para efectos de analizar el cumplimiento de los requisitos de admisibilidad del recurso de casación mencionados en el párrafo anterior, es necesario, en primer término, verificar el cumplimiento del plazo de interposición del mismo.

En ese sentido, el art. 526 CPCM, establece el plazo perentorio de quince días hábiles contados a partir del día siguiente al de la notificación respectiva de la resolución que se impugna.

5.1 En relación con lo anterior, conviene traer a colación lo dispuesto en el art. 501 inc. 2° CPCM, que establece: *"Los plazos para recurrir se contarán a partir del día siguiente al de la notificación de la resolución que se impugna, o del siguiente a la notificación respectiva de su aclaración".*

Por consiguiente, debe entenderse que la regla general para el cómputo de los plazos para recurrir, variará cuando se presente solicitud de aclaración contra la sentencia o auto definitivo que ha causado agravio, por lo que el plazo iniciará, a partir del día siguiente de la notificación de dicho incidente.

5.2 Por otro lado, también como caso excepcional, conviene destacar lo dispuesto en el art. 506 CPCM, que establece: *"La resolución que resuelva sobre la revocatoria no admitirá ningún otro recurso, sin perjuicio de que se pueda reproducir la petición en el recurso contra la resolución que ponga fin al proceso de manera definitiva"*

De manera que, en dicho supuesto, se computará el plazo para recurrir, a partir de la notificación del auto que inadmita la revocatoria o que resuelva la infracción procesal que se atribuya sobre el análisis de admisión de la alzada.

La aclaración y la revocatoria son, por lo tanto, excepciones a la regla de cómputo di plazo, pero en el caso bajo estudio, el cómputo inicia a partir de la notificación de la sentencia que confirmó la resolución impugnada.

6. Bajo dicha línea argumentativa, consta en el acta de notificación (agregada a fol. […]), que la sentencia recurrida fue notificada al abogado [...], a las diez horas diecinueve minutos del día lunes uno de agosto de dos mil veintidós, a través del sistema de notificación electrónica.

Ahora bien, el art. 178 CPCM, establece que cuando el acto de comunicación se realice por medio técnico, se tendrá por realizada la notificación transcurridas veinticuatro horas después del envió; por lo que, el plazo para impugnar la sentencia dictada por la Cámara de lo Civil de la Primera Sección de Oriente, con sede en la ciudad y departamento de San Miguel, inició el día miércoles tres de agosto de dos mil veintidós y finalizó el día jueves veinticinco de agosto de este año.

Sin embargo, el recurso fue presentado a las once horas treinta minutos del veintiséis de agosto de este año; es decir, un día después de haber vencido el término para su interposición.

Y para el caso en particular, se advierte que el tribunal que pronunció la sentencia impugnada se encuentra en la jurisdicción de San Miguel, siendo que dentro del plazo antes mencionado, se encuentra la vacación del mes de agosto, se le aplica lo establecido en el art. 3 de la Ley de Asuetos y Vacaciones de los

Empleados Públicos, el cual establece: *"Los empleados de los departamentos, fuera de San Salvador, gozarán de vacación durante los días principales de las respectivas fiestas patronales, según lo indique el reglamento de la presente ley; pero la vacación de agosto se recortará para ellos, en el número de días de vacaciones, que se les conceda con motivo de aquellas fiestas".*

En relación con lo anterior, el Instructivo de Asuetos, Vacaciones y Licencias del Personal Jurisdiccional, aprobado por la presidencia de la Corte Suprema de Justicia y del Órgano Judicial, el día veintinueve de abril de dos mil quince, en las normas y políticas, letra "B", establece: *"VACACIONES: El personal del área jurisdiccional del. Órgano Judicial goza de vacación durante tres periodos en el año, de la manera siguiente: -Ocho días durante la Semana Santa; - Seis días del 1 al 6 de agosto; y, -Diez días del 24 de diciembre al 2 de enero, ambas fechas inclusive. El personal del Órgano Judicial que labora fuera del departamento de San Salvador, gozará de vacaciones durante los días principales de las respectivas fiestas patronales (últimos tres días de fiesta), no obstante, sean días de asueto, pero en la vacación de agosto gozará únicamente los días 4, 5, y 6".*

En consecuencia, la impugnación deviene inadmisible por extemporáneo"

Sala de lo Civil, número de referencia: 282-CAC-2022, fecha de la resolución: 05/10/2022

IMPROCEDENCIA DEL RECURSO DE CASACIÓN

CONTRA EL AUTO SIMPLE QUE DECLARA LA NULIDAD DE DIFERENTES ACTUACIONES PROCESALES Y ORDENA CONTINUAR CON LA SUSTANCIACIÓN DEL PROCESO

"3. Inconforme con la decisión adoptada por la Cámara de segunda instancia, la parte perjudicada interpuso recurso de casación, por lo que corresponde examinar la procedencia de esta impugnación, según lo previsto en el Código Procesal Civil y Mercantil (en adelante CPCM).

4. En ese sentido, el art. 519 CPCM, establece que admiten el recurso extraordinario de casación, en materia civil y mercantil, las sentencias y los autos pronunciados en apelación en procesos comunes o en los ejecutivos mercantiles basados en títulos valores, incluso los abreviados que produzcan efectos de cosa juzgada material.

De la misma forma, debe tenerse en cuenta lo dispuesto en el art. 212 inc. 2° CPCM: "Los autos son simples o definitivos. Simples, sise dictaren, entre otros propósitos, para resolver incidentes, acordar medidas cautelares, definir cuestiones accesorias o resolver nulidades; definitivos, si le ponen fin al proceso haciendo imposible su continuación en la instancia o por vía de recurso, o si así lo determina este código".

5. En el caso bajo estudio, se impugna un auto simple dictado por la referida Cámara, mediante el cual se declaró la nulidad absoluta de todo lo actuado, a partir del auto que dejó sin efecto el reconocimiento judicial, y lo que fuere su

consecuencia, inclusive la sentencia dictada el cuatro de noviembre de dos mil veintiuno, en donde se estimó la pretensión de acción reivindicatoria de dominio; asimismo, se ordenó al juzgador de primera instancia, reponer todas las actuaciones declaradas nulas.

En virtud de lo antes relacionado, al tratarse de un auto simple que no resuelve el fondo del litigio, ya que declara la nulidad de diferentes actuaciones procesales y ordena continuar con la sustanciación del proceso, de conformidad con las disposiciones antes citadas, el recurso de mérito resulta manifiestamente improcedente por falta de impugnabilidad objetiva, en virtud de que el auto simple recurrido no le pone fin al proceso y tampoco resuelve el fondo del asunto."

Sala de lo Civil, número de referencia: 129-CAC-2022, fecha de la resolución: 16/05/2022

CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE RESUELVE LA NULIDAD ALEGADA, POR TRATARSE DE UN AUTO SIMPLE

"V. En cuanto al recurso de casación interpuesto, esta Sala hace las siguientes consideraciones:

1. Al estudiar la resolución proveída por la Cámara seccional, la cual ha sido impugnada a través del presente recurso de casación, este tribunal advierte que dicha resolución fue pronunciada exclusivamente sobre un punto de apelación, en donde el agravio se fundamentó en la nulidad insubsanable producida por la vulneración del principio de inmediación previsto en el art. 10 CPCM.

Como respuesta a ese único agravio, la Cámara concluyó que no hubo vulneración del principio de inmediación, y por ende, declaró no ha lugar a la nulidad alegada, y confirmó la sentencia apelada.

De esa resolución que resolvió la nulidad alegada, se ha recurrido en casación, y se ha invocado un único motivo de fondo relativo a la interpretación errónea del art. 10 CPCM, con el mismo argumento del agravio de apelación, es decir, alegando la nulidad insubsanable, respecto a la violación del principio de inmediación, contenido en el art. 10 CPCM.

2. En virtud de lo anterior, esta Sala advierte lo siguiente:

El art. 519 CPCM, establece que admiten el recurso extraordinario de casación, en materia civil y mercantil, las sentencias y los autos pronunciados en apelación en procesos comunes o en los ejecutivos mercantiles basados en títulos valores, incluso los abreviados que produzcan efectos de cosa juzgada material.

En ese mismo sentido, debe tenerse en cuenta lo dispuesto en el art. 212 inc. 2° CPCM: "Los autos son simples o definitivos. Simples, si se dictaren, entre otros propósitos, para resolver incidentes, acordar medidas cautelares, definir cuestiones accesorias o resolver nulidades; definitivos, si le ponen fin al proceso, haciendo imposible su continuación en la instancia o por vía de recurso, o si así lo determina este código".

En el recurso bajo estudio, se impugna una providencia que resolvió una nulidad, la cual de conformidad a lo anterior, es un auto simple dictado por la referida Cámara.

En ese sentido, al tratarse de un auto simple que declaró no ha lugar la nulidad alegada, y consecuentemente, se confirmó la sentencia de primera instancia, de conformidad con las disposiciones antes citadas, el recurso de mérito resulta improcedente por falta de impugnabilidad objetiva.

3. En relación con la conclusión antes dicha, esta Sala advierte que aun estando en fase de dictar sentencia, es pertinente rechazar el recurso declarando la improcedencia del mismo, por falta de impugnabilidad objetiva o falta de recurribilidad de la resolución, ya que por ser un auto simple, en el que solamente se resolvió una nulidad, le exime de cualquier posibilidad de que sea examina la infracción denunciada en el recurso interpuesto. Lo anterior, en virtud de lo dispuesto en el art. 519 y 212 CPCM, citados anteriormente.

Finalmente, esta Sala agrega que la decisión que se adopta tiene fundamento en el principio de dirección y ordenación del proceso, contenido en el art. 14 inc. 1° CPCM, así como en el principio de legalidad sustentado en el art. 3 inc. 2° del mismo cuerpo legal, de donde se deriva el uso de esta potestad resolutiva, la cual debe ser debidamente motivada.

En razón de lo anterior, este tribunal como director del recurso de casación, puede en cualquier momento antes de la sentencia, advertir una deficiencia que impide fallar sobre el fondo del asunto y declarar lo que a derecho corresponda, cuando resulte notoria la imposibilidad de conocer sobre el fondo del caso planteado.

En consecuencia, se revocará el auto mediante el cual se admitió el recurso de mérito, declarando la improcedencia del mismo, debido a que tal como se ha dicho antes, el haber resuelto una nulidad, le convierte en auto simple. De tal manera que el asunto que pretende el recurrente que sea revisado en casación, no puede ser objeto de dicho recurso, por ser improcedente la resolución impugnada; en ese sentido, el motivo recurrido en casación y admitido por este tribunal, lo fue indebidamente, por lo que es imposible continuar conociendo del fondo del recurso interpuesto."

Sala de lo Civil, número de referencia: 264-CAC-2021, fecha de la resolución: 09/03/2022

EL DOCUMENTO QUE SIRVIÓ DE BASE AL PROCESO ES UN TESTIMONIO DE ESCRITURA PÚBLICA DE MUTUO HIPOTECARIO, POR LO QUE NO SIENDO UN TÍTULO VALOR EL QUE HA DADO ORIGEN AL JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL, LA RESOLUCIÓN DE QUE SE HA RECURRIDO NO ES OBJETABLE MEDIANTE EL RECURSO DE CASACIÓN

"2. El licenciado [...], ha interpuesto recurso de casación, alegando genéricamente que ha habido infracción en la aplicación en la norma del derecho, ya que se dejó de aplicar la norma que regula el supuesto que se controvierte, es decir la suspensión de plazos y congelamiento de intereses, lo que ocasiona al final un exceso de lo que se está pidiendo, ya que no se suspenden los intereses

comprendidos dentro del plazo del decreto ya relacionado; que la resolución que viene a recurrir es la sentencia dictada a las nueve horas del día uno de octubre del dos mil veintiuno.

Argumenta el recurrente, que las normas de derecho que se considera infringidas es el decreto legislativo que contiene la ley transitoria para diferir el pago de obligaciones civiles, contenida en el decreto legislativo 593 de fecha catorce de marzo del dos mil veinte, publicado en el Diario Oficial, número cincuenta y dos, Tomo cuatrocientos veintiséis, de fecha veinte de marzo del dos mil veinte; artículo nueve del citado decreto.

3. ANÁLISIS DE PROCEDENCIA DEL RECURSO

PRESUPUESTO SUBJETIVO: de acuerdo a los artículos 66, 67 y siguientes del Código Procesal Civil y Mercantil, el abogado [...], como apoderado de la señora SFAG, quien es la demandada en el presente juicio y quien ha recibido agravio por la sentencia de la segunda instancia.

PRESUPUESTO OBJETIVO DE IMPUGNACIÓN: de acuerdo al código Procesal Civil y Mercantil, corresponde a esta Sala conocer del recurso de casación en materia civil y mercantil, art. 519 de dicho cuerpo legal, el cual concede el recurso de casación a las sentencias y autos pronunciados en apelación, en los procesos comunes y en ejecutivos mercantiles, cuyo documento base de la pretensión sea un título valor.

En el caso que nos ocupa, es preciso destacar que el documento que sirvió de base al proceso es un *testimonio* de escritura pública de mutuo hipotecario, por lo que no siendo un título valor el que ha dado origen al juicio ejecutivo mercantil, la resolución de que se ha recurrido no es objetable mediante el recurso extraordinario mencionado.

Por los motivos expuestos, esta Sala concluye que el presente recurso debe rechazarse por ser legalmente improcedente."

Sala de lo Civil, número de referencia: 240-CAM-2021, fecha de la resolución: 12/01/2022

INCONGRUENCIA DE LA SENTENCIA

AUSENCIA DE LA INFRACCIÓN ALEGADA

"b) Por otro lado, en el recurso de apelación se observa que se alega la violación al principio de congruencia, señalándose la infracción del art. 218 CPCM. Sin embargo, lo alegado no se refiere a un vicio de congruencia, es decir, no se expresó si el problema radica en no haber resuelto alguna pretensión de las partes, o bien haber resuelto algo distinto de lo pedido o haberse excedido sobre lo solicitado. Por lo tanto, se concluye que la Cámara, actúo legamente al no haber admitido la apelación por esta alegación, no siendo procedente casar el auto impugnado con relación a este aspecto."

Sala de lo Civil, número de referencia: 252-CAM-2022, fecha de la resolución: 27/09/2022

ESTA SALA CONSIDERA QUE HA HABIDO INCONGRUENCIA POR HABER OMITIDO RESOLVER DOS PUNTOS PLANTEADOS EN EL RECURSO DE APELACIÓN INTERPUESTO

"V. Análisis del recurso por el motivo de infracción de requisitos internos de la sentencia, por incongruencia, específicamente por dejar de resolver lo pedido, en el que señala el recurrente como preceptos infringidos los arts. 218 inc. 2° y 515 inc. 2° del CPCM.

1. Las disposiciones legales infringidas establecen lo siguiente:

El art. 218 inc. 2°, dispone lo siguiente: *"El juez deberá ceñirse a las peticiones formuladas por las partes, con estricta correlación entre lo que se pide y lo que se resuelve. No podrá otorgar más de lo pedido por el actor, menos de lo resistido por el demandado, ni cosa distinta a la solicitada por las partes".*

Este precepto contiene el principio de congruencia procesal, cuyo contenido limita la actividad del juez o tribunal a pronunciarse conforme a las peticiones que realicen las partes en las instancias prohibiéndose cualquier alteración de las mismas, cuya inobservancia provoque que se dé más, menos u otra cosa distinta a lo pretendido.

El art. 515 inc. 2°, establece: *"La sentencia que se dicte en apelación deberá pronunciarse exclusivamente sobre los puntos y cuestiones planteados en el recurso y, en su caso, en los escritos de adhesión".*

Dicho precepto recoge la congruencia que debe tener la sentencia con relación a los puntos y cuestiones planteados en el recurso. El tribunal de alzada no debe dejar de pronunciarse respecto de los extremos que hayan sido impugnados, ni resolver asuntos no sometidos a su conocimiento, incluso no puede alterar el contenido de lo alegado en alguna de las finalidades invocadas en la alzada.

1.2 Teniendo en cuenta lo anterior, el recurrente en lo medular argumenta la falta de congruencia entre lo pedido en el escrito de apelación, y lo resuelto, debido a que considera que la Cámara no manifestó nada sobre el motivo segundo y cuarto del recurso de apelación, sino que, únicamente se refirió a "groso modo", al motivo primero y tercero.

Respecto a esta infracción, esta Sala advierte que al examinar el recurso de apelación (agregado de folios […]), se constata que el escrito contiene cuatro motivos de agravio:

a) El primero concerniente a la revisión de la aplicación de normas que rigen garantías y actos del proceso, alegando una falta de motivación de la primera instancia en relación con la fijación de los hechos, con infracción a los arts. 216 y 217 CPCM;

b) La segunda finalidad, es la relativa a la revisión de los hechos probados, así como la valoración de la prueba, señalando infracción a los arts. 416 y 341 CPCM. El recurrente sostiene una falta de valoración conjunta de la prueba, a efecto de establecer la naturaleza de la obligación reclamada;

c) El tercer motivo de agravio, está relacionado con la revisión del derecho aplicado para resolver las cuestiones objeto del debate. Señalando la inaplicación de los arts. 1, 6 literal a), 12 literal a), 64 y 77 de la Ley General de Asociaciones Cooperativas (LGAC). Así como la aplicación indebida de los arts. 1142 y 995 romano IV ambos del Código de Comercio. Argumenta en este apartado que su representada es una asociación de derecho privado y que, por lo tanto, no le es aplicable el Código de Comercio; y,

d) En el cuarto motivo, invoca el impetrante como finalidad la revisión de "la prueba que no hubiera sido admitida", en relación con dos certificaciones que se refieren a la personería jurídica, y los estatutos de constitución de la institución demandada, con la cual pretendía probar que su representada no es comerciante.

1.3 Previo a verificar cuáles son las finalidades que han sido resueltas, esta Sala advierte que, en el auto de admisión del recurso de apelación de las once horas treinta y cinco minutos del veinticinco de octubre de dos mil veintiuno, la Cámara admitió el recurso por todas las finalidades relacionadas en el párrafo que antecede.

Al examinar la sentencia recurrida, esta Sala ha constatado que la Cámara se pronunció de manera expresa sobre el primer motivo. En lo tocante al cuarto motivo se observa que la Cámara realiza un análisis general respecto de la naturaleza de la obligación, para establecer que los actos ejercidos por la demandada ACACU de R.L, son de carácter mercantil.

Sin embargo, se advierte que no hay ninguna justificación argumentativa por parte de la Cámara, respecto de las finalidades concernientes a la valoración de la prueba, hechos probados y lo tocante a la prueba que no fue admitida, con el objetivo de hacerle saber a las partes, que, al analizar únicamente las dos finalidades señaladas, quedaba resuelto de manera completa el asunto planteado en segunda instancia.

En ese sentido, esta Sala considera que ha habido incongruencia por haber omitido resolver dos puntos planteados en el recurso de apelación interpuesto, y según se ha expuesto con anterioridad; y no puede entenderse que el análisis de uno de ellos comprende todos los demás, ya que cada una de las finalidades tienen un ámbito de revisión distinto en la segunda instancia. Además, las infracciones señaladas en la alzada, tienen argumentos distintos para revisar, señalándose la transgresión de disposiciones legales que regulan supuestos procesales y sustantivos, cuyo contenido requiere un análisis por separado y motivado para resolverlo.

Por consiguiente, esta Sala concluye que, efectivamente, se configura la infracción de los arts. 218 inc. 2° y 515 inc. 2° CPCM, ya que no fue resuelta una de las finalidades invocadas en la alzada.

En virtud de lo anterior, se impone casar la sentencia por este motivo, anulando el fallo de la misma, y devolviendo el proceso al tribunal correspondiente, a fin de que se reponga la actuación desde el acto viciado, y se proceda a pronunciar la sentencia que a derecho corresponde."

Sala de lo Civil, número de referencia: 33-CAM-2022, fecha de la resolución: 29/03/2022

INFRACCIÓN DE LOS REQUISITOS INTERNOS DE LA SENTENCIA

SE PRODUCE POR INCONGRUENCIA EN LA SENTENCIA, CUANDO LA CÁMARA OMITE PRONUNCIARSE SOBRE UN PUNTO OBJETO DE LA APELACIÓN

"En primer lugar, tal como lo establece el art. 535 CPCM, es procedente pronunciarse respecto del quebrantamiento de las formas esenciales del proceso.

El propósito del anterior precepto, tiene fundamento en la coherencia del efecto que provoca la estimación de los motivos por defectos procesales, dado que, si la forma esencial del proceso está viciada, no tiene sentido pronunciarse sobre los problemas de fondo que hayan sido invocados, pues debe anularse todo lo actuado, y reponerse los actos pertinentes de los que se comprendería la sentencia impugnada.

IV. SUBMOTIVO: infracción a los requisitos internos de la sentencia, por falta de motivación de la sentencia, fundamentado en el art. 216 CPCM, en relación a los arts. 514 inciso 1º, 515 inc. 2º CPCM y 11 Cn

a. En relación a estas infracciones, el recurrente expone un solo argumento por los artículos citados, los cuales están interrelacionados entre sí. Por esta razón, esta Sala las conocerá y resolverá en su conjunto.

En cuanto al vicio invocado, este Tribunal ha dicho, que la infracción por falta de requisitos internos de la sentencia -según el art. 523 inc. 2º CPCM- tiene, dos modalidades: "cuando la sentencia es incongruente" o "cuando la sentencia tiene disposiciones contradictorias".

Dentro de la primera, a su vez hay cuatro sub modalidades: (a) Haber otorgado el juez más de lo pedido por el actor, (b) menos de lo resistido por el demandado, (c) cosa distinta a la solicitada por ambas partes y, (d) haber omitido resolver alguna de las causas de pedir o alguna cuestión prejudicial o jurídica, necesaria para la resolución del proceso. En ese sentido, se tiene que demostrar la falta de correlación entre lo pedido y lo resuelto. (Ref. 267-CAC-2011, de las 09:05h del 29-IV-2016, 379-CAC-13 de las 09:07h del 27-V-2016).

En este tramo se advierte, que dichas modalidades están diseñadas con el propósito de controlar la congruencia del juez en la primera instancia y en la segunda. Por consiguiente, las disposiciones jurídicas pertinentes para estos asuntos tienen que ser de contenido procesal, pues se afectan las formas esenciales del proceso, y por ello es necesario regular el contenido de la congruencia en las resoluciones emitidas en las distintas instancias.

b. En ese hilo de pensamiento, las disposiciones legales señaladas como infringidas establecen lo siguiente:

El art. 216 CPCM dispone: "Salvo los decretos, todas las resoluciones serán debidamente motivadas y contendrán en apartados separados los razonamientos fácticos y jurídicos que conducen a la fijación de los hechos y, en su caso, a la apreciación y valoración de las pruebas, así como a la aplicación e interpretación del derecho, especialmente cuando el juez se aparte del criterio sostenido en supuesto semejante. La motivación será completa y debe tener en cuenta todos y cada uno de los elementos fácticos y jurídicos del proceso, considerados individualmente y en conjunto, con apego a las reglas de la sana crítica"."

PRINCIPIOS DE MOTIVACIÓN Y CONGRUENCIA

"Este precepto *contiene el principio de motivación*, dicho principio, impone el deber a los titulares responsables de la administración de justicia, en resolver justificada o motivadamente las peticiones formuladas por las partes en las distintas instancias; es decir, que las decisiones contenidas en las distintas resoluciones deben ser claras, expresas, completas y lógicas en relación a lo solicitado.

El art. 514 inciso 1º CPCM, señala: *"En la audiencia, el tribunal oirá a la parte apelada para que se oponga o para que se adhiera a la apelación. En seguida oirá al apelante, con relación a la oposición, el cual no podrá ampliar los motivos de su recurso".*

La disposición citada se relaciona estrechamente con el art. 4 CPCM, y consiste en la facultad o la oportunidad de que la parte contra la que se dirige la pretensión exponga sus argumentos y se oponga o adhiera a los de la parte contraria, es decir, el derecho de defensa.

Por su parte, el art. 11 Cn, prevé la garantía de audiencia, el cual se encuentra vinculado al derecho a la protección jurisdiccional regulado en el art. 1 CPCM, y por medio del cual se trata de evitar en el desarrollo de un proceso legalmente configurado, la indefensión de alguna de las partes, tanto del sujeto que ha planteado su pretensión, como del que se opone a esa pretensión adversa a sus intereses; por poseer derechos e intereses legítimos en atención al derecho debatido, evitándose así la condena de la parte contra quien se dirige la pretensión, sin ser oído.

Ahora bien, cuando el problema se suscita en el recurso de apelación, en la segunda instancia, la congruencia tiene sustento en el art. 515 inc. 2º CPCM, al disponer que: *"La sentencia que se dicte en apelación deberá pronunciarse exclusivamente sobre los puntos y cuestiones planteados en el recurso y, en su caso, en los escritos de adhesión".* Con dicho precepto, se recoge la exhaustividad que debe tener la sentencia sobre los puntos y cuestiones planteados en el recurso, el cual tiene relación con el problema jurídico bajo análisis.

Dichos preceptos antes señalados recogen, los principios de motivación y congruencia, que debe contener la sentencia sobre lo que fue oportunamente planteado en el recurso, no debiendo el tribunal de alzada dejar de pronunciarse respecto de algún extremo que haya sido impugnado; y los derechos de audiencia y defensa, respectivamente, por medio de los cuales dentro del proceso, necesariamente debe vincularse a la contraparte para que ejerza sus derechos, pues debe disponer de las mismas oportunidades para formular sus cargos y descargos.

Al respecto, es imperioso señalar que cuando en la segunda instancia no se resuelven todos los puntos impugnados -tal como ocurre en este caso-, el precepto legal pertinente de infracción no es el art. 216 CPCM, ya que tal como es sabido, la infracción a dicha norma es susceptible de acusar que se ha inobservado, cuando no se resuelve la pretensión contenida en la demanda, acorde a la petición realizada en la misma.

Tomando en cuenta la premisa referente a la congruencia, se estima necesario establecer que, de acuerdo a los precedentes dictados por esta Sala, los casos en que se ha invocado la incongruencia como infracción procesal, la norma específica que regula la actuación de la Cámara de segunda instancia, es el art. 515 inciso 2º CPCM, al sostenerse lo siguiente: *"[...] Ahora bien, respecto de las disposiciones legales que se han señalado como infringidas, el art. 515 inc. 2º CPCM, es el pertinente para revisar el problema jurídico planteado, ya que éste se refiere a que no se le ha dado respuesta a todos los motivos que comprendía la alzada, razón por la cual será admitido el recurso para analizar la infracción de dicho precepto legal. Ahora bien, no se admitirá el recurso por infracción a los arts. 218 y 523 inc. 2º CPCM, en virtud de que ya se ha señalado el precepto jurídico que con más precisión se vincula al problema jurídico suscitado en la segunda instancia […]" (auto ref. 20-CAC-2022, de fecha dieciséis de marzo de dos mil veintidós).*

En correspondencia a lo anterior, se advierte que, el impugnante denunció la norma general relativa a la falta de fundamentación prevista en el art. 216 CPCM, no obstante, en el desarrollo de la infracción se evidencia con claridad que su alegato refiere a la *falta de pronunciamiento de la Cámara* sobre los contrargumentos al recurso de apelación interpuesto por la parte demandada; según los cuales, debió analizarse el impedimento para el ejercicio de la acción de nulidad, a causa de lo regulado en el decreto ejecutivo número veintinueve; y cuya omisión conllevó a la Cámara a estimar la prescripción de la acción y, consecuentemente, elude asimismo pronunciarse respecto del recurso de apelación interpuesto por la parte demandante.

De ahí que, esta Sala, con base a los precedentes dictados concernientes a la infracción por incongruencia y el principio *iura novit curia*, estima que el análisis de la infracción se centrará en la supuesta omisión de la Cámara de resolver respecto a los puntos y cuestiones discutidos por las partes en la alzada, de acuerdo a lo previsto en el art. 515 inciso 2º y 514 inciso 1º ambos CPCM.

c. Es así que, el motivo invocado por el recurrente gira en torno a una infracción de los requisitos internos de la sentencia, que se refiere a la incongruencia por haber *omitido algo pedido.*

El recurrente textualmente manifiesta que: *"[...] Respecto a la infracción denunciada en casación, esta estriba en que la sentencia impugnada omitió resolver una de las causas de pedir relativa al análisis de la oposición al recurso interpuesto por [...] y formulada por [...], incumpliendo con ello el deber de motivación que establece el Art. 216 CPCM, ya que los fundamentos de la sentencia carecen de las razones por las que la Cámara consideró que no era procedente la oposición en los términos expresados en la misma, con miras a que la parte que la formuló, entienda el por qué su oposición no tendrá incidencia en el fallo, ya que al no pronunciarse respecto a dicha oposición, se vulnera el derecho de defensa de la parte apelada, de conformidad a lo previsto en el art. 514 inciso 1º, art. 515 inciso 2º CPCM y 11 Cn. [...]" (sic).*

Si bien, el recurrente usa la expresión que hay falta de fundamentación, tal como se ha referido anteriormente, en esencia el fundamento de la infracción se direcciona a que la Cámara no se pronunció en la sentencia sobre el punto alegado en la audiencia de apelación, relativo al motivo por el que la Cámara consideró que la existencia del decreto ejecutivo número veintinueve, (que tuvo efectos jurídicos hasta el trece de junio de dos mil veinte), no constituya una causa justificada que impedía la presentación de la demanda. Tal omisión, la llevó a razonar que el último día para presentar la demanda -antes de que prescribiera el derecho de acción de su mandante- era el *once de junio de dos mil veinte*.

Sigue manifestando que, la Cámara accedió a las peticiones de la parte apelante al dictar sentencia sin hacer una mínima motivación sobre la oposición, pues no se desvirtuó el alegato sobre la existencia del referido decreto ejecutivo número veintinueve.

Asimismo, enfatiza que la motivación como exigencia constitucional se vincula con el derecho a la protección jurisdiccional, actuando para favorecer el derecho de defensa en juicio.

d. Tocante a esta infracción, esta Sala considera:

Que al resolverse el medio impugnativo relativo a la apelación, los fundamentos de derecho habrán de contener una respuesta expresa y razonada a todas y cada una de las causas de pedir, pues de lo contrario devendría en una falta de pronunciamiento en la sentencia.

La infracción de requisitos internos de la sentencia, alude a un requisito procesal ya que la incongruencia -para el caso- radica en una infracción que da lugar, según el ordenamiento jurídico adjetivo aplicable, a la existencia de un motivo del recurso de casación. De ahí, que la incongruencia negativa denunciada tiene lugar, cuando hay omisión en el fallo sobre algo de lo pretendido, por el hecho de que el fallo no contenga declaración sobre alguna de las pretensiones o puntos apelados oportunamente deducidos en el proceso.

Es decir que, en el caso de que se trata, la modalidad de incongruencia invocada por el impetrante, radica en la *falta de pronunciamiento* sobre un punto que constituía objeto del medio recursivo de apelación y que no fue resuelto por la Cámara, razón por la que, para el recurrente, los motivos que sustentan la sentencia impugnada, se desconocen."

LA OMISIÓN DE UNA CAUSA DE PEDIR SE VINCULA AL DEBIDO PROCESO Y AL DERECHO DE DEFENSA, Y LA VULNERACIÓN DE ESTE DERECHO HACE QUE SE INCURRA EN EL VICIO DE FORMA INVOCADO

"Con base en lo anterior, en el caso que nos ocupa, se procedió a verificar si la Cámara, se había pronunciado respecto de lo pedido por ambas partes, advirtiendo esta Sala, que en dicha sentencia, la Cámara omitió pronunciarse sobre la existencia del *decreto ejecutivo número veintinueve*, alegado oportunamente por el recurrente, el cual hace recaer la incongruencia en la sentencia impugnada por ser omisa en el hecho de que el tribunal sentenciador, aunque en el punto 4.1.1 de dicha providencia, menciona el referido decreto relacionando únicamen-

te los alegatos de la apelación planteada por los apoderados de la parte demandada, y en el romano III denominado fundamentos de derecho, se advierte que desde los numerales 1 al 11 de tal apartado, no se analizó ni pronunció sobre el referido decreto ejecutivo y lo que resolvió la Sala de lo Constitucional, respecto del mismo, razón por la que se concluye que habiendo sido un punto de discusión en torno al recurso de apelación, se incurre en la incongruencia denunciada.

Por lo que, ante la falta de explicación del razonamiento judicial sobre el referido decreto, no es posible entender cabalmente la decisión adoptada, lo que la hace inválida.

Es así que, conforme al examen de los argumentos vertidos en la sentencia impugnada, esta Sala estima que la ausencia de pronunciamiento y su consecuente análisis respecto del decreto ejecutivo número veintinueve, el cual fue introducido por la parte actora en la audiencia en torno al punto de apelación interpuesto por la parte apelante demandada, es una omisión de la sentencia que configura el motivo de forma invocado, pues los razonamientos al respecto, se omiten por parte de la Cámara sentenciadora sobre el análisis del decreto ejecutivo número veintinueve.

En ese sentido, siendo notoria la omisión denunciada, respecto a la falta de pronunciamiento en la sentencia cuestionada, pues en la parte argumentativa de la misma, no consta algún enunciado relativo al punto de agravio, en los términos apelados por la parte actora-apelante, se produjo entonces el vicio denunciado.

En ese contexto, siendo que la omisión de una causa de pedir se vincula al debido proceso y al derecho de defensa, y que la vulneración de este derecho, hace que se incurra en el vicio de forma invocado, por consiguiente, el motivo de quebrantamiento de las formas esenciales del proceso, por infracción a los requisitos internos de la sentencia, en virtud de la incongruencia de la misma al no haberse pronunciado sobre un punto objeto de apelación, se infringe el art. 515 inc. 2º CPCM, de modo que hay lugar a casar la sentencia impugnada por dicho motivo.

Con base a lo anterior, esta Sala procederá a casar por motivo de forma, la sentencia de mérito, anulando el fallo de la misma y devolviendo el proceso al tribunal correspondiente, a fin de que se reponga la actuación desde el acto viciado, y se proceda a pronunciar la sentencia que a derecho corresponde, de manera congruente y motivada según las consideraciones arriba expuestas.

Lo anterior de conformidad con lo estipulado en el art. 537 inc. 2º CPCM, el cual determina que: *"Si se casare por vicio de forma, se anulará el fallo y se devolverá el proceso al tribunal correspondiente, a fin de que se reponga la actuación desde el acto viciado".*

Finalmente, se advierte que, en vista que la sentencia impugnada será casada por el motivo de forma relativo a la infracción de requisitos internos de la sentencia; esta Sala, de conformidad al art. 535 CPCM, no se pronunciará sobre los motivos de fondo admitidos."

Sala de lo Civil, número de referencia: 318-CAM-2022, fecha de la resolución: 21/12/2022

INFRACCIÓN DE REQUISITOS EXTERNOS DE LA SENTENCIA

CONFIGURACIÓN

"V. Análisis del motivo de forma relativo a la infracción de requisitos externos de la sentencia, por omitir relacionar hechos probados, con infracción al art. 217 inc. 3° CPCM

1. La disposición señalada como infringida en su inciso tercero, establece en esencia algunos de los requisitos de contenido y forma, que debe cumplir la sentencia, a efecto de considerar que la misma contiene los razonamientos fácticos y probatorios necesarios, con los cuales se llega a concluir que un hecho está probado no, en los términos siguientes:

"[...] Los antecedentes de hecho, estructurados en párrafos numerados, expresarán en forma clara y resumida las alegaciones de cada parte, con especial atención a los hechos alegados y a los que no hubieran sido controvertidos; y se referirán también a las pruebas propuestas y practicadas, así como a la declaración expresa de los hechos que se consideran probados y de los que se consideran no probados".

Puede notarse que la norma citada como infringida tal como se mencionó, organiza una parte de la sentencia, a efecto de que los justiciables conozcan de manera estructurada la decisión que les concierne.

En ese sentido, dicho apartado engloba lo relativo a la fundamentación fáctica y probatoria de la sentencia, y la necesidad de que la misma contenga los elementos sobre alegaciones de las partes, hechos controvertidos y pruebas, estriba en los mecanismos de defensa que ulteriormente las partes pueden utilizar, a efecto de recurrir contra un razonamiento probatorio que les resulte perjudicial, ello por concurrir algún error de apreciación de la prueba incorporada en el proceso.

2. En el caso de autos, los recurrentes en relación con dicho contenido normativo, expresamente, manifestaron lo siguiente: "[...] En tal sentido, Cámara ha sido omisivo del porqué desecha el hecho probado, existiendo medios probatorios legalmente introducidos en el proceso, que le brindaron los elementos para fallar en la condena en primera instancia [...] Específicamente, encontramos principalmente la declaración de propia parte y el acta notarial que describen los hechos que fueron declarados como probados; y en apoyo a esos medios probatorios, el peritaje psicológico y las declaraciones realizadas por nuestra contraparte, que describen todas en su conjunto, los hechos que el juez de primera instancia declaró como probado, pero omitido por los Magistrados de Cámara en su sentencia [...]" (sic).

Respecto al acta notarial sostuvieron que: "[...] En esta acta notarial, hace alusión quién y qué se expresó al momento del hecho dañoso, siendo un medio de prueba que hace referencia a la relación de causalidad entre el daño y el actuar ilícito que se alega [...]" (sic).

En cuanto a la regulación interna de la aerolínea adujeron que: "[...] Específicamente la denominada "Política de cambio de nombres". Este instrumento privado fue agregado como prueba instrumental privada, reconocida y no impugnada en audiencia preparatoria por nuestra contraparte, y por ende plena prueba de su contenido y vinculante a la parte demandada [...] El contenido de este instrumento hace inclusive alusión a que los nombres de los consumidores o usuarios se corregirán indiferentemente de quién emita o sea responsable del boleto. Ya sea pagando o no un recargo. Dicha norma o política interna de la parte demandada, se demostró que es vinculante y que su personal negligentemente incumplió [...]" (sic).

3. Con relación a esta infracción, esta Sala considera lo siguiente:

3.1 El vicio de forma por infracción de requisitos externos de la sentencia, se configura cuando el juzgador omite establecer los razonamientos fácticos y jurídicos para determinar los hechos probados y no probados. Tal falencia incide y afecta directamente el derecho de las partes a obtener una resolución motivada, como manifestación del derecho de defensa, que se deriva del debido proceso contenido en el art. 11 Cn.

En ese sentido, como garantía procesal constitucional se ha prescrito que toda resolución tiene que estar motivada, esencialmente, la sentencia, que es sobre la que exclusivamente recae el motivo en análisis.

3.2 En jurisprudencia constitucional se pronunció la sentencia de fecha 30 de abril de dos mil diez, en el proceso de amparo 308-2008, en la que se expuso lo siguiente: "[...] la obligación de las autoridades -judiciales y administrativas- de motivar sus decisiones no se asocia con el cumplimiento de un mero formalismo procesal o procedimental. Por el contrario, tal exigencia se deriva del derecho a la protección jurisdiccional, contemplado en el art. 2 de la Cn. En ese sentido, se ha afirmado que los sujetos que intervienen en un proceso o procedimiento tienen el derecho de conocer los razonamientos técnicos y fácticos que han llevado a las autoridades a decidir sobre la situación jurídica concreta que les concierne, puesto que solo de esa manera pueden comprender los alcances de los efectos de las decisiones y, a su vez, tener la posibilidad de controlar la actividad de la autoridad a través de los medios establecidos por la ley. De ahí que el derecho en cuestión permita el ejercicio de otros derechos y garantías procesales de vital importancia, tales como el derecho de defensa y a recurrir. Por tanto, del contenido del derecho a la motivación de las decisiones, se infiere que la autoridades competentes tienen el deber de exteriorizar en sus proveídos, de manera suficiente, congruente y clara, los fundamentos jurídicos y fácticos que cimientan sus resoluciones; por lo que aquellas no pueden pretender satisfacer este derecho emitiendo una simple declaración de voluntad, accediendo o no a lo pretendido por las partes en el proceso, sin explicar la manera en la que se ha interpretado y aplicado la normativa secundaria al caso y el mérito que se ha dado a los medios probatorios incorporados al proceso, lo que permite conocer y comprender cómo la autoridad llegó al convencimiento de resolver en determinado sentido [...]" (sic).

3.3 Bajo dicho contexto, esta Sala ha establecido lo que debe contener una sentencia para verificar el cumplimiento del mandato constitucional antes mencionado, así: "[...] La Sala estima que una sentencia debidamente motivada prin-

cipia con una (a) fundamentación táctica, que consiste en la descripción de los hechos aportados por las partes y que se hayan controvertido, con ello se define cuál es el caso que se debe resolver; luego (b) será necesaria una fundamentación probatoria, que tiene una doble vertiente, de carácter descriptivo y otro de índole intelectivo, así con el primero debe describirse el contenido de aquellas probanzas que sean pertinentes para tener por acreditados los hechos; y el segundo, exige una carga argumentativa sobre la apreciación y valoración de la prueba bajo los principios que determinan los poderes del juez para tales efectos, ya sea por las reglas de la sana crítica o prueba tasada; finalmente, (c) la fundamentación jurídica, será aquélla parte en la que se apliquen las normas de derecho que resuelven el caso, imponiéndose la tarea de justificar su aplicación e interpretación según sea el caso.

Naturalmente, el fallo o parte dispositiva debe ser claro y congruente con las peticiones formuladas por los litigantes [...]" (sic). (Sentencia dictada por esta Sala en el incidente de casación clasificado bajo referencia, 295-CAC-2013, a las nueve horas y cinco minutos del dieciocho de febrero de dos mil quince).

3.4 En este caso se hace énfasis en la segunda vertiente de la motivación, relativo a la fundamentación probatoria, mediante la cual debe justificarse la acreditación de un hecho. Es decir, no es suficiente la conclusión de tenerlo probado o no, sino que la actividad o proceso intelectivo tiene que plasmarse mediante una argumentación o razonamiento probatorio, a efecto de que las partes obtengan una respuesta razonada, y con ello, se les posibilite impugnar ulteriormente el fondo de ese razonamiento por cualquier error que les perjudique su derecho material o interés.

Por ello, dicha parte de la fundamentación jurídica debe estar enfocada en mostrar esa actividad descriptiva e intelectiva, como resultado de la apreciación de todos los elementos probatorios incorporados al proceso.

3.5 Ahora bien, los recurrentes alegaron como concepto de la infracción, que la Cámara omitió expresar las razones que la condujeron a desestimar la pretensión, al no pronunciarse en conjunto sobre (i) el valor probatorio de la declaración de propia parte señora MLPP, (ii) el acta notarial de fecha siete de abril de dos mil diecisiete, otorgada por la demandante señora MLPP, ante los oficios del notario […]; y, (iii) las políticas de cambio de nombres, de los cuales sostienen se ha demostrado el daño denunciado como hecho probado, pero obviado por la segunda instancia.

3.6 Al examinar la sentencia impugnada, en el aparatado 4.5.4, la Cámara consideró lo siguiente: [...]"

> LA INFRACCIÓN DENUNCIADA, POR HABER OMITIDO RELACIONAR HECHOS PROBADOS, HA SIDO COMETIDA POR LA CÁMARA SENTENCIADORA, POR LO QUE DEBERÁ DECLARARSE HABER LUGAR A CASAR LA SENTENCIA QUE SE HA HECHO MÉRITO

"3.7 De lo expuesto, se denota que la Cámara realizó un análisis probatorio respecto de la declaración de propia parte, al pronunciarse sobre la mismo y describir su contenido, por cuanto observó una inconsistencia entre el referido medio de prueba y el hecho denunciado, concerniente a las razones por las cuales la declarante no pudo abordar su vuelo.

Sin embargo, a pesar de aparecer un razonamiento probatorio sobre dicho medio de prueba, este no aparece motivado con las otras fuentes de conocimiento introducidas al proceso, es decir, mediante el cual se describa e interprete el contenido de las mismas, sobre las que también se hace recaer el vicio, específicamente, en lo que atañe al instrumento privado denominada como "políticas de cambio de nombres", agregado de folio […] de la primera pieza de la primera instancia, respecto del cual, no se ha realizado un análisis descriptivo del mismo que haga alusión a su contenido o aplicación; es decir, la Cámara, no describe las circunstancias específicas en las que es aplicable dicha regulación.

Tampoco dicho tribunal estableció por qué en este caso en particular las condiciones de […], difieren con las de la aerolínea […], a efecto de aplicar las "políticas de cambio de nombres".

En ese sentido, en este punto el pronunciamiento impugnado carece de fundamentación probatoria, ya que no existe un razonamiento descriptivo del referido medio de prueba, que aluda a su contenido y aplicación, pues no descarta las hipótesis alternativas, en cuanto a cuándo es aplicable dicha regulación interna o por qué no eran aplicables en este caso, expresando concretamente esas diferencias de condiciones entre ambas aerolíneas como impedimento para su aplicación.

3.8 Bajo esa línea de pensamiento, es de considerar que toda decisión judicial debe demostrar un grado de convicción certero para el reconocimiento de un derecho y no fundamentarse en meras suposiciones carentes de razonamiento jurídico, así, el argumento referente a que "las condiciones de las aerolíneas operadoras en ocasiones son diferentes", resulta ser demasiado genérico y ambiguo, al no establecer concretamente la imposibilidad de la demandada para aplicar las "políticas de cambio de nombres", pues era necesario un análisis del contenido del mismo y de las circunstancias en las que dichas políticas son aplicables.

De modo que, al no haber expresado lo anterior, prescinde del razonamiento lógico jurídico necesario que refleje esa actividad descriptiva e intelectiva a la que está obligado el juez, lo cual afectado la motivación de la sentencia.

3.9 Por último, también se advierte que la Cámara desatendió un medio de prueba al omitir relacionar el acta notarial, agregada de fol. [...] de la primera pieza de primera instancia, de fecha siete de abril de dos mil diecisiete, otorgada por la demandante señora MLPP, ante los oficios del notario […], en la que se alude a la actuación de la aerolínea" como proveedor del primer tramo del vuelo interlineal, lo cual forma parte del acervo probatorio instrumental y soporte de la pretensión principal, lo cual afecta directamente la motivación del proveído impugnado.

Por consiguiente, la infracción denunciada por haber omitido relacionar hechos probados, ha sido cometida por la Cámara sentenciadora, por lo que deberá declararse haber lugar a casar la sentencia que se ha hecho mérito, por infracción al art. 217 inc. 3° CPCM, ya que no fue incluido el razonamiento probatorio estructurado en párrafos separados, describiéndose el contenido e inter-

pretación de los medios de prueba relacionados en esta sentencia, y por lo tanto, se ha dejado en indefensión a la parte agraviada, a efecto de que ulteriormente pudiera ejercer los mecanismos legales que estimara pertinentes.

4. Como consecuencia de las infracciones analizadas, tal como se ha expresado en esta resolución, se casará la sentencia por el motivo de forma estudiado, lo cual implica la anulación de la misma, y como efecto previsto en la ley, procede devolver el proceso al tribunal de alzada correspondiente, para que reponga el acto viciado, ordenándole que pronuncie la sentencia considerando los criterios esgrimidos en este proveído y conforme a derecho corresponde, motivándola debidamente.

Lo anterior de conformidad con lo estipulado en el art. 537 inc. 2° CPCM, el cual determina que: "Si se casare por vicio de forma, se anulará el fallo y se devolverá el proceso al tribunal correspondiente, a fin de que se reponga la actuación desde el acto viciado".

Finalmente, en vista de que la sentencia impugnada será casada por el motivo de forma relativo a la infracción de requisitos externos de la sentencia, según lo preceptuado en el art. 523 n° 14 CPCM; esta Sala, de conformidad con el art. 535 CPCM, no se pronunciará sobre los motivos de fondo admitidos."

Sala de lo Civil, número de referencia: 280-CAC-2022, fecha de la resolución: 24/11/2022

INTERESES LEGALES

LA CÁMARA SENTENCIADORA APLICÓ DEBIDAMENTE EL INCISO PRIMERO DEL ARTÍCULO 1964 DEL CÓDIGO CIVIL, DADO QUE LOS CONTRATANTES NO PACTARON NINGÚN TIPO DE INTERESES, Y DE CONFORMIDAD CON DICHA DISPOSICIÓN LEGAL, NO PUEDE HABER CONDENA AL PAGO DE INTERESES LEGALES

"VII. Análisis del recurso por el motivo de fondo referente a la aplicación indebida del art. 1964 inc. 1º CC.

1. La disposición legal señalada como infringida establece que: "Si se estipulare en general intereses sin determinar la cuota, se entenderá que deberán pagarse intereses legales. El interés legal es el seis por ciento al año".

2. Respecto a esta infracción, el recurrente alega lo siguiente: "[...] El tribunal de alzada en la apelación, dijo que el pago de intereses no fue convenido en los contratos y tal hecho es evidente, por lo que no es ese el punto de la controversia. El hecho controvertido es si se deben pagar intereses legales cuando hay retardo en el cumplimiento de la obligación y no se han pactado intereses, así como determinar cuál es la cuota o porcentaje de interés a pagar. En vez de acudir a la norma que resolvía el caso, decidió aplicar el inciso primero del articulo 1964 CC [...] Es decir que la norma del inciso primero del articulo 1964 CC., solo es aplicable en los casos de estipular, convenir o pactar intereses entre las partes, en los que no se haya fijado cuota, determinando que se fijará recurriendo al interés legal [...] Con ello se demuestra que existe una aplicación indebida,

porque la disposición en comento, se refiere a casos en que la controversia es diferente y no a casos como el presente, en el que no se acordó el pago de intereses [...]" (sic).

3. En relación a esta infracción, esta Sala considera lo siguiente:

La aplicación indebida de la ley es el resultado del proceso lógico-jurídico que realiza el juzgador, a fin de establecer si el caso particular está o no contenido en la norma, concluyendo que lo está, a pesar de que la norma que fue aplicada no era la idónea para resolver el caso. Es decir, que la aplicación indebida se configura, cuando el precepto o preceptos jurídicos que se hacen valer, se aplican a pesar de no ser los pertinentes para resolver el asunto que es objeto de decisión.

El caso en estudio, se trata de la suscripción de dos contratos por servicios profesionales:

En el primero de ellos, de fecha quince de agosto de mil novecientos noventa y cinco, agregado a folios [...], el actor, licenciado [...], suscribió contrato privado autenticado por notario, por servicios profesionales con los demandados, señores [...], con el objeto de realizar las acciones judiciales y extrajudiciales que fueran necesarias, para obtener la cancelación de la deuda de cuatrocientos mil colones más los correspondientes intereses, que era en deberles el señor [...]. El precio de los servicios profesionales ascendería al cuarenta por ciento de la suma de dinero que se recupere en concepto de capital e intereses adeudados.

En el segundo documento, agregado a folios [...], con fecha veintiséis de mayo de mil novecientos noventa y seis, el licenciado [...], suscribió contrato privado no autenticado, por servicios profesionales, con el demandado señor [...], con el objeto de realizar las acciones judiciales y extrajudiciales que fueran necesarias, para obtener la cancelación de la deuda de cuatrocientos mil colones más los correspondientes intereses, que era en deberles el señor [...]. El precio de los servicios profesionales ascendería al cuarenta por ciento de la suma de dinero que se recupere en concepto de capital e intereses adeudados.

Al estudiar los contratos anteriores, se advierte que las partes no pactaron el pago de intereses.

El recurrente alega, que cuando hay incumplimiento de la obligación y no se han pactado intereses, entonces deben aplicarse los intereses legales.

El inciso primero del art. 1964 CC, establece que procede el pago de intereses legales, solamente cuando se hubiere estipulado intereses en general, sin determinar cuota. Al respecto, es preciso advertir, que en los contratos en estudio, los otorgantes no pactaron el pago de intereses, por lo que no hay cuota de los mismos. Por consiguiente, no es procedente que a dichos contratos, se les aplique el pago de intereses legales en caso de incumplimiento, tal como lo alega el recurrente.

Y es que las partes al no reconocer en los contratos el pago de intereses, lo cual es factible de conformidad a la libertad contractual, entonces, es aplicable el supuesto que contiene el inciso primero del art. 1964 CC, en el sentido de que "se entenderá que deberán pagarse intereses legales", solo cuando se estipularen intereses en general, sin determinar la cuota de los mismos.

No obstante, se reitera, que en el caso en estudio, los contratantes no pactaron ningún tipo de interés, por lo que de conformidad al precepto legal en comento, no puede haber condena al pago de intereses legales.

Por consiguiente, la Cámara sentenciadora ha aplicado debidamente el inciso primero del art. 1964 CC, por lo que la infracción denunciada no ha sido cometida, razón por la que se declarará no ha lugar a casar la sentencia de mérito por este motivo."

EL INCISO 2º DEL ARTÍCULO 1964 DEL CÓDIGO CIVIL, DENUNCIADO POR EL RECURRENTE, NO ES PERTINENTE PARA RESOLVER EL CASO EN LITIGIO

"VIII. Análisis del recurso por el motivo de fondo referente a inaplicación del art. 1964 inc. 2º CPCM

1. La disposición legal señalada como infringida establece que: "Si se estipulare en general intereses sin determinar la cuota, se entenderá que deberán pagarse intereses legales. El interés legal es el seis por ciento al año."

2. Respecto a esta infracción, el recurrente manifestó lo siguiente: [...]

3. Respecto a esta infracción, esta Sala advierte lo siguiente:

En el caso en estudio, se advirtió que en los contratos por servicios profesionales que suscribieron los contratantes, no pactaron ningún tipo de interés; por consiguiente, según lo dispone el art. 1964 del Código Civil, el interés legal no es aplicable al caso de mérito, ya que solamente proceden cuando se ha pactado interés convencional, pero sin especificar su valor o cuantía.

En ese sentido, la Cámara al no conceder el cobro de intereses legales, ha aplicado correctamente el art. 1964 CC, ya que es la norma indicada para resolver el caso en litigio.

Ahora bien, en cuanto al caso planteado por el recurrente, en el que reclama el pago de intereses legales por el retardo o mora en el cumplimiento de la obligación, y que él lo enmarca como inaplicación del inc. 2º del art. 1964 CC, esta Sala advierte que ese supuesto no está regulado el dicho precepto jurídico, pues como se dijo anteriormente, los intereses legales, solamente proceden cuando se ha pactado interés convencional, pero sin especificar cuota o cuantía.

Por consiguiente, preciso es concluir, que el interés legal en materia civil, no es equivalente al interés moratorio, no es un castigo por la mora del deudor, tampoco es el interés por indemnización de la mora, porque si esa tesis alegada por el recurrente fuera aplicable en materia civil, entonces, si él como actor hoy recurrente, hubiera incumplido el contrato que suscribió por servicios profesionales, tendría que pagar intereses legales por mora, pero ese supuesto es imposible, ya que en materia civil no tiene sustento legal alguno. Distinto es en materia mercantil, en donde el art. 960 CCom, establece que: "El deudor moroso deberá pagar el interés pactado y en su defecto el legal como indemnización por la mora

Por otra parte, cuando el recurrente alega que los intereses legales "son los intereses que fija la ley para todos los casos en los cuales no hayan sido convenidos por las partes"; al respecto, preciso es advertir, que en materia civil,

la ley taxativamente expresa los casos en que procede aplicar el interés legal (usufructo, art. 799 CC; mandato, art. 1905 CC; y, mutuo art. 1964 CC), y el contrato por servicios profesionales, objeto del presente caso, no está incluido en esa taxatividad.

En conclusión, el inc. 2º del art. 1964 CC, precepto denunciado por el recurrente, no es pertinente para resolver el caso en litigio, por lo que la infracción de fondo invocada no ha sido cometida por la Cámara sentenciadora, ya que para que la inaplicación de ley se configure, es necesario que la norma infringida, sea la que resuelva el caso en disputa; y al no cumplir éste requisito casacional, la infracción denunciada no puede prosperar, por lo que no procede casar la sentencia por este motivo de fondo."

Sala de lo Civil, número de referencia: 261-CAC-2021, fecha de la resolución: 24/03/2022

INTERESES MORATORIOS

AUSENCIA DE INFRACCIÓN, YA QUE LA CÁMARA NO APLICÓ EL CASO LA REGLA 2° DEL ARTÍCULO 1430 DEL CÓDIGO CIVIL

"VI. Análisis del recurso por el motivo de fondo referente a aplicación errónea del art. 1430 regla segunda CC

1. La disposición legal citada como infringida establece que: "Si la obligación es de pagar una cantidad de dinero, la indemnización de perjuicios por la mora está sujeta a las reglas siguientes: 1ª Se siguen debiendo los intereses convencionales, si se ha pactado un interés superior al legal, o empiezan a deberse los intereses legales, en el caso contrario; 2ª El acreedor no tiene necesidad de justificar perjuicios cuando sólo cobra intereses; basta el hecho del retardo; 3ª Se deberán intereses de intereses sólo en el caso del artículo 1967; 4ª Las reglas anteriores se aplican a toda especie de rentas, cánones y pensiones periódicas".

2. En relación con esta infracción, alega el recurrente que la Cámara al aplicar la regla 2ª del art. 1430 CC, lo ha hecho erróneamente, puesto que no se tuvo una adecuada comprensión de que la norma ampara distintas formas de reclamar la mora, en las obligaciones de pagar una suma de dinero. Una de ellas es el pago de intereses por mora, como una compensación de los daños, sin requerir la mención sacramental en la petición de la demanda, de que se soliciten daños y perjuicios para que se conceda el pago de intereses.

Manifiesta además, que de acuerdo a la regla 2ª relacionada, si el acreedor solo cobra intereses, es decir, si eso es lo que pide expresamente el demandante, no tiene necesidad de justificar perjuicios, y por lo tanto es un contrasentido requerir a la parte actora que pida indemnización de perjuicios, cuando lo que pretende es el pago de intereses por el retardo.

Sostiene que para acceder al pago de intereses legales solicitado, no es necesario que se haya acordado el pago de intereses en el contrato, pues basta el retardo en el cumplimiento de la obligación, para entenderlos procedentes.

3. Por su parte, la Cámara sostuvo lo siguiente: "[...] el articulo 1430 C.C. establece el pago de intereses cuando se está reclamando una indemnización de perjuicios por la mora en el pago de lo reclamado, y el proceso que nos ocupa es de cumplimiento de contrato no de indemnización de daños y perjuicios, por lo que no es procedente acceder al pago de los relacionados intereses [...] 4.39 Consecuentemente, es procedente declarar sin lugar la petición de condenar a los demandados al pago de intereses moratorios del seis por ciento [...]" (sic).

4. Respecto a esta infracción, esta Sala considera:

El motivo de aplicación errónea de la ley, se configura cuando el juzgador aplica la norma legal correcta al caso concreto, pero lo hace dando a la misma un sentido diferente del que lógicamente tiene, o bien desatendiendo el tenor literal cuando su sentido es claro. Deviene entonces necesario que la norma haya sido aplicada.

Al estudiar la sentencia impugnada, se denota que la Cámara no ha aplicado para resolver el caso, la regla 2ª del art. 1430 CC, que denuncia el recurrente como infringida.

Lo que ha sostenido la Cámara en el punto 4.38 de la sentencia, es que el art. 1430 CC: "[...] establece el pago de intereses cuando se está reclamando una indemnización de perjuicios por la mora en el pago de lo reclamado, y el proceso que nos ocupa es de cumplimiento de contrato no de indemnización de daños y perjuicios [...]" (sic).

Al respecto, esta Sala considera que el art. 1430 CC, contiene un régimen especial en caso de incumplimiento de una obligación dineraria, lo cual ocasiona indemnización de perjuicios derivados de esa mora, indemnización moratoria que es regulada por las reglas que establece el artículo en comento.

Ahora bien, la regla 2ª del art. 1430 CC, se refiere a que el acreedor no tiene necesidad de justificar perjuicios cuando solo cobra intereses; en ese caso, sólo basta el hecho del retardo.

En el caso de mérito, el actor reclama el pago de una suma de dinero específica, el 40% de lo recuperado; además, reclama el pago de los intereses legales del 6% anual, como una indemnización por la mora.

En ese sentido, el actor que es el acreedor, no es sujeto del supuesto del art. 1430 regla 2ª CC, porque no solo está cobrando intereses, sino que también reclama el pago de una cantidad liquida de dinero.

En virtud de lo anterior, este tribunal considera que la infracción denunciada no ha sido cometida por la Cámara sentenciadora, porque no aplicó la regla 2ª del art. 1430 CC, que denuncia el recurrente, lo cual es base fundamental para que se produzca la interpretación errónea, es decir, la regla 2ª no se aplicó al caso en estudio, por consiguiente, no pudo haberse interpretado erróneamente.

Por otra parte, el supuesto contenido en la regla 2ª del art. 1430 CC, no es aplicable al caso en estudio, por cuanto el actor no solo pidió el pago de intereses moratorios, sino que también reclamó el pago de una cantidad líquida de dinero.

Por tanto, esta Sala concluye que no procede casar la sentencia impugnada por este motivo de fondo."

Sala de lo Civil, número de referencia: 261-CAC-2021, fecha de la resolución: 24/03/2022

NULIDAD DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO

SE PRODUCE DE OFICIO, POR CARECER DE FACULTAD O AUTORIZACIÓN PARA SUB-ARRENDAR UN INMUEBLE QUE ES PROPIEDAD DEL ESTADO Y, EN CONSECUENCIA, PARA EJECUTAR OTROS NEGOCIOS SOBRE EL BIEN ESTATAL

"6.1 En lo que atañe a la nulidad por falta de capacidad para contratar, debe tenerse en cuenta lo estipulado en el art. 1552 CC, el cual regula lo siguiente: "La nulidad producida por un objeto o causa ilícita, y la nulidad producida por la omisión de algún requisito o formalidad que las leyes prescriben para el valor de ciertos actos o contratos, en consideración a la naturaleza de ellos, y no a la calidad o estado de las personas que los ejecutan o acuerdan, son nulidades absolutas" .

La disposición legal transcrita limita las causales de nulidad absoluta a los supuestos de objeto o causa ilícita, incluso las que se producen por omisión de requisitos o formalidades del acto, ya que si el defecto se anida en la calidad o estado de las personas que lo ejecutan, se configura un vicio de nulidad relativo.

Ello es así, debido a que los actos jurídicos tienen condiciones de existencia y de validez señaladas en la ley. Se considera que si faltan las primeras, el acto no nace a la vida jurídica y si faltan las segundas, el acto nace pero con vicios.

Las condiciones de existencia de los actos jurídicos son: voluntad, objeto, causa y solemnidades, y las de validez son: voluntad sin vicios, capacidad de las partes, objeto lícito y causa lícita.

La nulidad siempre proviene de algún vicio que se incorpora al acto desde su nacimiento a la vida jurídica, porque es principio fundamental que la nulidad se produce en la generación del acto o contrato, y ello porque la nulidad es la sanción a la omisión de los requisitos de existencia y de validez de un acto, requisitos que deben concurrir en la celebración del contrato, y no con posterioridad a ella. En consecuencia, es imposible imaginar un acto o contrato, que en un principio fue válido, debido a la concurrencia de todos los requisitos que la ley prescribe, sea nulo por causas posteriores a su celebración, porque tal acto mantiene su validez indefinidamente, y difícil es concebir que uno de los requisitos legales que no faltó en el momento de su generación, falte después por cualquier causa, y produzca la nulidad superveniente de él.

De lo dicho, "resulta que en materia de nulidades, es principio fundamental que el vicio que acarrea la nulidad de un acto o contrato debe producirse en su ejecución o celebración, y no con posterioridad, porque un acto que nació válido, no deja de serlo por causas posteriores a su generación, estas causas supervenientes no pueden afectar a la ejecución del negocio jurídico, ni pueden alterar el hecho que el acto fue celebrado *con la concurrencia de todos los requisitos que la ley exige" (Alessandri Besa, Arturo, "*La Nulidad y la Rescisión en el Derecho Civil Chileno*", tomo I, 2ª edición, pág. 101 y 102; y, sentencia de la Sala de lo Civil, ref. 93-C-2006, de las once horas del día catorce de marzo de dos mil siete).*

Ahora bien, debe tenerse en cuenta que las causas de nulidad no son excluyentes y pueden concurrir en conjunto las de carácter absoluta o relativa.

Por dicha razón, en el caso bajo estudio, se sustenta la nulidad en una circunstancia fáctica particular, por cuanto se enlaza el asunto a la capacidad para contratar, en el sentido de facultad u autorización para subarrendar un inmueble que es propiedad del Estado. De ahí que, esa falta de autorización junto con el objeto y causa sobre el cual recae el contrato, denota preliminarmente una interrelación de vicios que no pueden escindirse en su análisis.

6.2 Respecto del control de oficio de las nulidades sustantivas, cuya facultad por imperativo legal está prevista en el art. 1553 CC, debe tenerse en cuenta lo siguiente:

El contenido normativo de la disposición legal citada al respecto establece: "La nulidad absoluta puede y debe ser declarada por el Juez, aun sin petición de parte, cuando aparece de manifiesto en el acto o contrato".

Dicho imperativo legal concede la potestad resolutiva al juzgador de apreciar nulidades cuando aparezca de manifiesto que el acto o contrato adolece de un defecto sin necesidad de probar su concurrencia. En ese sentido, la Sala de lo Civil, en su jurisprudencia ha otorgado dicha potestad en los términos siguientes: "[...] la declaratoria oficiosa de nulidad absoluta, está concedida únicamente para el juez, en el sentido que dicha nulidad absoluta sea notoria, clara, indiscutible y evidente; de tal manera que el juzgador, no tenga que recurrir a ningún medio probatorio para establecer su existencia [...]" (sic). (Sentencia bajo referencia 365-CAC-2019, de las ocho horas seis minutos del doce de noviembre de dos mil veinte).

La disposición bajo análisis persigue (como lo expresa Claro Solar en sus Explicaciones de Derecho Civil Chileno y Comparado, tomo duodécimo "De las Obligaciones"), que aquél acto o contrato en el que concurre una causal de nulidad absoluta, lo cual compromete la moralidad y el prestigio mismo de la ley, no sobreviva al ser detectado su defecto, en este caso por el juzgador o por cualquiera que tenga interés en ello.

Ahora bien, lo que el juzgador está sujeto a determinar y dejar por establecido, es la causa que provoca dicha nulidad y la razón por la cual es manifiesta la misma. Sin embargo, lo sostenido por la Sala en cuanto a que no sea necesario recurrir a medios probatorios para establecer su existencia, implica que del mismo documento logre advertirse la nulidad, pero ello no excluye que pueda apoyarse el juzgador de otros datos probatorios ya incorporados al proceso para robustecer la argumentación tendente a demostrar el vicio.

a) Debemos tener en cuenta sobre el primer aspecto, que las causales de nulidad están previstas en la ley, tal como se expuso anteriormente, tendrá que concurrir alguna de ellas para motivar la aplicación de la disposición legal imperante en la materia; y,

b) El segundo aspecto versa sobre la argumentación tendente a demostrar que es posible subsumir ese vicio en la hipótesis normativa, sin sujeción a una extensiva actividad probatoria para demostrarlo o de investigación ulterior para comprobar su validez.

Esos dos tópicos son los determinantes para analizar la concurrencia de una nulidad absoluta que puede ser declarada de oficio por aparecer manifiesta en el acto o contrato de que se trate, lo cual no excluye tomar en consideración otros datos probatorios incorporados al proceso.

1. Teniendo en cuenta lo anterior, en el proceso de mérito, se ha incorporado al proceso mediante exhibición, el contrato de arrendamiento PNC-ARR-283/2010 celebrado el día veinte de enero de dos mil diez, ante los oficios del notario [...], entre el señor HLLP, en calidad de arrendante y la demandada Policía Nacional Civil, en calidad de arrendataria, sobre el hangar número **********, aeropuerto internacional de Ilopango, departamento de San Salvador.

7.1 De dicho contrato se advierte lo siguiente: Aparece como arrendador un particular, el señor HLLP, quien dispuso arrendar el hangar número **********, ubicado en el aeropuerto internacional de Ilopango.

Además, se han incorporado otros contratos de arrendamiento, el primero, en el que comparecen como partes otorgantes, el señor HLLP, en calidad de arrendatario, y el señor JRCA, quien en su calidad de director general de aeronáutica civil, y en representación del Gobierno, actúa como arrendante, respecto de un área señalada con el número **********, de quinientos diecinueve metros cuadrados, ubicado en el aeropuerto internacional de Ilopango.

Luego, el segundo, comparecen como partes, el señor HLLP, en calidad de arrendatario, y el licenciado MEARR, quien en su calidad de subdirector general de transporte aéreo, antes aeronáutica civil, y en representación del gobierno de El Salvador, actúa como arrendante, da en arrendamiento en la zona de hangares del aeropuerto internacional de Ilopango, el área señalada con el número **********, con un área de un mil ciento ocho metro cuadrados, en la cual se encuentra construido un hangar.

a) En ambos contratos se estableció como prohibición la facultad de disponer del inmueble para subarrendarlo. Sin embargo, se estipuló que podría hacerlo si consta autorización por escrito.

b) En lo que atañe a la propiedad sobre la cual recae el arrendamiento, se advierte que la parte actora en el proceso de mérito, no ha negado que pertenezca a la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA), anteriormente de la Autoridad de Aviación Civil de El Salvador.

Estos puntos son determinantes por cuanto el objeto del arrendamiento delimita facultades para realizar gestiones respecto del mismo, entre ellos, tal como aparece en el contrato primigenio (cláusula 6) y subsiguiente (cláusula 6), el arrendatario tiene prohibido subarrendar el mismo, lo cual constituye no solo una causa de terminación del contrato, pues dada la particularidad del caso de mérito, por tratarse de una propiedad del Estado, lo cual no ha sido negado por las partes, y por tanto, que no se requiera actividad probatoria (art. 314 ord. 1° CPCM), la prohibición de aprovecharse respecto de la explotación de un inmueble de Estado, trasciende aún más por el interés general de la propiedad objeto del contrato.

Por otro lado, se advierte que el juez de la causa tuvo por no probada la falta de autorización para tal gestión, debido a que en audiencia preparatoria la parte actora presentó documentos con los que tácitamente CEPA, avala el subarrendamiento. Sin embargo, la única autorización expresa para subarrendar es previa a la celebración del contrato base de la pretensión (a fs. 167 de la pieza principal), y no puede tenerse como tácitamente convalidado el mismo en la actualidad por tratarse de otra entidad responsable de la gestión y administración del bien estatal. Es decir, dicha autorización fue dada por el director general de transporte aéreo, y no ha sido actualizada de manera expresa la misma por CEPA, todo lo contrario se niega de parte de esta que se haya formalizado una relación contractual con el actor, y tampoco, que el mismo haya sido autorizado para subarrendar (fs. 102 de la pieza principal).

De manera que, en el proceso de mérito, se tiene como probada la falta de autorización para subarrendar, y por ende, no se tenía disposición alguna para ejecutar otros negocios sobre el bien estatal en comento.

En efecto, se debe tener en cuenta que el reconocimiento de la propiedad sobre el cual se constituyó el subarrendamiento y falta de autorización para subarrendar, determinan un tratamiento diferente a la disponibilidad de los bienes patrimoniales de los particulares, cuyo destino sea obtener un provecho de ellos. Hay limitaciones incluso constitucionales respecto de los bienes que el Estado posee bajo un régimen de dominio privado, en virtud de que tal como lo dispone el art. 104 Cn., dichos bienes pueden ser transferidos *dentro de los límites y en la forma establecida en la ley*, estableciéndose un mandato para ejecutar válidamente actos o contratos respecto de dichos bienes.

Por dicha circunstancia, no es posible autorizar el arrendamiento de una cosa ajena y que se conceda la acción establecida en el art. 1704 inc. 2° CC, el cual estipula: *"Puede arrendarse aun la cosa ajena, y el arrendatario de buena fe tendrá acción de saneamiento contra el arrendador en caso de evicción"*; ya que dicho precepto tiene cobertura en los supuestos dados entre propiedades de los particulares, no siendo posible que se aplique dicha regla dado el interés general que hay sobre las propiedades del Estado, por lo tanto, en este caso, no está disponible para el aprovechamiento de los particulares.

Bajo dicha línea de pensamiento, en este caso tampoco es posible convalidar el subarrendamiento otorgado por un particular, y por ello, que tácitamente sea posible avalar el mismo, dado que hay proscripción expresa en el contrato primigenio y subsiguiente para realizar otros negocios respecto de la propiedad del Estado, que ha sido objeto de arrendamiento (en la cláusula III, se limitó el uso del área para hangar, cuyo derecho lo tiene la persona natural o jurídica propietaria de avión). Y la cláusula que así lo estipula, tiene que considerarse en función del objeto sobre el cual recae el contrato y la causa que motive a realizar otros negocios respecto del mismo, ya que no tiene un asidero legal que convalide esa actuación particular, pues tal como se expuso en párrafos anteriores, no se tenía autorización vigente para realizar el negocio de mérito.

7.2 Bajo las premisas antes dichas, esta Sala identifica causas de nulidad absoluta respecto del contrato que ha servido de base para iniciar el proceso de mérito, siendo posible subsumir el mismo en las disposiciones legales que regulan dichos vicios, tal como se sostuvo en párrafos anteriores, que es posible decretar de oficio la nulidad de actos o contratos, cuando sea posible subsumir el asunto a una causa invalidante y que no se requiere de una extensa actividad probatoria, sino que a partir del contenido del instrumento y su relación con otros datos probatorios, aparezca como manifiesta la circunstancia de nulidad.

En ese sentido, dispone el art. 1552 CC, que *"la nulidad producida por un objeto o causa ilícita, y la nulidad producida por la omisión de algún requisito o formalidad que las leyes prescriben para el valor de ciertos actos o contratos, en consideración a la naturaleza de ellos, y no a la calidad o estado de las personas que los ejecutan o acuerdan, son nulidades absolutas".*

En este caso, queda evidenciado que en el contrato primigenio y el subsiguiente, se anida una proscripción de realizar otros negocios sobre un bien estatal, sino media autorización expresa para tal efecto, por lo que cualquier ejecución de negocios posteriores que comprometan la explotación de esa propiedad, en beneficio particular, hacen que el objeto de cualquier otro contrato sea contrario al ordenamiento jurídico, y por ende, también la causa que motive la contratación ulterior.

Lo anterior encaja en lo establecido en los arts. 1333 y 1338 CC, dado que la ilicitud del objeto y la causa, devienen de esa contrariedad entre el interés particular y el interés público, respecto de la disponibilidad de los bienes del Estado, no pudiendo aprovecharse el primero respecto del segundo, y tampoco, procede convalidar o tener por tácitamente avalada la ejecución de un acto jurídico bajo los términos antes aludidos.

Por consiguiente, tanto el objeto como la causa que motivó al otorgamiento del segundo arrendamiento, indujo al establecimiento de obligaciones contrarias al orden público, y por tanto, se erige la regla de que ningún particular puede aprovecharse de la explotación de un bien estatal cuando ha mediado prohibición para hacerlo y no se evidencia su autorización expresa, máxime cuando no se ha incorporado en el proceso datos probatorios que conduzcan a establecer que efectivamente se ha obrado conforme al ordenamiento jurídico.

9. En virtud de las razones antes apuntadas, procede declarar nulo el contrato de arrendamiento [...], que ha servido de base para ejercer la pretensión de mérito, y como efecto de tal declaratoria, la sentencia que acogió la pretensión en la primera instancia será revocada, por haberse fundado en un instrumento que adolece de nulidad, quedando la institucional policial, absuelta de la demanda incoada en su contra.

Por otro lado, en la parte resolutiva se hace referencia a todo lo que en esta resolución se ha establecido, en cuanto a la inadmisión de la denuncia de nulidad por haberse basado en una de tipo sustantivo, lo cual no es óbice para que de oficio puedan revisarse actuaciones que han tenido lugar con un documento que adolezca de nulidad, y que, por lo tanto, proceda resolver el caso conforme a derecho corresponde."

Sala de lo Civil, número de referencia: 13-CAC-2022, fecha de la resolución: 09/03/2022

NULIDAD DE DACIÓN EN PAGO

PROCEDE CASAR EL AUTO IMPUGNADO POR INFRACCIÓN DEL ARTÍCULO 277 DEL CÓDIGO PROCESAL CIVIL Y MERCANTIL

"5. Por otra parte, preciso es señalar, que respecto a las pretensiones de nulidad del instrumento de dación en pago y de reconocimiento a favor de la sociedad demandante de la obligación que causó la ejecución del proceso ejecutivo mercantil ref. E-97-98-4, esta Sala advierte lo siguiente:

5.1 En cuanto a la pretensión de nulidad de instrumento de dación en pago, en primera instancia, se advirtió que ya fue sustanciada la pretensión de nulidad de inscripción registral del instrumento de mérito, y que fue declarada nula dicha inscripción. Además, sostuvo que con dicha cancelación los efectos contra terceros de la dación en pago quedaron sin efecto, por lo que a su consideración no era posible entrar a conocer sobre la nulidad del instrumento.

La Cámara por su parte compartió dicho criterio, agregando que: "[...] por haber sido objeto de valoración el contenido de la dación en pago se entiende que los efectos de la cosa juzgada se extienden a la misma, trayendo como consecuencia la imposibilidad de esgrimir tal pretensión en un nuevo proceso [...]" (sic).

Al respecto, esta Sala considera que lo sostenido en las instancias, no son elementos suficientes para considerar la nulidad absoluta del instrumento de la dación en pago, por cuanto en este tipo de pretensión es necesario que se examine en un proceso completo la causa de pedir alegada por el litigante en su demanda, de lo cual no hay evidencia que haya sido conocida y resuelto en un proceso anterior.

Tampoco puede entenderse como asegura la Cámara, que se extiende la cosa juzgada en este caso, por no haberse incluido dicha pretensión en el juicio ordinario de nulidad clasificado bajo referencia O-255-08-3; ya que esta es autónoma e independiente de cualquier otra.

En ese sentido, debe tenerse en cuenta que para entender que hay cosa juzgada, y por tanto, que se ha dado un juzgamiento de fondo, es necesario que se examinen los hechos, se practiquen pruebas y se aplique el derecho (Sentencia de ref. 59-CAC-2019, de las ocho horas trece minutos del veintiocho de junio de dos mil veintiuno).

Por consiguiente, no hay un juzgamiento de fondo en los procesos anteriores respecto de esa causa de pedir, ya que no puede entenderse que por la estimación de otra pretensión de cancelación de inscripción registral, esta conlleva la nulidad del instrumento, ya que tal como se ha dicho antes, tiene que analizarse la causa de pedir alegada en la demanda.

Por dicha razón, se casará el auto impugnado por infracción al art. 277 CPCM."

PROCEDE ANULAR LA DECISIÓN DE SEGUNDA INSTANCIA QUE RECHAZÓ LIMINARMENTE POR IMPROPONIBLE LA PRETENSIÓN DE NULIDAD DE INSTRUMENTO DE DACIÓN DE PAGO

"5.2 Ahora bien, en cuanto al reconocimiento de la obligación, lo cual fue solicitado en la demanda como efecto restitutorio, esta Sala advierte que no ha sido planteada como una pretensión principal, sino como consecuencia de estimar la nulidad del instrumento de dación en pago.

Ello queda evidenciado en el romano V de la demanda, en cuyo acápite se expresa así: "EFECTO RESTITUTORIO QUE SE PRETENDE POR Y EN VIRTUD DE LA DEMANDA DE NULIDAD INCOADA" (sic).

Por consiguiente, la petición de reconocer la obligación contenida en el documento base de la acción que fue sustento en el proceso ejecutivo mercantil clasificado bajo referencia número E-97-98-4, no tiene los fundamentos fácticos ni jurídicos, para entender que se trata de una pretensión autónoma e independiente para ser tramitada en el proceso de mérito.

6. Resolución que corresponde

En virtud de lo anterior, y con base en el art. 537 inc. 1º CPCM, dado que se declaró improponible la demanda, corresponde a este tribunal, pronunciar la resolución pertinente, en relación con el rechazo liminar de la pretensión.

Y siendo que es procedente anular la decisión de segunda instancia que rechazó liminarmente por improponible la pretensión contenida en la demanda interpuesta, en los términos expuestos en esta resolución respecto de la pretensión de nulidad de instrumento de dación en pago, debe analizarse en primera instancia, el cumplimiento de los requisitos de admisión de la demanda y, de su resultado, deberá disponerse la continuación, o no, del proceso; ya que el único pronunciamiento dado y que ha sido impugnado, es relativo a la proponibilidad de la pretensión, cuyo razonamiento ha sido previo a los requisitos formales de admisión de la demanda que se regulan en el art. 276 CPCM.

No se anula el auto impugnado respecto de las pretensiones relativas a cancelación registral de la hipoteca y del instrumento de dación en pago, así como lo concerniente a los efectos restitutorios a los cuales se ha hecho alusión anteriormente."
Sala de lo Civil, número de referencia: 213-CAC-2021, fecha de la resolución: 01/03/2022

NULIDAD DEL TESTAMENTO

EL VICIO DE APLICACIÓN ERRÓNEA DE LA NORMA HA TENIDO LUGAR AL INTERPRETAR QUE LOS ARTÍCULOS 292 y 293 DEL CÓDIGO DE FAMILIA ESTABLECEN COMO PRESUPUESTO PROCESAL PARA PROMOVER UN PROCESO DE NULIDAD TESTAMENTARIA, LA DECLARATORIA DE INCAPACIDAD DEL TESTADOR

"IV. Análisis del recurso por infracción de ley, por el motivo relativo a la aplicación errónea de la norma que regula el supuesto que se controvierte, con infracción de los arts. 292 y 293 CF

1. Las disposiciones legales que se señalan como erróneamente aplicadas, regulan concretamente el tema de la incapacidad y las causas que dan lugar a la misma, estableciendo como una de ellas la sordera, salvo que el sordo pueda entender y darse a entender de manera indudable.

2. La Cámara ha mencionado en sus argumentos que es presupuesto procesal para iniciar un proceso de nulidad como el que atañe al presente caso, el que la testadora haya sido declarada incapaz ante los tribunales de familia, de conformidad a lo establecido en los arts. 292 y 293 CF, en relación con el art. 185 de la Ley Procesal de Familia.

Agrega el tribunal de segunda instancia, que si no se ha agotado esa vía, la de la declaratoria de incapacidad, no se puede iniciar una demanda en sede civil por falta de ese presupuesto procesal.

En el fallo pronunciado en apelación, al declarar la nulidad del auto de admisión de la demanda, expresa que *"[...] no se tiene el presupuesto procesal de haber seguido las diligencias previas que señalan los artículos 292 y 293 del Código de Familia [...]" (sic).*

3. Las recurrentes afirman que existe aplicación errónea de los arts. 292 y 293 CF, pues en su opinión, la declaratoria de incapacidad de la testadora no es un requisito legal para iniciar el proceso de nulidad de testamento abierto.

Agregan que la situación se encuentra regulada en el art. 1012 CC, disposición que faculta a las personas sordas para testar, debiendo cumplir el notario autorizante con su obligación de consignar en el instrumento las solemnidades establecidas en la norma comentada. Arguyen que la falta de dichas solemnidades fue comprobada por lo que fue declarado nulo el testamento en primera instancia.4. Con relación a lo expuesto, esta Sala advierte lo siguiente:

4.1 En primer término, debe tenerse en cuenta que el vicio de aplicación errónea de ley que se atribuye a la Cámara, tiene lugar cuando el juzgador al analizar un precepto legal lo restringe, altera o extralimita.

4.2 Respecto de lo que sostiene la Cámara, debemos tener en cuenta previamente lo que se entiende por presupuesto procesal. En ese sentido, doctrinariamente, de acuerdo con Enrique Véscovi, (Teoría General del Proceso, Editorial Temis S.A., segunda edición 1999, páginas 80 y siguientes), los presupuestos procesales "son, *entonces, los requisitos necesarios para que pueda constituirse un proceso válido, o una relación procesal* válida", continúa explicando que "son más *bien requisitos sin los cuales no se puede pronunciar una decisión* de fondo, de carácter válido" (sic).

El autor citado ejemplifica como presupuestos procesales la capacidad de las partes, la competencia del juez, el emplazamiento, etc.

4.3 Cómo puede observarse, la Cámara en su fallo expresa que *"no se tiene el presupuesto procesal de haber seguido las diligencias previas que señalan los artículos 292 y 293 del Código de Familia"*; sin embargo, tales disposiciones normativas ni se refieren al establecimiento de un presupuesto procesal para un juicio de la naturaleza del que hoy nos ocupa, ni se regula el tema de diligencias previas, como se menciona en la decisión dictada en apelación.

Los preceptos que se señalan como erróneamente aplicados, están ubicados dentro del Código de Familia en el título segundo relativo a la tutela, capítulo segundo referente a las disposiciones especiales para cada clase de tutela, sección segunda que regula la tutela legítima, parte segunda referente a la tutela legítima para mayores de edad incapacitados.

El art. 290 CF señala que es un presupuesto para el nombramiento de un tutor para un mayor de edad que estos hayan sido declarados incapaces.

El art. 292 CF establece la necesidad de la declaratoria de incapacidad mediante sentencia judicial y el art. 293 CF establece cuales son las causales que dan lugar a tal declaratoria, considerando como una de ellas la sordera, salvo que el sordo pueda entender y darse a entender de manera indudable.

En otras palabras, y para el caso que nos ocupa, una persona sorda que no entiende ni se puede dar a entender sin ninguna duda, está sujeto a ser declarado incapaz mediante sentencia judicial para posteriormente tener la tutela de ley.

4.4 Por otra parte, en cuanto a las diligencias preliminares, el art. 255 CPCM, establece que estás son diligencias no contenciosas, que el potencial demandante o demandado consideran necesarias, ya sea para la presentación de la demanda, para la preparación de la defensa o para el eficaz desarrollo del proceso.

Este tipo de diligencias no son de carácter obligatorio, sino que el futuro demandante o demandado pueden optar por practicarlas si lo consideran útil a sus intereses. De tal forma, dado que la naturaleza de las diligencias preliminares descansa en la voluntariedad de cualquiera de las potenciales partes, éstas no pueden considerarse nunca un presupuesto procesal.

4.5 Considerando en correcto contexto las normas utilizadas por la Cámara para resolver, se concluye que el vicio que se le atribuye sí ha tenido lugar al interpretar en su resolución que los arts. 292 y 293 CF, establecen como un presupuesto procesal, para promover un proceso de nulidad testamentaria, la declaratoria de incapacidad de la testadora.

Como se afirmó en párrafos anteriores, tal declaratoria es presupuesto para el nombramiento de tutor de la persona incapaz, pero en el caso en análisis la testadora se encuentra fallecida, y ya no es sujeto de derechos ni de obligaciones, pues al dejar de existir ha perdido los atributos de la personalidad, entre ellos el de la capacidad.

En razón de lo dicho no tendría ningún sentido nombrarle tutor, de acuerdo al capítulo en el que tales preceptos erróneamente interpretados se encuentran ubicados.

Ni procede tampoco, considerar como diligencias preliminares de carácter obligatorio para las partes la declaratoria de incapacidad de la testadora.

En consecuencia, de lo anterior, esta Sala concluye que procede casar el auto objeto de impugnación."

NO EXISTE LEGITIMACIÓN PROCESAL PASIVA, PUES SI BIEN LA NOTARIO HA TENIDO INTERVENCIÓN EN LA REALIZACIÓN DEL INSTRUMENTO PÚBLICO CUYA NULIDAD SE PRETENDE, NO PUEDE OSTENTAR LA CALIDAD DE PARTE DEMANDA

"V. Resolución que corresponde

Al proceder la casación del auto impugnado, por el motivo de fondo relativo a la errónea aplicación de los arts. 292 y 293 CF, tal como se concluyó en el consi-

derando IV de esta sentencia, con base en el art. 537 inc. 1° CPCM, se justifica la resolución que corresponde en los términos siguientes:

El art. 66 CPCM establece que tendrán legitimación para ser partes intervinientes en un proceso los titulares de un derecho o un interés legalmente reconocido en relación con la pretensión. También se reconoce legitimación a quienes por reconocimiento expreso de la ley se les permita actuar en el proceso por derechos e intereses de los que no son titulares.

Esta Sala al analizar los actos procesales desde la primera instancia se percata que la demanda de nulidad del testamento ha sido dirigida contra el señor […], por haber sido nombrado heredero universal en dicho instrumento, y también contra la licenciada […], por ser la notario autorizante del mismo.

Sobre lo anterior, considera este tribunal que respecto del notario autorizante, licenciada […], no existe legitimación procesal pasiva, pues si bien dicha profesional ha tenido intervención en la realización del instrumento público cuya nulidad se pretende, no puede ostentar la calidad de parte demanda.

En primer lugar, porque el fallo que eventualmente llegue a dictarse no tiene trascendencia directa en cuanto a su función notarial, que es el papel que ella ha desempeñado. En segundo lugar, porque la responsabilidad que la notario pudiera tener por su participación en el otorgamiento del instrumento impugnado no debe dilucidarse en este proceso, sino que son otras instancias las competentes para conocer y sancionar al notario por sus actuaciones como tal.

De lo anterior se concluye que la demanda incoada contra la notario, licenciada […], es improponible, de acuerdo con lo dispuesto en los arts. 127 y 277 CPCM. No así respecto de la pretensión principal pues tal como se ha advertido, en los considerandos anteriores, no era necesario la declaratoria de incapacidad de la que se ha hecho mérito. En ese sentido, el proceso deberá continuar en la segunda instancia respecto del señor […].”

PROCEDE ANULAR LA DECISIÓN DE LA CÁMARA DE SEGUNDA INSTANCIA Y ORDENAR LA REPOSICIÓN DE LA AUDIENCIA DE APELACIÓN

“Por consiguiente, en lo que atañe a las actuaciones procesales del tribunal que conoció de la alzada, esta Sala observa que en la audiencia de apelación, se abordó y decidió, sobre el punto referente a la exclusión, que en primera instancia se hizo de la notario autorizante del testamento cuya nulidad se pretende.

El abordaje de dicho tema se refirió a la declaratoria de nulidad del emplazamiento que se le practicó, aspecto que no era parte del escrito de apelación presentado por el abogado [...], pero que fue suficiente para que la Cámara declarara sin lugar lo solicitado en el recurso de apelación interpuesto, y concentrara su decisión en establecer como presupuesto procesal de la nulidad planteada, lo preceptuado en los arts. 292 y 293 CF, y para que se refiriera, además, en el fallo anunciado a la exclusión de la notario por parte del juez de primera instancia.

Consecuentemente, la audiencia de apelación al no resolver los puntos de apelación propuestos por la parte que se considera agraviada, por enfocarse el tribunal respectivo en aspectos que serán revertidos por esta sentencia, deberá

celebrarse nuevamente dicho acto procesal, a efecto de dar respuesta al escrito de impugnación presentado por el abogado [...].

En tal virtud, al ser procedente anular la decisión de segunda instancia, en los términos expuestos, corresponde ordenarle a la Cámara de mérito, la celebración de nueva audiencia de apelación, debiéndose convocar a las partes, fijando para ello fecha y hora, y de su resultado, resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada, de manera congruente y motivada, según los puntos impugnados en el mismo, incluso las alegaciones que sobre el mismo realice la parte apelada."

Sala de lo Civil, número de referencia: 214-CAC-2021, fecha de la resolución: 08/03/2022

NULIDAD PROCESAL INSUBSANABLE

PROCEDE POR HABER INCURRIDO LA CÁMARA EN INFRACCIÓN, NO SOLO EN CUANTO A LAS FORMALIDADES IMPERATIVAS DEL ACTO, SINO EN CUANTO A LOS EFECTOS PRÁCTICOS PARA EL EJERCICIO DEL DERECHO A RECURRIR, LESIONANDO EL DERECHO DE DEFENSA DE LA PARTE AGRAVIADA

"3. Inconforme con la decisión de la Cámara, el abogado [...], como apoderado del demandado señor RAMA, interpuso recurso de casación estando dentro del plazo legal respectivo; por lo que corresponde examinar el cumplimiento de los demás requisitos previstos en el art. 528 del Código Procesal Civil y Mercantil (en adelante, CPCM).

El recurrente relaciona un motivo de forma y cuatro motivos de fondo.

4. En lo concerniente al motivo de forma, invoca la infracción a requisitos internos de la sentencia, respecto del art. 218 CPM, que regula el principio de congruencia, expresando que el tribunal de segunda instancia omitió pronunciarse sobre la ausencia de valoración de los elementos probatorios de la sentencia respecto de la acción de petición de herencia, afirmando que la Cámara alegó que no se pronunciaría sobre el motivo de apelación de valoración de la prueba porque éste correspondía a la pretensión de nulidad.

Respecto del motivo alegado, es indispensable tener en cuenta el principio de congruencia contenido en la disposición legal señalada como infringida, prescribe que las sentencias deben ser claras y precisas, y deberán resolver sobre todas las pretensiones y puntos litigiosos planteados y debatidos.

En ese sentido, el recurrente hace mención de lo que fue peticionado en segunda instancia y que fue omitido resolver por el tribunal de apelación, por lo que es viable admitir el recurso por este motivo.

5. En lo referente a los motivos de fondo, invoca tanto la errónea interpretación de ley, en relación a los arts. 748 inc. final del Código Civil (en adelante, CC), 1191 CC y 3 CPCM, como la inaplicación de ésta, en lo que concierne a los arts. 217, 218 y 321 CPCM.

5.1 La infracción de ley, por aplicación errónea, tiene cabida frente a un error en la interpretación de una disposición legal que es pertinente para la solución del caso, pero que al considerar su contenido, el tribunal de segunda instancia analiza de forma errada, ya sea ampliándolo o restringiéndolo.

El motivo de inaplicación de ley, implica un error por parte del tribunal de segunda instancia, al omitir considerar una disposición legal cuyo contenido es esencial para la solución del caso o asunto sometido a su conocimiento.

5.2 Respecto de los motivos invocados, esta Sala advierte que el recurrente no ha realizado una adecuada fundamentación para entrar a conocer el recurso de casación interpuesto, ya que, por un lado, el recurrente no determina el error de interpretación en el que incurre el tribunal de segunda instancia respecto del análisis realizado a los artículos señalados como infringidos, lo cual constituye un elemento esencial para que se admita del recurso de casación bajo esta causal, y por otro, no determinó el error incurrido al omitirse la aplicación de la norma indicada como transgredida y la pertinencia de esta disposición para resolver el caso o asunto sometido a conocimiento en la segunda instancia.

Por lo tanto, el recurso deviene en inadmisible bajo estas causales.

6. Ahora bien, aunque se estime que solo es admisible el motivo de forma mencionado, se advierte que todos los motivos invocados están incardinados a impugnar el romano II) de la sentencia dictada en apelación, mediante el cual se anularon los literales b), d), e), f) y g) de la sentencia de primera instancia.

En razón de lo anterior, al remitirnos al contenido del fallo impugnado, se observa que los magistrados de la mencionada Cámara Segunda de lo Civil, deciden en el literal a) modificar el fallo pronunciado por el Juzgado Tercero de lo Civil y Mercantil de San Salvador, en la sentencia elevada a apelación, y a continuación, en el romano I) confirman los literales a) y c) de la referida sentencia, y en el romano II) anulan los demás literales, y lo que fuere su consecuencia, sustentando dicho fallo en que los mismos carecen de los fundamentos de derecho que dieron lugar a la decisión de los mismos."

LA NULIDAD PUEDE SER DECLARADA EN CUALQUIER ESTADO DEL PROCESO, ESTO INCLUYE LA SEGUNDA INSTANCIA Y ESTE GRADO DE CONOCIMIENTO, YA QUE LA INTERPOSICIÓN DE UN RECURSO SUSPENDE LA FORMACIÓN DE LA COSA JUZGADA TANTO FORMAL COMO MATERIAL

"7. En ese sentido, debe tenerse en cuenta que al examinarse lo alegado en casación en esta fase inicial, y al ser admisible un motivo del mismo, ello habilita a esta Sala, a ejercer un control de oficio respecto de una nulidad procesal insubsanable, debido a que el control de legalidad de las actuaciones por parte de esta sede, abarca todo el escenario en el cual se ha ventilado la pretensión, por lo que cualquier irregularidad puede ser advertida a raíz de las alegaciones que realicen las partes en el recurso.

Además, la admisión del recurso en los términos dichos, no conllevaría al trámite normal para conocer de la infracción alegada en una sentencia, sino que

al examinar inicialmente lo alegado, esta Sala puede disponer que se ha cumplido con los requisitos de ley, y como consecuencia de ello, advertir de manera oficiosa cualquier nulidad insubsanable.

Lo anterior, tiene sustento en el art. 235 CPCM, el cual estipula que: "Cuando la ley expresamente califique de insubsanable una nulidad, ésta podrá ser declarada, de oficio o a petición de parte, en cualquier estado del proceso".

Al respecto, cuando la ley se refiere a que la nulidad puede ser declarada en cualquier estado del proceso, esto incluye la segunda instancia y este grado de conocimiento, ya que la interposición de un recurso suspende la formación de la cosa juzgada tanto formal como material, y por lo tanto, las fases impugnativas forman uno de los estados del proceso que por dicha razón, no ha finalizado.

Cabe agregar, que esta Sala ha sostenido que: "[...] la única limitante para examinar actuaciones bajo la modalidad en comento, es que el recurso sea admisible, puesto que la admisión del mismo da la apertura necesaria a efecto de examinar el contenido pleno del proceso. Esto es así, debido a que la procedencia del recurso está vinculada a presupuestos procesales que no tienen conexión con el fondo del proceso, ya que verificar que la resolución sea impugnable, que cause un agravio o que el recurso haya sido interpuesto para que lo conozca el tribunal competente por la parte agraviada, son cuestiones procesales que deben concurrir en la causa respectiva [...] Sin embargo, el examen relativo a los requisitos de fondo implica pasar a otro nivel de análisis, es decir, al que su contenido es más cercano al objeto del proceso o asunto que haya sido sometido a conocimiento en la segunda instancia. Por ello, los requisitos comprendidos en el art. 528 CPCM, contemplan la necesidad de fundamentar una interrelación entre el motivo, las disposiciones infringidas y el concepto de la infracción [...] Dicha articulación es la que habilita, verificada su armonía, claridad y pertinencia, que pueda examinarse el proceso, pues solo con tal apertura como ha quedado demostrado, es la que está más próxima al asunto de fondo, y no la sola procedencia, que es la más próxima a verificar los requisitos de admisión del recurso [...]" (sic). (Resolución bajo referencia 13-CAC-2022, de las ocho horas seis minutos del nueve de marzo de dos mil veintidós)."

EL CONTROL DE OFICIO DE LAS NULIDADES PROCESALES INSUBSANABLES ES DISTINTO A LA DENUNCIA DE NULIDAD EN VÍA DE RECURSO A LA QUE SE REFIERE EL ART. 238 CPCM

"Finalmente, cabe acotar que el control de oficio de las nulidades procesales insubsanables es distinto a la denuncia de nulidad en vía de recurso a la que se refiere el art. 238 CPCM, ya que la misma debe cumplir con determinados requisitos para su admisión y ello condiciona su conocimiento por parte de este tribunal.

8. En ese orden de ideas, esta Sala advierte en el pronunciamiento realizado por el tribunal de apelación, una nulidad manifiesta y absoluta, no solo en cuanto a las formalidades imperativas del acto, sino, en cuanto a los efectos prácticos para el ejercicio del derecho a recurrir, lesionando el derecho de defensa de la parte agraviada, por haber declarado la nulidad parcial de la sentencia apelada.

8.1 En cuanto a la sentencia y las formas previstas por el legislador, iniciamos con palabras de Jorge Walter Peyrano, en el cual expone que: "[...] la sentencia es un producto inescindible proveniente del razonamiento del juez, cuya delicada ingeniería hecha de varias partes estrechamente relacionadas entre sí y que se apoyan unas a otras no admite nulidades parciales; o se considera totalmente válida o es anulada por completo [...]" (sic). (Peyrano, Jorge W., "Sobre la Anulación Parcial de Sentencias", jurisprudencia Santafesina no 59, página 193 y siguientes). Lo anterior, encuentra sustento normativo en el art. 217 CPCM, que se refiere a los requisitos de la sentencia, su forma y contenido.

Y es que para entrar en materia, desde el ámbito doctrinal, en relación a las formalidades legalmente establecidas y sus efectos, se determina que: "[...] una sentencia que no satisface la necesidad de justicia, debe sustituirse por otra que la satisfaga. Pero la naturaleza especial de la sentencia, reclaman un nuevo elemento, la necesidad de certeza. Al lado de la necesidad de justicia, aparece la necesidad de firmeza, pues ésta exige que se declare de una vez cual es la justicia [...]" (sic). (Arrieta Gallegos, Francisco: "La Impugnación de las Resoluciones Judiciales", capítulo de las nociones previas, imprenta La Idea, pág. 5).

De acuerdo a José Garberí Llobregat, establece que: "[...] la sentencia de apelación, como es natural, podrá estimar o desestimar el recurso. En ese sentido mientras, mientras que la sentencia desestimatoria tendrá siempre un contenido análogo, es decir, el rechazo de las pretensiones del apelante principal, la sentencia estimatoria del recurso puede presentar diferentes contenidos a saber: a) Si la estimación lo es por la comisión de alguna infracción de derecho material en la resolución apelada, la sentencia de apelación resolverá por sí misma el conflicto planteado en la primera instancia, ya sin la infracción legal advertida; b) Lo mismo deberá hacerse cuando la estimación se deba a la comisión de una infracción de derecho procesal en la resolución apelada, pero siempre que dicha infracción, bien se haya cometido en la sentencia (una incongruencia), o bien sea de aquellas que resulten subsanables en la segunda instancia: y, c) si el defecto procesal acaecido en la primera instancia y cuya apreciación determina la estimación de recurso de apelación es insubsanable, o de aquellos que ocasionen la nulidad de las actuaciones o parte de ellas, el tribunal lo declarara así mediante providencia, reponiéndolas al estado en que se hallasen cuando la infracción se cometió. Lo anterior obliga a los órganos judiciales a tener que motivar la estimación del recurso de apelación en la apreciación de un vicio procesal, determinante de la nulidad de las actuaciones en una clase de resolución judicial, pro providencia, que ni siquiera ha de sujetarse en su estructura externa a la clásica y clarificadora distinción entre hechos, fundamentos de derecho y parte dispositiva, con lo que es lo más seguro es que el contenido de dicha providencia sea redactada cual si de un auto o sentencia se tratara, o las partes quedarían indefensas al desconocer de manera debidamente motivada las razones por las cuales el tribunal adopta tan radical decisión [...]" (sic). (Garberí Llobregat, José. "Los Procesos Civiles", tomo 2, editorial Bosch, año 2010, capítulo IV, denominado el modelo procedimental de segunda instancia en la nueva ley de enjuiciamiento civil, tema del contenido de la resolución, pág. 1829).

De acuerdo a Juan Montero Aroca: "[...] si la infracción procesal que se denuncia referida a la actividad desarrollada por el juez al dictar *sentencia, y el tribunal entendiera que dicha infracción se cometió, tras revocar la apelada en el particular de que se trate entrará a resolver sobre el fondo del asunto [...]" (sic). (Montero Aroca, Juan. "Los Recursos en el Proceso Civil", editorial Tirant Lo Blanch, Valencia, año 2001, capítulo V, sobre la Decisión del Recurso, pág. 263).*

Finalmente, en cita de Marcelo López Mesa, refiriéndose a la seguridad jurídica y la limitación de la declaración de nulidades, sostiene que: "[...] plasmar un esquema normativo rígido que prevea y fulmine de nulidad supuestos que, imaginariamente el legislador puede contemplar como dignos de una medida de última instancia tal la privación de efectos, total o parcial, sería tanto como poner un freno a la marcha de la economía por una limitación irresponsable de las fuerzas productivas. Existiendo valores en pugna, dignos todos de tutela, no cabe auspiciar una solución despojada de efectos prácticos [...] La facultad de declarar de oficio la nulidad de una sentencia es de naturaleza excepcional, pero ello no obsta a proceder a su invalidez por el tribunal de alzada, adolece de imprecisiones manifiestas y contiene omisiones que evidencian una deficiente técnica jurisdiccional [...] Cuando se trata de nulidades procesales, cuando los actos son irregulares por la inobservancia de preceptos de carácter imperativo, no solo porque se refieran al ejercicio de la jurisdicción, sino porque su falta de cumplimiento desnaturalizaría el sistema procesal establecido para dirimir las contiendas [...] La omisión de tratamiento de la cuestión esencial planteada, viola la garantía de defensa, pues el objetivo al que tienen los requisitos de los actos procesales es proteger el adecuado ejercicio del derecho de defensa. Así, determinada una desviación que coarte esta garantía, debe declararse la nulidad [...]" (sic). (Marcelo López Mesa. "Ineficacia y Nulidad de los Actos Jurídicos y Procesales", ediciones De Palma, año 1998, parte cuarta, reseña jurisprudencial, sobre las nulidades procesales, págs. 370 y siguientes).

8.2 En ese orden de ideas, en el caso en análisis se advierte una vulneración a lo dispuesto en el art. 516 CPCM, que regula lo relativo a la decisión en apelación sobre una infracción procesal, prescribiendo que: "si al revisar las normas o garantías del proceso aplicables a la sentencia impugnada se observara alguna infracción pero hubiera elementos de juicio suficientes para decidir, el tribunal anulará la sentencia apelada y resolverá sobre la cuestión o cuestiones que sean objeto del proceso. Si careciera de dichos elementos, anulará las actuaciones, devolviéndolas al momento procesal oportuno".

NO SE PUEDE DECLARAR LA NULIDAD DE UNA PARTE DE LA SENTENCIA, QUE ES UN TODO, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL INCISO FINAL DEL ART. 212 Y 217 CPCM, PUES NO EXISTE UNA DIVISIBILIDAD DE LA SENTENCIA

"Lo anterior, en virtud de que el tribunal de apelación lo que hizo fue declarar nula una parte del fallo de la sentencia, tal como si ésta no constituyera un solo cuerpo, cuando lo que procesalmente debía hacer, era darle cumplimiento a lo dispuesto en el precepto citado, es decir, al estimar el recurso, procedía anular la sentencia en su totalidad y resolver la cuestión objeto de debate. En otras palabras, pronunciando la que conforme a derecho corresponde.

Por lo que sobre la base de lo establecido en los arts. 232, 233 y 234 CPCM, se considera que dicha circunstancia constituye una nulidad, por cuanto no se puede declarar la nulidad de una parte de la sentencia, que es un todo, conforme a lo establecido en el inciso final del art. 212 y 217 CPCM, pues no existe divisibilidad de la sentencia. Ello constituye un supuesto de indefensión a las partes, privándoles un ejercicio efectivo del derecho recurrir sobre la proporción que bajo esa modalidad (anulación parcial) adquiriría firmeza.

8.3 En relación al ejercicio del derecho a recurrir, reconocido en el art. 501 CPCM, no se puede anular fragmentariamente una sentencia, ya que ésta es un producto inescindible proveniente del razonamiento de los juzgadores, cuya delicada ingeniería hecha de varias partes no admite nulidades parciales, pues, o se considera totalmente válida o es anulada por completo, porque así la parte agraviada podrá dar cumplimiento a lo requerido en el art. 511 CPCM. De otra manera, no tendría los insumos jurídicos necesarios para ejercer tal derecho.

Y es que por vía de principio, en el proceso civil, no es posible frente a una decisión judicial que sea portadora de una cierta estructura compleja, en su caso, anularla fragmentariamente, sin que ello necesariamente derive en la pérdida de estabilidad del resto de la resolución, afectándose con ello el derecho a recurrir de la parte agraviada; pues de corregirse el defecto que se estima en un primer momento, la sentencia ya no puede ser atacada mediante el mismo recurso.

Desde un punto de vista lógico, la sentencia, constituye un silogismo compuesto por una premisa mayor (ley), una premisa menor (el caso) y una conclusión o proposición (aplicación de la norma al caso concreto); el silogismo es una argumentación deductiva, un raciocinio en el cual por supuestas proposiciones o premisas se llega a una nueva proposición, calificándosele como la expresión perfecta del raciocinio perfecto, por lo que el acto procesal más importante de cualquier órgano jurisdiccional es la sentencia, la cual constituye la resolución del conflicto sometido a la consideración del juez. Éste es quien tiene que decidir la elección de la premisa mayor, sobre la cual se va a fundamentar la sentencia, si es que se presenta el problema de que haya más de una premisa posible, cada una de ellas vigentes en el ordenamiento jurídico positivo, pero las premisas son elegidas en función de lo que se estima como el fallo correcto, toda vez que con propiedad es posible afirmar que sentenciar no es conocer sino valorar.

Más allá del principio de conservación, en su formulación más lata, la conveniencia de preservar la eficacia, la validez de actos procesales, llevaría a un resultado perjudicial, pues trasladado al proceso, dicho principio tiende a consagrar valores de seguridad y firmeza, pues como lo expresa Couture, frente a la posibilidad de obtener actos procesales válidos y no nulos, se halla la necesidad de obtener actos procesales firmes, sobre los cuales pueda consolidarse el proceso, abarcando ello el derecho a recurrir.

Por lo tanto, se advierte que dicha actuación del tribunal de segunda instancia, confirmando unos literales de la sentencia de primera instancia y declarando nulos otros, contiene irregularidades procesales con la cual se origina una vulneración al derecho de defensa de las partes, al fragmentar su contenido, y con ello, se afecta el ejercicio efectivo del derecho de recurrir contra una resolución que ha sido fragmentada.

8.4 En ese sentido, debe tenerse en cuenta que para determinar la nulidad se debe atender a los principios de especificidad, trascendencia y de conservación, como lo dice el Código Procesal Civil y Mercantil en su capítulo séptimo.

Para el caso de mérito, conforme al principio de especificidad comprendido en el art. 232 lit. c) del cuerpo legal referido, la Cámara sentenciadora ha incurrido en una nulidad, al haber infringido el derecho de defensa de la parte impetrante, al igual que el derecho de recurrir, en los términos antes dichos.

De todo lo expuesto resulta evidente que la sentencia impugnada, atenta contra el derecho de defensa de la parte denunciante reconocido en el art. 11 de la Constitución, y en el art. 8 literal h, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación al supuesto de nulidad recogido en el art. 232 lit. c) CPCM, por lo que procede declarar de oficio la nulidad de la sentencia, todo ello en virtud de las razones expuestas en esta sentencia.

En lo que atañe a la trascendencia, se ha demostrado el grado de indefensión sufrido por la parte agraviada, al igual que no es posible conservar una parte de la sentencia, pues tal como se ha sostenido, esta es inescindible, constituye una unidad para ser revisada en la segunda instancia y casación."

LA CÁMARA NO DEBIÓ ANULAR PARCIALMENTE LA SENTENCIA APELADA, SINO RESOLVER SOBRE LA CUESTIÓN O CUESTIONES OBJETO DEL PROCESO, INCLUSO RESPECTO DE LOS CUALES ÚNICAMENTE DISPUSO ANULAR, DEBIENDO HABER CONOCIDO DEL FONDO DE LAS MISMAS

"9. Como corolario de lo anterior, atendiendo a las peticiones de la parte recurrente conforme a las formalidades del recurso de apelación, requeridas en el inc. 2° del art. 511 CPCM, basándose en la descripción de los hechos, fundamentos y razonamientos jurídicos que sostienen su inconformidad con el fallo dado por el tribunal de primera instancia, la Cámara respectiva debe confirmar, revocar, reformar o anular el mismo.

En el caso de autos, la Cámara Segunda de lo Civil de la Primera Sección del Centro, con sede en San Salvador, en apego a lo dispuesto en el art. 516 CPCM, al observar una infracción procesal y teniendo los elementos de juicio suficientes, no debió anular parcialmente la sentencia apelada, sino resolver sobre la cuestión o cuestiones objeto del proceso, incluso respecto de los cuales únicamente dispuso anular, debiendo haber conocido del fondo de las mismas.

Por consiguiente, dicho tribunal debe reponer la sentencia de mérito, cumpliendo con lo dispuesto en el precepto legal mencionado, resolviendo bajo el principio de congruencia y de motivación, a efecto de garantizar a las partes su derecho a la protección jurisdiccional.

Por otro lado, en virtud de que consta en el acta de audiencia de apelación que se anunció verbalmente el fallo, el día veintisiete de enero de este año, en el sentido emitido en la sentencia que será anulada, también es procedente su anulación, ello en aras de procurar una coherencia de las actuaciones realizadas en la segunda instancia, y que no afecta las alegaciones dadas por las partes en la

misma, sino únicamente esa parte de la audiencia que también está viciada con nulidad, por los razonamientos señalados en esta resolución, siendo posible dicho proceder, bajo el principio de conservación establecido en el art. 234 CPCM.

La reposición de la sentencia deberá realizarse dentro del plazo de ley comprendido en el art. 515 inc. 1° CPCM, el cual se computará a partir de la resolución mediante la cual se reciba este proveído.

Finalmente, se le advierte a la Cámara Segunda de lo Civil de la Primera Sección del Centro, que en lo sucesivo de sus actuaciones, en los procesos que se sometan a su conocimiento en apelación, dé cumplimiento al principio de legalidad regulado en el art. 3 CPCM y a lo preceptuado en el art. 516 CPCM, relativo a la decisión sobre la infracción procesal en apelación."

Sala de lo Civil, número de referencia: 86-CAC-2022, fecha de la resolución: 11/05/2022

NULIDAD PROCESAL

REQUISITOS PARA SU ADMISIÓN

"4. En virtud de lo antes dicho, esta Sala establecerá las bases de análisis tanto para la nulidad alegada como para la admisión del motivo invocado.

4.1 En cuanto a la denuncia de nulidad procesal de actuaciones en vía de recurso, para admitir la misma es necesario que se cumplan con determinados requisitos, entre ellos es necesario que se identifique el acto procesal que pretende anularse, el tipo de nulidad que adolece, las disposiciones legales que fueron inobservadas y que se sustente la indefensión sufrida, esto es, que se demuestre cómo la configuración del supuesto que da cabida a la anulación de actos procesales, afecta la esfera de los derechos o garantías procesales de la parte que la alega.

4.2 En el recurso de casación, se sostiene que en la alzada se denuncia la existencia de una nulidad que afecta el contrato de arrendamiento, respecto de la estructura del Hangar N° 22, ubicado en el inmueble del Estado (CEPA).

Advierten que el vínculo contractual entre el actor, señor HLLP y la Policía Nacional Civil, adolece de nulidad, con base en el art. 10 y 1553 del Código Civil (en lo que sigue, CC), no obstante haberse alegado excepciones procesales que no fueron analizadas, las cuales estaban orientadas en sostener que el demandante no tenía facultades legales para subarrendar el inmueble donde se ubica el hangar, el cual es propiedad del Estado.

4.3 En virtud de lo anterior, se advierte que en el recurso de mérito lo que se sostiene es una nulidad de carácter sustantiva basada en el art. 1553 CC, respecto del documento base de la pretensión, lo cual no constituye un supuesto de nulidad procesal que habilite una denuncia de parte vía recursiva.

A partir de lo anterior, se observa que no se ha identificado ningún acto procesal específico sobre el cual tenga que analizarse su nulidad, tampoco hay

argumentos tendentes a demostrar la configuración del supuesto de nulidad y la indefensión sufrida por actos procesales ejecutados con inobservancia de la normativa procesal.

Por consiguiente, no se admitirá la denuncia de nulidad fundamentada en el art. 238 CPCM."

Sala de lo Civil, número de referencia: 13-CAC-2022, fecha de la resolución: 09/03/2022

NULIDADES ALEGADAS EN EL RECURSO DE CASACIÓN

SOLAMENTE RESULTA VIABLE LA DENUNCIA DE NULIDAD EN RECURSOS QUE SEAN PROCEDENTES Y QUE CUMPLAN CON LOS REQUISITOS DE ADMISIÓN

"4. Por otra parte, en cuanto a la nulidad alegada por la falta de notificación al demandado de dos resoluciones judiciales, debe tenerse en cuenta que esta Sala ya se ha pronunciado en el incidente de casación identificado con la ref. 112-CAC-2021, respecto de la procedencia y admisión de dicha denuncia de nulidad en vía de recurso, en el sentido de que debe cumplirse con las formalidades de ley que habilitan al tribunal para el conocimiento del asunto.

Es decir, que solamente resulta viable la denuncia de nulidad en recursos que sean procedentes y que cumplan con los requisitos de admisión, por ende, deben concurrir los presupuestos procesales con los que se determina la procedencia del recurso (competencia, legitimación, agravio y recurribilidad de la resolución) y cumplirse con los requisitos de ley (motivo específico, disposición legal infringida y concepto de la infracción), para examinar la nulidad alegada.

Por lo tanto, no procede la denuncia de nulidad alegada, debido a que tal como se ha dicho antes, no se ha configurado el recurso de casación en este tipo de procesos [de expropiación], lo cual implica que no hay una vía procesal para denunciar la nulidad alegada."

Sala de lo Civil, número de referencia: 124-CAC-2022, fecha de la resolución: 04/05/2022

NULIDADES DE INSCRIPCIONES REGISTRALES

AL HABERSE DECLARADO INADMISIBLE EL RECURSO DE CASACIÓN, RESPECTO AL MOTIVO RELATIVO A LAS NULIDADES DE INSCRIPCIONES, SE CONFIRMA LA DESESTIMACIÓN DE LAS MISMAS, DEBIDO A QUE CON LA INADMISIÓN DEL RECURSO DE CASACIÓN ADQUIRIÓ FIRMEZA ESA DECISIÓN

"5. Por otra parte, siendo que estamos en presencia de una acumulación de procesos, es importante establecer el efecto que produce la sentencia que hoy se pronuncia, con relación a las pretensiones de: **a) nulidad de inscripción de título supletorio**, en contra del señor RAGV; **b)nulidad de inscripción de**

compraventa de inmueble y nulidad de inscripción de remedición, en contra la sociedad Cooperativa de Desarrollo de Oriente, de Responsabilidad Limitada, que se abrevia Cooperativa de Desarrollo de Oriente de R.L., representada por el licenciado AFGT conocido por AGT; y, **c) nulidad de inscripción de adjudicación en pago,** en contra del señor ROP.

5.1 Lo anterior, en virtud de que si bien es cierto fueron impugnadas tanto la decisión respecto de lo resuelto en el proceso común reivindicatorio de dominio, como lo decidido en las pretensiones de nulidades de inscripciones, el recurso de casación fue inadmitido en lo referente a las pretensiones de nulidades, por lo que es importante hacer la siguiente acotación.

Como ha quedado señalado, se verificó una acumulación de dos procesos pendientes ante un mismo tribunal, en virtud de estarse tramitando separadamente, ya que entre estos existía conexión fáctica y jurídica en los objetos procesales de los mismos.

Lo anterior, con el fin de evitar sentencias con fundamentos contradictorios e incompatibles e mutuamente excluyentes.

En ese sentido, se destaca que al haberse declarado inadmisible el recurso de casación, respecto al motivo relativo a las nulidades de inscripciones, se confirma la desestimación de las mismas, debido a que, con la inadmisión del recurso de casación, adquirió firmeza esa decisión."

PROCEDE LA ANULACIÓN DE TODO LO ACTUADO EN LO REFERENTE A LA ACCIÓN REIVINDICATORIA

"Ahora bien, no obstante, la apariencia fáctico y jurídica existente en los objetos de ambos procesos, por la razón que se estaba controvirtiendo, en el proceso común de nulidades de inscripciones, los títulos sobre los cuales le devienen la supuesta titularidad del hoy actor señor ROP, que sirve como presupuesto de la acción reivindicatoria, es que diera lugar a configurarse una litispendencia. Siendo esa la justificación de la acumulación.

5.2 Por lo anterior, siendo que el efecto que se produce al casar la sentencia, es la declaratoria de nulidad de la misma. para el caso en particular, por ser un proceso al que se le acumuló un proceso con otras pretensiones, las que por el hecho de haberse declarado inadmisible la casación en lo tocante a ellas, adquirió firmeza tal decisión, con base en el principio de conservación, regulado en el art. 234 inc, 2° CPCM, procede la anulación de lo actuado en lo referente a la acción reivindicatoria, al disponer dicho artículo lo siguiente: "Si la nulidad de una parte de un acto, no afectará a las demás del mismo acto que sean independientes de aquella".

Lo anterior, en virtud de que en la acumulación de procesos, la sentencia conformó oportunamente una decisión que integró los procesos, decidiéndose las distintas pretensiones, pero en este caso en particular se advierte que el fallo puede dividirse, ya que el pronunciamiento relativo a las nulidades alegadas, era

razonablemente previo, por haberse cuestionado el título con el cual se pretendía ejercer la acción reivindicatoria, pudiendo resolverse las pretensiones por separado, de conformidad con el art. 217 inc. CPCM"

Sala de lo Civil, número de referencia: 270-CAC-2022, fecha de la resolución: 17/11/2022

PETICIÓN DE HERENCIA

PROCEDE CASAR EL AUTO IMPUGNADO, POR INTERPRETACIÓN ERRÓNEA DEL ARTÍCULO 1186 DEL CÓDIGO CIVIL, YA QUE TENDRÁ LEGITIMACIÓN PARA ACTUAR COMO PARTE DEMANDANTE CUALQUIER PERSONA QUE PRUEBE POSEER VOCACIÓN SUCESORAL RESPECTO DE LA HERENCIA DE QUE SE TRATA

"IV. Análisis del recurso por infracción de ley, por el motivo relativo a la aplicación errónea de la norma que regula el supuesto que se controvierte, con infracción del art. 1186 CC

1. La norma jurídica que se señala como erróneamente aplicada, establece a quien corresponde la titularidad de la acción de petición de herencia, y delimita el objeto sobre el cual recae el reclamo en dicha acción, en el sentido siguiente: "El que probare su derecho a una herencia, ocupada por otra persona en calidad de heredero, tendrá acción para que se le adjudique la herencia, y se le restituyan las cosas hereditarias, tanto corporales como incorporales; y aun aquellas de que el difunto era mero tenedor, como depositario, como datario, prendario, arrendatario, etc., y que no hubieren vuelto legítimamente a sus dueños".

2. Al analizar el art. 1186 CC, la Cámara advierte que el objeto de la acción de petición de herencia es el reconocimiento de la calidad de heredero y la restitución de los bienes hereditarios. Y en ese sentido, concluye que para la parte actora se encuentra obligada a comprobar que ha sido declarada heredera, ya sea judicialmente o vía notarial.

Aclara el tribunal en mención, que la palabra "heredero" no se refiere a los llamados a la sucesión, y que poseen vocación sucesoria, sino que implica el haber obtenido la declaratoria de heredero mediante el procedimiento judicial o de jurisdicción voluntaria debida.

Según la Cámara de segunda instancia, al no haber comprobado las demandantes, que gozan de la calidad de herederas mediante la declaratoria correspondiente, carecen de legitimación para plantear la demanda de petición de herencia.

3. El doctor [...] afirma que existe aplicación errónea del art. 1186 CC por parte del tribunal de segunda instancia, pues en su opinión, de dicha norma se desprende que la acción de petición de herencia corresponde a quien compruebe tener mejor derecho en una sucesión.

Sostiene que al tratarse de una sucesión intestada, y ser sus representadas hijas del causante, les asiste mejor derecho frente al actual titular, quien deriva su derecho por cesión hereditaria otorgada por un hermano del causante.

La parte recurrente reafirma que la Cámara yerra al sostener que dicha acción corresponde únicamente al heredero que ha sido declarado como tal.

4. Con relación a lo expuesto, esta Sala advierte lo siguiente:

4.1 El vicio de aplicación errónea de ley que se atribuye a la Cámara, se presenta cuando el juzgador al analizar un precepto legal que es pertinente para resolver el caso concreto, lo restringe, amplía o altera su sentido.

Si lo restringe, excluye la aplicación de la disposición legal, y por ende, no subsume el caso en el supuesto normativo contemplado en ella. En cambio, cuando lo amplía, estaría incluyendo mal el caso dentro de un precepto legal que no corresponde. También puede alterar su sentido, cuando no ha sido bien interpretada alguna expresión jurídica de su contenido, lo que conllevaría a un análisis errado de la norma.

En este recurso, el análisis debe centrarse en determinar si se ha restringido el sentido de la disposición legal señalada como infringida, por cuanto la legitimación en la acción de petición de herencia, se ha limitado a los herederos que han sido declarados mediante vía notarial o judicial.

4.2 Al respecto, debe tenerse en cuenta que esta Sala, ya ha sentado criterio en cuanto a la interpretación del art. 1186 CC. Así, en sentencia de las doce horas un minuto del día treinta y uno de enero de dos mil veinte, pronunciada en el incidente de casación clasificado con la referencia 314- CAC-2018; se sostuvo que para ejercer la acción de petición de herencia no es necesario disponer de una declaratoria de heredero, a favor del interesado sino que es suficiente, para estar debidamente legitimado, comprobar, con los documentos pertinentes, la vocación sucesora) que se posee.

A ese respecto esta Sala sostuvo: "[...] A juicio de este tribunal, no sería necesaria la calidad de heredero, sino comprobar tenerla, ya que por razones de urgencia, tal calidad la comprobará el interesado, en el juicio de petición de herencia [...] la petición de declaratoria de heredero va imbíbita dentro de la acción o pretensión de petición de herencia [...] lo que el artículo 1186 del Código Civil requiere, para iniciar la acción de petición de herencia, es que el actor demuestre su vocación sucesoral, lo cual se comprueba en el presente proceso con la cesión del derecho hereditario que en la mortual de la señora AH, conocida por AH, conocida por otros nombres, tenía la señora AJBSB, documento que aparece agregado a folios 10, 11 y 12, de la primera pieza principal y será en el desarrollo del proceso que el actor comprobará que es heredero preferente de la señora AH, conocida por AH, conocida por otros nombres, y en la sentencia que recaiga en tal proceso, se declarará, en su caso, que el actor es heredero preferente y desplazará de su lugar a la heredera declarada señora MTBP [...]" (sic).

4.3 En ese sentido, debe tenerse en cuenta que la acción de petición de herencia da lugar a un proceso en el que se discute la calidad de heredero que concurre sobre las partes procesales, y se encamina precisamente a invalidar la condición de heredero de que goza el demandado, si la parte actora demuestra que es titular de un derecho preferente o invalida su condición de heredero único, si el demandante goza de un derecho concurrente al del heredero que ocupa la herencia.

Del texto del art. 1186 CC, con toda claridad se extrae que el extremo a probar por la parte actora para legitimar su actuación en el proceso de petición de herencia es su vocación sucesora), es decir, la condición que le permite suceder a otro.

La norma legal en análisis concede titularidad para ejercer la acción de petición de herencia al "que probare su derecho a una herencia", y tal derecho puede ser acreditado por quien tiene vocación sucesoral. En el caso de la sucesión intestada -como ocurre en el presente proceso-, se deberán comprobar los vínculos de consanguinidad u otros que la ley reconoce como habilitantes para suceder al causante.

En adición a lo anterior, la estimación de la acción de petición de herencia conlleva la declaratoria de heredero del que ha comprobado un mejor derecho.

En consecuencia, esta Sala concluye que la Cámara ciertamente ha interpretado de manera equivocada el art 1186 CC, por lo que procede casar el auto objeto de impugnación.

V. Resolución que corresponde

Al proceder la casación del auto definitivo impugnado, por el motivo de fondo relativo a la errónea aplicación del art. 1186 CC, tal como se concluyó en el considerando IV de esta sentencia, con base en el art. 537 inc. 1° del Código Procesal Civil y Mercantil (en adelante, CPCM), se justifica la resolución que corresponde en los términos siguientes:

Esta Sala, reafirma la interpretación que del art. 1186 CC ha efectuado en anterior jurisprudencia, en el sentido de que tendrá legitimación para ser parte interviniente en un proceso de petición de herencia, todo aquel que pruebe su derecho a una herencia, es decir que podrá constituirse como demandante cualquier persona que posea vocación sucesora) respecto de la herencia de que se trata, debiendo acreditar para ello el grado de consanguinidad (padre, hijo, etc.) o la calidad (cónyuges) respecto del causante, en caso de tratarse de una sucesión intestada; o bien presentar el testamento respectivo, en el supuesto de una sucesión testamentaria.

En el caso en análisis, las señoras GOGR y EIGR, tienen vocación en la sucesión intestada del señor SBG conocido por SG, como hijas del causante, la cual ha sido comprobada con las certificaciones de sus respectivas partidas de nacimiento, que corren agregadas a folios 14 y 15 de la pieza de primera instancia.

En el desarrollo del proceso de petición de herencia corresponderá a las demandantes comprobar que tienen mejor derecho a la herencia que quien la ocupa actualmente en calidad de heredero.

En caso de prosperar la demanda interpuesta y dictarse sentencia en favor de la parte actora, se procederá a declarar que éstas son herederas preferentes, invalidándose el título de heredero de la parte demandada.

Como consecuencia de los razonamientos expuestos, al carecer de fundamento legal la declaratoria de improponibilidad de la demanda intentada por el doctor [...], es procedente anular la decisión de segunda instancia, en los térmi-

nos expuestos y ordenar al tribunal de primera instancia que realice el examen de admisión de la demanda, de tal manera que, de cumplir con los requisitos de ley, disponga su trámite y decida lo pertinente durante la sustanciación del proceso.

Lo anterior, debido a que únicamente se ha realizado un pronunciamiento respecto de la proponibilidad de la pretensión, en lo que concierne a la legitimación activa de la parte actora, siendo viable que se examine por el tribunal de primera instancia el cumplimiento de los requisitos formales contenidos en el art. 276 CPCM."

Sala de lo Civil, número de referencia: 103-CAC-2022, fecha de la resolución: 12/05/2022

PRESCRIPCIÓN EXTINTIVA DE LA ACCIÓN EJECUTIVA

EL PLAZO DE PRESCRIPCIÓN, TANTO LA ACCIÓN EJECUTIVA COMO LA ORDINARIA, DEBE CONTABILIZARSE A PARTIR DEL MOMENTO EN QUE LA OBLIGACIÓN SE VUELVE EXIGIBLE

"V.- Análisis del motivo infracción de ley, por aplicación errónea del art. 995 CCom

1. El precepto que se invoca como infringido, define los plazos de prescripción, y en lo pertinente, establece: "Los plazos de la prescripción mercantil son los siguientes: IV.- Prescribirán en cinco años, las acciones derivadas de los contratos de crédito, contados a partir de la fecha del último reconocimiento de la obligación por parte del deudor; en el mismo plazo prescribirán los otros derechos mercantiles [...]" (art. 995 CCom). [...]

VI. Bajo las nociones expuestas y la relación sucinta de las alegaciones realizadas por el recurrente, se procede al estudio de los motivos de infracción en el orden señalado anteriormente.

En primer término, debe tenerse en cuenta que el submotivo invocado se configura cuando el juzgador comete errores al interpretar una disposición legal aplicable al caso. También puede presentarse cuando, al consultar el espíritu del legislador, no se concluyó con el verdadero sentido, o porque no se supo resolver la contradicción entre normas, o porque tratándose de una norma sujeta a varias interpretaciones, se escogió la que menos convenía para resolver correctamente, el asunto de que se trata.

Sobre los razonamientos expuestos, esta Sala hace las siguientes consideraciones:

Es imprescindible destacar, que la Sala mantiene el criterio adoptado en la sentencia de las ocho horas doce minutos del cuatro de octubre de dos mil veintiuno, en el caso bajo referencia 76-CAC-2021, en la cual se establece, lo siguiente: "[...] 4.2 Al respecto, se advierte que dicha interpretación ha sido sostenida por esta Sala, en otro caso semejante, en el que se concluyó, al igual que la Cámara, que la acción ordinaria prescribe en cinco años en el mismo término

que la acción ejecutiva, aplicándose los plazos regulados en el art. 995 C.Com, debido a la finalidad de la sociedad demandante, así;[...] 1) En materia mercantil el Art. 995 C.Com. ha definido expresamente los plazos que regirán la prescripción, sin hacer distingos entre la acción ejecutiva y ordinaria, por lo que será aplicable dicho plazo para ambas acciones [...]"(sic)."

En igual sentido, se ha sostenido mediante sentencia de las nueve horas diecinueve minutos del diez de noviembre de dos mil diecisiete, en el caso bajo referencia 130-CAM-2016, en la cual se estableció que:" [...] en materia mercantil, es el art. 995 C.Com, la única norma que define los plazos para la prescripción, no obstante, dicha disposición no hace referencia a la vía intentada, si es ejecutiva u ordinaria; razón por la cual, es aplicable supletoriamente, las reglas del derecho común reconocidas por la legislación mercantil. Al respecto establecen los arts. 2253 inc. 2° y 2254 inc. 2° ambos CC, primero, que el tiempo de la prescripción cuenta desde que la acción o derecho ha nacido; es decir, a partir del momento en que la obligación se volvió exigible; y, la segunda dispone: "Cuando existan simultáneamente la acción ejecutiva y la ordinaria, la prescripción de ésta correrá al mismo tiempo que la de aquella". En tal virtud, haciendo una integración del derecho, aplicando supletoriamente las normas que rigen en materia civil, podemos concluir además de lo apuntado con anterioridad que: a) Tanto la acción ejecutiva como la ordinaria, deberá contabilizarse a partir del momento en que la obligación se vuelve exigible; b) Siendo un hecho común el que establece el punto de partida para contabilizar dicho plazo, éste correrá de forma simultánea para ambas acciones [...]" (sic).

Así, se ha delimitado por esta Sala que la forma correcta de interpretar la figura de la prescripción en el derecho mercantil, es que el plazo de prescripción, tanto la acción ejecutiva como la ordinaria (ahora común), debe contabilizarse a partir del momento en el que la obligación se vuelve exigible; y, que al ser un hecho común el que establece el punto de partida para contabilizar dicho plazo, (cinco años); este transcurre de forma simultánea para ambas acciones.

En el caso concreto, es necesario tomar en cuenta que ha transcurrido el tiempo para la prescripción de la acción, tal como se estableció por el Juzgado de lo Civil de Mejicanos en la sentencia de las once horas del diecinueve de noviembre de dos mil dieciocho, al declarar la prescripción extintiva de la vía ejecutiva respecto de la obligación surgida del mutuo hipotecario celebrado entre Scotibank El Salvador, Sociedad Anónima y los señores […]. En consecuencia, el plazo para ejercer la acción común transcurrió simultáneamente.

De esa manera, al sostener la Cámara que no se alegó en la contestación de la demanda por parte de la defensora pública del demandado, la prescripción de la acción ordinaria; y que sólo se refirió a la prescripción de la acción ejecutiva; el tribunal sentenciador no ha aplicado debidamente la norma en análisis, en el sentido de que el plazo de prescripción, en materia mercantil, (cinco años en el caso analizado), debe contabilizarse de manera simultánea tanto para la acción ejecutiva como la ordinaria, siendo viable por consiguiente, estimar la prescripción alegada por el demandado.

Por lo que, se concluye, que la Cámara no interpretó correctamente el precepto que el recurrente ha citado como infringido, habiéndole dado un efecto más allá de lo que establece la norma invocada y en base al criterio jurisprudencial sostenido por esta Sala, se configura el error de fondo por aplicación errónea y esta Sala procederá a casar la sentencia por dicho motivo."

LAS DISPOSICIONES LEGALES INVOCADAS, TANTO CIVILES COMO MERCANTILES, NO PREVALECEN O PREDOMINAN EN EL CASO BAJO EXAMEN, SINO QUE SE APLICAN DE MANERA SUPLETORIA PARA REALIZAR LA FORMA DEL PLAZO DE LA PRESCRIPCIÓN

"VII. En lo concerniente a la aplicación indebida del art. 2254 inc. 2° CC., se harán las siguientes consideraciones:

El art. 2254 inc. 2° CC, contiene la regulación sobre la prescripción de las acciones ejecutivas y ordinarias, cuando ambas existen de manera simultánea, en los siguientes términos: "Cuando existan simultáneamente la acción ejecutiva y la ordinaria, la prescripción de ésta correrá al mismo tiempo que la de aquélla; de suerte que transcurridos los diez años de la acción ejecutiva la ordinaria durará solamente otros diez [...]".

La Cámara, al expresar los fundamentos jurídicos de su sentencia, menciona: "Y aunque, en el Código de Comercio no se establezca el plazo de prescripción de la acción ordinaria, se aplican supletoriamente los Arts. 2253 Inc. 2° y 2254 Inc. 2° ambos del Código Civil, sólo en cuanto a las reglas establecidas en esas disposiciones legales, respecto a interpretar el cómputo de la prescripción y cuando hay simultaneidad de las acciones ejecutiva y ordinaria, no así respecto del plazo de prescripción, pues como muy bien refieren los impetrantes, se aplica el Art. 995 del Código de Comercio; por lo que, haciendo una integración del derecho, tanto la acción ejecutiva como la ordinaria deberá contabilizarse a partir del momento en que la obligación se vuelve exigible y siendo un hecho común el que establece éste, el punto de partida para contabilizar ese plazo, correrá de forma simultánea para ambas acciones, esto es que el término de la prescripción de la acción ejecutiva mercantil es el mismo plazo de la acción ordinaria [...](sic)".

El submotivo de fondo invocado se configura cuando las disposiciones legales aplicadas no corresponden al caso o asunto sometido a conocimiento en la segunda instancia.

El apoderado de los señores […], pretende atribuir una aplicación indebida del art. 2254 CC, porque la Cámara consideró, que se pueden aplicar supletoriamente disposiciones civiles a un régimen especial de carácter mercantil.

Advierte el recurrente, que dicho precepto legal no establece dentro de su contenido que deba de aplicarse como fuente de valoración a las obligaciones mercantiles, por lo que el efecto de la prescripción del Código Civil en cuanto a consecuencias, no es compatible en el presente proceso al no encuadrarse los hechos contenidos en el mismo.

Así las cosas, es sumamente importante advertir que el sentido de lo que establecen los arts. 2253 inc. 2° y 2254 inc. 2° ambos CC, en los casos relativos

a la prescripción de las acciones reguladas conforme al derecho civil, resultan útiles para satisfacer supletoriamente el vacío normativo del art. 995 CCom, por lo cual, se conforma una integración del derecho, aplicando supletoriamente ambas disposiciones legales que rigen en materia civil, disponiendo en numerosa jurisprudencia, que tanto la acción ejecutiva como la ordinaria, deberá contabilizarse a partir del momento en que la obligación se vuelve exigible, pero tomando en cuenta que es un hecho común el que establece el punto de partida para contabilizar dicho plazo, por lo que éste correrá de forma simultánea para ambas acciones.

Por lo tanto, la hipótesis contenida en el inc. 2° del art. 2254 CC, es aplicable al caso analizado, debido a que dichas disposiciones legales no prevalecen o predominan en el caso bajo examen, sino que se aplica de manera supletoria para realizar la forma de cómputo de la prescripción con la distinción de que se tiene un plazo común para la acción ejecutiva y ordinaria (ahora común) que transcurre simultáneamente.

Por lo cual, no habiéndose configurado la infracción de fondo contenida en el submotivo aplicación indebida, no se casará la sentencia por este submotivo."

PROCEDE CASAR LA SENTENCIA CONFIRMATORIA RESPECTO DE LA PRETENSIÓN DE EXISTENCIA DE OBLIGACIÓN MERCANTIL

"VIII. Resolución que corresponde:

Como consecuencia de lo anterior, esta Sala concluye que procede casar la sentencia confirmatoria respecto de la pretensión de existencia de obligación mercantil entre los ahora recurrentes y el Banco Cuscatlán de El Salvador, Sociedad Anónima, (antes Scotiabank El Salvador, Sociedad Anónima).

En el caso que se juzga, se observa que el apoderado de la parte actora, presentó la demanda de existencia de obligación a las nueve horas cuarenta y cinco minutos del día diecisiete de marzo de dos mil veinte, tal como consta en la constancia de recepción de demanda presentada a folios […], adjuntando a dicho libelo, los mencionados documentos base de la pretensión.

Evocaremos entonces la interpretación que ha sostenido esta Sala, en el que se concluye que la acción ordinaria prescribe en cinco años, en el mismo término que la acción ejecutiva, aplicándose los plazos delimitados por el art. 995 CCom, debido a la finalidad de la sociedad actora.

En ese mismo sentido, el plazo se computa desde que la acción o derecho ha nacido, según lo preceptuado en el inc. 2° del art. 2253 CC, siendo en el caso de mérito, que según la demanda, el derecho de cobrar las sumas de dinero adeudadas se volvió exigible, desde el día siguiente a aquel en que los demandados incurrieron en mora, es decir, el VEINTINUEVE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL SIETE, por lo que el término de CINCO AÑOS que preceptúa el art. 995 CCom, finalizó el día VEINTINUEVE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DOCE.

Ahora bien, los arts. 2253 inc. 2° y 2254 inc. 2° ambos CC, establecen que el tiempo de la prescripción cuenta desde que la acción o derecho ha nacido, es

decir, a partir del momento en que la obligación se volvió exigible. La segunda preceptúa lo siguiente: "Cuando existan simultáneamente la acción ejecutiva y la ordinaria, la prescripción de ésta correrá al mismo tiempo que la de aquella".

Esta Sala ha previsto la integración del derecho a través de la aplicación supletoria de las normas que rigen en materia civil, según lo dispuesto por el legislador, por tanto, se concluye que el plazo de prescripción; tanto la acción ejecutiva como la ordinaria, debe contabilizarse a partir del momento en que la obligación se vuelve exigible; y, siendo un hecho común el que establece el punto de partida para contabilizar dicho plazo, este corre de forma simultánea para ambas acciones.

Por consiguiente, desde la fecha veintinueve de septiembre de dos mil siete, como fecha en que los aludidos deudores incurrieron en mora, hasta la fecha de la presentación de la demanda, habían transcurrido DOCE AÑOS SEIS MESES, razón por la cual es notorio que la acción incoada de existencia de obligación derivada del crédito otorgado a favor del banco demandante, ya se encontraba prescrita; por lo que es viable estimar la prescripción de la obligación mercantil alegada a folios […] de la contestación de la demanda, en virtud de la interpretación acogida por esta Sala en cuanto a la contabilización del plazo de manera simultánea o paralela para ambas acciones, es decir, tanto de la acción mercantil como la ordinaria (ahora común)."

Sala de lo Civil, número de referencia: 27-CAM-2022, fecha de la resolución: 07/04/2022

PRESCRIPCIÓN EXTINTIVA DE LA ACCIÓN HIPOTECARIA

ESTA SALA ADVIERTE QUE LA CÁMARA INCURRE EN UN ERROR AL INOBSERVAR EL PLAZO DE VENCIMIENTO DE LA HIPOTECA ABIERTA

"Esta Sala se ha pronunciado respecto de la prescripción como forma de extinción de las acciones en materia mercantil, en el sentido siguiente: "[...] en materia mercantil, es el Art. 995 C.Com. la única norma que define los plazos para la prescripción, no obstante, dicha disposición no hace supletoriamente, las reglas del derecho común reconocidas por la legislación mercantil. Al respecto establecen los Arts. 2253 inc. 2°y 2254 inc. 2° ambos C.C. que el tiempo de la prescripción cuenta desde que la acción o derecho ha nacido, es decir, a partir del momento en que la obligación se volvió exigible; y, la segunda dispone: Cuando existan simultáneamente la acción ejecutiva y la ordinaria, la prescripción de ésta correrá al mismo tiempo que la de aquella, en tal virtud, haciendo una integración del derecho, aplicando supletoriamente las normas que rigen en materia civil, podemos concluir: 1) En materia mercantil el Art. 995 C. Com. ha definido expresamente los plazos que regirán la prescripción, sin hacer distingos entre la acción ejecutiva y sumaria, por lo que será aplicable dicho plazo para ambas acciones. 2) Tanto la acción ejecutiva como la sumaria, deberá contabili-

zarse a partir del momento en que la obligación se vuelve exigible; 3) Siendo un hecho común el que establece el punto de partida para contabilizar dicho plazo, éste correrá de forma simultánea para ambas acciones" (ref 130-CAM-2016, sentencia dictada a las nueve horas diecinueve minutos del diez de noviembre de dos mil diecisiete).

Dicho criterio jurisprudencial, ha sido sostenido por esta Sala recientemente y en una manera más amplia, en la sentencia dictada a las ocho horas doce minutos del cuatro de octubre de dos mil veintiuno, ref. 76-CAC-2021, en la cual se estableció que en materia mercantil el art. 995 CCom, es la única norma que define los plazos para prescripción; es decir, deberá entenderse según las reglas del derecho común, específicamente como lo prevé los arts. 2253 inc. 2° y 2254 inc. 2° ambas CC, que se desprenden dos acciones la ejecutiva o la ordinaria.

En la citada sentencia se determinó que tanto el plazo de prescripción de la acción ejecutiva, como el de la ordinaria, deben contabilizarse a partir del momento en el que la obligación se vuelve exigible; y, que al ser común el punto de partida para contabilizar dicho plazo, -es decir, cinco años en materia mercantil-, este correrá de forma simultánea para ambas acciones.

En el caso analizado, es necesario tomar en cuenta que, conforme a lo expuesto en la demanda y la contestación de esta, se tramitó un proceso anterior; y, según fotocopia de sentencia agregada a folios […], ya existía declaratoria de prescripción y extinción de la acción ejecutiva de las acciones derivadas de los mutuos suscritos por el señor […], a favor del BANCO [...].

Siendo así, es importante advertir que la extinción de la acción ejecutiva se produjo con relación a los mutuos que se suscribieron el treinta y uno de mayo de mil novecientos noventa y cinco, y el cinco de marzo de mil novecientos noventa y siete. Las obligaciones que surgieron de los mismos se garantizaron a través de la hipoteca abierta que es objeto del presente proceso, la cual tiene como plazo de vencimiento el treinta y uno de mayo de dos mil veinte.

De ahí que, el actor pretende en este proceso la extinción de la hipoteca abierta, la cual sufrió una modificación respecto a su plazo el veintitrés de febrero de dos mil uno, por la que su vencimiento se pactó para el día treinta y uno de mayo de dos mil veinte. Es así como, el art. 2180 inc. 3° CC, habilita al deudor (actor en este proceso) para pedir la extinción por haber vencido el plazo, dado que la mencionada norma expresamente con relación a la hipoteca prevé: "Se extingue además por la llegada del día hasta el cual fue constituida".

Con base en lo dispuesto en la citada norma y conforme a los hechos antes relacionados, esta Sala advierte que la Cámara incurre en un error al inobservar el plazo de vencimiento de la hipoteca abierta.

El error surge a partir de la aplicación que hace del art. 1554 CCom, al concluir literalmente: "[…] que la hipoteca abierta pervive aunque haya expirado el plazo para el cual se contrato, si existe por lo menos una obligación principal garantizada, y se extinguirá junto con aquella, porque nuestro sistema hipotecario como ya se dijo la característica esencial de la hipoteca es que ésta constituye un derecho accesorio, consecuentemente, la extinción de la obligación asegu-

rada implica la extinción de la hipoteca, tal como lo establece el art. 2180 CC, al establecer que la hipoteca se extingue junto con la obligación principal" (sic).

Precisamente porque en el caso de estudio, como se ha indicado anteriormente en relación con los créditos garantizados con la hipoteca abierta, fueron declarados prescritas y extinguidas las acciones ejecutivas que derivaban de dichas obligaciones, y no se ha determinado en el proceso, que exista otra u otras obligaciones distintas de aquellas, que estuvieran garantizadas con la referida hipoteca y, por el contrario, quedó establecido que las acciones dimanadas de los créditos se encuentran prescritas y el plazo de la garantía hipotecaria ya ha vencido.

En ese sentido, es pertinente corregir la aplicación que ha hecho la Cámara, pues en este caso la hipoteca abierta subsistiría siempre y cuando la acción que deriva de la obligación, no hubiere prescrito; y siempre que no existan otras obligaciones que se garanticen dentro del plazo de vigencia de la hipoteca.

Así las cosas, esta Sala concluye que se ha configurado la aplicación errónea en relación al art. 1554 CCom, motivo por el cual se impone casar la sentencia impugnada y así se declarará."

PROCEDE ACCEDER A LA PRETENSIÓN DEL ACTOR, POR CUANTO NO SÓLO HA VENCIDO EL PLAZO DE LA HIPOTECA ABIERTA, SINO QUE LAS ACCIONES DERIVADAS DE LAS OBLIGACIONES CREDITICIAS RELACIONADAS HAN SIDO DECLARADAS PRESCRITAS JUDICIALMENTE

"V. Justificación de la sentencia

Siendo que la sentencia recurrida será casada por el motivo de infracción de ley, consistente en aplicación errónea de la norma, específicamente del art. 1554 CCom, debe pronunciarse la que corresponde, de acuerdo a las consideraciones que se exponen a continuación.

V.1 El proceso declarativo común de extinción de hipoteca, sus modificaciones y cancelación registral, fue promovido por el señor […], representado por la licenciada [...], en contra del BANCO [...], que fue representado por los licenciados [...].

La pretensión del demandante es que se declare la extinción de la hipoteca abierta, sus modificaciones y la cancelación registral de la misma, con fundamento en el art. 2180 CC, por haber expirado el término para lo que fue constituida.

Según la exposición de los hechos en la demanda, el señor […], suscribió dos mutuos, a favor del Banco de [...]. El primer contrato se suscribió el treinta y uno de mayo de mil novecientos noventa y cinco, por la cantidad de cien mil colores, equivalentes a once mil cuatrocientos veintiocho dólares con cincuenta y siete centavos de dólar de los Estados Unidos de América, para el plazo de quince años; y el segundo contrato se otorgó el cinco de marzo de mil novecientos noventa y siete, por la cantidad de sesenta mil colones, equivalentes a seis mil ochocientos cincuenta y siete dólares de los Estados Unidos de América con catorce centavos de dólar.

En relación con los créditos antes relacionados, el actor señala que por sentencia del Juzgado Primero de lo Civil y Mercantil de esta ciudad, dictada a las ocho horas del tres de enero de dos mil veinte, se declararon prescritas y extinguidas las acciones ejecutivas derivadas de dichas obligaciones, y que dicha sentencia quedó firme el nueve de marzo de dos mil veinte. Que no hubo pronunciamiento respecto a la acción hipotecaria, por lo que en vista de que el plazo de vencimiento de la hipoteca abierta es el treinta y uno de mayo de dos mil veinte, de conformidad al art. 2180 CC, pide que se declare extinguida la hipoteca por haber vencido el plazo para lo cual fue constituida.

El Banco [...], a través de sus apoderados, contestó la demanda en sentido negativo, opuso la improponibilidad sobrevenida de la demanda, argumentó que no había prescrito la acción ordinaria; que si bien es cierto, en relación a los créditos relacionados había declarado prescrita y extinta la acción ejecutiva mediante sentencia estimativa, no era posible declarar la prescripción de la obligación accesoria como lo es el derecho real de hipoteca.

V.2 Al respecto, se aportó prueba documental en la causa.

Con relación a las pruebas propuestas, este tribunal advierte que la parte demandada aceptó los hechos alegados por la parte actora, por lo que de conformidad al art. 309 CPCM, este proceso queda limitado a una mera cuestión de derecho; es decir, aplicar el derecho a los hechos que han sido expuestos y conforme a norma decidir lo que a derecho corresponda.

En relación con la oposición planteada, este tribunal advierte que la parte demandada se equivoca al citar que la pretensión es la prescripción ordinaria y la extinción de la hipoteca, puesto que, según los planteamientos alegados de la parte demandante, el fundamento de la pretensión de extinción de la hipoteca abierta, es el vencimiento del plazo de la misma, de conformidad a lo previsto en el art. 2180 inciso 3° CC en correlación al art. 1554 CCom.

En consecuencia, la improponibilidad sobrevenida alegada por falta de presupuestos materiales, basada en la circunstancia de si ha transcurrido el plazo de prescripción ordinaria del derecho que se pretende ejercer, no es atendible, pues los hechos alegados son otros. En consecuencia, deberá declararse sin lugar dicha oposición."

DEBIDO A LA EVOLUCIÓN DEL DERECHO HIPOTECARIO, EN MATERIA MERCANTIL SE HAN DESARROLLADO ASPECTOS QUE DIFIEREN DE LA REGULACIÓN CIVIL

"V.3 Fundamento de derecho

La hipoteca por su naturaleza, permite que el deudor conserve la tenencia de la cosa hipotecada, permitiéndole continuar su explotación durante la vigencia del crédito garantizado, art. 567 y 2257 CC.

Debido a la evolución del derecho hipotecario, en materia mercantil se han desarrollado aspectos, que difieren de la regulación civil. Por ejemplo, la hipoteca abierta no se extingue juntamente con la obligación principal que garantizan, mientras hay posibilidad de que surjan nuevas obligaciones principales que respaldar; y que dicha garantía, puede constituirse independientemente, para respaldar, obligaciones futuras.

De conformidad al Código de Comercio, la hipoteca abierta está destinada a respaldar cualquier crédito a cargo del hipotecante y a favor de la entidad hipotecaria, siempre que sean contraídos dentro del plazo de vigencia del gravamen; es decir, que tiene la característica de indeterminación de las obligaciones que garantiza, pues se trata de obligaciones a contraer a futuro.

Tal como este tribunal lo ha indicado en párrafos que anteceden, se ha establecido jurisprudencialmente que la extinción de la hipoteca abierta, se produce por el vencimiento del período para el cual fue constituida, tal como lo disponen los arts. 46, 47, 48 y 2180 inc. 3° del Código Civil y 1554 del Código de Comercio.

En el caso de estudio, el señor […], suscribió el treinta y uno de mayo de mil novecientos noventa y cinco, un primer mutuo a favor del Banco de Fomento Agropecuario, por la cantidad de once mil cuatrocientos veintiocho dólares de los Estados Unidos de América, con cincuenta y siete centavos de dólar.

Y, un segundo mutuo, suscrito por el ahora demandante y la señora […], a favor del Banco de Fomento Agropecuario, fue celebrado el cinco de marzo de mil novecientos noventa y siete, por la cantidad de sesenta mil colones, equivalentes a seis mil ochocientos cincuenta y siete dólares de los Estados Unidos de América con catorce centavos de dólar.

Dichas obligaciones quedaron garantizadas con tercera hipoteca abierta otorgada a las nueve horas del día treinta y uno de mayo de mil novecientos noventa y cinco; ante los oficios notariales de la licenciada Maria Lucila Campos de Reyes, la cual recae sobre un inmueble ubicado en la ciudad de San Salvador, departamento de San Salvador, inscrito bajo la matricula **********. Esta hipoteca fue modificada en dos ocasiones: el cinco de marzo de mil novecientos noventa y siete, y el veintitrés de febrero de dos mil, en cuanto su monto y plazo. En la última modificación que se pacto que el plazo se ampliaba a diez años más, por lo que el nuevo plazo de vencimiento fue el treinta y uno de mayo de dos mil veinte.

Por medio de la sentencia del Juzgado Primero de lo Civil y Mercantil de esta ciudad, dictada a las ocho horas del tres de enero de dos mil veinte, la cual quedó firme el nueve de marzo del referido año, se declaró prescrita y extinta la acción ejecutiva derivada del primer crédito y segundo crédito.

Por otra parte, es necesario tener en consideración que las acciones ejecutivas derivadas de las obligaciones contraídas en los mutuos antes relacionados, que habían quedado garantizadas a través de la tercera hipoteca, han sido declaradas prescritas y extinguidas; por haber transcurrió el plazo para la prescripción de la acción común. Asimismo, de conformidad al testimonio de modificación de la tercera hipoteca, celebrado el veintitrés de febrero de dos mil uno, se ha cumplido el plazo de vigencia de dicha garantía, pues venció el treinta y uno de mayo de dos mil veinte.

En ese orden, es preciso destacar que la demanda de extinción de la referida hipoteca promovida por el señor […], a través de su apoderada, licenciada Rosa Nely Portillo, fue presentada a la Secretaria Receptora y Distribuidora de Demandas de San Salvador, a las diez horas dieciocho minutos del dos de diciembre de dos mil veinte; de la que se dio admisión, a las catorce horas con veinte minutos del diez de diciembre de dos mil veinte, por lo que resulta evidente que a esa fecha, el plazo de dicha garantía se encontraba vencida.

Por lo tanto, es razón suficiente para concluir que en el caso de autos es dable acceder a la pretensión del actor, por cuando no sólo ha vencido el plazo de la hipoteca abierta, sino que las acciones derivadas de las obligaciones crediticias arriba relacionadas, han sido declaradas prescritas judicialmente; y, por consiguiente, se impone declarar su extinción, de conformidad a lo previsto en el art. 2180 CC, y así se declarará."

Sala de lo Civil, número de referencia: 265-CAM-2021, fecha de la resolución: 05/04/2022

PROCESO DE EXPROPIACIÓN

IMPROCEDENCIA DEL RECURSO DE CASACIÓN, PUESTO QUE LA LEY DE EXPROPIACIÓN DE TERRENOS PARA LAS OBRAS DE ELECTRIFICACIÓN NACIONAL NI EL DERECHO ADJETIVO COMÚN ESTABLECEN LA IMPUGNACIÓN POR LA VÍA CASACIONAL

"3. En relación al examen de procedencia del recurso, es menester señalar que éste ha sido interpuesto contra la sentencia dictada en apelación por la Cámara de lo Civil de la Primera Sección de Oriente, con sede en San Miguel, que confirmó la estimación de la demanda relativa a un proceso especial de expropiación, tramitado conforme a la Ley de Expropiación de Terrenos para las Obras de Electrificación Nacional, en cuyo cuerpo normativo, específicamente en el art. 7, únicamente contempla el denominado "recurso de responsabilidad".

El objeto del mismo era determinar la responsabilidad de los funcionarios judiciales cuando dictaren una resolución judicial en contravención a los deberes que el cargo les impone. Dicho recurso era mencionado en los arts. 504, 612 inc. final del derogado Código de Procedimientos Civiles.

Ahora bien, el recurso de apelación en este proceso fue tramitado aplicando la regla general establecida en el art. 508 CPCM, por tratarse de una sentencia. Sin embargo, respecto de ésta no se ha configurado la casación para impugnarla en el proceso de mérito.

Esto ha ocurrido en supuestos similares en los que se ha rechazado el recurso de casación, como por ejemplo en los autos de improcedencia dictados en los incidentes clasificados bajo referencia 6-CAC-2010 y 65-CAC-2014, relativos a procesos que fueron tramitados de conformidad al procedimiento ordenado en la Ley Especial para la Garantía de la Propiedad o Posesión Regular de Inmuebles, respecto de los cuales, ni la ley especial de la materia, ni el art. 519 CPCM, los menciona como resoluciones recurribles en casación.

En ese orden de ideas, es inviable interponer el recurso de casación dentro del proceso especial de expropiación tramitado conforme a la Ley de Expropiación de Terrenos para las Obras de Electrificación Nacional, debido a que ni dicho cuerpo normativo, ni el derecho adjetivo común, establecen la impugnación por la vía casacional en estos casos.

Por consiguiente, este tipo de procesos quedan excluidos de los asuntos que pueden ser sometidos a conocimiento de esta Sala, debido a los efectos que produce y que deja a salvo el derecho de las partes para controvertir nuevamente la pretensión por la vía del proceso declarativo común.

Por tanto, el recurso de casación de mérito carece de impugnabilidad objetiva, por lo que deberá rechazarse por improcedente"

Sala de lo Civil, número de referencia: 124-CAC-2022, fecha de la resolución: 04/05/2022

PROCESO DE NULIDAD DE DILIGENCIAS DE REMEDICIÓN DE INMUEBLE

LA DENUNCIA DE APLICACIÓN ERRÓNEA DEL ARTÍCULO 15 DE LA LENJVYOD, NO HA SIDO COMETIDA POR LA CÁMARA SENTENCIADORA, PUES LAS DILIGENCIAS PRELIMINARES DE EXHIBICIÓN DE DOCUMENTOS NO HAN SIDO CONSIDERADAS COMO UN PRESUPUESTO PROCESAL PARA INCOAR LA DEMANDA

"3.1 La recurrente alega que la Cámara exige como requisito de procesabilidad, el tener que haber pedido las diligencias preliminares de exhibición de documentos, para hacer llegar al proceso, las diligencias originales de la remedición.

Al examinar la sentencia impugnada, esta Sala advierte que lo que manifestó la Cámara es que la citación de los colindantes del inmueble, es una circunstancia que consta en las diligencias originales de remedición, las cuales no fueron agregadas al proceso, pero que pudieron ser objeto de diligencias preliminares de exhibición de documentos.

Lo anterior, no es considerado como un requisito procesal para admitir la demanda, lo que dice la Cámara, es que se pudo haber hecho llegar esas diligencias de remedión, a través de la figura de la exhibición de documentos, pero no como un requisito procesal, pues si así hubiera sido, la demanda no se hubiera admitido por falta de ese requisito procesal, o se hubiera declarado improponible por falta de requisitos procesales, lo cual no fue así, pues la demanda se admitió y se sustanció hasta pronunciar sentencia.

En síntesis, la Cámara no ha considerado como requisito procesal la exhibición de documentos como lo ha denunciado la recurrente.

3.2 Ahora bien, cuando la recurrente alega, que con el testimonio de la escritura de protocolización de la resolución final de las diligencias de remedición, agregado a folios […], es prueba suficiente para demostrar que la señora […], no fue citada como colindante, esta Sala advierte, que al examinar dicho documento, cuyo contenido consigna íntegramente un informe pericial, que contiene las medidas y colindancias del inmueble objeto de la remedición, se denota, que de las colindancias que describe el perito al norte, sur, oriente y poniente del inmueble, no aparece el nombre de la demandante, por lo que se evidencia, que con ese instrumento de protocolización de la remedición, no se logra determinar con certeza, que a la parte actora no se le citó como colindante a dicha remedición.

En virtud de lo antes expuesto, la denuncia de aplicación errónea del art. 15 LENJVYOD, no ha sido cometida por la Cámara sentenciadora, ya que las diligencias preliminares de exhibición de documentos, no ha sido considerada como un presupuesto procesal para incoar la demanda, pues la misma se admitió y se sustanció, hasta pronunciar sentencia.

Por consiguiente, se declarará no haber lugar a casar la sentencia recurrida por este motivo de fondo."

PARA MEJOR PROVEER Y ESCLARECER SI SE REALIZÓ O NO LA CITACIÓN DE TODOS LOS COLINDANTES Y ACREDITAR SI EL NOTARIO CUMPLIÓ CON EL PROCEDIMIENTO QUE INDICA LA LEY DE LA MATERIA, ES NECESARIO QUE SE APLIQUE LA EXCEPCIÓN DEL ART. 7 INC. 3° CPCM, EN EL SENTIDO QUE EL JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA ORDENE QUE SE PRESENTEN LAS DILIGENCIAS ORIGINALES DE REMEDICIÓN

"V. Análisis del recurso por el motivo de fondo respecto a inaplicación del art. 7 inc. 3° CPCM, en relación al art. 336 CPCM

El recurrente señala la infracción de los artículos en forma conjunta, lo cual, debido al contenido de ambos preceptos, es posible alegarlos de esa manera. En ese sentido, el análisis de la infracción se hará conjuntamente.

El art. 7 inc. 3° CPCM, regula lo siguiente: "La proposición de la prueba corresponde exclusivamente a las partes o terceros; sin embargo, respecto de prueba que ya fue debida y oportunamente aportada y controvertida por las partes, el juez podrá ordenar diligencias para mejor proveer con el fin de esclarecer algún punto oscuro o contradictorio, de conformidad a lo dispuesto en este Código".

Por su parte, el art. 336 CPCM, en lo que concierne a la infracción alegada, dispone lo siguiente: "Las partes tienen la obligación de exhibir los instrumentos que se encuentren en su poder y de cuyo contenido dependa algún elemento del objeto del proceso, se podrá solicitar al juez que ordene la exhibición del mismo, so pena de ser sancionado el que incumpla con una multa cuyo monto se fijará entre cinco y diez salarios mínimos urbanos, vigentes, más altos".

Respecto, del art. 7 inc. 3° CPCM, esta Sala ha sostenido que el mismo contiene: "[...] una regla probatoria complementaria (diligencias para mejor proveer) pero ello no se trata, de que el juez pueda suplir la inactividad Probatoria de las partes; se trata, por el contrario, de posibilitar al juez la práctica de actividad probatoria para complementar la efectuada por las partes y del que no ha obtenido su convencimiento. Según la jurisprudencia que ha establecido esta Sala, en sentencia de casación 360-CAC-2012 de fecha ocho de agosto de dos mil catorce [...] el juez tiene, unos poderes probatorios que están limitados a la mera complementariedad y, en consecuencia, limitados por la actuación anterior de las partes [...]" (sic). (Sentencia pronunciada por esta Sala, en el incidente de casación clasificado bajo referencia 63-CAC-2014, de las nueve horas cuarenta minutos del dieciséis de marzo de dos mil dieciséis.

1. Respecto a esta infracción, la recurrente expuso que si la Cámara consideraba que había insuficiencia probatoria para demostrar que no se realizó la cita a uno de los colindantes, entonces, conforme al inciso 3° del art. 7 CPCM, en relación al art. 336 CPCM, el juzgador podía solicitar a los demandados que

incorporaran las diligencias de remedición al proceso, o prevenirles para que las presentaran, pues de haberse aplicado los mencionados artículos, el juzgador habría advertido que la parte demandada, tenía la obligación de exhibir las diligencias de remedición, las cuales considera, eran necesarias para resolver la controversia.

2. Tocante a esta infracción, la Cámara dijo lo siguiente: [...].

3. En relación a esta infracción, esta Sala manifiesta lo siguiente:

La Cámara considera que en el presente caso hay escasez e insuficiencia de prueba, que demuestre que efectivamente no se citó a uno de los colindantes.

Además, sostiene que las diligencias originales de remedición, son necesarias para verificar si realmente se realizó o no la citación de los colindantes, específicamente la señora VM, pero éstas no han sido presentadas al proceso.

En ese sentido, esta Sala considera, que la cita de los colindantes, es un acto de comunicación que consta íntegramente en las diligencias originales de remedición, las cuales no han sido presentadas en el proceso, pero según la escritura de protocolización, el notario las entregó a los interesados, siendo estos, los demandados en el presente caso.

Por consiguiente, se advierte que para mejor proveer y esclarecer si se realizó o no la citación de todos los colindantes, y además, para acreditar si el notario cumplió con el procedimiento que indica la ley de la materia, esta Sala considera necesario que se aplique la excepción del art. 7 inc. 3° CPCM, en el sentido de que el juez de primera instancia, ordene que se presenten las diligencias originales de remedición, las cuales fueron entregadas por el notario a los solicitantes, hoy demandados, según consta en la protocolización de la resolución final de dichas diligencias (folios […]).

Lo anterior, tiene relación con lo dispuesto en el art. 336 CPCM, ya que las partes “tienen la obligación de exhibir los instrumentos que se encuentren en su poder y de cuyo contenido dependa algún elemento del objeto del proceso”.

Esto, reiteramos, con el fin de ratificar si lo dicho por el notario en la escritura de protocolización se realizó en legal forma, de conformidad al art. 15 de la LENJVOD, ya que se está invocando una nulidad absoluta, la cual hay que tener certeza jurídica para pronunciarse al respecto.

En consecuencia, por las razones expuestas, se procederá a casar la sentencia recurrida, por infracción del motivo de fondo invocado; y se pronunciará la que ha derecho corresponda conforme al art. 537 inc. 1° CPCM.”

CONFIGURADO EL MOTIVO DE INAPLICACIÓN DE LEY; Y DADO QUE ES NECESARIO INCORPORAR PRUEBA PARA MEJOR PROVEER, PROCEDE ANULAR LA SENTENCIA DICTADA EN PRIMERA INSTANCIA

“VI. Resolución que corresponde

Como consecuencia de haberse configurado el motivo de inaplicación de ley, y dado que es necesario incorporar prueba para mejor proveer, procede anular únicamente la sentencia dictada en la primera instancia, ya que la diligencia que

debe practicarse, está destinada a fortalecer o desvirtuar datos probatorios que podrían cambiar la decisión del caso, por lo que la audiencia probatoria deberá mantenerse y solamente realizarse las diligencias para mejor proveer."
Sala de lo Civil, número de referencia: 209-CAC-2022, fecha de la resolución: 23/08/2022

REVISIÓN DE LA APLICACIÓN DE LAS NORMAS QUE RIGEN LOS ACTOS Y GARANTÍAS DEL PROCESO

LA FINALIDAD DEL RECURSO DE APELACIÓN ESTÁ DESTINADA A DENUNCIAR EN SEGUNDA INSTANCIA NULIDADES PROCESALES QUE PUEDEN SER COMETIDAS EN EL TRÁMITE DEL PROCESO O EN LA SENTENCIA DE FONDO

"7.1 En lo que atañe a la finalidad relativa a la ***revisión de normas y garantías del proceso***, debe tenerse en cuenta que la misma está destinada a denunciar en la segunda instancia nulidades procesales que pueden ser cometidas en el trámite del proceso o en la sentencia de fondo.

Lo anterior, exige que el apelante identifique el acto procesal que considera nulo y que le provoca indefensión, lo cual tiene que justificarse bajo alguno de los supuestos que configuran la violación al derecho de defensa o audiencia en el proceso, tal como lo dispone el art. 511 inc. 3° CPCM, de la siguiente forma: *"Si se alegare la infracción de normas o garantías procesales en la primera instancia, se deberán citar en el escrito las que se consideren infringidas y alegar, en su caso, la indefensión sufrida".*

Sumado a lo anterior, por tratarse de actos procesales, tiene que señalarse la norma de derecho que ha sido inobservada y que, por ende, rige esa actuación procesal.

a) Como primer bloque de argumentos, se identifican algunos que atañen a la falta de motivación de la sentencia, precisamente de la página 9 hasta la 16. Se ha expuesto una serie de alegaciones de diversa índole, las cuales, en síntesis, tratan sobre la falta de procesabilidad de la pretensión, elementos del enriquecimiento sin justa causa, la inconformidad por haber admitido la demanda, relatos de lo acontecido en la primera instancia y otras expresiones sobre temas procesales como la imparcialidad judicial.

Con relación a los referidos argumentos, esta Sala debe verificar que los mismos estén encaminados a sostener una infracción procesal que vicie la sentencia por no estar motivada. Sin embargo, ninguno de los argumentos antes mencionados resulta conducente para demostrar que el fallo no tenga fundamentación fáctica, probatoria o jurídica, es decir, que esté desprovisto de razones que justifiquen la decisión.

Al respecto, si lo que se pretendía introducir era una denuncia de nulidad de la sentencia, tuvo que haberse delimitado cuál de los elementos de la motivación no había sido cumplido (fáctica, probatoria o jurídica), y demostrar que tal omisión afecta un derecho o garantía constitucional, que le haya generado indefensión,

Además, los apelantes, han sido omisos en señalar la norma procesal que ha sido vulnerada por el juez de primera instancia, al pronunciar el fallo en el caso de mérito.

Por las razones expuestas esta Sala concluye que, respecto de la primera finalidad relativa a la aplicación de las normas que rigen los actos y garantías del proceso, no ha errado la Cámara, al rechazar la alzada bajo estudio, por lo que no procede casar el auto impugnado."

Sala de lo Civil, número de referencia: 252-CAM-2022, fecha de la resolución: 27/09/2022

REVISIÓN DE LOS HECHOS PROBADOS QUE SE FIJEN EN LA RESOLUCIÓN, ASÍ COMO LA VALORACIÓN DE LA PRUEBA

PROCEDE CASAR EL AUTO IMPUGNADO, YA QUE A PARTIR DE LOS ARGUMENTOS PROPORCIONADOS ES POSIBLE DEDUCIR LA FINALIDAD Y OBJETO SOBRE EL CUAL RECAE LA REVISIÓN SOLICITADA

"7.2 Ahora bien, en lo que concierne, a la ***revisión de los hechos probados que se fijen en la resolución, así como la valoración de la prueba,*** debe tenerse en cuenta que es necesario que el recurrente señale el medio de prueba que considera no ha sido valorado conforme a la ley, el tipo de error de valoración cometido en la primera instancia (por haberlo tergiversado, no haberlo advertido, haber considerado datos probatorios sin haberse incorporado, o bien al que no se ha dado el valor que le corresponde, ya sea por reglas de la sana crítica o prueba fehaciente).

Además, tiene que incluirse en dicha argumentación, los hechos que se debieron haber tenido como acreditados, o que no debió haberse tenido como probados, y las normas de derecho que han sido inobservadas al valorarse las fuentes probatorias.

En ese sentido, esta Sala advierte que, lo más cercano a una alegación de este tipo, es el contenido expuesto en la página 18 de la alzada, en la cual la parte apelante expresó que hay un "ERROR IN JUDICANDO", bajo los siguientes términos: *"[...]La no valoración de la prueba, Art. 416 Inc. 1° y 2° CPCM, es un punto medular el cual no se quiso conocer en base a la sana crítica y prueba tasada, no dándole el debido valor probatorio, no atribuyéndole el significado a cada prueba en particular, en el caso sub-júdice, la presentada en el proceso contra nuestros mandantes, el rechazo de la prueba debe acordarse en resolución debidamente motivada, Art. 320 CPCM, lo cual no fue de esa forma, en el presente proceso [...] fue el documento base de la acción en este proceso, el cual fue presentado FRAUDULENTAMENTE y es una prueba de ese tipo, no estableciendo su fundamento el señor Juez A quo, el PORQUE LO ADMITE DE ESA FORMA. SIENDO ESTO UN HECHO EVIDENTE. Artículo 3l4, Ordinal 3° CPCM [...]"* (sic).

De lo anterior se colige que la falta de valoración que alega la parte apelante, radica en no haberse estimado el documento base de la pretensión a su juicio alterado, y que, al haberse impugnado mediante la oposición, tuvo que haberse valorado conforme a las reglas de la sana crítica, según lo previsto en el art. 341 inc. 2° CPCM.

En ese sentido, esta Sala observa que dicha argumentación delimita lo que el tribunal de alzada debe revisar respecto de un medio de prueba específico, en relación con la disposición legal que resulta aplicable para considerar su mérito o eficacia probatoria; y con ello, tener por establecido o no un hecho, a favor de la pretensión u oposición de quien alega la infracción.

Además, debe tenerse en cuenta que el recurso de apelación tiene un carácter ordinario y no conlleva formalismos o tecnicismos muy rigurosos, como lo es la casación, que es de carácter extraordinario. De modo que, en este caso, a partir de los argumentos proporcionados en la alzada, ha sido posible deducir la finalidad y objeto sobre el cual recae la revisión solicitada.

Por consiguiente, procede casar el auto de que se ha hecho mérito, en lo concerniente al aspecto analizado."

Sala de lo Civil, número de referencia: 252-CAM-2022, fecha de la resolución: 27/09/2022

REVISIÓN DE SENTENCIA FIRME

EXISTE EL VICIO DENUNCIADO QUE HACEN PROCEDER A QUE SE DEJE SIN EFECTO LA SENTENCIA OBJETO DE REVISIÓN; Y EN CONSECUENCIA, SE RESCINDIRÁ LA SENTENCIA IMPUGNADA POR NO ESTAR AJUSTADA CONFORME A DERECHO

"Esta Sala advierte que el fundamento del motivo alegado, se centra en que posterior a la sentencia condenatoria del proceso ejecutivo de Ref. E-46-16 (3), hubo un proceso penal en el cual se estableció que el señor [...], es culpable del delito de administración fraudulenta, art. 218 del Código Penal, en perjuicio de la sociedad [...], y que los hechos acaecidos en dicho proceso penal tienen intima relación con el proceso ejecutivo antes sustanciado, motivo por lo cual afirma que debe rescindirse la sentencia firme.

[...]

En atención a lo antes relacionado, esta Sala considera pertinente aclarar que el llamado recurso de revisión tiene por fundamento hacer prevalecer la justicia sobre la seguridad jurídica que le proporciona la firmeza de la cosa juzgada, obtenida por una sentencia firme que pudiera ser ilícita o errónea. Y aún, cuando la realidad de esta afirmación sea incuestionable, también lo es el hecho de que una ilimitada posibilidad de recurrir acarrearía el que no se llegase nunca a saber con seguridad lo que en justicia corresponde al caso concreto.

Es por esta razón, que la revisión de la sentencia firme, aun cuando tenga por fundamento el hacer prevalecer la justicia sobre la seguridad jurídica que

le proporciona la firmeza de la cosa juzgada obtenida mediante una sentencia firme, el legislador ha delimitado su alcance (art. 540 CPCM) y el plazo para su ejercicio de dicho recurso (arts. 544, 545 y 546 CPCM), sin que sea posible extenderla más allá de los motivos previstos en el texto legal, art. 541 CPCM.

Ahora bien, cuando la actividad de las partes y del tribunal en un proceso ha estado condicionada por una serie de circunstancias, que pudieron hacer que se dictara una sentencia con un contenido posiblemente distinto al que hubiera tenido de no concurrir aquellas influencias anómalas como violencia, dolo, ignorancia o fraude, el legislador ha establecido la posibilidad que las partes puedan incoar una acción autónoma, que es la revisión para lograr la rescisión de aquella sentencia firme.

La revisión tiene un carácter subsidiario, pues solo procede cuando ya se ha cerrado definitivamente un proceso, sin posibilidad de ulteriores recursos; es decir, solo puede promoverse la revisión de una sentencia en definitiva que no puede ya discutirse.

Así pues, la revisión comprende un doble enjuiciamiento: el juicio rescindente, en el cual el tribunal de revisión decide acerca de la existencia del vicio producido por el hecho nuevo con carácter puramente negativo: dejando sin efecto la sentencia firme; y, el juicio rescisorio, es contingente al anterior y a él puede acudir las partes para que se dicte una nueva sentencia, por cuando el objeto litigioso resulta en ese momento carente de decisión, aunque el juez desde luego se encuentra vinculado por las declaraciones del fallo de revisión. (Derecho Procesal Civil, Valentín Cortés Domínguez y Otros, Lección 25, La Revisión y la Audiencia al Rebelde, págs. 390 y 391; Segunda edición, 1997, editorial Colex)

En ese sentido, la revisión supone un quiebre a la autoridad de cosa juzgada reconocida a la sentencia, por lo cual, en el campo de tensión de los bienes jurídicos de la seguridad y certidumbre de las resoluciones juridiciales, el legislador ha previsto convenientemente que la sentencia firme y pasada en autoridad de cosa juzgada, se rescinda en cuatro supuestos y se abra de nuevo el proceso, art. 541 y 549 CPCM.

La revisión se concede no tanto porque la sentencia fuera injusta, sino más bien por haberse ganado injustamente, de forma no ajustada a derecho. Los motivos que permiten la revisión no se basan en vicios del procedimiento o de la sentencia, sino en el conocimiento de determinados hechos que no constan en los autos, pero que transcienden y permite suponer que el resultado del proceso al que afectan, obedeció a su influencia o a su concurrencia, de modo que sin ellos dicho resultado pudo haber sido diferente.

Según el autor José Chiovenda: “la ley admite la impugnación de la cosa juzgada, partiendo de la premisa de que su autoridad no es absoluta por consideraciones de utilidad y oportunidad”; razón por la cual, en algunos casos, será necesario el sacrificio de esta condición de inmutabilidad para evitar un daño mayor que se derivaría ante la conservación de una sentencia manifiestamente injusta, es decir, la autoridad de la cosa juzgada no es absoluta. (José Chiovenda, Principios de Derecho Procesal Civil, pág. 511, Madrid: Reus Editorial, 1941)

En consonancia con lo antes expuesto, del motivo denunciado por el recurrente, es pertinente aclarar que el concepto “fraude”, incluido en el art. 541 CPCM, no tiene aplicación en la figura penal del art. 306 CP, por lo que se tiene campo abierto como sucede en otros ordenamientos, tal es el caso de la legislación española, en el cual es conocido como maquinaciones fraudulentas.

En relación a conductas o maquinaciones fraudulentas, con frecuencia cometidas por la contraparte para inducir a engaño al tribunal de la causa que dictó la sentencia o para dejar fuera del pleito contrario. Dichas maquinaciones fraudulentas habitualmente dan lugar a un ilícito penal (generalmente estafa, en sus distintas modalidades) o un ilícito civil.

La conducta constitutiva de fraude, puede consistir en cualquier argucia realizada personalmente o con auxilio de un extraño, tendente a generar un estado de legalidad aparente, mediante el que se provoca una situación de indefensión para la contraparte o de un error en el juzgador. Ahora bien, aunque la argucia utilizada supone una irregularidad y genera una situación de indefensión, no puede identificarse, sin más, con el quebrantamiento de las formas del juicio, ya que éste se produce mediante la actuación procesal desarrollada dentro del proceso mismo y, por tanto, el medio adecuado para su reparación es el que proporciona el sistema de recursos.

En el caso de estudio, al analizar la prueba se advierte: 1) conforme a la prueba instrumental aportada, se establece que el fallo otorgado en el proceso ejecutivo, fue obtenido por medio de argucias encaminadas a impedir la defensa de la sociedad [...], dado al cometer el delito de administración fraudulenta el señor [...], queda claro que se simuló una deuda favor de la sociedad [...]; 2) es evidente el nexo causal entre el proceso penal y el proceso ejecutivo, dado que la administración fraudulenta cometida inicia con la suscripción de los mismos títulos valores objeto del proceso ejecutivo; y, 3) los hechos ajenos relacionados en el proceso penal, no fueron alegados y discutidos en el proceso ejecutivo.

Para el caso particular, ha quedado establecido a través de las certificaciones de sentencia antes relacionadas, que el señor HOME, no estaba autorizado según el pacto social ni por la Junta Directiva de [...] para realizar la suscripción de los pagarés objeto del proceso ejecutivo, ni existía una causa que justificara el contraer deudas por la suma de dinero reclamada; razones por las cuales se concluye que el cometimiento del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la referida sociedad, trae como consecuencia, que el proceso ejecutivo mercantil fue sustanciado con una lesión o gravamen al debido proceso que trasciende al pleito como indebidamente resuelto.

En ese sentido, esta Sala a través de la revisión de mérito concluye que existe el vicio denunciado por los hechos antes relacionados y, que hacen proceder a que se deje sin efecto la sentencia objeto de revisión; y en consecuencia se rescindirá la sentencia impugnada, por no estar ajustada conforme a derecho art. 549 CPCM.”

Sala de lo Civil, número de referencia: 7-REM-2021, fecha de la resolución: 21/02/2022

REVISIÓN DEL DERECHO APLICADO PARA RESOLVER LAS CUESTIONES OBJETO DE DEBATE

NO SE APLICÓ LA FIGURA DE LA COSA JUZGADA, NO SE CONFIGURABA EL SUPUESTO DE ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA PREVISTO EN EL 240 CN; DE LO CUAL SE DEDUCE QUE EL "ERROR IN IUDICANDO" ESTÁ REFERIDO A LA INAPLICACIÓN DE ESTAS NORMAS, DE MODO QUE ES VIABLE ADMITIR EL RECURSO POR ESA RAZÓN

"7.3 Por otro lado, en lo referente a la ***revisión del derecho aplicado***, es necesario que se exprese en qué sentido determinadas normas de derecho, que sirven para resolver el objeto del debate, han sido vulneradas; es decir, se debe señalar si las mismas eran necesarias para resolver la pretensión u oposición a la misma, o si no han sido bien interpretadas y ello causa la exclusión del caso, o su inclusión en el precepto legal, por haberse restringido o ampliado su alcance, o que tales normas no debieron aplicarse al caso.

En fin, debe quedar claro en qué sentido se pide que se revise el derecho aplicado en la primera instancia.

En lo que atañe a este punto, esta Sala observa el siguiente alegato de apelación: [...]

Con base en los argumentos transcritos, y en correspondencia a la línea de pensamiento de que la apelación es un recurso ordinario, y que es posible que de la misma argumentación se deduzca la finalidad del mismo, se logra advertir que los recurrentes alegan, básicamente, que no se aplicó la figura de la cosa juzgada, y que no se configuraba el supuesto de enriquecimiento sin causa previsto en el 240 Cn; de lo cual se deduce que el "error in iudicando" está referido a la inaplicación de estas normas, de modo que es viable admitir el recurso por esa razón.

Respecto de las otras normas de derecho señaladas como infringidas, efectivamente no se comprende cuál es el error de aplicación que se atribuye, por lo tanto, únicamente resulta admisible el recurso para revisar el derecho aplicado respecto de los arts. 230 y 231 CPCM, y el art. 240 Cn, siendo procedente casar el auto impugnado y ordenar la revisión de los preceptos jurídicos en comento."

Sala de lo Civil, número de referencia: 252-CAM-2022, fecha de la resolución: 27/09/2022

REVOCATORIA DEL AUTO DE ADMISIÓN DE LA CASACIÓN

VOTO DISIDENTE DE LA MAGISTRADA DAFNE YANIRA SÁNCHEZ DE MUÑOZ

NO EXISTE RAZÓN LEGAL ALGUNA PARA DENEGAR EL RECURSO DE REVOCATORIA EN CONTRA DEL AUTO QUE ADMITE EL RECURSO DE CASACIÓN

"Dafne Yanira Sánchez de Muñoz, magistrada de la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia, en el incidente de casación 11-CAC-2022, emito voto disidente con base en el artículo 220 CPCM, por no estar de acuerdo con una parte de la decisión que antecede, no obstante haber firmado la respectiva resolución, tal como lo dispone el referido artículo. Fundamento mi voto en las consideraciones que expongo a continuación.

En el auto que antecede, entre otras cosas, se ha resuelto: “a) Inadmítese la revocatoria interpuesta por el licenciado (...), en el carácter en que actúa (...)”. El referido recurso se interpuso contra el auto de admisión del recurso de casación, bajo el argumento de que la admisión de dicho recurso no es legal.

Para sustentar dicha decisión, esta Sala ha advertido que, “tal como lo establece el inciso final del art. 530 CPCM, dicha figura impugnativa ha sido configurada únicamente para los rechazos del recurso cuando se inadmite, por lo que será inadmitida la revocatoria en esta fase, en atención al principio de ordenación y dirección del proceso contenido en el art. 14 CPCM, a efecto de evitar mayores dilaciones en el proceso de mérito”.

Sin embargo, no comparto la idea de que, contra el auto de admisión del recurso de casación, no procede el recurso de revocatoria, según se sostiene en la resolución que antecede, al razonar en el sentido de que el artículo 530 CPCM, ha limitado la procedencia de dicho recurso al supuesto en el que se declara inadmisible el recurso de casación. A mi juicio, esta Sala ha aplicado erróneamente la referida disposición legal, según lo explico a continuación.

El artículo 530 inciso 2º CPCM, al regular al recurso de casación, establece lo siguiente: “Si el tribunal de casación considerare que el recurso no es admisible, lo rechazará razonadamente. ***Esta resolución admitirá sólo el recurso de revocatoria”*** -resaltado propio-. El análisis exegético de la referida disposición legal, permite concluir que el legislador ha establecido un límite objetivo al derecho de recurrir, por cuanto delimita el margen de impugnabilidad en contra de la resolución que califica la admisibilidad del recurso de casación.

Sin embargo, dicho límite lo establece en consideración a la naturaleza de la resolución impugnada, más no en la dimensión del recurso que puede emplearse. En tal sentido, lo que el legislador establece es que, contra el auto que declara inadmisible el recurso de casación ***solo puede interponerse el recurso de revocatoria***, sin que esto significa que ***solo contra el auto que declara inadmisible el recurso de casación*** puede interponerse dicho medio de impugnación. Esta es, a mi juicio, la forma correcta de interpretar, según su tenor literal, la norma comprendida en el artículo 530 CPCM.

Y si se argumentare que la anterior conclusión se fundamenta en la interpretación aislada y literal de la disposición legal en estudio, debería tomarse en cuenta que, la interpretación sistemática y teleológica del artículo 530 CPCM, robustece aún más la anterior conclusión. Ciertamente, el artículo 503 CPCM, establece que “Los decretos y los autos no definitivos admitirán recurso de revocatoria, el cual será resuelto por el mismo juzgador que dictó la resolución recurrida”.

Bajo la conceptualización que señala el artículo 212 CPCM, puede afirmarse que el auto que declara admisible una demanda o un recurso es un auto simple, por cuanto resuelve una petición inicial, es decir, que se le de trámite a una pretensión jurídicamente relevante. No se limita a dar impulso u ordenar materialmente el proceso. En consecuencia, no existen razón legal alguna para denegar el recurso de revocatoria en contra del auto que admite el recurso de casación.

Por el contrario, abundan más razones para aceptar, en este tipo de casos, la procedencia de dicho recurso. Tal es, por ejemplo, la necesidad de garantizar el derecho a recurrir (artículo 2 Cn), como herramienta del justiciable, que le permite reaccionar contra las posibles ilegalidades del juzgador, corno cuando, de forma indebida, se admite un recurso de casación.

Finalmente, aclaro que, si bien no comparto la decisión de negar la procedencia del recurso de revocatoria en contra del auto de admisión del recurso de casación, sí comparto la decisión de revocar, por iniciativa de este Tribunal, el auto de admisión del recurso de casación, por las razones expuestas en la resolución que antecede. Concurro con esta última decisión, ya que, pese a que no se admitió el recurso de revocatoria, la pretensión del recurrente (en revocatoria) coincide con lo resuelto por esta Sala (en cuanto a revocar, aunque de oficio, el auto de admisión de la casación).

Así mi voto."

Sala de lo Civil, número de referencia: 11-CAC-2022, fecha de la resolución: 27/04/2022

SE REVOCARÁ EL AUTO MEDIANTE EL CUAL SE ADMITIÓ EL RECURSO DE MÉRITO, DECLARÁNDOSE IMPROCEDENTE EL MISMO, DEBIDO A QUE EL ASUNTO QUE PRETENDE EL RECURRENTE QUE SEA REVISADO, YA NO PUEDE SER OBJETO DE RECURSO, POR HABER ADQUIRIDO FIRMEZA DURANTE EL PROCESO

"8.2 En cuanto a la revocatoria solicitada por el referido profesional, esta Sala advierte que tal como lo establece el inciso final del art. 530 CPCM, dicha figura impugnativa ha sido configurada únicamente para los rechazos del recurso cuando se inadmite, por lo que será inadmitida la revocatoria en esta fase, en atención al principio de ordenación y dirección del proceso contenido en el art. 14 CPCM, a efecto de evitar mayores dilaciones en el proceso de mérito.

9. Ahora bien, con base en lo relacionado anteriormente, esta Sala observa que en el presente proceso existen pronunciamientos previos en primera instancia sobre la existencia de cosa juzgada como sustento de las improponibilidades declaradas.

En efecto, se destaca que tanto en el año dos mil catorce como en dos mil dieciocho, el Juzgado de Primera Instancia de Jiquilisco, declaró improponible la demanda interpuesta por […], en el proceso declarativo común de nulidad de título supletorio y cancelación de inscripción del título y cancelación de la inscripción de las compraventas realizadas posteriormente.

La primera vez lo hizo de manera oficiosa y la segunda a raíz de las alegaciones vertidas por la parte demandada.

En ambas oportunidades, la Cámara sentenciadora dejó sin efecto la decisión del tribunal inferior por considerar que en el proceso de mérito no ha operado la existencia de la cosa juzgada que sustente las improponibilidades declaradas.

Además, consta que el segundo proveído dictado en segunda instancia, a las quince horas veinte minutos del seis de junio de dos mil dieciocho, no fue impugnado en casación.

Por lo tanto, operó una firmeza interna dentro del presente proceso respecto del tema relativo a la cosa juzgada para el caso que nos ocupa.

10. Ahora bien, esta Sala observa que por tercera vez dentro del presente proceso, posterior a la audiencia preparatoria correspondiente, por auto definitivo de las quince horas trece minutos del veintisiete de julio de dos mil veintiuno, el juez de primera instancia mencionado, declaró entre otras cosas, nuevamente, haber lugar a la improponibilidad de la demanda por cosa juzgada.

Dicha decisión fue impugnada en apelación, la cual fue presentada por el licenciado Benjamín Arce Guevara, recurso que resolvió el tribunal de alzada, por auto de las quince horas y tres minutos del quince de noviembre de dos mil veintiuno, en el que se revocó la improponibilidad de la demanda por cosa juzgada y se ordenó al juez de primera instancia de Jiquilisco, admitir la demanda de litisconsorcio pasivo necesario y continuar con el trámite correspondiente.

De tales proveídos interpusieron casación los abogados [...], y el segundo, [...] y [...], pero únicamente fue admitida la interpuesta por el primero de los abogados en mención.

11. En razón de lo anteriormente dicho, esta Sala advierte que ya no era posible impugnar posteriormente lo relativo a la cosa juzgada, debido a que dicho óbice procesal ya fue alegado y discutido en el proceso de mérito, lo cual quedó deliberado en la resolución ya mencionada de la Cámara (el auto de las quince horas veinte minutos del seis de junio de dos mil dieciocho), la cual adquirió firmeza tal como lo declaró el tribunal de alzada en esa oportunidad.

Debe tenerse en cuenta que dicha firmeza provoca efectos internos en el proceso, impidiendo que una resolución judicial proveída dentro del mismo sea anulada o revocada, mediante la interposición de otros recursos. Por lo tanto, no puede reproducirse nuevamente la petición si se han utilizado mecanismos de impugnación con los cuales se despliegan los efectos de la cosa juzgada.

Además, la única excepción recursiva mediante la cual puede replicarse la infracción cometida cuando no se estima el recurso, es la revocatoria, ya que por disposición de ley es posible reproducir la petición interponiendo la apelación contra la sentencia o auto definitivo según corresponda. Así lo dispone el art. 506 CPCM, al regular que: *"La resolución que resuelva sobre la revocatoria no admitirá ningún otro recurso, sin perjuicio de que se pueda reproducir la petición en el recurso contra la resolución que ponga fin al proceso de manera definitiva".*

Por consiguiente, no es posible analizar la existencia o no de la cosa juzgada en este caso, ya que si bien en la fase liminar esta Sala advirtió que se habían cumplido los requisitos de procedencia y admisibilidad del recurso de casación interpuesto, no era posible advertir en esa etapa la formación de la cosa juzgada formal (firmeza) a la que se ha hecho alusión.

12. En ese sentido, esta Sala considera que a esta conclusión sólo era posible llegar mediante un estudio más prolijo de las actuaciones realizadas en el proceso, en relación con lo alegado por las partes en este grado de conocimiento, pues inicialmente no se verifican las actuaciones realizadas en el proceso, sino la procedencia del recurso (resolución recurrible, legitimación, agravio, competencia) y los requisitos de admisión del mismo (motivo específico, disposiciones legales infringidas y argumentación respecto de la infracción).

De manera que, si inicialmente se pudo constatar la recurribilidad de la resolución por tratarse del quebrantamiento de las formas esenciales del proceso, por el submotivo concerniente a la cosa juzgada, al realizar una relación más detallada de lo acontecido (lo cual no corresponde hacerlo inicialmente, sino cuando se conoce del fondo), ha resultado improcedente la casación interpuesta, por cuanto ya no es posible recurrir contra la misma resolución, por un asunto que ya fue deliberado, decidido y con firmeza dentro de este proceso.

En relación con la conclusión antes dicha, esta Sala advierte que aun estando en fase de dictar sentencia, es pertinente rechazar el recurso declarando la improcedencia del mismo, por falta de impugnabilidad objetiva o falta de recurribilidad de la resolución, debido a que en su momento precluyó cualquier posibilidad de examinar lo relativo a la cosa juzgada material alegada en vía de excepción.

Lo anterior, en virtud de lo dispuesto en el art. 229 CPCM, en el cual se establecen los supuestos en los que adquiere firmeza un auto definitivo o sentencia, entre ellos cuando los recursos interpuestos hubieren sido resueltos y no hubieren otros disponibles o bien cuando no se impugna habiendo un medio para tales efectos.

13. Finalmente, esta Sala agrega que la decisión que se adopta tiene fundamento en el principio de legalidad contenido en el art. 3 inc. 2º CPCM, del cual se deriva el uso de esta potestad resolutiva, con la condición de que sea debidamente motivada su aplicación.

Aunado a ello, este tribunal como director del recurso de casación, puede en cualquier momento antes de la sentencia, advertir una deficiencia que impide fallar sobre el fondo del asunto y declarar lo que corresponda cuando resulte notoria la imposibilidad de conocer sobre el caso planteado.

En consecuencia de lo anterior, se revocará el auto mediante el cual se admitió el recurso de mérito, declarándose improcedente el mismo, debido a que tal como se ha dicho antes, el asunto que pretende el recurrente que sea revisado, ya no puede ser objeto de recurso, por haber adquirido firmeza durante el proceso, lo cual fue así declarado en la segunda instancia, mediante la resolución que versaba sobre la inexistencia de cosa juzgada material alegada, siendo en tal sentido el punto recurrido en casación y admitido indebidamente por este tribunal."

Sala de lo Civil, número de referencia: 11-CAC-2022, fecha de la resolución: 27/04/2022

SERVIDUMBRE DE ELECTRODUCTO Y TRÁNSITO

LA INTERPRETACIÓN DE LAS PRUEBAS REALIZADA POR EL TRIBUNAL DE ALZADA, CONTRARÍA EL SENTIDO OTORGADO A LAS DISPOSICIONES LEGALES INVOCADAS, DEBIDO A QUE SE NIEGA LA OPONIBILIDAD FRENTE A TERCEROS DE LA SERVIDUMBRE, SIN QUE SEA POSIBLE DESCONOCER LA CONSTITUCIÓN DE ESE DERECHO REAL

"V. Análisis del motivo de fondo relativo a la errónea aplicación de los arts. 667 y 680 CC

El motivo que será analizado tiene lugar cuando a las normas de derecho pertinentes para resolver el caso en la segunda instancia, no se les otorga el sentido que les corresponde, por haberse restringido, ampliado o tergiversado los enunciados que comprende la misma.

Las restricciones interpretativas limitan el reconocimiento del derecho invocado, provocando por tanto la exclusión del caso en la norma necesaria o que contiene verdaderamente su solución.

Por el contrario, las ampliaciones de interpretación hacen que se incluya el caso, pero no reconociendo el derecho de fondo invocado. Lo antes dicho no debe confundirse con la aplicación indebida de ley, puesto que el núcleo de infracción de ésta recae sobre la calificación de los hechos, y por ende, que sea subsumido el caso en un supuesto normativo que no le corresponde.

Por consiguiente, en primer término, se tiene que verificar que las disposiciones legales sean pertinentes, es decir, que tienen relación con lo alegado en la alzada por alguna de las finalidades previstas para resolver el caso en la segunda instancia.

1. Al respecto, esta Sala advierte que las disposiciones legales que han sido citadas como infringidas, han tenido aplicación en este caso por haberse admitido dos finalidades en el recurso de apelación, una relativa a la revisión de los hechos probados que se fijan en la resolución, así como la valoración de la prueba, y otra, concerniente a la revisión del derecho aplicado para resolver las cuestiones objeto del debate.

Por dicha razón, en la segunda instancia se efectuó un análisis de la norma de derecho vinculada a los hechos que fundamentan la pretensión, y por tanto, conllevó a que dicho razonamiento incluyera los datos probatorios arrojados por los medios de prueba practicados en el proceso de mérito.

Los medios de prueba analizados por el tribunal de alzada, son los siguientes: […]

1.1 Bajo dicha premisa y con el análisis del material probatorio relacionado, en el caso de autos se advierte que la Cámara inicialmente reconoció que la servidumbre voluntaria de mérito, está debidamente inscrita en el Registro de la Propiedad Raíz e Hipoteca de San Salvador, pero que no reúne los requisitos necesarios para la identificación del inmueble sujeto a servidumbre, pues con la prueba pericial no fue posible determinar si la servidumbre de electroducto, que consta en la escritura número ***, inscrita al libro *** del referido registro, está constituida sobre los inmuebles La ******** y La ********, por falta de amarre geodésico; no obstante, con dicha prueba si se logró establecer que tales inmuebles, físicamente son afectados por la servidumbre de electroducto.

De manera expresa, puede notarse en el siguiente razonamiento que el tribunal de alzada, interpretó que debe indicarse dentro de la escritura de constitución de la servidumbre, en forma precisa el predio sirviente. Lo cual aparece de manera literal a folio […] de la pieza de segunda instancia, así: [...]

En ese sentido, consideró que el gravamen no se encuentra ubicado físicamente en los inmuebles objeto de reivindicación, pues si bien es cierto, la servi-

dumbre de electroducto se constituyó voluntariamente, a través de un instrumento público, que se encuentra inscrito en el registro respectivo, no existe certeza que el derecho real se encuentre materialmente en los inmuebles denominados *La ******** y La ********.*

1.2 Por otra parte, en el acápite referente a la revisión del derecho aplicado para resolver las cuestiones objeto de debate, observó, que, en virtud de la especie de derecho real discutido, es aplicable la *Ley de Constitución de Servidumbres para las obras de Electrificación Nacional y Ley General de Electricidad** Concluyendo, con un análisis respecto a la prueba documental y pericial, con lo que determinó que los bienes inmuebles objeto de proceso fueron adquiridos sin gravamen y que ambos tienen antecedentes. Contrario a la escritura de constitución, en la que no se determinó el amarre geodésico y se estableció que carece de antecedente inscrito.

De igual forma, advirtió que según documentación agregada al proceso, CEL no contaba con la información actualizada de las parcelas al hacer el traspaso de los activos de ésta última a […], y por tal razón, el perito no pudo situar los mencionados inmuebles, dificultando su ubicación, por lo que, no se logró concluir que la servidumbre atraviesa los inmuebles que se pretenden reivindicar.

Finalmente, consideró que no se cometió la infracción que se le atribuye a la primera instancia, en tanto que: *"[...] no ha errado en la selección de preceptos sobre los cuales fundamenta la motivación de su sentencia, pues no ésta en discusión la existencia de la servidumbre; sino que, como se indica en esta providencia, la prueba pericial no pudo comprobar y determinar que la servidumbre de electroductos se encuentra sobre las franjas de terreno denominadas "La ******** y La ********"", las cuales constituyen los inmuebles objeto de reivindicación por falta de amarre geodésico […]" (sic).*

2. En ese orden, según la recurrente, la Cámara exigió más requisitos de los contemplados en los arts. 667 y 680 CC, para la estimación que ampara la servidumbre voluntaria de mérito, pues sostuvo que la segunda instancia, reconoció la inscripción de la misma, pero que era necesaria la marginación de los títulos sobre los cuales se constituyó el derecho real, a fin de que surta efectos contra terceros.

En ese sentido, la recurrente adujo que la servidumbre voluntaria de mérito, fue otorgada el veintisiete de agosto de mil novecientos sesenta y nueve, por el señor LA hijo, a favor de la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Rio Lempa (CEL), la cual se encuentra debidamente inscrita en el Registro de la Propiedad Raíz e Hipoteca, al número *** del Libro ***, por lo que, el registrador debió hacer las anotaciones de ese gravamen sobre las inscripciones de *La ******** y La ********,* ya que es donde los ingenieros y técnicos de CEL, procedieron a instalar la respectiva torre y su cableado, pero *"no lo hizo el registrador porque está faltando un estudio que ya se va a concluir", por eso es que solo se marginó a nivel catastral en las parcelas en donde está ubicadas "La ********" y "La ********" (sic).*

Sin embargo, sostiene que con la inscripción de la servidumbre basta para que pueda producir efectos contra terceros.

Asimismo, manifestó que la Cámara ordenó injustamente la reivindicación del terreno en el cual se encuentra la torre y cableado, propiedad de […], pues se cumplieron con todos los requisitos legales para la validez de la servidumbre voluntaria, ya que es un hecho evidente y notorio que la torre y el cableado se encuentran ocupando parte de los dos inmuebles mencionados y que está debidamente inscrita.

Por otra parte, expuso que debe considerarse lo establecido en la escritura de constitución de servidumbre, referente a la falta de antecedentes por diligencias sucesorales pendientes, ya que el señor LA hijo, en el momento de su otorgamiento manifestó que no había aceptado herencia, y por tal razón, no tenía los títulos de propiedad; no obstante, fue inscrita con base a la ley especial. Por lo que, dicha servidumbre se encuentra constituida desde mil novecientos sesenta y nueve.

Por último, expresó que la Cámara consideró que es indispensable la marginación de los títulos de los inmuebles sujetos a servidumbre para su validez, en los términos siguientes: *"[...] interpreta en forma diferente dichas disposiciones legales, agregando que de dichas disposiciones es legítimo que el juez de primera instancia, hubiera concluido que no tiene validez la escritura pública debidamente inscrita, porque la misma requiere otro requisito que no ha sido establecido en la ley, como es la marginación de las mismas. Esta es una interpretación errada, pues las disposiciones legales señalan que el único requisito para constituirse el derecho es la existencia de la escritura debidamente inscrita […]" (sic).*

4. Teniendo en cuenta el análisis de la Cámara, y el concepto de infracción apuntado por el recurrente, es preciso hacer un análisis conjunto de las normas de derecho invocadas como infringidas, arts. 667 y 680 CC, dado que éstos regulan articuladamente las reglas relativas a la tradición e inscripción de los bienes inmuebles.

4.1 Bajo esa perspectiva, es pertinente citar el contenido de los preceptos legales señalados como infringidos.

Al respecto, el art. 667 CC, expresa que: *"La tradición del dominio de los bienes raíces y de los derechos reales constitutivos en ellos, salvas las excepciones legales, se efectuará por medio de un instrumento público en que el tradente expresa verificarla y el adquirente recibirla. Este instrumento, podrá ser el mismo del acto o contrato, y para que surta efecto contra terceros, deberá inscribirse en el Registro público de la Propiedad".*

En cuanto al art. 680 CC, que se relaciona con el tema de la inscripción registral, dicho precepto regula: *"Los títulos sujetos a inscripción no perjudican a terceros. sino mediante la inscripción en el correspondiente Registro, la cual empezará a producir efectos contra ellos desde la fecha de la presentación del título al Registro".*

EL DOMINIO DE UN INMUEBLE DEBE FORMALIZARSE A TRAVÉS DE UN INSTRUMENTO PÚBLICO CON EL CUAL SE PERFECCIONEN TODOS LOS DERECHOS QUE DE ÉSTE SE DESPRENDEN, TALES COMO LA TRADICIÓN, POSESIÓN Y DEMÁS DERECHOS REALES EN TORNO AL MISMO

"4.2 En lo pertinente al caso que nos ocupa, se cuestiona la interpretación que realizó la Cámara, con respecto a que se exige un elemento adicional para la validez de la servidumbre, por haber considerado que era necesaria la marginación de los títulos sujetos a servidumbre.

En ese sentido, partiendo del contenido de la primera disposición, se debe considerar que la norma establece los requisitos de transferencia de un bien inmueble para su adquisición, mediante la tradición del mismo por medio de un instrumento público, en el que se exprese recibir y verificar dicho acto.

En efecto, la citada norma recoge elementos que son propios para la obtención de la propiedad de un bien que, por su naturaleza y objeto, su transferencia requiere ciertas formalidades para la constitución de su derecho.

De esta manera, precisa entender, que el dominio de un inmueble debe formalizarse a través de un instrumento público con el cual se perfeccionen todos los derechos que de éste se desprenden, tales como la tradición, posesión y demás derechos reales en torno al mismo, y a su vez, garantice la eficacia del acto o contrato o forma de adquisición de aquél.

Ahora bien, los Registros de la Propiedad, nacen con el fin de otorgar seguridad y protección a los adquirentes o terceros en sus derechos derivados de la propiedad de inmuebles.

Esta seguridad de los actos conforma la llamada fe pública, que tiene por objeto fundamental establecer que el Registro no sólo es exacto, sino que también es íntegro, conservador de información y que, en consecuencia, cualquiera puede en principio confiar en sus declaraciones respecto de terceros y en beneficio de los que han confiado en éste.

Esta protección contra terceros, constituye la finalidad de la fe pública y por consiguiente es una presunción que ha sido establecida legalmente según se desprende del art. 680 CC, al expresar que los títulos sujetos a inscripción no perjudican a terceros, sino mediante la inscripción en el correspondiente registro.

En definitiva, en los art. 667 y 680 CC, se establece la obligatoriedad de registro de un bien que requiera por ley la inscripción del mismo, a fin de hacer valer un derecho contra tercero.

4.3 Partiendo de tales premisas generales, esta Sala no puede prescindir de que el razonamiento de la Cámara, ha sido fundamentalmente probatorio, y por ende, su análisis ha tenido incidencia en normas de derecho con las cuales se resuelve el asunto planteado en apelación.

Es decir, en este caso, la servidumbre voluntaria inscrita, no ha sido considerada oponible frente a terceros, debido a la apreciación de las pruebas sometida a juicio en la segunda instancia. Dicha actividad tiene incidencia indirectamente sobre el derecho de fondo que haya sido invocado por las partes. Por lo que,

al no ser reconocido el efecto registral, en virtud del análisis de los medios de prueba, puede llegar a configurarse una interpretación errónea de ley, por cuanto que como ya se apuntó antes, al restringirse el contenido de la norma, puede excluirse la aplicación de la misma.

Bajo dicha línea argumentativa, véase que el recurso de apelación estaba orientado a la revisión de los hechos probados y el derecho aplicado para resolver las cuestiones objeto de debate, y en ambas finalidades, se destaca lo relativo a la inscripción de la escritura pública de constitución de la servidumbre voluntaria, y por ende, que tiene que surtir efectos frente a terceros.

De manera que, las disposiciones legales citadas como infringidas son pertinentes para resolver el caso en la segunda instancia. Ahora, en cuanto a la interpretación errónea de las mismas, se expresa que hay una ampliación de su análisis.

Sobre dicha eficacia registral, la Cámara expresó que: *"la inscripción del gravamen en el registro público correspondiente, es única y exclusivamente para desplegar la protección y oponibilidad frente a terceros que deviene precisamente del acto mismo de su inscripción" (sic).*

Además, se advierte que dicho tribunal concluyó que la primera instancia: *"[…] no ha errado en la selección de preceptos sobre los cuales fundamenta la motivación de su sentencia, pues no ésta en discusión la existencia de la servidumbre; sino que, como se indica en esta providencia, la prueba pericial no pudo comprobar y determinar que la servidumbre de electroductos se encuentra sobre las franjas de terreno denominadas "La ******** y La ********", las cuales constituyen los inmuebles objeto de reivindicación por falta de amarre geodésico […]" (sic).*

Sin embargo, si se tiene como premisa que la inscripción en el Registro, solo sirve para efectos contra terceros, y que tampoco se cuestiona la existencia de la servidumbre, una interpretación normativa conforme a los hechos, llevaría a reconocer con certeza la constitución de ese derecho real, sobre determinado inmueble, y por ende, reconocer la eficacia registral en este caso, respecto de los inmuebles objeto del debate.

No obstante, dicho tribunal pone en duda la interpretación normativa que afincó y la única conclusión a la que podría arribarse con certeza sobre la existencia del derecho real constituido en el caso de mérito, al haber concluido categóricamente que *"[...] hay insuficiencia probatoria, en virtud que no se encuentran identificados los inmuebles donde pasa la servidumbre de electroducto en cuestión, por lo que, no se han transgredidos las normas jurídicas que señala la aludida interponente [...]" (sic,).*

Al respecto, debe tenerse en cuenta que actualmente no se tiene la regla relativa a la duda en favor del reo, que estaba contenida en el art. 1301 del Código de Procedimientos Civiles derogado, mediante la cual se disponía resolver en favor del demandado cuando no se tenía certeza respecto de los hechos, sino todo lo contrario, hay que tener certeza para deliberar el fondo del asunto, a efecto de estimar o desestimar una pretensión, por lo tanto, la insuficiencia probatoria denotada por el tribunal de alzada, otorga un estado de incertidumbre sobre la oposición alegada por la parte demandada.

De manera que, esta Sala, deberá analizar los medios probatorios apreciados en la segunda instancia, a efecto de verificar si efectivamente hay insuficiencia probatoria y con ello determinar la infracción relativa a la errónea aplicación de los arts. 667 y 680 CC, ya que tal como se ha venido sosteniendo, la interpretación normativa se ha visto relacionada con la apreciación de la prueba provocada a raíz de la alzada.

Por otro lado, esta Sala advierte que con base en el art. 536 CPCM, el *"El tribunal de casación está vinculado al fallar por los motivos invocados y en razón de los argumentos jurídicos que hubiera presentado el recurrente; no obstante, dentro de los anteriores, podrá resolver con aplicación de otras normas y fundamentos jurídicos que estime pertinentes, aunque no coincidan con los del recurrente".*

Dicha disposición legal se trae a colación, debido a que el análisis que a continuación se realizará, se ha provocado por los argumentos de la recurrente, pero ello no es óbice para que esta Sala, llegue a una conclusión distinta respecto de la infracción que se atribuye a la Cámara de mérito, con base en otros fundamentos jurídicos."

LA INTERPRETACIÓN DE LAS PRUEBAS REALIZADA POR EL TRIBUNAL DE ALZADA, CONTRARÍA EL SENTIDO OTORGADO A LAS DISPOSICIONES LEGALES, DEBIDO A QUE SE NIEGA LA OPONIBILIDAD FRENTE A TERCEROS DE LA SERVIDUMBRE DE MÉRITO, Y EN ESTE CASO, NO ES POSIBLE DESCONOCER LA CONSTITUCIÓN DE ESE DERECHO REAL

"4.4 En ese sentido, conviene destacar tres medios de prueba determinantes que han sido apreciados por el tribunal de alzada, con los cuales llegó a la conclusión de que hay insuficiencia probatoria:

a) Certificación literal de Escritura Pública de Constitución de Servidumbre de Electroducto, inscrita al número ***, del Libro *** del Registro de la Propiedad Raíz e Hipoteca de la Primera Sección del Centro (a folios […] de la primera pieza).

En dicho instrumento se establece que los inmuebles descritos *"están en la jurisdicción de San Salvador y carecen de antecedente inscrito"* (sic). Esta información se aclara en el Estudio Registral Catastral de los Inmuebles, tal como se verá más adelante.

Además, que *"constituyen sobre los primeros cuatro predios descritos, servidumbres de electroducto y tránsito a favor del que más adelante se describirá" (sic).*

Con este medio de prueba se establece la existencia de la servidumbre de mérito, y que la misma, recae sobre un inmueble propiedad del señor LA hijo, de "quince mil setecientos treinta y cinco metros cuadrados ochenta decímetros cuadrados de superficie". Y que las fajas de terreno que componen la misma, tienen treinta y ocho metros de ancho y según planos topográficos corresponden a los lotes números "VEINTIDOS, CINCUENTA Y DOS, VEINTICUATRO Y DIEZ", de la línea de transmisión de San Antonio Abad.

b) Estudio Registral Catastral de los Inmuebles (de folios […] de la segunda pieza de primera instancia), ubicado el primero en la jurisdicción de Mejicanos, denominado "la ********": y, el segundo ubicado en el cantón San Antonio Abab, denominado la ********, inscritos a favor de la Sociedad […] bajo el Sistema de Folio Real Automatizado con las matrículas ******** y ********, respectivamente, ambas del departamento de San Salvador, comprendidos según información catastral por las parcelas 237, 238 y 240, todas del sector ********.

En este estudio se confirma en las conclusiones que en el año de 1969, el señor LA hijo otorga una porción de *quince mil setecientos treinta y cinco metros cuadrados ochenta decímetros cuadrados de superficie*, la cual sería ocupada para que la CEL (Comisión Ejecutiva del Río Lempa), pueda construir, operar y mantener subterránea y aéreamente, cables conductores de energía eléctrica.

Y que dicha servidumbre se ha ubicado por medio de sus medidas lineales y colindancias dentro de las parcelas 237, 238 y 240, todas del sector ********, y que el gravamen efectuado por el señor LA hijo, a favor de CEL, en los inmuebles denominados *"La ******** y La ********",* fue otorgada en 1969, cuando aún no habían sido declarados herederos del causante Dr. LA, por esa razón manifestó que dicha porción carecía de documento inscrito.

Se expresa que *"La ********"* está comprendido en las parcelas 237 y 238 del sector arriba apuntado, controlado catastralmente por la Sociedad [...]., y la *"La ********"* en el 240, bajo las mismas circunstancias.

Categóricamente se determina que ambas porciones están afectadas por la servidumbre que otorgó el Sr. LA hijo a la CEL, en el año 1969, y que la servidumbre establecida a favor de CEL, recaen el documento registral relativo al gravamen bajo estudio.

Dictamen pericial judicial del ingeniero FFRM (de folios […] de la cuarta pieza de primera instancia).

Entre sus conclusiones se establece que *"La descripción del inmueble descrito en la escritura de servidumbre, propiedad del sr. LA hijo, no tiene amarre geodésico, lo que dificulta la ubicación de la parcela" (sic).*

Sin embargo, también concluye que la porción propiedad del señor LA hijo, descrita en la escritura de servidumbre número *** libro ***, tiene un área de *quince mil setecientos treinta y cinco metros cuadrados ochenta decimetros, cuadrados de superficie*, la cual es coincidente con el área de la servidumbre descrita en el mapa catastral ********, parcela 240.

4.5 Con los medios de prueba apuntados, este tribunal advierte que la práctica de la prueba pericial no ha desacreditado la fuente probatoria documental mediante la cual se genera certeza sobre la constitución de la servidumbre, lo cual afecta la correcta interpretación que deviene de los arts. 667 y 680 CC.

La infracción se configura en atención a que si se ha establecido que la inscripción en el Registro, solo sirve para efectos contra terceros, y que tampoco se cuestiona la existencia de la servidumbre, una interpretación normativa conforme a los hechos objeto del debate, solo puede ser correcto cuando hay certeza de los mismos.

Sin embargo, en este caso, la interpretación de las pruebas realizada por el tribunal de alzada, contraría el sentido otorgado a las disposiciones legales en comento, debido a que se niega la oponibilidad frente a terceros de la servidumbre de mérito, y en este caso, no es posible desconocer la constitución de ese derecho real.

Por dicha razón, se procederá a casar la sentencia de mérito, con base en las razones que han sido expuestas en esta sentencia, debiendo pronunciarse la resolución que corresponde con base en el art. 537 iric. 1° CPCM."

Sala de lo Civil, número de referencia: 173-CAC-2022, fecha de la resolución: 13/09/2022

SOCIEDADES COOPERATIVAS

PROCEDE CASAR LA SENTENCIA POR APLICACIÓN ERRÓNEA DEL ARTÍCULO 19 ROMANO I DEL CÓDIGO DE COMERCIO, DADO QUE LA SOCIEDAD HA OPTADO EN SU FORMA DE ASOCIARSE DE LA MANERA EN QUE SE RIGEN LAS SOCIEDADES DE PERSONAS, Y EN LO APLICABLE A SU FUNCIONAMIENTO, SE RIGE POR LAS REGLAS DE UNA SOCIEDAD ANÓNIMA

"a) Submotivo de aplicación errónea del art. 19 rom I CCom

El precepto legal señalado como infringido regula lo siguiente: *"I.- Las sociedades cooperativas se regirán por las disposiciones que correspondan a la especie de sociedades que hayan adoptado en su constitución; y por el de la sociedad anónima relativa a balances, responsabilidad de los administradores y vigilancia del auditor salvo las modificaciones que se establecen en el presente artículo" (sic).*

Con relación a dicho artículo, los recurrentes exponen, en lo medular, que la Cámara le dio a la norma un sentido que no tiene, pues aseguran que ese tribunal concluyó, equivocadamente, que su mandante, es una sociedad anónima de acuerdo al contenido del pacto social y a la escritura de modificación del mismo; por haberse indicado que estaba adscrita como tal, y esto la convierte en sociedad de capital, dejando de lado la calidad personal.

Afirman los impetrantes, que han insistido en que su mandante es una sociedad cooperativa de responsabilidad limitada y, por consiguiente, se trata de una sociedad de personas. De ahí que, denuncian que la Cámara seccional, decidió de manera equivocada, al inobservar dicha situación y creer que es una sociedad capital.

Al respecto, se advierte que la Cámara al aplicar el art. 19 CCom, sostuvo lo siguiente:[…]

Previo hacer el análisis de la norma citada como infringida, es conveniente citar la definición legal de sociedad, de conformidad con el art. 17 inc. 2° CCom: *"Sociedad es el ente jurídico resultante de un contrato solemne, celebrado entre dos o más personas, que estipulan poner en común, bienes o industria, con la finalidad de repartir entre si los beneficios que provengan de los negocios a que van a dedicarse" (sic)*

Dicho de otra manera, el contrato de sociedad, se define como los derechos y obligaciones de personas que se organizan o asocian para combinar sus recursos o esfuerzos para la realización de un fin común de carácter predominantemente económico.

Ahora bien, el contrato social, en el ámbito del derecho mercantil comprende distintas formas de constitución. Así pues, verbigracia, la sociedad colectiva, es la forma más espontanea de organización mercantil, puesto que surge de un modo natural del hecho de que los miembros de una familia trabajen en común o cuando varios amigos explotan conjuntamente un negocio.

A diferencia de los vínculos familiares o fraternales propias de la mencionada sociedad, encontramos dentro del contrato social, a la denominada sociedad anónima que representa una forma de organización estable y permanente: y lo que sucede a los socios no trasciende a la sociedad, ésta debe tener una continuidad que esté por encima de las contingencias de las personas que la componen. En el caso de esta sociedad, la división del capital en acciones permite que participen en la sociedad miles de asociados, ya que la pequeña cantidad que una acción representa está al alcance de fortunas que aisladamente consideradas no hubieran podido soñar su participación en empresas de tal envergadura.

Ahora bien, la sociedad *cooperativa* es una sociedad mercantil, que se constituye bajo razón social o denominación, de capital variable, dividido en cuotas o participaciones sociales, o bien, divididas en acciones, cuya actividad social se presta exclusivamente a favor de sus socios, los que responden limitada o ilimitadamente por las aportaciones sociales.

Las cooperativas son organizaciones voluntarias, abiertas a todas las personas capaces de utilizar sus servicios y dispuestas a aceptar las responsabilidades de ser socio, sin discriminación de sexo, social, racial, política o religiosa. *(Declaración sobre la identidad cooperativa. Alianza Cooperativa Internacional. Congreso de Manchester de 23 de septiembre de 1995).*

Lo que distingue a las sociedades cooperativas respecto de las estrictamente mercantiles que persiguen una finalidad económica, y no sólo un ánimo de lucro de sus socios, es que al ingresar en aquéllas se requiera de una condición de acuerdo a la calidad del socio. Así tenemos, por ejemplo, que una cooperativa de producción el socio debe ser un trabajador de la misma, aportando su trabajo personal, físico o intelectual.

Como consecuencia, en ocasiones, se cuestiona por qué se consideran de naturaleza mercantil. La razón según algunos doctrinarios como *Joaquín Rodríguez Rodríguez,* del porqué las cooperativas han sido comprendidas bajo la ley de comercio, es la de atraer su reglamentación a la competencia comercial.

De conformidad al art. 1 CCom, se establece que las sociedades se rigen por las disposiciones del Código de Comercio, por las demás leyes mercantiles, y en su defecto por los usos y costumbres mercantiles, y a falta de estos por las normas del Código Civil.

Por su parte, el art. 19 rom. 1 CCom, dispone particularmente respecto de las sociedades cooperativas, que se regirán conforme a las disposiciones que

correspondan a la especie de sociedad que hayan adoptado en su constitución, por lo que se comprende pueden optar a cualquier tipo de sociedad ya sea de personas o de capital. Sin embargo, en lo relativo a los balances, responsabilidad de los administradores y vigilancia del auditor, salvo las modificaciones que estable en el mismo artículo, la sociedad cooperativa se rige por las disposiciones de las sociedades anónimas.

Además, debe tenerse presente que en el caso de las sociedades de persona, la calidad personal de los socios, juega un papel trascendental, según lo dispone el art. 44 CCom que instituye lo siguiente: *"En las sociedades de personas la calidad personal de los socios es la condición esencial de la voluntad de asociarse […]" (sic).*

La característica de la confianza, se ve reflejada en varios momentos, entre ellos, para admitir nuevos socios, que requiere del consentimiento de todos los socios, salvo que en la escritura social se establezca que basta el consentimiento de la mayoría, art. 50 CCom.

Tal como lo hemos referido anteriormente, contrario a las sociedades de personas, en las sociedades de capital no se requiere confianza, pues tal como lo establece el art. 126 CCom, en las mismas, la calidad personal de los socios o accionistas no influye de modo esencial en la voluntad de asociarse, pues no lo hacen en atención a las calidades o características personales, en tanto que lo que interesa en este tipo de sociedad es el aporte económico.

En ese sentido, este tribunal concluye que la sociedad cooperativa, al sujetarse a las reglas que establece el art. 19 CCom, en general y en principio no puede clasificarse como una sociedad de personas o de capital, dado que su naturaleza dependerá de la manera que se haya constituido para saber qué disposiciones le son aplicables conforme la especie de sociedades que hayan adoptado en su constitución.

En el caso de estudio, se advierte que en la escritura de constitución de la SOCIEDAD […] (agregada de folio […]), se consignó, entre otros, lo siguiente: […]

El pacto social de la mencionada cooperativa, fue modificado tal como consta en la escritura de modificación, agregada de folio […], y se estableció: […]

Asimismo, se observa que, en los estatutos de la sociedad cooperativa, agregados de fs. […], se acordó lo siguiente: […]

Con base en lo anterior, este tribunal concluye que la Cámara ha aplicado erróneamente el art. 19 rom I CCom, dado que la SOCIEDAD […], ha optado en lo que respecta a la forma de asociarse de la manera en que se rigen las sociedades de personas, y por consiguiente, sujetas a las reglas de este tipo de sociedad; y en lo aplicable a su funcionamiento, se rige por las reglas de una sociedad anónima en lo relativo a balances, responsabilidad de los administradores y vigilancia del auditor, en la cual los socios responden de manera limitada y su capital es variable.

Por tal motivo, al haberse configurado la infracción de ley denunciada, se impone casar la sentencia impugnada por el submotivo de aplicación errónea del art. 19 rom 1 CCom, y así se declarará."

PROCEDE CASAR LA SENTENCIA POR INAPLICACIÓN DEL ARTÍCULO 44 INC. 1 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, AL HABER CONCLUIDO LA CÁMARA QUE LA SOCIEDAD COOPERATIVA ESTABA SUJETA A LAS DISPOSICIONES DE UNA SOCIEDAD DE CAPITAL Y NO A LAS REGLAS DE LAS SOCIEDADES DE PERSONAS, IGNORANDO CON ELLO LA VOLUNTAD DE ASOCIARSE COMO CARACTERÍSTICA PRINCIPAL DE ÉSTAS

"b) Submotivo inaplicación del art. 44 inc. 1° CCom

El art. 44 inc.1° estatuye lo siguiente: *"En las sociedades de personas la calidad personal de los socios es la condición especial de la voluntad de asociarse, excepto en la sociedad de responsabilidad limitada, en la cual también podrán participar en su acto constitutivo o en ingreso de nuevos socios, otras sociedades mercantiles o extranjeras." (sic)*

Los recurrentes exponen que la Cámara dejó de aplicar el texto del precepto transcrito, el cual imperativamente señala que -en las sociedades de personas- la calidad personal de los socios es condición esencial de la voluntad de asociarse, dado que su mandante tiene un procedimiento para incorporar socios que difiere de las sociedades de capital y al obligarlo, afecta los derechos de su representada.

De lo expuesto, esta Salo advierte que al haber concluido equivocadamente la Cámara que la sociedad cooperativa se rige por las disposiciones de una sociedad de capital y no por las de una sociedad de persona, con lleva a que inobservó la característica esencial de este tipo de sociedad, es decir, la voluntad de asociarse.

En las sociedades de personas tienen como característica esencial la confianza personal que se tienen los socios y que los lleva asociarse, por ello los miembros que integran este tipo de sociedades implementan sus mecanismos o procedimientos para el ingreso y retiro de miembros.

Tal como puede observarse de acuerdo a los estatutos de la sociedad cooperativa demandada, la persona interesada en pertenecer a esa sociedad debe presentar una solicitud a la Junta Directiva. Además de ser una persona de notoria honradez para poder se titular de acciones comunes, se requiere la recomendación de otro socio. En suma, dicho proceso de admisión, no es más que la manifestación de la confianza personal que debe comprobar el nuevo miembro.

En ese orden de ideas, esta Sala concluye que la Cámara inaplicó el art. 44 inc.1º CCom, al haber concluido que la sociedad cooperativa estaba sujetas a las disposiciones de una sociedad de capital, y no a las reglas de las sociedades de personas, por lo que deberá casarse la sentencia impugnada también por este submotivo."

PROCEDE CASAR LA SENTENCIA POR APLICACIÓN INDEBIDA DEL ARTÍCULO 156 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, YA QUE AL HABERSE CONCLUIDO QUE LA SOCIEDAD COOPERATIVA SE RIGE POR LAS REGLAS DE UN SOCIEDAD DE PERSONAS, SE ADVIERTE QUE NO SE SIGUIÓ EL TRÁMITE ESTABLECIDO POR DICHA COOPERATIVA PARA LA ADMISIÓN DE NUEVOS SOCIOS O MIEMBROS

c) Submotivo de aplicación indebida del art. 156 CCom

"El art. 156 CCom, estatuye: "La negativa injustificada de la sociedad a inscribir un accionista en el registro de acciones nominativas, la obliga solidariamente con sus administradores al pago de los daños y perjuicios que se ocasionaren a aquél. " (sic)

Los impetrantes sostienen que la disposición antes citada fue aplicada indebidamente por parte de la Cámara, como consecuencia de haber concluido que la sociedad cooperativa es una sociedad de capital, sujeta a las reglas de una sociedad anónima. A juicio de los recurrentes, la Cámara aplicó una severa sanción a su mandante de forma ilegal e inconstitucional.

En presente caso, este tribunal ha concluido que la sociedad cooperativa se rige por las reglas de una sociedad de personas, y que como una manifestación de la condición esencial de la confianza personal que debe tenerse entre los socios, la misma tiene un mecanismo propio para la admisión de nuevos socios.

Al revisar los escritos presentados a la sociedad cooperativa por la demandante con el fin de observar si se había cumplido con la forma de admisión del nuevo socio, se advierte con facilidad que no se siguió el trámite establecido por dicha cooperativa para la admisión de nuevos miembros, ya que se limitó a informar que había comprado un certificado de acciones. En consecuencia, en su oportunidad hizo a la señora MEFL, la negativa de admitirle como socia. Por tanto, esta Sala concluye que la aplicación de este precepto no era necesaria, para la solución del caso, por lo cual se configura la aplicación indebida del precepto y deberá casarse por dicha infracción."

PROCEDE DESESTIMAR LA PRETENSIÓN CONSISTENTE EN REQUERIR JUDICIALMENTE EL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN DE INSCRIPCIÓN EN EL LIBRO DE REGISTRO DE ACCIONISTAS Y EXPEDICIÓN DE CERTIFICADO DE ACCIONES

"V. Justificación de la sentencia

Siendo que la sentencia recurrida será casada por los submotivos de aplicación errónea del art. 19 rom I, inaplicación del art. 44 inc. 1º, y aplicación indebida del art. 156 lodos del CCom, se procederá a pronunciar la que corresponde, de acuerdo a las consideraciones siguientes:

1) El proceso declarativo común de requerimiento judicial de cumplimiento de obligación de inscripción en el libro de registro de accionistas, expedición de certificado de acciones y reclamo de daños y perjuicios, promovido por los licenciados […], en calidad de apoderados generales judiciales de la señora MEFL, en contra de la SOCIEDAD […], representado procesalmente por el licenciado […]; y en contra de los miembros de la junta directiva, los Señores BCGA, AV, GAAP, MAOD, OALR, JEAM y CFGC, representados por la licenciada […].

La pretensión de la demandante consiste en requerir judicialmente el cumplimiento de la obligación de inscripción en el libro de registro de accionistas, y expedición de certificado de acciones.

Según la exposición de los hechos en la demanda, la SOCIEDAD […], se negó a inscribir en el libro de accionistas, y en consecuencia, a emitir los certificados de acciones a favor de la señora MEFL, quien adquirió certificado de acciones comunes a través del endoso realizado por el señor EARM; aduciendo que dicha sociedad cooperativa está sujeta al régimen de las sociedades anónimas de capital variable, y por lo tanto obligada a cumplir con lo solicitado.

La demandante expone que la denegatorio es injustificada, pues, al tratarse de una sociedad anónima, debe cumplir con lo que preceptúan los art. 154 y 156 ambos del Código de Comercio; es decir, dado que a su juicio el título nominativo es transferible por endoso, debe procederse a su inscripción en el libro accionistas respectivo; y que, además, deben responder por los daños y perjuicios causados.

La SOCIEDAD […], a través de sus apoderados, contestó la demanda y expuso que, la sociedad cooperativa es una sociedad de personas, por lo que no existe un libro de accionistas, sino que conforme el art. 19 CCom, se lleva un libro de socios.

Afirman los apoderados de la cooperativa, que las acciones son nominativas y sólo transferibles por inscripción en el libro respectivo, con autorización de la sociedad, (art. 19 rom II CCom). Asimismo, aseguran que, conforme al Código de Comercio, la cooperativa es totalmente libre para decidir si admite o no a un aspirante como socio; que el fundamento es el principio de libertad para asociarse, art. 8 Cn.

Por lo anterior, la sociedad cooperativa pidió que se tuviera por contestada la demanda en sentido negativo y en sentencia definitiva, se declarare no haber lugar a las pretensiones alegadas por la parte demandante.

2) La prueba documental admitida a la parte demandante consistió en: […].

Por otra parte, la prueba documental- por ser la única ofrecida- por la parte demandada fue admitida la siguiente:[…].

Consta asimismo, peritaje psicológico realizado a la demandante, se agregó de folios […].

3) Fundamentos de derecho

Por mandato constitucional, el juzgador está obligado a garantizar que los procesos se tramiten con absoluto respeto a los derechos de las partes, debiéndose cumplir para ello con las garantías del debido proceso, conforme a lo establecen en los arts. 2 Cn, 1, 2, 4, 5, 13, 14 y 16 CPCM.

De tal manera, que se procederá a analizar la pretensión de la demandante y posteriormente conforme al art. 416 CPCM, se procederá a valoración de la prueba aportada en su conjunto, conforme o las reglas de la sana crítica, y observando que existe prueba documental que debe ser valorada según el art. 341 CPCM, es decir, el valor tasado para dicho medio probatorio.

En el caso de estudio, la demandante afirma que […], es una sociedad cooperativa que ha optado por las disposiciones que corresponden a una sociedad anónima por tanto es de capital. De ahí concluye la demandante que, la referida sociedad, tiene la obligación de inscribirle en el libro de accionistas, emitir los certificados de acciones comunes, y responder por los daños y perjuicios ocasionados por la denegación de la inscripción.

En ese sentido, es pertinente recordar que las sociedades cooperativas surgieron como una forma de sociedad mercantil, pero debido a su contenido económico, sus finalidades y las formas que adoptan, se ha ido perfilando como una figura propia, autónoma, independiente de la sociedad mercantil.

A diferencia de las típicas sociedades mercantiles, que en esencia busca un lucro y un fin económico, la cooperativa es un ente jurídico de servicio, constituida para el beneficio exclusivo de sus socios, al grado que una cooperativa puede obtener utilidades pero que no se repartan entre los socios en razón de la partición que cada uno tiene, sino de forma proporcional al uso que ha hecho de los servicios que la cooperativa presta a sus miembros.

La sociedad cooperativa, en cuanto a generalidades y su estructura, se rige por los requisitos de la sociedad típicamente mercantil; en consecuencia, se constituye por escritura pública, se modifica, disuelve y liquida de la misma manera (art. 21 CCom); se inscribe en el registro de comercio (art. 24 CCom); y en general, le son aplicables las regulaciones del Código de Comercio, en lo que respecta a su operación.

Ahora bien, cualquiera que sea la naturaleza que adopte la sociedad cooperativa (ya sea de personas o de capital), existen ciertos preceptos de la sociedad anónima que siempre le resultan aplicables, como aquellos que se refieren a sus administración y vigilancia; es decir, se aplican las normas que refieren a la juntas generales y juntas directivas, al balance y su publicidad, a la vigilancia del auditor, de las oficinas especializad del Estado.

Con base en lo anterior expuesto, este tribunal reitera que las sociedades cooperativas se regirán por las disposiciones que correspondan conforme al tipo de sociedad que se haya adoptado en su constitución, sea de personas o de capital; y por las reglas instituidas para la sociedad anónima en lo relativo al balance, responsabilidad de los administradores y vigilancia del art. 19 rom I CCom.

En el presente caso, esta Sala advierte que tanto la escritura de constitución y como la de modificación del pacto social, establecen que la sociedad demandada es de naturaleza anónima, sujeta al régimen de capital variable. Asimismo, se ha establecido que la emisión de los títulos, y el registro en el libro de accionistas, se regulara conforme a las disposiciones del Código de Comercio; y que la Asamblea General de Socios constituye la máxima autoridad de la sociedad, la cual conocerá de manera exclusiva de las solicitudes de ingreso de socios como titulares de acciones comunes.

Dichos aspectos han sido regulados a su vez, en los estatutos de […], en los cuales se ha previsto que la decisión sobre admisión de nuevos socios titulares de acciones comunes, es potestad de la junta ordinaria de socios.

En ese orden de ideas, esta Sala concluye que la SOCIEDAD […], no obstante, ha consignado que tiene como naturaleza el ser anónima, ha previsto regirse en relación a la admisión de los socios, a las reglas atientes a las sociedades de personas, pues es evidente que, para integrarse a la sociedad es esencial la calidad personal del miembro o nuevo socio.

Dado las razones anteriores, este tribunal desestimará las pretensiones de la señora MEFL, dado que la sociedad cooperativa de acuerdo a su conformación, tiene la potestad de reservarse el derecho de admisión de un socio a la referida cooperativa, de acuerdo a las condiciones previamente establecidas en los estatutos de dicha sociedad. De ahí que, no está obligada a inscribir a la demandante, la señora MEFL, en el libro de accionistas, como tampoco está obligada a extender el certificado de acciones e inscribirla en el libro de socios.

Ahora bien, esta Sala no puede ignorar el agravio que le genera a la señora MEFL, el no ser inscrita en el libro de socios de la sociedad […], y gozar de los derechos que tienen los miembros de la referida sociedad, pues se entiende que adquirió el certificado de acciones comunes de buena fe, por parte del señor EARM, razón por la cual queda expedito el derecho de acción contra el mismo, pues era Imposible que este desconociera el procedimiento para la incorporación de nuevos miembros."

Sala de lo Civil, número de referencia: 194-CAM-2022, fecha de la resolución: 30/08/2022

SUSPENSIÓN DEL PLAZO PARA CONTESTAR LA DEMANDA

IMPOSIBILIDAD DE CONFIGURARSE EL IMPEDIMENTO POR JUSTA CAUSA, YA QUE ANTE LA AUSENCIA POR INCAPACIDAD DEL ADMINISTRADOR ÚNICO DE LA SOCIEDAD, PUEDE ENTRAR EN FUNCIONES EL ADMINISTRADOR ÚNICO SUPLENTE, QUIEN ES LLAMADO A SUSTITUIRLE

"Respecto al incidente de suspensión de plazo para contestar la demanda, esta Sala hace las siguientes consideraciones:

El apoderado de [...]., esgrime que debe darse aplicación al art. 146 CPCM, por cuanto el representante legal de dicha sociedad a su juicio, estaba impedido por justa causa, dado que después de una operación en la columna vertebral, ha estado gozando de incapacidad desde el veinticuatro de enero hasta el dieciséis de febrero del corriente año.

En tal virtud, es necesario tomar en consideración la interpretación que la Sala de lo Constitucional, por medio de la sentencia de amparo referencia 784-2006, de fecha diez de enero de dos mil siete, en el cual ha indicado respecto al art. 146 CPCM, lo siguiente:

«[...] Se considera justa causa la que provenga de fuerza mayor o de caso fortuito, que coloque a la parte en la imposibilidad de realizar un acto por sí". [...] la suspensión de un plazo procesal, debe provenir de fuerza mayor o caso fortuito que coloque a la parte en la imposibilidad de realizar el acto por sí o por mandatario [...] dichas situaciones constituyen circunstancias ajenas a la voluntad de la parte, caracterizadas por su imprevisibilidad e irresistibilidad, que la colocan en la imposibilidad de realizar el acto, no configurándose, por lo tanto, la justa causa de impedimento cuando el acto haya podido realizarse por un representante de la parte imposibilitada o cuando exista una mera dificultad» (sic).

En ese orden de ideas, esta Sala considera pertinente recalcar que el art. 146 CPCM, se refiere al principio general de suspensión de plazos, el cual aplica para los términos procesales dirigidos a las partes, lo que conlleva a que al impedido por justa causa no le corre plazo desde el momento en que se configura el impedimento hasta que cesa el mismo.

Se considera justa causa la que provenga de fuerza mayor o de caso fortuito, entendiéndose la fuerza mayor, el hecho del hombre, previsible o imprevisible, pero inevitable, que impide en forma absoluta, el cumplimiento de una obligación.

Para esta Sala, se trata de un acontecimiento natural inevitable que puede ser previsto o no, pero no imputable al sujeto que le impide en forma absoluta el cumplimiento de lo que debe efectuar; lo que equivale a decir, que constituye una imposibilidad física insuperable. *(Auto Ref. 393-CAL-2016, dictado a las once horas cuarenta y tres minutos del quince de febrero de dos mil diecisiete; y Auto Ref. 119-CAM-2021, dictado el once de agosto de dos mil veintiuno).*

Asimismo, en el artículo 43 del Código Civil se incorporan ambos conceptos y se establece que la fuerza mayor o caso fortuito es el imprevisto que no es posible resistir, señalando como ejemplo: un terremoto, un naufragio, o ser sujeto de actos de autoridad, como el encarcelamiento.

De lo anterior se infiere que el justo impedimento es una figura procesal, en virtud del cual a la persona impedida para realizar una actuación obligatoria *-con una justa causa-* no le correrá término. Sin embargo, dicha situación deberá ser apreciada por el juzgador prudentemente, dado que dichos preceptos, solo regulan la enunciación del mismo, sin especificar taxativamente los supuestos fácticos que pueden configurar el impedimento.

En razón de ello, es preciso aclarar que el apoderado de la parte procesal tiene el deber no sólo de alegar los hechos, que son el supuesto base de aplicación del art. 146 CPCM, sino también la carga de probar la existencia de los mismos, a fin de convencer al tribunal de su realidad y así tener por establecido el justo impedimento que conlleve la suspensión del plazo para presentar la demanda.

En ese sentido, este tribunal advierte que el licenciado [...], hace recaer el impedimento con justa causa, en la incapacidad del representante legal por encontrarse incapacitado debido a que se realizó una operación en su columna vertebral, por lo cual agregan junto a la contestación de la demanda, dos constancia de incapacidad, en las cuales se lee: *"[...] que la paciente EMPG se ha realizado tratamiento de fisioterapia por diagnóstico de Lumbalgia Neurológica Aguda Post Operatorio. Recomendando tratamiento de Fisioterapia más reposo [...]" (sic).*

Al valorar lo expuesto por dicho profesional del derecho, y analizar los documentos, esta Sala advierte que también se ha agregado una certificación notarial del testimonio de escritura de constitución, en la cual consta que conforme a la cláusula decima séptima, literalmente dice:

"[...] DÉCIMA SEPTIMA. - ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD. - La Administración y Dirección de la Sociedad estará a cargo de un Administrador Único que será electo por la Asamblea General Ordinaria de Accionistas, juntamente con un Administrador Único Suplente, electo por la misma Asamblea General Ordinaria de Accionistas, quien sustituirá al propietario, en caso de fallecimiento, renuncia, licencia, ausencia o cualquier impedimento temporal o definitivo [...] " (sic).

Al respecto, es pertinente señalar en un primer término, que resulta contradictorio lo expresado por abogado de [...], pues claramente del pacto social se concluye que ante la ausencia por incapacidad del administrador único de la referida sociedad señor EMPG, puede perfectamente entrar en funciones el administrador único suplente quien es llamado a sustituirle.

De ahí que, con los documentos presentados, no se puede comprobar que el representante legal se encontraba en una circunstancia que pueda ser considerada como impedimento por justa causa al provenir de *"fuerza mayor*" o *"caso fortuito",* que obstaculizara llamar en funciones al administrador único suplente de la sociedad, al grado de colocar a la sociedad en la imposibilidad de realizar la contestación de la demanda en tiempo, tal como lo dispone el art. 146 CPCM.

En otras palabras, la sociedad ha establecido en el pacto social que, ante licencia, ausencia o cualquier impedimento temporal o definitivo del administrador único, estará en funciones el administrador único suplente, por lo que resulta evidente que al mismo le concernía realizar todos aquellos actos necesarios para contestar en tiempo y legal forma la demanda de revisión, razón por la que lo alegado no puede considerarse un justo impedimento."

PARA LA TRAMITACIÓN DE LA SUSPENSIÓN DE PLAZOS SE APLICAN LAS REGLAS GENERALES DE LAS CUESTIONES INCIDENTALES, LAS CUALES PUEDEN SER PLANTEADAS DURANTE LA TRAMITACIÓN DEL PROCESO Y NO DESPUÉS DE DECIDIDO EL ASUNTO OBJETO DEL LITIGIO MEDIANTE LA SENTENCIA RESPECTIVA

"Sin perjuicio de lo antes expuesto, es necesario destacar que, en el presente caso, esta Sala ha pronunciado sentencia respecto de la revisión incoada por [...], dictada a las nueve horas del veintiuno de febrero del corriente año.

En tal sentido, es preciso tener en cuenta que, la suspensión de plazos no tiene un trámite especifico en la ley, sino que se aplican las reglas generales de las cuestiones incidentales, reguladas a partir del art. 263 y siguientes CPCM; por lo que dichos incidentes pueden ser planteados durante la tramitación del proceso, pero no después de decidido el asunto objeto del litigio.

Esta forma de plantearse las cuestiones incidentales, se refuerza con la idea que por lo general no se suspende el proceso. En esa virtud, resulta inaceptable promover tal incidente hasta este momento tomando en consideración que según los argumentos del apoderado de [...]., la incapacidad del administrador único iniciaba a partir del mismo día de realizado el emplazamiento; es decir, desde el veinticuatro de enero del presente año, fecha a partir de la cual la sociedad demandada, tenía cinco días perentorios para alegar y formular lo que a derecho corresponde.

En ese sentido, bien pudo el *administrador suplente* hacer toda la gestión necesaria para promover el referido incidente durante el plazo de contestación de la demanda o antes de que este tribunal decidiera sobre la revisión que nos ocupa, de modo que al haberse presentado posteriormente al pronunciamiento de la sentencia de revisión, resulta inviable darle trámite al incidente de suspensión de plazos.

Máxime aun, que tal como se ha referido en párrafos anteriores, ya se había dictado la respectiva sentencia, y posterior a ello, no es posible plantear cuestiones incidentales, por lo que dicho incidente deviene en improponible, art. 267 inciso 2° CPCM."

Sala de lo Civil, número de referencia: 7-REM-2021, fecha de la resolución: 23/02/2022

TERCERÍA DE DOMINIO

SIENDO EL AUTO QUE DECIDE SOBRE LA TERCERÍA DE DOMINIO, UN AUTO SIMPLE, EL MISMO CARECE DE IMPUGNABILIDAD OBJETIVA EN APELACIÓN Y EN CASACIÓN

"2. La Cámara de la Segunda Sección de Occidente, con sede en la ciudad y departamento de Sonsonate, mediante auto pronunciado a las once horas catorce minutos del diez de febrero dos mil veintidós, rechazó por inadmisible el recurso de apelación, contra el auto simple proveído en el incidente de tercería de dominio, promovido por la licenciada [...], como representante procesal del señor […], en contra de los señores […].

3. No conforme con lo resuelto por el tribunal de alzada, la abogada [...], interpuso recurso de casación por el motivo de forma relativo al quebrantamiento de las formas esenciales del proceso, por inadecuación del procedimiento, sin haber señalado una disposición legal infringida.

4. Respecto de la procedencia del recurso interpuesto, en jurisprudencia de esta Sala: *"[...] se ha establecido que el recurso es improcedente cuando la resolución pronunciada no sea de aquellas contra los que la ley concede esta clase de impugnación, y dictadas en los procesos fuera de los determinados en el art. 519 CPCM; y si no obstante se interpone contra resoluciones que no sean casables, deberá ser declarado improcedente, sin necesidad de examinar si el escrito impugnatorio llena o no los requisitos tanto formales como de fondo que la ley exige para su admisibilidad [...]" (sic)*. (Auto pronunciado por esta Sala, a las ocho horas cuatro minutos del veintiuno de julio dos mil veintiuno, en el incidente clasificado bajo referencia 111-CAC-2021).

Es de acotar que el legislador precisamente en el art. 519 ord. 1° del Código Procesal Civil y Mercantil (en adelante, CPCM), limita el recurso de casación así: *"Admiten recurso de casación: 1° En materia civil y mercantil, las sentencias y los autos pronunciados en apelación en procesos comunes y en los ejecutivos mercantiles cuyo documento base de la pretensión, sea un título valor; asimismo las sentencias pronunciadas en apelación, en los procesos abreviados, cuando produzcan efectos de cosa juzgada sustancial".*

Sobre la disposición legal transcrita, se advierte que la accesibilidad para conocer por vía casacional está condicionada por presupuestos procesales determinados por el legislador, en cuanto a que en ella se ha restringido la proce-

dencia del recurso, precisamente, a cierta clase de resoluciones y procesos en materia civil y mercantil.

5. Al analizar el caso en estudio, en atención a la jurisprudencia arriba señalada, esta Sala observa que ha sido impugnada en casación una resolución emitida dentro de un proceso común de tercería de dominio.

Sobre los efectos del auto que resuelve la tercería de dominio, es fundamental tener en cuenta la resolución del proceso de inconstitucionalidad Ref. 109-2017, la cual fue dictada a las once horas treinta y cuatro minutos del veintitrés de febrero de dos mil dieciocho, que literalmente señala: *"[...] el auto que decide sobre la tercería de dominio es un auto simple (no definitivo). Esto es así porque, tal como se explicitó, la tercería de dominio no constituye un proceso común en estricto sentido, sino un incidente que se suscita en otro proceso en el que se ha ordenado el embargo. Por ello, a tenor del art. 212 inc. 3° CPrCM, debe ser resuelto por un auto simple, sin que produzca efectos de cosa juzgada en relación con la titularidad del bien. Esta es la razón por la que el auto que describe el art. 641 inc. 1° CPrCM, únicamente puede ser objeto de recurso de revocatoria (art. 503 CPrCM), sin que quepa una ulterior impugnación (art. 506 CPrCM). Esto es precisamente lo que determina su irrecurribilidad objetiva en apelación [...]" (sic).*

Asimismo, debe tenerse en cuenta que la naturaleza y finalidad de la tercería de dominio, no es de un proceso autónomo, principal o independiente, aunque tiene por objeto exclusivo decidir sobre la continuidad o el levantamiento del embargo (art. 640 inc. CPCM), su existencia depende del proceso en que dicha medida precautoria se ha decretado, como lo aclara el art. 639 inc. 1° CPCM, al establecer que la admisión de la demanda de tercería sólo suspenderá la ejecución sobre el bien a que se refiera. De tal modo, que se trata de una cuestión incidental, cuya finalidad es el mantenimiento o cesación de los efectos del embargo; es decir, que la tercería está enlazada con la ejecución dentro de la cual se plantea.

Lo anterior es así, pese a que el art. 640 inc. 1° CPCM prevé que el incidente se tramitará por la vía del proceso común, lo cual no cambia su naturaleza incidental, pues como puede advertirse, el proceso culmina no con una sentencia, como es la forma típica de finalización del proceso común, sino con un auto que no produce efectos de cosa juzgada (art. 641 inc. 1° CPCM).

En consecuencia, siendo el auto que decide sobre la tercería de dominio, un auto simple, el mismo carece de impugnabilidad objetiva en apelación y en casación. Por tanto, el recurso que nos ocupa resulta improcedente, tal como lo ha sostenido este tribunal en las resoluciones bajo referencias 447-CAC-2018, de las diez horas tres minutos del uno de febrero de dos mil diecinueve, y 247-CAC-2021, de las ocho horas doce minutos del día ocho de diciembre de dos mil veintiuno."

Sala de lo Civil, número de referencia: 104-CAC-2022, fecha de la resolución: 27/04/2022

VOTO CONCURRENTE DE LA MAGISTRADA DAFNE YANIRA SÁNCHEZ DE MUÑOZ

CONTRATO DE PROMESA DE VENTA

LA DEMANDA DE RESOLUCIÓN DEL CONTRATO ES IMPROPONIBLE, MOTIVO POR EL CUAL, AÚN Y CUANDO SE INCURRIÓ EN LA INFRACCIÓN POR INAPLICACIÓN DEL ARTÍCULO 1431 DEL CÓDIGO CIVIL, NO ES PROCEDENTE CASAR LA SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA, SINO CORREGIR LOS FUNDAMENTOS DE LA MISMA

"Dafne Yanira Sánchez de Muñoz, magistrada de la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia, en el incidente de casación 281-CAC-2021, emito voto concurrente por estar de acuerdo con la decisión que precede, no así con algunos de sus argumentos. Fundamento mi voto en los razonamientos que expongo a continuación:

En primer lugar, en la sentencia que precede, esta Sala ha calificado el documento base de la acción de incumplimiento de promesa de venta, como "documento privado autenticado", cuando en realidad, consiste en un "contrato" de promesa de compraventa que se hizo constar en acta notarial; el cual fue otorgado de esa forma, a pesar de la prohibición que para esos efectos establece el artículo 50 de la Ley de Notariado. Las partes contratantes comparecieron ante notario a otorgarlo, sin que se mencione el otorgamiento previo de un documento privado, cuyas firmas se pretendiera autenticar.

Por otra parte, al analizar el primer submotivo de casación, esta Sala expresa que, "Para el caso que nos ocupa, si bien es cierto se promete la compraventa de un inmueble, por el hecho de que se describa el mismo y *se estipule el precio que deberá pagarse al formalizar la compraventa prometida,* no significa que ese precio sea parte esencial del contrato de promesa de venta". Asimismo, agrega que "(...), en el contrato de promesa de venta, ha sido manifiesta la voluntad de las partes en el pacto de cuotas como parte del precio, pero lo que sí es cierto, es que las mismas no son de la naturaleza del contrato en referencia (...). Por lo tanto, *el incumplimiento del contrato de promesa de venta se verifica hasta la finalización del plazo establecido*, para el caso que nos ocupa es hasta el seis de julio de dos mil veintiuno" -resaltado propio-.

Así las cosas, advierto que, para dar respuestas a los puntos de casación, esta Sala sigue las siguientes líneas argumentativas. Primero, "ha sido manifiesta la voluntad de las partes en el pacto de cuotas como parte del precio", las cuales serían pagadas durante el pazo de seis meses, a su vez, al finalizar este plazo, debería formalizarse la compraventa prometida. Segundo, que ese pacto del monto del precio y su pago en cuotas, "no es parte esencial del contrato de promesa de venta", y que las cuotas "no son de la naturaleza del contrato" de promesa. Tercero, el incumplimiento del contrato de promesa "se verifica hasta la finalización del plazo establecido, para el caso que nos ocupa es hasta el seis de julio de dos mil veintiuno".

Por tanto, la Sala ha tenido claro que, en una cláusula del contrato de promesa, se pactó el pago el precio del inmueble que se prometió vender, el cual se realizaría por medio de seis cuotas, en el plazo de seis meses, lo cual coincide con el plazo en el que debería otorgarse la compraventa prometida.

Además, la Sala afirma que el pacto del precio a pagar en seis cuotas, es un elemento que no es de la esencia ni de la naturaleza del contrato de promesa, postura en la que coincidimos. Sin embargo, no llega a caracterizar de manera positiva, si no solo por exclusión, el pacto en referencia, a pesar de que la calificación del acuerdo que se comenta (es decir, el relativo al pago del precio), constituye la base a partir de la cual se debe construir el argumento para resolver el recurso de casación interpuesto.

En tal sentido, para plantear mi postura, necesariamente debo partir del contenido de la cláusula contractual en la que se pactó el "precio". Dicha cláusula es del contenido siguiente: "II) PRECIO: Que en este acto manifiesta los promitentes vendedora arriba indicada, que por la cantidad de ONCE MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, le promete a la promitente compradora, venderle el terreno, antes relacionado: que la forma de pago será de la siguiente manera: por medio de seis cuota de MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SETE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, el cual inicia este día y con fecha de vencimiento el día OCHO DE ENERO DE DOS MIL VEINTIUNO. III) PLAZO Y DEMAS CONDICIONES: la promitente vendedora prometo a la señora […], que le otorgare a su favor, la Escritura de Compraventa correspondiente con las formalidades que la Ley establece, en un plazo máximo de seis meses a partir de esta fecha, ante Notario Público (...)" (sic).

Ahora bien, la Sala, al resolver el primer motivo de casación (concerniente a la "aplicación errónea de los arts. 1425 y 1360 CC"), concluye que la Cámara no ha realizado una "interpretación errada de los arts. 1360 y 1425 ambos CC", debido a que, en el caso analizado, "en caso de no formalizarse la venta, por causa imputable a cualquiera de las partes contratantes, la acción pertinente a ejercer es la establecida en el art. 1424 CC" (folios 10 párrafo final). Con esta postura disiento totalmente, por las razones que más adelante expondré.

Asimismo, al resolver el segundo motivo de casación (concerniente a la "inaplicación del art. 1431 CC"), la Sala retorna el contenido del artículo 1434 CC (al que la Cámara acudió para dilucidar el contenido de la cláusula del "precio" -de modo que esta Sala avala su aplicación-), en el sentido de que "deberá estarse a la interpretación que mejor cuadre con la naturaleza del contrato". Sin embargo, en la sentencia que precede, no se llega a dilucidar la verdadera naturaleza del pacto relativo al pago del precio en cuotas (establecido en la promesa de venta), ya que simplemente se concluye que "el tribunal de segunda instancia en ningún momento desconoce la intención de las partes contratantes (...), aclarando que lo pretendida en este proceso en la demanda, es propio de un contrato derivado de una compraventa, y lo que las partes celebraron es una promesa. En consecuencia, para esta Sala, la Cámara no ha cometido la infracción señalada, porque la intención de los contratantes era la promesa de celebrar un contrato de compraventa de inmueble" (sic, folios 13 de la sentencia).

En ese sentido, considero que la Sala no ha dilucidado sobre la naturaleza del acuerdo relativo al "precio" en el contrato de promesa y, consecuentemente, no ha concluido de forma correcta lo concerniente a la acción a ejercer frente al incumplimiento de un pacto como el que fundamenta el presente caso.

A mi juicio, la Sala, al buscar la interpretación que mejor cuadra con la naturaleza del contrato y con la intención de los contratantes, debió concluir que las obligaciones propias de la promesa de compraventa celebrada, ***se sujetaron a condición suspensiva***; y, a partir de tal premisa, debió analizar los planteamientos del recurrente.

La Sala, al referirse al artículo 1431 CC, ha sostenido en su sentencia que, "la recurrente invoca la inaplicación de esta norma, justificando que debe respetarse la intención de las contratantes que consiste en el pago anticipado del precio del cual consta la futura compraventa prometida" (folios 12 de la sentencia).

Sin embargo, en dicha sentencia la Sala también afirma que, "el mismo tribunal de alzada consideró la redacción deficiente del contrato, concluyendo que interpreta el contrato, en el sentido de que las cuotas se pagarán a partir del ocho de enero de dos mil veintiuno y que estas vencerán el mismo día, por lo que la cláusula para la Cámara es incompatible con la institución de la promesa (...)"; pues el precio, además de la cosa vendida, es elemento esencial del contrato de compraventa. Además, advirtió que, para la Cámara, "el hecho de que en el contrato de promesa de compraventa, se haya estipulado que el precio comenzaría a pagarse antes de la formalización de la venta, que es lo prometido, va en contra del contrato de promesa de compraventa (...)" (folios 12 de la sentencia).

Agrega la Sala que, "advierte que el tribunal de segunda instancia en ningún momento desconoce la intención de las partes contratantes, por el contrario, al considerar confusa la cláusula que establece el plazo en el contrato de promesa de venta, se remitió a aplicar la regla interpretativa establecida en el art. 1434 CC, es decir, a la naturaleza del contrato de promesa de venta, aclarando que lo pretendida en este proceso en la demanda, es propio de un contrato derivado de una compraventa, y lo que las partes celebraron es una promesa. En consecuencia, para esta Sala, la Cámara no ha cometido la infracción señalada, porque la intención de las contratantes era la promesa de celebrar un contrato de compraventa de inmueble (...)" (folios 13 de la sentencia).

En ese sentido, advierto que la Cámara no aplicó el art. 1431 CC, ya que no se atuvo a la verdadera intención de los contratantes, de hacer depender el nacimiento de las obligaciones propias de la promesa, de una condición suspensiva que consistía en pagar el precio de la futura venta, en cuotas, antes de la celebración del contrato prometido. Más bien, consideró, erradamente, que el pacto del precio "es propio de un contrato derivado de una compraventa, y lo que las partes celebraron es una promesa". Y pese a ello, la Sala expresa una postura que refleja estar de acuerdo con tal interpretación. Sin embargo, considero que la Cámara no aplicó la referida disposición legal, pese a que, de la lectura del contrato, se deduce con claridad que al suscribir el documento base de la acción (promesa de venta), existió entre las partes contratantes la intención de que se pagara una suma de dinero en concepto de precio de la futura compraventa.

En síntesis, a mi juicio, la intención de las partes promitentes fue estipular el pago de una suma de dinero (en concepto de precio de la compraventa prometida), por lo cual era necesario identificar con claridad la naturaleza de esa estipulación, con el fin de determinar si la acción judicial ejercida era procedente o no. Así las cosas, estimo que en los argumentos vertidos por esta Sala, en la sentencia que precede, no estiman la falta de aplicación del artículo 1431 CC, cuando, a mi parecer, tal infracción legal ha sido cometida por parte de la Cámara.

En ese sentido, siguiendo las reglas de la técnica casacional, lo procedente sería casar la sentencia de segunda instancia, debido a la inaplicación del artículo 1431 CC. Sin embargo, el aplicar la referida disposición legal, es decir, al considerar la verdadera intención de los contratantes al momento de estipular el pago del precio, se llegaría a la misma consecuencia que se ha dado en primera y en segunda instancia: *la improponibilidad de la demanda*. Ciertamente, aun aplicando el artículo 1431 CC, la demanda resulta improponible, por cuanto no puede pedirse la resolución de contrato con fundamento en el artículo 1360, ni con base en el artículo 1425, ambos del CC, dado que al tomar en cuenta la intención de los contratantes, podrían afirmarse que la cláusula del "precio", constituye una condición suspensiva de la promesa de venta, que no fue cumplida por la promitente compradora.

Soy del criterio que, al dilucidar la verdadera naturaleza del precio pactado y de la forma en que se pactó, la interpretación que mejor cuadra con la intención de los contratantes y con la naturaleza de la cláusula y del contrato, es que la promesa de venta se sujetó a una condición suspensiva, vinculada a un plazo, también de carácter suspensivo.

Para explicar esto es oportuno destacar que, la condición suspensiva y el plazo suspensivo son "cosas" accidentales del negocio jurídico, precisamente porque no le pertenecen, ni esencial ni naturalmente, al contrato en el que se pactan (en este caso el contrato de promesa). De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1315 CC, "Son de la esencia de un contrato aquellas cosas sin las cuales o no produce efecto alguno, o degenera en otro contrato diferente; son de la naturaleza de un contrato las que no siendo esenciales en él, se entiende pertenecerle, sin necesidad de una cláusula especial; **y son accidentales a un contrato aquellas que ni esencial ni naturalmente le pertenecen, y que se le agregan por medio de cláusulas especiales"** (resaltado propio).

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1344 CC, es "obligación condicional la que depende de una condición, esto es, de un acontecimiento futuro que puede suceder o no". Por tanto, la condición es un hecho futuro e incierto del que depende el nacimiento o la extinción de una obligación. Bajo esa línea conceptual, puede afirmarse que la condición de pagar el precio en seis cuotas mensuales, es un hecho futuro a la fecha de celebración del contrato, y, además, es un hecho incierto, porque las cuotas podrían pagarse o no, por parte de la promitente compradora.

A su vez, se trata de una condición suspensiva, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1350 CC, según el cual la condición "se llama suspensiva, si, mientras no se cumple, suspende la adquisición de un derecho (...)". En ese sentido, el hecho futuro e incierto al que se sujetó la promesa, consiste en el pago del precio (de la cosa que se prometió vender) en seis cuotas mensuales. Este hecho constituye una condición suspensiva, debido a que, de su cumplimiento depende el nacimiento de los derechos y obligaciones propios de la promesa de compraventa.

En relación con lo anterior, puede advertirse que el artículo 1425 ordinal 3° CC, establece que uno de los requisitos esenciales del contrato de promesa, es el siguiente: "Que la promesa contenga un ***plazo o condición*** que fije la época de la celebración del contrato". Precisamente, en el caso analizado, en el contrato de promesa se estableció como condición, el pago del precio en seis cuotas. Dicho pago debía efectuarse en el plazo de los seis meses siguientes a la celebración del contrato de promesa, para que (pagado el precio en seis cuotas y transcurridos los seis meses), nacieran las obligaciones propias de la promesa, que sería otorgar el contrato de compraventa.

Ahora bien, del contrato de compraventa (contrato prometido), surgirían las siguientes obligaciones y consecuencias: por parte de la promitente vendedora, otorgar la venta, hacer la tradición y entregar el inmueble que prometió vender; y, en este caso particular, darse por recibida del precio que pagó la promitente compradora, previo a la celebración del contrato prometido; y por parte de la promitente compradora, aceptar la venta, tradición y entrega del inmueble, y declarar que ha pagado el precio del mismo; con los demás derechos y obligaciones que surgen de un contrato de compraventa, tales como el saneamiento por evicción y el saneamiento por vicios redhibitorios.

De tal forma que, si la promitente vendedora no cumplía con el pago de las seis cuotas mensuales, que en su totalidad ascenderían al monto de diez mil ciento veintidós, en el plazo de los seis meses subsiguientes; no se habría cumplido la condición suspensiva que, por acuerdo de ambas promitentes, afectaba el nacimiento de las obligaciones propias del contrato de promesa de compraventa.

La consecuencia que se produce cuando no se cumple la condición suspensiva es que no llegan a nacer las obligaciones sujetas a tal condición, es decir, no llega a nacer la obligación de los promitentes (la obligación de otorgar el contrato prometido). Por tanto, si en el caso analizado la promitente compradora incumplió con la condición suspensiva de pagar las cuotas mensuales en la forma pactada, las obligaciones propias del contrato de promesa no nacieron, sobre todo para la promitente vendedora (de otorgar el contrato de compraventa prometido). Desde el incumplimiento de pago de la primera cuota ya no surgirían las obligaciones propias del contrato de promesa.

De todo lo antes expuesto, se concluye que no es acertada jurídicamente la conclusión a la que llegó la Cámara, y que ha sido acogida por la Sala, en el sentido de que, "en caso de no formalizarse la venta por causa imputable a cual-

quiera de las partes contratantes, la acción pertinente es la establecida en el art. 1424 CC" (folios 10 de la sentencia). Asimismo, es incorrecta la idea plasmada por esta Sala, en cuanto a que, "Con respecto a la interpretación errónea del art. 1425 CC, la Cámara a consecuencia del anterior argumento, deja claro cuál es el derecho que asiste, a los promitentes, pero sólo si se incumpliese el contrato de promesa una vez finalizado el plazo establecido".

Al respecto, debe tenerse en cuenta que el artículo 1424 CC dispone lo siguiente: "Si la obligación es de hacer y el deudor se constituye en mora, podrá pedir el acreedor, junto con la indemnización de la mora, cualquiera de estas dos cosas, a elección suya: 1ª Que se apremie al deudor para la ejecución del hecho convenido; 2ª Que se le autorice a él mismo para hacerlo ejecutar por un tercero a expensas del deudor. También podrá pedir que se rescinda la obligación y que el deudor le indemnice de los perjuicios resultantes de la infracción del contrato".

No obstante, con base en los razonamientos expuestos, por afectar una condición suspensiva al nacimiento de las obligaciones propias de la promesa, se habría podido aplicar el artículo 1424 CC en este caso, si la promitente vendedora hubiera dado cumplimiento a la condición suspensiva en el plazo previsto para ello, en el contrato de promesa; porque solo en ese caso habría nacido para cada una de las partes la obligación de celebrar ese contrato; y, por tanto, solo en tales circunstancias podría concebirse un incumplimiento del contrato de promesa.

Al no haber nacido las obligaciones propias de la promesa (por no haberse cumplido la condición suspensiva), no procede ejercer acción alguna encaminada a lograr el cumplimiento de las obligaciones surgidas de la promesa; pues simplemente no llegaron a nacer. En otras palabras, no puede exigirse el cumplimiento de obligaciones que no existen.

Las únicas obligaciones que surgen del contrato de promesa son las que consisten en celebrar el contrato prometido (obligación de hacer), por lo que no puede concebirse que el pago del precio en seis cuotas constituye una obligación nacida del contrato de promesa. Pero tampoco puede desconocerse el pacto de las mismas, simplemente sosteniendo que se trata de una cláusula propia del contrato de compraventa prometido. Más bien, considerando la naturaleza del contrato y la intención de los promitentes, dicho pacto constituye una condición suspensiva, la cual debía cumplirse durante el plazo de seis meses.

En vista de que la promitente compradora no dio cumplimiento a la condición suspensiva, no surgieron las obligaciones de celebrar la compraventa prometida, por lo que no podría pretenderse forzar judicialmente al cumplimiento de la promesa, ya que las obligaciones propias de la misma no llegaron a nacer.

Al concluir que la cláusula contractual analizada constituye una condición suspensiva de la promesa de venta, era oportuno valorar que, mientras no se pagara la suma total del precio, en el plazo y la forma prevista, los derechos derivados de la promesa no surgían por las partes. Además, tampoco surgían obligaciones recíprocas, en tanto que una condición de esta naturaleza impide

el ejercicio de un derecho, mientras el hecho futuro e incierto no se produzca -en este caso el pago del precio, en la forma y plazo acordado (artículos 1344 y 1350 CC)-.

Si no se cumplió con el pago del precio, la promitente vendedora no estaba obligada a otorgar la venta prometida, es decir, no estaba obligada a cumplir las obligaciones derivadas del contrato de promesa. Y para ser más precisa, de no haberse cumplido la condición en el plazo previsto, no era técnicamente correcto señalar que la acción a ejercer en este tipo de casos es la prevista en el artículo 1360 o la establecida en el artículo 1424 CC. Simplemente porque al no cumplirse la condición suspensiva, la promesa de venta no produjo el nacimiento de derechos y obligaciones relativos al otorgamiento de la compraventa prometida. No existe contrato que resolver, rescindir o cumplir.

En consecuencia, en el caso analizado, no procedía ejercer la presente acción en aplicación del artículo 1360 CC, ni en aplicación del artículo 1424 CC; por cuanto las obligaciones propias de la promesa no llegaron a nacer, al no haberse cumplido la condición suspensiva a la que se sujetó dicho negocio. De pretender aplicar dichas disposiciones, se incurriría en una infracción de ley, concretamente en la aplicación indebida de la norma. En ese sentido, considero que la demanda es improponible, tal como se declaró en primera instancia y se confirmó en segunda instancia, motivo por el cual, aun y cuando se incurrió en la infracción del artículo 1431 CC, no es proced ente casar la sentencia de segunda instancia, sino más bien corregir los fundamentos de la misma, en los términos que lo he hecho en este voto.

Por ello, estoy de acuerdo en no casar la sentencia impugnada, pero teniendo como base los razonamientos expuestos en este voto.

Así mi voto."

Sala de lo Civil, número de referencia: 281-CAC-2021, fecha de la resolución: 14/02/2022

VOTO CONCURRENTE DE LA MAGISTRADA DAFNE YANIRA SÁNCHEZ DE MUÑOZ

IMPROCEDENCIA DEL RECURSO DE CASACIÓN

CUANDO LA DECISIÓN IMPUGNADA NO PRODUCE EFECTOS DE COSA JUZGADA MATERIAL

"Dafne Yanira Sánchez de Muñoz, magistrada de la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia, en el incidente de casación 129-CAC-2022, emito voto concurrente por estar de acuerdo con la decisión que precede, no así con alguno de sus fundamentos. Sustento mi voto en las razones que expongo a continuación.

En la resolución que antecede, se ha inadmitido el recurso de casación interpuesto contra la resolución que anuló actuaciones procesales efectuadas en primera instancia y ordenó reponer las mismas. Y entre los fundamentos que sustentan dicha decisión, se sostiene lo siguiente: "En el caso bajo estudio, se impugna un auto simple dictado por la referida Cámara, mediante el cual se declaró la nulidad absoluta de todo lo actuado, a partir del auto que dejó sin efecto el reconocimiento judicial, y lo que fuere su consecuencia, inclusive la sentencia dictada (...)". [...]

No obstante, comparto la decisión de declarar por improcedente el recurso de casación, en vista de que la decisión impugnada no produce efectos de cosa juzgada material (artículo 520 CPCM). Por el contrario, se ha ordenado reponer las actuaciones procesales viciadas.

En consecuencia, acompaño la decisión adoptada, pero no los argumentos relacion ados con lo ya expuesto.

Así mi voto."

Sala de lo Civil, número de referencia: 129-CAC-2022, fecha de la resolución: 16/05/2022

VOTO CONCURRENTE DE LA MAGISTRADA DAFNE YANIRA SÁNCHEZ DE MUÑOZ

NATURALEZA DE LAS RESOLUCIONES DE SEGUNDA INSTANCIA

LA PROVIDENCIA JUDICIAL DICTADA EN SEGUNDA INSTANCIA, MEDIANTE LA CUAL SE CONFIRMA, REVOCA, ANULA O MODIFICA UNA DECISIÓN PRONUNCIADA EN PRIMERA INSTANCIA, CONSTITUYE UNA SENTENCIA DEFINITIVA

"Al respecto, no comparto la idea de que la resolución impugnada sea un auto simple. Más bien, soy categórica al afirmar que la providencia judicial dictada en segunda instancia, mediante la cual se confirma, revoca, anula o modifica una decisión pronunciada en primera instancia, constituye una sentencia definitiva. Esto es así por cuanto el carácter de dicho proveído no viene determinado por su capacidad de resolver la pretensión incoada en la demanda, sino porque resuelve la pretensión ejercida en el respectivo recurso de apelación. La resolución dictada por un tribunal de segunda instancia, mediante la cual anula actuaciones ejecutadas y decisiones adoptadas en primera instancia, constituye, sin duda alguna, una sentencia definitiva dentro del incidente apelación. No es un requisito indispensable que la resolución del tribunal de alzada responda a la pretensión ejercida en la demanda, para que goce del estatuto de la sentencia. Lo que interesa es que responda (o resuelva) al recurso de apelación debidamente admitido."

Sala de lo Civil, número de referencia: 129-CAC-2022, fecha de la resolución: 16/05/2022

VOTO DISIDENTE DE LA MAGISTRADA DAFNE YANIRA SÁNCHEZ DE MUÑOZ

REVISIÓN DE SENTENCIA FIRME

IMPOSIBILIDAD DE RESOLVER EL PROCESO DE REVISIÓN Y RESCINDIR LA SENTENCIA IMPUGNADA, CUANDO LO QUE LEGALMENTE CORRESPONDE ES CONVOCAR Y CELEBRAR LA RESPECTIVA AUDIENCIA ÚNICA

"Dafne Yanira Sánchez de Muñoz, magistrada de la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia, en el proceso de revisión 7-REM-2021, emito voto disidente con base en el artículo 220 CPCM, por no estar de acuerdo con la decisión que antecede, según lo especificaré más adelante; no obstante haber firmado la respectiva resolución, tal como lo dispone el referido artículo.

Fundamento mi voto en las siguientes consideraciones:

En la sentencia que antecede se ha resuelto el proceso de revisión de sentencia firme, producto de lo cual, entre otras cosas, se rescindió la sentencia impugnada; sin que previamente se hubiera convocado y celebrado la respectiva audiencia (siguiendo las reglas del proceso abreviado). Por el contrario, en esa misma sentencia se dispuso expresamente omitir la convocatoria a audiencia, bajo el argumento de no ser necesario, "dado que por su naturaleza la prueba documental no requiere producirse". Incluso, en sus considerandos se expresa que "el demandado en el caso de estudio, no atendió el llamado de contestar la demanda y oponer algún defecto procesal, como tampoco ha ofrecido prueba, por lo cual se comprende que la finalidad para la que está diseñada la audiencia no tendría razón de ser (...)". Sin embargo, no estoy de acuerdo con esta forma de proceder, en virtud de que lo legalmente correcto es convocar a las partes a la respectiva audiencia única, para dar cumplimiento a lo establecido en los artículos 548, 423 y siguientes del CPCM.

Las formalidades procesales son de imperativo cumplimiento

El presente proceso de revisión de sentencia firme se ha interpuesto respecto de las sentencias pronunciadas en primera instancia y en segunda instancia, en el procesó ejecutivo clasificado con la referencia E-46-16-1(3), promovido por [...], en contra de [...].

En primer término, debe tenerse en cuenta que lo relacionado a la interposición, calificación, trámite y resolución del proceso de revisión de sentencias firmes, se rige por las reglas y principios dispuestos en el artículo 540 y siguientes del CPCM.

Ahora bien, de acuerdo a las reglas especiales establecidas por el legislador para el proceso de revisión, una vez que ha sido emplazada la parte demandada, debe aplicarse el contenido del artículo 458 CPCM, que dispone lo siguientes: "Presentadas las alegaciones de defensa, o transcurrido el plazo para ello sin haberlo hecho, se dará a las actuaciones la tramitación establecida para el proceso abreviado" [...].

Y en lo que al trámite del proceso abreviado se refiere, importa destacar que, dentro de su configuración legal, el legislador ha previsto la celebración de una audiencia. Ciertamente, el artículo 423 CPCM (al referirse al proceso abreviado), dispone que "Si la demanda fuese admitida, el juez señalará, en el mismo auto de admisión, el día y hora que habrá de tener la audiencia (...)".

Sin embargo, esta Sala, en la sentencia que antecede, se ha apartado de dichas reglas y ha prescindido de la celebración de la correspondiente audiencia. No obstante, disiento de tal decisión, porque del análisis de las disposiciones que regulan el proceso abreviado en el CPCM, se advierte claramente la intención del legislador de que se desarrolle la audiencia única.

Incluso, dicha audiencia debe celebrarse aun y cuando el demandado no haya comparecido en el proceso (artículo 425 inciso 2 CPCM). Así, el legislador ha regulado de manera clara y expresa que, en caso de que el demandado no hubiere presentado alegaciones de defensa en el plazo correspondiente, se continuará el proceso con el trámite el proceso abreviado; debiendo procederse a la celebración de la audiencia única. Esto demuestra el carácter imperativo de dicha actuación procesal, lo cual también resulta aplicable al trámite del proceso de revisión, por disponerlo así el artículo 458 CPCM.

Incluso, el rigor imperativo de la celebración de la audiencia es de tal grado que, cuando se cita al demandado para que comparezca a ese acto procesal, la audiencia no se suspenderá por su incomparecencia (artículo 423 inciso 3 CPCM). El artículo 425 inciso 2 CPCM dispone la misma consecuencia: "La no comparecencia injustificada del demandado no impedirá la celebración de la audiencia, que continuará sin necesidad de declarar su rebeldía".

Si la voluntad del legislador hubiera sido cambiar el trámite del proceso abreviado ante la incomparecencia del demandado, suspendiendo el desarrollo de la audiencia ante la misma, lo habría dispuesto así.

Por tanto, queda claro que el proceso de revisión de sentencia firme ha sido concebido por el legislador con una fase de carácter oral, la cual se manifiesta a través de la audiencia única. En tal sentido, de conformidad con el principio de legalidad, proclamado en el artículo 86 inciso final de la Constitución de la República y desarrollado en su dimensión procesal en el artículo 3 CPCM, no es posible prescindir de la audiencia en el proceso de revisión, por cuanto los jueces no están habilitados para alterar las reglas y etapas procesales previstas en el CPCM, en virtud de que las formalidades previstas por dicha normativa son imperativas.

Así, el inciso 3° del artículo 86 Cn determina que "Los funcionarios del Gobierno son delegados del pueblo y no tienen más facultades que las que expresamente les da la ley". Y, en aplicación de este principio, el artículo 3 CPCM establece, entre otros aspectos, que todo proceso debe tramitarse conforme a las disposiciones del mismo Código, que las mismas no pueden ser alteradas por ningún sujeto procesal; y que las formalidades previstas por el Código mencionado, son de carácter imperativo.

Finalmente, el artículo 14 CPCM también establece que el juez dirigirá el proceso de acuerdo a lo establecido ese mismo Código, de modo que no puede alterar ni apartarse de las regulaciones concebidas por el legislador; al disponer que "La dirección del proceso está confiada al juez, quien la ejercerá de acuerdo a lo establecido en este código. En consecuencia, deberá conducir los procesos por la vía procesal ordenada por la ley, no obstante que la parte incurra en error".

A mi juicio, desde una perspectiva constitucional y legal, transcurrido el plazo correspondiente para la comparecencia del demandado (luego de emplazado), era obligatorio proceder a fijar fecha y hora para la celebración de la correspondiente audiencia oral; a pesar de que el demandado no haya contestado la demanda de revisión o no haya comparecido a la misma.

La audiencia en el proceso de revisión no es una simple forma de los actos procesales

De la lectura de los artículos 425, 428, 429 y 430 CPCM, se advierte que la audiencia única en el proceso abreviado, cumple con una serie de funciones de suma trascendencia para la adecuada configuración del proceso. Por ejemplo, la audiencia única sirve para que el demandante reafirme su interés en el juicio, al evitar, con su comparecencia, que se le tenga por desistido de su demanda; admitir y practicar los medios de prueba propuestos por las partes; desarrollar los alegatos finales; efectuar la valoración judicial de la prueba; dictar y motivar in voce el fallo; y fijar el plazo máximo para que se dicte la correspondiente sentencia. Estas funciones, desde luego, también las cumpliría la audiencia única dentro del trámite de revisión de sentencias firmes.

No es cierto que la audiencia única en este caso cobraría sentido si fuera necesario producir prueba diferente a la prueba documental; en vista de que, según se ha apuntado, las funciones de dicha etapa procesal trascienden de la producción de la prueba. Y aun si fuera así (criterio que no comparto), no es cierto que la prueba documental no requiera producirse en audiencia. Soy de la opinión de que, según la lógica de los procesos orales modernos, toda la prueba se produce y valora en audiencia, aun y cuando la formación del documento preceda a la misma. En tal sentido, aclaro que oportunamente adopté mi postura, relativa a que no comparto el criterio jurisprudencial establecido en el incidente de apelación clasificado con la referencia 7-APA-2021, respecto a la omisión de la audiencia, según lo hice ver a través del voto disidiste que emití en ese incidente.

Al interpretar en conjunto los artículos que regulan la figura de la revisión y las que rigen la audiencia única del proceso abreviado, se advierte que el legislador ha previsto la convocatoria y realización de la referida audiencia con el fin, entre otros, de que las partes fijen los términos de la controversia y generen las condiciones de un debate libre y transparente, bajo la inmediación del juez. Así, pues, podría afirmarse que dicha audiencia sirve como el escenario procesal previsto por el legislador para que se materialicen los derechos de audiencia y defensa de las partes (al punto que se le impone la carga al demandado de acudir a la cita, pues aun y cuando no lo haga tal audiencia no se suspenderá. Incluso, en este caso la cita a la referida audiencia promueve la garantía de dichos

derechos, considerando que, pese a la complejidad del caso, el demandado no ha comparecido al proceso). Sin omitir mencionar que el deshago y valoración de prueba es otra de sus funciones.

Además, el artículo 430 CPCM inciso 1° dispone que, terminada la audiencia, y a continuación de los alegatos finales, el juez o tribunal deberá dictar in vote el fallo de la sentencia y una suscitan motivación de la misma, bajo pena de nulidad. Esta forma de los actos procesales es característica de los juicios orales, es decir, los procesos por audiencia. Esta característica (la oralidad) la debe respetar el trámite del proceso de revisión de sentencias firmes, sobre todo si se toma en cuenta que, al ser un proceso

En otras palabras, la convocatoria y celebración de la referida audiencia no es una simple forma de los actos procesales, más bien es un presupuesto en la configuración del proceso de revisión.

Su inobservancia apareja la vulneración de los principios y notas distintivas del proceso civil salvadoreño, tales como los principios de legalidad y oralidad extraordinario, es decir, un proceso extremo, procede cuando los tramites del respectivo juicio se han agotado, esto es, en contra de sentencias pasadas en autoridad de cosa juzgada.

Al respecto, es oportuno recordar que el legislador salvadoreño, al decretar el Código Procesal Civil y Mercantil, concibió un proceso oral (por audiencias), buscando corregir y superar las experiencias negativas que generó el proceso escrito.

En definitiva, en la normativa procesal civil salvadoreña, la celebración de la audiencia dentro del trámite de revisión de sentencias firmes, no cumple una mera función formal-procedimental, sino que posee una importancia medular asociada a cuestiones procesales-materiales, en el sentido expuesto en los párrafos precedentes. (con sus implicaciones sobre la inmediación, concentración, publicidad y celeridad procesal); lo cual está asociado a la garantía y ejercicio de derechos fundamentales, como el derecho a la protección jurisdiccional, en la dimensión del debido proceso.

Finalmente, advierto que, al no estar de acuerdo con la decisión a la que se refiere el presente voto (en lo relativo a la omisión de la audiencia), todas las subsecuentes actuaciones procesales del presente trámite estarían viciadas de ilegalidad, al no respetarse la configuración del trámite de revisión en los términos que la ley contempla. Por las razones expuestas, considero que el trámite que se le ha dado al proceso de mérito no ha sido el legalmente procedente, lo que incide directamente en la validez de las actuaciones procesales subsiguientes, incluida la sentencia que antecede.

En efecto, la omisión de la audiencia ha generado tres consecuencias. Primero, se ha inobservado lo establecido en los artículos 425 y siguientes del CPCM, lo cual impide la configuración legal del trámite de revisión, en los términos que ya lo he explicado. Segundo, vulnera los principios más elementales de los procesos orales (concentración, inmediación, celeridad y eliminación del rigor ritual); al grado de que la falta de audiencia se traduce en la imposibilidad

de anunciar el fallo in voce, lo cual genera un vicio de nulidad, según lo establecido en el artículo 430 CPCM. Tercero, podría resultar vulnerado el derecho de defensa de las partes, en vista de que enunciar in voce el fallo y motivar sucintamente su contenido, potencia el ejercicio del derecho de defensa de las partes, por cuanto les permite conocer, previo a la emisión de la sentencia, la decisión y las razones fundamentales sobre las que descansa. Incluso, conocer el fallo les permite a las partes identificar las líneas centrales de la decisión adoptada, de modo que al final pueden exigir que exista coherencia entre lo enunciado en el fallo y la posterior sentencia, garantizándose así un debate libre, igualitario y transparente.

Valoraciones que no corresponde efectuar a esta Sala

En la sentencia que antecede se han realizado valoraciones que, a mi juicio, no puede realizar esta Sala, por estar fuera del ámbito de su competencia material. Así, en la página 10, párrafo tres, se ha expresado lo siguiente: "En ese orden de ideas, advierte de la certificación de sentencia, que dentro del proceso penal, de fecha dos octubre de dos mil diecinueve, esta Sala **hubo basto material probatorio** (...)" -resaltado propio-.

En el presente caso, la causal del proceso de revisión de sentencia firme que se ha invocado, tiene a su base la comisión de un delito. Por tanto, a esta Sala corresponde realizar iniciar el análisis de la pretensión, a partir de la decisión adoptada por los tribunales competentes en materia penal, sin realizar valoraciones sobre asuntos propios de ese ámbito, por razones de competencia material. Por ello, considero que a este Tribunal no le corresponde calificar aspectos relacionados con el proceso penal, como es la suficiencia del material probatorio que desfiló y se produjo en el mismo.

En conclusión, estimo que lo legalmente procedente, era convocar a la correspondiente audiencia y, eventualmente, pronunciar la respectiva sentencia. En consecuencia, no acompaño la decisión adoptada, por los argumentos acá expuestos.

Así mi voto."

Sala de lo Civil, número de referencia: 7-REM-2021, fecha de la resolución: 21/02/2022

VOTO DISIDENTE DE LA MAGISTRADA DAFNE YANIRA SÁNCHEZ DE MUÑOZ

RECURSO DE CASACIÓN

NO PROCEDE RECHAZAR EL RECURSO DE CASACIÓN SOBRE LA BASE DE QUE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA SE HA DICTADO EN UNA FASE DE EJECUCIÓN

"Dafne Yanira Sánchez de Muñoz, magistrada de la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia, en el incidente de casación 28-CAM-2022, emito voto disidente con base en el artículo 220 CPCM, por no estar de acuerdo con la decisión que antecede, no obstante haber firmado la respectiva resolución, tal

como lo dispone el referido artículo. Fundamento mi voto en los razonamientos que expongo a continuación.

En la resolución que antecede, se ha declarado improcedente el recurso de casación interpuesto contra la resolución que declaró improcedente el recurso de apelación. Y entre los fundamentos que sustentan dicha decisión, se sostiene lo siguiente: "(...), entre las resoluciones recurribles en casación de acuerdo a lo regulado en el artículo 519 ordinal 1° CPCM, no se contempla las que se emiten durante la fase de ejecución, puesto que el objeto procesal se encuentra ejecutoriado; y por ende, en el caso analizado el recurso de mérito es legalmente improcedente, lo que así debe declararse. Asimismo, es menester precisar que las razones de la improcedencia en el caso en análisis, se refieren a las resoluciones dictadas en fase de la ejecución forzosa, en cuyo fundamento se basa esta providencia (...)".

Sin embargo, no comparto la idea de que el recurso de casación interpuesto es improcedente, puesto que, al examinar el recurso de casación se advierte que, el argumento central del recurrente es que, dentro de la ejecución del laudo arbitral se ha promovido una pretensión que requiere de un proceso y una resolución de carácter cognitivo (referida a la fijación de daños y perjuicios), de modo que la decisión pronunciada en primera instancia y en segunda instancia, se ha emitido en "un procedimiento de carácter cognitivo y no meramente ejecutivo". En ese sentido, plantea que esto tiene lugar en un procedimiento de conocimiento que termina con una sentencia definitiva, es decir, el procedimiento abreviado. Aunado a ello, sostiene que la resolución que ha sido denegado en su apelación tiene el carácter de una sentencia, pues el juez de la causa resolvió sobre la base del artículo 430 CPCM, "fijando situaciones que no están previamente contenidas en el Laudo Arbitral".

En consecuencia, se advierten dos cosas. Primero, que la naturaleza del trámite en el que se ha suscitado el incidente de casación es un punto controvertido por el recurrente, puesto que él sostiene que se trata de un procedimiento de carácter cognitivo y no meramente ejecutivo. Y, segundo, que esta Sala, como fundamento de la decisión que antecede, sostiene que las resoluciones pronunciadas en fase de ejecución no admiten casación. En ese sentido, considero que esta Sala ha realizado una calificación incorrecta del recurso interpuesto, en cuanto a la procedencia del mismo en atención a la resolución impugnada. Ciertamente, si se está discutiendo que este trámite judicial no corresponde a un trámite ejecutivo (de ejecución forzosa), esta Sala no debería partir de ese argumento para rechazar ese recurso, sino que debería entrarse a conocer del mismo para tomar una postura al respecto, siempre y cuando el recurso cumpliera con lo demás requisitos de admisibilidad.

En otras palabras, no puede rechazarse el recurso de casación sobre la base de que la resolución impugnada se ha dictado en una fase de ejecución, cuando ese aspecto ha sido objeto de discusión en el recurso de casación. De no ser así, esta Sala, al calificar liminarmente la procedencia del referido recurso, estaría adoptando una postura de fondo sobre un tema que se pretende discutir en este grado de conocimiento.

Ahora bien, debo aclarar, sin tomar postura de la naturaleza de este trámite judicial, que el recurso de casación, en determinados casos, si procede contra resoluciones dictadas en la fase de ejecución forzosa. Por ejemplo, cuando el recurso de casación se fundamenta en el motivo de quebrantamiento de las formas esenciales del proceso y en el submotivo de haberse declarado indebidamente la improcedencia de una apelación (artículo 523 ordinal 13° CPCM), siempre y cuando la resolución pronunciada por la Ad quem (Cámara) declare inadmisible o improcedente el recurso de apelación, porque puede suceder, por ejemplo, que la Ad quien (Cámara) haya rechazado el recurso de apelación sobre la base de que la resolución recurrida no admite apelación; cuando en realidad si es una de las resoluciones que la ley, expresamente, reconoce que puede ser impugnadas a través de ese recurso, a pesar de que se hayan dictado en la fase de ejecución forzosa (dichas resoluciones son las previstas en los artículos 563 inciso 2, 575 inciso 1, 584 y 595 inciso 2 CPCM). En tal supuesto, el Tribunal de Casación se limitará a verificar si la alzada fue rechazada de forma indebida, sin realizar un pronunciamiento de fondo sobre las actuaciones ejecutivas discutidas.

Incluso, la doctrina nacional más autorizada al respecto, ha sostenido un planteamiento como este, al sostener que, el recurso de casación, por haberse declarado indebidamente la improcedencia de una apelación, “es procedente independientemente de que la sentencia que haya pronunciarse en segunda instancia sea casable o no, porque solo tiene por finalidad que el asunto sea visto por el tribunal de alzada” (vid. ROMERO CARRILLO, Roberto, La normativa de casación, Ministerio de Justicia, Ediciones Último Decenio, San Salvador, 1992, p. 126).

Por tanto, sostengo que el rechazo indebido de la apelación constituye un vicio de forma dentro de la teoría casacional, es decir, un vicio que gira en torno al quebrantamiento de las formas esenciales del proceso, según lo establecido en el artículo 523 ordinal 13° CPCM. En ese sentido, la configuración de este vicio, por su carácter formal o procesal, no debe supeditarse necesariamente al pronunciamiento de una sentencia, ni a la naturaleza del proceso o de las pretensiones ejercidas. Por tanto, si se niega el control casacional de una providencia judicial que ha rechazado de forma indebida una apelación, bajo el argumento de que la misma no constituye una sentencia, que las pretensiones ejercidas no sustentan una decisión que produzca efectos de cosa juzgada material o que se ha dictado en la fase de ejecución forzosa, estaríamos sustrayéndole eficacia normativa al ordinal 13° del artículo 523 CPCM.

No debe perderse de vista que el sistema de recursos es un mecanismo de control intraorgánico, que permite controlar y balancear el ejercicio del poder público dentro de un auténtico Estado de Derecho. Tal mecanismo de control presenta una falla interna cuando se afirma que el auto que inadmite la apelación no es recurrible en casación, por el hecho de que tal pronunciamiento se ha dado en la fase de ejecución forzosa. Tal falla se traduce en que el poder público que ejercen los tribunales de alzada (en materia de familia) instituye una zona exenta de control casacional (de forma injustificada), cuando del presunto rechazo in-

debido de una apelación se trata. Esto, sin duda alguna, es inconcebible en un auténtico Estado de Derecho, pues todos los justiciables tienen derecho a que se examine si el tribunal de apelaciones ha denegado indebidamente el acceso a la segunda instancia a través de la alzada.

Sin embargo, en este caso, el recurso de casación, pese a que es procedente, resulta inadmisible, por cuanto si bien el recurrente invocó el motivo y submotivo pertinente (artículo 523 ordinal 13° CPCM) y citó la disposición infringida (artículo 508 CPCM), no desarrolló el concepto de la infracción con plena claridad, pues no explicó cómo se produjo la infracción de dicha disposición legal al momento de rechazarse su apelación. Incluso, hace referencia a la aplicación errónea del artículo 508 CPCM (como si estuviera invocando el motivo genérico de infracción de ley), sin definir cómo lo interpretó la Cámara y cuál era la forma correcta de interpretarlo, siempre en relación al caso que nos ocupa.

Así mi voto."

Sala de lo Civil, número de referencia: 28-CAM-2022, fecha de la resolución: 09/02/2022

VOTO DISIDENTE DE LA MAGISTRADA DAFNE YANIRA SÁNCHEZ DE MUÑOZ

NULIDAD PROCESAL INSUBSANABLE

ES IMPROCEDENTE DECLARAR DE OFICIO, EN EL MISMO AUTO DE ADMISIÓN DEL RECURSO, LA NULIDAD DE LAS ACTUACIONES PROCESALES EJECUTADAS EN SEGUNDA INSTANCIA, PUES CON ELLO SE VULNERA EL DERECHO DE DEFENSA Y EL DERECHO DE RECURRIR DE LA PARTE RECURRIDA

"Dafne Yanira Sánchez de Muñoz, magistrada de la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia, en el incidente de casación 86-CAC-2022, emito voto disidente con base en el artículo 220 CPCM, por no estar de acuerdo con una parte de la decisión que antecede, en cuanto a declarar de oficio, en el mismo auto de admisión del recurso, la nulidad de actuaciones procesales efectuadas en segunda instancia, según lo especificaré más adelante; no obstante haber firmado la respectiva resolución, tal como lo dispone el referido artículo. Fundamento mi voto en las razones que expongo a continuación.

En el auto que antecede, entre otras cosas, se ha admitido el recurso de casación interpuesto y se ha declarado de oficio la nulidad de lo actuado en segunda instancia (específicamente la sentencia y el anuncio verbal del fallo emitido en audiencia de apelación). Y entre las razones adoptadas por esta Sala, para sustentar esta forma de proceder, se destacan las siguientes:

"En ese sentido, debe tenerse en cuenta que al examinarse lo alegado en casación en esta fase inicial, y al ser admisible un motivo del mismo, ello habilita a esta Sala, a ejercer un control de oficio respecto de una nulidad procesal insubsanable, debido a que el control de legalidad de las actuaciones procesales por

parte de esta sede, abarca todo el escenario en el cual se ventilado la pretensión (...). Además, la admisión del recurso en los términos dichos, **no conllevaría al trámite normal para conocer de la infracción alegada en una sentencia, sino que al examinar inicialmente lo alegado, esta Sala puede disponer que se ha cumplido con los requisitos de ley, y como consecuencia de ello, advertir de manera oficiosa cualquier nulidad insubsanable**" -resaltado propio-.

Y luego de considerar que el recurso es admisible, esta Sala ha razonado en el siguiente sentido: "8. En ese orden de ideas, esta Sala advierte en el pronunciamiento realizado por el tribunal de apelación, una nulidad manifiesta y absoluta (...). Lo anterior, en virtud de que el tribunal de apelación lo que hizo fue declarar nula una parte del fallo de la sentencia, tal como si ésta no constituyera un solo cuerpo, cuando lo que procesalmente debía hacer, era darle cumplimiento a lo dispuesto en el precepto citado, es decir, al estimar el recurso, procedía anular la sentencia en su totalidad y resolver la cuestión objeto de debate (...)".

Ahora bien, soy del criterio de que no es procedente declarar de oficio, en el mismo auto de admisión del recurso, las actuaciones procesales ejecutadas en segunda instancia. Sustento mi criterio en que, con esta forma de actuar, se limita el derecho de defensa de la parte recurrida.

Limitación del derecho de defensa de la parte recurrida

La declaratoria de oficio de las nulidades insubsanables debe efectuarse con estricto apego a los derechos constitucionales de audiencia y defensa. En tal sentido, si bien el artículo 235 inciso 1° CPCM establece que se puede declarar de oficio la nulidad "en cualquier estado del proceso", también es cierto que tal declaración debe realizarse permitiendo el ejercicio oportuno de los derechos de las partes que puedan resultar afectadas con la declaratoria de la misma.

Ciertamente, cuando en el mismo auto de admisión del recurso de casación se declara nulo lo actuado en segunda instancia, se vulnera el derecho de defensa y el derecho a recurrir de la parte recurrida. En tal sentido, por ejemplo, el recurrido no tiene la oportunidad de interponer recurso alguno contra el auto de admisión del recurso de casación o, para ser más precisos, para denunciar la admisión indebida del mismo. Esto es trascendental, por cuanto esta Sala, en la resolución que antecede, ha planteado la idea de que está habilitada para ejercer un control de cualquier nulidad procesal insubsanable si el respectivo recurso es admisible.

Por tanto, para optimizar el ejercicio efectivo de los derechos fundamentales, esta Sala no podía declarar la nulidad de oficio *in limine,* frente a la posibilidad de que el recurso haya sido admitido indebidamente. Así las cosas, a mi parecer, esta Sala se ha extralimitado en el ejercicio de sus potestades, por cuanto ha dictado una resolución anulatoria en una etapa procesal inoportuna.

Por ello, mi opinión es que el artículo 235 inciso 1° CPCM permite declarar de oficio, en primer término, las nulidades insubsanables que la ley expresamente califica en tal sentido (*lo cual se definiría al resolver el fondo del incidente de casación*); y, segundo, siempre y cuando se haga dentro del marco de las formas y etapas procesales diseñadas para dictar una decisión de fondo.

Declarar la nulidad insubsanable de las actuaciones procesales en el mismo auto de admisión del recurso, sin dejar posibilidad de que la parte recurrida se pronuncie, por ejemplo, sobre la admisión del mismo (considerando la postura de esta Sala), o respecto de los vicios invocados por el recurrente; constituye un claro incumplimiento de las formalidades de transcendencia constitucional necesarias al interior del proceso.

En consecuencia, no acompaño la decisión adoptada (en los puntos ya especificados), por los argumentos expuestos en este voto. Lo procedente, a mi juicio, era admitir el recurso de casación y darle el trámite que ordinariamente le corresponde, para emitir la decisión respectiva en la etapa procesal oportuna.

Así mi voto."

Sala de lo Civil, número de referencia: 86-CAC-2022, fecha de la resolución: 11/05/2022

VOTO DISIDENTE DE LA MAGISTRADA DAFNE YANIRA SÁNCHEZ DE MUÑOZ

PROCESO DE EXPROPIACIÓN

LA LEGALIDAD DE LAS ACTUACIONES REALIZADAS POR LOS TRIBUNALES EN MATERIA EXPROPIATORIA DEBEN ESTAR SUJETAS AL CONTROL DE LA JURISDICCIÓN CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA

"Dafne Yanira Sánchez de Muñoz, magistrada de la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia, en el incidente de casación 124-CAC-2022, emito voto disidente con base en el artículo 220 CPCM, por no estar de acuerdo con la decisión que antecede; no obstante haber firmado la respectiva resolución, tal como lo dispone el referido artículo. Fundamento mi voto en las consideraciones que expongo a continuación.

En el auto que antecede, entre otras cosas, se ha resuelto: "Declárase improcedente el recurso de mérito y la denuncia de nulidad alegada (...)". Para sustentar dicha decisión, esta Sala hace las siguientes consideraciones: "(...) es inviable interponer el recurso de casación dentro del proceso especial de expropiación tramitado conforme a la Ley de Expropiación de Terrenos para las Obras de Electrificación Nacional, debido a que ni dicho cuerpo normativo, **ni el derecho adjetivo común, establecen la impugnación por la vía casacional en estos casos.** Por tanto, este tipo de procesos quedan excluido de los asuntos que pueden ser sometidos a conocimiento de esta Sala, debido a los efectos que produce y que deja a salvo el derecho de las partes para controvertir la pretensión por la vía del proceso declarativo común" -resaltado propio-.

A mi juicio, el examen de procedencia y admisibilidad del recurso interpuesto debió tomar en cuenta lo siguiente:

Ley de Expropiación de Terrenos para las Obras de Electrificación Nacional

La Ley de Expropiación de Terrenos para las Obras de Electrificación Nacional, regula el procedimiento a seguir para que la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL), pueda adquirir los terrenos que necesite para la consecución de los fines que le atribuye el mismo legislador.

Asimismo, es importante tener en cuenta que la CEL es una institución oficial autónoma, de conformidad con la Ley de la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa, que es, precisamente, la que la crea como tal. Por tanto, es uno de los órganos que integran la Administración pública salvadoreña, de conformidad con el artículo 2 de la Ley de Procedimientos Administrativos.

En cuanto al contenido de la Ley de Expropiación de Terrenos para las Obras de Electrificación Nacional, debe destacarse que el legislador regula dos etapas. La primera de estas fases corresponde llevarla a cabo a la CEL, y en la misma, la Administración pública procura un avenimiento con propietarios o poseedores del inmueble que se pretende expropiar; gestionando llegar a un acuerdo para el traspaso del bien a la CEL, por medio de una vía negociada (artículo 1 de la Ley).

Pero, en caso de que el particular no acepte esa vía negociada, el legislador confirió competencia a la CEL para promover "juicio" ante los tribunales con competencia en materia civil, con la finalidad de expropiar el inmueble de que se trate, para la consecución de sus fines (artículos 1 y 2 Ley de Expropiación de Terrenos para las Obras de Electrificación Nacional).

De la potestad expropiatoria

Para los casos en que la Administración no cuenta con bienes de dominio público que le permitan la satisfacción del interés de la colectividad, el ordenamiento jurídico le ha conferido, corno gestora del interés público, la potestad de expropiar bienes de los particulares, previa una justa indemnización.

Así, el artículo 106 de la Constitución de la República, dispone que "La expropiación procederá por causa de utilidad pública o de interés social, legalmente comprobados, y previa una justa indemnización (...)". Dicha potestad es regulada por algunas leyes administrativas especiales, tales como Ley de Expropiación y de Ocupación de Bienes por el Estado y la Ley de Expropiación de Terrenos para las Obras de Electrificación Nacional, entre otras.

Por tanto, la potestad expropiatoria se confiere a la Administración pública para la consecución del interés general, procurando una solución equilibrada entre el interés público y el de los particulares que tengan derechos respecto de los bienes que se pretenden llevar al dominio público. Por tanto, en este tipo de casos, es, precisamente, el derecho administrativo el que se encarga de regular las restricciones a la propiedad de los particulares para la consecución del interés público.

Sin embargo, en nuestro ordenamiento jurídico, tal corno se ha expresado en líneas anteriores, el legislador ha dispuesto que la CEL, después de agotada la vía de la negociación, debe acudir a los jueces con competencia en materia civil, para que decidan la expropiación de terrenos a su favor.

Administración pública y actos administrativos

Para concluir sobre la naturaleza de la potestad atribuida por el legislador a los tribunales mencionados, a través de la Ley de Expropiación de Terrenos para las obras de Electrificación Nacional, debe partirse en primer lugar de la concepción de Administración pública que el legislador ha desarrollado en nuestro sistema legal. A nivel de legislación secundaria, la disposición legal que sentó las bases relativas a los órganos que integran la Administración pública en nuestro ordenamiento jurídico, fue el artículo 2 de la derogada Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa (de 1978), el cual es del contenido siguiente: "Art. 2.- Corresponderá a la jurisdicción contencioso administrativa el conocimiento de las controversias que se susciten en relación con la legalidad de los actos de la Administración Pública. Para los efectos de esta ley se entiende por Administración Pública: a) el Poder Ejecutivo y sus dependencias, inclusive las instituciones autónomas, semiautónomas y demás entidades descentralizadas del Estado; b) los Poderes Legislativo y Judicial y los organismos independientes, en cuanto realizan excepcionalmente actos administrativos; y, c) el Gobierno Local".

También debe tenerse en cuenta que, en nuestro medio pueden distinguirse, por una parte, órganos que por esencia tienen encomendado el ejercicio de función administrativa, tal como sucede con el Órgano Ejecutivo, las instituciones oficiales autónomas y las municipalidades; y, por otra parte, que el citado artículo 2 LJCA, creó una categoría de órganos a los que llamó "organismos independientes", que son todos aquellos que no perteneciendo a ninguno de los órganos fundamentales del Gobierno, y no teniendo personalidad jurídica propia, ejercen función administrativa, algunos como función esencial y otros de manera excepcional. Entre estos se encuentran, por ejemplo, las comisiones de servicio civil, el Tribunal de Servicio Civil, las juntas de vigilancia de las distintas profesiones médicas, las juntas de la carrera docente, el Tribunal de la Carrera Docente y el Comité de Apelaciones del Sistema Financiero, entre otros. Además, el legislador, partiendo de la concepción mencionada, incluyó entre los órganos que ejercen función administrativa y que, por tanto, dictan actos administrativos -controlables en sede jurisdiccional contencioso administrativa-, a los Órganos Legislativo y Judicial en cuanto excepcionalmente emiten actos administrativos.

Esa misma concepción de Administración pública es la adoptada por el legislador en la Ley de Procedimientos Administrativos, en adelante LPA, aprobada mediante Decreto Legislativo número ochocientos cincuenta y seis, de fecha quince de diciembre de dos mil diecisiete, publicado en el Diario Oficial número treinta, tomo cuatrocientos dieciocho, del día trece de febrero de dos mil dieciocho. Esta ley define como ámbito de aplicación lo siguiente: "Art. 2. La presente ley se aplicará al Órgano Ejecutivo y sus dependencias, a las entidades autónomas y demás entidades públicas, aun cuando su ley de creación se califique de carácter especial; y a las municipalidades, en cuanto a los actos administrativos definitivos o de trámite que emitan y a los procedimientos que desarrollen. Asimismo, se aplicará a los Órganos Legislativo y Judicial, la Corle de Cuentas de la República, la Procuraduría General de la República, la Procuraduría para

la Defensa de los Derechos Humanos, la Fiscalía General de la República, el Consejo Superior de Salud Pública, el Tribunal Supremo Electoral y, en general, a cualquier institución de carácter público, cuando excepcionalmente ejerza potestades sujetas al derecho administrativo. Esta ley será aplicable a los concesionarios de la Administración Pública".

Por su parte, la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, que se encuentra vigente desde el treinta y uno de enero de dos mil dieciocho, parte de la misma concepción, cuando determina en su artículo 1 que, "La jurisdicción contencioso administrativa será competente para conocer de las pretensiones que se deriven de las actuaciones u omisiones de la Administración Pública sujetas al Derecho Administrativo. También tendrá competencia para conocer de las pretensiones derivadas de actuaciones u omisiones de los concesionarios de la Administración Pública". Por supuesto, al realizar el reparto de competencias entre los juzgados, Cámaras y Sala de lo Contencioso Administrativo, incluye, entre las materias de conocimiento de esta jurisdicción, lo relativo a las actuaciones del Órgano Judicial y del Órgano Legislativo, en cuanto estén sujetas al derecho administrativo, entre otros (artículos 12 al 14 de la LJCA vigente).

De la disposición citada se concluye que nuestro legislador, atendió a un criterio objetivo, tanto para la delimitación de los órganos que conforman la Administración pública, como para la definición del acto administrativo; ya que atiende a la naturaleza de la actividad que se despliega, independientemente del órgano que la realice; situación ya concebida así por el Constituyente, tal como se expondrá en párrafos posteriores.

Con el criterio adoptado en nuestro ordenamiento jurídico para definir a la Administración pública, con relación a la función administrativa atribuida a los órganos fundamentales del Estado, coincide el criterio del tratadista Miguel S. Marienhoff, quien la concibe en los términos siguientes: "Cada uno de los órganos esenciales -legislativo, ejecutivo y judicial-, aparte de sus propias funciones específicas, ejerce o realiza otras de la misma naturaleza que aquellos que caracterizan a los demás órganos. El Congreso legisla, juzga, ejecuta o administra. Igual cosa ocurre con el órgano judicial: juzga sin perjuicio de realizar actos de naturaleza legislativa, y otros donde actúa ejecutivamente o como administrador. De modo que la función administrativa no está circunscripta a uno solo de los expresados órganos: si por principio constituye la función específica del ejecutivo, es en cambio compartida por los órganos legislativo y judicial. Pero el carácter substancial y distintivo de estas actividades no se modifica, cualesquiera fuesen los organismos que la produzcan o el procedimiento que se utilice para su producción. Es por eso que en los estudios científicos del derecho administrativo predomina la concepción "objetiva" de Administración Pública, en cuyo mérito pertenece a la órbita del derecho administrativo la regulación de cualquier acto de función administrativa, aunque no sea cumplido por el llamado "Poder Ejecutivo". (Marienhoff, Miguel S., Tratado de Derecho Administrativo, tomo I, Teoría General, quinta Edición, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, Argentina, 2003, pág. 44).

Siempre con el objetivo de llegar a definir la función que ejercen los tribunales cuando conocen de procedimientos de expropiación, ha de tenerse en cuenta, en lo concerniente a las funciones atribuidas al Órgano Judicial, que la Constitución de la República (en adelante Cn), asigna al Órgano Judicial como función esencial, la potestad de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado (artículo 172 Cn), en los términos siguientes: "la Corte Suprema de Justicia, las Cámaras de Segunda Instancia y los demás tribunales que establezcan las leyes secundarias, integran el Órgano Judicial. Corresponde exclusivamente a este Órgano la potestad de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado en materias constitucional, civil, penal, mercantil, laboral, agraria y de lo contencioso- administrativo, así como en las otras que determine la ley". Es decir, que la función que el Constituyente atribuye como actividad esencial al Órgano Judicial, es la función jurisdiccional.

No obstante, el mismo Constituyente ha atribuido al Órgano Judicial, el ejercicio de la función administrativa. Por ejemplo, las potestades conferidas en el artículo 182 números 9, 10, 12 y 240 Cn. Entre estas potestades encontrarnos la relativa a la aplicación del régimen disciplinario a todo el personal de la Corte Suprema de Justicia, y a los miembros de la carrera judicial (artículo 182 n.° 9 Cn). Asimismo, la administración de la carrera judicial, función administrativa que comparte en algunos aspectos con el Consejo Nacional de la Judicatura.

Por otra parte, el legislador secundario, también ha concebido en leyes especiales, que los tribunales ejerzan función administrativa, tal como sucede con la Ley de Expropiación de Terrenos para las Obras de Electrificación Nacional y la Ley Reguladora de la Garantía de Audiencia de los Empleados Públicos no comprendidos en la Carrera Administrativa.

Actos emitidos en ejercicio de la potestad expropiatoria. Control jurisdiccional contencioso administrativo

Tal como se mencionó al inicio de este voto, la potestad expropiatoria es de carácter administrativo,. por tanto, los tribunales con competencia en materia civil, en este caso, están llamados por ley a constatar el cumplimiento de las condiciones previstas por el ordenamiento jurídico, para que proceda la expropiación forzosa; fase que, tal como se ha mencionado, constituye un eslabón en el procedimiento expropiatorio. En consecuencia, tales actuaciones constituyen actos administrativos, y no actos jurisdiccionales. Precisamente, porque el acto administrativo es toda declaración unilateral de voluntad, de juicio, de conocimiento o de deseo, productora de efectos jurídicos, dictada por la Administración pública en el ejercicio de una potestad administrativa distinta a la reglamentaria (artículo 21 LPA).

En consecuencia, las actuaciones realizadas por los tribunales en materia expropiatoria, deben estar sujetas al control de la jurisdicción contencioso administrativa, puesto que en un Estado de derecho no pueden existir ámbitos de actuación de la Administración pública exentos del control jurisdiccional.

En ese orden de ideas, las decisiones emitidas en los procedimientos expropiatorios, no pueden ser conocidas por esta Sala, a través del recurso casación, pues no se trata de actos judiciales, es decir, no han sido emitidas en ejercicio

de la función jurisdiccional, sino en el ejercicio de la función administrativa. Por tanto, en este tipo de casos, el artículo 519 CPCM, que determina las resoluciones judiciales que admiten casación, no resulta aplicable, por lo que no confiere cobertura legal al recurso interpuesto.

Y según la naturaleza de los actos que generan la controversia, el conocimiento sobre la legalidad de los mismos corresponde a la jurisdicción contencioso administrativa, que es la competente y especializada en lo concerniente a las materias relativas a la Administración pública.

Así mi voto."

Sala de lo Civil, número de referencia: 124-CAC-2022, fecha de la resolución: 04/05/2022

VOTO DISIDENTE DE LA MAGISTRADA DAFNE YANIRA SÁNCHEZ DE MUÑOZ

RECURSO DE CASACIÓN

POSIBILIDAD DE CONOCER SOBRE EL MOTIVO QUE DECLARÓ IMPROCEDENTE EL RECURSO DE APELACIÓN, NO OBSTANTE QUE EL PROCESO EJECUTIVO ESTÉ FUNDADO EN UN CONTRATO DE MUTUO Y NO EN UN TÍTULO VALOR

Dafne Yanira Sánchez de Muñoz, magistrada de la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia, en el incidente de casación 240-CAM-2021, emito voto disidente con base en el artículo 220 CPCM, por no estar de acuerdo con la decisión que antecede, no obstante haber firmado la respectiva resolución, tal como lo dispone el referido artículo. Fundamento mi voto así:

En la providencia judicial que antecede, se ha declarado improcedente el recurso de casación interpuesto contra la resolución que *declaró inadmisible el recurso de apelación*. Y entre los fundamentos que sustentan dicha decisión, se sostiene lo siguiente: "(...) de acuerdo al código. Procesal Civil y Mercantil, corresponde a esta Sala conocer del recurso de casación en materia civil y mercantil, art. 519 de dicho cuerpo legal, el cual concede el recurso de casación a las sentencias y autos pronunciados en apelación, en los procesos comunes y en ejecutivos mercantiles, cuyo documento base de la pretensión sea un título valor. En el caso que nos ocupa, es preciso destacar que el documento que sirvió de base al proceso es un *testimonio de escritura pública de mutuo hipotecario*, por lo que no siendo un título valor el que ha dado origen al juicio ejecutivo mercantil, la resolución de que se ha recurrido no es objetable mediante el recurso extraordinario mencionado" (sic).

Sobre, el particular, considero necesario advertir, en primer lugar, que el rechazo de la apelación, bajo la figura de la inadmisibilidad, la improcedencia u otra semejante, es controlable a través del recurso de casación. Por tanto, para el análisis de la procedencia del recurso de casación, en casos como el presente, no debe partirse de la premisa relativa a si la resolución impugnada se

pronunció en un proceso ejecutivo cuyo documento base de la pretensión no es un título valor, aquel deviene en improcedente. Por las razones que expongo a continuación.

Estimo que, con el fin de tutelar el derecho a recurrir, como manifestación del derecho a un proceso constitucionalmente configurado y este, a su vez, como manifestación del derecho fundamental a la protección jurisdiccional (artículo 2 Cn), el recurso de casación también procede contra el rechazo indebido de una apelación, interpuesta en un proceso ejecutivo, al margen de la naturaleza del documento base de la pretensión. Esto es así porque, en este tipo de casos, *si se plantea en debida forma el recurso de casación*, esta Sala se limitaría a analizar si la apelación fue rechaza de forma indebida o no, sin estar realizando valoraciones sobre el fondo del asunto discutido. Si en segunda instancia se hubiera entrado a conocer del recurso de apelación, sí sería pertinente calificar la naturaleza del documento base de la pretensión ejecutiva para calificar la procedencia del recurso de casación; sin embargo, esto no ha ocurrido en el presente caso.

El rechazo indebido de la apelación, dentro de la teoría casacional, constituye un vicio de forma, es decir, un vicio que gira en torno al quebrantamiento de las formas esenciales del proceso, según lo establecido en el artículo 523 ordinal 13° CPCM. Por tanto, a pesar de que el peticionario no ha fundamentado su recurso en esta disposición, su contenido me permite exponer mi postura. Ciertamente, la configuración de este vicio, por su carácter formal o procesal, no debe desestimarse por la naturaleza del documento base de la pretensión ejecutiva. Si se niega el control casacional de una providencia judicial que ha rechazado de forma indebida una apelación, bajo el argumento de que la naturaleza del documento base de la pretensión no lo habilita, estaríamos sustrayéndole eficacia normativa al ordinal 13° del artículo 523.

Los derechos fundamentales ant es mencionados, aun y cuando los recursos sean de configuración legal, exigen que los poderes públicos reconozcan el derecho de los justiciables a acceder a la segunda instancia, para que esta revise lo realizado por la primera. En tal sentido, estimo que negar el recurso de casación contra el presunto rechazo indebido de la apelación, bajo el argumento de que el documento base de la pretensión no es un título valor, permite sustraer del control legal la denegatoria de acceso a la segunda instancia, en contravención al derecho a la protección jurisdiccional.

Por otra parte, no debe perderse de vista que el sistema de recursos es un mecanismo de control intraorgánico, que permite fiscalizar y balancear el ejercicio del poder público dentro de un auténtico Estado de Derecho. Tal mecanismo de control presenta una falla interna cuando se afirma que el auto que inadmite la apelación no es recurrible en casación, por el hecho de que se ha dictado en un proceso ejecutivo cuyo documento base de la pretensión no es un título valor. Tal falla se traduce en que el poder público que ejercen los tribunales de alzada (en materia de juicios ejecutivos) instituye una zona exenta de control casacional (de forma injustificada), cuando del presunto rechazo indebido de una apelación se trata. Esto, sin duda alguna, es inconcebible en un auténtico Estado de De-

recho, pues todos los justiciables tienen derecho a que se examine si el tribunal de apelaciones ha denegado indebidamente el acceso a la segunda instancia a través de la alzada.

Sin embargo, en este caso, el recurso de casación, pese a que es procedente, resulta inadmisible, por cuanto el motivo específico que debe invocarse en este tipo de casos, es el previsto en el artículo 523 ordinal 13° CPCM, que se refiere al submotivo de "haberse declarado indebidamente la improcedencia de una apelación". No obstante, el recurrente ha alegado, genéricamente, infracción en la aplicación de la norma, por haber dejado de aplicar el artículo 9 del Decreto Legislativo 593, de fecha catorce de marzo de dos mil veinte, publicado en el Diario Oficial número cincuenta y dos, Tomo cuatrocientos veintiséis, de fecha veinte de marzo de dos mil veinte. Por tanto, dicha alegación no guarda relación con el rechazo indebido de la apelación, como podría haber sucedido en el presente caso, motivo por el cual el recurso carece de la fundamentación adecuada.

En consecuencia, no acompaño la decisión adoptada, por las razones expuestas. A mi parecer, el recurso no debía rechazarse por improcedente, sino por inadmisible (por carecer de la fundamentación adecuada).

Así mi voto."

Sala de lo Civil, número de referencia: 240-CAM-2021, fecha de la resolución: 12/01/2022

VOTO DISIDENTE DE LA MAGISTRADA DAFNE YANIRA SÁNCHEZ DE MUÑOZ

SUSPENSIÓN DE PLAZOS

PROCEDE CONVOCAR Y CELEBRAR LA AUDIENCIA ÚNICA, SIGUIENDO LAS REGLAS DEL PROCESO ABREVIADO, PARA QUE LAS PARTES EXPRESEN SUS PLANTEAMIENTOS, A FIN DE GARANTIZAR SUS DERECHOS DE AUDIENCIA Y DEFENSA

"Dafne Yanira Sánchez de Muñoz, magistrada de la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia, en el proceso de revisión 7-REM-2021, emito voto disidente con base en el artículo 220 CPCM, por no estar de acuerdo con la decisión que antecede, según lo especificaré más adelante; no obstante haber firmado la respectiva resolución, tal como lo dispone el referido artículo.

Fundamento mi voto en las siguientes consideraciones:

En el auto que antecede se ha resuelto el escrito presentado por el licenciado [...], en su calidad de apoderado general judicial con cláusula especial de [...], Sociedad Anónima de Capital Variables, en el sentido de declarar "improponible el incidente de suspensión de plazo para contestar la demanda", por las razones en ella expuestas.

Sin embargo, no comparto dicha decisión, en vista de que, como lo expresé en el voto disidente que emití respecto de la sentencia del presente proceso, lo procedente en este caso, era convocar y celebrar la respectiva audiencia única

(siguiendo las reglas del proceso abreviado, según lo establece el artículo 548 inciso 1° CPCM), para que las partes pudieran expresar sus planteamientos, bajo un escenario procesal que garantizara sus derechos de audiencia y defensa.

De haberse dado cumplimiento al aspecto procesal antes mencionado, la petición resuelta en el auto que antecede, se podría haber sustanciado en un escenario procesal acorde a la normativa aplicable.

En consecuencia, no acompaño la decisión adoptada, por los argumentos acá expuestos.

Así mi voto."

Sala de lo Civil, número de referencia: 7-REM-2021, fecha de la resolución: 23/02/2022

VOTO DISIDENTE DE LA MAGISTRADA DAFNE YANIRA SÁNCHEZ DE MUÑOZ

RESOLUCIONES DE SEGUNDA INSTANCIA

LA PROVIDENCIA JUDICIAL DICTADA EN SEGUNDA INSTANCIA MEDIANTE LA CUAL SE CONFIRMA, REVOCA, ANULA O REFORMA UNA DECISIÓN PRONUNCIADA EN PRIMERA INSTANCIA, CONSTITUYE UNA SENTENCIA DEFINITIVA DENTRO DEL INCIDENTE DE APELACIÓN

"Dafne Yanira Sánchez de Muñoz, magistrada de la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia, en el incidente de casación 264-CAC-2021, emito voto disidente con base en el artículo 220 CPCM, por no estar de acuerdo con la decisión que antecede, según lo especificaré más adelante; no obstante haber firmado la respectiva resolución, tal como lo dispone el referido artículo.

En el auto que antecede, se ha revocado el auto de admisión del recurso de casación y se ha declarado improcedente el mismo. Y entre los fundamentos que sustentan dicha decisión, se plantea lo siguiente: "Al estudiar la resolución proveída por la Cámara seccional, la cual ha sido impugnada a través del presente recurso de casación, este tribunal advierte que (...), la Cámara concluyó que no hubo vulneración del principio de inmediación, y por ende, declaró no ha lugar a la nulidad alegada, y confirmó la sentencia apelada. De esa resolución que resolvió la nulidad alegada, se ha recurrido en casación (...)".

Posteriormente, esta Sala sostiene que la providencia impugnada constituye un auto simple, de acuerdo al artículo 212 inciso 2° CPCM. En ese sentido, "al tratarse de un auto simple que declaró no ha lugar la nulidad alegada, y consecuentemente, se confirmó la sentencia de primera instancia, de conformidad con las disposiciones antes citadas, el recurso de mérito resulta improcedente por falta de impugnabilidad objetiva". Finalmente, esta Sala consideró oportuno revocar el auto mediante el cual se admitió el recurso de mérito.

Al respecto, no comparto que la decisión impugnada en este grado de conocimiento constituya un auto simple. Más bien, soy categórica al afirma que la providencia judicial dictada en segunda instancia, mediante la cual se con-

firma, revoca, anula o reforma una decisión pronunciada en primera instancia, constituye una sentencia. Esto es así por cuanto el carácter de dicho proveído no viene determinado por su capacidad de resolver la pretensión incoada en la demanda, sino porque resuelve la pretensión ejercida en el respectivo recurso de apelación.

La resolución dictada por un tribunal de segunda instancia, con el cual se resuelve el recurso de apelación debidamente admitido, ya sea confirmando, revocando, anulando o reformando la resolución dictada en primera instancia, constituye, sin duda alguna, una sentencia definitiva dentro del incidente apelación; precisamente porque resuelve la petición planteada en segunda instancia, la cual, necesariamente constituye la pretensión de la apelación. No es un requisito indispensable que la resolución del tribunal de alzada responda a la pretensión ejercida en la demanda, para que goce del estatuto de la sentencia. Lo que interesa es que responda (o resuelva) al recurso de apelación debidamente admitido. Por tanto, no comparto la decisión adoptada por esta Sala, en cuanto a revocar el auto de admisión del recurso y, seguidamente, rechazarlo por improcedente. A mi juicio, lo procedente era entrar a conocer el fondo del recurso y dictar la respectiva sentencia.

En consecuencia, no acompaño la decisión adoptada, pero las razones expuestas.

Así mi voto."

Sala de lo Civil, número de referencia: 264-CAC-2021, fecha de la resolución: 09/03/2022

VOTO DISIDENTE DE LA MAGISTRADA DAFNE YANIRA SÁNCHEZ DE MUÑOZ

NULIDADES ALEGADAS EN EL RECURSO DE CASACIÓN

LA SALA DE LO CIVIL NO ESTÁ FACULTADA LEGALMENTE PARA CALIFICAR Y RESOLVER EL VICIO DE NULIDAD ALEGADO, ANTES QUE EL RECURSO DE CASACIÓN HAYA SIDO ADMITIDO; TAMPOCO PUEDE RESOLVERSE LA DENUNCIA DE NULIDAD EN EL MISMO AUTO DE ADMISIÓN

"Dafne Yanira Sánchez de Muñoz, magistrada de la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia, en el incidente de casación 13-CAC-2022, emito voto disidente con base en los artículos 20 y 220 CPCM, por no estar de acuerdo con una parte de la resolución que antecede, en cuanto al pronunciamiento sobre la denuncia de nulidad procesal en esta etapa del incidente, y a declarar de oficio la nulidad del contrato base de la pretensión, según lo especificaré más adelante; no obstante haber firmado la respectiva resolución, tal como lo dispone el último de los referidos artículos.

En la resolución que antecede, entre otras cosas, se ha inadmitido la denuncia de nulidad alegada en el recurso de casación y se ha declarado de oficio la nulidad del contrato base de la pretensión. Procedo a exponer mis consideraciones sobre estos aspectos, en el mismo orden que los he mencionado.

1. Sobre la inadmisión de la denuncia de nulidad

Antes de pronunciarse sobre la admisibilidad del recurso de casación, esta Sala observó que, en el escrito de casación, el recurrente alegó un vicio de nulidad con base en el artículo 238 CPCM. En ese sentido, procedió a analizar, de forma separada al motivo de casación invocado. Como consecuencia, concluyó que "no se ha identificado ningún acto procesal específico sobre el cual tenga que analizarse su nulidad, tampoco hay argumentos tendentes a demostrar la configuración del supuesto de nulidad y la indefensión sufrida por actos procesales ejecutados con inobservancia de la normativa procesal" (párrafo final de la página 3 de la resolución). Por tanto, esta Sala no admitió la denuncia de nulidad fundamentada en la referida disposición legal.

En otras palabras, esta Sala calificó y rechazó la admisibilidad de la petición de nulidad, antes de calificar y admitir el recurso de casación interpuesto. En ese sentido, en la parte dispositiva de la resolución, específicamente en los literales a) y b), se inadmite la denuncia de nulidad y, luego, se admite el recurso por el motivo de forma concerniente a la improcedencia indebida de una apelación.

Al respecto, considero que este Tribunal no está facultado legalmente para calificar y resolver el vicio de nulidad alegado, antes de que el recurso de casación haya sido admitido. Incluso, considero que, la denuncia de nulidad no podía ser resuelta en el mismo auto de admisión, como ya lo he señalado en otras ocasiones (por ejemplo, en los casos 227-CAC-2021 y 34-CAL-2022). Más bien, dada la estructura del trámite del incidente de casación, las nulidades planteadas en este tipo de recursos (en caso de ser admisible el recurso), deben resolverse al dictar la providencia que resuelva el fondo de la impugnación. Esa misma lógica aplica para el caso de las nulidades sustantivas, siempre y cuando se hayan interpuesto en debida forma y se haya garantizado el debido proceso."

INEXISTENCIA DE PRECEPTO LEGAL QUE HABILITE A LA SALA DE LO CIVIL A CALIFICAR O RESOLVER LAS PETICIONES DE NULIDAD PROCESAL ANTES DE PRONUNCIARSE SOBRE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO DE CASACIÓN

"Además, considero que no existe precepto legal alguno que habilite a esta Sala a calificar o resolver las peticiones de nulidad procesal antes de pronunciarse sobre la admisibilidad del recurso de casación (así lo sostuve en el voto relativo al incidente 34-CAL-2022). Y aun haciendo énfasis en el hecho de que el artículo 235 inciso 1 CPCM, prevé que la declaratoria de nulidad (insubsanable) puede realizarse *en cualquier estado del proceso*, debería tomarse en cuenta que, la interpretación de dicha disposición legal no debe realizarse de forma literal ni aislada, sino que debe someterse a un análisis sistemático y concordante con el resto de reglas, principios y valores que rigen la actividad procesal. Aceptar que el artículo 235 inciso 1 CPCM permite que las nulidades procesales sean resueltas antes de que el recurso sea admitido o, en el peor de los casos, pese a que el recurso resulta inadmisible, implicaría desconocer la lógica que envuelve el acto de calificar la admisibilidad de los recursos.

Este Tribunal califica la admisibilidad y procedencia de los recursos de casación para definir si puede entrar a conocer del fondo de lo planteado o, si, por lo contrario, dicho conocimiento es inviable. No puede entrar a conocer del recurso, por ejemplo, cuando la resolución es inimpugnable o el conocimiento del recurso interpuesto no es de su competencia. Así las cosas, carecería de cobertura legal el resolver la petición de nulidad planteada en el recurso de casación, cuando dicho recurso se ha interpuesto fuera del plazo legal, aunque el artículo 235 CPCM señale que la declaratoria de nulidad puede hacerse en cualquier estado del proceso. Así las cosas, la aplicación de dicha disposición legal estaría condicionada, por lo menos, a que el vicio de nulidad sea de naturaleza insubsanable y, segundo, que el tribunal esté habilitado para revisar el fondo del proceso, lo cual es posible solo si el recurso se admite (de lo contrario no tendría sentido enjuiciar la admisibilidad de los escritos de los intervinientes). La primera de las condiciones no se cumple. Ahora bien, la segunda condición, al momento de examinar la nulidad procesal, tampoco se ha cumplido."

IMPOSIBILIDAD QUE LA SALA DE LO CIVIL EN EL AUTO DE ADMISIÓN DEL RECURSO DE CASACIÓN EFECTÚE VALORACIONES RELACIONADAS CON EL FONDO DEL MISMO

"2 Sobre la declaratoria de oficio de la nulidad del contrato base de la pretensión.

Luego de calificarse la petición de nulidad y estimarse que la misma resulta inadmisible, en la resolución que antecede se expresó que, "esta Sala considera que no queda excluido el control de oficio de nulidades procesales sobre actuaciones en la segunda instancia, incluso, *a partir de las alegaciones vertidas en dicha instancia, tiene las potestades para revisar aquellas de contenido sustantivo que se han sostenido en el proceso, respecto del documento base en el que se fundamenta la pretensión (...)"* (resaltado propio) (segundo parrado de la página 4 de la resolución). Y agregó, que la única limitante para examinar las actuaciones bajo la modalidad en comento, es que el recurso sea admisible.

Así las cosas, esta Sala estimó que "el recurso cumple con los requisitos del art. 528 CPCM (...), siendo viable su estudio en casación, en la forma y contenido propuesto por los litigantes" (página 5 de la resolución). En otras palabras, esta Sala consideró que el recurso es admisible, lo cual así declaró en el literal b) de la parte dispositiva de su resolución.

Sin embargo, esta Sala no se limitó a admitir el referido recurso, sino que, a mi juicio, se pronunció sobre aspectos relacionados con el fondo del mismo (página 6 de la resolución); llegando al punto de revisar el contenido del recurso de apelación (lo cual debe hacerse en sentencia, considerando el motivo de casación invocado). Incluso, en el mismo auto donde califica la admisibilidad del recurso de casación, decide pronunciarse de oficio sobre la nulidad del contrato base de la pretensión, con fundamento en el artículo 1553 CC.

Al respecto, disiento con tres aspectos. Primero, con efectuar valoraciones relacionadas con el fondo del recurso de casación; segundo, con resolver en el mismo auto de admisión del recurso lo concerniente a vicios de nulidad; y, tercero, con resolver de oficio los aspectos asociados a vicios de nulidad sustantiva. Explico brevemente cada uno de estos aspectos.

2.1. Consideraciones de fondo sobre el recurso de casación

En la página 6 de la resolución que precede, se observa que esta Sala, luego de estimar admisible el recurso de casación, procede a estudiar el rechazo debido o indebido del recurso de apelación (tomando en cuenta que ese fue el motivo de casación invocado), lo cual resulta legalmente incorrecto, pues dicha actividad debía realizarla al momento de pronunciar la respectiva sentencia, pero no en el auto que antecede.

Advierto que, cuando en el mismo auto de admisión del recurso de casación se efectúan valoraciones sobre el fondo del mismo, se vulnera el derecho de defensa y el derecho a recurrir de la parte recurrida. En tal sentido, por ejemplo, el recurrido no tiene la oportunidad de interponer recurso alguno contra el auto de admisión del recurso de casación o, para ser más precisos, para denunciar la admisión indebida del mismo; o para formular sus alegatos en defensa de sus intereses jurídicamente relevantes."

LOS VICIOS DE NULIDAD SUSTANTIVA DEBEN RESOLVERSE AL MOMENTO DE DICTAR UNA RESOLUCIÓN SOBRE EL FONDO DEL RECURSO, LUEGO DE QUE SE HAYA AGOTADO EL TRÁMITE DEL INCIDENTE DE CASACIÓN

"2.2. Resolución del vicio de nulidad sustantiva en el mismo auto de admisión

Sobre este aspecto no profundizaré más, por haber establecido mi postura al señalar cuál es, a mi juicio, la etapa procesal oportuna para resolver los vicios de nulidad procesal. Sin embargo, enfatizo que no comparto el criterio relativo a que se puedan resolver los vicios de nulidad sustantiva, en el mismo auto de admisión del recurso de casación. Soy categórica al sostener que, la etapa procesal oportuna para resolver ese tipo de aspectos, es al momento de dictar una resolución sobre el fondo del recurso, luego de que se haya agotado el trámite del incidente de casación (como la audiencia previa a la parte recurrida)."

LA POTESTAD DE CONTROL DE OFICIO DE LAS NULIDADES SUSTANTIVAS ESTÁ SUJETA A LÍMITES

"2.3 Resolución de oficio del vicio de nulidad sustantiva

En la resolución que antecede, esta Sala ha examinado y resuelto de oficio lo concerniente a la nulidad del contrato de arrendamiento suscrito entre las partes litigantes, el cual sirve de base al presente proceso declarativo común de terminación de contrato de arrendamiento, reclamo de cánones y desocupación de inmueble. Para proceder de esa manera, esta Sala ha tomado como referencia el contenido del artículo 1553 CC.

Al respecto, considero que, aun y cuando el artículo 1553 CC dispone que, *"La nulidad absoluta puede y debe ser declarada por el Juez, aun sin petición de parte, cuando aparece de manifiesto en el acto o contrato (...)",* su interpretación no debe realizarse de manera literal y aislada, sino que debe hacerse en armonía con el resto de normas jurídicas, y bajo un enfoque de protección

de derechos fundamentales. Ciertamente, la interpretación del artículo 1553 CC debe ser conforme al contenido de la norma constitucional, buscando optimizar, por ejemplo, el derecho a la protección jurisdiccional y el debido proceso.

Bajo tal interpretación, considero que la potestad de control de oficio de las nulidades sustantivas está sujeta a límites. Así, por ejemplo, dicha potestad se limita solo a las nulidades absolutas (artículos 1553 y 1554 CC). Por otra parte, para realizar dicho control ha de respetase la competencia del juzgador para declarar la nulidad, así como los derechos de audiencia y defensa (para dirimir la pretensión de nulidad sustantiva).

Por tanto, tal potestad no se puede ejercer de manera automática. Más bien, el juez debe calificar, en primer término, si posee la competencia para hacerlo. Además, debe tenerse en cuenta el deber del juez de garantizar el debido proceso entre las partes, de tal manera que tengan la oportunidad de defender sus derechos asociados a la nulidad sustantiva. Ese debate debe realizarse en un escenario procesal que brinde las condiciones básicas para que las partes puedan plantear los alegatos y los medios de prueba idóneos acreditar o desvirtuar los vicios de nulidad atribuidos.

Por todas las razones expuestas, estimo que la declaratoria de oficio de la nulidad del documento base de la acción, en el mismo auto de admisión del recurso de casación, cuyo punto de impugnación es examinar si se ha rechazado indebidamente la apelación, no garantiza las condiciones procesales mínimas para que exista un verdadero debate sobre la nulidad sustantiva en cuestión.

Como consecuencia, no comparto el contenido de la resolución que antecede. A mi juicio, esta Sala debía limitarse a calificar la admisibilidad del recurso interpuesto y, oportunamente, resolver el motivo de casación invocado.

Así mi voto"

Sala de lo Civil, número de referencia: 13-CAC-2022, fecha de la resolución: 09/03/2022

VOTO DISIDENTE DE LA MAGISTRADA DAFNE YANIRA SÁNCHEZ DE MUÑOZ

INTERESES LEGALES

CONFIGURACIÓN DE LA INFRACCIÓN AL ARTÍCULO 1964 INCISO 1° DEL CÓDIGO CIVIL

"Dafne Yanira Sánchez de Muñoz, magistrada de la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia, en el incidente de casación 261-CAC-2021, emito voto disidente con base en los artículos 20 y 220 CPCM, por no estar de acuerdo con la resolución que antecede, según lo especificaré más adelante; no obstante haber firmado la respectiva resolución, tal como lo dispone el último de los referidos artículos.

En la resolución que antecede, entre otras cosas, se ha declarado "No ha lugar a casar la sentencia de mérito, por los motivos de fondo: 1) Inaplicación de ley, con infracción de los arts. 98 inc. 1º CPCM y 1964 inc. 2º CC; 2) Aplicación errónea del art. 1430 regla 2a CC; y, 3) Aplicación indebida del art. 1964 inc.1º CC".

Sin embargo, considero que la conclusión a la que se llega, luego de examinar el motivo de aplicación indebida del artículo 1964 inciso 1º CC, no es la legalmente correcta. Por igual, no comparto algunos argumentos desarrollados al examinar el motivo de inaplicación del artículo 1964 inciso 2º CC; razón por la cual no acompaño la decisión. Procede a desarrollar mi postura jurídica, respecto del tratamiento de los referidos motivos de casación, en el mismo orden que los he mencionado.

1. Aplicación indebida del artículo 1964 inciso 1º CC

El artículo 1964 inciso 1º CC establece que, "Si se estipulare en general intereses sin determinar la cuota, se entenderá que deberán pagarse intereses legales".

El recurrente alega que, la Cámara de segunda instancia aplicó la referida disposición legal para resolver el presente caso, cuando dicha norma no es la adecuada para la solución del mismo.

Para ser más específica, en su escrito de casación, recurrente alega que, "El tribunal de alzada en la apelación, **dijo que el pago de intereses no fue convenido en los contratos** y tal hecho es evidente (...). Es decir que **la norma del inciso primero del artículo 1964 CC, solo es aplicable en los casos de estipular, convenir o pactar intereses** entre las partes, en los que no se haya fijado cuota (...). Con ello se demuestra que existe una aplicación indebida, porque la disposición en comento se refiere a casos en que la controversia es diferente y no a casos como el presente, **en el que no se acordó el pago de intereses"** -resaltado propio-.

Al respecto, en la sentencia que antecede se ha expresado "que las partes al no reconocer en los contratos el pago de intereses, lo cual es factible de conformidad a la libertad contractual, entonces, es aplicable el supuesto que contiene el inciso primero del art. 1964 CC, en el sentido de que "se entenderá que deberán pagarse intereses legales", solo cuando se estipularen intereses en general, sin determinar la cuota de los mismos. No obstante, se reitera, que en el caso en estudio, los contratantes no pactaron ningún tipo de intereses, por lo que de conformidad al precepto legal en comento, no puede haber condena al pago de intereses legales. **Por consiguiente, la Cámara sentenciadora ha aplicado debidamente el inciso primero del art. 1964 CC** (...)" -resaltado propio-.

Sin embargo, no comparto esta conclusión, en vista de que, al examinar el proceso, advierto que en los dos documentos base de la pretensión (contratos de servicios profesionales), las partes no estipularon el pago de intereses. Por ello, el artículo 1964 inciso 1º CC no resulta aplicable.

En efecto, de la sentencia impugnada (páginas 49 y 50), se advierte que el tribunal de segunda instancia, al examinar los dos contratos de servicios profesionales, señaló "que el pago de intereses no fue convenido en los mismos. Es más, ni siquiera se dejó abierta la posibilidad del pago de intereses en caso de incurrir en mora en el pago de los honorarios pactados". Y, seguidamente, invocó el artículo 1964 CC, argumentando que, "establece el pago de intereses legales sólo cuando se hubiere estipulado intereses en general, sin determinar cuota, y en los contratos en estudio los contratantes no pactaron el pago de ningún tipo de intereses (...)".

En consecuencia, la Cámara de segunda instancia aplicó el artículo 1964 CC, para resolver el presente caso, pese a que dicha disposición legal no regula el supuesto controvertido, por cuanto su contenido se refiere a aquellos casos en los que se han pactado intereses, sin especificar su cuota, cuestión que no ocurre en el presente caso (pues en este no se han pactado). En otras palabras, la Cámara de segunda instancia tomó como referencia la hipótesis jurídica prevista en el artículo 1964 CC, para visualizar, configurar y calificar los hechos que fundamentan la pretensión, situación contraria al contenido de dicha norma, ya que el supuesto fáctico que sirve de base a esta controversia no se subsume en tal previsión normativa.

Y si bien la Cámara de segunda instancia no hizo referencia expresa al artículo 1964 "inciso 1 º" CC, ello no obsta para advertir que, en el fondo, lo que hizo fue ordenar y juzgar los hechos desde dicho encuadre normativo, pues argumentó que "El artículo 1964 C.C. establece el pago de intereses legales solo cuando se hubiere estipulado intereses en general, sin determinar cuota (...)"; lo que corresponde, sin duda alguna, al presupuesto normativo regulado en el inciso 1º de dicha disposición legal; el cual, como ya se dijo, no resultaba aplicable.

Por tanto, a mi juicio se configuró la infracción legal denunciada, referida a la aplicación indebida del artículo 1964 inciso 1º CC, tal y como lo ha alegado el recurrente. En tal sentido, lo procedente era casar la sentencia por dicha infracción y, seguidamente, pronunciar la que conforme a derecho corresponde."

LA MORA EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE PAGAR UNA SUMA DE DINERO HABILITA EL RECLAMO DEL INTERÉS LEGAL, POR CONSTITUIR UNA AVALUACIÓN DE PREJUICIOS LEGAL POR MORA, SIN QUE ESTE RECLAMO TENGA COMO CONDICIÓN EL EJERCICIO DE UNA PRETENSIÓN INDEMNIZATORIA, NI LA NECESIDAD DE PROBAR LA EXISTENCIA DE LOS DAÑOS CUANDO SOLO SE COBRAN INTERESES

"2. Inaplicación del artículo 1964 inciso 2º CC
Antecedentes

Para explicar mi criterio jurídico en relación a este motivo de casación, es necesario aclarar que, en su demanda, la parte actora solicitó el pago de intereses legales civiles; que en primera instancia se condenó al pago de los mismo; y que en segunda instancia, la respectiva Cámara revocó dicha condena y desestimó la condena al pago de intereses legales, tomando en cuenta el contenido del artículo 1430 CC, que se refiere a avaluación legal de la indemnización de perjuicios por mora en el caso de las obligaciones de pagar una cantidad de dinero.

En tal sentido, inconforme con la decisión del tribunal de segunda instancia (sobre el pago de intereses legales), el recurrente alega que dicho tribunal ha aplicado erróneamente el artículo 1430 regla 2ª CC. Y para fundamentar tal infracción, sostiene que la Cámara negó el pago de intereses legales, debido a que estos no se reclamaron como "indemnización de daños y perjuicios" (se deduce de la demanda que los intereses legales se reclamaron por la mora en el cumplimiento del contrato). Agrega, el recurrente, que de haberse interpretado

de forma correcta el artículo 1430 regla 2ª CC, habría concluido que no es necesario pactar intereses en los contratos, para que se puedan cobrar intereses por el retardo en el pago; y que "tampoco para cobrar éstos se requiere pedir la indemnización de perjuicios (...)".

Al respecto, soy categórica en afirmar que, la mora en el cumplimiento de las obligaciones de pagar una suma de dinero, habilita el reclamo del interés legal como una forma de avaluación de daños y perjuicios, sin que este reclamo tenga como condición la formalidad de que se diga de manera expresa que se ejerce una pretensión indemnizatoria. Ahora bien, debo aclarar que, si bien mi criterio concuerda con el alegato del recurrente en este sentido, su motivo de casación (aplicación errónea del artículo 1430 regla 2ª CC) fue desestimado, debido a que la Cámara no aplicó esta disposición en su sentencia, por lo que, en consecuencia, no puede existir "aplicación errónea" de la misma. De allí que, de acuerdo a las reglas de la técnica casacional, su impugnación debía desestimarse.

Reitero, la mora en el cumplimiento de las obligaciones de pagar una suma de dinero, habilita el reclamo del interés legal, por constituir una avaluación de prejuicios legal por mora, sin que este reclamo tenga como condición el ejercicio de una pretensión indemnizatoria, ni la necesidad de probar la existencia de los daños cuando solo se cobran intereses (artículo 1430 regla 2º CC). Este criterio es esencial para explicar esta segunda parte de mi voto.

Argumentos desarrollados al analizar la inaplicación del artículo 1964 inciso 2º CC

Esta Sala, en la sentencia que precede, ha sostenido que **"el interés legal en materia civil, no es equivalente al interés moratorio, no es un castigo por la mora del deudor, tampoco es el interés por indemnización de la mora**, porque si esa tesis alegada por el recurrente fuera aplicable en materia civil, entonces, si él como actor hoy recurrente, hubiera incumplido el contrato que suscribió por servicios profesionales, tendría que pagar intereses legales por mora, pero ese supuesto es imposible, ya que en materia civil no tiene sustento legal alguno" -resaltado propio-.

Estimo que lo expuesto en el párrafo que antecede conduce a error, por las siguientes razones:

En nuestro ordenamiento jurídico, la indemnización de perjuicios puede ser compensatoria o moratoria. La indemnización moratoria tiene como objetivo reparar los perjuicios sufridos a consecuencia de la mora.

Con relación a la indemnización de perjuicios moratorios, el legislador ha dispuesto una forma de avaluación de los mismos, denominada, por ello, "avaluación legal" (artículo 1430 CC), y esta se reduce al pago de un determinado tipo de interés; en cuyo caso el acreedor no necesita probar la existencia de perjuicios. La indemnización de estos perjuicios se reclama junto a la obligación principal.

La indemnización de perjuicios prevista en el artículo 1430 CC es de tipo moratorio, cuyo fundamento es la mora del deudor en el cumplimiento de su obligación de pagar una cantidad de dinero. Y dicho artículo, en su regla 1ª,

prevé que la indemnización de perjuicios por la mora está sujeta a las reglas siguientes: "1ª Se siguen debiendo los intereses convencionales, si se ha pactado un interés superior al legal, **o empiezan a deberse los intereses legales, en el caso contrario"** -resaltado propio-.

Por tanto, al incurrir en mora por el incumplimiento de una obligación de pagar una cantidad de dinero, se empiezan a deber intereses legales, sino se hubieren pactado intereses convencionales, o si se hubiese pactado un interés inferior al legal.

De conformidad con la regla la del artículo 1430 CC, la mora en el cumplimiento de una obligación de pagar una cantidad de dinero, genera automáticamente el pago del interés legal, siempre que no se hayan pactado intereses convencionales, o estos fueren inferiores al seis por ciento anual.

SI LA OBLIGACIÓN ES DE PAGAR UNA CANTIDAD DE DINERO Y EL DEUDOR HA INCURRIDO EN MORA, LA AVALUACIÓN LEGAL DE PERJUICIOS CONSISTE EN QUE EL LEGISLADOR HABILITA AUTOMÁTICAMENTE EL RECLAMO DEL INTERÉS LEGAL, EN LOS CASOS QUE PREVÉ LA REGLA P DEL ARTÍCULO 1430 DEL CÓDIGO CIVIL

"Por otra parte, cuando esta Sala, con el ánimo de justificar que el interés legal no equivale al interés moratorio, advierte que, de sostenerse lo contrario, si el recurrente "hubiera incumplido el contrato que suscribió por servicios profesionales, tendría que pagar intereses legales por mora", incurre en el error de no advertir que la naturaleza moratoria del interés legal, en el presente caso, se estudia a la luz de una obligación de "dar" (pagar una suma de dinero), y no desde la óptica de una obligación de hacer. Y es que, es necesario calificar la naturaleza de la obligación incumplida para determinar la naturaleza de la indemnización que puede reclamarse.

En concordancia con lo anterior, no comparto la idea de que, en materia civil, la ley ha delimitado los casos en que procede aplicar el interés legal (usufructo, mandato y mutuo, como lo sostiene esta Sala). A mi juicio, si la obligación es de pagar una cantidad de dinero y el deudor ha incurrido en mora, la avaluación legal de perjuicios consiste en que el legislador habilita, automáticamente, el reclamo del interés legal, en los casos que prevé la regla P del artículo 1430 CC, tal como se ha explicado con anterioridad. Sin embargo, esta disposición no fue invocada como parámetro de control por el recurrente, motivo por el cual esta Sala no podía analizar su infracción."

Por último, debo aclarar que, cuando se configura cualquier supuesto para reclamar el pago de intereses legales, es pertinente aplicar el inciso 2º del artículo 1964 CC, en cuanto al monto del interés, aun y cuando se esté en presencia de un caso en el que no se haya pactado interés convencional, porque no existe otro precepto legal en todo el ordenamiento jurídico salvadoreño que defina el quantum del interés legal civil.

En conclusión, no comparto el contenido de la resolución que antecede en los puntos señalados. A mi juicio, esta Sala debía limitarse a casar la sentencia (por el motivo señalado), pronunciando la que conforme a derecho correspondía.

Así mi voto"

Sala de lo Civil, número de referencia: 261-CAC-2021, fecha de la resolución: 24/03/2022

VOTO DISIDENTE DE LA MAGISTRADA DAFNE YANIRA SÁNCHEZ DE MUÑOZ

ACCIÓN REIVINDICATORIA DE DOMINIO SOBRE BIENES AFECTADOS CON SERVIDUMBRE

EI ANÁLISIS PROBATORIO QUE HA REALIZADO LA SALA EN SU SENTENCIA, SOLO HABRÍA SIDO POSIBLE, EN EL CASO DE QUE LA INTERPRETACIÓN ERRÓNEA ANALIZADA EN LA SENTENCIA DE CASACIÓN, SE REFIRIERA A ALGÚN ASPECTO RELACIONADO CON LA REVISIÓN DE LA VALORACIÓN DE LA PRUEBA, SITUACIÓN QUE NO SE HA DADO EN EL PRESENTE CASO

"Dafne Yanira Sánchez de Muñoz, magistrada de la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia, en el incidente de casación 173-CAC-2022, emito voto disidente con base en el artículo 220 CPCM, por no estar de acuerdo con la resolución que antecede, según lo especificaré más adelante; no obstante haber firmado la respectiva resolución, tal como lo dispone el artículo antes citado. Fundamento mi voto en las consideraciones que expongo a continuación.

La fundamentación que la recurrente ha expuesto con relación al submotivo "Aplicación o interpretación errónea de los Artículos 667 y 680 del Código Civil", está encaminada a sostener que a pesar de que, a su juicio, cumplió con los requisitos que exigen los artículos cuya interpretación errónea invoca, la Cámara ha exigido requisitos que tales disposiciones no contemplan. Y, por tanto, concluye que la Cámara sentenciadora ha dado "un significado o interpretación que no es la correcta".

Como fundamento del anterior argumento, ha expuesto este razonamiento: [...] "(...) Al otorgarse el veintisiete de agosto de mil novecientos sesenta y nueve la escritura de constitución de la servidumbre entre el señor LA hijo y la COMISIÓN EJECUTIVA HIDROELÉCTRICA DEL RÍO LEMPA, CEL, se observaron todos los requisitos notariales que la ley señala, tan es así, que fue inscrita en el Registro de la Propiedad Raíz e Hipotecas (...) y por consiguiente el registrador debió de hacer la anotación de ese gravamen en las inscripciones de la propiedad de "La ********" y "La ********", aunque con la inscripción de la servidumbre bastaba que produjera efectos respecto de terceros (...) al haber ordenado injustamente que se procediera a la reivindicación del terreno en el cual se encuentra la torre y el cableado, hoy de EMPRESA TRANSMISORA DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V., ETESAL, cometisteis el yerro de irrespetar lo que dice la ley, porque si, se cumplieron los requisitos que señala la ley y posteriormente, al inscribir nos estamos acoplando a los Artículos mal interpretados y debió de haberse

declarado sin lugar la reivindicación pedida, pues habiéndose sujetado a la ley, la inscripción debió de haber surtido sus efectos con relación a terceros como dicen los artículos mal interpretados (...) En conclusión, existe una escritura de constitución de servidumbre en forma voluntaria, que se encuentra legal y legítimamente inscrita, que además se encuentra identificada en la inscripción de los inmuebles propiedad de la parte actora, cumpliéndose en totalidad con las disposiciones legales citadas en la sentencia recurrida, sin embargo, la Cámara sentenciadora interpreta en forma diferente dichas disposiciones legales, agregando que de dichas disposiciones es legítimo que el jueza de primera instancia, hubiere concluido que no tiene validez la escritura pública debidamente inscrita, porque la misma requiere otro requisito, que no ha sido establecido en la ley, como es la marginación de las mismas. Esta es una interpretación errada, pues las disposiciones legales señalan que el único requisito para constituirse el derecho es la existencia de escritura debidamente inscrita, cumpliéndose en el presente caso con ambos requisitos, siendo procedente casar la sentencia, y desestimar la pretensión de reivindicación" (pág. 8 del escrito que contiene el recurso de casación).

Por su parte, el análisis de esta Sala, inicia a partir de la siguiente consideración: "1. Al respecto, esta Sala advierte que las disposiciones legales que han sido citadas como infringidas, han tenido aplicación en este caso por haberse admitido dos finalidades en el recurso de apelación, una relativa a la revisión de los hechos probados que se fijan en la resolución, así como la valoración de la prueba, y otra, concerniente a la revisión del derecho aplicado para resolver las cuestiones objeto del debate. Por dicha razón, en la segunda instancia se efectuó un análisis de la norma de derecho vinculada a los hechos que fundamentan la pretensión, y por tanto, conllevó a que dicho razonamiento incluyera los datos probatorios arrojados por los medios de prueba practicados en el proceso de mérito" (Sic) (pág. 6 de la sentencia).

Seguidamente, la Sala ha procedido a realizar una exposición de las consideraciones de la Cámara con relación al planteamiento del recurrente en casación, y advierte que "4.3 Partiendo de tales premiso generales, esta Sala no puede prescindir de que el razonamiento de la Cámara, ha sido fundamentalmente probatorio, y por ende, su análisis ha tenido incidencia en normas de derecho con las cuales se resuelve el asunto planteado en apelación. Es decir, en este caso, la servidumbre voluntaria inscrita, no ha sido considerada oponible frente a terceros, debido a la apreciación de las pruebas sometida a juicio en la segunda instancia, Dicha actividad tiene incidencia indirectamente sobre el derecho de fondo que haya sido invocado por las partes. Por lo que, al no ser reconocido el efecto registran en virtud del análisis de los medios de prueba, puede llegar a configurarse una interpretación errónea de ley, por cuanto que como ya se apuntó antes, al restringirse el contenido de la norma, puede excluirse la aplicación de la misma" (págs. 11 y 12 de la sentencia). Y llega a concluir que: "(...) en este caso, la interpretación de las pruebas realizada por el tribunal de alzada, contraria el sentido otorgado a las disposiciones legales en comento, debido a que se niega la oponibilidad frente a terceros de la servidumbre de mérito, y en este caso, no es posible desconocer la constitución de ese derecho real. Por dicha

razón se procederá a casar la sentencia de mérito, con base en las razones que han sido expuestas en esta sentencia, debiendo pronunciarse la resolución que corresponde con base en el art. 537 inc. 1° CPCM" (sic) (pág. 16 de la sentencia).

De lo expuesto se advierte que el análisis realizado por esta Sala, y que dio lugar a casar la sentencia recurrida, ha sido esencialmente probatorio. Y es que el argumento central de la Cámara para dictar su fallo, fue el relativo a que existe "insuficiencia probatoria, en virtud de que no se encuentran identificados los inmuebles donde pasa la servidumbre de electroducto en cuestión (...)"; y no el relativo a la exigencia de marginación de escrituras, que es el que cita la recurrente en el planteamiento del submotivo.

Tal como se expresó al inicio de este voto, la recurrente, al desarrollar el submotivo de interpretación errónea de los arts. 667 y 680 CC, ha sostenido fundamentalmente, que "la Cámara sentenciadora interpreta en forma diferente dichas disposiciones legales, agregando que de dichas disposiciones es legítimo que el jueza de primera instancia, hubiere concluido que no tiene validez la escritura pública debidamente inscrita, porque la misma requiere otro requisito, que no ha sido establecido en la ley, como es la marginación de las mismas (...)" Es decir, conduce la interpretación errónea hacia la exigencia del requisito, adicional, a su juicio, de marginación de otras escrituras.

Por tanto, es obligado concluir que el análisis probatorio que ha realizado la Sala en su sentencia, solo habría sido posible, en el caso de que el submotivo analizado en la sentencia de casación, se refiriera a algún aspecto relacionado con la revisión de la valoración de la prueba, situación que no se ha dado en el presente caso, pues, tal como se ha expresado, la interpretación errónea de los arts. 667 y 680 CC, en los términos en que ha sido planteada por el recurrente, no alcanza hasta el argumento central de la Cámara relativo a la insuficiencia probatoria.

Es, precisamente por las razones expuestas, que no comparto el razonamiento desarrollado en la sentencia, y que condujo a casar la pronunciada en segunda instancia, con sus consecuencias legales.

Así mi voto."

Sala de lo Civil, número de referencia: 173-CAC-2022, fecha de la resolución: 13/09/2022

VOTO DISIDENTE DE LA MAGISTRADA DAFNE YANIRA SÁNCHEZ DE MUÑOZ

PROCESO DE NULIDAD DE DILIGENCIAS DE REMEDICIÓN DE INMUEBLE

ORDENAR QUE SE PRESENTEN LAS DILIGENCIAS ORIGINALES DE REMEDICIÓN, CONSTITUYE UNA ACTIVIDAD QUE REFLEJA LA INTRODUCCIÓN DE PRUEBA DE OFICIO Y NO LA SIMPLE POTESTAD DE ORDENAR DILIGENCIAS PARA MEJOR PROVEER, CON EL FIN DE ESCLARECER ALGÚN PUNTO OSCURO O CONTRADICTORIO, QUE REGULA EL ART. 7 INCISO 3° CPCM

"Dafne Yanira Sánchez de Muñoz, magistrada de la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia, en el incidente de casación […], emito voto disidente con

base en los artículos 20 y 220 CPCM, por no estar de acuerdo con la resolución que antecede, según lo especificaré más adelante; no obstante haber firmado la respectiva resolución, tal como lo dispone el último de los referidos artículos.

En la sentencia respecto de la que disiento, entre otras cosas, se ha declarado lo siguiente: "b) Casase la sentencia recurrida por el motivo de fondo respecto a la inaplicación del art. 7 inciso 3° CPCM, en relación al art. 336 CPCM. c) Anúlase la sentencia proveída a las quince horas y treinta minutos del uno de diciembre de dos mil veintiuno, por el Juzgado de lo Civil y Mercantil de San Francisco Gotera, departamento de Morazán

Entre los fundamentos de dicha decisión se encuentra la siguiente afirmación: "Por consiguiente, se advierte que para mejor proveer y esclarecer si se realizó o no la citación de todos los colindantes, y además, para acreditar si el notario cumplió con el procedimiento que indica la ley de la materia, esta Sala considera necesario que se aplique la excepción del art. 7 inc. 3° CPCM, en el sentido de que el juez de primera instancia, ordene que se presenten las diligencias originales de remedición, las cuales fueron entregadas por el notario a los solicitantes (...). Lo anterior, tiene relación con lo dispuesto en el art. 336 CPCM, ya que las partes "tienen la obligación de exhibir los instrumentos que se encuentren en su poder y de cuyo contenido dependa algún elemento del objeto del proceso".

Sin embargo, considero que la conclusión a la que se llega después de examinar el motivo de inaplicación del artículo 7 inciso 3°, en relación con el artículo 336, ambos del CPCM, no es la legalmente correcta, debido a que, a mi juicio, dichas disposiciones no resultan aplicables en el presente caso.

En primer término, debe tenerse en cuenta que, según las disposiciones del CPCM, la aportación de prueba puede realizarse de tres formas: por las partes interesadas (regla general); por el juez, bajo la orden de diligencias para mejor proveer; y, de oficio propiamente dicho, por el juez. Precisamente, estas últimas dos, constituyen la excepción a la carga de la prueba, que pesa sobre las partes litigantes.

El Código Procesal Civil y Mercantil comentado, aclara que "(...) por mor del principio de aportación (...) el órgano judicial tampoco puede (...) proponer qué medios de convicción pueden resultar más útiles y eficaces para la demostración de la veracidad de aquellas afirmaciones (...)" (Cabañas García, Juan Carlos, y otros, Código Procesal Civil y Mercantil comentado, Consejo Nacional de la Judicatura, Escuela de Capacitación Judicial "Dr. Arturo Zeledón Castrillo", San Salvador, 2016, pág. 11).

En efecto, el artículo 7 inciso 3° CPCM, que recoge el principio de aportación, establece que "La proposición de la prueba corresponde exclusivamente a las partes o terceros; sin embargo, respecto de prueba que ya fue debida y oportunamente aportada y controvertida por las partes, el juez podrá ordenar diligencias para mejor proveer con el fin de esclarecer algún punto oscuro o contradictorio, de conformidad a lo dispuesto en este Código".

Es así como el artículo transcrito, dispone que la proposición de la prueba corresponde a las partes. Y, al mismo tiempo, reconoce una excepción a dicha regla, consistente en que el juez también puede ordenar diligencias para mejor proveer algún punto oscuro o contradictorio. Las "diligencias para mejor proveer" se regulan como la posibilidad que tiene el juez de introducir prueba al proceso, por supuesto, con el propósito de resolver conforme a derecho. Sin embargo, esta posibilidad no conlleva un amplio margen de acción, sino que es una potestad con límites bien definidos. Esos límites han sido establecidos en el mismo contenido del artículo 7 inciso 3 CPCM, en otras disposiciones de ese mismo código, así como en los principios generales que rigen la actividad procesal.

Así, puede observarse que el artículo 7 inciso 3 CPCM, establece que las diligencias para mejor proveer tienen por finalidad el esclarecer algún punto oscuro o contradictorio. En el presente caso, no se ha considerado este aspecto. A mi juicio, la orden de que se presenten las diligencias de remedición de inmuebles, con las cuales se pretende acreditar el vicio de nulidad alegado (falta de cita de uno de los colindantes), no está encaminada a aclarar ningún aspecto oscuro o contradictorio. Más bien, se trata de un aspecto medular de la actividad probatoria, precisamente porque con las mismas, tal como se ha expresado, se pretende acreditar el vicio de nulidad que se alega en la demanda, por tanto, se trata de una cuestión que perfila el presupuesto básico para estimar o desestimar la pretensión.

Sobre todo, si se tiene en cuenta que en la misma sentencia respecto de la que emito el presente voto, se afirma que: "con el testimonio de la escritura de protocolización de la resolución de la resolución final de las diligencias de remedición (...) se denota, que de las colindancias que describe el perito al norte, sur, oriente y poniente del inmueble, no aparece el nombre de la demandante, por lo que se evidencia, que con ese instrumento de protocolización de la remedición, no se logia determinar con certeza, que a la parte actora no se le citó como colindante a dicha remedición"; es decir, que la señora […], demandante en el presente proceso, no aparece como colindante. En otras palabras, con la prueba aportada al proceso no se logra establecer la calidad que alega tener la demandante.

Por lo antes expresado, el ordenar a la parte demandada que presente las diligencias originales de remedición, constituye una actividad que refleja, más bien, la introducción de prueba de oficio y no la simple potestad de ordenar diligencias para mejor proveer.

Las diligencias para mejor proveer pueden tener lugar, por ejemplo, cuando el juez ordena la exhibición o el reconocimiento de un instrumento original, sobre la base de que las partes en litigio han presentado certificación del mismo, pero cuyos contenidos difieren. En este ejemplo, se observa que el juez podría ordenar diligencias para mejor proveer, es decir, para resolver en legal forma, respecto de la prueba que ya fue debida y oportunamente aportada y controvertida por las partes, precisamente, en aplicación del artículo 7 inciso 3° CPCM. En cambio, cuando se ordena la introducción de prueba, con el fin de acreditar

o desacreditar un aspecto controvertido, sin que las partes hayan generado la actividad probatoria mínima (de la cual se deriva la oscuridad o contradicción), se está en presencia de la ordenación oficiosa de prueba.

La prueba de oficio en materia civil, como regla general, no está permitida, por cuanto la carga de la prueba es exclusiva de las partes; sobre todo cuando se está en presencia de procesos dispositivos. La prueba de oficio expresa una posibilidad más limitada que la referida a las diligencias para mejor proveer. Generalmente, es el legislador quien habilita la posibilidad de que el juez ordene e introduzca prueba de oficio. Un ejemplo se puede advertir en la potestad a que aluden los artículos 139 letra b) y 140 de la Ley Procesal de Familia. Otros ejemplos se prevén en los artículos 268 inciso final y 390 CPCM.

Por otra parte, es oportuno destacar el artículo 7 inciso 3° CPCM, debe interpretarse de manera sistemática con el resto de disposiciones de ese mismo cuerpo normativo. Así, por ejemplo, el artículo 321 inciso 1°, el cual establece: "La carga de la prueba es exclusiva de las partes. Sin embargo, respecto de prueba, que ya fue debida y oportunamente aportada y controvertida por las partes, el juez podrá ordenar diligencias con el fin de esclarecer algún punto oscuro o contradictorio: en tales diligencias no se podrán introducir hechos nuevos, bajo ninguna circunstancia, ni tampoco practicar ningún medio probatorio no introducido oportunamente por las partes".

Tanto el artículo 7 inciso 3°, como el 321 inciso 1°, ambos CPCM, regulan la potestad de ordenar diligencias para mejor proveer. Y este último artículo dispone que la orden de tales diligencias, no permite practicar ningún medio probatorio que no haya sido introducido, oportunamente por las partes. En consecuencia, considero que, ordenar la presentación de las diligencias de remedición, constituye una actividad que excede el contenido del artículo 7, ya comentado.

Por las anteriores consideraciones estimo que la Cámara no incurrió en el vicio de inaplicación del artículo 7 inciso 3° CPCM.

Por otra parte, el artículo 336 CPCM, establece que "Las partes tienen la obligación de exhibir los instrumentos que se encuentren en su poder y de cuyo contenido dependa algún elemento del objeto del proceso. Se podrá solicitar al juez que ordene la exhibición del mismo, so pena de ser sancionado el que incumpla (...)".

Como se observa, la exhibición de instrumentos es una forma de introducir prueba que se encuentra bajo disposición ajena, es decir, a disposición de otra de las partes en litigio. Sin embargo, la orden de exhibir instrumentos es una potestad que, dada su finalidad (introducir prueba), también debe ordenarse con respeto al principio de aportación, y a la carga de la prueba. El juez puede ordenar la exhibición de instrumentos, fundamentándose en la potestad de ordenar "diligencias para mejor proveer", siempre y cuando concurran los presupuestos para ello.

Por tanto, no debe perderse de vista el contenido del artículo 336 inciso 1° CPCM, en cuanto a que la exhibición de documentos se sujeta al principio de aportación (art. 7 inc. 3° CPCM), es decir, solo puede producirse a petición de

parte (cuando la parte que los posea, no los exhiba en cumplimiento de la obligación que le impone esa misma disposición); o cuando concurran los presupuestos de las diligencias para mejor proveer.

En el presente caso advierto que no se solicitó la exhibición de instrumentos, ni en la demanda ni en la audiencia preparatoria, razón por la cual la aplicación de dicha disposición legal no era procedente. En consecuencia, considero que la Cámara no incurrió en el vicio denunciado.

Por lo demás, debe tenerse presente que, tanto los principios constitucionales, los principios generales del derecho procesal, como los que rigen la actividad probatoria en particular, exigen que el juez actúe de forma imparcial, sin que exista la posibilidad de cubrir una necesidad probatoria que correspondía satisfacer a las propias partes. Por tanto, en este caso, a mi juicio, la parte interesada debía proponer e introducir la prueba idónea para acreditar el vicio de nulidad que alega; o, en todo caso, agotar los esfuerzos para lograrlo, sin que el administrador de justicia lo haga en su lugar.

En conclusión, no comparto la decisión que antecede. A mi juicio, esta Sala debía desestimar todos los submotivos de casación.

Así mi voto."

Sala de lo Civil, número de referencia: 209-CAC-2022, fecha de la resolución: 23/08/2022

VOTO DISIDENTE DE LA MAGISTRADA DAFNE YANIRA SÁNCHEZ DE MUÑOZ

SOCIEDADES COOPERATIVAS

SE CONCLUYE QUE ES UNA SOCIEDAD COOPERATIVA SUJETA AL RÉGIMEN NORMATIVO GENERAL DE LAS SOCIEDADES ANÓNIMAS Y CON REGULACIÓN ESPECIAL EN LO RELATIVO A LA ADMISIÓN DE SOCIOS

"Dafne Yanira Sánchez de Muñoz, magistrada de la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia, en el incidente de casación 194-CAM-2022, emito voto disidente con base en el artículo 220 CPCM, por no estar de acuerdo con la decisión que antecede, no obstante haber firmado la respectiva resolución, tal como lo dispone el referido artículo, Fundamento mi voto en los razonamientos que expongo a continuación:

En la sentencia respecto de la cual disiento, se ha resuelto, entre otras cosas, casar la sentencia impugnada por el motivo de infracción de ley, y por los submotivos de aplicación errónea del articulo 19 romano I, inaplicación del artículo 44 inciso 1° y aplicación indebida del artículo 156, todos del Código de Comercio (CCom); y, seguidamente, se han desestimado las pretensiones de la parte demandante.

Sobre el submotivo de errónea aplicación del artículo 19 romano 1 CCom

En síntesis, en su escrito de casación, el recurrente expone que […]

El artículo 19 romano I CCom, establece lo siguiente: *"Las sociedades cooperativas existentes a la fecha de entrar en vigencia este Código, así como las que en lo sucesivo se constituyan, para las cuales se requerirá, por lo menos, de un número de diez socios, funcionarán con sujeción a las normas: 1- Las sociedades cooperativas se regirán por las disposiciones que correspondan a la especie de sociedades que hayan adoptado en su constitución; y por el de la sociedad anónima relativa a balances responsabilidades de los administradores y vigilancia del auditor salvo las modificaciones que se establecen en el presente artículo".*

Ahora bien, en la sentencia que antecede, se ha concluido que, "(...) la Cámara ha aplicado erróneamente el art. 19 rom I CCom, dado que la SOCIEDAD […], ha optado en lo que respecta a la forma de asociarse de la manera en que se rigen las sociedades de personas, y por consiguiente, sujeta a las reglas de este tipo de sociedad; y en lo aplicable a su funcionamiento, se rige por las reglas de una sociedad anónima en lo relativo a (…) Por tal motivo, al haberse configurado la infracción de ley denunciada, se impone casar la sentencia impugnada (...)".

Al respecto, considero que, en el presente caso, la cuestión objeto de debate consiste en definir, en principio, la naturaleza de la parte demandada, y, en consecuencia, el régimen jurídico aplicable a tal sociedad cooperativa. Al respecto, en primer término, debe tenerse en cuenta que una sociedad cooperativa puede estar sujeta al régimen de las sociedades de personas o al de las sociedades de capital, según "la especie de régimen que hayan adoptado en su constitución", de acuerdo con lo dispone el artículo 19 romano I CCom. En consecuencia, dadas las características de una sociedad cooperativa, es posible que concurran en su régimen, normas de sociedades de personas y de capital. La concurrencia de tales normas estará supeditada a la compatibilidad de las mismas.

Para concluir sobre la naturaleza de la sociedad […], resulta necesario examinar los documentos que respaldan su existencia, su naturaleza y sus características.

Del contenido de la escritura de constitución de sociedad, otorgada en San Miguel, a las nueve horas del dieciséis de febrero de dos mil trece, ante los oficios de la notaria […], se advierte que los otorgantes de dicho acto, convinieron en constituir una sociedad cooperativa de ahorro y crédito, de ***naturaleza anónima*** y de responsabilidad *limitada*, *bajo el régimen* de capital *variable*. En la clausula II de dicho instrumento, identificada con el título "Naturaleza, régimen y denominación", se estableció lo siguiente: "La sociedad que se constituye por medio de este instrumento es de ***naturaleza anónima*** y sujeta al régimen de capital variable (...)" (resaltado propio). Y entre otros aspectos, es importante destacar que, el capital de dicha sociedad, según consta en la clausula VI del referido instrumento, se constituyó bajo la forma de ***acciones nominativas comunes y preferidas***. El instrumento relacionado se inscribió en el Registro de Comercio, el día once de abril de dos mil trece.

Además, del contenido de la escritura de modificación de pacto social, otorgada en San Miguel, a las once horas del once de julio de dos mil diecinueve, ante los oficios del notario […], se advierte que los otorgantes de dicho instrumento, modificaron el pacto social de la mencionada sociedad cooperativa. Así, en la cláusula I, identificada con el título "Naturaleza, régimen y denominación", se estableció lo siguiente: "La sociedad cooperativa que se modifica por medio de este instrumento ***se regirá bajo las normas de las sociedades anónimas*** y sujetas al régimen de capital variable (...)". Entre otros aspectos, es importante destacar que, en la clausula V, denominada "Capital social", dispusieron que el capital social estaría representado y dividido en acciones nominativas comunes y preferidas. En la clausula VIII, bajo el epígrafe "De las acciones", se dispuso lo siguiente: "Las acciones serán siempre nominativas; por tanto, los requisitos de emisión de los títulos del libro de registro de accionistas, ***la transmisión*** o la constitución de derechos reales sobre ellas, y demás regulaciones relativas a las acciones, se regularán de conformidad con el Código de Comercio". El instrumento relacionado se inscribió en el Registro de Comercio, el dio diecisiete de julio de dos mil diecinueve.

Por otra parte, del contenido de la certificación notarial de los estatutos de […], aprobados el día dos de abril de dos mil diecinueve, se advierte que, en la cláusula tercera de los mismos, se reguló la "Admisión de socios", al disponer lo siguiente: *"Podrán ser socios de la Sociedad Cooperativa personas naturales o Jurídicas siempre que reúnan los siguientes requisitos: 1) Personas naturales: a) Ser mayor de dieciocho años; b) Presentar por escrito a la Junta Directiva la respectiva solicitud de ingreso. Para ser titular de acciones comunes se requerirá la recomendación de otro socio titular de acciones comunes; c) Ser Una persona de reconocida honradez; y d) Pagar el aporte para la adquisición de acciones en la forma que determine la Junta General de Socios o la Junta Directa, según corresponda (...)* ***La admisión de nuevos socios titulares de acciones comunes;*** *así como la admisión de la titularidad de acciones comunes por conversión de acciones preferidas de voto limitado en comunes,* ***es potestad de la junta ordinaria de socios***" (resaltado propio).

Al examinar de forma integral los documentos constitutivos de la sociedad demandada, se concluye que es una sociedad cooperativa sujeta al régimen normativo de las sociedades anónimas y con regulación especial en lo relativo a la admisión de socios. Por tanto, la normativa que rige a dicha sociedad es la normativa de las sociedades anónimas. Dicha normativa rige su funcionamiento en general, y no solo en lo relativo a "balances, responsabilidad de los administradores y vigilancia del auditor", como se expresa en la sentencia que precede. A mi juicio, la organización, estructura, funcionamiento y cualquier otra cuestión asociada a dicha cooperativa, se rige por las reglas de las sociedades anónimas; siempre y cuando no exista regulación especial sobre algún asunto en particular."

IMPOSIBILIDAD DE ADVERTIR QUE LA CÁMARA HAYA OTORGADO UN SIGNIFICADO EQUIVOCADO AL ARTÍCULO 19 ROMANO I DEL CÓDIGO DE COMERCIO, POR CONCLUIR QUE LA SOCIEDAD DEMANDADA SEA UNA SOCIEDAD DE NATURALEZA ANÓNIMA O REGIDA POR LAS NORMAS PROPIAS DE DICHA CLASE DE SOCIEDAD

"En este caso se discute sobre la admisión de la demandante a la sociedad cooperativa. Al respecto, es oportuno destacar algunos aspectos. Primero, que en la escritura de modificación del pacto social antes relacionada, se estableció que ***la transmisión*** de las acciones estaría sujeta a las disposiciones del Código de Comercio. Segundo, que, en los estatutos de la sociedad cooperativa, se establecieron los requisitos de admisión de nuevos socios, y se identificó a la autoridad competente para conocer de la solicitud de admisión. Además, la misma escritura de modificación del pacto social, en la cláusula XIII, referida a la "Junta o Asamblea General de Socios", dispone que "la junta general ordinaria conocerá de manera exclusiva las solicitudes de ingreso de socios como titulares de acciones comunes".

Sobre la base de lo anterior, se advierte que, por una parte, en la primera de las disposiciones citadas, se determinó que la transferencia de las acciones tiene lugar siguiendo las disposiciones del Código de Comercio, es decir, sobre la base de las reglas que rigen a las sociedades de capital; y, por otra, se han establecido requisitos adicionales para el ingreso de titulares de acciones comunes, que generalmente tienen lugar en las sociedades de personas.

Sin embargo, estimo que el contenido de las disposiciones cuyo contenido se comenta, puede interpretarse de manera sistemática, en los términos que expongo a continuación, siempre teniendo como base el contenido del articulo 19 romano I CCom.

Al ser […], una sociedad cooperativa que se rige por las reglas de las sociedades anónimas, es esta naturaleza la que debe guiar la interpretación del requisito adicional que, sobre la admisión de socios, establecen la modificación al pacto social y los estatutos.

En tal sentido, para ingresar a la sociedad cooperativa, […], además de la transmisión de las acciones, siguiendo, al respecto, las reglas propias de las sociedades anónimas, es necesario dirigir una solicitud a la junta general ordinaria, a quien corresponde conocer de la solicitud de admisión.

En este caso, se afirma que la parte demandante adquirió las acciones comunes de parte de otro socio y, según se plantea en las alegaciones, la solicitud de admisión la presentó posteriormente ante la Juntad Directiva (quien realizó el trámite correspondiente ante la junta general ordinaria), pero dicha petición le fue denegada. En efecto, según consta en la certificación del acuerdo de la Junta General de Accionistas, de fecha dieciocho de agosto de dos mil veintiuno, suscrita por el secretario de la Junta General Ordinaria de dicha sociedad, "La asamblea general ordinaria de socios por unanimidad acuerda denegar la solicitud de inscripción en el libro de accionistas de […] sociedad presentada

por la licenciada MEFL, considerando que esta es una sociedad de personas, de acuerdo al Código de Comercio y los estatutos de esta sociedad, la calidad personal de los socios es la condición esencial para admitir socios, así como el comportamiento de la filosofía y las responsabilidades que esta conlleva".

Ahora bien, el objeto del recurso, según el primer submotivo de casación invocado, es determinar si la Cámara incurrió en error al aplicar el artículo 19 romano I CCom. Al respecto, se ha argumentado lo siguiente en el recurso de casación: " (...) la Cámara hizo una particular interpretación del artículo 19 romano I del Código de Comercio, y concluyó que mi mandante, en tanto que su pacto social y escritura de modificación evocan la adscripción "formal" a las sociedades anónimas, pues ello la convierte en sociedad capital y por tanto no es preciso que la calidad personal de sus socios sea una condición esencial de la voluntad de asociarse (...)".

Sin embargo, conforme los razonamientos antes expuestos, no advierto que la Cámara haya otorgado un significado equivocado al artículo 19 romano I CCom, por concluir que la sociedad demandada sea una sociedad de naturaleza anónima o regida por las normas propias de dicha clase de sociedad.

En consecuencia, disiento de la decisión que antecede, relativa a casar la sentencia impugnada por el submotivo de aplicación errónea del artículo 19 romano I del Código de Comercio."

AUSENCIA DE INFRACCIÓN AL ARTÍCULO 44 INCISO 7° DEL CÓDIGO DE COMERCIO, YA QUE AL NO SER LA SOCIEDAD DEMANDADA UNA SOCIEDAD DE PERSONAS, NO LE ERA APLICABLE DICHA DISPOSICIÓN LEGAL

"Sobre el submotivo de inaplicación del artículo 44 inciso 7° CCom

En síntesis, en su recurso de casación, el recurrente expone que, "(...) consideramos que la Cámara sentenciadora dejó de aplicar el texto del artículo 44 inciso 1° del Código de Comercio, el cual imperativamente señala que en las sociedades de personas la calidad personal de los socios es la condición esencial de la voluntad de asociarse, excepto en la sociedad de responsabilidad limitada, en la cual también podrán participar en su acto constitutivo o en ingreso de nuevos socios, otras sociedades mercantiles nacionales o extranjeras. Esta era la disposición que de manera conjunta con el artículo 19 romano del Código de Comercio, mismo que si se aplicó, pero interpretado erróneamente, le hubiese permitido a la Cámara obtener una conclusión legal y atinada (...) bastaba revisar los documentos fundacionales y los estatutos de la Sociedad […] para colegir que existía un procedimiento para la incorporación de Socios, que difiere del de las sociedades de capital (...)"" (sic).

El artículo 44 inciso 1° CCom, establece lo siguiente: "En las sociedades de personas la calidad personal de los socios es la condición esencial de la voluntad de asociarse, excepto en la sociedad de responsabilidad limitada, en la cual también podrán participar en su acto constitutivo o en ingreso de nuevos socios, otras sociedades mercantiles nacionales o extranjeras".

Ahora bien, en la sentencia que antecede, se afirma que, "(...) la Cámara inaplicó el art. 44 inc. 1° CCom, al haber concluido que la sociedad cooperativa estaba sujetas a las disposiciones de una sociedad de capital, y no a las reglas de las sociedades de personas, por lo que deberá casarse la sentencia impugnada también por este submotivo".

No comparto dicha conclusión porque, a mi juicio, y según antes lo expresé, la sociedad demandada no es una sociedad de personas. Por tanto, el artículo 44 inciso 1° CCom, que se refiere propiamente a las sociedades de personas, no era aplicable en este caso.

En consecuencia, disiento con la decisión que antecede, relativa a casar la sentencia impugnada por el submotivo de inaplicación del artículo 44 inciso 1° del Código de Comercio."

AUSENCIA DE APLICACIÓN INDEBIDA DEL ARTÍCULO 156 INCISO I ° DEL CÓDIGO DE COMERCIO, YA QUE POR TRATARSE DE UNA SOCIEDAD COOPERATIVA CON RÉGIMEN DE SOCIEDAD ANÓNIMA, NO DEBERÍA EXISTIR LA NEGATIVA DE INSCRIBIR A LA DEMANDANTE EN EL LIBRO DE ACCIONISTAS

"Sobre el submotivo de aplicación indebida del artículo 156 CCom

En síntesis, en su recurso de casación, el recurrente expone que, (...) consideramos que se aplicó indebidamente el artículo 156 del Código de Comercio el cual señala que *la negativa injustificada de la sociedad a inscribir a un accionista en el registro de acciones nominativas, la obliga solidariamente con sus administradores al pago de los daños y perjuicios que se ocasionaren a aquél*, pues producto de su tenor normativo y debido a la errónea interpretación que hizo la Cámara, así como el haber desconocido otras normas, aplicó una severa sanción a mi mandante de forma ilegal e inconstitucional, ya que condenó a la Sociedad […] al pago de perjuicios específicamente identificados como lucro cesante "en abstracto" que seguramente la contraparte intentará liquidar en otro proceso. Lo hizo así porque le desconoció la cualidad de sociedad de personas a mi mandante y por el contrario la identificó como de capital, lo cual le llevó a aplicar esta disposición [artículo 156 del Código de Comercio] que obviamente en otras circunstancias y razones podría haber sido aplicable (...) porque le fue aplicada a mi mandante cuando no resultaba procedente, ya que como hemos dicho siendo una Sociedad Cooperativa, su naturaleza jurídica toral más bien le identifica en su esencia y existencia como una sociedad de personas y no de capital, tal cual lo entendió la Cámara sentenciadora. De hecho, ese fue el motivo por el cual aplicó esta disposición (indebidamente) pues partió de la premisa [cierta] de que mi mandante era una sociedad sujeta a las formalidades de una anónima, como lo indica expresamente el artículo 19 romano I del Código de Comercio, concluyendo falsamente que por ese hecho era una sociedad de capital (...)".

El artículo 156 inciso I ° CCom, establece que "La negativa injustificada de la sociedad a inscribir un accionista en el registro de acciones nominativas, la obliga solidariamente con sus administradores al pago de los daños y perjuicios que se ocasionaren a aquél".

Ahora bien, en la sentencia que antecede, se ha concluido que, "(...) la sociedad cooperativa se rige por las reglas de una sociedad de personas, y que como una manifestación de la condición esencial de la confianza personal que debe tenerse entre los socios, la misma llene un mecanismo propio para la admisión de nuevos socios (...) Por tanto, este Sala concluye que la aplicación de este precepto no era necesaria, para la solución del caso (…)".

Al respecto, tal como ya lo he expresado, no comparto el criterio de que la sociedad cooperativa […] se rige por las reglas de una sociedad de personas. Más bien, resulta claro que, constituye una sociedad cooperativa sujeta al régimen de las sociedades anónimas, y que, en lo relativo a la admisión de socios, se estableció un trámite adicional, entre los que se encuentra, el conocimiento de la solicitud de admisión por parte de la junta ordinaria de socios.

Tal como lo expone el mismo recurrente, en el caso analizado, la Junta General Ordinaria de Accionistas denegó la solicitud de inscripción de la señora MEFL, en el libro de accionistas respectivo, por considerar que la sociedad cooperativa es una sociedad de personas, en los términos expresados en el apartado anterior de este voto.

Sin embargo, tal como se razonó con anterioridad, la sociedad cooperativa […], es una sociedad cooperativa sujeta al régimen de las sociedades anónimas. Y, al respecto, la Cámara consideró que había quedado acreditada ""la negativa injustificada de inscribir en el libro de accionistas a la demandante", conclusión que considero es la que corresponde, precisamente, porque la negativa que se comenta se fundamentó en que la sociedad cooperativa es una sociedad de personas.

En consecuencia, no comparto la decisión de casar la sentencia por el submotivo de aplicación indebida del artículo 156 CCom, por las razones expuestas a lo largo de este voto.

Por tanto, a mi juicio el recurso de casación debía ser desestimado íntegramente.

Así mi voto"

Sala de lo Civil, número de referencia: 194-CAM-2022, fecha de la resolución: 30/08/2022

VOTO DISIDENTE DE LA MAGISTRADA DAFNE YANIRA SÁNCHEZ DE MUÑOZ

PROCEDENCIA DEL RECURSO DE CASACIÓN

NO COMPARTO QUE EN ESTA ETAPA DEL INCIDENTE SE AFIRME QUE EL RECURSO DE CASACIÓN INTERPUESTO ES IMPROCEDENTE, POR EL HECHO DE QUE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA ES UN AUTO SIMPLE QUE NO ADMITE APELACIÓN NI CASACIÓN

"Dafne Yanira Sánchez de Muñoz, magistrada de la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia, en el incidente de casación 104-CAC-2022, emito voto disidente con base en el artículo 220 CPCM, por no estar de acuerdo con

la decisión que antecede, no obstante haber firmado la respectiva resolución, tal como lo dispone el referido artículo. Fundamento mi voto en las consideraciones que expongo a continuación.

En el auto que antecede, se ha declarado improcedente el recurso de casación interpuesto contra la resolución que *inadmitió el recurso de apelación* en el presente trámite de tercería de dominio. Y entre los fundamentos que sustentan dicha decisión, se plantea lo siguiente:

"Asimismo, debe tenerse en cuenta que la naturaleza y finalidad de la tercería de dominio, no es de un proceso autónomo, principal o independiente, aunque tiene por objeto exclusivo decidir sobre la continuidad o el levantamiento del embargo (...). De tal modo que se trata de una cuestión incidental (...), el proceso culmina no con una sentencia, como es la forma típica de finalización del proceso común, sino con un auto que no produce efectos de cosa juzgada (art. 641 inc. 1° CPCM). En consecuencia, siendo el auto que decide sobre la tercería de dominio, un auto simple, el mismo carece de impugnabilidad objetiva en apelación y en casación".

Ahora bien, soy del criterio de que el recurso interpuesto no es improcedente. Más bien, cuando la resolución impugnada en casación es el *auto que rechaza el recurso de apelación por inadmisible o improcedente*, no debe realizarse una interpretación eminentemente restrictiva de la procedencia del recurso de casación, en el sentido de que, al no generar efectos de cosa juzgada el proceso en el que se produce el rechazo de la apelación, aquel deviene en improcedente; ya que, de admitirse el recurso de casación (siempre y cuando se cite el motivo y submotivo de casación pertinente, y se cumpla con todos los requisitos legales para el planteamiento del mismo), la Sala se limitará a verificar si la alzada fue rechazada de forma indebida, sin realizar un pronunciamiento de fondo sobre las pretensiones discutidas.

Incluso, la doctrina nacional más autorizada al respecto, ha sostenido un planteamiento como este, al afirmar que, el recurso de casación, por haberse declarado indebidamente la improcedencia de una apelación, "es procedente independientemente de que la sentencia que haya pronunciarse en segunda instancia sea casable o no, porque solo tiene por finalidad que el asunto sea visto por el tribunal de alzada" (vid. ROMERO CARRILLO, Roberto, La normativa de casación, Ministerio de Justicia, Ediciones Último Decenio, San Salvador, 1992, p. 126).

El rechazo indebido de la apelación constituye un vicio de forma dentro de la teoría casacional, es decir, un vicio que gira en torno al quebrantamiento de las formas esenciales del proceso, según lo establecido en el artículo 523 ordinal 13° CPCM. En ese sentido, la configuración de este vicio, por su carácter formal o procesal, no debe supeditarse a la naturaleza del proceso promovido. Por tanto, si se niega el control casacional de una providencia judicial que ha rechazado de forma indebida una apelación, bajo el argumento de que las pretensiones ejercidas no sustentan una decisión que produzca efectos de cosa juzgada material, estaríamos sustrayéndole eficacia normativa al ordinal 13° del artículo 523 CPCM.

Por el contrario, el derecho a recurrir, como manifestación del derecho a un proceso constitucionalmente configurado y este, a su vez, como manifestación

del derecho fundamental a la protección jurisdiccional (artículo 2 Cn), _aun y cuando los recursos sean de configuración legal_ exige que los poderes públicos reconozcan el derecho de los justiciables de acceder a la segunda instancia, para que esta revise lo realizado por la primera. En tal sentido, estimo que negar el recurso de casación contra el presunto rechazo indebido de la apelación, por los argumentos expuestos en el auto que antecede, permite sustraer del control legal, la denegatoria de acceso a la segunda instancia, en contravención al derecho a la protección jurisdiccional.

Por otra parte, no debe perderse de vista que el sistema de recursos es un mecanismo de control intraorgánico, que permite controlar y balancear el ejercicio del poder público dentro de un auténtico Estado de derecho. Tal mecanismo de control presenta una falla interna cuando se afirma que el auto que inadmite la apelación no es recurrible en casación, por la naturaleza del proceso promovido (que no produce efectos de cosa juzgada material). Tal falla se traduce en que el poder público que ejercen los tribunales de alzada instituye una zona exenta de control casacional (de forma injustificada), cuando del presunto rechazo indebido de una apelación se trata. Esto, sin duda alguna, es inconcebible en un auténtico Estado de derecho, pues todos los justiciables tienen derecho a que se examine si el tribunal de apelaciones ha denegado indebidamente el acceso a la segunda instancia a través de la alzada.

Sin embargo, en este caso, el recurso de casación, pese a que es procedente, resulta inadmisible, por no haberse fundamentado adecuadamente. Ciertamente, en este tipo de casos, el motivo genérico que debe invocarse es el de quebrantamiento de las formas esenciales del proceso, y el motivo específico debe ser el previsto en el artículo 523 ordinal 13° CPCM, que se refiere al submotivo de “haberse declarado indebidamente la improcedencia de una apelación”, vinculado a un precepto legal cuyo contenido guarde relación con el vicio denunciado. Además, el concepto de la infracción debe ser preciso y coherente, de manera que quede claro cuál fue el error cometido por el tribunal de segunda instancia al calificar el recurso de alzada. En el presente caso, el recurrente invoca el motivo de forma de inadecuación del procedimiento, el cual no tiene relación con el presunto rechazo indebido de la apelación.

Finalmente, no comparto la idea de que, en esta etapa del incidente, se afirme que el recurso de casación interpuesto es improcedente por el hecho de que la resolución impugnada es un auto simple que no admite apelación ni casación; en virtud de que, justo eso tipo de aspectos, son los que deben examinarse al dictar sentencia. En esta etapa del incidente de casación, esta Sala debe limitarse a examinar el cumplimiento de los requisitos de procedencia y admisibilidad del recurso interpuesto, sin efectuar consideraciones de fondo que constituyen el sustrato materia de la impugnación.

En consecuencia, no acompaño la decisión adoptada, por las razones expuestas. A mi parecer, el recurso no debía rechazarse por improcedente, sino por inadmisible (por carecer de la fundamentación adecuada).

Así mi voto.”

Sala de lo Civil, número de referencia: 104-CAC-2022, fecha de la resolución: 27/04/2022

VOTO PARCIALMENTE DISIDENTE DE LA MAGISTRADA DAFNE YANIRA SÁNCHEZ DE MUÑOZ

ACCIÓN REIVINDICATORIA DE DOMINIO

LA ADVERTENCIA DE UN DEFECTO QUE VUELVE IMPROPONIBLE LA DEMANDA REIVINDICATORIA DE DOMINIO, NO HABILITA A ESTA SALA A REALIZAR UN PRONUNCIAMIENTO DE FONDO SOBRE LAS PRETENSIONES DE NULIDAD, COMO ES LA CONFIRMACIÓN DE LAS MISMAS

"Dafne Yanira Sánchez de Muñoz, magistrada de la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia, en el incidente de casación 270-CAC-2022, emito voto parcialmente disidente con base en el artículo 220 CPCM, por no estar de acuerdo con la sentencia que antecede, según lo especificaré más adelante; no obstante haber firmado la respectiva resolución, tal como lo dispone el artículo antes citado. Fundamento mi voto en las consideraciones que expongo a continuación.

En la sentencia respecto de la cual disiento, se ha resuelto, entre otros, "a) No ha lugar a casar la sentencia (...) por el motivo de fondo relativo a la inaplicación del art. 35 LTODARPRH b) Casase la sentencia de mérito, por el submotivo de fondo relativo a la interpretación errónea del art. 16 LRRPRH; c) Casase la sentencia de mérito, por infracción a la doctrina legal, al haberse violado la jurisprudencia pronunciada por esta Sala, surgida de la aplicación e interpretación del art. 35 LTODARPRH (...) e) Declarase improponible la demanda que contiene la pretensión de la acción reivindicatoria de dominio en los términos expresados en la presente sentencia; f) ***Confirmase la desestimación de las pretensiones de nulidad de inscripciones de: título supletorio, compraventa, remedición de inmueble y de acta de adjudicación (...)"*** (resaltado propio).

No comparto parcialmente la decisión relacionada, así como algunos de los argumentos desarrollados con relación a la misma. Según lo expongo a continuación:

Sobre la decisión de confirmar la desestimación de las pretensiones de nulidad

En síntesis, en la sentencia que precede, el tribunal de casación ha considerado que, la certificación registral de la inscripción del título de propiedad, no es el título "idóneo" para acreditar el dominio en un proceso reivindicatorio. Más bien, ha dicho que, el dominio se comprueba con el título original inscrito, o, en su defecto, mediante la certificación que se obtiene en los términos que establece el artículo 35 de la Ley Relativa a las Tarifas y Otras Disposiciones Administrativas del Registro de la Propiedad Raíz e Hipotecas (en adelante "Ley Relativa a las Tarifas").

Sobre la base de lo anterior, se ha casado la sentencia impugnada, tomando en consideración que en primera y segunda instancia se tuvo por acreditado el dominio, con la certificación literal del título de propiedad, extendida por el Registro de la Propiedad Raíz e Hipotecas. Lo anterior dio lugar a considerar la

aplicación errónea del artículo 16 de la Ley de Reestructuración del Registro de la Propiedad Raíz e Hipotecas, así como la inobservancia de la jurisprudencia emitida por esta Sala, en cuando a la forma correcta de aplicare interpretar el artículo 35 de la "Ley Relativa a las Tarifas". Como consecuencia, s*e ha declarado improponible la demanda de acción reivindicatoria.*

Ahora bien, el anterior pronunciamiento ha tenido lugar al resolverse el incidente de casación, suscitado en el presente proceso declarativo común reivindicatorio de dominio, al cual se le ha acumulado el proceso declarativo común de nulidad de título supletorio, de compraventa, de remedición y de adjudicación en pago; pero respecto del recurso de casación interpuesto por la parte que promovió este segundo proceso.

Sin embargo, el tribunal de casación "destaca" que "al haberse declarado inadmisible el recurso de casación, ***respecto al motivo relativo a las nulidades de inscripciones, se confirma la desestimación de las mismas, debido a que, con la inadmisión del recurso de casación, adquirió firmeza esa decisión"*** (resaltado propio). Incluso, en el fallo de la sentencia que precede, expresamente se ha *confirmado la desestimación de las pretensiones de nulidad inscripciones de título supletorio, compraventa, remedición de inmueble y acta de adjudicación.*

Al respecto, no comparto la decisión de confirmar la desestimación de dichas pretensiones, por cuanto el objeto de control en este grado de conocimiento no se integró por cuestiones que estuvieran asociadas a dichas pretensiones. La advertencia de un defecto que vuelve improponible la demanda reivindicatoria de dominio, no habilita a esta Sala a realizar un pronunciamiento de fondo sobre las pretensiones de nulidad, como es la confirmación de las mismas. A mi juicio, no corresponde hacer dicho pronunciamiento, razón por la cual no participo con mi voto, respecto del mismo."

LA CERTIFICACIÓN REGISTRAL DEL TÍTULO CONSTITUYE PRUEBA IDÓNEA DEL DERECHO DE DOMINIO; SIN EMBARGO, EL LEGISLADOR EN EL ARTÍCULO 35 LTODARPRH, HA ESTABLECIDO UN ORDEN PREFERENTE EN RELACIÓN CON LOS MEDIOS PARA ACREDITAR EL MISMO

"Sobre la "prueba idónea" para acreditar el dominio

En la sentencia respecto de la cual disiento parcialmente, al examinar el submotivo de aplicación errónea del artículo 16 de la Ley de Reestructuración del Registro de la Propiedad Raíz e Hipotecas, se ha dicho que "(...) si bien es cierto la certificación registral es un instrumento que hace prueba, ***no es la idónea para este caso***, ya que el instrumento útil y pertinente para acreditar el dominio, es el título original debidamente inscrito en el Registro respectivo" (resaltado propio).

Al respecto, considero que no es legalmente correcto afirmar que la certificación registral del título de dominio, no es prueba idónea para acreditar dicho derecho. Y es que, tomando en consideración que el objeto de control en el pre-

sente incidente de casación se refiere a la forma de probar el dominio en la acción reivindicatoria (razón por la cual se ha examinado la inaplicación del artículo 35 de la "Ley Relativa a las Tarifas", la interpretación errónea del citado artículo 16 y el contenido de la jurisprudencia emitida por la Sala de lo Civil, sobre la aplicación del mencionado artículo 35), advierto que, dicha certificación registral si constituye prueba idónea para acreditar el derecho de dominio.

Sin embargo, el legislador, en el artículo 35 de la "Ley Relativa a las Tarifas" ha establecido un *orden preferente* en relación con los medios para acreditar el derecho de dominio. De su contenido se observa, por ejemplo, que, en primer término, el dominio se acredita *con el título original debidamente inscrito*; en segundo lugar, mediante la reposición de dicho título (en la forma prevista); y, de no resultar posible ninguna de las anteriores, mediante *certificación literal de la respectiva acta de inscripción.* Estas son formas idóneas de acreditar la propiedad, pero según la prelación que establece el orden de preferencia legalmente establecido.

Por tanto, si bien estoy de acuerdo con la decisión de estimar la interpretación errónea del artículo 16 de la Ley de Reestructuración del Registro de la Propiedad Raíz e Hipotecas, no comparto los argumentos desarrollados en cuanto a lo que acá he expuesto.

En conclusión, no comparto la decisión de confirmar la desestimación de las pretensiones de nulidad, ni la calificación que se hace en cuanto a que la certificación registral no es prueba "idónea" para acreditar el dominio, en los términos que lo he explicado.

Así mi voto."

Sala de lo Civil, número de referencia: 270-CAC-2022, fecha de la resolución: 17/11/2022

VOTO RAZONADO DE LA MAGISTRADA DAFNE YANIRA SÁNCHEZ DE MUÑOZ

EXTEMPORANEIDAD DEL RECURSO DE CASACIÓN

AL NO HABERSE INTERPUESTO REVOCATORIA RESPECTO DE LA DECISIÓN IMPUGNADA, LOS ARGUMENTOS PARA DECLARAR EXTEMPORÁNEO EL RECURSO DE CASACIÓN SON INNECESARIOS

"Dafne Yanira Sánchez de Muñoz, magistrada de la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia, en el incidente de casación 282-CAC-2022, emito voto razonado. Fundamento mi voto en las consideraciones que expongo a continuación:

Mediante la resolución respecto de la cual emito este voto, se ha declarado inadmisible el recurso de casación presentado, por ser extemporáneo. Y para fundamentar dicha decisión, se ha tomado en consideración lo expuesto en el artículo 526 CPCM.

Sin embargo, también se han desarrollado una serie de consideraciones relativas al momento en que se inicia a contabilizar el plazo para interponer el recurso de casación, cuando previamente se ha interpuesto el recurso de revocatoria. Dichos argumentos los asocian al contenido del artículo 506 CPCM.

No obstante, considero que, en este caso, al no haberse interpuesto recurso de revocatoria respecto de la decisión que se impugna en casación, tales argumentos no son necesarios."

DEL CONTENIDO DEL ARTÍCULO 506 DEL CÓDIGO PROCESAL CIVIL Y MERCANTIL, NO SE DERIVA NINGUNA IDEA QUE PERMITA DEFINIR EL MOMENTO EN QUE COMIENZA A TRASCURRIR EL PLAZO PARA INTERPONER EL RECURSO DE CASACIÓN

"Por otra parte, no comparto las consideraciones antes mencionadas, debido a que del contenido del artículo 506, no se deriva ninguna idea que permita definir el momento en que comienza a transcurrir el plazo para interponer el recurso de casación. El artículo 506 CPCM, además de impedir la interposición de recursos respecto de la decisión de revocatoria, reconoce la posibilidad de "reproducir" la petición planteada en una revocatoria que hubiere sido desestimada, en el recurso que se interponga contra la resolución que le ponga fin al proceso de manera definitiva. No obstante, reitero, su contenido no permite contabilizar el plazo de la casación, cuando previamente se ha interpuesto recurso de revocatoria."

ES INNECESARIO E IMPROCEDENTE HACER REFERENCIA AL ARTÍCULO 501 INCISO 2° DEL CÓDIGO PROCESAL CIVIL Y MERCANTIL, CUANDO PREVIAMENTE AL RECURSO DE CASACIÓN NO SE HA INTERPUESTO SOLICITUD DE ACLARACIÓN

"Además, considero que no es necesario, ni procedente, hacer referencia al artículo 501 inciso 2° CPCM, el cual establece una regla que permite deducir en qué momento inicia el plazo de la casación, cuando previamente se ha interpuesto el recurso de aclaración, con el fin de concluir que resulta aplicable a los casos en que previamente se ha solicitado la revocación de la resolución impugnada posteriormente en casación. Precisamente, porque, en este caso, tampoco se ha interpuesto solicitud de aclaración.

En este caso, únicamente debió considerarse que el recurso de casación es extemporáneo al haberse interpuesto fuera del plazo previsto para ello, de manera clara, en el artículo 526 CPCM.

Así mi voto."

Sala de lo Civil, número de referencia: 282-CAC-2022, fecha de la resolución: 05/10/2022

MATERIA: FAMILIA

ALIMENTOS

IMPROCEDENCIA CONTRA RESOLUCIONES DICTADAS EN PROCESOS DE DIVORCIO, EN LO CONCERNIENTE A LA OBLIGACIÓN DE ALIMENTOS, YA QUE SE TRATA DE UNA PRETENSIÓN SUSCEPTIBLE DE REFORMA, SIENDO SU RESOLUCIÓN DE AQUELLAS QUE NO CAUSAN AUTORIDAD DE COSA JUZGADA MATERIAL

"Esta Sala precisa aclarar que la Ley Procesal de Familia no establece el procedimiento a seguir en el caso del recurso de casación, ni los supuestos que lo vuelven procedente. En efecto, el art. 147 de dicha ley prevé únicamente lo siguiente: "También procederá el recurso de casación el cual se interpondrá y tramitará conforme a las reglas de la casación civil." Ello nos obliga a determinar, entonces, cuáles son las reglas que establece el actual CPCM en referencia a la casación en materia de familia, pues claramente la LPF hace una remisión directa a la norma procesal civil.

Desde esta óptica, en primer lugar, debe tomarse en cuenta el contenido del art. 212 CPCM, el cual señala que las resoluciones judiciales se clasifican en decretos, autos y sentencias. Los decretos son resoluciones de mero trámite, que impulsan el proceso. Los autos pueden ser simples o definitivos. Los primeros son los que resolverían, por ejemplo, medidas cautelares, incidente o nulidades; y lo segundos, aquellos que le ponen fin al proceso haciendo imposible su continuación. Las sentencias, por su parte, serían las resoluciones que resuelven el fondo del asunto planteado.

En segundo lugar, debemos atenernos a lo que se dispone en el art. 519, número 2, del CPCM, el cual indica que, en materia de familia, admiten casación "(...) las sentencias correspondientes en los términos que determina la Ley Procesal de Familia."

Pareciera ser que hay una remisión mutua entre el CPCM y la LPF respecto del recurso de casación, que al final no resuelve el asunto de fondo; es decir, pareciera que, desde la literalidad de las normas, no se da respuesta a la interrogante de ¿Cuáles resoluciones son las que admiten casación en materia de familia?

No obstante ello, tenemos que partir de una interpretación integral de las normas, atendiendo a su finalidad. Es preciso resaltar, en ese sentido, que en materia de familia están excluidas del recurso de casación todas las resoluciones que tengan que ver con los supuestos del art. 83 LPF. Esta norma prevé, de manera expresa, que "Las sentencias sobre alimentos, cuidado personal, suspensión de

autoridad parental, tutorías, fijación de regímenes de visitas, deber de convivencia y todas aquellas que no causan cosa juzgada de conformidad al Código de Familia, podrán modificarse o sustituirse de acuerdo a la Ley."

Lo anterior, en consonancia con la finalidad e interpretación de las normas de familia que se indica en los arts. 1 y 2 LPF, nos llevan a la idea de la desformalización o desburocratización del proceso de familia que implica priorizar el goce efectivo de los derechos de las partes involucradas, y que por ello busca que los procesos se vean agotados hasta en la fase de apelación. Es decir, hay claramente una apuesta por la economía y celeridad procesal, que implica minimizar los tiempos de respuesta ante el conflicto familiar.

Tomando en cuenta la remisión que la Ley Procesal de Familia, hace a la casación civil, esta Sala considera que por disposición legal expresa los autos de cualquier clase, no son susceptibles de ser recurridos en casación, de conformidad al referido art. 519 CPCM.

Sumado a lo anterior, en reiterada jurisprudencia, esta Sala ha sostenido que las sentencias pronunciadas en los procesos señalados en el artículo 83 de la Ley Procesal de Familia citado, sólo quedan ejecutoriadas en sentido formal, es decir, que no causan autoridad de cosa juzgada material, en razón que el asunto decidido es susceptible de volverse a discutir en un juicio posterior.

Asimismo, el artículo 520 del Código Procesal Civil y Mercantil, manda a rechazar el recurso de casación cuando se interponga contra resolución dictada en asuntos de jurisdicción voluntaria o en procesos especiales, cuando la sentencia de la que se recurre no produzca efectos de cosa juzgada en sentido material.

De esa manera, en el caso que nos ocupa, si bien se trata de un proceso de divorcio por el motivo segundo del art. 106 CF; el objeto de impugnación concierne a la obligación de alimentos, es decir que, se trata de una pretensión susceptible de reforma, siendo su resolución de aquellas que no causan autoridad de cosa juzgada material, lo cual conlleva a la improcedencia del recurso, y así se impone declararlo."

Sala de lo Civil, número de referencia: 71-CAF-2022, fecha de la resolución: 23/03/2022

DECLARATORIA JUDICIAL DE UNIÓN NO MATRIMONIAL

LA DEBIDA ACREDITACIÓN DE LA CALIDAD DE HEREDERO O HEREDEROS DEL CONVIVIENTE FALLECIDO ES UN PRESUPUESTO PROCESAL QUE NO PUEDE ELUDIRSE PREVIO A LA ADMISIÓN DE LA DEMANDA

"6. Esta Sala advierte, que al examinarse lo alegado en casación en esta fase inicial, siendo procedente el recurso y admisible un motivo del mismo, ello habilita para ejercer un control de oficio respecto de una nulidad procesal insubsanable, debido a que el control de legalidad de las actuaciones por parte de esta sede, abarca todo el escenario en el cual se ha ventilado la pretensión, por lo que cualquier irregularidad procesal puede ser advertida a raíz de las alegaciones que realicen las partes en el recurso.

No obstante, que el recurrente ha alegado hasta este momento o etapa procesal la falta de legitimación pasiva de sus representados, ya que tal argumentación no se realizó en primera ni en segunda instancia, obliga a esta Sala a verificar en los autos del proceso si se ha cumplido con los requisitos de ley en la tramitación del mismo, a efecto de advertir -como ya se apuntó-, cualquier vicio en la actividad procesal, que conlleve una nulidad insubsanable.

6.1 En el caso que nos ocupa, con la demanda se pretende que se declare la existencia de unión no matrimonial, entre la demandante señora ********** y el causante señor **********, basada la misma bajo el supuesto del fallecimiento de uno de los convivientes, conforme al art. 123 CF.

Encontramos también, que en dicha demanda se señaló que se incoaba contra los señores […], hermanos del causante, habiendo el Juzgado Cuarto de Familia de San Miguel ordenado su emplazamiento sin referir en qué calidad se emplazaban, ordenándose a su vez, emplazar por edicto a todas aquellas personas que pudieran resultar afectadas con la sentencia que se dictare.

Resulta pertinente tener en cuenta, lo que establece la legislación adjetiva, a efecto de determinar a quién le corresponde la calidad de parte demandada en casos como el presente; es decir, quien posee legitimación pasiva para ser parte en el proceso; esto es así, porque la legitimación procesal -activa o pasiva-, constituye en todo proceso un presupuesto de la sentencia y como tal, debe estimarse en la relación jurídica con respecto al objeto litigioso. En términos generales, para poder figurar y actuar eficazmente como parte, en un determinado proceso, no basta con disponer de una aptitud general sino una condición más precisa, referida singularmente al litigio de que se trate.

Asimismo, debe acreditarse o legitimarse la intervención en la causa, que refiere a la consideración especial de algunas personas dentro de cada proceso, que se hallan en una determinada relación con el objeto del litigio y, en virtud de la cual, exige, para que la pretensión pueda ser examinada en cuanto al fondo, que sean dichas personas las que figuren como partes en tal proceso. *(Derecho procesal civil, tomo I, Jaime Guasp y Pedro Aragoneses, Thompson civitas)*

Al efecto, el art. 126 LPF, establece: *"En la resolución que admite la demanda para la declaratoria de existencia de la unión no matrimonial, el Juez ordenará el emplazamiento del demandado y además que se emplace por edicto a quienes consideren que la sentencia les afectará en sus derechos, para que comparezcan a ejercer su defensa. Si la declaratoria se pidiere en caso de fallecimiento de uno de los convivientes y se desconociere quienes son los herederos del demandado, se manifestará esta circunstancia en la demanda y en su admisión se ordenará el emplazamiento por edicto para los efectos señalados en el inciso anterior."*

Debe tenerse claro entonces, de acuerdo a lo dispuesto en la disposición antes citadas, que en estos casos en principio, la legitimación pasiva le corresponde o pertenece a los herederos del causante, lo cual a su vez no debe confundirse con la vocación sucesoral, que es el llamamiento de todos aquellos que puedan tener derecho a una herencia de manera testamentaria o intestada, o

en otros términos todos los posibles herederos que por ley son llamados ante el fallecimiento de una persona. Debiendo tenerse en cuenta además, lo dispuesto en el art. 18 inc. 2° LPF, referente a la sucesión procesal.

6.2 Al respecto, se advierte que con la demanda no consta que se haya acreditado legalmente quienes son los herederos del causante señor **********, pues la misma ha sido incoada contra hermanos del causante, sin haberse acreditado la calidad de herederos; circunstancia que tampoco fue advertida y consecuentemente prevenida por el juzgado de primera instancia, ya que ni siquiera al momento de ordenar el emplazamiento se relaciona en qué calidad se ordena emplazar a los expresados demandados, situación que tampoco ha sido advertida por la Cámara de familia, pues en ningún momento hizo valoración alguna al respecto, lo que también es señalado por el recurrente; debiendo añadir que, la parte demandante tampoco refirió conocer o desconocer quienes son los herederos del expresado causante.

No obstante, el tribunal de primera instancia, en la admisión de la demanda ordenó mediante oficio a la Oficialía Mayor de esta Corte, que informará respecto a alguna diligencia seguida del causante, habiendo ésta rendido informe en el sentido de que no aparece que se hayan iniciado diligencias de aceptación de herencia ante tribunal o notario, como tampoco que el referido causante haya otorgado testamento.

Se debe recalcar en este punto, que la anterior circunstancia es un presupuesto procesal que no puede eludirse previo a la admisión de la demanda, ya que constituye un requisito elemental para el desarrollo normal de esta clase de procesos, según se desprende tanto de lo regulado en las disposiciones antes relacionadas, como de lo dispuesto por el art. 125 inciso 2° CF; lo cual está en concordancia con lo regulado por el art. 66 CPCM, que establece que tendrán legitimación para ser partes intervinientes en un proceso los titulares de un derecho o un interés legalmente reconocido en relación con la pretensión.

Lo que implica, que para la válida conformación de la relación jurídico procesal, se requiere la debida legitimación procesal, y que la falta de esta, priva a la parte actora la obtención de una providencia efectiva en cuanto al derecho invocado; no obstante, el juzgador tiene la facultad de examinar dicha consideración legal, a fin de analizar si los intervinientes en el proceso son los titulares de los derechos que se discuten, o si por el contrario, concurre algún defecto que le impida juzgar el objeto procesal.

6.3 En razón de lo anterior, es menester reafirmar de forma concluyente, que en este tipo de procesos, es decir donde se pretenda la declaratoria de la existencia de unión no matrimonial, por el fallecimiento de uno de los convivientes, y con el objeto de establecer debidamente la legitimación pasiva, es necesario saber identificar y diferenciar, si se trata de un heredero o herederos, en los términos previsto por el art. 126 LPF, en relación al art. 1163 CC, y no de presuntos herederos como ha sucedido en el caso de mérito, en la que los expresados demandados, únicamente tienen vocación sucesoria, pero no se ha acreditado en la tramitación del proceso que hayan sido declarados herederos de forma interina o definitiva, por lo que no estarían legitimados como contradictores. Al res-

pecto, se ha expresado por esta Sala, en Casación con ref. 252-CAF-2022, que: *"[...] Debe tomarse en cuenta que, la declaratoria de heredero es imperativa para el despliegue de los efectos jurídicos que conciernan a los derechos generados por el hecho de la muerte de una persona, tal como lo prevé el art. 1162 CC."*

Es preciso aclarar en este punto, que la exigencia o cumplimiento del anterior requisito en ningún momento **constituye o debe constituir un obstáculo para la tramitación de procesos** como el ahora examinado, puesto que la misma ley también establece el supuesto referente a cuando en la demanda se expresare que se desconoce quiénes son los herederos, esto es, que efectivamente se desconozca la identidad de las personas que han aceptado herencia, o conociendo quienes son, se ignora su paradero, en cuyo caso el juez(a) en la admisión de la demanda deberá ordenar el emplazamiento por edicto, según lo previsto en el segundo inciso del art. 126 LPF; es decir, es procedente que dicho emplazamiento sea de forma indeterminada, lo que también constituye un llamamiento general y abstracto a todas las personas que puedan resultar afectadas en sus derechos con la sentencia que se llegare a pronunciar.

Siendo necesario recalcar, que con lo antes dispuesto, se garantiza al conviviente sobreviviente la efectivización de su derecho, pero por otra parte, también se garantiza el debido proceso en su dimensión de protección al derecho de defensa de quienes deban figurar como legítimos contradictores.

Pertinente es señalar, que la protección de los derechos subjetivos de los que es titular una persona, obliga a las autoridades a proceder de conformidad con lo previsto en la ley de la materia, o en su defecto, la aplicación directa de la norma constitucional respectiva, art. 2 CPCM; para el caso, el derecho de audiencia se encuentra enunciado junto con el derecho de defensa, en el art. 4 inc. 2°CPCM, el cual establece que: "cada parte tiene derecho a contar con la oportunidad de exponer su *argumentación y rebatir* la de la contraria".

SI EL JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA ADMITE LA DEMANDA SIN QUE SE HAYA ACREDITADO LA CALIDAD DE HEREDEROS DEL CONVIVIENTE FALLECIDO O EL NOMBRAMIENTO DE UN CURADOR, DICHO ACTO CONSTITUYE UN VICIO QUE ACARREA NULIDAD INSUBSANABLE DE LO ACTUADO

"7. Categóricamente debe advertirse, que el incumplimiento de lo antes referido -no acreditación de la legitimación pasiva-, representa una *transgresión al principio de legalidad*, que indiscutiblemente *afecta el debido proceso*, pues al no subsanarse dicho requisito esencial, constituye un vicio que acarrea la nulidad insubsanable de lo actuado, como ya se ha advertido en precedentes de esta Sala, donde incluso se ha conminado a los jueces de primera instancia, que en casos como el que nos ocupa, no se admita la demanda sin previamente haberse subsanado lo relativo a la calidad de herederos del causante, cuya unión se pretende establecer por el compañero de vida sobreviviente. (sentencias de casación, ref. 611-2001, de fecha 07 de agosto de 2001 y ref. 252-CAF-2021 del 15/03/2022; línea jurisprudencial retomada en decisión de Corte ref. 137-COM-2021, del siete de abril de dos mil veintidós)

Con base a lo antes expuesto, esta Sala concluye que ha existido vulneración del debido proceso, en la que ha incurrido el juzgado de primera instancia con su actuación por haber sustanciado el proceso de que se ha hecho mérito, sin encontrarse debidamente legitimada la parte demandada afectándose la esfera del derecho de audiencia y defensa de esta; y posteriormente, también la Cámara de familia, al no advertir en legal forma tal circunstancia, su actuación ha violentado además, el debido proceso, por transgresión al principio de legalidad y economía procesal, en virtud del desarrollo de una actividad jurisdiccional infructuosa, razón por la que esta Sala considera procedente declarar la nulidad de todo lo actuado en el proceso, debiendo retrotraerse hasta el auto de admisión de la demanda, dictado por el Juzgado Cuarto de Familia de San Miguel, ya que no es posible el aprovechamiento de los actos procesales posteriores, de conformidad a lo regulado en el art. 238 inc. final CPCM."

Sala de lo Civil, número de referencia: 309-CAF-2022, fecha de la resolución: 18/11/2022

DILIGENCIAS DE EJECUCIÓN FORZOSA

IMPROCEDENCIA DEL RECURSO DE CASACIÓN

"Esta Sala advierte que el presente recurso de casación versa contra un auto o resolución de la Cámara de Segunda Instancia, emitida en un proceso de divorcio, en la etapa de ejecución forzosa de la sentencia; respecto de la pensión compensatoria establecida a favor de la señora ********* antes de *******, en la sentencia que decretó el divorcio.

Como es sabido, la normativa de casación tiene carácter tasado respecto de las resoluciones judiciales que pueden ser sujetas de examen por vía casacional; encontrándose dicho medio, delimitado por el tipo de proveídos impugnables y por cierto tipo de procesos, tal como lo establecen los artículos 519 y 520 CPCM. Recalcando en este punto, lo sostenido por esta Sala, en cuanto a la procedencia del recurso en materia de familia, contra sentencias dictadas por las Cámaras de segunda instancia.

No obstante, en el caso que nos ocupa, se debe tener presente que la etapa de ejecución de un proceso, consiste en la tutela judicial efectiva, que no se entiende como en el proceso de declaración o cognición; es decir, no es parte constitutiva del proceso principal, mismo que termina con la sentencia definitiva. Significando ello, que la etapa de ejecución forzosa no forma parte de la fase cognitiva y de condena; pues los actos procesales que se realizan en la misma, tienen como finalidad lograr o satisfacer concretamente el interés de la parte, que ya tiene previamente un derecho cierto, declarado judicialmente.

En ese orden, al estar frente a una impugnación, de una resolución que deriva de una actividad jurisdiccional en la *fase de ejecución*, de acuerdo a nuestro ordenamiento jurídico procesal, tal impugnación objetiva se encuentra fuera del

alcance del conocimiento del tribunal de casación, en atención a su finalidad y naturaleza. Debiendo acotar, que si bien nuestra normativa procesal posibilita el recurso de apelación, durante la tramitación de la ejecución, arts. 584 y 585 CPCM, no se prevé la posibilidad de otro medio impugnativo en esta clase de procedimientos, puesto que sus efectos no son objeto de control por dicha vía recursiva; máxime que, al margen de que el proveído que se recurre no se trata una sentencia, se ha establecido por ley, la inhabilitación de recurso alguno para este tipo de resolución, art. 574 CPCM.

En razón de lo anterior, en el caso analizado, el recurso de casación planteado deviene en improcedente, y así se impone declararlo."

Sala de lo Civil, número de referencia: 195-CAF-2022, fecha de la resolución: 22/06/2022

DILIGENCIAS DE DECLARATORIA DE INCAPACIDAD Y NOMBRAMIENTO DE TUTOR

IMPROCEDENCIA DEL RECURSO DE CASACIÓN, POR NO CAUSAR AUTORIDAD DE COSAS JUZGADA, YA QUE SON SUSCEPTIBLES A MODIFICACIÓN

"La Ley Procesal de Familia no establece el procedimiento a seguir en el caso del recurso de casación, ni los supuestos que lo vuelven procedente. En efecto, el art. 147 de dicha ley prevé únicamente lo siguiente: *"También procederá el recurso de casación el cual se interpondrá y tramitará conforme a las reglas de la casación civil."* Ello nos obliga a determinar, entonces, cuáles son las reglas que establece el actual CPCM en referencia a la casación en materia de familia, pues claramente la LPF hace una remisión directa a la norma procesal civil.

Desde esta óptica, preliminarmente, debemos tomar en cuenta el contenido del art. 212 CPCM, el cual señala que las resoluciones judiciales se clasifican en decretos, autos y sentencias. Los decretos son resoluciones de mero trámite, que impulsan el proceso. Los autos pueden ser simples o definitivos. Los primeros son los que resolverían, por ejemplo, medidas cautelares, incidente o nulidades; y lo segundos, aquellos que le ponen fin al proceso haciendo imposible su continuación. Las sentencias, por su parte, serían las resoluciones que resuelven el fondo del asunto planteado.

En segundo lugar, debemos atenernos a lo que se dispone en el art. 519, numeral 2°, del CPCM, el cual indica que, en materia de familia, admiten casación *"(...) las sentencias correspondientes en los términos que determina la Ley Procesal de Familia."*

Pareciera ser que hay una remisión mutua entre el CPCM y la LPF respecto del recurso de casación, que al final no resuelve el asunto de fondo; es decir, pareciera que, desde la literalidad de las normas, no se da respuesta a la interrogante de ¿Cuáles resoluciones son las que admiten casación en materia de familia?

No obstante ello, tenemos que partir de una interpretación integral de las normas, atendiendo a su finalidad. Es preciso resaltar, en ese sentido, que en materia de familia están excluidas del recurso de casación todas las resoluciones que tengan que ver con los supuestos del art. 83 LPF. Esta norma prevé, de manera expresa, que *"Las sentencias sobre alimentos, cuidado personal, suspensión de autoridad paren tal, tutorías, fijación de regímenes de visitas, deber de convivencia y todas aquellas que no causan cosa juzgada de conformidad al Código de Familia, podrán modifcarse o sustituirse de acuerdo a la Ley."*

Lo anterior, en consonancia con la finalidad e interpretación de las normas de familia que se indica en los arts. 1 y 2 LPF, nos llevan a la idea de la desformalización o desburocratización del proceso de familia que implica priorizar el goce efectivo de los derechos de las partes involucradas, y que por ello busca que los procesos se vean agotados hasta en la fase de apelación. Es decir, hay claramente una apuesta por la economía y celeridad procesal, que implica minimizar los tiempos de respuesta ante el conflicto familiar.

4. Tomando en cuenta la remisión que la Ley Procesal de Familia hace a la casación civil, esta Sala considera que por disposición legal expresa los autos de cualquier clase, no son susceptibles de ser recurridos en casación, de conformidad al referido art. 519 CPCM, ni aquellas pretensiones que de acuerdo al art. 83 LPF, no tengan efectos de cosa juzgada material.

Así pues, en reiterada jurisprudencia, esta Sala ha sostenido que las sentencias pronunciadas en los procesos señalados en el artículo 83 de la Ley Procesal de Familia citado, sólo quedan ejecutoriadas en sentido formal, es decir, que no causan autoridad de cosa juzgada material, en razón que el asunto decidido es susceptible de volverse a discutir en un juicio posterior.

Aunado a lo anterior, el artículo 520 del Código Procesal Civil y Mercantil, manda a rechazar el recurso de casación cuando se interponga contra resolución dictada en asuntos de jurisdicción voluntaria o en procesos especiales, cuando la sentencia de la que se recurre no produzca efectos de cosa juzgada en sentido material.

De manera fundamental, esta Sala advierte de la sola lectura del libelo casacional del licenciado […], que se incumplen los requisitos legales de impugnación del recurso de casación, en virtud que no puede dejar de advertirse que se trata de unas *diligencias de declaratoria de incapacidad y nombramiento de tutor*; es decir de diligencias de jurisdicción voluntaria; y dada la naturaleza de éstas y la existencia de una disposición legal expresa y determinante, éstas no son susceptibles de casación, por cuanto lo resuelto en las mismas no adquiere efectos de cosa juzgada material por cuanto puede ser susceptible de modificación al variar las circunstancias que la motivaron."

Sala de lo Civil, número de referencia: 295-CAF-2021, fecha de la resolución: 02/03/2022

PÉRDIDA DE LA AUTORIDAD PARENTAL

NO SE CONFIGURA LA CAUSAL SEGUNDA CONTEMPLADA EN EL ART. 240 DEL CF, CUANDO EL SUPUESTO ABANDONO POR PARTE DEL PADRE NO HA SIDO CON EL ÁNIMO DE DAÑAR Y AFECTAR MORALMENTE AL NIÑO; YA QUE TAL SITUACIÓN, ES A CONSECUENCIA DE LA RELACIÓN DISFUNCIONAL QUE SOSTIENEN AMBOS PROGENITORES

"Síntesis del caso: La demanda de pérdida de autoridad parental fue presentada por los abogados ya mencionados, en calidad de apoderados de la señora **********, y esta, a su vez, como madre del niño **********, entonces de ocho años de edad; contra el señor **********, padre del niño **********, fundamentándose en la causal segunda del artículo 240 del Código de Familia; es decir, *"cuando abandonaren a alguno de ellos sin causa justificada".*

Se afirma que desde el mes de junio de dos mil dieciocho, el señor ********** no ha tenido ningún contacto directo o indirecto con el niño **********, ni tampoco lo ha buscado ni preguntado por él a la demandante, despreocupándose desde entonces de todas las necesidades afectivas, emocionales y de crianza para el pleno desarrollo del referido niño, únicamente se hace responsable de depositar doscientos dólares mensuales; sin embargo desde ese día no ha tenido contacto alguno con la madre del niño para solicitar ver a su hijo.

El señor **********, contestó la demanda en sentido negativo quien afirma que ha sido la madre del niño **********, la que de manera reiterada y constante ha obstaculizado que pueda visitar, ver y salir con su hijo, estableciéndole condiciones y reglas que ha tenido que aceptar con el objeto de tener una relación padre-hijo; al punto que la madre del niño, hizo intervenir a terceros para determinar si el padre del niño podía ver a su hijo, lo que evidencia la clara intención de no permitirles tener una relación a ambos.

V. Análisis del Recurso de Casación.

El Art. 240 causal 2º CF dispone lo siguiente: "El padre, la madre, o ambos perderán la autoridad parental sobre todos sus hijos, por cualquiera de las causas siguientes [...] 2º Cuando abandonaren a uno de ellos sin causa justificada."

Doctrinariamente, se ha sostenido que la pérdida de la autoridad parental "es una sanción legal, contra el padre o madre, frente a conductas que ponen en grave peligro la formación integral del hijo e incluso la vida misma."

(Zannoni, Eduardo. Derecho Civil. Derecho de Familia. Tomo II. Ed. Astrea, 2002.) Por ello, para la procedencia de la pérdida de la misma, es preciso que se compruebe de forma fehaciente -en el proceso- la causal que se invoca, precisamente, por su carácter sancionador.

Además, se debe tener en cuenta que no hay una definición legal de "abandono" en el Código de Familia, por lo que, a efecto de establecer la pérdida de la autoridad parental, esta Sala estima viable integrar, por analogía, lo dispuesto en el art. 23 inc. 2º de la Ley Especial de Adopciones, la cual dispone respecto a la

situación de abandono de un niño o adolescente, lo siguiente: *"se considera en situación de abandono toda niña, niño o adolescente que se encuentre en una situación de carencia de protección física y emocional, que afecte su desarrollo integral por acción u omisión por parte de sus progenitores y familiares" (sic).*

Por su parte, la doctrina sostiene que abandono *"es el desprendimiento de los deberes del padre o la madre, o sea, la abdicación total de los deberes de crianza, alimentación y educación que impone la ley, y no simplemente el cumplimiento más o menos irregular de los deberes resultantes de la patria potestad" (Belluscio, César Augusto. Manual de Derecho de Familia. Ed. Astrea. Tomo 2, 2004).*

Por tanto, para que exista abandono es menester la existencia de una conducta - acción u omisión- de total desamparo y de absoluta indiferencia o despreocupación frente a la realidad de los hijos; conducta que además debe ser estrictamente maliciosa o voluntaria, sin que existan circunstancias justificantes que hayan podido provocar tal situación.

En el derecho comparado, por ejemplo, en el art. 307 del Código Civil Argentino, numeral 2º se contempla que el padre o madre quedan privados de la patria potestad por el abandono que hiciere de alguno de sus hijos, para aquél que lo haya abandonado, aun cuando quede bajo guarda o sea recogido por el otro progenitor o un tercero.

Lo anterior implica que sólo en casos extremos, y habiéndose agotado todas las vías o alternativas posibles para que se cumpla con los deberes de los padres; y con la prueba fehaciente e irrefutable en los procesos, se accederá a decretar la pérdida de autoridad parental, pues debe considerarse los principios de la Convención sobre los Derechos del Niño, según la cual es prioritario el interés superior del niño; así como su derecho a ser criado en familia, y mantener una relación afectiva con sus familiares, y no desligarse en lo posible de sus vínculos y lazos sanguíneos.

En el caso particular, lo relativo a la interpretación errónea del artículo 240 causal 2º del Código de Familia, los impetrantes en lo esencial, indican que la cámara sentenciadora le ha dado una connotación que no es correcta, pues se analizó desde la óptica jurídica del conflicto entre los progenitores, dejando de lado lo importante, como lo es el claro abandono del señor **********, para con su hijo **********.

Al respecto, se trae a colación lo sostenido por la Cámara en la sentencia de mérito: *"[...] que la disfuncionalidad en la relación de los progenitores del niño **********, ha conllevado a que no se dé una efectiva relación padre-hijo, la cual como sabemos resulta necesaria para el desarrollo integral de la personalidad del niño, como lo establece la ley; dejando claro que tal circunstancia, indiscutiblemente no se ha debido por un marcado desinterés del demandado, o que deliberadamente su actuar ha sido el no relacionarse con su hijo, sino que ha estado en alguna medida propugnando para poder ver a su hijo, no obstante que debemos señalarlo, se le puede achacar que no tomó la iniciativa o ejerció los recursos legales pertinentes, para lograr el establecimiento de un régimen de*

comunicación estadía y trato en legal forma; aspecto que per se, tampoco puede dar lugar para que se le prive de ejercer la autoridad o responsabilidad parental sobre su hijo [...]" (sic).

De igual forma, la Cámara sostiene que en la decisión que se toma en estos casos, debe tenerse presente el interés superior de la niña, niño o adolescente. En el caso específico, si bien el niño **********, no ha gozado plenamente de una relación con su progenitor -por períodos de ausencia-ello le ha generado ciertos síntomas de rechazo hacia su padre y lo ha llevado a que lo exprese, como consta en el acta de escucha de opinión del niño agregada a folios [...] de la tercera pieza. Sin embargo al hacer la ponderación correspondiente, la situación de la relación del niño ********** con su padre, cede ante su derecho de convivir plenamente y mantener relaciones afectivas y trato personal con él (art. 79 LEPINA), lo que debe privilegiarse.

Del análisis expuesto por la Cámara sentenciadora, esta Sala no advierte que se haya realizado una interpretación errónea de la disposición denunciada, como lo pretenden hacer valer los recurrentes. Y es que, por la gravedad de las consecuencias que supone la pérdida de autoridad parental que ejerce un padre o madre sobre su hijo; es necesario que dicha causal esté claramente establecida, a tal grado que no quede duda alguna sobre la desatención y falta de interés del padre o madre que se supone ha cometido el abandono, y ello exige que no existiera justificación alguna o impedimento para que se diera el contacto deseado con su hijo.

Por tanto, en el caso que nos ocupa, se estima que la Cámara sentenciadora no ha cometido yerro alguno al interpretar la causal de abandono que conlleva la pérdida de autoridad parental; por cuanto ha quedado demostrado en el proceso, que el niño ********** y su padre, señor **********, han sostenido una relación afectiva de padre e hijo, incluso desde antes que el niño fuera reconocido voluntariamente por el señor **********.

Sobre este punto, la Cámara sostuvo lo siguiente *"[...] No obstante, al margen de lo anterior, también ha quedado evidenciado, que dicho señor se relacionó afectivamente con su hijo desde su nacimiento y también que aportaba la cantidad de $200.00, en concepto de cuota alimenticia [...]"* (sic).

De igual forma, al analizar en forma minuciosa los autos, se advierten situaciones y hechos que llevan indudablemente a la conclusión, de que la forma de relacionarse y de mantener contacto entre el niño ********** y su progenitor, obedecen, principalmente, a causas que no le son imputables a ninguno de estos sino más bien a la madre del niño; quien ha propiciado las circunstancias para entorpecer la relación y cercanía de su hijo con el señor **********.

En el año dos mil dieciséis el señor **********, reconoció voluntariamente al niño **********. Sin embargo ha quedado establecido en el proceso que, a raíz de la constante obstaculización e imposición de reglas para poder relacionarse con el niño por parte de la señora **********, se truncó la relación y se ha visto deteriorado el vínculo entre el demandado y el niño **********. Incluso, se comprobó, con los mismos medios probatorios de la demandante, que ella decidió

que intervinieran terceras personas para concretar las visitas entre el padre y su hijo, y solucionar lo relativo a las salidas del país del niño con la madre; así como para determinar si el niño debía o no relacionarse con el padre.

Para el caso consta en el proceso y se ratificó con las declaraciones de propia parte de los señores ********** y **********, así como con la prueba testimonial ofrecida por ambas partes, que cuando existió acercamiento del niño ********** con su padre siempre fue acompañado de la niñera del niño, nunca estuvieron solos el padre y el hijo, lo que fue confirmado con la declaración de la misma niñera, de nombre RYHS. Asimismo la señora ********** ha recurrido a la intervención de terceras personas para comunicarse con el demandado, tal es el caso de su amigo del trabajo de nombre JMQA, de quien se desistió de su declaración en el proceso, y del señor HLV, quien fue testigo del demandado, y declaró que él ha sido el intermediario entre la señora ********** y el señor ********** en lo que concierne a las visitas con el niño.

Es por lo anteriormente expuesto, que a criterio de este tribunal no existe el vicio alegado por los impetrantes cuando sostienen que ha existido una errónea interpretación del art. 240 causal segunda del CF, por parte de la Cámara sentenciadora; pues la connotación que el tribunal le dio a esta disposición legal resulta atinada y correcta para este caso en específico, ya que la situación de la relación entre el señor ********** y su hijo **********, ha surgido como consecuencia de la disfuncionalidad de la relación entre los padres del niño.

Asimismo, se advierte que esa relación conflictiva entre los progenitores del niño es la que originó que las visitas fueran restringidas, supervisadas y condicionadas a la voluntad de la madre del niño; así como también un hecho clave que marcó la diferencia en la periodicidad de las visitas fue la noticia relativa a que estaba por nacer otro hijo del demandado, es decir que los hechos que han sucedido y que le han afectado directamente al niño **********, son situaciones que no le son imputables en su totalidad únicamente al padre del niño, sino que son producto de la mala comunicación y la disfuncionalidad de la relación entre sus padres.

Si bien, ha existido esa desaparición del señor ********** en la vida de su hijo, al analizar en su conjunto todo la situación planteada en el proceso por ambas partes, era procedente que el tribunal sentenciador interpretara la norma en el sentido que lo hizo, dado que se vislumbra a todas luces, que el supuesto abandono moral por parte del demandado que se plantea, y las conductas, acciones y hechos narrados no han sido producidos en forma directa por el demandado, ni tampoco existió ánimo de dañar y afectar moralmente al niño; sino que más bien son una consecuencia de la relación disfuncional que sostienen ambos progenitores y que afectan directamente a su hijo **********.

En definitiva, esta Sala concluye que, de acuerdo a las pruebas del proceso de mérito, la Cámara sentenciadora consideró acertadamente que no se configuraba el abandono atribuido al señor **********, y por consiguiente, dicho tribunal ha aplicado e interpretado correctamente el art. 240 ord. 2º del Código de Familia, de modo que no hay lugar a casar la sentencia por dicho motivo."

Sala de lo Civil, número de referencia: 49-CAF-2022, fecha de la resolución: 12/05/2022

PROCESO DE DIVORCIO

NULIDAD DE LAS ACTUACIONES CUANDO LA PARTE DEMANDADA ALEGA EXCEPCIONES Y ÉSTAS NO SON RESUELTAS DENTRO DEL PROCESO

"V. Aclarado lo anterior, luego de analizar los autos del proceso que nos ocupa, advertimos que al contestarse la reconvención interpuesta por el demandado, la apoderada demandante alegó dos excepciones: 1) la de improponibilidad por falta de presupuestos materiales y esenciales en la litis por defectos en la pretensión; y, 2) la oscuridad de la demanda. Ambas pretensiones se tuvieron por interpuestas en el juzgado de primera instancia, sin embargo, no fueron resueltas, a pesar de que al ser una de ellas excepción perentoria, debió ser resuelta en el fallo de la sentencia conforme a lo establecido en el art. 106 LPF.

En la sentencia pronunciada en el juzgado de primera instancia, se omitió la resolución de ambas excepciones; y dicha omisión constituye una irregularidad procesal que da lugar a la invalidez de lo que sea su consecuencia, puesto que con ello es evidente la vulneración del derecho de defensa y contradicción de la parte que lo alegó."

CUANDO EN LOS PROCESOS HAY MENORES DE EDAD INVOLUCRADOS, LOS JUZGADORES TIENE LA OBLIGACIÓN DE BRINDARLES LA OPORTUNIDAD DE OPINAR Y PRONUNCIARSE EN AQUELLAS CIRCUNSTANCIAS QUE ATAÑEN A SUS DERECHOS, CASO CONTRARIO PROCEDERÁ DECLARAR LA NULIDAD DE LAS ACTUACIONES

"Asimismo, consta que, en el presente proceso de divorcio, los cónyuges procrearon dos hijas, ******** y ********, ambas de apellidos **********; de nueve y cinco años de edad respectivamente, situación que ha quedado debidamente acreditado con las respectivas certificaciones de sus partidas de nacimiento, que corren agregadas al proceso.

En ese orden, consta en el auto de admisión de la demanda, específicamente en la resolución de folios […], que el juzgado de primera instancia resolvió citar a las niñas ******** y ********, para que fueran escuchadas por el juez de familia. Sin embargo, no consta que haya señalado ni día ni hora para tal efecto, y a lo largo del proceso no se agregó acta alguna en la que conste que éstas fueron oídas de conformidad a la ley.

Esto es, conforme a lo estatuido en los arts. 12 de la Convención Sobre los Derechos del Niño, art. 7 literal j) LPF, y arts. 51 literal "k" y 94 de la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia (LEPINA); y en vista de que en la parte adjetiva de este último cuerpo legal, se establece específicamente en el art. 223 inc. 1° lo siguiente: "La violación del derecho a opinar y ser oído de la niña, niño o adolescente producirá la invalidez de lo actuado y todo lo que sea su consecuencia inmediata; salvo que ella sea expresamente consentida o no le produzca perjuicios". (sic).

Cabe aclarar que la LEPINA en el artículo 3 inc. 2° establece: “Para los efectos de esta Ley, niña o niño es toda persona desde el instante mismo de la concepción hasta los doce años cumplidos, y adolescente es la comprendida desde los doce años cumplidos hasta que cumpla los dieciocho años de edad” (sic).

En la Ley Procesal de Familia, por su parte, se establece que se deberá oír al menor cuando hubiere cumplido doce años de edad, en todos los procesos y diligencias que le afecten; y que antes de dicha edad, el Juez tendrá contacto con el menor y de ser posible dialogará con él. (art.7 lit j) LPF).

Nótese que la redacción de La Ley Procesal de Familia en relación con este punto, aún conserva la palabra “menor” para referirse a aquellos que aún no alcanzaban la mayoría de edad; término que actualmente está en desuso desde la entrada en vigencia de la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia, en el año dos mil nueve; en la que se especifica que deben ser llamados niños, niñas y/ o adolescentes.

Todo esto tiene su origen en el art. 12 de la Convención Sobre los Derechos del Niño, el cual preceptúa: “1. Los Estados Partes garantizarán al niño que esté en condiciones de formarse un juicio propio el derecho de expresar su opinión libremente en todos los asuntos que afectan al niño, teniéndose debidamente en cuenta las opiniones del niño, en función de la edad y madurez del niño. 2. Con tal fin, se dará en particular al niño oportunidad de ser escuchado en todo procedimiento judicial o administrativo que afecte al niño, ya sea directamente o por medio de un representante o de un órgano apropiado, en consonancia con las normas de procedimiento de la ley nacional” (sic).

Cabe aclarar que nuestra ley nacional, en este caso, a la presente fecha es la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia, en consecuencia, debemos apegarnos a las disposiciones legales que ésta subraya al respecto; por lo que, en ese sentido no debe esperarse que se cumplan los doce años de edad para efectos de que los hijos menores de dieciocho años involucrados en los procesos sean oídos por los jueces de conformidad a la ley.

Además, es importante mencionar, que esta omisión procesal, así como la de falta de resolución de la excepción de improponibilidad de la pretensión, tiene estrecha relación con lo establecido en el art. 232 literal c) CPCM; por cuanto ha violentado la garantía de audiencia y de defensa de estas niñas en el proceso de que se trata, y de las partes procesales en lo relativo a la pretensión del divorcio.

Estas situaciones no fueron advertidas por el juez de la causa, sin embargo, la Cámara sentenciadora sí advirtió estas omisiones y dejó constancia de ello en el numeral 3) literal b y c de la sentencia que hoy se impugna; pero eludió declarar la nulidad de lo actuado como corresponde, en función de su competencia y facultades de tribunal de segunda instancia, cuando se verifiquen tales irregularidades procesales.

Grave actuación procesal por parte de la Cámara sentenciadora, por cuanto estas omisiones encaminan sin lugar a dudas a declarar la nulidad de lo actuado en el proceso, dada la evidente vulneración de los derechos y garantías constitucionales que hemos mencionado.

VI. Advertimos que se han transgredido por parte del Juzgado de Familia de San Francisco Gotera y de la Cámara de Familia de la Sección de Oriente, el debido proceso y el derecho de audiencia y defensa consagrado en el art. 11 de la Constitución de la República (en adelante, Cn), en virtud del cual, se exige que antes de proceder a limitar la esfera jurídica de una persona o a privársele por completo de un derecho, debe ser oída y vencida con arreglo a las leyes.

La protección de los derechos subjetivos de los que es titular una persona, obliga a las autoridades a proceder de conformidad con lo previsto en la ley de la materia, o en su ausencia, la aplicación directa de la disposición constitucional. Para el caso, el derecho de audiencia se encuentra integrado junto con el derecho de defensa, en nuestro ordenamiento procesal civil y mercantil vigente, en el art. 4 inc. 2°, el cual establece que: *"cada parte tiene derecho a contar con la oportunidad de exponer su argumentación y rebatir la de la contraria"*

Al respecto, la Sala de lo Constitucional ha sostenido que: "[...] Sucede entonces que el derecho de audiencia puede verse desde un doble enfoque a saber: desde la inexistencia de proceso o procedimiento previo, o desde el incumplimiento de formalidades de trascendencia constitucional necesarias al interior del mismo. En el primer supuesto, la cuestión queda clara en tanto que la inexistencia de proceso o procedimiento dá lugar, habiendo existido la necesidad de seguirlo, a la advertencia directa e inmediata de la violación a la Constitución. En el segundo supuesto, sin embargo, necesario es analizar el porqué de la vulneración alegada pese a la existencia de un proceso, el fundamento de la violación y específicamente el acto que se estima fue la concreción de ella [...]" (sic), (proceso de amparo 368-98, de las doce horas con treinta minutos del día veinticinco de febrero del año dos mil).

Para el caso en particular, es necesario hacer referencia al segundo supuesto, cuando la violación acontece al interior de un proceso, esta puede ser por acción o por omisión del juzgador, en cuyo caso, regularmente sucede por el incumplimiento de las formalidades e incluso esencialidades exigidas para la realización de los actos, como puede ser la inobservancia de disposiciones legales en las que se torna obligatorio declarar la nulidad del acto en el caso de no cumplirse lo que se preceptúa en ellas; como lo es el incumplimiento del art. 223 de la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia y 106 LPF.

Por consiguiente, esta Sala considera que se configura la vulneración al derecho de audiencia y de defensa en el presente caso, con lo cual también vulneró su derecho a la protección jurisdiccional.

VII. En ese sentido, esta Sala concluye que debe declararse la nulidad atendiendo a los principios de especificidad y trascendencia, tal como lo regula el Código Procesal Civil y Mercantil. Para el caso de mérito, resulta aplicable lo relativo al art. 232 lit. c) del cuerpo legal referido, al haberse infringido el derecho de audiencia y de defensa de las partes y de las hijas procreadas en el matrimonio, en los términos antes dichos.

Bajo dicha premisa, deberá anularse todo lo actuado en el proceso de divorcio de los señores ******** y ********, desde la audiencia preliminar del proceso, cual es la fase procesal que faculta al juzgador a la resoluciones de las referidas

excepciones y el saneamiento de medidas, así como todo lo relativo a la admisión de la prueba, dándose cumplimiento a lo observado por esta Sala en lo concerniente al derecho de las niñas ******** y ********, ambas de apellidos **********, y la fijación definitiva del contradictorio en el proceso; debiéndose reponer las actuaciones viciadas por un nuevo juez de familia, conforme a lo establecido en los arts. 161 inc. 2° y 162 LPF.

En ese sentido debe entenderse que queda sin efecto la sentencia impugnada y dictada por la Cámara de Segunda Instancia en los términos arriba expuestos; y por ende, esta Sala no entrará al examen de fondo del recurso de casación interpuesto y admitido."

Sala de lo Civil, número de referencia: 271-CAF-2021, fecha de la resolución: 21/04/2022

RECURSO DE CASACIÓN

IMPROCEDENCIA CONTRA LA RESOLUCIÓN DICTADA EN SEGUNDA INSTANCIA QUE CONFIRMA LA DECLARATORIA DE INADMISIBILIDAD DE LA DEMANDA

"Esta Sala precisa aclarar que si bien, con anterioridad se ha resuelto que en los autos o sentencias interlocutorias dictados en apelación procede el recurso de casación, en precedentes recientes como los de referencia 190-CAF-2020 y 295-CAF-2019, se ha reinterpretado conforme a los parámetros constitucionales, la aplicación de lo previsto en el art. 519 ord. 2° CPCM en relación a lo dispuesto en el art. 147 LPF.

En dichos precedentes, se consideró que la Ley Procesal de Familia no establece el procedimiento a seguir en el caso del recurso de casación, ni los supuestos que lo vuelven procedente.

En efecto, el art. 147 de dicha ley prevé únicamente lo siguiente: *"También procederá el recurso de casación el cual se interpondrá y tramitará conforme a las reglas de la casación civil."* Ello nos obliga a determinar, entonces, cuáles son las reglas que establece el actual CPCM en referencia a la casación en materia de familia, pues claramente la LPF hace una remisión directa a la norma procesal civil.

Desde esta óptica, en primer lugar, debe tomarse en cuenta el contenido del art. 212 CPCM, el cual señala que las resoluciones judiciales se clasifican en decretos, autos y sentencias. Los decretos son resoluciones de mero trámite, que impulsan el proceso. Los autos pueden ser simples o definitivos. Los primeros son los que resolverían, por ejemplo, medidas cautelares, incidente o nulidades; y lo segundos, aquellos que le ponen fin al proceso haciendo imposible su continuación. Las sentencias, por su parte, serían las resoluciones que resuelven el fondo del asunto planteado.

En segundo lugar, debemos atenernos a lo que se dispone en el art. 519, número 2, del CPCM, el cual indica que, en materia de familia, admiten casación *"(...) las sentencias correspondientes en los términos que determina la Ley Procesal de Familia."*

Pareciera ser que hay una remisión mutua entre el CPCM y la LPF respecto del recurso de casación, que al final no resuelve el asunto de fondo; es decir, pareciera que, desde la literalidad de las normas, no se da respuesta a la interrogante de ¿Cuáles resoluciones son las que admiten casación en materia de familia?

No obstante ello, tenemos que partir de una interpretación integral de las normas, atendiendo a su finalidad. Es preciso resaltar, en ese sentido, que en materia de familia están excluidas del recurso de casación todas las resoluciones que tengan que ver con los supuestos del art. 83 LPF. Esta norma prevé, de manera expresa, que *"Las sentencias sobre alimentos, cuidado personal, suspensión de autoridad parental, tutorías, fijación de regímenes de visitas, deber de convivencia y todas aquellas que no causan cosa juzgada de conformidad al Código de Familia, podrán modificarse o sustituirse de acuerdo a la Ley."*

Lo anterior, en consonancia con la finalidad e interpretación de las normas de familia que se indica en los arts. 1 y 2 LPF, nos llevan a la idea de la desformalización o desburocratización del proceso de familia que implica priorizar el goce efectivo de los derechos de las partes involucradas, y que por ello busca que los procesos se vean agotados hasta en la fase de apelación. Es decir, hay claramente una apuesta por la economía y celeridad procesal, que implica minimizar los tiempos de respuesta ante el conflicto familiar.

Tomando en cuenta la remisión que la Ley Procesal de Familia, hace a la casación civil, esta Sala considera que por disposición legal expresa los autos de cualquier clase, no son susceptibles de ser recurridos en casación, de conformidad al referido art. 519 CPCM.

En el caso que nos ocupa, se trata de un proceso de declaratoria judicial de paternidad post-mortem, cuya demanda fue declarada inadmisible en primera instancia por cuanto no se subsanaron las prevenciones que le fueron formuladas al abogado demandante so pena de declarar la inadmisibilidad de la misma; lo que propició que apelara de lo resuelto en primera instancia. La Cámara de Familia competente, por su parte, confirmó la inadmisibilidad de la misma, lo que ha originado que se recurra en casación.

En razón de lo anterior, esta Sala advierte que desde cualquier punto de vista la resolución impugnada se trata de un auto definitivo, en el que se ha resuelto respecto de la inadmisibilidad de la demanda, y no se trata de una sentencia en la que se haya resuelto el fondo del asunto. En ese sentido, los efectos jurídicos del pronunciamiento en ambas instancias, dejan a salvo el derecho de la parte actora para intentar nuevamente su acción, cumpliendo con las formalidades requeridas para la interposición de la demanda.

Por tanto, se concluye que la resolución de la Cámara de segunda instancia, de la cual se recurre, no reviste ninguna de las dos calidades exigidas por el art. 519 CPCM, en su ordinal primero pues no se trata de una sentencia, sino que constituye por su contenido resolutivo la calidad de auto.

En definitiva, el auto pronunciado por la Cámara sentenciadora, en el caso particular, desde ninguna óptica es susceptible de conocerse mediante el recurso de casación, ya que no puede considerarse como una sentencia, tal como lo prescribe el numeral segundo del art. 519 CPCM; y en consecuencia deviene en improcedente y así se impone declararlo."

Sala de lo Civil, número de referencia: 58-CAF-2022, fecha de la resolución: 16/03/2022

RECURSO DE REVISIÓN

SU CONOCIMIENTO SÓLO ES POSIBLE RESPECTO DE SENTENCIAS QUE ADQUIRIEREN ESTADO DE COSA JUZGADA MATERIAL, Y QUE FUERON DICTADAS EN PROCESOS TRAMITADOS A PARTIR DE LA VIGENCIA DEL CÓDIGO PROCESAL CIVIL Y MERCANTIL

"El licenciado […], solicita revisión de la sentencia pronunciada por el Juzgado Segundo de Familia de San Salvador, a las nueve horas quince minutos del catorce de mayo de dos mil ocho, en el proceso de alimentos promovido por la señora *********, en representación de su hija **********, por medio de su apoderado judicial doctor […]. Sostiene que su representado tuvo conocimiento de dicho proceso hasta el año dos mil quince, pues en el proceso fue emplazado por medio de edicto, al haberse expresado que era de paradero ignorado; fundamenta su solicitud de manera general en los arts. 540 y 543 CPCM, señalando a continuación disposiciones atinentes al emplazamiento por medio de edictos. Es decir, no señala expresamente motivos generales o específicos, contemplados en los arts. 541 y 542 CPCM.

1. En ese orden, de acuerdo a la regulación de este medio impugnativo, resulta claro que, para su procedencia, el mismo debe fundamentarse en la eventual existencia de alguno de los motivos generales o específicos establecidos en los arts. 541 y 542 CPCM, lo cual en el presente caso no realiza el impugnante; esto es, incumple un requisito indispensable al no fundamentar su petición en la existencia de alguno de los motivos para que proceda la revisión intentada.

Al margen de la consecuencia que generaría lo anterior, es pertinente recalcar además que esta Sala ha señalado en precedentes con referencia 4-REC-2015 y 2-REC-2018, entre otros, que dicho recurso no es de aplicación general a todas las sentencias dictadas por el órgano jurisdiccional, indicándose de manera puntual que su conocimiento sólo es posible respecto de sentencias que adquirieren estado de cosa juzgada material y que fueron dictadas en procesos tramitados a partir de la vigencia del Código Procesal Civil y Mercantil; esto es, desde el uno de julio de dos mil diez. Adicionalmente, debe cumplirse con los plazos establecidos para su interposición de conformidad con los artículos 544 al 546 CPCM.

Al respecto se advierte, que la sentencia de la cual se pretende su revisión fue dictada por el Juzgado Segundo de Familia de San Salvador en el año dos mil ocho; y el señor **********, demandado por cuota de alimentos, tuvo conocimiento del proceso (y de la condena de la sentencia) en el año dos mil quince; por lo que se trata de una sentencia dictada en un proceso antes de la vigencia del Código Procesal Civil y Mercantil, y de conformidad a lo previsto en el art. 706 CPCM, no es posible el conocimiento del presente medio impugnativo."

REQUIERE PARA SU PROCEDENCIA QUE SE RECURRA DE UNA SENTENCIA QUE TENGA EFECTOS DE COSA JUZGADA

"Asimismo, resulta pertinente aclarar que, de acuerdo a lo regulado en el inciso 2° del art. 540 CPCM, no *"procederá la revisión de las sentencias firmes que, por disposición legal, carezcan de efectos de cosa juzgada."* De manera que, aun si el caso de mérito se hubiese sido tramitado de acuerdo a la normativa vigente, tampoco procederá el recurso de revisión si se tratara de sentencias que no adquieren efecto de cosa juzgada sustancial, como es el caso de las resoluciones cuyos supuestos los contempla el art. 83 LPF."

Sala de lo Civil, número de referencia: 4-REF-2022, fecha de la resolución: 15/08/2022

RESOLUCIONES PRONUNCIADAS EN LA FASE DE EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA

LOS ACTOS PROCESALES QUE SE REALIZAN EN LA FASE DE EJECUCIÓN TIENEN COMO FINALIDAD LOGRAR O SATISFACER CONCRETAMENTE EL INTERÉS DE LA PARTE, QUE YA TIENE PREVIAMENTE UN DERECHO CIERTO DECLARADO JUDICIALMENTE

"Respecto al análisis inicial del recurso, esta Sala hace las siguientes *CONSIDERACIONES:*

Esta Sala advierte que el presente recurso de casación versa contra una resolución de la Cámara de Segunda Instancia, emitida en un *proceso de divorcio, en la etapa de ejecución forzosa* de la sentencia, pues se ha solicitado el cumplimiento del pago de la cuota de alimentos establecida a favor del adolescente **********, y a cargo del señor **********, en la sentencia que decretó el divorcio.

Se debe tener presente, que la normativa de casación tiene carácter tasado respecto de las resoluciones judiciales que pueden ser sujetas de examen por vía casacional; encontrándose dicho medio delimitado por el tipo de proveídos impugnables y por cierto tipo de procesos, tal como lo establecen los artículos 519 y 520 CPCM. Recalcando en este punto, lo sostenido por esta Sala, en cuanto a la procedencia del recurso en materia de familia, contra sentencias dictadas por las Cámaras de segunda instancia.

Es de acotar, que el caso que nos ocupa, se encuentra en fase de ejecución de la sentencia, en razón de lo cual debe tenerse presente que la etapa de eje-

cución de un proceso, consiste en la tutela judicial efectiva, que no se entiende como en el proceso declarativo o de cognición; es decir, no es parte constitutiva del proceso principal, mismo que termina con la sentencia definitiva. Significando ello, que esta etapa -ejecución forzosa- no forma parte de la fase cognitiva y de condena; pues los actos procesales que se realizan en la misma, tienen como finalidad lograr o satisfacer concretamente el interés de la parte, que ya tiene previamente un derecho cierto, declarado judicialmente."

LAS RESOLUCIONES PRONUNCIADAS EN LA FASE DE EJECUCIÓN NO ADMITEN CASACIÓN

"En ese orden de ideas, al estar frente a una impugnación, de una resolución que deriva de una actividad jurisdiccional en la fase de ejecución, de acuerdo a nuestro ordenamiento jurídico procesal, tal impugnación objetiva se encuentra fuera del alcance del conocimiento del tribunal de casación, en atención a su finalidad y naturaleza.

Cabe aclarar, que si bien nuestra normativa procesal posibilita el recurso de apelación, durante la tramitación de la ejecución, arts. 584 y 585 CPCM, no se prevé la posibilidad de otro medio impugnativo en esta clase de procedimientos, pues sus efectos no son objeto de control por dicha vía recursiva; máxime aun, de que el proveído que se recurre no se trata de una sentencia, sino de un auto que ha determinado una medida cautelar, a efecto de garantizar el cumplimiento de la obligación alimentaria.

En razón de lo anterior, en el caso analizado, el recurso de casación planteado es evidentemente improcedente, y así se impone declararlo."

Sala de lo Civil, número de referencia: 349-CAF-2022, fecha de la resolución: 07/12/2022

SALA DE LO CIVIL

FACULTAD PARA DECLARAR DE MANERA OFICIOSA CUALQUIER NULIDAD INSUBSANABLE

"El licenciado […], interpuso recurso de casación por los motivos siguientes: 1. motivo de fondo: infracción de ley, por errónea aplicación de ley, y como preceptos infringidos los arts. 106 numeral 3° CF y 416 CPCM; 2. Motivo de fondo: infracción de ley, por inaplicación de ley, y como preceptos infringidos el art. 3 literal e) LPF; 3. Motivo de forma: quebrantamiento de las formas esenciales del proceso, por el submotivo contemplado en el art. 523 numeral 14 CPCM, por existir quebrantamiento de requisitos externos de la sentencia.

El referido recurso fue admitido por esta Sala mediante auto pronunciado a las diez horas del veintitrés de febrero de dos mil veintidós, por el motivo de

fondo de infracción de ley por errónea aplicación de los arts. 106 numeral 3° CF y 416 CPCM; y por el motivo de fondo de infracción de ley por inaplicación del art. 3 literal e) LPF.

No obstante haber sido legalmente notificada de dicha resolución, la parte recurrida no hizo uso de su derecho de alegatos, como se constata en el acta agregada a folios [...] de este incidente.

III. Previo a pronunciarnos sobre el análisis de los submotivos de casación admitidos, es necesario advertir que, al revisar minuciosamente los autos, específicamente, las actuaciones desarrolladas en primera instancia, no podemos perder de vista las irregularidades procesales cometidas en la tramitación del proceso previo a la sentencia, lo que da lugar a que esta Sala estime la invalidez de las actuaciones procesales y todo lo que sea su consecuencia inmediata.

Lo anterior, debido a que el control de legalidad de las actuaciones por parte de esta sede, abarca todo el escenario en el cual se ha ventilado la pretensión, por lo que tal como se ha dicho antes, cualquier irregularidad procedimental puede ser advertida a raíz de las alegaciones que realicen las partes en el recurso; o bien oficiosamente por parte de esta Sala, puesto que aún y cuando se haya admitido el recurso de casación y se encuentre en etapa de dictar sentencia esta Sala, puede de manera oficiosa declarar cualquier una nulidad insubsanable.

Lo anterior, tiene su fundamento legal en lo previsto en el art. 235 CPCM, el cual estipula que: *"Cuando la ley expresamente califique de insubsanable una nulidad, ésta podrá ser declarada, de oficio o a petición de parte, en cualquier estado del proceso".*

Al respecto, cuando la ley se refiere a que la nulidad puede ser declarada en cualquier estado del proceso, esto incluye la segunda instancia y este grado de conocimiento, ya que la interposición de un recurso suspende la formación de la cosa juzgada tanto formal como material, y por lo tanto, las fases impugnativas forman uno de los estados del proceso que por dicha razón, no ha finalizado."

Sala de lo Civil, número de referencia: 271-CAF-2021, fecha de la resolución: 21/04/2022

USO DE LA VIVIENDA FAMILIAR

EL RECURSO DE CASACIÓN, POR SU FINALIDAD Y NATURALEZA, NO CONCIBE LA IMPUGNACIÓN EN ESTA CLASE DE PROCEDIMIENTOS, PUESTO QUE SUS EFECTOS NO SON OBJETO DE CONTROL POR DICHA VÍA RECURSIVA

"La Ley Procesal de Familia no establece el procedimiento a seguir en el caso del recurso de casación, ni los supuestos que lo vuelven procedente. En efecto, el art. 147 de dicha ley prevé únicamente lo siguiente: "También procederá el recurso de casación el cual se interpondrá y tramitará conforme a las reglas de la casación civil." Ello nos obliga a determinar, entonces, cuáles son las reglas que establece el actual CPCM en referencia a la casación en materia de familia, pues claramente la LPF hace una remisión directa a la norma procesal civil.

Desde esta óptica, preliminarmente, debemos tomar en cuenta el contenido del art. 212 CPCM, el cual señala que las resoluciones judiciales se clasifican en decretos, autos y sentencias. Los decretos son resoluciones de mero trámite, que impulsan el proceso. Los autos pueden ser simples o definitivos. Los primeros son los que resolverían, por ejemplo, medidas cautelares, incidente o nulidades; y lo segundos, aquellos que le ponen fin al proceso haciendo imposible su continuación. Las sentencias, por su parte, serían las resoluciones que resuelven el fondo del asunto planteado.

En segundo lugar, debemos atenernos a lo que se dispone en el art. 519 numeral 2° del CPCM, el cual indica que, en materia de familia, admiten casación "(...) las sentencias correspondientes en los términos que determina la Ley Procesal de Familia."

Pareciera ser que hay una remisión mutua entre el CPCM y la LPF respecto del recurso de casación, que al final no resuelve el asunto de fondo; es decir, pareciera que, desde la literalidad de las normas, no se da respuesta a la interrogante de ¿Cuáles resoluciones son las que admiten casación en materia de familia?

No obstante ello, tenemos que partir de una interpretación integral de las normas, atendiendo a su finalidad. Es preciso resaltar, en ese sentido, que en materia de familia están excluidas del recurso de casación todas las resoluciones que tengan que ver con los supuestos del art. 83 LPF. Esta norma prevé, de manera expresa, que "Las sentencias sobre alimentos, cuidado personal, suspensión de autoridad parental, tutorías, fijación de regímenes de visitas, deber de convivencia y todas aquellas que no causan cosa juzgada de conformidad al Código de Familia, podrán modificarse o sustituirse de acuerdo a la Ley."

Lo anterior, en consonancia con la finalidad e interpretación de las normas de familia que se indica en los arts. 1 y 2 LPF, nos llevan a la idea de la desformalización o desburocratización del proceso de familia que implica priorizar el goce efectivo de los derechos de las partes involucradas, y que por ello busca que los procesos se vean agotados hasta en la fase de apelación. Es decir, hay claramente una apuesta por la economía y celeridad procesal, que implica minimizar los tiempos de respuesta ante el conflicto familiar.

4. Tomando en cuenta la remisión que la Ley Procesal de Familia hace a la casación civil, esta Sala considera que por disposición legal expresa los autos de cualquier clase, no son susceptibles de ser recurridos en casación, de conformidad al referido art. 519 CPCM, ni aquellas pretensiones que de acuerdo al art. 83 LPF, no tengan efectos de cosa juzgada material.

De manera fundamental, esta Sala advierte de la sola lectura del libelo casacional de los licenciados [...], que se incumplen los requisitos legales de interposición del recurso de casación, en virtud de que los impetrantes debieron tomar en cuenta que el proceso de que se trata es una modificación de sentencia de divorcio, para el cese del uso de la vivienda familiar; y dada la naturaleza de dicho proceso, éste no es susceptible de casación; por cuanto no tiene efectos de cosa juzgada material, y es de aquellos que se contemplan en el art. 83 LPF.

En ese sentido, el recurso de casación por su finalidad y naturaleza, no concibe la impugnación en esta clase de procedimientos, puesto que sus efectos no son objeto de control por dicha vía recursiva, y consecuentemente, el mismo deviene en improcedente."

Sala de lo Civil, número de referencia: 253-CAF-2021, fecha de la resolución: 19/01/2022

VOTO CONCURRENTE DE LA MAGISTRADA DAFNE YANIRA SÁNCHEZ DE MUÑOZ

ALIMENTOS

IMPROCEDENCIA CONTRA LA SENTENCIA QUE MODIFICÓ LA DECISIÓN PRONUNCIADA EN PRIMERA INSTANCIA, EN LO RELATIVO A LA PRESTACIÓN DE ALIMENTOS Y AL PAGO DE VIVIENDA; NO POR LA NATURALEZA DE LA RESOLUCIÓN, SINO POR EL CONTENIDO DE LO RESUELTO

"Dafne Yanira Sánchez de Muñoz, magistrada de la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia, en el *incidente de casación 71-CAF-2022*, emito voto concurrente por estar de acuerdo con la decisión que precede, no así con algunos de sus argumentos, según lo expongo a continuación:

En el auto que antecede, se ha declarado improcedente el recurso de casación. Y entre los fundamentos que sustentan dicha decisión, se plantea lo siguiente: "Tomando en cuenta la remisión que la Ley Procesal de Familia, hace a la casación civil, esta Sala considera que por disposición legal expresa los autos de cualquier clase, no son susceptibles de ser recurridos en casación, de conformidad al referido art. 519 CPCM".

Sin embargo, soy del criterio de que, con el fin de tutelar el derecho a recurrir, como manifestación del derecho a un proceso constitucionalmente configurado y este, a su vez, como manifestación del derecho fundamental a la protección jurisdiccional, y con el propósito de garantizar el principio de igualdad (ya que en otras materias procede el recurso de casación contra determinados autos), en ciertos casos, diferentes al que ahora nos ocupa, procede el recurso de casación contra determinados autos pronunciados en segunda instancia en el ámbito del derecho de familia.

Ahora bien, en el presente caso el recurso de casación es improcedente por cuanto la decisión impugnada es la sentencia que modificó la *sentencia* pronunciada en primera instancia, en lo relativo a la prestación de alimentos y al pago de vivienda. En ese sentido, la decisión impugnada no produce efectos de cosa juzgada material. Por tanto, el recurso de casación contra la referida sentencia es improcedente, no por la naturaleza de la resolución, sino por el contenido de lo resuelto (que no adquiere efectos de cosa juzgada).

En consecuencia, acompaño la decisión adoptada, pero no en cuanto a los argumentos relacionados con lo ya expuesto.

Así mi voto."

Sala de lo Civil, número de referencia: 71-CAF-2022, fecha de la resolución: 23/03/2022

VOTO CONCURRENTE DE LA MAGISTRADA DAFNE YANIRA SÁNCHEZ DE MUÑOZ

RECURSO DE CASACIÓN

IMPROCEDENCIA CONTRA LA RESOLUCIÓN DICTADA EN SEGUNDA INSTANCIA, QUE CONFIRMA LA DECLARATORIA DE INADMISIBILIDAD DE LA DEMANDA, NO POR LA NATURALEZA DE LA RESOLUCIÓN (AUTO), SINO POR EL CONTENIDO DE LO RESUELTO (QUE NO ADQUIERE EFECTOS DE COSA JUZGADA)

"Dafne Yanira Sánchez de Muñoz, magistrada de la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia, en el incidente de casación 58-CAF-2022, emito voto concurrente por estar de acuerdo con la decisión que precede, no así con algunos de sus argumentos, según lo expongo a continuación:

En la resolución que antecede, se ha declarado improcedente el recurso de casación interpuesto contra la providencia que confirmó la decisión que en primera instancia declaró inadmisible la demanda. Y entre los fundamentos que sustentan dicha decisión, se sostiene lo siguiente: "(...) esta Sala advierte que desde cualquier punto de vista la resolución impugnada se trata de un auto definitivo, en el que se ha resuelto respecto de la inadmisibilidad de la demanda, y no se trata de una sentencia en la que se haya resuelto el fondo del asunto (...). Por tanto, se concluye que la resolución de la Cámara de segunda instancia, de la cual se recurre, no reviste ninguna de las dos calidades exigidas por el art. 519 CPCM, en su ordinal primero pues no se trata de una sentencia, sino que constituye por su contenido resolutivo la calidad auto (...), en consecuencia, deviene en improcedente y así se impone declararlo".

En esencia, en el auto que antecede, esta Sala ha intentado justificar que, en materia de familia, el recurso de casación procede únicamente en contra de sentencias y no en contra de autos simples o definitivos. Sin embargo, como lo he sostenido en otros casos, soy del criterio de que, con el fin de tutelar el derecho a recurrir, como manifestación del derecho a un proceso constitucionalmente configurado y este, a su vez, como manifestación del derecho fundamental a la protección jurisdiccional, y con el propósito de garantizar el principio de igualdad (ya que en otras materias procede el recurso de casación contra determinados autos), desde un punto de vista constitucional, el recurso de casación procede contra determinados autos pronunciados en segunda instancia dentro del ámbito del derecho de familia. Por tanto, disiento con la posición antes mencionada, según la cual, en materia de familia, "los autos de cualquier clase" no son susceptibles de ser recurridos en casación.

Ahora bien, soy categórica al afirmar que la providencia judicial dictada en segunda instancia, mediante la cual se confirma, revoca, anula o reforma una decisión pronunciada en primera instancia, constituye una sentencia. Esto es así por cuanto el carácter de dicho proveído no viene determinado por su capacidad de resolver la pretensión incoada en la demanda (como lo hace ver esta Sala, al decir que no resuelve el fondo del asunto), sino porque resuelve la pretensión ejercida en el respectivo recurso de apelación. La resolución dictada por un tribunal de segunda instancia, con el cual se resuelve el recurso de apelación debidamente admitido, ya sea confirmando, revocando, anulando o reformando la resolución dictada en primera instancia, constituye, sin duda alguna, una sentencia definitiva dentro del incidente apelación. No es un requisito indispensable que la resolución del tribunal de alzada aluda a la pretensión ejercida en la demanda, para que goce del estatuto de la sentencia. Más bien, lo que corresponde es que resuelva el recurso de apelación debidamente admitido, que es, precisamente, la pretensión en segunda instancia. Por tanto, no comparto la calificación que ha hecho esta Sala sobre la naturaleza jurídica de la resolución impugnada.

Ahora bien, la decisión impugnada confirmó el auto dictado en primera instancia, mediante el cual se declaró inadmisible la demanda (por no haberse subsanado las prevenciones), la cual, a su vez, dejó expedito el derecho de volver a promover la pretensión (por ser imprescriptible). Por tanto, el recurso de casación contra la referida decisión es improcedente, no por la naturaleza de la resolución (“auto simple”, como lo sostiene este Sala), sino por el contenido de lo resuelto (que no adquiere efectos de cosa juzgada).

En consecuencia, acompaño la decisión adoptada, pero no en cuanto a los argumentos relacionados con lo ya expuesto.

Así mi voto.”

Sala de lo Civil, número de referencia: 58-CAF-2022, fecha de la resolución: 16/03/2022

VOTO CONCURRENTE DE LA MAGISTRADA DAFNE YANIRA SÁNCHEZ DE MUÑOZ

PROCESOS DE FAMILIA

EL QUE UN JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA NO RESUELVA SOBRE LAS EXCEPCIONES PLANTEADAS EN EL PROCESO, NO CONSTITUYE UN MOTIVO PARA QUE LA SALA DE LO CIVIL DECLARE DE OFICIO LA NULIDAD DE LO ACTUADO

“Dafne Yanira Sánchez de Muñoz, magistrada de la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia, en el incidente de casación 271-CAF-2021, emito voto concurrente por estar de acuerdo con la decisión que precede, no así con algunos de sus argumentos, según lo expongo a continuación:

En la sentencia que antecede, se ha fallado “a) Declárase de oficio la nulidad de lo actuado en el proceso de divorcio por los motivos de separación de los cónyuges durante uno o más años consecutivos y por ser intolerable la vida en

común entre los cónyuges (...), desde la audiencia preliminar del mismo; debiendo reponerse las actuaciones viciadas (...)". Sin embargo, no comparto en su totalidad las razones por las cuales se ha emitido dicha decisión, ni el enfoque con el cual se ha abordado el deber judicial de oír a los niños, niñas y adolescentes dentro de los procesos de familia.}

Sobre las causas de la nulidad procesal declarada

Al examinar los autos, esta Sala advirtió una serie de irregularidades procesales en la sustanciación del proceso. En consecuencia, de oficio procedió a declarar la nulidad de las respectivas actuaciones.

En síntesis, las referidas irregularidades procesales son las siguientes: 1) Que no se resolvieron las excepciones planteadas por la parte demandante al contestar la reconvención de la demanda. Dichas excepciones son las siguientes: improponibilidad por falta de presupuestos materiales y esenciales en la litis, y oscuridad de la demanda; y, 2) Que en el auto de admisión de la demanda se resolvió citar a las niñas, de nueve y cinco años de edad respectivamente (hijas de los cónyuges), para que fueran escuchadas por el juez de familia; sin embargo, no se señaló día y hora para tal efecto, y que en el proceso no existe acta alguna en la cual conste que fueron oídas.

Al respecto, considero que la omisión de resolver las excepciones alegadas en la contestación de la reconvención, aún y cuando constituyen una irregularidad procesal, no cumple con los requisitos legales para que esta Sala declare, de oficio, la nulidad de las actuaciones procesales, en los términos que lo ha hecho en la resolución que antecede.

El artículo 235 inciso 1° CPCM, establece que *"Cuando la ley expresamente califique de insubsanable una nulidad, ésta podrá ser declarada, de oficio o a petición de parte, en cualquier estado del proceso"* -resaltado propio-. Esta Sala, en la resolución que antecede, ha invocado esta disposición legal para justificar su proceder. Sin embargo, puede advertirse claramente que el contenido de tal disposición alude literalmente a los casos de nulidades que la ley expresamente califica de insubsanables, cuestión que no acontece en este caso.

La anterior afirmación la fundamento en el hecho de que, en esa misma resolución, esta Sala ha citado el artículo 232 letra c) del CPCM, que califica de nulos aquellos actos ejecutados con infracción a los derechos constitucionales de audiencia o de defensa. Este supuesto de nulidad no ha sido calificado como insubsanable por el legislador. La calificación expresa de nulidad "insubsanable", únicamente se encuentra en los arts. 10 y 200 CPCM, y se refieren a supuestos distintos al relativo a la violación de los derechos de audiencia y defensa. Por tanto, el artículo 235 inciso 1° CPCM no confiere cobertura alguna a lo resuelto por esta Sala, debido a que no se trata de un supuesto de nulidad declarado como insubsanable por el legislador.

Los autores del Código Procesal Civil comentado, admiten la posibilidad de discusión con relación a otros supuestos de nulidad, en el sentido de que, aun cuando no han sido declarados expresamente por el legislador como generadores de nulidad insubsanable, podrían llegar a calificarse como supuestos de nulidades de tal carácter ("por la relevancia en las actuaciones"). Tal posibilidad la plantean en los siguientes términos:

"Los motivos de nulidad insubsanables son aquellos determinados expresamente por la legislación procesal civil y mercantil, siendo aquellos de mayor relevancia. Como su nombre lo indica, no existe posibilidad alguna de convalidación. Por tal razón, a reglón seguido el art. 234 inciso 1° C.P.C.M. reconoce que la actuación insubsanable puede ser declarada en cualquier estado del proceso. Esta clase de nulidades aparece escasamente en la nueva legislación procesal, entre los motivos denominados de manera expresa se tienen las siguientes: a) Irrespeto a la inmediación judicial y la producción de la prueba, si se delega la dirección y conducencia en las audiencias atribuida exclusivamente al Juzgador competente, según el art. 10 C.P.C.M.; y b) Falta de publicidad externa en la celebración de las audiencias, conforme al art. 200 C.P.C.M. Fuera de los motivos de nulidad antes indicados, podrían discutirse por la relevancia en las actuaciones, la inclusión de otros supuestos en la categoría de las actuaciones procesales insubsanables, tales como: 1) La falta de jurisdicción; b) La competencia que no pueda prorrogarse; y c) La actividad procesal realizada bajo violencia o intimidación o comisión de un acto delictivo. Todos regulados en el art. 232 literales (a) y (b) C.P.C.M." (Vid. JUAN C. CABAÑAS G. y otros, Código Procesal Civil y Mercantil Comentado, Consejo Nacional de la Judicatura, San Salvador, 2010, p. 226).

De tal manera que, de conformidad con la fuente citada, el supuesto de nulidad que se analiza, ni siquiera ha sido considerado como uno de aquellos en los que pueda discutirse si podría tratarse de una nulidad insubsanable (ya que únicamente se hace alusión a los supuestos contenidos en las letras a) y b) del art. 232 CPCM). A mi juicio, la exclusión de la posibilidad de discutir sobre la inclusión del supuesto contenido en la letra c) de la disposición mencionada, en la categoría que se analiza, se justifica debido a que, claramente, la nulidad que afecta a los actos procesales que puedan causar violación a los derechos de audiencia y defensa, puede corregirse, reponiendo debidamente las actuaciones que generaron la nulidad. Es decir, claramente estamos frente a un supuesto de nulidad subsanable.

El punto central, en todo caso, es que la omisión de resolver las excepciones planteadas en la contestación de la reconvención, no constituye un supuesto que sea calificado por el legislador como un supuesto de nulidad insubsanable. Por tanto, no se configura lo establecido en el artículo 235 inciso 1° CPCM, de modo que esta Sala no está habilitada a declarar de oficio la nulidad de las actuaciones procesales por ese motivo."

PARÁMETROS QUE DEBEN DE TOMARSE EN CUENTA AL MOMENTO DE OÍR A UN NIÑO, NIÑA O ADOLESCENTE DENTRO DE UN PROCESO

"Sobre el deber judicial de oír a niños, niñas y adolescentes en los procesos de familia

Acompaño la decisión de declarar nula las actuaciones procesales, en los términos en que consta en la resolución que antecede, únicamente por el motivo de no existir constancia de que se escuchó la opinión de las hijas procreadas

por los cónyuges, en contravención a lo dispuesto en los artículos 7 letra j) de la Ley Procesal de Familia, y 94 y 223 de la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia, en relación al artículo 232 inciso 1° CPCM.

Sin embargo, no comparto el abordaje que se ha realizado para referirse al deber judicial de oír a los niños, niñas y adolescentes en los procesos de familia. En efecto, el contenido de la sentencia que antecede, da la impresión de que el respectivo juez, indefectiblemente, debe cumplir con dicho deber, sin tomar en cuenta los criterios y principios esenciales que optimizan el derecho de niños y adolescente "a opinar y ser oídos". A mi juicio, esta Sala debió considerar que el ejercicio de ese derecho está sujeto a determinadas condiciones. Para referirse a esas condiciones, es oportuno señalar que el artículo 12 inciso 1° de la Convención sobre Derechos del Niño, establece que "Los Estados Partes garantizarán al niño que ***esté en condiciones de formarse un juicio propio*** el derecho de expresar su opinión libremente ***en todos los asuntos que afectan al niño,*** teniéndose debidamente en cuentas las opiniones del niño en función de la edad y madurez del niño" -resaltado propio-.

Así las cosas, puede afirmarse que este derecho está condicionado a dos situaciones. Primera, al desarrollo evolutivo del niño, niña o adolescente (criterio personal); y, segunda, a la vinculación de su interés con el proceso (criterio social).

La primera situación establece que, se deberá oír al niño, niña o adolescente en función de su desarrollo evolutivo, es decir, en la medida que tenga la capacidad física (no necesariamente plena), la madurez y el discernimiento para referir o relatar (no necesariamente de forma verbal) su situación real y objetiva, respecto de los hechos que directa o indirectamente le afectan y que se relacionan con la causa de pedir. Es decir, debe tener la capacidad de *formarse un juicio propio del asunto* y que pueda exteriorizarlo según los mecanismos idóneos y disponibles que existan.

Y pese a que la edad es un parámetro objetivo para aproximarse a dicho desarrollo evolutivo, no es un parámetro único y definitivo, por cuanto la idea de "opinar y ser oído" no se limita al lenguaje verbal ni a la consideración de la edad cronológica. Por el contrario, el juez debe adoptar los métodos y las estrategias (dialogar, dibujar, observar, escuchar, entre otras, según la situación del niño o niña) que sean acordes al desarrollo evolutivo; para captar, interpretar y deducir la situación real y objetiva en la que se encuentra el niño, niña o adolescente, de cara a los hechos que integran el debate procesal."

EL DERECHO DEL NIÑO, NIÑA O ADOLESCENTE A "OPINAR Y SER OÍDO" DEPENDE DE QUE SU INTERÉS PUEDA VERSE AFECTADO POR LA EVENTUAL DECISIÓN QUE SE ADOPTE EN EL PROCESO

"Por su parte, la segunda situación consiste en que el derecho del niño, niña o adolescente a "opinar y ser oído" depende de que su interés pueda verse afectado por la eventual decisión que se adopte en el correspondiente proceso.

En otras palabras, el ejercicio del derecho a "opinar y ser oídio" depende de la "legitimación" que el niño, la niña o el adolescente tenga para ello. Esta legitimación se puede identificar a partir de dos factores. Primero, del tipo de pretensión ejercida; y, segundo, de los hechos que fundamentan la pretensión.

En el primer caso, se puede afirmar que, si la pretensión involucra directamente al niño, niña o adolescente (como sucede en las pretensiones de cuidado personal, régimen de visitas, cuota de alimentos, pérdida de la autoridad parental, suspensión de la autoridad parental, impugnación de la paternidad, establecimiento de la paternidad, entre otras), se justifica la necesidad de que su derecho a opinar y ser oído se garantice. Esto reivindica su posición como sujeto de derecho.

En el segundo de los casos, se puede sostener que, si los hechos que fundamentan la pretensión irradian la situación personal y familiar del niño, niña o adolescente, aunque se trate de pretensiones que no versan estrictamente sobre su situación (como los procesos descritos en el párrafo anterior), es necesario garantizarles el derecho a opinar y ser oídos. Por ejemplo, en un proceso de divorcio cuyo motivo es la existencia de hechos que hacen la vida intolerable (artículo 106 ordinal 3° CF), como la violencia intrafamiliar, será necesario, aun y cuando las partes hayan conciliado sobre las pretensiones relativas a los hijos (cuidado personal, régimen de visitas, cuota de alimentos, entre otros), garantizar este derecho, por cuanto las pretensiones pueden sustentarse, por ejemplo, en un conjunto de hechos graves, reiterados y perjudiciales que, si bien no necesariamente se materializan de manera visible sobre el niño, la niña o el adolescente, sí irradian su situación personal. En tales casos, el juez debe tomar una actitud analítica, para ponderar, en cada caso, la necesidad y la forma de garantizar este derecho, en la medida que lo permita el desarrollo evolutivo.

La segunda situación, a la que ya he hecho referencia, tiene un alcance social, en la medida que no se valora al niño, a la niña o al adolescente de forma aislada y estática, sino que se le sitúa socialmente, es decir, como parte de un núcleo familiar que, en su interior, experimentará los efectos de una eventual decisión judicial, aun y cuando el debate procesal se centra en otros miembros de la familia. No tomar en cuenta la posición que ocupa el niño o adolescente, en comparación a los otros miembros de la familia que participan en el debate, puede constituir una discriminación injustificada, al invisibilizársele como un "simple sujeto que opina" y no como una persona que experimenta las consecuencias propias de un proceso y de una decisión judicial. Incluso, esta segunda situación exige que el juez tome en cuenta perspectiva de género al momento de captar e interpretar la información que le brinda el niño, la niña o el adolescente, en ejercicio del derecho que ahora se analiza.

Debo señalar que los anteriores criterios tienen sustento normativo en la legislación secundaria. Así, el artículo 7 letra j) de la Ley Procesal de Familia señala que "El Juez está obligado a: (...). Oír al menor cuando hubiere cumplido doce años de edad, en todos los procesos y diligencias que le afecten; *antes de dicha*

edad, el Juez tendrá contacto con el menor y de ser posible dialogará con él". Como se observa, dicha ley no establece que para oír al niño o adolescente el juez deba esperar a que cumpla doce años de edad. Más bien, le invita a que toma otras medidas para oírle, aun y cuando no tenga esa edad. Y de forma más precisa, el artículo 94 de la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia, dispone que "Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a opinar y a ser oídos (...). La opinión de las niñas, niños y adolescentes será recibida con métodos acordes a su edad y *será tomada en cuenta en función de su desarrollo evolutivo* (...)" -resaltado propio-

Por igual, los artículos 5 y 10 de esta última ley, preceptúan que los derechos de los niños, niñas y adolescentes, serán ejercidos "tomando en consideración el desarrollo evolutivo de sus facultades" y "de manera progresiva tomando en consideración el desarrollo evolutivo de sus facultades".

Así las cosas, considero que, en la resolución que antecede, esta Sala adoptó un enfoque muy rígido sobre el derecho de los niños, niñas y adolescentes a "opinar y ser oídos"; pese a que, por ejemplo, uno de las niñas, a la fecha en que pudo y debió declarar en primera instancia, tenía cuatro años de edad aproximadamente.

En conclusión, acompaño la decisión que antecede, por no haberse garantizado el derecho de las hijas de los cónyuges, a opinar y ser oídas, según la especificación de las razones que acá he rendido. En cambio, no comparto la decisión de declarar nulas las actuaciones procesales, por el hecho de no haberse resuelto la excepción planteada en la contestación de la reconvención, según antes lo expuse.

Así mi voto."

Sala de lo Civil, número de referencia: 271-CAF-2021, fecha de la resolución: 21/04/2022

VOTO CONCURRENTE DE LA MAGISTRADA DAFNE YANIRA SÁNCHEZ DE MUÑOZ

RECURSO DE CASACIÓN

PROCEDE CONTRA RESOLUCIONES DICTADAS EN LA FASE DE EJECUCIÓN FORZOSA, APLICANDO SUPLETORIAMENTE EL CÓDIGO PROCESAL CIVIL Y MERCANTIL

"Dafne Yanira Sánchez de Muñoz, magistrada de la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia, en el *incidente de casación 349-CAF-2022*, emito voto concurrente, por estar de acuerdo con la decisión que antecede, no así con alguno de los argumentos desarrollados. Fundamento mi voto en las siguientes consideraciones.

En el auto respecto del cual emito este voto, se ha expresado que "(...) al estar frente a una impugnación, de una resolución que deriva de una actividad jurisdiccional en la fase de ejecución, de acuerdo a nuestro ordenamiento jurídico procesal, tal impugnación objetiva se encuentra fuera del alcance del conocimiento del tribunal de casación, en atención a su finalidad y naturaleza".

Sin embargo, no comparto la anterior consideración, en vista de que, tal y como lo he sostenido en reiterados votos, en determinados casos, es procedente el recurso de casación en la fase de ejecución forzosa. Por ejemplo, cuando el recurso de casación se fundamenta en el motivo de *quebrantamiento de las formas esenciales del proceso y en el submotivo de haberse declarado indebidamente la improcedencia de una apelación* (artículo 523 ordinal 13º CPCM), siempre y cuando la resolución pronunciada por la Cámara declare inadmisible o improcedente el recurso de apelación, porque puede suceder que el referido tribunal haya rechazado el recurso de apelación sobre la base de que la resolución recurrida no admite apelación, cuando en realidad sí es una de las resoluciones que la ley, expresamente, reconoce que puede ser impugnada a través de ese recurso, a pesar de que se hayan dictado en la fase de ejecución forzosa.

Dichas resoluciones son las previstas en los artículos 563 inciso 2º, 575 inciso 1º, 584, 585 y 595 inciso 2º CPCM. Estos supuestos son aplicables al ámbito de familia, por méritos de la aplicación supletoria que prevé los artículos 218 de la Ley Procesal de Familia. Incluso, el artículo 172 de esta ley, al hacer referencia a la ejecución de la sentencia en materia de familia, remite a las normas establecidas para el juicio ejecutivo en materia civil, entendiéndose que, para la fecha en que entró en vigencia el Código de Familia (1994), el juicio ejecutivo al que hacía referencia esa norma era el regulado en el Código de Procedimientos Civiles (artículos 586 y siguientes); el cual, en sus artículos 586 y 587 establecía que las sentencias aparejaban ejecución. En la actualidad (desde la vigencia del Código Procesal Civil y Mercantil, en el año 2010), las sentencias se regulan como títulos que sustentan la ejecución forzosa (artículo 554 inciso 2º ordinal 1º CPCM). Por tanto, la regulación prevista en el CPCM para la ejecución forzosa, sería objeto de aplicación supletoria en dicha materia, en el ámbito de familia. Y en tal regulación es que se comprenden las resoluciones que, pese a haberse dictado en la etapa de ejecución de sentencia, admiten apelación (artículos 563 inciso 2º, 575 inciso 1º, 584, 585 y 595 inciso 2 CPCM).

Por tanto, no resulta apegado al ordenamiento jurídico que el recurso de casación, en el ámbito de familia, no procede contra resoluciones dictadas en la fase de ejecución forzosa.

En consecuencia, acompaño la decisión adoptada, pero no en cuanto a los argumentos relacionados con lo acá expuesto. Así mi voto."

Sala de lo Civil, número de referencia: 349-CAF-2022, fecha de la resolución: 07/12/2022

VOTO DISIDENTE DE LA MAGISTRADA DAFNE YANIRA SÁNCHEZ DE MUÑOZ

DECLARATORIA DE NULIDAD POR FALTA DE LEGITIMACIÓN PROCESAL PASIVA

NO SE PUEDE CONSIDERAR COMO UNA NULIDAD INSUBSANABLE, POR ENDE, LA MISMA NO PUEDE SER TRAMITADA DENTRO DE LA ADMISIÓN DEL RECURSO DE CASACIÓN; ESPECÍFICAMENTE, EN PROCESOS DE DECLARATORIA JUDICIAL DE UNIÓN NO MATRIMONIAL, CUANDO NO SE HA ESTABLECIDO QUIÉN ES EL HEREDERO DEL CONVIVIENTE FALLECIDO

"Dafne Yanira Sánchez de Muñoz, magistrada de la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia, en el *incidente de casación 309-CAF-2022,* emito voto parcialmente disidente con base en los artículos 220 CPCM y 218 LPF, por no estar de acuerdo con una parte de la decisión que antecede, en cuanto a declarar, en el mismo auto de admisión del recurso, la nulidad de lo actuado, según lo especificaré más adelante; no obstante haber firmado la respectiva resolución, tal como lo dispone el referido artículo. Fundamento mi voto en las siguientes consideraciones.

En el auto respecto del cual emito este voto, entre otros, se ha declarado la nulidad de lo actuado en primera y segunda instancia (debiéndose retrotraer hasta el último acto valido). Entre los fundamentos que sustentan dicha forma de proceder, se encuentran las siguientes:

"Esta Sala advierte, que al examinarse lo alegado en casación en esta fase inicial, siendo procedente el recurso y admisible un motivo del mismo, ello habilita para ejercer un control de oficio respecto de una nulidad procesal insubsanable (...). No obstante, *que el recurrente ha alegado hasta este momento o etapa procesal la falta de legitimación pasiva de sus representados*, ya que tal argumentación no se realizó en primera ni en segunda instancia, obliga a esta Sala a verificar en los autos del proceso si se ha cumplido con los requisitos de ley en la tramitación del mismo (...) Al respecto, se advierte que con la demanda no consta que se haya acreditado legalmente quienes son los herederos del causante (...) pues la misma ha sido incoada contra hermanos del causante, *sin haberse acreditado la calidad de herederos* (...) la anterior circunstancia es un presupuesto procesal que no puede eludirse previo a la admisión de la demanda, ya que constituye un requisito elemental para el desarrollo normal de esta clase de procesos (...) Categóricamente debe advertirse, que el incumplimiento de lo antes referido -no acreditación de la legitimación pasiva-, representa una **transgresión al principio de legalidad**, que indiscutiblemente afecta el debido proceso, pues al no subsanarse dicho requisito esencial, constituye un vicio que acarrea la nulidad insubsanable de lo actuado (...)" (cursiva propia)

Al respecto, debo mencionar, en primer lugar, que soy del criterio de que no es procedente declarar, en el mismo auto de admisión del recurso, la nulidad de las actuaciones procesales, debido a que no se configuran los presupuestos legales para proceder en tal sentido. Además, la declaratoria de nulidad en el mismo auto de admisión del recurso podría vulnerar el derecho de defensa de la parte recurrida.

Inexistencia de los presupuestos para declarar la nulidad de oficio

Esta Sala, en la resolución que antecede, ha sostenido que se ha incurrido en un vicio de nulidad insubsanable, por no haberse acreditado que los demandados ostentan la calidad de herederos.

Al respecto, cabe advertir que, si bien el art. 235 inciso 1° CPCM, establece que *"Cuando la ley* ***expresamente*** *califique de insubsanable una nulidad,* ***ésta podrá ser declarada, de oficio*** *o a petición de parte,* ***en cualquier estado del proceso"*** (resaltado propio); dicha habilitación está supeditada a que el vicio de nulidad sea calificado por la ley, expresamente, como nulidad insubsanable, cuestión que no acontece en este caso.

En efecto, el presunto vicio identificado por esta Sala, no ha sido calificado como insubsanable por el legislador. Más bien, la calificación expresa de nulidad "insubsanable", únicamente se encuentra en los arts. 10 y 200 CPCM, y se refieren a supuestos distintos a la falta de acreditación de la calidad de herederos de los demandados. Por tanto, el argumento de la "nulidad insubsanable" no confiere cobertura alguna a lo resuelto por esta Sala, pues desde la óptica de la normativa procesal civil salvadoreña, la presunta irregularidad advertida por esta Sala no constituye un supuesto de nulidad declarado como insubsanable por el legislador.

Ahora bien, los autores del Código Procesal Civil y Mercantil comentado, admiten la posibilidad de discusión con relación a otros supuestos d nulidad, en el sentido de que, aun cuando no han sido declarados expresamente por el legislador como generadores de nulidad insubsanable, podrían llegar a calificarse como supuestos de nulidades de tal carácter ("por la relevancia en las actuaciones"). Tal posibilidad la plantean en los siguientes términos:

"Los motivos de nulidad insubsanables son aquellos determinados expresamente por la legislación procesal civil y mercantil, siendo aquellos de mayor relevancia. Como su nombre lo indica, no existe posibilidad alguna de convalidación. Por tal razón, a región seguido el art. 234 inciso 1° C.P.C.M. reconoce que la actuación insubsanable puede ser declarada en cualquier estado del proceso. Esta clase de nulidades aparece escasamente en la nueva legislación procesal, entre los motivos denominados de manera expresa se tienen las siguientes: a) Irrespeto a la inmediación judicial y la producción de la prueba, si se delega la dirección y conducencia en las audiencias atribuida exclusivamente al Juzgador competente, según el art. 10 C.P.C.M.; y b) Falta de publicidad externa en la celebración de las audiencias, conforme al art. 200 C.P.C.M. Fuera de los motivos de nulidad antes indicados, podrían discutirse por la relevancia en las actuaciones, la inclusión de otros supuestos en la categoría de las actuaciones procesales insubsanables, tales como: 1) La falta de jurisdicción; b) La competencia que no pueda prorrogarse; y c) La actividad procesal realizada bajo violencia o intimidación o comisión de un acto delictivo. Todos regulados en el art. 232 literales (a) y (b) C.P.C.M." (Vid. JUAN C. CABAÑAS G. y otros, *Código Procesal Civil y Mercantil Comentado*, Consejo Nacional de la Judicatura, San Salvador, 2010, p. 226).

De tal manera que, de conformidad con la fuente citada, la situación invocada en la resolución de la que disiento (sobre la nulidad insubsanable), ni siquiera ha sido considerado como uno de aquellos en los que pueda discutirse si podría tratarse de una nulidad insubsanable (ya que únicamente se hace alusión a los supuestos contenidos en las letras a) y b) del art. 232 CPCM).

En ese orden de ideas, reitero que la presunta irregularidad advertida por esta Sala no ha sido calificada de manera expresa por el legislador como un vicio de "nulidad insubsanable", a pesar de ser un requisito exigido por el art. 235 inciso 1° CPCM, que habilita a los juzgadores a declarar, en cualquier estado del proceso, la nulidad insubsanable.

Por otra parte, el artículo 232 CPCM, establece que *los actos procesales serán nulos sólo cuando así lo establezcan expresamente la ley. No obstante, deberán declararse nulos en los siguientes casos: a) Si se producen ante o por un tribunal que carece de jurisdicción o competencia que no pueda prorrogarse. b) Si se realizan bajo violencia o intimidación o mediante la comisión de un acto delictivo. c) Si se han infringido los derechos constitucionales de audiencia o de defensa.*

En la resolución que precede, se afirma que la no acreditación de la legitimación pasiva (precisamente, por no acreditar la calidad de herederos), transgrede el principio de legalidad y, a su vez, afecta el debido proceso. Tal argumento, a mi juicio, no se subsume en ningún de los puestos previstos en el artículo 232 CPCM, para declarar la nulidad de las actuaciones procesales.

Además, es importante insistir en que la presunta vulneración a los derechos a los que hace alusión el supuesto del art. 232 literal c) CPCM, no es suficiente para que esta Sala declare, en el mismo auto de admisión de la demanda, la nulidad de las actuaciones procesales; ya que tal supuesto no ha sido declarado expresamente por el legislador como generador de nulidad insubsanable (tal como lo exige el artículo 235 CPCM).

Además, debe tomarse en cuenta que, la teoría de las nulidades y la tradición jurisprudencial ha entendido que, en materia procesal, no se declara la nulidad por la nulidad misma, en el sentido de que la simple configuración de un vicio de nulidad no es suficiente en sí mismo para que la misma sea declarada, pues es necesario que dicha irregularidad conlleve, efectivamente, la vulneración de los derechos de audiencia o de defensa de las partes. Tal aspecto es relevante, por cuanto los demandados, en este proceso, han tenido la oportunidad de ser oídos y de defenderse en las diferentes instancias. Incluso, en la resolución se destaca que, ha sido en este grado de conocimiento en el que, por primera vez, se planteó el argumento relativo a la falta de legitimación pasiva. En otras palabras, ellos asumieron estar legitimados pasivamente en el proceso.

Limitación del derecho de defensa de la parte recurrida

La declaratoria de nulidad insubsanable debe efectuarse con estricto apego a los derechos constitucionales de audiencia y defensa. En tal sentido, si bien el artículo 235 inciso 1° CPCM establece que se puede declarar de oficio la nulidad

"en cualquier estado del proceso", y el artículo 238 inciso 1° CPCM, dispone que "el tribunal al que corresponda pronunciarse sobre un recurso deberá observar si se ha hecho valer en el escrito de interposición la nulidad de la sentencia o de actos de desarrollo, o si se ha incurrido en alguna nulidad insubsanable"; también es cierto que tal declaración debe realizarse permitiendo el ejercicio oportuno de los derechos de las partes que puedan resultar afectadas con la declaratoria de la misma.

Ciertamente, cuando en el mismo auto de admisión del recurso de casación se declara nulo lo actuado, podría resultar vulnerado el derecho de defensa y el derecho a recurrir de la parte recurrida en casación. Por ejemplo, la parte recurrida no tiene la oportunidad de interponer recurso alguno contra el auto de admisión del recurso de casación o, para ser más precisos, para denunciar la admisión indebida del mismo. Esto es trascendental, por cuanto la admisión del recurso constituye un presupuesto que se ha tenido en consideración para proceder a examinar el presunto vicio de nulidad.

Por tanto, para optimizar el ejercicio efectivo de los derechos fundamentales, esta Sala no está habilitada para declarar la nulidad *in limine,* frente a la posibilidad de que, según la eventual postura de la parte recurrida, el recurso haya sido admitido indebidamente. Así las cosas, a mi parecer, esta Sala ha dictado una resolución anulatoria en una etapa procesal inoportuna.

Declarar la nulidad insubsanable de actuaciones procesales, en el mismo auto de admisión del recurso, sin posibilidad de que la parte recurrida se pronuncie, por ejemplo, sobre la admisión del mismo, o respecto de los vicios invocados por el recurrente, constituye un claro incumplimiento de las formalidades de transcendencia constitucional al interior del proceso.

En consecuencia, no acompaño la decisión adoptada (en los puntos ya especificados), por los argumentos acá expuestos. Lo procedente, a mi juicio, era admitir el recurso de casación en lo que corresponde, y darle el trámite legal para emitir la decisión respectiva en la etapa procesal oportuna.

Finalmente, no omito expresar que no comparto las razones adoptadas en la resolución que precede, para declarar la nulidad de las actuaciones procesales, teniendo en consideración que, a mi juicio, acreditar la calidad de herederos de los demandados en este tipo de procesos no es un presupuesto de procesabilidad de la pretensión, según lo he expuestos en anteriores votos, emitidos en los incidentes 252-CAF-2021 y 214-CAF-2022.

Así mi voto."

Sala de lo Civil, número de referencia: 309-CAF-2022, fecha de la resolución: 18/11/2022

MATERIA: LABORAL

APLICACIÓN DE MENSAJERÍA INSTANTÁNEA

REQUISITOS PARA QUE LAS IMPRESIONES DE LAS CONVERSACIONES DE LA APLICACIÓN TELEFÓNICA DE WHATSAPP, SE ANALICEN Y CONSIDEREN PRUEBA

"Error de derecho en la apreciación de la prueba documental
Precepto infringido art. 402 CT

Con relación al vicio invocado, se advierte que la inconformidad del recurrente radica en que la Cámara le restó valor probatorio a las capturas de pantalla de los documentos privados que contenían una conversación realizada por medio de la aplicación telefónica de WhatsApp, entre el señor NA (cliente) y la empresa […], los que constituían plena prueba respecto del hecho que le atribuían al trabajador demandante, y que sólo podían ser desestimados si se alegaba previamente la falsedad de los mismos.

De igual forma el impetrante manifestó, que la violación al artículo 402 CT, provocó la inadmisión de los documentos privados al proceso, cuando la ley establece que los mismos constituyen plena prueba, y que solo se desestimarán si se alega previamente un incidente de falsedad, lo que no ocurrió en este caso. Y en ese sentido, al haberse admitido la citada prueba, conforme a los criterios jurisprudenciales actuales y al no haberse redargüido de falsas, la Cámara debió tener por ciertos los hechos que contenían los mismos.

En cuanto al error de derecho en la apreciación de la prueba documental, esta Sala ha sostenido a través de su jurisprudencia, v.g., sentencia de las once horas con veintidós minutos del veintiuno de octubre de dos mil diecinueve, pronunciada en el incidente de casación con referencia 222-CAL-2019, entre otras, "que el mismo se presenta, cuando el juzgador, al apreciar las pruebas o al estimar su valor, no aplica las normas establecidas para tal medio probatorio, infringiendo con ello, los preceptos sobre la valoración de los medios de prueba. Se produce también cuando el juzgador aprecia incorrectamente una prueba y le da un valor distinto al que le asigna la ley".

[...]

De los anteriores razonamientos de la Cámara se advierte, que no otorgó valor probatorio a las capturas de pantalla de la aplicación telefónica Whatsapp (aportadas como prueba documental de descargo), con las que se intentaba establecer que el trabajador demandante se apropió indebidamente de cierta cantidad de dinero por la supuesta venta de una motocicleta; por estimar, en principio, que no era posible determinar "que en efecto esa conversación pertenezca o no, al señor NJA" (cliente). Además, porque carecían de valor probatorio, ya que las

impresiones que correspondían a un medio de almacenaje electrónico, no fueron incorporadas al proceso conforme a las reglas establecidas en el Código Procesal Civil y Mercantil (en lo sucesivo CPCM).

Con base en lo expuesto, cabe señalar que, para esta Sala, la parte demandada no ha logrado evidenciar de forma inequívoca, cómo obtuvo (del dispositivo móvil) las impresiones simples de captura de pantalla de la conversación telefónica de la red social WhatsApp agregadas a folios […] de la pieza principal. De igual forma no se ha establecido fehacientemente que dicha conversación corresponda al supuesto cliente, señor NJA, la fecha de la misma, entre otros.

Asimismo, a juicio de este tribunal, el documento en análisis no proporciona seguridad en cuanto a la integridad o invariabilidad de su contenido (que no haya sido alterado o modificado por cualquier persona), ya que no se ha determinado su origen.

De igual forma cabe señalar, que es menester que ante la oferta de un documento como el controvertido, se acompañe del medio de almacenamiento que lo contiene, para que sea analizado y considerado como prueba, de conformidad con lo establecido en el art. 397 CPCM.

Y es que, vale decir, que los documentos como el referido, no ofrecen por si solos, elementos de seguridad comprobable en el proceso, tal y como lo advierte el doctrinario español Fermandinho Domingos Sanca, “Revista de Derecho Privado y Social, Sala de lo Civil, Corte Suprema de Justicia, El Salvador; número 2, año 2017, pág. 247”; quien al desarrollar el tema “Seguridad en el Comercio Electrónico”, consideró que la comunicación electrónica, por lo menos debe cumplir con los requisitos básicos siguiente: 1) Autenticación: certeza e identificación de los que intervienen. 2) Confidencialidad: evitar que la comunicación sea interceptada por un tercero. 3) Integridad: que la información no sea alterada ilícitamente. 4) El no rechazo o repudio: el hecho que las partes intervinientes no nieguen haber participado en la comunicación” (tomado del incidente de casación con referencia 481-CAL-2018).”

LA DECISIÓN TOMADA POR EL TRIBUNAL DE ALZADA, PARA DESESTIMAR LA PRUEBA DOCUMENTAL REFERIDA, ES JUSTIFICADA Y VÁLIDA

“Además de dichos requisitos, previo a admitir un medio de captación tecnológica como medio de prueba, el juzgador debe analizar su licitud, pertinencia y utilidad, pues por la naturaleza de este tipo de documentos, existe el riesgo de una eventual vulneración a derechos fundamentales como a la dignidad, el honor, la intimidad, la propia imagen de las partes, así como de terceros que podrían no tener una relación directa sobre los hechos del litigio.”

En ese sentido la justificación de la Cámara Primera de lo Laboral de esta sede, para determinar que las referidas impresiones no merecían credibilidad, es válida, dado que al provenir la información de un medio de almacenamiento electrónico, era indispensable que se evidenciara cómo se obtuvo dicha información para determinar su origen, nexo e invariabilidad, entre otros aspectos a analizar.

Por tal razón a juicio de esta Sala, la decisión tomada por el tribunal de alzada, para desestimar la prueba documental referida, es justificada y válida, dado

que, al ser presentada prueba documental, cuyo registro original se encuentra en un medio de almacenamiento de información, para este caso, el teléfono en el cual se registraron los mensajes de la aplicación telefónica "Whatsapp", se debió haber cumplido con los requisitos que establece la ley, tal y como se relacionó en los párrafos anteriores. Ante dicho incumplimiento, es conforme a derecho que se desestimen los documentos presentados. En consecuencia, no existe la posibilidad de que se haya cometido el error de derecho en la apreciación de la prueba documental, con relación al art. 402 CT, alegado por el licenciado […]; por lo que resulta procedente declarar no ha lugar a casar la sentencia de mérito."
Sala de lo Civil, número de referencia: 22-CAL-2022, fecha de la resolución: 02/06/2022

Relaciones:
Sala de lo Civil, número de referencia: 82-CAL-2022, fecha de la resolución: 18/07/2022

APLICACIÓN INDEBIDA DE DOCTRINA LEGAL

CUANDO DE LA SENTENCIA A LA QUE SE HACE REFERENCIA NO CONFIGURA DOCTRINA LEGAL, SINO JURISPRUDENCIA

"1. Violación del art. 588 ord. 1° inciso segundo CT y aplicación indebida de doctrina legal

Precepto legal infringido art. 353 CPCM

En cuanto al submotivo de aplicación indebida, esta Sala, por medio del auto de las once horas cinco minutos del veintitrés de julio de dos mil veintiuno, en el recurso de casación con referencia 73-CAL-2021, estableció lo siguiente: "esta infracción es el resultado del proceso lógico-jurídico que verifica el juzgador, a fin de establecer si el caso particular está o no contenido en la norma, concluyendo que lo está a pesar de que la norma que fue aplicada no era relevante para resolver el caso y sin embargo fue aplicada".

[...]

Se advierte que, a juicio de la recurrente, la Cámara aplicó indebidamente la "doctrina legal" establecida en la sentencia con referencia 250-CAL-2012, en la que se sostuvo que debe otorgársele valor probatorio a la declaración de un solo testigo, siempre y cuando le genere la suficiente certeza al juzgador. Y es que, según la recurrente, lo que debía analizarse en el caso de autos, era la apreciación de la declaración de propia parte rendida por la trabajadora demandante, y no la valoración del testigo, tal y como equivocadamente lo hizo el tribunal de segunda instancia.

Inicialmente cabe citar, que la doctrina legal, corresponde a una serie de sentencias jurisdiccionales concordantes (5 sentencias), de las que es posible extraer una línea normativa de carácter general que oriente e influya en la decisión de casos futuros; consideración que está basada en una interpretación en abstracto de las normas jurídicas, prescindiendo de la interpretación concreta

relativa a los hechos que se regulan con las sentencias, pues, para conformar la misma, basta con que lo resuelto sea en materias idénticas, en casos semejantes y que estas hayan sido constantes y uniformes, lo que implica la no contradicción de la línea de interpretación contenida en la sentencia.

Sin embargo, al analizar la "doctrina legal" que la recurrente cita como vulnerada, se advierte que, a la fecha, únicamente se ha establecido doctrina legal en materia laboral, relativa al análisis del art. 402 CT, en cuanto a que "la prueba instrumental no es absoluta, en tanto que, no todo instrumento por el sólo hecho de ser público o privado, hará plena prueba, ya que además debe reunir otras características, tales como la pertinencia, idoneidad y conducencia" (sentencia de las doce horas veintiocho minutos del dieciséis de agosto de dos mil diecisiete, en la casación con referencia 57-CAL-2016). Asimismo, la relativa al análisis del art. 394 CT, en cuanto a que "las excepciones deben oponerse en forma expresa, lo que implica que cuando el demandado opone y alega una excepción, este se encuentra en la obligación de precisar el qué, cómo, cuándo y dónde ocurrieron los hechos atribuidos al trabajador demandante, como elementos fundamentales que le permiten al juzgador determinar la existencia o no del mecanismo de defensa" (sentencia de las ocho horas del veintiséis de julio de dos mil diecisiete, en la casación con referencia 341-CAL-2016).

En consideración de lo anterior, y dado que en la sentencia con referencia 250-CAL-2012, no se ha establecido doctrina legal, sino jurisprudencia en cuanto al valor probatorio que el juez debe otorgarle a la declaración de un solo testigo, siempre y cuando le genere la suficiente certeza; resulta evidente que no concurren los elementos para que se configure la aplicación indebida de la doctrina legal que la recurrente le atribuye al tribunal de alzada; más bien, es clara su inconformidad, respecto de la valoración que dicho tribunal realizó de la declaración de propia parte de la trabajadora demandante.

En ese sentido, al no existir pertinencia entre el submotivo alegado y el concepto expuesto, el recurso será inadmitido de conformidad al ord. 2° del art. 528 CPCM."

Sala de lo Civil, número de referencia: 230-CAL-2022, fecha de la resolución: 10/08/2022

APLICACIÓN INDEBIDA DE LEY

NO EXISTE VULNERACIÓN DEL ART. 347 CPCM, CUANDO EL AD QUEM NO TIENE POR ACEPTADOS LOS HECHOS QUE SE LE PRETENDÍAN ATRIBUIR AL TRABAJADOR, POR LA NO COMPARECENCIA DE ÉSTE A RENDIR LA DECLARACIÓN DE PARTE CONTRARIA, YA QUE LA DECLARACIÓN DEL TESTIGO DE CARGO CONSTITUÍA PRUEBA EN CONTRARIO

"Disposición citada como infringida, art. 347 CPCM

Previo a resolver el vicio sometido a estudio, se destaca que serán transcritos los pasajes pertinentes del recurso, dejando fuera todos aquellos aspectos que resultaron intrascendentes, no vinculados al submotivo que se denuncia. [...]

Sobre el concepto del vicio expuesto, y tal como se estableció en la resolución por medio de la que se admitió el recurso bajo análisis, *"la aplicación indebida es el resultado del proceso lógico jurídico que verifica el juzgador, a fin de establecer si el caso particular está o no contenido en la norma, concluyendo que lo está a pesar de que la norma que fue aplicada no era relevante para resolver el caso y sin embargo fue aplicada"* (auto de las once horas ocho minutos del dos de marzo de dos mil veinte, en el recurso de casación con referencia 60-CAL-2020).

Para determinar si la Cámara incurrió en el vicio alegado por el recurrente, resulta oportuno traer a colación lo que textualmente se estableció en la sentencia: "(…) *La declaración de parte contraria que no rindió el trabajador demandante, acarrea las consecuencias del Art. 347 del CPCM., sin embargo, al tener prueba en contrario (testigo de cargo), la aceptación de los hechos del demandante no es aplicable al presente caso, pues existe prueba directa que confirma los hechos plasmados en la demanda, como se dirá más adelante (...)"* (sic).

De las consideraciones realizadas por la Cámara en la fundamentación de su sentencia, se advierte que si bien el trabajador demandante no compareció a realizar la declaración de parte contraria solicitada por los apoderados de la sociedad demandada, la Cámara no aplicó la parte final del inciso 1° del art. 347 a favor de la sociedad demandada, porque según su criterio, la declaración del testigo […], constituyó prueba en contrario.

La disposición citada como vulnerada (art. 347 CPCM) en lo pertinente establece lo siguiente: *"Las partes tienen la obligación de comparecer y responder los interrogatorios de la parte contraria y del Juez que versen sobre los hechos personales.* ***Si la parte citada para ser sometida al interrogatorio en audiencia, no comparece sin justa causa, se tendrán por aceptados los hechos personales atribuidos por la contraparte, salvo prueba en contrario"*** (el resaltado es de la Sala).

Cabe aclarar, que para que opere el supuesto jurídico contenido en la parte final de la disposición considerada como infringida, (entiéndase, que se tengan por aceptados los hechos personales atribuidos por la parte contraria) deben concurrir dos condiciones, la primera, que la parte que debe rendir la declaración no comparezca sin causa justificada, y que no haya prueba en contrario sobre los hechos que se tendrán por comprobados.

En ese contexto, si la parte que ha sido citada para rendir declaración de parte contraria no comparece, sin causa justificada, se tendrán por ciertas las afirmaciones contenidas en el escrito por medio del cual se solicitó la realización de la diligencia, con las salvedades, de que haya estado justificadamente imposibilitado para comparecer a la realización de la misma, y tal diligencia no hubiere sido posible llevarla a cabo posteriormente, (situación que quedará bajo decisión del juzgador) o que no haya prueba con la que se desvirtúen tales afirmaciones.

Para determinar las razones por las cuales la Cámara sentenciadora, no aplicó la parte final del inciso 1° del art. 347 CPCM, al caso bajo análisis, resulta imprescindible analizar lo expuesto en cuanto a la declaración del testigo de

cargo, señor […], en ese sentido, sostuvo: "(...) El testigo de cargo señor […], en su declaración expresó que conoce al trabajador desde hace nueve años, porque él laboró para la sociedad […], S. A. DE C. V.; que ingresó a laborar para dicha sociedad el día diecisiete de marzo de dos mil nueve, con el cargo de cobrador; que sus labores consistían en cobrar el pasaje a los usuarios de la ruta ciento treinta y ocho, de Microbuses que hace su recorrido de San Luis Talpa a San Salvador, y viceversa; que el horario de trabajo a que estaba sujeto dicho trabajador, era de cuatro de la mañana a ocho de la noche, de lunes a domingo; que por sus labores devengaba un salario de quince dólares diarios, los cuales le eran cancelados diariamente, en el parqueo de la ruta ciento treinta y ocho, que el demandante ya no labora para la Sociedad demandada porque lo despidieron, que eso ocurrió, a las cuatro de la mañana del día treinta y uno de agosto de dos mil veinte, que lo despidió el señor […] quien es el tesorero de la Sociedad, y fue por órdenes del señor […]; que le consta que el referido trabajador laboraba para la sociedad demandada, porque lo vio trabajar, y le consta también porque el que declara ahí trabajo (compañeros de trabajo); que el referido trabajador laboró de forma continua e ininterrumpida para la referida sociedad; que el despido le consta porque ese día el que declara estaba presente y los despidieron a los dos; que toda lo declarado le consta de vistas y de oídas (...) En ese orden de ideas, al haberse establecido la relación laboral entre las partes procesales, se verifica que el despido de cual fue objeto el trabajador y que se le atribuye al señor […] como "Tesorero" de la sociedad demandada, también fue acreditado de manera directa con la deposición del testigo de cargo señor […], pues expresa de manera clara que el demandante ya no labora para la Sociedad demandada porque lo despidieron, que eso ocurrió, a las cuatro de la mañana del día treinta y uno de agosto de dos mil veinte, que lo despidió el señor […] quien es el tesorero de la Sociedad, y fue por órdenes del señor […]; que le consta que el referido trabajador laboraba para la sociedad demandada, porque lo vio trabajar, y le consta también porque el que declara ahí trabajó (compañeros de trabajo); que el despido le consta porque ese día el que declara estaba presente y los despidieron a los dos, por lo tanto los extremos alegados en la demanda han sido demostrados en el juicio (...)" (sic).

Como se advierte, la Cámara Segunda de lo Laboral, de esta sede judicial, decidió aplicar la parte final del inc. 1° del art. 347 CPCM, ya que consideró que la declaración del testigo, señor […], constituía prueba en contrario de los hechos que se le pretendían atribuir al trabajador demandante ante su incomparecencia a la declaración de parte contraria solicitada por la demandada.

En esa línea de pensamiento, la inconformidad en la que radica la aplicación indebida alegada por el recurrente, pierde sustento, ya que, la Cámara consideró que no concurrieron los presupuestos para que se tuvieran por aceptados los hechos que se le pretendían atribuir al trabajador demandante, mediante la incomparecencia a rendir la declaración de parte contraria solicitada por la demandada. En otras palabras, el referido tribunal determinó que la declaración del testigo de cargo era prueba suficiente en contrario, para aplicar la parte final del inciso 1° del art. 347 CPCM.

Consecuentemente, al no concurrir uno de los factores para que se tuvieran por aceptados los hechos personales atribuidos al trabajador demandante, señor LAE, por existir prueba en contrario, según la fundamentación de la sentencia, la Cámara sentenciadora aplicó de manera correcta la parte final del inc. 1° del art. 347 CPCM.

Finalmente, en cuanto a la afirmación del recurrente con respecto a que la declaración del testigo, señor WAMM, no merecía fe, porque el mismo había sido despedido por la demandada, es un aspecto sobre el que la Cámara expresó su postura, en el sentido de que nada impide a los trabajadores que consideran vulnerados sus derechos, incoaran la pretensión correspondiente, por lo que, para el tribunal de alzada, no fue obstáculo otorgarle valor probatorio a la declaración del testigo de cargo.

Y es que, cabe citar "que los jueces y magistrados, al dictar sus fallos, deben motivarlos adecuadamente, exteriorizando las razones de hecho y de derecho de por qué llegan a determinada conclusión. Partiendo de un examen de los hechos expuestos por las partes, y de un análisis individual y luego integral, de la prueba aportada al proceso. Para ella deben ajustarse en todo momento a las reglas de la lógica, a las máximas de la experiencia y a la psicología (reglas de la sana crítica), que son normas comunes a todo ser humano, no exclusivas de los jueces y magistrados. Ello, con la finalidad de evidenciar la racionalidad, coherencia e imparcialidad empleadas en la decisión. En consecuencia, debe imperar el razonamiento o justificación del por qué la prueba sometida al análisis del juzgador merece fe o credibilidad" (sentencia de las once horas cinco minutos del treinta y uno de marzo de dos mil veintidós en el incidente de casación con referencia 260-CAL-2021).

Asimismo, a través de la jurisprudencia se ha establecido que "La valoración de la prueba testimonial conlleva, siempre, la investigación relativa a la veracidad del testimonio y la credibilidad objetiva, tanto de la fuente de percepción que el testigo afirma haber recibido, como en relación al contenido y a la forma de declaración, en otras palabras, en cuanto esté demostrada la razón suficiente por la que emite su testimonio, esto es, que justifiquen la verosimilitud de su presencia en donde ocurrieron los hechos, de la idoneidad de su conocimiento del hecho adquirido, entre otros, de los factores que deben influir en la decisión del juzgador" (sentencia de las once horas quince minutos del diez de marzo de dos mil veintidós, ref. 185-CAL-2021).

Con base en lo expuesto, resulta evidente que la Cámara, haciendo uso del sistema de valoración de la sana crítica, sobre todo de la lógica y la experiencia, exteriorizó las razones por las cuales la declaración del testigo de cargo, señor […], le mereció credibilidad a pesar de haber iniciado un proceso laboral en contra de la demanda. Consecuentemente, la Cámara ha razonado su resolución conforme a derecho.

Por tal razón, el tribunal de alzada no cometió el vicio de aplicación indebida del art. 347 CPCM, y la sentencia recurrida no será casada"

Sala de lo Civil, número de referencia: 190-CAL-2022, fecha de la resolución: 01/09/2022

PROCEDE AL APLICAR INDEBIDAMENTE LA PRESUNCIÓN DE DESPIDO CONTENIDA EN EL ART. 414 CT, YA QUE NO SE PROBÓ LA CALIDAD DE REPRESENTANTE PATRONAL DE QUIEN EJECUTO EL DESPIDO, NI EL TRABAJADOR ACEPTÓ EL OFRECIMIENTO DE REINSTALO

"Aplicación indebida

Disposición citada como infringida, art. 414 CT

Como se advierte, a criterio del recurrente, la Cámara sentenciadora no debió aplicar la presunción de despido contenida en el precepto señalado como infringido; porque si bien en la audiencia conciliatoria fue el apoderado de la demandada, y no el propio empleador quien ofreció al trabajador demandante el reinstalo a sus labores (en las mismas condiciones en las que las venía desempeñando), la propuesta realizada por el apoderado de la demandada era válida. Aunado al hecho de que el trabajador no aceptó el reinstalo que se le ofreció en dicha audiencia, por lo que la presunción se aplicó indebidamente.

De acuerdo a reiterada jurisprudencia de esta Sala, el vicio invocado "es el resultado del proceso lógico jurídico que verifica el juzgador, a fin de establecer si el caso particular está o no contenido en la norma, concluyendo que lo está a pesar de que la norma que fue aplicada no era relevante para resolver el caso y sin embargo fue aplicada" (auto pronunciado en el incidente con referencia 60-CAL-2020, de fecha dos de marzo de dos mil veinte).

[...]

De las consideraciones realizadas por la Cámara, se advierte que aplicó a favor del trabajador demandante, la presunción de despido establecida en el art. 414 CT, en vista de que *"el patrono"* no se presentó a la audiencia conciliatoria, y fue el apoderado de la demandada quien ofreció el reinstalo en las mismas condiciones en que venía laborando el trabajador, medida que no fue aceptada por este último. A juicio del tribunal de alzada, al no haber sido el propio empleador quien ofreció el reinstalo, operaba a favor del trabajador la presunción referida. [...]

En cuanto a la presunción de despido establecida en el art. 414 CT, se debe tener en cuenta, que para que el juzgador la aplique a favor del trabajador, deben concurrir ciertos requisitos, que resulta menester analizar en el caso de autos. Así se advierte que el despido indirecto (según lo expresado en la demanda) ocurrió el día dieciséis de agosto de dos mil diecinueve; y la demanda fue presentada el día seis de septiembre de dos mil diecinueve, es decir, que se presentó dentro de los quince días hábiles siguientes al despido alegado; y que el apoderado de la demandada concurrió a la audiencia de conciliación, y ofreció al trabajador el reinstalo a sus labores en las mismas condiciones en que se venía desempeñando, pero este no fue aceptado por el trabajador (sin manifestar las razones por las cuales no aceptaba el mismo, según consta a folio […] de la pieza principal).

Ahora bien, a criterio de esta Sala, para que el ofrecimiento de una medida conciliatoria o en este caso del reinstalo del trabajador, a las labores que venía desempeñando, tenga validez en la audiencia conciliatoria; no es requisito

indispensable que quien la ofrezca sea el propio empleador por la naturaleza misma de la representación. Basta que quien ofrezca la medida (en nombre del empleador) cumpla con los requisitos legales del mandato (tal y como consta a folios […] de la pieza principal) para que la propuesta sea considerada como válida y efectiva.

Continuando con el análisis de los presupuestos, se advierte que la relación de trabajo que existió entre el trabajador demandante y la demandada, se tiene por comprobada con el ofrecimiento del reinstalo a sus laborales al trabajador demandante realizado por el apoderado de la demandada. Finalmente, y en virtud, que la declaración del testigo de cargo, señor BEAC, resultó deficiente, no se comprobó con este ni con otro medio probatorio la calidad de representante patronal de la persona a quien se le atribuyó en la demanda, haber realizado el despido indirecto.

En ese sentido, a juicio de esta Sala, no concurrieron los presupuestos procesales contenidos en el art. 414, para aplicar la presunción de despido a favor del trabajador demandante, por lo tanto, la Cámara aplicó indebidamente la disposición legal invocada como infringida, cometiendo el vicio denunciado.

En consecuencia, corresponde casar la sentencia por el vicio denunciado."

Sala de lo Civil, número de referencia: 73-CAL-2021, fecha de la resolución: 13/01/2022

CÁMARAS DE VIDEOVIGILANCIA

REQUISITOS PARA QUE LOS VIDEOS SE ANALICEN Y CONSIDEREN COMO PRUEBA

"En la misma condición se encuentra el video de la cámara de vigilancia ubicada en el portón de ingreso de la empresa […], Sociedad Anónima de Capital Variable (del doce de octubre de dos mil veinte), presentado por el abogado de la empleadora, a solicitud de la parte actora, a fin de acreditar que a la trabajadora demandante no se le permitió el ingreso al centro de trabajo en la fecha relacionada en la demanda como día en que ocurrió el supuesto despido (folios […] de la pieza principal). Esto, dado que, únicamente se presentó memoria USB, aduciendo que contenía el video entre las cuatro y cinco de la tarde del doce de octubre de dos mil veinte (folios […]), sin haberse incorporado el soporte en que se encontraban almacenadas las grabaciones de la cámara de video vigilancia (disco duro del sistema de video vigilancia de la empresa demandada); sobre ello, es importante mencionar que la legislación también habilita la posibilidad en caso que sea imposible el traslado de estos, para que el juez y las partes puedan acudir al lugar en que se encuentre la información.

Por esta razón, para esta Sala, la memoria USB, en los términos en que fue incorporada al proceso, no tiene valor probatorio."

Sala de lo Civil, número de referencia: 82-CAL-2022, fecha de la resolución: 18/07/2022

CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO

EL DOCUMENTO IDÓNEO PARA PROBAR SU EXISTENCIA ES LA CERTIFICACIÓN EXTENDIDA POR EL DEPARTAMENTO CORRESPONDIENTE DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL

"Errónea interpretación y aplicación del art. 281 CT

La recurrente afirma que hay infracción al art. 281 CT, y al respecto expone: *"[...] es oportuno pronunciarme sobre la copia del Contrato Colectivo de Trabajo incorporada por la parte demandante al proceso, no de una Certificación la cual es la exigencia del artículo antes señalado. En referencia a dicha fundamentación se concluye que el contrato colectivo de trabajo solo puede ser probado en dos circunstancias: 1. Puede probarse por medio del documento respectivo debidamente inscrito, y 2. Mediante Certificación de la inscripción extendida por el departamento correspondiente del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. ...[…]"(sic).*

Esta queja de la recurrente no tiene fundamento alguno, puesto que, a folios […] de la pieza principal está agregada al proceso la certificación del contrato colectivo, extendida por la directora general de trabajo, por tanto, no es una copia como lo manifiesta la litigante; así que, se cumplió con la exigencia establecida en el art. 281 CT, en cuanto a que sólo puede probarse la existencia del contrato colectivo mediante la certificación extendida por el departamento correspondiente del Ministerio de Trabajo y Previsión Social."

Sala de lo Civil, número de referencia: 151-CAL-2022, fecha de la resolución: 17/11/2022

INTERPRETACIÓN ERRÓNEA DEL ART. 281 CT. CUANDO EL AD QUEM CONSIDERA QUE PARA COMPROBAR SU EXISTENCIA, BASTA CON PRESENTAR COPIAS SIMPLES

"Primordialmente, la queja de la recurrente radica en que, a pesar de que la disposición legal (art. 281 CT) prescribe que la existencia del contrato colectivo de trabajo sólo puede probarse por medio del documento respectivo debidamente inscrito, o mediante certificación de la inscripción extendida por el Ministerio de Trabajo, la Cámara interpretó que era viable presentar una copia simple del contrato colectivo. (resaltado propio).

Es así que, la recurrente le atribuye el yerro de alterar el sentido de la disposición legal (art. 281 CT), al no haber sido bien interpretada la expresión "sólo puede probarse por medio". Desde luego que esto, tal como lo menciona la litigante conllevó a una errónea valoración del documento (contrato colectivo de trabajo).

Para continuar con el estudio del planteamiento de la recurrente, es imprescindible hacer referencia a que este submotivo de casación (interpretación errónea) se configura cuando el juzgador al analizar un precepto legal que es pertinente para resolver el caso concreto, lo restringe, amplía o altera su sentido.

En ese sentido, si lo restringe *"[...] excluye la aplicación de la disposición legal, y por ende, no subsume el caso en el supuesto normativo contemplado en ella. En cambio, cuando lo amplía, estaría incluyendo mal el caso dentro de un precepto legal que no corresponde. También puede alterar su sentido, cuando no ha sido bien interpretada alguna expresión jurídica de su contenido, lo que conllevaría a un análisis errado de la norma. […]"* (sic). Sentencia de casación de las ocho horas ocho minutos del doce de mayo de dos mil veintidós, clasificada bajo el número de referencia 103-CAC-2022.

De ahí que, con el propósito de dilucidar sobre el yerro invocado por la recurrente, se examina lo resuelto por la Cámara en su sentencia, específicamente sobre el contrato colectivo de trabajo.

En sus consideraciones el tribunal de alzada dijo: *"[...] para probar su existencia de conformidad al Art. 281 del Código de Trabajo, es necesario que se incorpore el mismo de manera documental, debidamente inscrito o certificado. (...) consta en autos un documento presentado por la parte actora para acreditar lo que reclama con base a un contrato colectivo de trabajo, que aun cuando no fue presentado en las condiciones antes mencionadas [original inscrito o certificado], pues se percibe que son simples fotocopias, con respecto a su valoración se puede aplicar lo dicho por la Sala de lo Constitucional, en su sentencia pronunciada a las diez horas con veintiún minutos del día diecinueve de diciembre del año dos mil doce, en el proceso de amparo con referencia 2-2011, donde expone reglas de valoración de ese tipo de documentos, de conformidad a las reglas de la sana crítica, siempre y cuando no haya sido acreditada la falsedad de estas o del original. En razón de ello, el documento agregado de Fs. [...], mantiene su validez y es prueba idónea para acreditar las condiciones laborales del demandante, al cálculo de indemnización mencionada por la parte actora, por tanto es procedente conforme a derecho, confirmar la decisión de la juzgadora [...]"* (sic).

Como se observa, la Cámara reconoce que el art. 281 CT prescribe que debe presentarse el contrato colectivo debidamente inscrito o certificado. Y para efectos de ilustrar se trae a consideración el contenido de esta disposición legal: *"La existencia del contrato colectivo de trabajo sólo puede probarse por medio del documento respectivo debidamente inscrito, o mediante certificación de la inscripción extendida por el departamento correspondiente del Ministerio de Trabajo y Previsión Social" (sic)*. (resaltado es de este tribunal).

Es decir, el legislador ha determinado que únicamente puede probarse la existencia del contrato colectivo mediante certificación de su inscripción extendida por el Ministerio de Trabajo o con el documento respectivamente inscrito, o sea, el original.

A pesar de ello, la Cámara interpretó que aun cuando el actor había presentado *"simples fotocopias"* del contrato colectivo de trabajo, el documento mantenía su validez y era prueba idónea para acreditar las condiciones laborales del demandante, dado que lo analizó amparándose en la jurisprudencia de la Sala de lo Constitucional; análisis que este tribunal considera errado, puesto que el precepto legal de forma expresa dispone exclusivamente de dos formas para acreditar la existencia del contrato colectivo de trabajo.

Por lo anterior, esta Sala estima que la Cámara si cometió la infracción atribuida por la recurrente, al haber interpretado que el art. 281 CT, admitía o permitía que para efectos de probar la existencia del contrato colectivo de trabajo bastaban las copias simples que presentó el actor; en otras palabras, el tribunal de segunda instancia no interpretó bien la expresión jurídica contenida en el precepto que establece que *"sólo puede probarse"*; por ello se sostiene que alteró su contenido y conllevó a un análisis errado de la norma.

En virtud de los razonamientos expuestos, la sentencia impugnada será casada por este submotivo y se pronunciará la que conforme a derecho corresponde (art. 537 CPCM)."

Sala de lo Civil, número de referencia: 167-CAL-2022, fecha de la resolución: 01/12/2022

Relaciones:

Sala de lo Civil, número de referencia: 291-CAL-2022, fecha de la resolución: 15/12/2022

Sala de lo Civil, número de referencia: 172-CAL-2022, fecha de la resolución: 08/12/2022

CONTRATOS SUJETOS AL DERECHO ADMINISTRATIVO

PROPIOS DEL FUNCIONAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS

"Para el presente análisis, este tribunal trae a consideración, en primer término, que de conformidad al art. 14 del Código Procesal Civil y Mercantil (en adelante CPCM), la dirección del proceso está confiada al juez, quien debe ejercerla de acuerdo a las disposiciones del citado código; y teniendo presente que cuando las disposiciones del derecho común no contraríen el texto y los principios procesales laborales, es viable su aplicación, de conformidad a lo establecido en los arts. 602 CT y 20 CPCM. En este sentido, este tribunal efectuará, en el caso de autos, el examen oficioso de competencia objetiva por razón de la materia, art. 40 CPCM, y al respecto se realiza el siguiente análisis:

Se advierte de la demanda que consta agregada al folio [...] del proceso, que el veintitrés de enero de dos mil veinte, la defensora pública laboral, licenciada [...], presentó dicho escrito ante la oficina receptora y distribuidora de demandas del Centro Judicial Integrado de Derecho Privado y Social, la que posteriormente fue asignada al Juzgado Primero de lo Laboral, con sede en esta ciudad. Por medio de aquella, demandó a la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempo, en juicio individual ordinario de trabajo, pago de indemnización por despido injusto, vacación y aguinaldo proporcional.

En el escrito en referencia, la defensora pública laboral, expuso que su poderdante ingresó a laborar para y a las órdenes de la institución demandada, el uno de octubre de dos mil dieciséis, en el cargo de técnico agrícola; consistiendo sus labores en administrar los viveros en la Central Hidroeléctrica Cinco de No-

viembre, coordinar los cultivos frutales, supervisar a los trabajadores agrícolas contratados por la Central Hidroeléctrica, entre otros; sujeto a una jornada ordinaria de trabajo de ocho horas diarias, y un horario de trabajo de lunes a viernes (de ocho de la mañana, a cuatro de la tarde), descansando los días sábados y domingos, devengando un salario mensual de mil ochocientos veinte dólares de los Estados Unidos de América.

Del mismo modo manifestó, que como a eso de las diez de la mañana del treinta y uno de diciembre de dos mil diecinueve, el señor JCF, jefe de la Unidad de Responsabilidad Social, de la entidad demandada, le manifestó a su representado que a partir de ese momento estaba despedido (hecho que ocurrió en el lugar de trabajo del demandante).

Expuestos los hechos consignados en la demanda y la pretensión que contiene la misma, y siendo que el recurso de casación fue admitido por medio de la resolución pronunciada a las diez horas veinticinco minutos del veintitrés de febrero del presente año, se advierte, que las labores desempeñadas por el señor VMOH, como técnico agrícola, consistían en administrar los viveros en la Central Hidroeléctrica Cinco de Noviembre, coordinar los cultivos frutales, supervisar a los trabajadores agrícolas contratados por la Central Hidroeléctrica, entre otros. Así también, que laboró para y bajo las órdenes de la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa, desde el uno de octubre de dos mil dieciséis hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil diecinueve. Por tanto, lo hizo de forma continua e ininterrumpida.

De folios [...], consta agregado el contrato y sus respectivas modificaciones, suscrito entre el trabajador demandante y el señor [...], en calidad de apoderado general administrativo de la Comisión referida, de fecha uno de octubre de dos mil dieciséis; del cual se advierte que el trabajador fue contratado como técnico agrícola y que prestaría sus servicios en el proyecto VIDA; la última modificación se hizo el uno de enero de dos mil diecinueve, cuya duración era de esa fecha al treinta y uno de diciembre de dos mil diecinueve.

Por otra parte, consta en autos (de folios [...]), la certificación notarial del punto del acta diez de la sesión de fecha veintitrés de agosto de dos mil dieciocho, de la junta directiva de la Comisión Hidroeléctrica del Río Lempa, que trató sobre la prórroga del Proyecto Vida, cuyo origen data del año dos mil dieciséis, y su propósito consiste en desarrollar programas que mejoren las condiciones ambientales, sociales y económicas de la población en las zonas de influencia de las empresas que integran el Grupo CEL.

En el relacionado documento se manifiesta, además, que a través de dicho proyecto se desarrollan actividades como reforestación, mego viveros y compostaje, las que tiene por deber la Comisión, pues le corresponde realizar todas las acciones necesarias para la protección medio ambiental de la cuenca del Río Lempa, donde se encuentran las cuatro centrales hidroeléctricas. Referente a ello, cabe señalar que el trabajador desempeñaba funciones atinentes al manejo de los viveros en la Central Hidroeléctrica Cinco de Noviembre y la supervisión de trabajadores agrícolas.

En este contexto también es importante señalar que de conformidad al art. 2 de la Ley de la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa, esta tiene por objeto desarrollar, conservar, administrar y utilizar los recursos energéticos y fuentes de energía de El Salvador. En ese sentido, la función de conservar dichos recursos, le obliga a emprender y gestionar programas que procuren la preservación de las fuentes de energía eléctrica; por ende, las actividades que desarrolló el referido trabajador constituyen labores permanentes y propias de la institución demandada.

Al respecto, es imprescindible traer a consideración que cuando se trata de personas vinculadas por contratos para desempeñar trabajos que conlleven prestación de servicios de carácter permanente, propios del funcionamiento de las instituciones públicas; están comprendidas en la carrera administrativa, según lo dispuesto por el art. 4 incisos segundo y cuarto de la Ley de Servicio Civil; regulación que ha sido ampliada por esta Sala al pronunciar la resolución de las diez horas seis minutos del diecinueve de octubre de dos mil veintiuno, en el incidente de apelación clasificado con referencia 13-APL-2019.

Por otra parte, en esa misma sentencia, esta Sala ha tenido en cuenta que la LSC define los servicios permanentes, para efectos de la misma ley, en el sentido de que son "aquellos prestados por una persona natural bajo la figura de la continuidad y dependencia o subordinación indispensable para el cumplimiento de los fines institucionales; recibiendo una remuneración financiada con recursos del presupuesto general del Estado".

Como consecuencia de la regulación antes mencionada, los contratos celebrados en las condiciones expresadas, son de carácter administrativo, y los actos que emita la institución pública contratante con relación a los mismos, así como todos los aspectos relacionados con el cumplimiento, ejecución y extinción de tales contratos, están sujetos al derecho administrativo."

LA CELEBRACIÓN, CUMPLIMIENTO, EJECUCIÓN Y EXTINCIÓN ESTÁ SUJETO AL DERECHO ADMINISTRATIVO Y, POR ENDE, EL CONOCIMIENTO DE LAS CONTROVERSIAS QUE SE SUSCITEN CON RELACIÓN A LOS MISMOS CORRESPONDE A LA JURISDICCIÓN CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA, Y NO A LA LABORAL

"En el caso analizado, tal como se ha expresado con anterioridad, se manifestó en la demanda que el servidor prestaba sus servicios como técnico agrícola, para la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa, la cual es una institución pública, y, conforme los razonamientos expuestos, se concluye que se trata de un contrato sujeto al derecho administrativo.

Por este motivo, y dada la naturaleza de la contratación del trabajador demandante, señor VMOH, la demanda objeto de este proceso no debió tramitarse bajo el ámbito de competencia de los tribunales laborales, sino ante los que tienen asignada competencia en materia contencioso administrativa; precisamente porque lo relativo a la celebración, cumplimiento, ejecución y extinción de los contratos de naturaleza administrativa, está sujeto al derecho administrativo y,

por ende, el conocimiento de las controversias que se susciten con relación a los mismos, corresponde a la jurisdicción contencioso administrativa, y no a la laboral, según lo dispuesto en los arts. 1 y 5 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.

En torno a lo expuesto, es indispensable señalar que el juez en su, esfera de actuación está obligado a cumplir con las reglas y principios procesales previstos en la ley, y debe garantizar y proteger los derechos de rango constitucional que a las partes les asiste. En cuanto al proceso constitucionalmente configurado, la legalidad constituye un pilar fundamental. En ese marco, también al juez le asisten una serie de facultades a fin de subsanar defectos procesales que incidan en la debida construcción del proceso; entre estas, posee la facultad de advertir o declarar las nulidades que se hayan producido en las diferentes actuaciones, con relación a los jueces o tribunal, a las partes y al proceso, arts. 235 inc 1° y 238 inc. 1° CPCM.

En este sentido, esta Sala advierte nulidad en las actuaciones, dado que las ha sustanciado un tribunal que carece de competencia objetiva por razón de la materia para hacerlo, y corresponde tramitarlo a un juzgado de lo contencioso administrativo por las razones manifestadas en los párrafos precedentes.

En consecuencia, este tribunal deberá declarar la nulidad de todas las actuaciones procesales, desde el auto de admisión de la demanda y lo que sea su consecuencia, amparado en los arts. 232 letra a) y 238 inc. 1° CPCM; declarar la improponibilidad de la demanda y ordenar la remisión del proceso al tribunal competente."

Sala de lo Civil, número de referencia: 25-CAL-2022, fecha de la resolución: 02/06/2022

CUANDO EL FALLO OMITIERE RESOLVER PUNTOS PLANTEADOS

DECLARATORIA DE INADMISIBILIDAD CUANDO EL RECURRENTE NO TIENE LA CALIDAD DE APELANTE EN SEGUNDA INSTANCIA

"Cuando el fallo omite resolver puntos planteados

Precepto infringido el art. 419 CT

Este tribunal a través de la jurisprudencia ha determinado que la infracción de *"omisión de resolver en el fallo puntos planteados"*, se produce cuando habiendo el apelante definido claramente los puntos apelados, el tribunal de apelación, omite en su sentencia hacer un análisis de ellos o alguno de ellos, es decir, deja de resolver los motivos de inconformidad del impugnante con la sentencia de primera instancia. (resolución de casación 61-CAL-2021, de las diez horas veinticinco minutos del ocho de julio de dos mil veintiuno).

[...]

El licenciado […] afirma que la Cámara condenó a su representada, en concepto de indemnización, a un monto mayor al de la reclamada en la demanda y la ampliación de la misma, por tanto es superior a lo solicitado por el trabajador

demandante. Así también sostiene que dicho tribunal, olvidó pronunciarse sobre la prueba de descargo con la que se establecían las causales de despido.

Cabe señalar, que a pesar de que únicamente podría considerarse para estudio del submotivo invocado por el recurrente, la parte relativa a la omisión en la valoración de la prueba de descargo, se advierte que el licenciado [...], no tiene la calidad de apelante ante la Cámara, pues quienes impugnaron la sentencia de primera instancia fueron los abogados […], apoderados del trabajador demandante, al haber interpuesto el recurso de apelación ante la sentencia desfavorable a su representado.

Por lo anterior, resulta menester mencionar, que no es posible alegar el submotivo de omisión de resolver puntos planteados si no se tiene la calidad de apelante en segunda instancia; en consecuencia, el recurso es inadmisible por esta infracción."

Sala de lo Civil, número de referencia: 184-CAL-2021, fecha de la resolución: 10/03/2022

EL AD QUEM COMETE LA VULNERACIÓN ALEGADA EN RELACIÓN AL ART. 284 CPCM, CUANDO OMITE RESOLVER LA EXCEPCIÓN INTERPUESTA POR LA PARTE DEMANDADA

"Cuando el fallo omitiere resolver puntos planteados

En el submotivo bajo análisis, la recurrente sostiene que, la Cámara Segunda de lo Laboral, con sede en esta ciudad, omitió resolver los siguientes agravios propuestos en el recurso de apelación: "[...] Se debió haber admitido y valorado la prueba incorporada en el término probatorio. Errónea aplicación e interpretación del artículo 602 del Código de Trabajo. Errónea aplicación e interpretación del artículo 20 del Código Procesal Civil y Mercantil. Errónea aplicación e interpretación del artículo 284 del Código Procesal Civil y Mercantil [...]" (sic).

Como es factible observar, la inconformidad de la litigante radica en que, el tribunal de segunda instancia no dio respuesta a los puntos impugnados en la alzada (descritos en el párrafo anterior).

Para iniciar con el análisis de la infracción de que trata, es imprescindible hacer referencia a que este submotivo de casación versa sobre la inobservancia al principio de congruencia (art. 419 CT). Y en correspondencia a ello, este tribunal ha determinado que "[...] la falta de respuesta evidencia una clara denegación de justicia por la vía de omitir la protección solicitada; y en relación a la facultad de disposición que tienen las partes de la relación jurídico procesal, su inobservancia se da cuando por exceso la sentencia concede más de lo que el actor solicitó (ultra petita); cuando concede una cosa distinta a lo pedido, es decir, se pronuncia sobre determinados extremos al margen de lo suplicado por las partes (extra petita) y también si se dejan incontestadas y sin resolver algunas de las pretensiones sostenidas por las partes (citrapetita)". Sentencia de casación de las diez horas treinta y dos minutos del veintidós de julio de dos mil veintiuno, clasificada bajo el número de referencia 16-CAL-2021.

Por lo anterior, y con el propósito de dilucidar sobre el yerro invocado por la recurrente, se examinan los agravios propuestos en el recurso de apelación y también lo resuelto por la Cámara en su sentencia.

Es así que, del incidente de apelación (folios […]) se advierte que la abogada apelante, licenciada […], basó la impugnación en cuatro puntos, los que enunció así: "*errónea interpretación y errónea aplicación de los arts. 396 inc. 2°, 394 y 416 CT, se debió haber admitido y valorado la prueba incorporada en el término probatorio, errónea aplicación del art. 314 y 347 CPCM y del art. 1892 del Código Civil, y errónea aplicación e interpretación del art. 414 CT".*

Por consiguiente, lo alegado por la recurrente en el vicio en análisis, correspondiente a la errónea aplicación e interpretación de los arts. 20 CPCM y 602 CT, no tiene cabida, pues únicamente se relacionó tal inconformidad en la parte petitoria del recurso de apelación, pero no hay fundamentación sobre esos agravios. Así que, tampoco hay probabilidad sobre la existencia de alguna infracción por parte del tribunal de alzada.

No obstante, la apelante en el primer agravio referente a la errónea interpretación y aplicación de los arts. 394, 396 inc. 2° y 416 CT, argumentó que la contestación de la demanda está referida a controvertir los hechos planteados en la misma, y que, la terminación contractual sin responsabilidad para el empleador constituye una excepción, pues esta, de ninguna manera podría considerarse como una forma de contestar la demanda con el propósito de extinguir la sustanciación del derecho o la pretensión, para ello, trajo a consideración el contenido e interpretación del art. 284 CPCM.

Sobre el alegato anterior, no hay respuesta por parte de la Cámara, teniendo en cuenta que, el fundamento de la sentencia, en lo que respecta al primer agravio, está orientado a resolver lo relativo a la excepción interpuesta, el momento procesal oportuno y la forma para alegarse. De modo que, el tribunal de alzada omitió resolver el planteamiento de la abogada apelante en lo tocante al art. 284 CPCM.

Continuando con el análisis del proveído del tribunal de segunda instancia, precisamente porque la recurrente también sostiene que existió negativa en la respuesta que correspondía dar, con relación a que se debió haber admitido y valorado la prueba incorporada en el término probatorio. Al respecto se advierte que, la Cámara al tratar lo relativo a la excepción opuesta por la sociedad demandada, sostuvo que *"[...] la excepción planteada por la parte demandada, no fue interpuesta en el momento procesal oportuno, sino que ésta se hizo hasta el séptimo día hábil del término de prueba [veintinueve de junio de dos mil veintiuno], contraviniendo la línea jurisprudencia" más reciente dada por la Sala de lo Civil, en lo que atañe a la alegación de eximentes de responsabilidad, por lo que, no se puede tomar en cuenta el argumento de defensa procesal, y se considera innecesario entrar a valorar la prueba de descargo aportada [documentos y declaración de parte contraria- por la parte demandada de Fs. […] de la pieza principal, todo con el afán de no vulnerarle algún principio o derecho constitucional de la parte demandante, y por no contar con un cuadro factico para tal efecto [...]" (sic).*

Como puede apreciarse, el tribunal de segunda instancia estimó que era innecesario valorar la prueba de descargo aportada, pues según su análisis, la excepción no fue interpuesta en el momento procesal oportuno, sino hasta el séptimo día hábil del término probatorio; circunstancia por la que prescindió de la valoración de la prueba incorporada al proceso para acreditar el mecanismo de defensa.

De esa forma, el tribunal de segunda instancia respondió con referencia a la inconformidad planteada por la abogada […]; por tanto, se estima, que el punto apelado no quedó omiso, ya que la Cámara lo resolvió, tal vez no a satisfacción de la apelante; sin embargo, esa causa no puede ampararse en el submotivo bajo estudio.

En síntesis, al finalizar el examen de los considerandos de la sentencia de la Cámara Segunda de lo Laboral, con sede en esta ciudad, se concluye que efectivamente dicho tribunal cometió la infracción atribuida al omitir resolver el planteamiento de la abogada apelante en lo relativo al art. 284 CPCM; por tanto, corresponde casar la sentencia, y pronunciar la que conforme a derecho corresponde (art. 537 CPCM)."

Sala de lo Civil, número de referencia: 168-CAL-2022, fecha de la resolución: 20/10/2022

DENUNCIA DE NULIDAD PROCESAL DE ACTUACIONES EN VÍA DE RECURSO

REQUISITOS QUE DEBEN CUMPLIRSE PARA SU ADMISIÓN

"Por otra parte, este tribunal advierte, que la abogada recurrente en los submotivos de errónea aplicación de los arts. 383 inc. 1° CT y 218 CPCM, y omisión de resolver puntos planteados, ha expresado argumentos tendentes a introducir una denuncia de nulidad. Sobre esto, debe señalarse que únicamente el segundo de los submotivos ha reunido los requisitos para su admisión.

Lo anterior se debe tomar en cuenta, ya que esta Sala ha establecido un presupuesto determinante para el conocimiento de las denuncias de nulidades, siendo que *"[…] la única limitante para examinar actuaciones bajo la modalidad en comento, es que el recurso sea admisible, puesto que la admisión del mismo da la apertura necesaria a efecto de examinar el contenido pleno del proceso. Esto es así, debido a que la procedencia del recurso está vinculada a presupuestos procesales que no tienen conexión con el fondo del proceso, ya que verificar que la resolución sea impugnable, que cause un agravio o que el recurso haya sido interpuesto para que lo conozca el tribunal competente por la parte agraviada, son cuestiones procesales que deben concurrir en la causa respectiva [...]"* (sic) (resolución pronunciada en el incidente de casación clasificado bajo referencia 13-CAC-2022, de las ocho horas seis minutos del nueve de marzo de dos mil veintidós.

A pesar de esto, el planteamiento relativo a esta pretensión de nulidad no tiene los elementos o condiciones requeridas para su admisión, puesto que este tribunal en su jurisprudencia ha determinado que "[...] la denuncia de nulidad procesal de actuaciones en vía de recurso, para admitir la misma es necesario que se cumplan con determinados requisitos, entre ellos es necesario que se identifique el acto procesal que pretende anularse, el tipo de nulidad que adolece, las disposiciones legales que fueron inobservadas y que se sustente la indefensión sufrida, esto es, que se demuestre cómo la configuración del supuesto que da cabida a la anulación de actos procesales, afecta la esfera de los derechos o garantías procesales de la parte que la alega […]" (sic) ésta transcripción también corresponde a la jurisprudencia citada en el párrafo que antecede.

En el recurso de casación la litigante sostiene, que se infringieron los derechos de audiencia y defensa al resolver oficiosamente la modificación y ampliación de la demanda; según la recurrente esto, transgredió el principio de congruencia, pues la parte demandante nunca lo solicitó. Así también manifiesta, que la nulidad tiene cabida dado que, la Cámara omitió resolver agravios propuestos en el recurso de apelación relativos a la valoración de prueba testimonial, falta de fundamentación e incongruencia de la sentencia, y además respecto de la excepción alegada. Circunstancia que tiene incidencia en sustanciación de todo el proceso laboral; por tanto, dichas actuaciones procesales traen nulidad en el fallo y las sentencias de ambos tribunales, primera y segunda instancia.

De lo expuesto por la recurrente, se observa que no se refiere a ningún acto procesal sino que pretende que se anulen las sentencias de las dos instancias, no describe el tipo de nulidad alegada, y los argumentos cuyo objeto es demostrar la configuración del supuesto de nulidad y además la indefensión sufrida por actos procesales ejecutados con infracción de la normativa procesal no son específicos, por referirse a las sentencias de ambas instancias, en lo relativo a que el tribunal de primera instancia de forma oficiosa amplió la demanda, así como por la omisión al resolver los agravios expuestos en el recurso de apelación, es decir, se pretende que se anulen las sentencias; la recurrente debió delimitar dicho punto para tener claridad respecto a qué acto procesal llevado a cabo por cada tribunal propició la nulidad, dado que no se le puede atribuir nulidad al tribunal de alzada por confirmar la decisión de primera instancia.

En consecuencia, no son admisibles las peticiones de nulidad con mención de la supuesta infracción de los arts. 383 inc. 1° CT y 218 CPCM.

Por último, se observa que en el petitorio del recurso en análisis, se solicita se tenga por interpuesta la impugnación por "errónea aplicación de los arts. 602 CT, 20, 314 y 347 CPCM", los que no fueron desarrollados en el escrito objeto de esta resolución; por ello, este tribunal no efectúa estudio al respecto."

Sala de lo Civil, número de referencia: 151-CAL-2022, fecha de la resolución: 10/08/2022

DENTRO DEL EXAMEN DE ADMISIBILIDAD DEL RECURSO DE CASACIÓN NO ES PROCEDENTE CALIFICAR LA ADMISIBILIDAD DE LAS DENUNCIAS DE NULIDAD

"Sobre el examen de admisibilidad de las peticiones de nulidad

En la decisión que precede, se ha expresado lo siguiente: "(...) este tribunal advierte, que la abogada recurrente en los submotivos de errónea aplicación de los arts. 383 inc. 1° y 218 CPCM, y omisión de resolver puntos planteados, ha expresado argumentos tendentes a introducir una denuncia de nulidad". Seguidamente, en dicha decisión se ha concluido que la recurrente: "(...) no se refiere a ningún acto procesal sino que pretende que se anulen las sentencias de las dos instancias, no describe el tipo de nulidad alegada, y los argumentos cuyo objeto es demostrar la configuración del supuesto de nulidad y además la indefensión sufrida por actos procesales ejecutados con infracción de la normativa procesal no son específicos (...)", razón por la cual concluye que "no son admisibles las peticiones de nulidad".

Al respecto, considero que, en esta etapa del incidente, lo fique corresponde es calificar la admisibilidad de los motivos de casación invocados. Por tanto, lo que se debe examinar en la resolución inicial, es si dichos motivos han sido configurados y fundamentados en legal forma.

En consecuencia, no comparto el criterio relativo a que en esta etapa sea necesario ni procedente calificar la admisibilidad de las denuncias de nulidad. Más bien, de resultar admisible el recurso de casación, será hasta en la sentencia en la que corresponderá hacer las calificaciones respectivas con relación a las nulidades denunciadas por el recurrente, antes de pronunciarse sobre los motivos de casación invocados.

La anterior conclusión se fundamenta en el contenido del artículo 238 CPCM, el cual dispone que, si al interponerse algún recurso, se hubiere denunciado nulidad, "(...) el tribunal que decida el recurso deberá pronunciarse inicialmente sobre la misma, y sólo en caso de desestimarse entrará a resolver sobre otros agravios alegados por el recurrente. Si se estimare la denuncia de nulidad y su declaración hiciere imposible el aprovechamiento de los actos procesales posteriores, se acordará que el proceso se retrotraiga al estado en que se encontraba en el momento de incurrirse en el vicio".

Por tanto, no comparto la decisión y los argumentos que se refieren a la calificación de los requisitos de admisibilidad de las peticiones de nulidad en esta etapa del incidente. A mi juicio, en la resolución respecto de la que disiento, no debería realizarse ninguna calificación relacionada con las peticiones de nulidad planteadas.

Conclusión

A mi juicio, el recurso debe admitirse, en los términos acá expuestos, con relación al submotivo que se ha denominado corno "errónea interpretación del artículo 281 del Código de Trabajo, ya que en la apreciación de las pruebas haya habido error de derecho" (según lo denominó la recurrente); y no se debería realizar ninguna calificación relacionada con las peticiones de nulidad planteadas." Así mi voto."

Sala de lo Civil, número de referencia: 151-CAL-2022, fecha de la resolución: 10/08/2022

LA DENUNCIA NO SERÁ ADMITIDA CUANDO EL RECURRENTE NO DESCRIBE EL TIPO DE NULIDAD ALEGADA, NI LOS ARGUMENTOS QUE DEMUESTREN LA CONFIGURACIÓN DEL SUPUESTO DE NULIDAD, SINO QUE PRETENDE QUE SE ANULE LA SENTENCIA DICTADA EN PRIMERA INSTANCIA

"Del planteamiento de la abogada apelante se advierte, que no se refiere a ningún acto procesal sino que pretende que se anule la sentencia de primera instancia, ya que no describe el tipo de nulidad alegada, y los argumentos que demuestren la configuración del supuesto de nulidad. Además la indefensión sufrida por actos procesales ejecutados con infracción de la normativa procesal no son específicos, por referirse a que, a pesar de que el juez tuvo por interpuesta la excepción de terminación contractual sin responsabilidad para el empleador, no valoró los documentos que se incorporaron, por lo que la utilizó desproporcionalmente, y únicamente para establecer la desvinculación laboral. Por otra parte, argumenta la licenciada […], que la nulidad impera por aplicar supletoriamente el Código Procesal Civil y Mercantil, a pesar de que no correspondía hacerlo, puesto que existe normativa en cuanto a las excepciones en el Código de Trabajo. Con relación a esto, la recurrente debió describir concretamente dicho punto para tener claridad respecto a qué acto procesal llevado a cabo por el tribunal, propició la nulidad, en tanto que afectó las garantías procesales de su representada.

Lo anterior, causa que las peticiones de nulidad no sean admisibles con mención de la supuesta infracción de los arts. 394 y 416 CT."

Sala de lo Civil, número de referencia: 151-CAL-2022, fecha de la resolución: 17/11/2022

Relaciones:

Sala de lo Civil, número de referencia: 172-CAL-2022, fecha de la resolución: 08/12/2022

DESPIDO INDIRECTO

NO ES EJECUTADO DIRECTAMENTE POR EL PATRONO O SUS REPRESENTANTES, SINO EN EL QUE SE RECURRE A DETERMINADAS CONDUCTAS PARA HACERLO; TAL COMO NEGARLE EL INGRESO AL TRABAJADOR AL CENTRO DE TRABAJO, POR MEDIO DEL PERSONAL DE LA EMPRESA

"III. JUSTIFICACIÓN DE LA SENTENCIA

De acuerdo a lo expuesto en párrafos que preceden, la justificación de esta sentencia debe estar encaminada a dilucidar los puntos de agravio planteados por el recurrente en el recurso de alzada correspondiente.

El abogado apelante, licenciado […], apoderado de la sociedad demandada, impugnó el fallo de primera instancia, argumentando que no estaba de acuerdo

con dicha sentencia, puesto que el despido alegado en la demanda, no es indirecto (art. 56 CT) sino presunto tal como se determina en el inciso 3º del art. 55 CT, al haber alegado la demandante que *"se le impidió el ingreso a su lugar de trabajo".*

En ese orden, asegura que con la prueba aportada (testimonial y declaración de parte contraria del representante legal de su representada) no se acreditó el despido reclamado, es decir, la situación relativa a que no se le permitió el ingreso a la trabajadora a su centro de trabajo; dado que, no existió reconocimiento en la declaración de parte contraria, y los testigos examinados fueron de referencia. Aun y cuando, según el recurrente, se hubiese probado el hecho de no haberle permitido ingresar al lugar de trabajo, no era posible establecer el despido presunto, pues estaba fuera del horario de trabajo de la demandante.

Por ello sostiene, que la Cámara aplicó indebidamente la presunción contenida en el art. 414 CT, pues esta opera para el despido directo, pero no para el caso de mérito; y por otro lado sostiene, que no se probó la supuesta y actual calidad del representante legal de la persona que ordenó la restricción del ingreso a la trabajadora al centro de trabajo.

Finalmente expresó que no estaba de acuerdo en la valoración de la prueba testimonial de descargo que efectuó el tribunal de primera instancia, por haber estimado que no merecía fe *"en virtud de que su credibilidad se ve atenuada al ser empleado de la sociedad demandada, por ser de fácil inducción a declarar hechos que favorecieran a su patrono".* El apelante afirma que al ser el encargado de vigilancia del centro de trabajo de la demandante, era el testigo idóneo para dar fe de que la trabajadora no se presentó el día y hora en que supuestamente se le negó el ingreso.

Expuestos los puntos apelados, este tribunal procede a analizarlos.

La postura del apelante consiste en que el despido alegado en la demanda no es indirecto, sino presunto, así como lo establece el inciso 3º del art. 55 CT.

[...]

Como puede apreciarse, de la exposición de la trabajadora se advierte que, esencialmente, alega un despido a causa de habérsele negado el ingreso al centro de trabajo por parte del vigilante. Bajo ese supuesto, debe señalarse que el Código de Trabajo en el art. 55 atinente al despido establece lo siguiente: [...] *"El contrato de trabajo termina por despido de hecho, salvo los casos que resulten exceptuados por este Código. El despido que fuere comunicado al trabajador por persona distinta del patrono o de sus representantes patronales, no produce el efecto de dar por terminado el contrato de trabajo, salvo que dicha comunicación fuese por escrito y firmada por el patrono o alguno de dichos representantes. Se presume legalmente que todo despido de hecho es sin justa causa. Asimismo se presume la existencia del despido, cuando al trabajador no le fuere permitido el ingreso al centro de trabajo dentro del horario correspondiente [...]"* (sic).

El **inciso tercero** de dicha disposición legal, hace referencia al despido que no es patrocinado directamente por el empleador ni sus representantes patronales, sino en el que se recurre a determinadas conductas para hacerlo; tal es

el caso de negarle el ingreso al trabajador al centro de trabajo por medio del personal de la empresa (agentes de seguridad, porteros, vigilantes, entre otros). Por este motivo se le denomina despido indirecto, pues si bien, causa la terminación del contrato de trabajo, no es directamente por el empleador (el resaltado es nuestro).

En ese contexto, es factible determinar que la trabajadora demandante, señora […], reclama, en su demanda, haber sido despedida de forma indirecta; en consecuencia, se trata del supuesto descrito por el legislador en el inciso 3º del art. 55 CT, y no del contenido en el art. 56 CT; aclaración que es pertinente hacerla, dado que el apelante sostuvo que el despido de autos *"no es un despido indirecto del que es regulado en el art. 56 del Código de Trabajo sino que es un despido presunto de conformidad al inc. 3ro del art. 55 del mismo Código"*. Por otra parte, si bien en el art. 56 CT, está prescrito también un despido indirecto, pero es bajo otros supuestos distintos a los descritos en la demanda del caso de autos.

Doctrinariamente, los autores Thayer y Novoa definen el despido indirecto como *"el término del contrato decidido por el trabajador y de acuerdo al procedimiento que la ley franquea, motivado porque el empleador incurrió en la causal de caducidad de contrato que le sea imputable, lo cual da derecho al trabajador al pago de la correspondiente indemnización por años de servicio".* Ormazábal Estay, Nastasia (Profesor guía: Dr. Eduardo Caamaño Rojo), Naturaleza jurídica del despido indirecto, Universidad Católica de Valparaíso, Valparaíso, Chile, 2015."

CAUSAL EXCEPCIONAL DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO CUYO PROPÓSITO ES PROVOCAR LA TERMINACIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL CON UNA ESTRATEGIA DISTINTA

"El despido indirecto es una causal excepcional de terminación del contrato de trabajo, donde media el incumplimiento grave del empleador al contrato de trabajo, cuyo propósito es provocar la terminación de la relación laboral con una estrategia distinta, es decir, no desea comunicárselo directamente o por medio de sus representantes.

Partiendo de lo anterior, el despido indirecto conlleva ciertos presupuestos o elementos para su configuración tales como, que no se le permita el ingreso al trabajador al centro de trabajo, dentro del horario correspondiente (fijado por el empleador, art. 165 CT); obviamente se parte del supuesto sobre la existencia de una relación laboral vigente entre las partes (trabajador/empleador), por ello también debe acreditarse esa circunstancia. Una vez probado el hecho que al trabajador no le fue permitido el ingreso al centro de trabajo, dentro del horario que le corresponde desarrollar las actividades encomendadas, **se presume el despido, así lo dispone el inc. 3º del art. 55 CT** (incidente de casación referencia 43-C-2006, mediante decisión del once de julio de 2006) (el resaltado es de este tribunal).

De ahí que, es importante mencionar que de conformidad a lo prescrito en el art. 55 CT, no es relevante para su configuración, quién o quiénes le niegan el ingreso al trabajador al establecimiento donde desempeña sus labores, es decir, es indistinto quien lo hace; sin embargo, se entiende que las personas que restringe o permiten el ingreso de una o varias personas al centro de trabajo, lo hacen por órdenes del empleador (incidente de casación con referencia 440-2001, decisión del dieciocho de septiembre de dos mil uno).

En este punto, también es indispensable traer a consideración que en cuanto al despido indirecto este tribunal ha considerado que: *[...] "el hecho que hace presumir el despido es el no haberle permitido el ingreso al centro de trabajo, al trabajador, durante su jornada laboral [...]" (sic).* (incidente de casación con referencia 153-C-2006, decisión de las once horas del cinco de noviembre de dos mil siete).

Determinado que al despido indirecto le es aplicable la presunción contenida en el inc. 3º del art. 55 CT, se hará el análisis pertinente, con motivo del agravio del apelante, al haber alegado que se aplicó indebidamente la presunción contenida en el art. 414 CT, pues según el recurrente tiene lugar en el despido directo, pero no para el caso en estudio."

DIFERENCIA ENTRE DESPIDO DIRECTO

"Sobre este tópico, el art. 414 inc. 2º CT, dispone que la presunción de despido procede en los juicios de reclamo por despido de hecho; sin embargo, las circunstancias o sucesos que rodean al despido directo y al indirecto, son distintas, debido a que, en el primero, siempre media la voluntad del empleador en dar por finalizada la relación laboral sea con justa causa o no; pero la comunicación de esa decisión debe hacerla un representante del empleador, generalmente, lo hace de forma verbal, y en caso de ser por escrito debe estar firmada por el empleador o alguno de sus representantes; a diferencia, en el indirecto, no existe ese tipo de comunicación sino que, el empleador recurre a otra estrategia para prescindir del trabajador, y le niega el ingreso al centro de trabajo, entre otros.

Bajo ese escenario, el trabajador que es despedido de forma indirecta por el empleador tiene más dificultades para probarlo, debido a que precisamente ocurre cuando se disponía a desarrollar normalmente sus labores; es por ello, que el CT prescribe que se presume la existencia del despido, cuando al trabajador no le fuere permitido el ingreso al centro de trabajo dentro del horario correspondiente. En el mismo sentido, el legislador ha tomado en cuenta que en materia de carga de la prueba se debe considerar que el empleador se encuentra en una posición privilegiada de manejo de la información, y por tal razón, establece la presunción a favor del trabajador.

Por lo anterior, el trabajador debe probar únicamente que no le fue permitido el ingreso al centro de trabajo, y que existe una relación laboral vigente.

Por otra parte, volviendo a las diferencias entre el despido indirecto y directo; de ello deriva que, en el segundo debe probarse la representación patronal de la

persona a quien se le atribuye el hecho, mientras que, en el indirecto no hay obligación de hacerlo, puesto que no necesariamente se trata de un representante del empleador quien niega el ingreso al trabajador al centro de trabajo; es más, comúnmente se auxilian del personal a cargo de la seguridad de la empresa o centro de trabajo.

En síntesis, y dadas las diferencias entre el despido directo y el indirecto, más las condiciones en que se producen, la presunción aplicable al despido indirecto es la del inc. 3º del art. 55 CT.

Por otra parte, el apelante sostiene que no se probó el despido alegado con la prueba aportada (testimonial y declaración de parte contraria del representante legal de la demandada), y que además no era posible establecerlo en virtud de que "estaba fuera del horario de trabajo de la demandante".

En primer lugar, debe señalarse que según la demanda, la trabajadora se desempeñaba en el horario de las ocho y treinta de la mañana a las cinco y treinta de la tarde, de lunes a viernes, y el doce de octubre de dos mil veinte(fecha en que ocurrió el despido según la demanda), fue día lunes; por consiguiente, si el supuesto despido se propició a las cuatro y treinta minutos de la tarde de la citada fecha, fácilmente se comprende que fue dentro del horario correspondiente.

[...]

En el análisis de la prueba testimonial se advierte, que este medio probatorio no acreditó el despido alegado en la demanda, dado que, los testigos señores, [...], expresaron tener conocimiento del despido pero no de forma personal; en el caso del señor [...], dijo que en una reunión que sostenía con la trabajadora semanalmente, le había comentado "algunos detalles"; y la testigo [...], manifestó que la demandante se lo había dicho a través de una llamada que le hizo.

Por consiguiente, este tribunal concluye que los testigos presentados por la actora, al no tener conocimiento personal sobre el hecho objeto de prueba (el despido) no merecen fe, pues debe considerárseles testigos de referencia (art. 357 CPCM). En este apartado también vale la pena mencionar, que a pesar de haber sido presentados a efecto de establecer el despido, no fueron interrogados en la audiencia acerca de las circunstancias y forma en que ocurrió el mismo.

Por otra parte, con la declaración del señor [...], representante legal de la sociedad demandada, tampoco se logró establecer o probar el despido de la trabajadora demandante, pues con relación a la pregunta efectuada por la defensora pública laboral, relativa a que si el día doce de octubre de dos mil veinte, la demandante se había presentado a su lugar de trabajo, el señor M respondió que la demandante no se había presentado; sin embargo es un hecho que tampoco le consta porque expresó saberlo a través de un informe (control de quiénes se presentan a trabajar). Además señaló estar presente en esa fecha (doce de octubre de dos mil veinte) en la fábrica, sin especificar en qué lugar estaba a la hora en que sucedió el supuesto hecho. En síntesis, este medio probatorio no aportó ningún elemento para acreditar el despido, debido a que el declarante no reconoció ni respondió afirmativamente a las preguntas atinentes para acreditarlo."[…]

Por otra parte, este tribunal, estima que la nota agregada al proceso, a folios […] de la pieza principal (entrega de teléfono celular utilizado para realizar actividades de trabajo), no aporta elementos para acreditar el despido, tal como lo pretendió la actora, púes según su planteamiento se propició de forma indirecta; en consecuencia, debido a la falta de pertinencia con el extremo principal a establecer (que no se le permitió el ingreso a la demandante al centro de trabajo, en el horario correspondiente), no se le concede valor alguno.

Y por último, con relación a la valoración de la prueba de cargo, los documentos presentados para probar la relación laboral que existió entre la trabajadora y la sociedad demandada, así como el contrato de trabajo y sus condiciones (salario), incorporados a los folios ([…]), no serán analizados, puesto que tales circunstancias no han sido un punto en contienda en el juicio, debido a que empleadora nunca la controvirtió, por ende, es un hecho admitido (art. 314 ord. 1º CPCM)."

PARA CONDENAR AL PAGO DE LAS PRESTACIONES RECLAMADAS EN LA DEMANDA, ES NECESARIO PROBAR EL HECHO DE QUE AL TRABAJADOR NO LE FUE PERMITIDO EL INGRESO AL CENTRO DE TRABAJO, EN EL HORARIO QUE LE CORRESPONDE DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES ENCOMENDADAS

"Analizadas que han sido las pruebas aportadas por la actora, corresponde hacerlo con las de la demandada, máxime que el apelante mostró inconformidad en el recurso de alzada, respecto de la valoración de la prueba testimonial de descargo, específicamente sobre la declaración del señor […], ya que, la Cámara le restó valor probatorio, y según el recurrente al ser el encargado de vigilancia del centro de trabajo de la demandante, era el testigo idóneo. No obstante, previo al estudio de los medios probatorios, se hará referencia a los hechos alegados para oponerse a la pretensión.

Se observa que el abogado de la empleadora demandada presentó escrito (folio […] de la pieza principal), mediante el que alegó falta de legitimación del derecho de la actora, de conformidad al art. 602 con relación al 66 CPCM, para probar tal circunstancia presentó prueba testimonial, y la trabajadora rindió declaración de parte contraria. Tal oposición la planteó así:

[...]

Para probar su tesis, en la respectiva audiencia rindió declaración el testigo, señor […]. Al respecto se observa, que su deposición no es convincente, pues a pesar de que dice conocer a las partes que intervienen en el proceso, expone que tiene conocimiento de los reclamos de la trabajadora por haber leído la demanda; en seguida el abogado le pregunta ¿por qué leyó la demanda? a lo cual contesta, que brinda seguridad en la empresa, y que cuando llegan esos documentos los lee; de lo cual le surge la duda a este tribunal, si en realidad conoce a la demandante; esto, es relevante para el caso, porque para declarar respecto a que determinada persona no se presentó al portón de entrada de una empresa (donde ingresa cierto número de personas diariamente), es necesario conocerla no sólo físicamente sino por su nombre, pues de esta manera se tiene la certeza de que se trata de la misma persona que ha demandado.

Así también se advierte del desarrollo del interrogatorio, que le efectuaron las preguntas relativas a que si la trabajadora se presentó al centro de trabajo en la fecha y hora que ocurrió el supuesto despido, a lo que respondió que no llegó a la empresa; sin embargo, no se logra tener certeza de su dicho, dado que, a pesar de haber respondido que estaba brindando seguridad en la entrada principal de la empresa, el día y hora señalado en la demanda, dijo que lo sabía por haber permanecido en la caseta de la entrada principal de la empresa las veinticuatro horas de ese día, pero no consta en el proceso documento alguno que relacione que el turno del doce de octubre de dos mil veinte (día del despido según la trabajadora), le correspondía trabajarlo al declarante, señor […], pues como es conocido por todos, el personal a cargo de la seguridad de una empresa se desempeña con programaciones de turnos.

Por otra parte, en la declaración del testigo se evidencian contradicciones, respecto de las preguntas sobre el teletrabajo; pues al inicio dijo que los empleados mayores de edad gozaban del beneficio de trabajar a domicilio, pero, posteriormente, al ser interrogado por el defensor público, expresó que la sociedad no cerró completamente durante la pandemia, y que a los trabajadores adultos mayores y embarazadas les llamó la empresa desde que inició la pandemia, sin conocer fecha exacta; luego, manifestó que a los mayores de edad nunca les llamaron a trabajar. En síntesis, este tribunal no da mérito al testigo de descargo por tres razones: 1) no hay certeza de que conozca a la trabajadora demandante, y que por ende pueda identificar que se trate de la misma persona (la demandante que no se presentó al trabajo en fecha doce de octubre de dos mil veinte); 2) no está determinado que en la fecha del supuesto despido le correspondía trabajar por tener turno asignado; y, 3) se advirtieron contradicciones en su declaración.

Continuando en el análisis de la prueba de descargo, con el objeto de acreditar que la trabajadora laboraba desde su casa y que además no se presentó al centro de trabajo de la sociedad demandada en la fecha del despido, se llevó a cabo la audiencia de declaración de parte de la trabajadora, a solicitud del abogado de la empleadora. Con tal declaración únicamente se probó que la demandante prestó sus servicios bajo la modalidad del teletrabajo por así haberlo aseverado la declarante. Sin embargo, no se acreditó el segundo supuesto, pues el abogado de la sociedad no le preguntó sobre dicho punto a pesar que en el escrito del folio […]de la pieza principal manifestó que ese era el objeto de la prueba.

De las consideraciones mencionadas se advierte que los medios probatorios presentados por la parte demandada no sustentan las aseveraciones que hace para su oposición a la demanda; por consiguiente no se ha establecido la falta de legitimación de la actora.

Dirimidos los puntos apelados en los términos expuestos, y apreciadas las pruebas aportadas tanto de cargo, como de descargo, esta Sala procede al análisis conjunto de la misma, conforme a las reglas de la sana crítica.

Referente a ello se advierte, que todos los medios de prueba que obran en autos indican, que la trabajadora demandante no acreditó el despido "indirecto" consignado en la demanda, bajo el supuesto que se presentó al centro de trabajo el doce de octubre de dos mil veinte, a eso de las cuatro y treinta de la tarde (dentro de su horario de trabajo), y que el vigilante no le permitió ingresar; siendo que la prueba testimonial de cargo mostró no conocer el hecho de forma directa, es decir, se constató que eran testigos de referencia, y el representante legal de la demandada negó que la trabajadora se haya presentado a las instalaciones de la empleadora; lo que tampoco se pudo verificar en el video de la cámara de vigilancia ubicada en el portón de ingreso de la empresa […], Sociedad Anónima de Capital Variable (del doce de octubre de dos mil veinte), al no ser válido legalmente por no haberse propuesto con el respectivo medio de almacenamiento que contenía la información (disco duro del sistema de vigilancia).

Aun así, se ha constatado la concurrencia de los presupuestos para la aplicación de la presunción contenida en el inciso 3º del art. 55 CT, sin obtener resultado al respecto, ya que, era menester probar el hecho de que a la trabajadora no le fue permitido el ingreso al centro de trabajo en el horario que le corresponde desarrollar las actividades encomendadas.

Es así, que en coherencia con los argumentos expuestos, y dado que, el despido no se ha acreditado mediante las pruebas aportadas a los autos, y que tampoco tiene aplicación la presunción contenida en el inc. 3º del art. 55 CT, corresponde absolver a la parte demandada, respecto de las prestaciones de indemnización por despido injusto, vacación y aguinaldo proporcional de constituyen el reclamo de la trabajadora."

Sala de lo Civil, número de referencia: 82-CAL-2022, fecha de la resolución: 18/07/2022

DOCUMENTO PRIVADO AUTENTICADO DE TERMINACIÓN DE CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO POR MUTUO ACUERDO

EL AD QUEM NO COMETE LA INFRACCIÓN ALEGADA CUANDO EL DOCUMENTO OBJETO DE RECLAMO CONTIENE INCONSISTENCIA QUE NO PERMITEN DESACREDITAR LAS PRESUNCIONES QUE OPERAN A FAVOR DEL TRABAJADOR

"Error de hecho en la apreciación de la prueba instrumental, en contravención a lo prescrito en el art. 402 inciso 1° CT

Con relación al primer punto, relativo a que la Cámara erró al considerar que, en el documento privado autenticado bajo estudio, se plasmaron dos fechas de terminación del contrato, se advierte lo siguiente: que en la cláusula I) del documento se estableció, que la trabajadora había *"[...] laborado para la sociedad empleadora, desde el día cinco de junio del año dos mil seis, hasta el día veintiocho de septiembre de dos mil veinte [...]", y luego, en la cláusula III) se dispuso*

que "[...] este día la trabajadora y la sociedad empleadora por mutuo acuerdo hemos decidido dar por terminada la relación laboral [...]", refiriéndose al día en el que se suscribió el documento privado, es decir, el treinta de septiembre de dos mil veinte.

De tal forma que, de la lectura del texto del referido instrumento se colige, que se establecieron dos fechas de terminación de la relación laboral, ya que, el argumento del impetrante relativo a que, la trabajadora dejó de prestar sus servicios en la primera fecha mencionada (aunque la relación laboral finalizó hasta el día en que se suscribió el documento referido), constituye una mera suposición que pretende introducir por medio de sus argumentos, puesto que este postulado no proviene del texto del contrato, en el cual no se hace ninguna aclaración en tal sentido; y es por eso, que la dualidad de fechas contenidas en el instrumento bajo análisis, constituye una inconsistencia, tal como lo aduce la Cámara.

Respecto del segundo punto referente a que el tribunal de segunda instancia dedujo un hecho que no consta en el instrumento, es decir, el despido, el recurrente manifiesta que dicha Cámara, afirmó que *"[...] solo se puede deber dinero, en los casos en que exista un despido o una renuncia, y que por lo tanto, ese adeudo para la Cámara es porque se trata de un despido [...]".*

En cuanto al punto descrito en el párrafo anterior cabe advertir, que de la lectura de la sentencia impugnada se colige que el tribunal de alzada expuso que, en el caso de autos, operaba en favor de la trabajadora demandante, la presunción establecida en el art. 414 CT y, por ende, el despido se encontraba acreditada por medio de dicha presunción.

Continuó manifestando la Cámara, que la parte patronal no probó la excepción de terminación de contrato de trabajo por mutuo acuerdo que opuso, debido a las inconsistencias que contenía el documento con el que pretendía corroborarla; y que, por lo tanto, el despido se tenía por acreditado por medio de la presunción mencionada, estipulada en el art. 414 CT.

En ese orden de ideas, este tribunal casacional concluye que el tribunal de segunda instancia, no dedujo el despido del contenido del documento de descargo (objeto de la causal casacional bajo estudio), sino que, por el contrario, dicho tribunal tuvo por acreditada la terminación de la relación laboral por medio de la presunción referida, la cual estimó que no había sido desacreditada por el documento mencionado, debido a las inconsistencias que presentaba en su contenido, es decir, que se hayan plasmado dos fechas de terminación del contrato y que se dispusiera que a la trabajadora le adeudaban prestaciones laborales, sin aclarar en qué conceptos, ya que supuestamente se pretendía documentar la terminación del contrato por mutuo acuerdo, cuando esta forma de finalización de la relación laboral no ocasiona que se le adeuden prestaciones al trabajador.

En tal sentido se colige que la Cámara le otorgó valor probatorio al documento conforme a lo dispuesto en el art. 402 CT, sin embargo, al analizar su contenido, las inconsistencias mencionadas le generaron dudas, por lo que consideró que la excepción opuesta no estaba probada con el instrumento referido.

Y es que, el hecho de que un documento tenga valor probatorio, no implica per se, que los administradores de justicia se vean despojados de su obligación de estudiar su contenido, para determinar si con un instrumento se prueba o no, uno o más hechos. Así también, los funcionarios judiciales no pueden tomar en cuenta, únicamente, aquellos aspectos de un instrumento que favorezcan la tesis de quien lo presentó, sea actor o demandado, sino que deben analizar la totalidad de los enunciados que contienen, para determinar si con el mismo, se acredita el hecho que se pretende probar.

Ese análisis del texto completo del documento es lo que llevó a la Cámara a advertir las inconsistencias que se coligen de su contenido y en razón de ellas, a determinar que, las dudas que generaba respecto de sí, en realidad, hubo una terminación de contrato por mutuo consentimiento, imposibilitaba el poder tener por probada la excepción interpuesta por el sujeto pasivo de la pretensión, por medio del instrumento mencionado.

Por tanto, la Cámara valoró conforme a derecho corresponde el documento privado autenticado (que consta a folios [...]), de tal suerte, que tal como lo dirimió en su sentencia, la presunción dispuesta en el art. 414 CT, que opera en favor de la actora y en virtud de la cual se presume el despido, no fue desacreditada en el caso de autos, con la prueba de descargo mencionada.

En conclusión, la resolución dictada por el tribunal de alzada se encuentra acorde a derecho, debido a que no concurre el motivo de casación invocado y, en consecuencia, debe mantenerse incólume la decisión impugnada."

Sala de lo Civil, número de referencia: 223-CAL-2021, fecha de la resolución: 13/01/2022

ERROR DE HECHO EN LA APRECIACIÓN DE LA DECLARACIÓN DE PARTE CONTRARIA

PROCEDE LA INFRACCIÓN ALEGADA CUANDO NO SE JUSTIFICAN LAS RAZONES DEL POR QUÉ NO LE MERECIÓ FE LA DECLARACIÓN DE PARTE CONTRARIA

"Error de hecho en la apreciación de la declaración de parte contraria con infracción al art. 353 CPCM

Previo a resolver el vicio sometido a estudio, se destaca que serán sintetizados los pasajes pertinentes del recurso, dejando fuera todos aquellos aspectos que resultaron intrascendentes, no vinculados al submotivo que se denuncia.

La recurrente expresó que la valoración de la declaración de parte contraria se hizo de forma aislada y no en conjunto con "otras pruebas".

Expresó además, que el tribunal de alzada, al realizar la valoración de la declaración de parte contraria, hizo una serie de valoraciones respecto de la medida conciliatoria del reinstalo, las que le hicieron suponer que "desde un principio el reinstalo ofrecido a la trabajadora demandante carecía de seriedad, tergiversando por completo el contenido de la declaración de parte contraria ren-

dida por la trabajadora demandante". También, sostiene que debió valorarse la manifestación de la trabajadora en cuanto a que se había retirado porque "sintió" que no sería reinstalada; elemento de prueba que a juicio de la recurrente era relevante y debía ser valorado, no obstante, no fue así.

Así mismo manifestó que por medio de la declaración de parte contraria quedó establecido que el reinstalo no se realizó por causa imputable a la trabajadora, quien por haber "sentido" que no la reinstalarían tomó la decisión de retirarse de las instalaciones de la sociedad demandada.

Finalmente sostiene que, la Cámara omitió valorar la declaración de parte contraria de la trabajadora demandante, y que no la relacionó con otras pruebas aportadas, como la declaración de propia parte (también de la trabajadora); la que según la recurrente era coincidente con la declaración de parte contraria, por haber manifestado que "con la actitud de la recepcionista pensó que no iba a ser reinstalada; que nadie le manifestó en ningún momento que no sería reinstalada y que se retiró a las ocho horas veinticinco minutos de la mañana". En consecuencia, afirma que ambas declaraciones proporcionaban la certeza a la Cámara, respecto de que el reinstalo no fue realizado por causa imputable a la trabajadora; que sin embargo, el tribunal de segunda instancia realizó valoraciones sin atender a lo dispuesto en el art. 353 CPCM.

Con base en los argumentos de la empleadora, corresponde referirnos a la jurisprudencia de este tribunal, en la cual se ha estimado que el error de hecho en la valoración de la prueba, tiene lugar, "[...] cuando el juzgador no ve prueba donde la hay, o ve prueba donde no la hay; y puede ocurrir también al equivocarse en la apreciación del contenido de un documento, tergiversándolo o simplemente omitiéndolo como si no constara en él. Es decir, el juzgador tiene por demostrado un hecho, sin existir en autos la prueba que lo acredite; o no tiene por acreditado un hecho, a pesar de existir en el proceso prueba pertinente e idónea [...]"sentencia clasificada bajo el número de referencia 184-CAL-2021, de las diez horas veintinueve minutos del diez de marzo de dos mil veintidós.

Por otra parte, y dados los argumentos de la recurrente en cuanto a que el yerro tuvo lugar por no haberse valorado la declaración de parte contraria con relación a la declaración de propia parte de la trabajadora, debe señalarse, que precisamente en el art. 588 ordinal 6°) CT, se establece el submotivo relativo al error de hecho en la confesión cuando haya sido apreciada sin relación con otras pruebas.

Sobre lo anterior, vale tener presente que el Código de Trabajo es un norma de carácter preconstitucional y además anterior a la legislación procesal civil vigente, CPCM (la que es de aplicación supletoria al proceso laboral). Por tales motivos, regula el medio probatorio en análisis bajo la figura de la "confesión"; medio de prueba que hoy tiene una connotación diferente, propia de un proceso moderno y pleno de garantías; de ahí que, modernamente se denomina "declaración de parte", sobre la que trata el estudio de esta sentencia.

Efectuado el preámbulo y conceptualizado el vicio denunciado por la empleadora, es necesario referirse a lo que la Cámara Segunda de lo Laboral de

esta ciudad, expuso con relación a la apreciación de la prueba incorporada al proceso (declaración de parte contraria y propia parte), las que constituyen el objeto del submotivo de casación, con infracción al art. 353 CPCM.

Así pues, dicho tribunal manifestó que con "la declaración de parte contraria a la que fue sometida la trabajadora YGH, únicamente se confirma la versión que expuso su apoderado en el escrito de Fs. […] de la pieza principal, no así las afirmaciones que diera la apoderada de la sociedad demandada en el escrito de Fs. […] de la citada pieza"; por ello sostiene que tal prueba fue adversa a las pretensiones de la oposición, al no confirmar las aseveraciones de la parte demandada.

Continúa la Cámara sosteniendo que bajo el principio de comunidad de la prueba, con "la declaración de propia parte de la trabajadora demandante y el acta notarial de Fs. […] pp., igualmente no arrojan elementos que pudiesen determinar que el reinstalo se incumplió por causas imputables a la trabajadora; y es que, al igual que la declaración de parte contraria, lo que se confirma es únicamente la versión de la defensa de la parte demandante".

Y por lo anterior, afirma que el reinstalo acordado en la audiencia conciliatoria fue incumplido por la parte demandada, pues a pesar de que la trabajadora se presentó el día y hora acordado, no fue atendida. A juicio de la Cámara debió ser de inmediato como se acordó, siendo que veinticinco minutos de espera fue tiempo prudencial para determinar si había o no intención de cumplirse el acuerdo; por consiguiente, el tribunal de alzada afirmó que no se desvirtuaba la presunción de despido. En consecuencia, confirmó la sentencia de primera instancia.

Partiendo de lo expuesto, se efectuará el análisis con el propósito de determinar si la Cámara omitió valorar la declaración de parte contraria sin respecto de la declaración de propia parte de la trabajadora demandante.

Cabe considerar en primer lugar, que a la valoración conjunta de la prueba debe preceder la exposición y valoración individualizada de las pruebas practicadas; sólo de esta forma se cumple con la exigencia de ponderar, de cara a la justificación final, el valor probatorio de todas esas pruebas, conjuntamente consideradas.

No obstante, se advierte de la sentencia del tribunal de alzada, en el párrafo 10.4, que hace referencia a la declaración de parte contraria rendida por la trabajadora; que sobre la misma sostuvo que *"únicamente se confirma la versión que expuso su apoderado en el escrito de Fs. […]de la pieza principal* (...) la declaración fue adversa a las pretensiones de la oposición al no confirmar las aseveraciones de la parte demandada". De tal forma que no dejó constancia del resultado de esa valoración, dado que, la mención de lo que debe entenderse como lo conclusión o el resultado de la apreciación de dicha prueba, sin expresar las razones que la motivan, es insuficiente, debido a que es necesario saber por qué la declaración confirmó la versión del apoderado (abogado de la trabajadora).

En este marco de idea, de la sentencia tampoco se advierten las razones por las que no se confirmaron las argumentaciones de la demandada al oponerse a

los argumentos de la actora, con las que pretendía controvertir el planteamiento del fallido reinstalo por causa imputable a la empleadora. En ese sentido, esto puede catalogarse como un argumento informador de los motivos que impulsaron al tribunal a decidir; pero de ninguna manera puede entenderse cumplida la obligación de motivar la decisión, pues para ello se requiere aportar razones convincentes, lógicas y con argumentos sistematizados. Sin embargo, la Cámara mencionó que la valoración fue efectuada conforme a las reglas de la sana crítica, lo que constituye una consideración meramente formal.

Siempre en el estudio del análisis pormenorizado de las pruebas practicadas, se advierte que el tribunal de alzada, bajo el amparo del principio de comunidad de la prueba, afirma que "con la declaración de propia parte de la trabajadora demandante y el acta de Fs. […] pp., igualmente no arrojan elementos que pudiesen determinar que el reinstalo se incumplió por causas imputables a la trabajadora; y es que, al igual que la declaración de parte contraria, lo que se confirma es únicamente la versión de la defensa de la parte demandante". De esta consideración se advierte que la Cámara únicamente relaciona las pruebas (declaración de propia parte y el acta), sin expresar cuáles elementos faltaron. Y según lo expresado en su sentencia, tal situación no le permitió estimar la argumentación de la sociedad demandada, en cuanto a que el reinstalo no se había cumplido por causa imputable a la trabajadora. En todo caso, si la prueba no acreditaba el hecho objeto de prueba, debía justificarse por qué a dicho tribunal no le merecían fe, pues no basta decir que no proporcionan elementos probatorios.

Del mismo modo, la Cámara hace remisión en cuanto a que la declaración de propia parte únicamente confirma el planteamiento de la sociedad demandada, dejando de lado enunciar las razones que deberían justificarlo. En la valoración individualizada de las pruebas el estilo de motivación usado por el tribunal de segunda instancia subyace al analítico, el cual obliga a la exposición y valoración individual y ordenada de todas las pruebas practicadas, aportando las razones que le convencen o no.

A ello debe añadirse, que no hay valoración conjunta de la declaración de parte contraria y de propia parte de la trabajadora, por no haberlas integrado en el análisis, ni revelar los argumentos del posicionamiento adoptado, es decir, en cuanto a que ninguna de estas pruebas acreditaba el planteamiento de la sociedad demandada, y que constituye el objeto de la causal casacional invocada por la recurrente. Circunstancia que se confirma en la sentencia, pues la Cámara manifiesta que, *"analizada que ha sido el único medio de prueba aportado por la sociedad demandada (declaración de parte contraria de la demandante) conforme a las reglas de la sana crítica, no se advierte que el reinstalo acordado no fue realizado por causa imputable a la trabajadora demandante".*

Lo anterior se vuelve relevante, debido a que el tribunal de segunda instancia basó su resolución, en la conclusión consistente en la falta de responsabilidad de la trabajadora, al no haberse efectuado el reinstalo acordado; y que por el contrario, las causas del incumplimiento son atribuibles a la sociedad demandada.

En consecuencia se advierte que dicho tribunal argumentó que con la declaración de parte contraria, de propia parte de la trabajadora y el acta notarial, no se desvirtuaba la presunción de despido, y por ello confirmó el fallo condenatorio de primera instancia. Consideración que a juicio de este tribunal es insuficiente puesto que faltó expresar las razones que dieron origen a tal conclusión, vale decir, por qué motivo estas pruebas no le merecieron fe y a su vez no destruían la presunción de despido a favor de la trabajadora.

Por último, con base a los argumentos expuestos, este tribunal concluye que la Cámara Segunda de lo Laboral, con sede en esta ciudad, incurrió en la infracción de error de hecho en la valoración de la declaración de parte contraria, por no haberse valorado conjuntamente con la declaración de propia parte, ambas rendidas por la trabajadora demandante; por tanto, corresponde casar la sentencia, y pronunciar la que conforme a derecho corresponde (art. 537 CPCM).

III. JUSTIFICACIÓN DE LA SENTENCIA

De acuerdo a lo expuesto en párrafos que preceden, la justificación de esta sentencia debe estar encaminada a dilucidar los puntos de agravio planteados por la recurrente en el recurso de alzada correspondiente. [...]

En resumidas cuentas, el agravio planteado se refiere a que el tribunal de primera instancia faltó a la valoración conjunta de la prueba, tal como la sana crítica lo requiere; lo que perjudicó a su representada, pues de esa forma se acreditaba la responsabilidad de la trabajadora al no haberse hecho efectivo el reinstalo.

Expuesto los puntos apelados, este tribunal procede a apreciar todos los medios de prueba tanto de cargo, como de descargo, a fin de determinar qué hechos han sido acreditados en autos.

De ahí que, la parte actora ofreció como prueba de cargo, el acta notarial de verificación del reinstalo de la trabajadora demandante (al folio […], de la pieza principal), y además la trabajadora rindió declaración de propia parte(acta y grabación de audiencia en formato DVD, folios […], de la pieza principal); medios probatorios presentados y producidos con el fin de establecer el incumplimiento del acuerdo conciliatorio, y así también que la trabajadora no fue reinstalada por causa imputable a la empleadora.

En cuanto al acta notarial de constatación del reinstalo, cabe señalar, que se trata de un documento público, dado que fue expedido por notario para ejercer la función pública del notariado, y además no fue impugnado en cuanto a su autenticidad; sin embargo, este tribunal estima que dicho documento, analizado individualmente, da fe en cuanto al hecho de haber sido otorgada en la forma, lugar, día y hora que en el instrumento se expresa; de tal manera, se acredita que la trabajadora se presentó a las instalaciones de la sociedad demandada con el objeto de hacer efectivo el reinstalo ofrecido en la audiencia conciliatoria, a las ocho horas del veintiséis de noviembre de dos mil veinte y en las oficinas ubicadas en la Colonia Escalón, San Salvador, tal como fue acordado; referente al hecho que ha pretendido probar la trabajadora demandante, esta Sala considera necesario acudir al análisis de los otros medios de prueba a fin de corroborar tal circunstancia.

Sobre la declaración de propia parte de la trabajadora, se debe destacar que la eficacia relativa a considerar como ciertos los hechos reconocidos en la contestación al interrogatorio, tiene dos condicionantes, la primera está referida a que los hechos deben ser desfavorables o perjudiciales para la declarante (en este caso para la trabajadora), y la segunda, que sea la única prueba en el proceso, o en caso de que obren otras, que no suministren hechos contradictorios o contraríen lo declarado; desde luego, como ya se relacionó anteriormente no es el único medio de prueba en el juicio; en consecuencia, no pueden fijarse como hechos probados sino debe efectuarse el estudio conforme a la sana crítica.

En ese sentido, y considerando que fue producida con el propósito de establecer la responsabilidad sobre la empleadora por no haberse efectuado el reinstalo y en consecuencia haberse incumplido con el acuerdo conciliatorio, en la fecha acordada, se advierte que con las respuestas al interrogatorio efectivamente se evidencia que no fue reinstalada a su puesto de trabajo, esto debido a que, expresa de forma concatenada cada circunstancia desde el momento en que se presentó al lugar pactado; luego, que fue recibida por la recepcionista de la empresa (manifestó que la hizo esperar aproximadamente veinticinco minutos). Asimismo, la apoderada de la empleadora le interrogó lo relativo a que si alguno de sus acompañantes le había dicho que se retirara del lugar, y lo otro en cuanto a que si alguien le dijo que no iba a ser reinstalada, lo cual denota, que lo único sujeto a prueba es “a quien debe responsabilizarse por no haber sido reinstalada”; lo que este tribunal deberá corroborar en la valoración conjunta de las pruebas.

Por su parte, la demandada ofertó en el juicio prueba testimonial; no obstante, en acta de las ocho horas treinta minutos del seis de julio de dos mil veintiuno, que corre agregada al folio […], de la pieza principal, consta que el día señalado para la audiencia correspondiente, la empleadora demandada no presentó ningún testigo.

Así también, solicitó declaración de parte contraria de la trabajadora (acta y grabación de audiencia en formato DVD, incorporada de folios […], de la pieza principal), con el objeto de probar que el reinstalo acordado en la audiencia conciliatoria no se llevó a cabo por causa imputable a la trabajadora; y con relación a ello, relata que la demandante se presentó al lugar y hora acordado, con una actitud molesta, acompañada de dos personas, y que al haber transcurrido aproximadamente diez minutos después de haberse presentado a la recepción, uno de sus acompañantes le pidió que se retiraran.

En lo concerniente a este medio probatorio, esta Sala considera que no acredita la tesis de la empleadora, en cuanto a que era responsabilidad de la trabajadora el incumplimiento del acuerdo conciliatorio, por no haberse llevado a cabo el reinstalo, dado que la trabajadora demandante, señora YGH, no reconoció haberse retirado de las instalaciones de la entidad demandada, por haber “supuesto que no iba a ser reinstalada”, pues categóricamente respondió “no” a

la pregunta que se le realizó en el sentido siguiente: ¿Usted se retiró de las instalaciones de […], Sociedad Anónima de Capital Variable porque usted supuso que no iba a ser reinstalada?. Igualmente, manifestó que la señora KD (responsable de recibirla) no la atendió ya que le hizo saber a través de la recepcionista que estaba ocupada y que no podía atenderle; es así como la declarante, en síntesis, sostuvo que se retiró de las oficinas de la empleadora al no haber sido atendida por nadie.

Dilucidado lo anterior, se procede al análisis integral de las pruebas, a fin de verificar la existencia de elementos probatorios que permitan concluir los motivos del incumplimiento del reinstalo.

En tal sentido se advierte, que todos los medios de prueba aportados a los autos indican (acta notarial de constatación del reinstalo, declaración de propia parte y parte contraria de la trabajadora demandante), que la trabajadora demandante no fue reinstala a su puesto de trabajo a pesar de haberse acordado en la audiencia conciliatoria; no obstante, se cuenta únicamente con la declaración de la trabajadora y el hecho plasmando en el acta referida. Este tribunal estima que el apoderado de la sociedad demandada, después de efectuada la audiencia conciliatoria, y dado el acuerdo tomado en la misma (reinstalar a la trabajadora en su puesto de trabajo), debió informarlo a su representada, puesto que debían recibir a la trabajadora el día siguiente, para su incorporación al puesto de trabajo; sobre todo porque este proporcionó el nombre de la persona que directamente iba a recibirle; en ese orden, la señora KD, debía estar dispuesta a atenderle a las ocho de la mañana de la fecha señalada, sin embargo, las tres pruebas aportadas al proceso han constatado el desinterés y falta de prontitud al dejarle en la recepción aproximadamente veinticinco minutos esperando, así se constata cuando la apoderada de la demanda en la audiencia de declaración de parte contraria le argumentó que “usted no quiso esperar”, cuando lo más urgente era incorporar a la trabajadora a su puesto. Cuando un asunto es importante y de interés se responde prontamente y de forma efectiva.

Sumado a ello, y tomando en cuenta que en la empresa poseen la información personal de la trabajadora, como su número de teléfono y dirección, pudieron contactarla al momento de percatarse que se había retirado antes de atenderla, como lo quiso hacer ver la abogada de la sociedad.

Por otra parte, resulta irrelevante y de poca trascendencia a petición de quién se retiró la trabajadora de las oficinas de la empleadora, dado que lo esencial para este tribunal es que, no se le puede responsabilizar por el incumplimiento del reinstalo, pues su obligación únicamente consistía en presentarse al lugar y hora acordada, y así lo cumplió, puesto que se ha acreditado con lo declarado en las audiencias y por haberse hecho constar en el acta notarial, que tiene pleno valor probatorio en cuanto a esa circunstancia (previamente se ha proporcionado la explicación respectiva en esta sentencia). Por consiguiente, para este tribunal casacional, la empleadora demandada incumplió el acuerdo conciliatorio al no

reinstalar a la trabajadora a su puesto de trabajo a la hora acordada, pues solamente fue recibida por la recepcionista de la empresa quien no era la persona designada para tal efecto.

Habiendo determinado lo relativo al reinstalo, en el sentido expuesto, corresponde verificar si la trabajadora acreditó en autos, los extremos de su demanda.

De tal manera, tenemos que, de acuerdo al escrito que contiene la pretensión, la demandante laboró para y bajo las órdenes de la sociedad […], Sociedad Anónima de Capital Variable (demandada), desde su ingreso el cinco de junio de dos mil ocho, hasta el tres de diciembre de dos mil diecinueve, fecha en la cual, como a eso de las seis y treinta de la tarde, el representante legal de la empleadora, señor JER, quien tenía facultades para contratar, despedir, dirigir y administrar personal, le manifestó que a partir de ese momento estaba despedida.

Primeramente debe considerarse que de la apreciación de las pruebas incorporadas, se colige que la relación laboral que existió entre la trabajadora y la sociedad demandada, así como el contrato de trabajo y sus condiciones no ha sido un punto en contienda en el juicio, debido a que empleadora nunca la controvirtió, por ende, es un hecho admitido (art. 314 ord. 1° CPCM).

En cuanto al despido, la actora no presentó prueba directa para acreditarlo; sin embargo, tiene operatividad la presunción de despido contenida en el art. 414 inciso 3° CT, en virtud de haberse probado plenamente que el reinstalo ofrecido a la trabajadora en la audiencia conciliatoria no se hizo efectivo por causa imputable a la empleadora; hecho justificado previamente en esta sentencia, según el análisis de las pruebas aportadas al proceso, entre estas, las actas de la audiencia conciliatoria agregada al folio […] de la pieza principal, y la de constatación del reinstalo agregada al folio […] de la pieza principal.

Por consiguiente, tomando como fundamento lo que consta en el proceso, en definitiva, que lo que ha quedado acreditado es el despido injustificado, en los términos expuestos por la actora en su demanda.

En consecuencia, se condenará a la sociedad demandada al pago de la indemnización por despido injusto, vacación y aguinaldo proporcional, reclamados por la trabajadora demandante, así como los salarios caídos en todas las instancias, conforme a lo prescrito en el art. 420 CT.

Se tomará como base para realizar el cálculo correspondiente, el salario de quinientos setenta y cinco dólares de los Estados Unidos de América, más el dos por ciento de comisión mensual devengada en un período de ciento cincuenta y dos días, que asciende a un total de quinientos sesenta y dos dólares ochenta y siete centavos de dólar de los Estados Unidos de América; por consiguiente el salario diario asciende a veintidós dólares ochenta y seis centavos de dólar de los Estados Unidos de América. Esto, debido a que se presumen las condiciones de trabajo alegadas en la demanda ole conformidad al art. 413 CT."

Sala de lo Civil, número de referencia: 73-CAL-2022, fecha de la resolución: 21/04/2022

ERROR DE HECHO EN LA APRECIACIÓN DE LA PRUEBA

EL AD QUEM NO COMETE EL VICIO ALEGADO CUANDO EN EL DOCUMENTO OBJETO DE RECLAMO SE OMITE CONSIGNAR EL SEGUNDO APELLIDO DE LA PERSONA QUE EJECUTÓ EL DESPIDO, YA QUE NO ES SUFICIENTE PARA INFERIR QUE SE TRATA DE DOS PERSONAS DIFERENTES; PUES DE SER ASÍ, DEBIÓ ACREDITARSE EN EL PROCESO

"Error de hecho en la apreciación de la prueba documental, precepto infringido el inciso 1º del art. 402 CT

Se advierte que la queja del impetrante, en esencia, radica en que el tribunal de segunda instancia, "vio prueba donde no la había"; respecto del documento agregado a folio [...], mediante el cual se determina que la persona que firmó el referido documento, señora PP, no es la misma, señora PPH, a quien se le atribuyó en la demanda, haber realizado el supuesto despido; y por lo tanto, no era posible establecer de esa forma la representación patronal de la señora PH.

Asimismo, manifestó el recurrente, que como parte demandada, no estaba en la obligación de promover el respectivo incidente de falsedad, del documento agregado al proceso.

Con relación a la infracción alegada, este tribunal estima necesario hacer referencia a que: "(...) el vicio alegado, no necesariamente tiene lugar solo cuando el juzgador aprecia erróneamente la prueba, según el particular punto de vista de cada quien y la eficacia probatoria de la misma; sino que también, se produce, cuando el juzgador, al valorar la prueba, se forma un criterio distinto a lo que el documento establece o un juicio contrario a lo que la realidad indica, dado que en ocasiones existe mutilación en el contenido de la prueba, por restricción del alcance de la misma. Este yerro también ocurre cuando no se tiene por probado un hecho, en razón de no distinguir la prueba que demuestra su existencia, es decir, dicho error recae sobre la apreciación de la existencia o inexistencia del medio de prueba, en su aspecto material, objetivo o físico, por ejemplo: no ver prueba donde sí la hay" o donde no la hay (sentencia de casación de las nueve horas treinta y ocho minutos del quince de abril de dos mil veintiuno, con referencia 154-CAL-2020).

[...]

Delimitados los argumentos expuestos por la Cámara, es menester analizar si en realidad cometió el error denunciado en la prueba documental, relativa a la constancia laboral a nombre del demandante, agregada a folio […], y que, a criterio del recurrente, la persona que firmó la referida constancia, no es la misma a quien se le atribuyó realizó el despido alegado en la demanda; no obstante no fue advertido por el tribunal de alzada.

En ese sentido, es indispensable referirse al documento de folio […], del cual se advierte, que es una constancia laboral, en hoja con distintivos de la sociedad […] S. A. de C.V., dirigida a los señores del Banco […], con fecha cinco de julio de dos mil dieciocho, a nombre del trabajador demandante, señor CGG, en el

cual consta la fecha de inicio de la relación laboral con la sociedad demandada, el cargo y salario devengado a esa fecha. Dicho documento aparece firmado por la señora PP, en su calidad de "JEFE DE RRHH",

Al analizar los argumentos expuestos por la Cámara sentenciadora, se advierte que no hizo distinción alguna en cuanto a la persona que firmó la constancia laboral de folio […] (señora PP), impresa en hoja con membrete de la sociedad demandada, dirigida al Banco […], con fecha cinco de julio de dos mil dieciocho; respecto de la persona a quien se le atribuyó el despido realizado el veintiséis de agosto de dos mil veinte, señora PPH, tal como consta a folio de […]; inicialmente, determinó que al desempeñar está el cargo de jefa de recursos humanos, se estaba frente a una representante patronal de la sociedad demandada; circunstancia que no podía ser diferente, pues el hecho de que en la constancia se haya omitido consignar el segundo apellido de la jefa de recursos humanos, no es suficiente para inferir que se trata de dos personas diferentes; pues de ser así, debió acreditarse en el proceso; y de ello no existe prueba, sino un simple dicho del recurrente a manera de inconformidad por lo resuelto por la Cámara sentenciadora.

Cabe señalar, que este tribunal en sentencia con referencia 261-CAL-2018, de las nueve horas treinta y tres minutos del catorce de noviembre de dos mil dieciocho, entre otros, ha sostenido que la regla de valoración de prueba establecida en el Código de Trabajo, relativa a la prueba instrumental, no es absoluta, en tanto que, no todo instrumento por el sólo hecho de ser público o privado, hará plena prueba en los procesos donde sea introducido; ya que, además de esa calidad, éstos deben reunir otras características propias de la prueba, como es la pertinencia, idoneidad y conducencia, las que deberán ser consideradas por el aplicador de justicia al momento de ser valoradas en juicio.

Asimismo, es de mencionar que en la sentencia relacionada, entre otros, se estableció que la valoración de la prueba, parte de la finalidad que persigue, es por ello, que es normal entender que se trata de una "operación mental", con la que se pretende "precisar el mérito que la prueba pueda tener para formar el convencimiento del Juez o su valor de persuasión"; y es que, la ausencia de esfuerzo probatorio por parte del representante judicial de la demandada, no permitió a la Cámara sentenciadora, considerar que la señora PP, era una persona distinta a PPH.

De igual forma, el recurrente alega la posible falsedad de la constancia laboral de folio […]; sin embargo, los argumentos tendientes a discutir la falsedad o no del documento relacionado, a través de este recurso, es incorrecto, pues a este medio impugnativo de carácter extraordinario y de estricto derecho, no le corresponde controvertir nuevamente los hechos, sino determinar la verdadera aplicación de la ley.

Al respecto cabe advertir, que la supuesta suposición de prueba señalada por el recurrente, se habría cometido por parte de la Cámara sentenciadora, si dicho tribunal no hubiera considerado, otros elementos introducidos en el proce-

so que dejaran en evidencia que la señora […], no era la misma […]; circunstancia que no sucedió en el proceso; tal como fue advertido en el alegato expuesto por el defensor público laboral, licenciado […], en representación del trabajador demandante, señor CGG.

En consecuencia, la Cámara sentenciadora, no cometió el error de hecho en la apreciación de la prueba instrumental, alegado por el licenciado […]; y por lo tanto, tampoco infringió la disposición señalada.

De acuerdo a lo anterior, resulta procedente declarar sin lugar la casación de la sentencia de la que se ha hecho mérito."

Sala de lo Civil, número de referencia: 200-CAL-2021, fecha de la resolución: 24/03/2022

NO EXISTE LA INFRACCIÓN ALEGADA CUANDO CON LAS PRUEBAS VERTIDAS EN EL PROCESO NO PUEDE DAR POR ACREDITADO EL DESPIDO CON EL SOLO DICHO DEL DEMANDANTE

"Error de hecho en la apreciación de la prueba documental, precepto infringido el inciso 1° del art. 402 CT

En el caso que nos ocupa, el recurrente expuso como concepto de la infracción lo siguiente: "[...] En el presente caso, la prueba que se aportó dentro del proceso, que no fue rebatida por la parte contraria, es más, se podría decir que fue ratificada, al presentar copia de las actas en el inicio del proceso, fue la Certificación de las Diligencias Conciliatorias llevadas a cabo en la Dirección General de Trabajo, del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, mediante la cual, el demandante, de manera voluntaria y consciente, expuso que fue despedido de sus labores el día 26 de mayo de dos mil veinte, y la misma, fue presentada en el mes de junio del referido año, (lo cual denota que no fue un hecho impulsivo sino consciente] [...] Haciendo esta aclaración, entramos de lleno a la infracción, La Cámara, fundamenta su análisis, en el hecho que el abogado que llego a dicha diligencia, expreso como defensa, que el demandante no había sido despedido, y que los clientes no los querían dentro de la empresa por la edad; Sin embargo, no tomo en consideración varios de los aspectos que están contenidos en las diligencias, el primero y más importante, es que el demandante expresó que FUE DESPEDIDO EN LA FECHA ANTES MENCIONADA, QUE EL MISMO RATIFICO SU SOLICITUD DE DESPIDO, adicional a ello, el apoderado hizo un ofrecimiento económico basado en la solicitud del demandante, la cual no fue aceptada, por considerar que era muy poco, es decir, que, al analizar el documento en su conjunto, la Cámara no considero que fue el mismo demandante el que expreso su despido en la fecha de tales diligencias, que el mismo demandante las ratificó, es decir, es CONFESION EXPRESA ante funcionario competente, pero además, que el mismo apoderado respondió con un ofrecimiento económico el cual no fue aceptado, siendo que el ofrecimiento era en respuesta a la petición, y

lo más importante, que dentro de las diligencias, el mismo demandante, solicito el reinstalo a sus labores, es decir, que además de ratificar las diligencias, hace una petición, que solo puede ser consecuencia, del despido del cual se consideró que fue objeto. En ese orden de ideas, la Cámara al analizar la certificación antes relacionado, no observó para su valoración, todos los elementos que antes se han mencionado, y que eran claves para la resolución del presente proceso, y por el contrario, se enfoca en un elemento dentro de todo el contexto, que es fácilmente excluyente contra todo el resto de elementos que se han citado en el presente recurso, de tal suerte que, si se hubieran (observado los hechos tal como se exponen en el presente caso, y tomando en cuenta que, no era aplicable el decreto que se menciono en el presente recurso, la sentencia hubiera sido revocatoria de la pronunciada por el Juez de Primera Instancia [...]" (sic).

Como puede apreciarse, la queja del impetrante radica, en esencia, en que el tribunal de segunda instancia, "no vio prueba donde la había"; pues con el documento denominado "Certificación de Diligencias Conciliatorias de la Dirección General de Trabajo del Ministerio de Trabajo", quedaba claro que el demandante confesó que fue despedido el veintiséis de mayo de dos mil veinte, y de que se le hizo un ofrecimiento económico congruente a un despido, el cual no fue aceptado. Asimismo, el recurrente manifestó que en dicha audiencia, el demandante solicitó el reinstalo en su puesto de trabajo; lo que a su juicio, dejaba en evidencia la ratificación por parte del trabajador, del despido en la fecha señalada. Hecho que tampoco fue advertido por el tribunal de alzada.

Cabe señalar, que este tribunal ha establecido que el vicio alegado: "[...] no necesariamente tiene lugar solo cuando el juzgador aprecia erróneamente la prueba, según el particular punto de vista de cada quien y la eficacia probatoria de la misma; sino que también, se produce, cuando el juzgador, al valorar la prueba, se forma un criterio distinto a lo que el documento establece o un juicio contrario a lo que la realidad indica, dado que en ocasiones existe mutilación en el contenido de la prueba, por restricción del alcance de la misma. Este yerro también ocurre cuando no se tiene por probado un hecho, en razón de no distinguir la prueba que demuestra su existencia, es decir, dicho error recae sobre la apreciación de la existencia o inexistencia del medio de prueba, en su aspecto material, objetivo o físico, por ejemplo: no ver prueba donde sí la hay" o donde no la hay (sentencia de casación de las nueve horas treinta y ocho minutos del quince de abril de dos mil veintiuno, con referencia 154-CAL-2020).

Definidos los presupuestos de existencia de la infracción alegada, resulta procedente remitirnos al pronunciamiento de la Cámara Segunda de lo Laboral, con sede en esta ciudad, específicamente en lo que respecta al supuesto error de hecho en la apreciación de la prueba documental. Así se advierte que, dicho tribunal expresó lo siguiente: "[...] Este Tribunal de apelaciones, mediante la revisión de autos advierte que, el trabajador en la solicitud de diligencias administrativas promovidas en el Ministerio de Trabajo con fecha del día treinta de junio del año dos mil veinte [ver fs. […] de la pieza principal], manifestó que el día veintiséis de mayo del año dos mil veinte fue despedido por la sociedad demandada. Pero en actas de audiencia conciliatoria [agregadas a folios […] de

la pieza principal] celebrada los días veintisiete y veintiocho de julio de ese mismo año, entre el trabajador y la sociedad demandada mediante su Apoderado General Judicial licenciado […] se constata la siguiente afirmación por parte de la representación patronal "(...) que los hechos vertidos en la solicitud conciliatoria no son ciertos, ya que los trabajadores no han sido despedidos (...)". Es de acotar que, dicha declaración fue ratificada por el mismo abogado en la continuación de la audiencia conciliatoria [ver fs. […] p.p.]. 7. Tomando en cuenta lo expresado en el párrafo anterior, esta Cámara estima que no es posible tener por acreditado el despido con (fecha veintiséis de mayo del año dos mil veinte, por los motivos siguientes: i) la representación patronal categóricamente afirmó que los trabajadores no estaban despedidos en la fecha relacionada e incluso manifestó que la reincorporación de labores a los trabajadores no era posible porque las empresas a las cuales ellos brindaban servicios de seguridad no aceptaban a personas mayores de sesenta años, debido a la pandemia [ver fs. […] p.p.]; ii) La defensa patronal durante todo el proceso no ha logrado probar que el despido se realizó el veintiséis de mayo del dos mil veinte o en el mes de junio como argumenta en agravios el apelante. En consecuencia, este Tribunal de apelaciones no puede acreditar que el despido en cuestión fue realizado en la fecha relacionada, y por consiguiente, el trabajador se encontraba a la expectativa de ser incorporado a sus labores [...] 11. En relación a lo sustentado en el párrafo anterior, como bien expresó el recurrente en esta instancia, el rubro de seguridad privada no detuvo labores durante la contingencia por Covid-19. Sin embargo, el señor DO al ser una persona en condiciones de vulnerabilidad frente al Covid-19 por ser mayor de sesenta años se encontraba protegido por el Decreto Legislativo N° 661 en su artículo 9 "(...) Todos los trabajadores y trabajadoras que sean mayores de sesenta años de edad, mujeres en estado de embarazo, puerperio y lactancia exclusiva, personas con enfermedades de insuficiencia renal crónica o trasplantados, hipertensos, personas diagnosticadas con cáncer, enfermedades crónicas, degenerativas e inmunosuprimidas, personas con discapacidad, con enfermedades pulmonares crónicas u obesidad mórbida podrán resguardarse en sus respectivos lugares de domicilio o residencia, a fin de evitar que sean sujetos a contagio o se conviertan en portadoras de COVID-19, y no se podrán ver afectados laboralmente si optan por no asistir a su centro de trabajo, siendo los últimos en su incorporación laboral (...)". 12. Bajo ese contexto, fue de conocimiento público que la reapertura económica, en el territorio nacional, dio inicio el veinticuatro de agosto del año dos mil veinte; la cual se dio a conocer por el Gobierno central mediante los medios de comunicación masiva y digital. Entonces, la afirmación del recurrente alegando que, la reapertura económica no era el momento idóneo para que el trabajador hiciera valer sus derechos a través de la vía jurisdiccional es un argumento invalido, ya que resulta lógico comprender que el trabajador al no encontrarse despedido tal y como lo manifestó la parte patronal mediante su apoderado en la audiencia conciliatoria, como ya se ha relacionado en esta sentencia, se presentó a las instalaciones del lugar donde realizaba sus labores

con el fin de ser reincorporado a su trabajo y que finalmente su situación laboral fuera aclarada. 13. En ese mismo orden de ideas, el señor trabajador, junto a los testigos presentados por la parte actora se presentaron en las instalaciones de La Prensa Gráfica, lugar donde realizaba sus funciones como Coordinador de Seguridad, y fueron recibidos por el señor ELR, Coordinador de Seguridad, el cual no los dejó entrar a las instalaciones y les manifestó que por indicaciones del señor EF que si querían saber de su situación laboral debían acudir a las oficinas de la sociedad demandada. Siguiendo indicaciones, se hicieron presentes en las oficinas de la sociedad y fueron recibidos por la señora AGG, Encargada de Recursos Humanos, la cual le iba a consultar por llamada telefónica al señor EF la situación laboral de ellos; cinco minutos después la señora de G les hace saber que el Representante Legal de la sociedad demandada prescindía de sus servicios. Lo anterior se logró constatar mediante la deposición de los testigos presentados por la parte actora [ver acta y formato DVD a fs. […] p.p.] [...]" (sic).

Al analizar los argumentos de la Cámara sentenciadora se advierte, que dicho tribunal, justificó en su sentencia, las razones por las que no tuvo por acreditado el despido y sus consecuencias en la fecha que quedó consignado en el documento denominado "Certificación de Diligencias Conciliatorias de la Dirección General de Trabajo del Ministerio de Trabajo" (agregados a folios […] de la pieza principal). Así, la Cámara evidencia que no omitió el hecho de que el demandante, hubiera manifestado en el acta contenida en las certificaciones de las diligencias conciliatorias ante el Ministerio de Trabajo, que fue despedido el veintiséis de mayo de dos mil veinte; y que se le ofreció un arreglo económico, que no aceptó; sino que, dicho tribunal advirtió que, en dicha acta, el apoderado general judicial de la demandada, licenciado […], afirmó que el demandante no había sido despedido. Afirmación contraria a lo expresado por el trabajador demandante, por lo que dicha controversia únicamente podía ser resuelta por medio de las pruebas vertidas en el proceso

En ese sentido, el tribunal de alzada, previo análisis del Decreto Legislativo N° 661 de fecha doce de junio de dos mil veinte, relativo a la reactivación gradual de las actividades económicas, que fueron afectadas por la pandemia COVID-19; determinó que el veinticuatro de agosto de dos mil veinte, iniciaba la reapertura económica a nivel nacional, por lo que el trabajador en forma legítima se presentó al lugar donde desempeñaba su trabajo; sin embargo, no le fue permitido el ingreso a las instalaciones para iniciarlo; y fue remitido a donde la señora AGG, encargada de recursos humanos, quien le comunicó al señor DO, que el representante legal de dicha sociedad, señor JVEF, prescindía de sus servicios laborales (extremos que de acuerdo a la Cámara sentenciadora fueron acreditados con la prueba testimonial de cargo, contenida en formato de audio y video, agregado a folios […] de la pieza principal).

Ante lo anterior, la Cámara sentenciadora, no podía dar por acreditado que el despido del demandante, se llevó a cabo el veintiséis de mayo de dos mil veinte, tal como lo asegura el recurrente, basándose en el documento denominado "Certificación de Diligencias Conciliatorias", pues conforme a las pruebas

vertidas en el proceso, por órdenes del propio representante legal de la sociedad demandada, señor JVEF, se prescindió de los servicios laborales del demandante, el veinticuatro de agosto de dos mil veinte, misma fecha que el señor DO, se presentó a reanudar sus labores.

En este sentido, resulta evidente que la preterición u olvido de la prueba señalada por el recurrente, dista mucho de la realidad discutida en el proceso, y los fundamentos de la sentencia del tribunal de alzada; ya que, el referido tribunal, con las pruebas vertidas en el proceso, no podía dar por acreditado el despido con el solo dicho del demandante.

En consecuencia, la Cámara sentenciadora no cometió el error de hecho en la apreciación de la prueba documental, alegado por el licenciado […]; por lo que resulta procedente declarar sin lugar la casación de la sentencia de la que se ha hecho mérito."

Sala de lo Civil, número de referencia: 221-CAL-2022, fecha de la resolución: 01/09/2022

EXCEPCIÓN DE FALTA DE REQUISITOS EN LA DEMANDA

CUANDO EL TRABAJADOR DEMANDANTE OMITE EXPRESAR SU ESTADO CIVIL Y NACIONALIDAD EN LA DEMANDA, TAL OMISIÓN ES UN REQUISITO DE FORMA QUE NO AFECTA DE MANERA DIRECTA O INDIRECTA AL OBJETO DEL PROCESO, POR LO TANTO NO PUEDE SER OBJETO DE NULIDAD

"Finalmente, el recurrente opuso y alegó la excepción de *"falta de requisitos de la demanda presentada"*, argumentando que la demanda presentada por el señor WICM, no cumple con todos los requisitos de forma que exige la ley para su admisibilidad, al haber omitido expresar en la misma, su estado familiar y nacionalidad (art. 379, número 2 CT); pero también se omitió en ella individualizar al representante legal de la sociedad demandada, al no expresar las generales del mismo, tales como su domicilio y mayoría de edad, y con base a los arts. 278 CPCM, aplicable al proceso laboral según lo dispuesto en los artículos 20 CPCM y 602 CT, debió prevenirse al demandante para que las evacuara dentro del término de ley, y de no hacerlos, se debió de haber declarado inadmisible la demanda.

En cuanto a la inconformidad expresada por el licenciada […], cabe citar, que si bien el art. 379 CT, establece que la demanda podrá ser verbal o escrita y que deberá contener "2) Nombre del actor y su edad, estado civil, nacionalidad, profesión u oficio, domicilio y lugar para oír notificaciones"; si el juzgador oportunamente no previno para que el trabajador demandante expresara su estado civil y nacionalidad, tal omisión no afecta de ninguna manera lo actuado y proveído hasta ese momento, y por lo tanto no puede ser objeto de nulidad, dado que, como lo expresó el recurrente, son requisitos de forma que no afectan de manera directa o indirecta al objeto del proceso."

ALEGAR QUE SE OMITIÓ RELACIONAR LAS GENERALES DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD DEMANDADA, ES UNA MERA INCONFORMIDAD QUE NO PUEDE ENMARCARSE EN UNA EXCEPCIÓN, YA QUE NO CONSTITUYEN MECANISMOS DE DEFENSA QUE ATAQUE EL FONDO DEL ASUNTO CONTROVERTIDO

"Con respecto al segundo de los requisitos que según el apoderado de la demandada, se incumplió, al omitirse relacionar las generales del representante legal de la sociedad demandada; cabe señalar, que al analizar la disposición citada en el párrafo anterior en el ord. 6º, se establece que la demanda debe contener el *"nombre y domicilio del demandado y la dirección de su casa de habitación o del local en que habitualmente atiende sus negocios o presta sus servicios".*

En el caso en estudio, la demandada es una persona jurídica, por lo que, con lo que debía cumplir el demandante era con expresar su denominación, domicilio y el lugar donde habitualmente atiende sus negocios, no resultando necesario que se establezcan las generales del representante legal de la sociedad demandada, por no requerirlo así la citada disposición.

En conclusión, los aspectos controvertidos por el licenciado […], son meras inconformidades que no pueden enmarcarse en una excepción, ya que no constituyen mecanismos de defensa que ataque el fondo del asunto controvertido (existencia del despido injusto), no afecta de manera clara y palpable, ni causa indefensión a ninguna de las partes, ni puede suscitarse por las mismas una nulidad en el proceso. Por tal razón se declara sin lugar la misma.

En definitiva, y debido a que la prueba testimonial de descargo y los argumentos esgrimidos por el licenciado […], en el recurso de apelación, no guardan relación con los mecanismos de defensa "excepciones", ya que no son conducentes respecto de los hechos que se pretendían establecer en el proceso; las denuncias expuestas en el recurso de apelación, respecto de las declaraciones de las testigos de descargo, señoras MHE y RSMC, no podían ser objeto de análisis.

Finalmente, el recurrente muestra su inconformidad en el recurso de apelación, porque el Juzgado Tercero de lo Laboral, abrió incidentes de previo y especial pronunciamiento para resolver las excepciones de *"improponibilidad de la pretensión planteada en la demanda"* y *"falta de legitimación del derecho para reclamar indemnización, vacación y aguinaldo proporcional del actor",* y pronunció autos que carecen de motivación y fundamentación jurídica sostenible para declarar sin lugar las mismas, actuaciones con las que, a juicio del apoderado de la demandada, el juzgado vulneró los principios de legalidad y el de dirección y ordenación del proceso.

Finalmente respecto del punto de agravio expuesto por el licenciado […], en el recurso de apelación, referente a que se abrió *"una especie de incidente de previo y especial conocimiento", por parte del Juzgado Tercero de lo Laboral, relativo a la excepción de "improponibilidad de la pretensión planteada en la demanda por falta de presupuestos materiales o esenciales" cabe señalar, que al analizar lo acontecido en el proceso, se advierte, que las excepciones fueron opuestas y alegadas por los licenciados […], por medio de escrito agregado de folios […], de la pieza principal, y que la excepción objeto de análisis, fue tramitada hasta el auto proveído a las diez horas y treinta minutos del día catorce de*

septiembre de dos mil veintiuno (que corre agregado a folios […] de la pieza principal) es decir, después del termino de prueba, declarando sin lugar la excepción porque los motivos expuestos por el apoderado de la demandada ameritaba que se conociera el fondo del proceso por no constituir una causal de rechazo de la demanda de manera anticipada.

Al respecto, cabe señalar, que lo actuado por el juzgado de primera instancia, no implica que se haya abierto *"un incidente de previo y especial conocimiento"* para resolver la citada excepción, como lo manifiesta el recurrente, contrario a ello, lo acontecido es que el juzgador no resolvió lo relativo a la citada excepción inmediatamente de opuesta y alegada, sino hasta después de haberse aportado la prueba testimonial por las partes, actuación que de ninguna manera vulnera ninguno de los derechos de la demandada, tal como lo plantea el recurrente en el recurso de alzada, al sostener que se vulneraron los principios de legalidad y de dirección y ordenación del proceso. Por tal razón los argumentos planteados por el recurrente serán desestimados.

Previo a pronunciar sentencia, y en virtud de que la relación laboral, el contrato de trabajo y sus condiciones no fueron aspectos controvertidos, y las excepciones opuestas y alegadas fueron desestimadas, se determinará si se comprobó el despido alegado en la demanda, y en su defecto si opera a favor del trabajador la presunción establecida en el art. 414 CT.

Para comprobar el despido alegado, el actor presentó a la testigo, señora MJIR, declaración que oportunamente fue analizada, tal y como se manifestó en párrafos precedentes, concluyéndose que, la referida testigo de cargo, expresó el lugar, día y hora en que aconteció el despido, y que lo realizó el señor JREE, quien según la declaración de parte contraria al minuto 1:20 reconoció que es el representante legal de la sociedad demandada, y que en tal calidad tiene las facultades de contratar y despedir empleados, lo cual quedó registrado en formato de disco digital de video, a folios […] de la pieza principal.

La presunción de despido establecida en el art. 414 CT, no opera a favor del trabajador en virtud de que si bien, la demanda fue presentada dentro de los quince días hábiles de ocurrido el hecho que la motivo (despido alegado en la demanda) en la audiencia conciliatoria, el licenciado […], en calidad de apoderado de la demandada, le ofreció al trabajador demandante el reinstalo a sus labores, en las mismas condiciones en que venía desempeñándolas, conservando su antigüedad y las demás condiciones de ley, sin embargo, el mismo no fue aceptado por la representante del trabajador, configurándose el segundo presupuesto legal para que no opere la citada presunción (inciso 5º del art. 414 CT).

Por lo que habiéndose acreditado de manera directa el despido del trabajador, señor WICM, con la declaración de la testigo, señora MJIR, se condenará a la demandada al pago de la indemnización por despido injusto y las demás prestaciones laborales reclamadas en la demanda, tomando como base el salario mensual devengado por el trabajador demandante ($350.00) y el tiempo que laboró para la sociedad demandada (doce años sesenta y dos días), desde el día dieciséis de septiembre de dos mil ocho hasta el dieciséis de noviembre de dos mil veinte."

Sala de lo Civil, número de referencia: 269-CAL-2022, fecha de la resolución: 01/12/2022

EXCEPCIÓN DE IMPROPONIBILIDAD DE LA PRETENSIÓN

SUPUESTOS QUE HABILITAN LA IMPROPONIBILIDAD

"En lo concerniente a la *"improponibilidad* de la *pretensión planteada en la* demanda", el recurrente sostiene que en la demanda, se evidencia la falta de presupuestos materiales o esenciales y otros semejantes que regula el art. 227 CPCM, ya que tuvo que haber acontecido el "hecho real y objetivo del despido", y al no existir tal hecho, la trabajadora no tenía motivo para presentar la demanda la cual se fundamentó en un hecho que no existió, auto-atribuyéndose el derecho a reclamar las pretensiones que solicita en su demanda.

Inicialmente, cabe acotar, que la improponibilidad procede cuando concurre cualquiera de los motivos que señala el art. 277 CPCM, los cuales constituyen defectos insubsanables de los que puede adolecer una demanda.

En ese sentido, el art. 277 CPCM, establece: *"Si, presentada la demanda, el Juez advierte algún defecto en la pretensión, como decir que su objeto sea ilícito, imposible o absurdo, carezca de competencia objetiva o de grado, o atinente al objeto procesal, como la litispendencia, la cosa juzgada, compromiso pendiente; evidencia falta de presupuestos materiales o esenciales y otros semejantes, se rechazará la demanda sin necesidad de prevención por ser improponible, debiendo explicar los fundamentos de la decisión (...)".*

Innegable resulta para los juzgadores, la utilidad de la improponibilidad, ya que es una solución procesal para evitar el dispendio de recursos del Estado con la tramitación de un proceso cuyo resultado tendrá una sentencia inhibitoria, la cual puede advertirse de manera inicial como sobrevenida (art. 127 CPCM). No obstante ello, y si bien, el juzgador es a quien la ley faculta para advertir una improponibilidad al examinar la demanda o de manera sobrevenida, nada imposibilita que la contraparte pueda denunciar la misma."

LA IMPROPONIBILIDAD NO PROCEDE CUANDO EL RECURRENTE PRETENDE UN PRONUNCIAMIENTO SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO, YA QUE SU ARGUMENTO CONSISTE EN ALEGAR QUE EL DESPIDO NO ACONTECIÓ Y LA TRABAJADORA NO TENÍA EL DERECHO A RECLAMAR EL PAGO DE LA INDEMNIZACIÓN

"El licenciado […], expresa que la demanda debe ser declarada improponible porque el hecho del despido no aconteció y la trabajadora no tenía el derecho a reclamar el pago de la indemnización por despido injusto y las demás prestaciones. Es importante acotar que de conformidad al art. 1 CPCM, todo sujeto tiene derecho a plantear su pretensión ante los tribunales, oponerse a la ya incoada, ejercer todos los actos procesales que estime convenientes para la defensa de su posición, y a que el proceso se trámite y decida conforme a la normativa constitucional y a las disposiciones legales vigentes.

Analizados los argumentos sobre los que recae la improponibilidad planteada por el recurrente, se advierte que no se puede enmarcar en las causales legalmente establecidas, ni en el supuesto de "otras semejantes", que el legis-

lador ha previsto como causas de improponibilidad; esto, en virtud de que la fundamentación del recurrente pretende un pronunciamiento sobre el fondo del asunto, específicamente en cuanto al despido alegado en la demanda, aspecto que debe ser controvertido en el proceso.

Y es que, precisamente esa es la finalidad del debido proceso, permitir que las partes hagan uso de los mecanismos legales para hace valer sus derechos y comprobar los extremos de las posturas sostenidas en el mismo; y en ese sentido lo que le correspondía al apoderado de la sociedad demandada, era comprobar la inexistencia del despido alegado en la demanda, a través de las excepciones pertinentes y los medios probatorios que considerara idóneos.

Por tal razón, y debido a que la excepción de "*improponibilidad de la pretensión planteada en la demanda",* no se puede enmarcar en los supuestos legales para que ser analizada, será declarada sin lugar."

Sala de lo Civil, número de referencia: 264-CAL-2022, fecha de la resolución: 24/11/2022

Relaciones:

Sala de lo Civil, número de referencia: 269-CAL-2022, fecha de la resolución: 01/12/2022

EXCEPCIÓN DE PÉRDIDA DE CONFIANZA

PROCEDENCIA

"Recapitulando en el tema de las excepciones, este tribunal enfatiza que pueden oponerse a partir de la contestación de la demanda, en la etapa probatoria y hasta antes del cierre del proceso (tratándose de las materiales); en tanto, las partes pueden controvertir argumentos y presentar pruebas para oponerse a las presentadas por la contraria, es decir, el cierre del proceso pone fin al debate; sin embargo, aun dictado el auto de cierre, el juzgador puede, si así lo estima pertinente, realizar actividades en torno a la prueba (arts. 394, 396 inc. 2°, 398 y 416 CT).

Hechas las consideraciones en cuanto a la interpretación de los arts. 394 y 416 CT, la carga probatoria impuesta al empleador y las condiciones favorables a favor del trabajador, se procede a verificar si el demandado interpuso el mecanismo de defensa en tiempo, tal como lo afirmó en el recurso de alzada.

Se advierte de la pieza principal (a folios [...]), que la apoderada de la sociedad demandada, licenciada […] presentó escrito por medio del cual opuso y alegó la excepción de terminación de contrato sin responsabilidad para el empleador, contenida en la causal 3a del art. 50 CT *"Por la pérdida de la confianza del patrono en el trabajador, cuando éste desempeña un cargo de dirección, vigilancia, fiscalización u otro de igual importancia y responsabilidad".*

La apertura a pruebas fue notificada al actor por medio de fax y a la demandada a través del sistema de notificación electrónica (SNE) el treinta y uno de

mayo de dos mil veintiuno, por lo que el plazo para el período de prueba estaba comprendido desde el dos al once de junio de dos mil veintiuno; y el proceso fue cerrado el veintitrés de septiembre del mismo año, siendo que los escritos relacionados en el párrafo anterior fueron presentados el diez, diecisiete y dieciocho de agosto del mismo año. Y para acreditar la eximente de responsabilidad, la abogada litigante presentó únicamente prueba documental.

Por lo tanto, este tribunal sostiene que la excepción fue alegada antes del cierre del proceso, en consecuencia, el tribunal de primera instancia debió haberla analizado y también la prueba documental presentada.

En consecuencia, se procede al estudio de la excepción opuesta por la demandada, los hechos alegados más la prueba documental incorporada.

En los escritos de folios […] de la pieza principal, la demandada afirmó que no había acontecido el despido del trabajador demandante sino la terminación contractual sin responsabilidad para el empleador, de conformidad a la causal 3° del art. 50 CT, por pérdida de confianza.

Y al respecto manifestó que existen hechos por los cuales la sociedad empleadora le perdió la confianza al trabajador señor CSVM, la primera circunstancia se refiere a que "realizó viajes al exterior los cuales no fueron justificados"; de esa forma expresa la abogada […]que realizó un viaje con destino a Manizales, Colombia en julio del año dos mil diecisiete, el que no contaba con el registro de autorización por parte de […], S.A. de C.V., y que por el contrario el trabajador debió solicitar autorización; no obstante, la gerente de recursos humanos emitió constancia en la que se establece que no se contó con permiso para el viaje al exterior.

Y la segunda circunstancia o hecho atribuido al trabajador es "la intervención directa que realizó en el proceso de compra del equipo camión grúa con malacate para mediciones geotérmicas"

Relata la abogada litigante que el señor VM realizó una solicitud de compra para un camión de mediciones con grúa y malacate, con el propósito de realizar el proceso de compra mediante cotización; para ello, realizó una evaluación técnica de las ofertas efectuadas por las sociedades […]; la propuesta de primera era por un precio de $545,405.00 y la de la segunda por $676,400.00, ambas en dólares de los Estados Unidos de América, resultando que a la más cara se le asignó ocho puntos y a la de […] se le asignaron siete puntos.

[...]

Partiendo de los argumentos expuestos y la prueba agregada al proceso se advierte, en primer lugar que, la relación laboral que existió entre el trabajador y la sociedad demandada, así como el contrato de trabajo y sus condiciones (salario), no han sido un punto en contienda en el juicio, debido a que la empleadora la reconoció, por ende, es un hecho admitido (art. 314 ord. 1° CPCM).

Considerando que se alega la pérdida de confianza en el trabajador, debe mencionarse que esta es entendida según la "RAE como la esperanza firme que se tiene de alguien o algo, constituye la condición *fundamental* o el rasgo esencial para *convertir* la relación laboral con estos trabajadores en una *relación*

laboral especial, en razón de las *funciones* que desempeñan dentro de la *empresa*, con unos efectos *jurídicos propios* y distintos a los que se generan con los trabajadores *ordinarios* y con *una* exigencia cualificada de la *acción de actuar* de buena *fe* pues a ellos se exigirá *más* que al común de los trabajadores" EE, JH. (Profesor principal de Derecho del Trabajo de la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo), La calificación del personal de dirección o de confianza: Entre los hechos y las formas.

Es decir, la confianza constituye un elemento fundamental en la relación de trabajo, siendo depositada por el empleador en razón de las funciones que desempeña dentro de la empresa. Pero a la prestación de servicios se unen los deberes del trabajador, aspectos consustanciales a la misma, como los de obediencia, diligencia y buena fe.

Para efectos del tema de la confianza en el trabajador, únicamente trataremos lo relativo a la buena fe. Este deber está implícito en toda relación contractual, e implica una relación de confianza profesada entre dos sujetos, que conforma una idea de compromiso en el correcto cumplimiento de sus respectivas obligaciones y de cooperación en aras de la actividad productiva.

Desde esta óptica y concerniente a la relación laboral, el trabajador debe realizar un cumplimiento fiel de su prestación, pero también significa que debe manifestarlo en dos sentidos: de forma activa, realizar una conducta diligente y de cooperación; y de modo pasivo, evitando ser desleal, absteniéndose de realizar conductas que sean dañosas para los intereses del empleador (divulgación de secretos, concurrencia de actividades, entre otras).

De tal forma que, el fundamento jurídico de estos deberes lo encontramos en el art. 31 CT, de forma específica y para los trabajadores cuya normativa es aplicable, pues en la legislación de trabajo hay consignadas muchas más obligaciones para estos.

Una de las manifestaciones del deber de buena fe, estriba en la prohibición de ser desleal con el empleador, puesto que el trabajador está sometido a una obligación de fidelidad o lealtad. Esto implica, una posición de honestidad y honradez en el desempeño del trabajo, en cuanto lleva implícita la conciencia de no engañar, ni perjudicar, ni dañar; dicho de otra forma, ser fiel, lleva consigo la obligación del trabajador de tal manera que, no ejecute acto alguno que pueda redundar en perjuicio de los intereses del empleador.

De ahí que, si el trabajador falta a la honradez y es deshonesto en el desempeño de sus funciones, quiebra la relación de confianza transgrediendo la buena fe contractual, que es uno de los principios que inspiran la relación, de ahí su consideración como causa de despido. (resaltado lo hace este tribunal). Alemán Páez, Francisco, Jiménez García, Juan y Vega López, Julio J., Derecho del Trabajo I, Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Vicerrectorado de Planificación y Calidad, calificación del personal de dirección o de confianza: Entre los hechos y las formas.

En consecuencia de todo lo anterior, para este tribunal el trabajador demandante, señor CSVM vulneró la relación de confianza transgrediendo la buena fe contractual, al haber solicitado y recomendado la compra de un camión de mediciones que resultó perjudicial a los intereses de su empleadora por no ser

funcional a las operaciones para las que se adquirió, hecho que constituye un acto de deslealtad con […]. de C.V.; en tanto, corresponde declarar ha lugar a la excepción de terminación de contrato sin responsabilidad para el empleador, de conformidad a la causal 3° del art. 50 CT."

Sala de lo Civil, número de referencia: 151-CAL-2022, fecha de la resolución: 17/11/2022

EXCEPCIÓN DE PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DE INDEMNIZACIÓN POR DESPIDO

PLAZO PARA QUE PRESCRIBA LA ACCIÓN DE RECLAMO DE INDEMNIZACIÓN POR DESPIDO DE HECHO

"Cabe señalar, que se analizarán en un primer momento las excepciones que atacan la acción de la trabajadora demandante, es decir, las denominadas por el apoderado de la demandada como *"prescripción de la acción"* e *"improponibilidad de la pretensión planteada en la demanda"*, y solo, si las mismas son declaradas sin lugar, se analizarán las demás excepciones opuestas y alegadas.

En cuanto a la excepción de prescripción de la acción, el recurrente sostuvo que en el caso en estudio, la demanda se interpuso el día siete de diciembre de dos mil veinte, pero fue admitida hasta el día quince de noviembre del año dos mil veintiuno, y que la demandada fue emplazada en legal forma el día dieciocho de noviembre de dos mil veintiuno, por lo que, ya había transcurrido más del plazo legalmente establecido para que se declarara la prescripción de la acción, de modo que el emplazamiento se realizó después de transcurrido el plazo de sesenta días que establece la ley.

Con respecto a la figura de la prescripción de la acción esta Sala, en la sentencia de las a las once horas diez minutos del catorce de febrero de dos mil dieciocho, bajo el incidente de casación con referencia 107-CAL-2017, estableció que la prescripción consiste en la "caducidad de los derechos en cuanto a su eficacia procesal, por haber dejado transcurrir determinado tiempo sin ejercerlos o demandarlos. Constituye en verdad la prescripción extintiva, si bien algunos, al tatar de las acciones, se concretan, como se efectuará aquí, a señalar los plazos legales que tornan ineficaz la acción entablada luego de transcurrir cierto lapso desde la posibilidad de efectuarlo. Esto no quiere decir que haya de rechazarse de plano la pretensión deducida cuando ya ha caducado, sino que el demandado será absuelto sin más que oponer la excepción de prescripción; qué lo releva de otras justificaciones y pruebas".

En lo relativo a la prescripción de la acción de reclamo de indemnización por despido de hecho, se tiene que, de conformidad al artículo 610 CT, prescribe en el término de sesenta días, los cuales serán contados "a partir de la fecha en que hubiere ocurrido la causa que motivare la acción". En consideración de lo anterior si el despido alegado en la demanda, ocurrió el día dieciséis de noviembre de dos mil veinte, el actor tenía hasta el día trece de enero de dos mil veintiuno, para interponer la demanda, sin que le hubiera vencido el derecho de acción.

En tal sentido, se advierte, que a folios […] de la pieza principal, se agregó la boleta de presentación y remisión de demanda en donde consta que la trabajadora, señora MJIDR, interpuso su demanda el día siete de diciembre de dos mil veinte, por lo que, fue presentada dentro del término a que alude el art. 610 CT.

Por lo que, al haberse realizado dicho reclamo dentro del término legal correspondiente, y en vista de que la citada disposición es clara en cuanto a la forma de calcular la prescripción en el caso de la acción de reclamo de pago de indemnización por despido de hecho, se resuelve sin lugar la excepción alegada por la demandada."

Sala de lo Civil, número de referencia: 264-CAL-2022, fecha de la resolución: 24/11/2022

EXCEPCIÓN POR FALTA DE LEGITIMACIÓN ACTIVA

EL RECLAMO DE PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR DESPIDO INJUSTO LE SURGE AL TRABAJADOR, NO POR EL HECHO DE HABER SIDO DESPEDIDO INJUSTAMENTE, COMO LO ARGUMENTA EL RECURRENTE, SINO POR LA MERA CALIDAD DE TRABAJADOR QUE POSEE

"En virtud de haberse declarado sin lugar la prescripción de la acción y la improponibilidad de la pretensión planteada en la demanda, se continuará con el análisis de las demás excepciones opuestas y alegadas.

En lo relativo a la excepción de *"falta de legitimación del derecho para reclamar el pago de indemnización, vacación y aguinaldo proporcional"*, el licenciado […], expresó que de conformidad a los artículos 58, 87 y 202 CT, un trabajador se convierte en titular del derecho a reclamar de su empleador el pago de indemnización por despido injustificado y las prestaciones accesorias, cuando ha sido despedido de sus labores sin causa justificada.

Argumentó además, que la trabajadora demandante expresó en la demanda, en cuanto al hecho del despido, que el día dieciséis de noviembre de dos mil veinte, aproximadamente a eso de las ocho horas con treinta minutos, el señor JREE, con facultades para despedir, dirigir y administrar trabajadores, pues es el representante legal de la sociedad, y quien la contrató, le manifestó que a partir de ese momento estaba despedida de su trabajo, ocurriendo dicho despido en el lugar señalado para el emplazamiento. Hechos que según el licenciado […], no son ciertos, pues la persona que manifiesta la actora que ejecutó el supuesto despido, no se encontraba en el lugar, el día y hora expresados en la demanda, y por tal razón la "demandante" carecía de legitimación para reclamar el pago de indemnización, aguinaldo y vacación.

Además acotó el impetrarte, que la demandante carecía de legitimación para intervenir como parte en el juicio, y que se atribuyó el derecho subjetivo a ser indemnizada por el supuesto despido injustificado del que manifiesta haber sido objeto, ello, debido a que no era titular del derecho o interés legalmente recono-

cido en relación con la pretensión planteada en su demanda, pues dicha titularidad nunca le ha nacido, por no haber sido despedida en ningún momento, como lo sostiene en su demanda.

Cabe señalar, que el art. 66 CPCM, se refiere a la figura jurídica de legitimación procesal, en el siguiente sentido: *"Tendrán legitimación para intervenir como parte en un proceso los titulares de un derecho o un interés legalmente reconocido en relación con la pretensión".*

En consideración a lo establecido en la disposición referida, el título de legitimación se determina, ya sea por la afirmación de la titularidad de un derecho subjetivo o por la de un interés legítimo *"legalmente* reconocido", y todo derecho subjetivo concede a su titular una facultad de imperio, mediante el que puede exigir a aquellos a quienes concierna su respeto, el cumplimiento del deber general de abstención a no producir su menoscabo, en el caso en particular, la condena al cumplimiento de las obligaciones que contraiga la otra persona con dicho titular.

La legitimación delimita el elemento subjetivo de la relación jurídica procesal, permitiendo que la acción de los tribunales se ponga en funcionamiento únicamente cuando puede identificarse en primer momento, que quien intenta la acción y aquel contra la que se dirige, son los sujetos titulares de los derechos, o que están jurídicamente legitimados para hacerlos valer.

En el caso en análisis, la trabajadora, señora MJIDR, tiene la legitimación (activa) debido a que es la titular del derecho a reclamar el pago de indemnización por despido injusto y demás prestaciones laborales que reclama en la demanda, por haber prestado sus servicios laborales a la sociedad […], Sociedad Anónima de Capital Variable. Legitimación que posee indistintamente si en el desarrollo del proceso se comprueba la existencia del despido injustificado alegado en la demanda.

Es decir, el reclamo de pago de indemnización por despido injusto, le surge al trabajador (a) no por el hecho de haber sido despedido injustamente, como lo argumenta el recurrente, sino por la mera calidad de trabajador (a) que posee, como consecuencia de la relación de trabajo que la vinculó con la sociedad demandada; lógicamente, será por medio del desarrollo del proceso que el juzgador, a través de lo expuesto y comprobado por las partes, decidirá si condena o absuelve de la pretensión contenida en la demanda.

En conclusión, en el caso de autos, la trabajadora demandante MJIDR (por la relación laboral que la vinculó con la sociedad demandada), posee legitimación para hacer el reclamo de pago de indemnización por despido injusto y demás prestaciones laborales reclamadas. Por tal razón la excepción alegada es declarada sin lugar.

Sala de lo Civil, número de referencia: 264-CAL-2022, fecha de la resolución: 24/11/2022

Relaciones:

Sala de lo Civil, número de referencia: 269-CAL-2022, fecha de la resolución: 01/12/2022

EXCEPCIÓN POR FALTA DE PRESUNCIONES

NO SE PUEDE CONFIGURAR COMO UNA EXCEPCIÓN, PUES NO TIENE COMO OBJETIVO ATACAR EL FONDO DE LA CONTROVERSIA DE LA QUE TRATA EL PROCESO; EN ESTE SENTIDO, SI CONCURREN LOS PRESUPUESTOS PARA APLICAR LA PRESUNCIÓN DE DESPIDO ESTABLECIDA EN EL ART. 414 CT, EL JUEZ ESTÁ OBLIGADO A PRESUMIRLA

"Finalmente, y con relación a la excepción fundamentada en la "falta de presunciones a favor de la demandante", el licenciado […], argumenta que no son ciertos los hechos que en la demanda se exponen, ya que con expresas instrucciones de la sociedad que representa se le ofreció el reinstalo a sus labores a la trabajadora en las mismas condiciones y términos en que venía laborando, ofrecimiento que no aceptó sin justificar las razones del rechazo de dicha propuesta, y que por tales razones no opera a favor de la trabajadora la presunción de despido establecida en el art. 414 CT.

Cabe señalar, que la excepción de "*falta* de presunciones" no se puede configurar como tal, pues no tiene como objetivo atacar el fondo de la controversia de la que trata el proceso, ya que no es un mecanismo de defensa del sujeto pasivo de la acción, sino que constituyen una ficción jurídica a través de la cual se establece un mecanismo legal automático que considera que un determinado hecho o acontecimiento, se entiende probado simplemente por darse los presupuestos para ello. En este sentido si concurren los presupuestos para aplicar la presunción de despido establecida en el art. 414 CT, el juez está obligado a presumirlo, lo que dependerá de la forma en que se inicie y desarrolle el proceso, y se comprueben oportunamente dichos presupuestos. Por tal razón, se concluye que la "excepción de falta de presunciones" no tiene lugar."

Sala de lo Civil, número de referencia: 264-CAL-2022, fecha de la resolución: 24/11/2022

Relaciones:

Sala de lo Civil, número de referencia: 269-CA L-2022, fecha de la resolución: 01/12/2022

EXCEPCIÓN POR FALTA DE VERACIDAD Y BUENA FE

ALCANCE DEL PRINCIPIO DE BUENA FE

"Asimismo, se advierte, que el recurrente opuso y alegó la "excepción por falta de veracidad y *buena* fe de la demandante", citando en lo pertinente el art. 23 CPCM, argumentando que "las partes, sus representantes, su abogados y, en general, cualquier partícipe en el proceso, deberá actuar con veracidad y buena fe".

Para ello expresó, que de acuerdo a la doctrina del derecho laboral, el principio de la buena fe consiste en que las partes de la relación jurídica laboral

actúen como un buen trabajador y como un buen empleador, tanto al momento de la celebración del contrato de trabajo, como en la extinción del mismo. Este principio exige que las partes obren con la conducta debida en cada situación y de no hacerlo se invalide lo actuado por faltar la buena fe con que debió obrar una de las partes.

Finalmente argumentó que en este caso ha existido falta de veracidad y buena fe por parte de la trabajadora demandante, en virtud de que los hechos manifestados en la demanda no son ciertos, por lo que se evidencia la falta a dichos principios, ya que la parte demandante busca una tutela judicial efectiva de sus derechos por medio de alegaciones contrarias a la realidad, en otras palabras un hecho que no sucedió, denotando con ello un abuso del derecho, y no solamente eso, sino también una distorsión de la realidad, generando una alteración a estos principios; esto, debido a que se han hecho alegaciones en la demanda que no son ciertas, es decir, contrarias a la verdad como ya se ha dicho antes, ya que la parte actora conoce que están basadas en premisas fácticas falsas.

Inicialmente cabe citar, que los principios procesales son directivas o ideas básicas sobre las cuales se estructura un ordenamiento jurídico procesal, o dicho de otra manera, son las reglas que constituyen puntos de partida para la construcción de los instrumentos esenciales de la función jurisdiccional, lo que implica que son reglas técnicas que pueden variar de un procedimiento a otro.

Ahora bien, el fundamento principal del apoderado de la demandada, radica en que los hechos manifestados por la trabajadora MJIDR, en su demanda, no son ciertos, por lo que se evidencia la falta a los principios de veracidad y buena fe.

Sin embargo, el licenciado […] no explica por qué enmarca su reclamo en el principio de veracidad y buena fe, ya que los argumentos esgrimidos son aspectos que solo se pueden determinar por medio de los mecánicos de defensa pertinentes (excepciones) y de la prueba presentada en el proceso. En ese sentido, no es posible dilucidar la excepción alegada bajo los argumentos expuestos, por lo que se declara sin lugar."

Sala de lo Civil, número de referencia: 264-CAL-2022, fecha de la resolución: 24/11/2022

NO TIENE LUGAR CUANDO EL RECURRENTE NO EXPLICA POR QUÉ ENMARCA SU RECLAMO EN EL PRINCIPIO DE VERACIDAD Y BUENA FE, YA QUE SUS ARGUMENTOS SON ASPECTOS QUE SOLO SE PUEDEN DETERMINAR MEDIANTE LOS MECANISMOS DE DEFENSA PERTINENTES Y DE LA PRUEBA PRESENTADA EN EL PROCESO

"Finalmente argumentó que en este caso ha existido falta de veracidad y buena fe por parte del trabajador demandante, en virtud de que los hechos manifestados en la demanda no son ciertos, por lo que se evidencia la falta a dichos principios, ya que la parte demandante busca una tutela judicial efectiva de sus derechos por medio de alegaciones contrarias a la realidad, en otras palabras un hecho que no sucedió, denotando con ello un abuso del derecho, y no solamente

eso, sino también una distorsión de la realidad, generando una alteración a estos principios; esto, debido a que se han hecho alegaciones en la demanda que no son ciertas, es decir, contrarias a la verdad como ya se ha dicho antes, ya que la parte actora conoce que están basadas en premisas fácticas falsas.

Inicialmente cabe citar, que los principios procesales son directivas o ideas básicas sobre las cuales se estructura un ordenamiento jurídico procesal, o dicho de otra manera, son las reglas que constituyen puntos de partida para la construcción de los instrumentos esenciales de la función jurisdiccional.

Ahora bien, el fundamento principal del apoderado de la demandada, radica en que los hechos manifestados por el trabajador, señor WICM, en su demanda, no son ciertos, por lo que se evidencia la falta a los principios de veracidad y buena fe.

Sin embargo, el licenciado […] no explica por qué enmarca su reclamo en el principio de veracidad y buena fe, ya que los argumentos esgrimidos son aspectos que solo se pueden determinar por medio de los mecanismos de defensa pertinentes (excepciones) y de la prueba presentada en el proceso. En ese sentido, no es posible dilucidar la excepción alegada bajo los argumentos expuestos, por lo que este tribunal se encuentra imposibilitado para analizar la prueba testimonial de descargo agregada al proceso; consecuentemente dicha excepción se declara sin lugar."

Sala de lo Civil, número de referencia: 269-CAL-2022, fecha de la resolución: 01/12/2022

EXCEPCIONES

EL AD QUEM COMETE EL VICIO CASACIONAL "CUANDO EL FALLO OMITIERE RESOLVER PUNTOS PLANTEADOS", AL TRAMITARLAS APLICANDO SUPLETORIAMENTE EL CÓDIGO PROCESAL CIVIL Y MERCANTIL Y NO COMO EXPRESAMENTE LO ESTABLECE EL CÓDIGO DE TRABAJO

"Es así que, del incidente de apelación (folios […]) se advierte que la abogada apelante, licenciada […], basó la impugnación en cinco puntos, los que enunció así: "errónea interpretación y errónea aplicación de los arts. 394 y 416 CT, errónea interpretación y errónea aplicación del art. 383 inc. 1º CT y falta de congruencia interna de la sentencia por ampliar la demanda sin una petición en concreto de la parte demandante y vulneración al principio de imparcialidad, violación de ley, en atención al art. 55 inciso segundo CT y falta de fundamentación interna de la sentencia, errónea interpretación y errónea aplicación del art. 281 CT (nulidad del fallo y de la sentencia estimatoria por falta de fundamentación, por incongruencia interna e incongruencia externa de la sentencia)" y errónea aplicación y errónea interpretación del art. 314 y 347 CPCM y del art. 1892 del Código Civil".

Por consiguiente, lo alegado por la recurrente en el vicio en análisis, correspondiente a la errónea aplicación e interpretación de los arts. 20 y 284 CPCM y la omisión en la aplicación del art. 705 CPCM, no tiene cabida, puesto que respecto de las dos primeras disposiciones legales únicamente se relacionó tal inconformidad en la parte petitoria del recurso de apelación, pero no hay fundamentación sobre esos agravios, y en cuanto al último precepto no hay relación alguna. Así que, tampoco hay probabilidad sobre la existencia de alguna infracción por parte del tribunal de alzada.

No obstante, la apelante en el primero y cuarto agravio (errónea interpretación y aplicación de los arts. 394 y 416 CT y errónea interpretación y aplicación del art. 281 CT, nulidad del fallo y de la sentencia estimatoria por falta de fundamentación, por incongruencia interna e incongruencia externa de la sentencia), argumentó que *"se alegó la excepción conforme al artículo 394 del Código de Trabajo, en atención a que existe una normativa especial aplicable al caso, de lo que resulta innecesario utilizar la supletoriedad a la cual se refiere el art. 602 del Código de Trabajo, y conforme a la jurisprudencia citada anteriormente, es por ello que podemos afirmar que la excepción fue alegada legalmente y oportunamente antes de dictado el auto de cierre"*

Continúa la recurrente y expresa que: *"el Juzgador A Quo, aplicó remisión para aplicar la supletoriedad a la cual se refiere el Art. 602 del Código de Trabajo para el Código Procesal Civil y Mercantil, cuando ya existe disposición para la interposición de las excepciones en la normativa especial (Código de Trabajo) (...) y solamente en aquello que no esté expresamente regulado habilita la remisión que establece el Art. 602 CT"*

Sobre el alegato anterior, no hay respuesta por parte de la Cámara, teniendo en cuenta que, el fundamento de la sentencia, en lo que respecta al primer agravio, está orientado a resolver lo relativo a la excepción interpuesta, el momento procesal oportuno y la forma para alegarse. De modo que, el tribunal de alzada omitió resolver el planteamiento de la abogada apelante en lo tocante al art. 602 CT; por lo que, al finalizar el examen de los considerandos de la sentencia de la Cámara Segunda de lo Laboral, con sede en esta ciudad, se concluye que efectivamente dicho tribunal cometió la infracción atribuida; por tanto, corresponde casar la sentencia, y pronunciar la que conforme a derecho corresponde (art. 537 CPCM)."

MOMENTO PROCESAL PARA INTERPONERLAS

"Errónea interpretación y aplicación de los arts. 394 y 416 CT

Concretamente, en la exposición del agravio, la abogada litigante manifiesta, que de conformidad al art. 394 CT, las demás excepciones de cualquier clase podrán oponerse en el momento en que, de acuerdo al Código de Trabajo, resultare oportuno, en cualquier estado del juicio y en cualquiera de las instancias; y que su oposición deberá hacerse de forma expresa. Por ello sostiene, que en ningún apartado se regula que las excepciones deberán ser interpuestas únicamente al contestar la demanda, sino que literalmente el art. 394 CT, dispone que pueden oponerse cuando resultare oportuno en cualquier estado del juicio.

Posteriormente afirma, que bajo el entendido que el proceso inicia con la admisión de la demanda y termina con la sentencia, es lógico que *"las demás excepciones de cualquier clase podrán interponerse en cualquier estado del juicio".*

Así también arguye, que el art. 416 CT, se integra con lo dispuesto en el art. 394 CT, al determinar que una vez dictado el auto de cierre, a las partes no se le admitirá prueba de ninguna clase en primera instancia.

Señala también, que la excepción fue interpuesta y admitida tal como lo regula el art. 394 CT; sin embargo, el tribunal de primera instancia se contradijo, pues con base a sus alegaciones no debió haberlo hecho, ya que en un apartado de la sentencia estableció que las excepciones sólo se interponían en la contestación de la demanda, por tanto, al admitirla y posteriormente desestimarla, por no haberse alegado en el momento procesal oportuno, resultaba completamente contradictorio.

Por otra parte, manifiesta que tuvo por interpuesta la excepción de terminación del contrato de trabajo, sin responsabilidad para el empleador, aun sin valorar la prueba documental aportada, por ello la utilizó desproporcionalmente, es decir únicamente para establecer la desvinculación laboral entre el demandante y el demandado.

Apoya su tesis, en jurisprudencia de este tribunal correspondiente a la oposición de las excepciones; y al respecto, enfatiza que de conformidad al art. 394 CT, es posible alegar excepciones antes del cierre del proceso.

Delimitado el argumento de la parte apelante, este tribunal procede a desplegar las consideraciones del tribunal de primera instancia en lo relativo a la interposición de las excepciones.

El Juzgado de lo Laboral de Santa Tecla (juez dos), en el numeral 2.10 de la sentencia, consideró que las pruebas presentadas por la parte demandada no podían ser analizadas ni tomadas en cuenta para probar sus argumentos, dado que la abogada de la empleadora demandada no alegó ni opuso un mecanismo de defensa en la etapa procesal oportuna.

A criterio del referido tribunal, analizar los argumentos de la abogada de la demandada era violatorio a lo dispuesto en el art. 394 CT, pues si bien es cierto que esta disposición señala que pueden interponerse -las excepciones- en el momento procesal oportuno, no es sinónimo que sea en el momento que convenga a las partes; por ello, sostiene que ha existido de parte de la abogada [...], errónea interpretación de la disposición en referencia.

También el tribunal de primera instancia, consideró que los alegatos de la abogada litigante reforzaron la existencia del despido alegado por el trabajador demandante.

Con base en lo expuesto, corresponde a este tribunal analizar los argumentos tanto de la apelante como los expuestos por el Juzgado de lo Laboral de Santa Tecla (dos).

Para iniciar el estudio es necesario citar el texto de los preceptos legales en discusión (arts. 394 y 416 CT).

El art. 394 CT, literalmente señala: "Las demás excepciones de cualquier clase podrán oponerse en el momento en que, de acuerdo con este Código, resultare oportuno, en cualquier estado del juicio y en cualquiera de las instancias; y su oposición deberá hacerse en forma expresa".

Y el art. 416 CT, establece: *"Vencido el término probatorio, producidas las pruebas ofrecidas en él, se señalará día y hora, con tres días de anticipación por lo menos, para declarar cerrado el proceso. Dictado el auto de cierre, sin perjuicio de lo dispuesto en el Art. 398, no se admitirá a las partes prueba de ninguna clase en primera instancia, y se pronunciará sentencia dentro de los tres días siguientes".*

De antemano al análisis que atañe, esta Sala tiene a bien traer a cuenta, que con anterioridad, en jurisprudencia, v. gr. sentencias de apelación, bajo el número de referencia 14-Apl-2013, de las nueve horas veinte minutos del veintisiete de junio de dos mil catorce, sostuvo *"las excepciones de cualquier clase salvo la de incompetencia por razón del territorio, podrán oponerse antes del cierre del proceso"*; así también con posterioridad en la sentencia clasificada bajo el número 359-CAL-2019, de las diez horas veintisiete minutos del dos de marzo de dos mil veinte, se sostuvo que en el artículo 394 CT, existía un vacío legal en cuanto al momento procesal oportuno para la interposición de todas aquellas excepciones que no se refieran a la competencia jurisdiccional, por ello, de conformidad al art. 602 CT, se aplicó supletoriamente el art. 284 CPCM, para determinar cuándo pueden los demandados, interponer las excepciones que no se refieran al supuesto mencionado.

De esa forma, en la sentencia referida, se concluyó que las excepciones deberían interponerse en la contestación de la demanda.

No obstante lo anterior, esta jurisprudencia es susceptible de ser reinterpretada, dado los argumentos expuestos por los tribunales de primera y segunda instancia; por otra parte, esta Sala casacional ha experimentado cambios en su conformación subjetiva.

Sobre este punto, en la jurisprudencia comparada se admiten, como circunstancias válidas para modificar un precedente o alejarse de él cuando: se está en presencia de un pronunciamiento cuyos fundamentos normativos son incompletos o erróneamente interpretados; el cambio en la conformación subjetiva del tribunal, y que los fundamentos fácticos que lo motivaron han variado sustancialmente al grado de volver incoherente el pronunciamiento originario, con la realidad normada. Sentencias de Inconstitucionalidad con referencias bajo el número 1-2010/27-2010/28-2010, proveída por la Sala de lo Constitucional, a las catorce horas quince minutos del veinticinco de agosto de dos mil diez, y el número 47-2016, de las catorce horas del seis de septiembre de dos mil veintiuno.

En lo que atañe al cambio de composición subjetiva del tribunal, como hecho notorio y público, la Asamblea Legislativa, nombró al licenciado Alex David Marroquín Martínez, como magistrado de esta Corte, a partir del uno de julio del año dos mil veintiuno y según decreto legislativo número ochenta y uno. Además, en sesión de Corte Plena de esa fecha se acordó que ejercería la presidencia de esta Sala.

Así también, el licenciado Leonardo Ramírez Murcia, pasó a integrar esta Sala, en calidad de segundo vocal como magistrado propietario; quedando integrada la misma, por el licenciado Marroquín Martínez como presidente, la doctora Dafne Yanira Sánchez de Muñoz como primer vocal, y el licenciado Ramírez Murcia, en la calidad antes indicada. En síntesis, este tribunal casacional, en su mayoría se ha compuesto por otros magistrados.

La realidad normada se mantiene incólume, puesto que los preceptos legales (arts. 394 y 416 CT) mantienen el contenido legal.

Para iniciar, debe señalarse que si bien el precedente horizontal o autoprecedente vincula a los tribunales a sus propias decisiones anteriores, ello no imposibilita cambiarlos. En ese sentido el tribunal constitucional ha sostenido que todo precedente nunca puede tener efectos absolutos en el sentido de que sea tanto definitivo como válido para todos los tiempos.

Para el abordaje de los supuestos para la reinterpretación de las disposiciones legales objeto de estudio (arts. 394 y 416 CT), se analiza lo siguiente:

Fundamentos normativos incompletos y erróneamente interpretados

En este apartado se tratará lo relativo a la decisión adoptada por este tribunal, en el precedente clasificado bajo la referencia número 359-CAL-2019, de las diez horas veintisiete minutos del dos de marzo de dos mil veinte, se advierte que la aplicación supletoria del art. 284 CPCM, para determinar cuándo pueden los demandados, interponer las excepciones que no se refieran a la competencia jurisdiccional, es decir que deberían interponerse en la contestación de la demanda, es incompleto por no haberse interpretado a la luz del resto de disposiciones legales que conciernen al tema de la etapa probatoria (arts. 396 inc. 2º y 416 CT), las que son parte del ordenamiento jurídico especial de la materia laboral y no del común, tal es el caso del art. 284 CPCM.

En tal sentido, a continuación se señalará la parcialidad del contexto de dicha interpretación.

Antes de todo, se trae a consideración la sentencia proveída por esta Sala, con el número de referencia 175-CAL-2014, de las diez horas diez minutos del treinta de marzo de dos mil dieciséis, en la cual se dijo: *"[...] El Código de Trabajo en el art. 602 permite la aplicación supletoria de las disposiciones de la normativa común, antes del Código de Procedimientos Civiles ahora del Código Procesal Civil y Mercantil, en cuanto fueren compatibles con la normativa laboral y no contraríen el texto y los principios procesales de la misma, es decir, siempre y cuando la regulación civil no resulte incompatible con los principios y fines que rigen el proceso laboral; en ese sentido, en caso que exista un vacío legal, vale decir, a falta de regulación expresa en la normativa laboral deberá acudirse primeramente a la integración con el resto de normas del proceso laboral, y si ello tampoco fuera posible, puede acudirse al Código Procesal Civil y Mercantil [...]" (sic).*

Como ha sido expuesto por este tribunal, para la aplicación supletoria de las disposiciones del derecho común, es menester que a falta de regulación expresa en el Código de Trabajo, el juzgador debe auxiliarse en primer término de la in-

tegración con el resto de las disposiciones de la normativa laboral; ello conlleva para el caso en análisis integrar los preceptos legales que tratan sobre el tema probatorio y que precisamente están en el CT.

De ahí que, este tribunal para resolver lo relativo a la inconformidad respecto de la interpretación de los arts. 394 y 416 CT, lo hará con el orden de prelación relacionado en la anterior jurisprudencia.

Y es que, el art. 394 CT, prescribe "las demás excepciones de cualquier clase", precisamente porque el legislador en el art. 393 CT, determina el plazo y la forma en que se abordará el tema de la incompetencia por razón del territorio; punto sobre el que hay plena claridad, por tanto no es preciso detenerse en eso.

Sin embargo, en lo que corresponde a las excepciones que no se relacionan a la competencia por el territorio, la disposición legal señala que *"podrán oponerse en el momento en que, de acuerdo con este Código, resultare oportuno, en cualquier estado del juicio y en cualquiera de las instancias".* Por ello, es válido preguntarse ¿Cuál es el momento oportuno para hacerlo?

Se advierte que el precepto legal señala que "en cualquier estado del juicio", pueden oponerse las excepciones. En ese sentido, este tribunal considera que pueden oponerse **a partir de la contestación de la demanda, en la etapa probatoria y hasta antes del cierre del proceso**; teniendo las partes la oportunidad de acreditar los hechos que fundamentan sus pretensiones ante el juez de la causa, por tanto, le corresponde al actor hacerlo respecto de los hechos alegados en la demanda, su ampliación o modificación, y al demandado con relación a su defensa y excepciones (el subrayado es de esta Sala).

Lo anterior también en razón de que, el sujeto pasivo de la pretensión al alegar los hechos para su defensa aportará las pruebas o solicitará que se practiquen las que estime convenientes a su propósito."

ANTES DEL CIERRE DEL PROCESO, LAS PARTES DISPONEN DE IGUALDAD DE CONDICIONES PARA DEFENDERSE Y CONTROVERTIR LAS PRUEBAS

"Ahora bien, en esta etapa probatoria, el legislador impone una limitante en el tema de los medios probatorios, ya que para presentar solicitud de señalamiento de lugar, día y hora para el examen de los testigos, no puede hacerse en los últimos dos días del plazo probatorio, vale decir, sólo puede requerirse hasta el día sexto, por supuesto hábil (art. 397 CT).

Conocido es, que el proceso laboral es célere, pues la connotación de derecho social, y el rol protector del Estado frente a las implicaciones del trabajo como una función social, propician tal condición (art. 37 de la Constitución).

De esa forma, el proceso también está amparado por la economía procesal, que reduce las actuaciones al mínimo, lo que en sentido formal transfiere a un procedimiento muy breve, pues el objetivo es que el proceso avance sin demoras.

Además debe tomarse en cuenta que este proceso tiene su propia estructura y peculiaridad, en plena conexión con la naturaleza del ordenamiento laboral, por tal motivo esta Sala ha sostenido que *"El proceso está diseñado de tal manera*

que no haya lugar para que las partes utilicen artimañas para dilatar el proceso o para sorprender a la otra parte con pruebas de último momento" v.g., la sentencia de las ocho horas del dieciocho de julio de dos mil diez, clasificada bajo el número de referencia 225-C-2007.

Bajo este contexto, es necesario recordar que la parte que se excepcione debe hacerlo respetando el debido proceso.

El debido proceso con relación a las partes se sostiene por los principios de igualdad procesal y el de defensa. En ese sentido, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, sostiene que *"la igualdad de armas se viola cuando dentro del proceso y sin fundamento alguno, se niega a una de las partes ciertas posibilidades de alegación, prueba o impugnación, y que si se conceden a la contraria; pudiéndose estimar en tal caso que la infracción es al art. 2 inc. 1º o al 11 inc. 1º Cn., pues en ambos, de acuerdo con la jurisprudencia de esta Sala, está implícito el debido proceso"* Sentencia de Inconstitucionalidad de las once horas treinta y tres minutos del veinticinco de junio de dos mil nueve, clasificada bajo la referencia número 102-2007.

Partiendo de la anterior consideración, se estaría en plena infracción a la igualdad, como elemento fundante del proceso, al negarle a la parte actora la posibilidad de aportación de prueba en el período para tal efecto, respecto no sólo de los hechos de su demanda, sino también atinente a la excepción alegada o sobre cualquier alegación que trate de negar los hechos de la pretensión; es decir, controvertir aquella posible causa señalada por el empleador como motivo del supuesto despido, esto, por su puesto fuera de la limitante con relación a la prueba testimonial; partiendo de que la denegatoria sea sin justificación alguna.

Obedeciendo esta circunstancia también al hecho que el actor en la práctica no acompaña su demanda de la prueba respectiva (que podrían ser documentos), sino que, hasta después de la apertura a pruebas las solicita o incorpora al proceso (presenta documentos, requiere que se señale audiencia para testigos, declaración de parte, por ejemplo), o pide la intervención en su práctica cuando la ley lo permite (vierte alegaciones respecto al medio probatorio y los hechos que pretende probar).

Entonces, dadas las condiciones propias del procedimiento laboral, más la estructura contradictoria del proceso, por presentarse dos posiciones enfrentadas, tanto demandante como demandado, estarían bajo las mismas posibilidades de rebatir en dicho período; tomando en cuenta además, que el actor desde el momento que decide demandar, asesorado por su representante procesal técnico (abogados litigantes o defensores públicos laborales, según el caso) prepara la estrategia para acreditar los hechos.

En ese marco, tampoco estaría afectado el derecho de defensa de la parte actora (trabajador), puesto que tiene la posibilidad de expresarse formalmente en el proceso, también la tiene el demandado; caso contrario, se afecta la posibilidad de defenderse si no se le permite refutar los argumentos de la contraparte o defender sus posiciones, las que constituyen la base de su pretensión o resistencia.

Finalizada la etapa probatoria, se debe tener en cuenta lo dispuesto en el art. 416 CT, en cuanto a que una vez dictado el auto de cierre, sin perjuicio de lo dispuesto en el art. 398, no se admitirán a las partes prueba de ninguna clase en primera instancia. Es decir, el cierre del proceso pone fin al debate, por tanto, el proceso en sentido formal está para dictar sentencia.

Sin embargo, es preciso hacer mención que en esta etapa procesal (finalizado el término probatorio y antes de la sentencia), que es propia del ámbito laboral, se le da al juez la facultad de practicar de oficio cualquiera de las pruebas, tales como inspección, peritaje, revisión de documentos, e incluso hacer a las partes requerimientos de las declaraciones de testigos, con el objeto de fallar con mejor acierto, de conformidad al art. 398 CT.

La facultad conferida al juez es, con respecto a las pruebas que fueron presentadas por las partes (demandante y demandado), tampoco le es permitido dilatar más el proceso, pues el art. 416 CT prevé el plazo para pronunciar la sentencia.

Por tanto, aun dictado el auto de cierre, el juzgador puede, si así lo estima pertinente para fallar conforme a derecho, realizar las actividades descritas previamente en torno a la prueba (art. 398 CT), pero las partes en litigio tienen prohibición para aportar (art. 416 CT).

Por otra parte, concluido el término probatorio y antes del cierre del proceso, las partes pueden controvertir argumentos y presentar pruebas para oponerse a las presentadas por la contraria; por tanto, se reitera, que en este período la parte demandada puede oponer excepciones.

Para traer en contexto, se advierte de los autos, a folios […] de la pieza principal, que el actor fue notificado de los escrito y prueba incorporada por la apoderada de la sociedad demandada (folios […]), a través del cual alegó los hechos que constituían causal para terminar el contrato de trabajo sin responsabilidad para el empleador; sin embargo, el abogado representante del actor no controvirtió los argumentos ni la prueba.

De igual forma, fue notificado el actor de las posteriores resoluciones y escritos presentados por la contraparte; es más, el tribunal de primera instancia dejó sin efecto el señalamiento del cierre del proceso y lo reprogramó hasta el veintitrés de septiembre de dos mil veintiuno; lo que se comprende aconteció con el propósito de garantizar la defensa al actor; no obstante, no hizo uso de su derecho. En ese sentido, se observa, que el actor una vez notificado sobre la oposición de la excepción, tuvo la oportunidad de controvertir los hechos y las pruebas.

En síntesis, antes del cierre del proceso, las partes disponían de igualdad de condiciones para defenderse y controvertir las pruebas.

Hechas las acotaciones en torno al debido proceso, no puede dejarse de lado mencionar que el derecho laboral se desenvuelve en un escenario de desigualdad originario, en el que a consecuencia de la subordinación, el trabajador se encuentra en una situación de desventaja frente al empleador; sin embargo a continuación se abordarán las respuestas del legislador para compensar dicha condición.

[...]

En consecuencia de lo anterior, razonó que, al no haberse cumplido con los parámetros de ley para oponer excepciones, no podía analizar ni tomar en cuenta la prueba para acreditarla. De manera que tampoco examinó los hechos planteados que fundamentaban la excepción.

Por el contrario, no se infiere ninguna consideración con relación a los arts. 347 CPCM y 1892 del Código Civil, pues no se aplicó la presunción contenida en la primera disposición legal, en cuanto a estimarse aceptados los hechos ante la inasistencia del representante legal de la demanda a rendir declaración, en tanto que la audiencia se llevó a cabo debido a la asistencia del mismo.

De los argumentos del tribunal de primera instancia, se advierte infracción a la sana critica, específicamente al principio de no contradicción. Este, parte de la premisa de que dos juicios contradictorios no pueden ser verdaderos ambos a la vez; en ese sentido, el juez infringe este principio si dentro de la misma sentencia afirma un hecho y más adelante lo niega.

De tal forma, el tribunal de primera instancia aduce que se ha probado el despido con lo expuesto por la abogada de la sociedad demandada al haber alegado la excepción de terminación del contrato por pérdida de confianza, causal 3ª del art. 50 CT, pues reconoce que existieron causales que justificaron el despido del trabajador; y con posterioridad la desestima dado que, no la alegó ni opuso en la etapa procesal oportuna; así pues, desconoce que los juicios antagónicos sobre el mismo objeto de pensamiento no puede coexistir porque se excluyen entre sí y destruyen mutuamente.

Lo anterior impone a este tribunal, examinar la sentencia de las diez horas cuarenta y cinco minutos del diecisiete de agosto de dos mil quince, con el número de referencia 346-CAL-2012, a efecto de constatar si el tema relativo a las excepciones fue correctamente interpretado.

En síntesis, en dicha sentencia este tribunal estimó que cuando se alega la causal justificativa 3ª del art. 50 CT (pérdida de confianza), la prestación de servicios y el despido implícitamente se reconocen por el empleador.

Así también se consideró que *"[...] hay un reconocimiento del empleador de dar por terminado la relación laboral debido a la pérdida de confianza del trabajador; en otras palabras, el despido se perfeccionó con la declaración manifiesta del empleador a través de la causal alegada, por lo tanto lo que debió de probar la parte demandada es la justificación del acto, y no el acto propiamente dicho [...]" (sic).*

Ante todo, se debe aclarar que para el caso de autos no es aplicable el criterio relacionado, visto que la sociedad demandada acreditó la pérdida de confianza en el trabajador demandante, al haber transgredido la buena fe contractual; por lo que este tribunal en los párrafos anteriores de este proveído, declaró ha lugar a la excepción de terminación de contrato sin responsabilidad para el empleador, de conformidad a la causal 3ª del art. 50 CT; vale decir, […], S.A. de C.V. justificó la terminación del contrato de trabajo.

Por tanto, debe aclararse que bajo el supuesto de que en el proceso se oponga y alegue la excepción de terminación del contrato por pérdida de confianza, si el tribunal de conocimiento estima que ha sido interpuesta extemporáneamente o que no fue alegada oportunamente, y a su vez prescinde del análisis de los hechos y la prueba; resulta contradictorio que a continuación la retome para acreditar el despido, puesto que ya le fue negada su eficacia jurídica.

Abordados y resueltos los agravios propuestos en la alzada, y debido a que, la sociedad demandada acreditó la terminación de la relación de trabajo, al haber opuesto y alegado la excepción de terminación del contrato de trabajo sin responsabilidad para el empleador, bajo la causal 3ª del art. 50 CT, pérdida de confianza, corresponde absolver a la misma, respecto de las prestaciones de indemnización por despido injusto, vacación y aguinaldo proporcional conforme al contrato colectivo, reclamadas por la trabajadora demandante en este juicio."

Sala de lo Civil, número de referencia: 172-CAL-2022, fecha de la resolución: 08/12/2022

Relaciones:

Sala de lo Civil, número de referencia: 151-CAL-2022, fecha de la resolución: 17/11/2022

SI SE INTERPONE EN EL SÉPTIMO DÍA DEL TÉRMINO PROBATORIO, ÉSTA DEBE DE ADMITIRSE SIEMPRE Y CUANDO NO SE SOLICITE AUDIENCIA PARA LA PRESENTACIÓN DE TESTIGOS

"Se advierte de la pieza principal (a folios [...]), que la apoderada de la sociedad demandada, licenciada […] presentó escrito por medio del cual opuso y alegó la excepción de terminación de contrato sin responsabilidad para el empleador, contenida en la causal 30 del art. 50 CT *"Por la pérdida de la confianza del patrono en el trabajador, cuando éste desempeña un cargo de dirección, vigilancia, fiscalización u otro de igual importancia y responsabilidad".*

La apertura a pruebas fue notificada a través del sistema de notificación electrónica (SNE) el veintinueve de junio de dos mil veintiuno, por lo que el plazo para el período de prueba estaba comprendido desde el uno al doce de julio de dos mil veintiuno; el escrito referido en el párrafo precedente fue presentado el nueve de julio del mismo año. Y para acreditar la eximente de responsabilidad, la abogada litigante presentó únicamente prueba documental, incorporada a folios […] de la pieza principal.

Por lo tanto, este tribunal sostiene que la excepción fue alegada en el término probatorio, en consecuencia, el tribunal de primera instancia debió haber analizado el escrito que contenía la misma y también la prueba documental presentada, debido a que sólo si hubiere solicitado audiencia para la presentación de testigos (art. 397 CT) podía hacerlo hasta el sexto día hábil.

Sin embargo, el juez de la primera instancia sostuvo que la excepción no fue alegada oportunamente, sino hasta el séptimo día del término probatorio, y con posterioridad a la audiencia de testigos de cargo, por lo que la parte actora

quedó sin posibilidad para presentar prueba en defensa de los hechos que se le atribuyeron. En consecuencia, no tomó en cuenta ni analizó la prueba de descargo aportada.

En consideración a lo expuesto por el tribunal en referencia (es decir, que la actora no tenía posibilidad de defenderse), se debe recordar que en torno al debido proceso y los principios de igualdad procesal y defensa, previamente se ha efectuado el análisis pertinente, por ende ya no se abordará dicho tema."

PROCEDENCIA DE LA EXCEPCIÓN DE PÉRDIDA DE LA CONFIANZA

"En consecuencia, se procede al estudio de la excepción opuesta por la demandada, los hechos alegados más la prueba documental incorporada.

En el escrito de folios […] de la pieza principal, la demandada afirmó que no había acontecido el despido del trabajador demandante sino la terminación contractual sin responsabilidad para el empleador, de conformidad a la causal 3° del art. 50 CT, por pérdida de confianza.

Y al respecto manifestó que *"el señor ES realizaba las actividades en un puesto de confianza, gerencia y dirección, ya que las funciones que desempeñaba y ejecutaba son parte fundamental de […] S.A. de C.V., es por ello que tiene una mayor vinculación directa con la Sociedad, ya que tiene posición de mando y dirección de la misma, esto se puede corroborar con la descripción del puesto que se anexa al presente escrito como ofrecimiento de prueba documental".*

Además señaló "la Confianza depositado en el señor JRES fue perdida, ya que actuaciones realizadas por su persona y en el cargo que ostentaba eran incompatibles para realizar y colocar en vulnerabilidad a […] S.A. de CV., frente a otras sociedades que tienen el mismo rubro de ***operaciones de venta de energía".***

[...]

Partiendo de los argumentos expuestos y la prueba agregada al proceso se advierte, en primer lugar que, la relación laboral que existió entre el trabajador y la sociedad demandada, así como el contrato de trabajo y sus condiciones (salario), no han sido un punto en contienda en el juicio, debido a que la empleadora la reconoció, por ende, es un hecho admitido (art. 314 ord, 1° CPCM). En ese sentido, al ser un hecho existente para este tribunal, la prueba incorporada a fs. […] de la pieza número uno, resumen e historial laboral SPP-SAP, queda excluida del análisis probatorio.

Considerando que se alega la pérdida de confianza en el trabajador, debe mencionarse que la confianza como tal es entendida según la *"RAE como la esperanza firme que se tiene de alguien o algo, constituye la condición fundamental o el rasgo esencial para convertir la relación laboral con estos trabajadores en una relación laboral especial, en razón de las funciones que desempeñan dentro de la empresa, con unos efectos jurídicos propios y distintos a los que se generan con los trabajadores ordinarios y con una exigencia cualificada de la acción de actuar de buena fe pues a ellos se exigirá más que al común de los trabajadores"* Espinazo Escobar, Javier H. (Profesor principal de Derecho del Trabajo de la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo), La calificación del personal de dirección o de confianza: Entre los hechos y las formas.

Es decir, la confianza constituye un elemento fundamental en la relación de trabajo, siendo depositada por el empleador en razón de las funciones que desempeña dentro de lo empresa. Pero a la prestación de servicios se unen los deberes del trabajador, aspectos consustanciales a la misma, como los de obediencia, diligencia y buena fe.

Para efectos del tema de la confianza en el trabajador, únicamente trataremos lo relativo a la buena fe. Este deber está implícito en toda relación contractual, e implica una relación de confianza profesada entre dos sujetos, que conforma una idea de compromiso en el correcto cumplimiento de sus respectivas obligaciones y de cooperación en aras de la actividad productiva.

Desde esta óptica y concerniente a la relación laboral, el trabajador debe realizar un cumplimiento fiel de su prestación, pero también significa que debe manifestarlo en dos sentidos: de forma activa, realizar una conducta diligente y de cooperación; y de modo pasivo, evitando ser desleal, absteniéndose de realizar conductas que sean dañosas para los intereses del empleador (divulgación de secretos, concurrencia de actividades, entre otras).

De tal forma que, el fundamento jurídico de estos deberes lo encontramos en el art. 31 CT, de forma específica y para los trabajadores cuya normativa es aplicable, pues en la legislación de trabajo hay consignadas muchas más obligaciones para estos.

Una de las manifestaciones del deber de buena fe, estriba en la prohibición de ser desleal con el empleador, puesto que el trabajador está sometido a una obligación de fidelidad o lealtad; por ello, no debe buscar satisfacer su propio interés o el de un tercero en detrimento de los de la sociedad o institución para la cual trabaja, ya que de ser así, se incumple con este deber, y se incurre en un conflicto de intereses, es decir, cuando en vez de actuar procurando el interés superior de la empresa, privilegia su interés personal o el de un tercero.

Pero ¿por qué la conducta de realizar actos que prioricen el interés personal del trabajador (conflicto de intereses) y disminuyan los del empleador quebranta la relación de confianza? Se debe tomar en cuenta que, el empleador además de remunerarle el trabajo al empleado, le facilita los medios necesarios para consolidar su formación y experiencia. Sin embargo, si eso luego es utilizado por el trabajador en su propio provecho y en perjuicio de los intereses de aquel, quiebra la relación de confianza transgrediendo la buena fe contractual, que es uno de los principios que inspiran la relación, de ahí su consideración corno causa de despido. (resaltado lo hace este tribunal). Alemán Páez, Francisco, Jiménez García. Juan y Vega López, Julio J., Derecho del Trabajo I, Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Vicerrectorado de Planificación y Calidad, calificación del personal de dirección o de confianza: Entre los hechos y las formas.

Concretamente, a juicio de este tribunal el trabajador demandante señor, JRES, transgredió el deber de buena fe, lo que a su vez quebró la relación de confianza, por haber suscrito un contrato de prestación de servicios profesionales con la sociedad […], Sociedad Anónima de Capital Variable, empresa dedicada al mercado eléctrico (como experto en planta de generación y sus procesos de comercialización); esto, ya que según copia certificada notarialmente del

contrato en referencia (a folios […] de la pieza principal), el señor ES, se obligó con esa sociedad dedicada al mismo rubro o naturaleza que su empleadora, […], Sociedad Anónima de Capital Variable, a dar orientación a las consultas sobre modelos de plantas de generación y los mercados eléctricos, a orientar sobre las consultas de información relativa a cambios y evolución en el mercado, así como de normas, leyes y normativas vigentes del mercado eléctrico nacional y regional.

Además, el señor ES se comprometió a realizar reuniones-talleres con el personal designado para diagnosticar, y así establecer hojas de cálculo que servirían para la presentación adecuada de reportes mensuales a la alta dirección de la otra sociedad (Inversiones Energéticas, Sociedad Anónima de Capital Variable) para el adecuado control, seguimiento y monitoreo de las operaciones que realizaba en el mercado eléctrico nacional y regional; actividades por las que debía rendir un resumen ejecutivo.

Del mismo modo, se advierte que según la demanda de folios […], el señor ES apoyaba técnicamente a la gerencia de inversión y cooperación de proyectos, sin describir particularmente las actividades que desarrollaba. Sin embargo, la empleadora agregó al proceso el récord de trabajo del año dos mil seis al dos mil veinte (fs. […] de la pieza principal), prueba documental que no fue controvertida por el actor; y de cuyo documento se evidencia que el último puesto desempeñado fue el de especialista en geociencias y energía senior, que pertenecía a la unidad de gerencia de inversión y cooperación de proyectos.

Así también, se constata del documento en referencia, que el trabajador demandante desempeñó los cargos de ingeniero de diseño eléctrico, ingeniero electricista, ingeniero de instrumentación, ingeniero asistente técnico y gerente de área; siendo que el desempeño de estos cargos implicaba el manejo de los conocimientos técnicos relacionados con el giro económico de […], S.A. de C.V., empresa dedicada a la producción de energía eléctrica. De tal manera que, como gerente de área le correspondía gestionar las relaciones comerciales y el rendimiento de las operaciones de generación geotermoeléctrica en condiciones contractuales convenientes para su empleadora, en el mercado eléctrico nacional e internacional; esto, comprendía que debía desarrollar funciones de planificación, organización, coordinación, dirección/supervisión, de seguimiento y operativas. Asimismo se destaca que le correspondía coordinar la participación de […], S.A. de C.V., en el mercado eléctrico con agentes nacionales y extranjeros, contactando a clientes relacionados a las actividades comerciales de energía de la empresa, dirigir y supervisar la preparación y presentación de ofertas para contratos de suministro de energía, dirigir y supervisar los programas de atención específicos, los contratos de venta de energía eléctrica; la correcta aplicación y actualización de tarifas del mercado regulado o libre y el despacho de carga.

Por las responsabilidades y funciones descritas, se concluye que el señor ES, al contratar con otra sociedad, también dedicada a la producción de energía eléctrica, […], Sociedad Anónima de Capital Variable, realizaba actividades encaminadas a la generación y venta de energía; así como sobre la información

relativa a cambios y evolución en el mercado; información que iba a presentarse a la alta dirección de dicha sociedad. Por tanto, se trata de actividades realizadas dentro del mismo plano en que efectuaba las labores como trabajador de […], S.A. de C.V., por incidir sobre un mismo mercado y un círculo potencial de clientes.

Sobre el giro económico de las empresas consultar los sitios (https://www.ine.com.sv; https://lageo.com.sv).

En ese sentido, este tribunal sostiene que, precisamente para evitar que se propicie un conflicto de intereses existe prohibición para que el trabajador realice tareas de la misma naturaleza de las que está ejecutando en virtud del contrato de trabajo que sostiene con su empleadora.

Por otra parte, está debidamente acreditado que el contrato de servicios profesionales se materializó, pues están agregadas al proceso, copias certificadas notarialmente de facturas emitidas a favor de […], Sociedad Anónima de Capital Variable (a folios […], primera y segunda pieza de sustanciación), en concepto de servicios profesionales de asesor comercial, por un monto de cinco mil 00/100 dólares de los Estados Unidos de América (monto que según el contrato corresponde al pago), siendo el emisor JRES (trabajador demandante) bajo el rubro de servicios de ingeniería “Ingeniería Consultoría-Asesoría”.

Asimismo, obran en el proceso vouchers de la cuenta bancaria con la denominación de […], S. A. de C.V., del Banco de América Central, pagaderos a la orden de JRES (a fs. […], todos de la primero y segunda pieza de sustanciación), por servicios profesionales.

[...]

Por consiguiente, para este tribunal el trabajador demandante, señor JRES vulneró la relación de confianza transgrediendo la buena fe contractual, por lo que corresponde declarar ha lugar a la excepción de terminación de contrato sin responsabilidad para el empleador, de conformidad a la causal 3° del art. 50 CT.

Continuando con la justificación de esta sentencia, siempre en lo relativo al primer punto de agravio propuesto en el recurso de apelación, la apelante argumentó, que la contestación de la demanda está referida a controvertir los hechos planteados en la misma, y que, la terminación contractual sin responsabilidad para el empleador constituye una excepción, pues esta, de ninguna manera podría considerarse corno una forma de contestar la demanda con el propósito de extinguir la sustanciación del derecho o la pretensión, para ello, trajo a consideración el contenido e interpretación del art. 284 CPCM.

Señaló además, que en la sustanciación del proceso se aplicó una mixtura de conceptos procesales, por lo que no se puede dilucidar en qué momento se aplicarán las normas procesales del Código de Trabajo, y en cuál lo serán las del Código Procesal Civil y Mercantil.

Se comprende que el anterior planteamiento obedece a la interpretación relativa al precedente de esta Sala bajo la referencia número 359-CAL-2019, según el que se consideró la aplicación supletoria del art. 284 CPCM, para determinar cuándo pueden los demandados, interponer las excepciones que no se refieran

a la competencia jurisdiccional, es decir, que deberían interponerse en lo contestación de la demanda; sin embargo, este precedente ha sido reinterpretado, y tal como se ha expuesto en párrafos anteriores, las excepciones pueden oponerse a partir de la etapa probatoria y hasta antes del cierre del proceso.

Bajo esta perspectiva, cuando el demandado opone una excepción obviamente aspira a que la pretensión del actor sea desestimada, y en consecuencia si prueba los hechos alegados, como por ejemplo cuando alega la terminación del contrato de trabajo bajo las causales que lo eximen de responsabilidad, por alegarse incumplimiento de parte del trabajador por cualquiera de las formas en el art. 50 CT, lo que se espera es la absolución; a diferencia, en la contestación de la demanda, el demandado opone expresamente su resistencia, y pide que no se dicte contra él sentencia condenatoria.

Aclarado este punto, se procede con el estudio de los otros aspectos en contienda.

Errónea aplicación e interpretación del art. 414 CT

Con relación a esta infracción, la apelante expresa que el juzgador aplicó la disposición señalada a pesar que no se cumplían los presupuestos para ello, esto, debido a que la demanda se presentó fuera del plazo que establece la disposición legal, quince días, considerando que fue después de haber transcurrido treinta y nueve días posteriores al supuesto despido, En consecuencia, bajo su criterio la argumentación del tribunal es errónea, y la sentencia y el fallo es nula.

Al respecto de la inconformidad de la recurrente se advierte, que la demanda que dio mérito al proceso de autos, fue presentada el veinticinco de febrero de dos mil veintiuno, y el hecho del despido aconteció el treinta de diciembre de dos mil veinte; por tanto, los quince días hábiles a que hace referencia el art. 414 CT, se cumplían el veintidós de enero de dos mil veintiuno; en ese sentido, el requisito relativo al plazo en examen no se cumplió, por haberse presentado la demanda treinta y nueve días hábiles posteriores al hecho (despido). (el resaltado es nuestro).

Aun así, es indispensable referirse también a los otros presupuestos que la presunción requiere para su aplicación.

Y al respecto se evidencia que la apoderada de la sociedad demandada compareció a la audiencia conciliatoria, sin embargo no ofreció ninguna medida conciliatoria; la relación laboral no es un hecho controvertido en el proceso sino más bien admitido puesto que la sociedad empleadora lo reconoció. (art. 314 ord. 1° CPCM).

Mediante la declaración de los testigos de cargo señores MBVC y DACE (a fs. […] de la pieza principal, acta y DVD), se estableció la representación patronal de la señora NA, jefe de recursos humanos, a quien se le atribuyó el despido, asimismo con la declaración del representante legal de la sociedad demanda, por haber expresado que dicha señora se desempeñaba como gerente de recursos humanos; esto, en virtud que, sus declaraciones merecen credibilidad por haber manifestado que conocían a la señora A, quien se desempeñaba como gerente de recursos humanos en […], S.A. de C.V., empresa para la que también ellos trabajaron y que además fueron despedidos por la referida señora.

Por otra parte, en la causa en análisis existe prueba en contrario; al haberse presentado los documentos incorporados a folios […] (pieza […] de sustanciación) para acreditar la excepción opuesta por la sociedad demandada, y que ha sido estimada por esta Sala en apartados que preceden a este párrafo; en tanto, esto constituye una limitante para aplicar la presunción de despido del art. 414 CT, así lo determina el inciso primero de la referida disposición legal.

En síntesis, la presunción fue aplicada en contravención a la ley, por no haberse cumplido el requisito del plazo de los quince días hábiles siguientes al despido, y además, a pesar de existir prueba en contrario.

Siempre en el análisis de los agravios propuestos por la abogada apelante, específicamente en lo que respecta a que debió haberse admitido y valorado la prueba incorporada en el término probatorio, es necesario enfatizar que estos argumentos han sido resueltos por este tribunal al haberse determinado que la excepción de terminación del contrato de trabajo sin responsabilidad para el empleador, con base a la causal 3° del art, SO CT, fue alegada en el término probatorio, y que por consiguiente el tribunal de primera instancia debió haber analizado el escrito que contenía la misma y también la prueba documental presentada. En efecto este tribunal, realizó el análisis pertinente y como resultado de ello, estimó la excepción opuesta, por tanto no se profundizará más al respecto.

Errónea aplicación de los arts. 314 y 347 CPCM, y art. 1892 del Código Civil

La abogada […], argumenta que el tribunal de primera instancia aplicó erróneamente los arts. 314 y 347 CPCM, al estimar que "[...] al presentar un escrito y hacer referencia a "ciertos hechos" como alegaciones o argumentaciones entiende que existe un reconocimiento de hechos realizado por mi representada por medio de mi persona [...] "(sic).

Enfatiza al respecto, que el representante legal de su representada no le facultó para reconocer hechos, por tanto, sostiene que no está facultada para admitir o reconocer hechos y muchos menos en representación de la voluntad del ente jurídico, […], S.A. de C.V., pues las facultades conferidas en el poder son precisamente las generales del mandato y las especiales reguladas en el texto del mismo, con base al art. 1892 del Código Civil.

En la sentencia de primera instancia se observa que el tribunal argumentó que la apoderada de la demandada alegó la excepción en el séptimo día del término probatorio y con posterioridad a la audiencia de testigos de cargo, por tanto según su análisis no fue alegada oportunamente, y se dejaba a la actora sin posibilidad para presentar prueba en defensa de los hechos que se le atribuían, lo que es contrario a los principios de lealtad procesal, buena fe, contradicción e igualdad de armas. A propósito del momento en que deben alegarse las excepciones cita jurisprudencia que refiere a que deberán interponerse en la contestación de la demanda (art. 284 CPCM).

En consecuencia de lo anterior, razonó que, al no haberse cumplido con los parámetros de ley para oponer excepciones, no podía analizar ni tomar en cuenta la prueba de descargo aportada. De manera que tampoco examinó los hechos planteados que fundamentaban la excepción.

Luego, expresa que, al haberse opuesto lo excepción se evidenciaba un reconocimiento implícito del despido del trabajador demandante ya que "cuando se alega la causa justificativa 3º del Art. 50 del Código de Trabajo, la prestación de servicios y el despido implícitamente se reconocen por el patrono". Su postura la justificó con la sentencia de este tribunal clasificada bajo la referencia número 346-CAL-2012.

Por el contrario, no se infiere ninguna consideración con relación a los arts. 347 CPCM y 1892 del Código Civil, pues no se aplicó la presunción contenida en la primera disposición legal, en cuanto a estimarse aceptados los hechos ante la inasistencia del representante legal de la demanda a rendir declaración, en tanto que la audiencia se llevó a cabo debido a la asistencia del mismo.

De los argumentos del tribunal de primera instancia, esta Sala advierte infracción a la sana critica, específicamente al principio de no contradicción. Este, parte de la premisa de que dos juicios contradictorios no pueden ser verdaderos ambos a la vez; en ese sentido, el juez infringe este principio si dentro de la misma sentencia afirma un hecho y más adelante lo niega.

De tal forma, el tribunal de primera instancia aduce que la excepción de terminación del contrato por pérdida de confianza, causal 3° del art. 50 CT, fue alegada no oportunamente y con posterioridad la retoma para establecer el extremo principal, el despido; así pues, desconoce que los juicios antagónicos sobre el mismo objeto de pensamiento no puede coexistir porque se excluyen entre sí y destruyen mutuamente.

Lo anterior impone a este tribunal, examinar la sentencia de las diez horas cuarenta y cinco minutos del diecisiete de agosto de dos mil quince, con el número de referencia 346-CAL-2012, a efecto de constatar si el tema relativo a las excepciones fue correctamente interpretado.

En síntesis, en dicha sentencia este tribunal estimó que cuando se alega la causal justificativa 3ª del art. 50 CT (pérdida de confianza), la prestación de servicios y el despido implícitamente se reconocen por el empleador.

Así también se consideró que *"[…] hay un reconocimiento del empleador de dar por terminado la relación laboral debido a la pérdida de confianza del trabajador; en otras palabras, el despido se perfeccionó con la declaración manifiesta del empleador a través de la causal alegada, por lo tanto lo que debió de probar la parte demandada es la justificación del acto, y no el acto propiamente dicho [...]"(sic).*

Ante todo, se debe aclarar que para el caso de autos no es aplicable el criterio relacionado, visto que la sociedad demandada acreditó la pérdida de confianza en el trabajador demandante, al haber transgredido la buena fe contractual; por lo que este tribunal en los párrafos anteriores de este proveído, declaró ha lugar a la excepción de terminación de contrato sin responsabilidad para el empleador, de conformidad a la causal 3° del art. 50 CT; vale decir, […], S.A. de C.V. justificó la terminación del contrato de trabajo.

Por tanto, debe aclararse que bajo el supuesto de que en el proceso se oponga y alegue la excepción de terminación del contrato por pérdida de con-

fianza, si el tribunal de conocimiento estima que ha sido interpuesta extemporáneamente o que no fue alegada oportunamente, y a su vez prescinde del análisis de los hechos y la prueba; resulta contradictorio que a continuación la retome para acreditar el despido, puesto que ya le fue negada su eficacia jurídica.

Abordados y resueltos los agravios propuestos en la alzada, aún quedan medios probatorios que deben integrarse en el análisis de los que ya fueron estudiados, entre estos, copias simples que son parte del contrato colectivo de trabajo de […], S.A. de C.V., la declaración de parte contraría y las declaraciones de los testigos en torno al despido, pruebas que fueron aportadas y producidas a petición de la actora.

En esta disertación nos referimos a las copias simples agregadas a folios […] de la pieza uno, las que son fracción del contenido del contrato colectivo de trabajo citado, a las cuales este tribunal le resta valor probatorio, en virtud que la normativa laboral prescribe que la existencia del contrato colectivo de trabajo sólo puede probarse por medio del documento respectivo debidamente inscrito, o mediante certificación de la inscripción extendida por el departamento correspondiente del Ministerio de Trabajo y Previsión Social (art. 281 CT). (resaltado es nuestro).

En ese sentido, el legislador dispuso de dos formas para acreditar la existencia del referido instrumento, y por ende para que despliegue sus efectos. Así pues, debió presentarse la certificación de la inscripción del contrato colectivo extendida por el Ministerio de Trabajo o el documento debidamente inscrito, del que también puede presentarse copia certificada notarialmente, en virtud que el notario da fe de la fidelidad y conformidad con el original (art. 30 Ley del Ejercicio Notarial de la Jurisdicción Voluntaria y de Otras Diligencias).

En cuanto a la declaración de parte contraria del representante legal de la sociedad demandada, señor MJGA (a fs. […] de la segunda pieza, acta y DVD), no aporta elementos en cuanto al hecho del despido, puesto que en la audiencia, el referido señor manifestó desconocerlo, más bien afirma que se trató de una terminación del contrato sin especificar fecha.

Mientras tanto, los testigos de cargo señores, MBVC y DACE, han declarado haber trabajado también para […], S.A. de C.V., y que fueron despedidos la misma fecha que el trabajador demandante, refiriendo al respecto, los detalles de la hora aproximada, el lugar y la persona que lo llevó a cabo, la señora NA, gerente de recursos humanos. Sin embargo, el hecho manifestado por los testigos, la terminación del contrato de trabajo, ya es de conocimiento de este tribunal, pues la empleadora demandada ha justificado debidamente con la prueba documental incorporada, que fue analizada en los apartados precedentes, el motivo por el que terminó la relación laboral, pérdida de confianza; documentos que resultaron veraces para estimar que el trabajador señor, JRES falló al deber de buena fe, al haber suscrito contrato de prestación de servicios con la sociedad […], S.A. de C.V., dedicada al mismo giro económico que su empleadora, mediante el que realizaba actividades de igual naturaleza que las que ejecutaba en virtud del contrato de trabajo con […], S.A. de C.V., lo que implica que, a su vez estas propiciaron un conflicto de intereses.

En consideración a lo expuesto, y debido a que, la sociedad demandada acreditó la terminación de la relación de trabajo, al haber opuesto y alegado la excepción de terminación del contrato de trabajo sin responsabilidad para el empleador, bajo la causal 3° del art. 50 CT, pérdida de confianza, corresponde absolver a la misma, respecto de las prestaciones de indemnización por despido injusto, vacación y aguinaldo proporcional conforme al contrato colectivo con una compensación equivalente al ciento cincuenta por ciento del salario ordinario mensual, por cada año de servicio, así como de la bonificación especial por finalización de contrato de trabajo con responsabilidad patronal, equivalente al pago de trece salarios adicionales, reclamadas por el trabajador demandante en este juicio."

Sala de lo Civil, número de referencia: 168-CAL-2022, fecha de la resolución: 20/10/2022

FINIQUITO

DOCUMENTO OBJETO DE RECLAMO CARECE DE VALOR PROBATORIO, NO POSEE ELEMENTOS BÁSICOS E INDISPENSABLES PARA SU VALIDEZ EN SU LITERALIDAD, COMO SON LAS CANTIDADES DE DINERO QUE RECIBIÓ EL TRABAJADOR Y EN QUÉ CONCEPTOS

"Error de derecho en la apreciación de la prueba documental
Precepto infringido inc. 1.° art. 402 CT

En cuanto al vicio de error de derecho en la apreciación de la prueba documental que se le atribuye a la Cámara, la recurrente en el escrito de interposición del recurso de casación expresó lo siguiente: "[…] La Cámara en el número 7 de su sentencia, expone que comparte el criterio del Juez, porque en el referido documento de fs. [...], el finiquito no hace fe, debido a que el documento no contiene los valores en dinero que le fueron pagados al demandante en concepto de indemnización por el tiempo de servicio que presto para la demandada. (...) En ese punto, se comete de manera evidente el error de derecho, debido a que, el valor probatorio del referido documento, debió hacerse en función del Art. 402 inciso Primero del Código de Trabajo, pues se trata de un finiquito extendido por el trabajador, tomando en cuenta que se trataba de un contrato temporal, (considerando que la CEL no se dedica a actividades agrícolas) y que en el mismo documento, el trabajador reconoce, que es un contrato temporal, debido a las actividades que realiza, y que declara libre y solvente a la CEL de cualquier obligación que debió cancelar, en tiempo y forma; es decir, que, de acuerdo al instrumento que se agregó como prueba, no estábamos frente a un caso de despido y por ende de pago de indemnización, sino de una terminación de contrato a plazo, debido a la naturaleza del servicio que se prestó, y por lo tanto, a una declaratoria de exención de responsabilidad pecuniaria para mi representada, lo

cual se hizo mediante un documento privado autenticado, debió darle pleno valor probatorio, pues, está claramente determinado en el Art. 402 inc. 1 del Código de Trabajo (...) En ese orden de ideas, el documento que corre agregado a fs. 61 de la pieza principal, debió ser valorado como plena prueba, conforme los argumentos y bases legales antes mencionadas, y al negarle el valor de parte de la Cámara, se cometió el error de derecho en la apreciación de la prueba. [...]" (sic).

La inconformidad de la recurrente radica, según su criterio, en que la Cámara debió darle valor probatorio al documento de finiquito presentado (como prueba documental de descargo), y que con el mismo debió de haberse tenido por comprobado, el reconocimiento del trabajador que estaba vinculado con la demandada por medio de un contrato de naturaleza temporal, en virtud de las actividades que realizaba, y que declaraba libre y solvente a la Comisión de cualquier obligación que esta debía cancelarle, en tiempo y forma.

Además sostuvo que con el referido documento, se comprobó que no se estaba frente a un despido, sino ante una terminación de contrato por caducidad del plazo establecido en el mismo (debido a la naturaleza de las labores que desempeñó el trabajador), y que por lo tanto la Cámara debió de haber declarado una exención de responsabilidad pecuniaria para el ente demandado.

En cuanto al error de derecho en la apreciación de la prueba documental, esta Sala ha sostenido a través de su jurisprudencia, v.g., sentencia de las once horas con veintidós minutos del veintiuno de octubre de dos mil diecinueve, bajo la casación con referencia 222-CAL-2019, entre otras, "que el mismo se presenta, cuando el juzgador, al apreciar las pruebas o al estimar su valor, no aplica las normas establecidas para tal medio probatorio, infringiendo con ello, los preceptos sobre la valoración de los medios de prueba. Se produce también cuando el juzgador aprecia incorrectamente una prueba y le da un valor distinto al que le asigna la ley".

Definido el vicio invocado, es necesario remitirse a lo que la Cámara Segunda de lo Laboral con sede en San Salvador, estableció en su sentencia, con relación a la apreciación del documento objeto del submotivo: "[...] Respecto al documento de folio 61, que contiene finiquito firmado por el trabajador, éste fue rechazado por el señor Juez A quo, en virtud que para él "(...) el contenido de dicho finiquito no hace fe al Suscrito Juez Interino de las prestaciones laborales que menciona dicho documento le fueron canceladas al trabajador demandante, pues no especifica los montos en concepto de indemnización por tiempo laborado (...)", criterio que esta Cámara comparte, porque ese documento, aunque está revestido de las formalidades de ley en cuanto a su estructura, no lo es respecto a su contenido. (...) Aunque el trabajador firmó ese documento, en la jurisprudencia más reciente de esta Cámara, verbigracia los incidentes de apelación 164-2020 y 49-2021, se ha expresado que si se presentan documentos como el aportado en el sub iúdice, es menester que se detallen las cantidades recibidas por el trabajador firmante, porque sólo de esa manera se estaría potenciando la seguridad jurídica que debe caracterizar ese tipo de documentos en cumplimien-

to de lo ordenado en el artículo 402 del Código de Trabajo.(...) En efecto, dicho referente jurisprudencial incluso ha sido del conocimiento de la Sala de lo Civil de la Honorable Corte Suprema de Justicia [451-CAL-2018], y aunque no en idénticas circunstancias, sí lo fue sobre la necesidad de establecer de forma clara y precisa lo que se le ha cancelado al trabajador, es decir, que al no consignarse que el trabajador ha recibido una cantidad específica, de ninguna manera es posible acreditar que se le ha efectuado el pago de la correspondiente prestación [...]" (sic).

Se advierte de lo sostenido por la Cámara en su sentencia, que no le otorgó valor probatorio al documento privado autenticado de finiquito, presentado por la demandada, en vista de que no consta en el mismo, si el trabajador, señor JBHA, recibió cantidades específicas de dinero y bajo que concepto las recibió, elementos esenciales para que el referido documento tuviera valor probatorio.

Cabe señalar, que a folios sesenta y uno de la pieza principal, corre agregado un documento privado autenticado, otorgado por el trabajador demandante, en el que consta lo siguiente: "[...] Yo, JBHA, de veinticinco años de edad, estudiante, del domicilio de San Ildefonso, Departamento de San Vicente, portador de mi documento único de identidad número **********, OTORGO: Que se me ha notificado la terminación de mi CONTRATO AGRÍCOLA, por cumplimiento de plazo, conforme lo regulado en el artículo cuarenta y ocho, causal primera del Código de Trabajo, y que tiene por objeto la prestación de trabajo agrícola temporal en el Proyecto Vida, que he venido desempeñando para y a las órdenes de […], desde el día uno de enero de dos mil diecinueve, hasta el día treinta y uno de diciembre de dos mil diecinueve, fecha en que dejo de prestar mis servicios. Hago constar que la institución no me adeuda ninguna cantidad de dinero en concepto de salarios, sean estos ordinarios o extraordinarios, ni indemnización por el tiempo laborado, ni prestaciones de carácter laboral y por consiguiente la declaro libre y solvente de toda responsabilidad que pueda derivarse de la relación individual de trabajo, que me vinculó a ella hasta el día mencionado, extendiéndole a la Empresa el más amplio y completo finiquito, que hago extensivo a cualquier persona natural o jurídica que pudiera haberse visto involucrada en el trabajo al que me he referido. En la ciudad de San Ildefonso, Departamento de San Vicente, a los veintiséis días del mes de diciembre del año dos mil diecinueve. [...]" (el resaltado es de esta Sala).

Estudiado el contenido del documento privado autenticado de finiquito, se advierte que para que el mismo tuviera pleno valor probatorio y no generara dudas, debió de haberse especificado en su literalidad las cantidades de dinero y los conceptos bajo los cuales estas le eran entregadas al trabajador demandante, y una vez consignada la situación anterior, se debió de haber establecido que se declaraba libre y solvente a la empleadora de cualquier reclamo de dinero con motivo de esa relación de trabajo.

Y es que, por la naturaleza del derecho laboral, la finalidad de que el finiquito se elabore con esos requisitos específicos no es antojadiza, y su importancia

radica en que el trabajador corrobore y ratifique al firmarlo, que las cantidades de dinero que recibió son las que le correspondían, por el salario que devengó y por el tiempo laborado. De igual forma es necesario para que el trabajador verifique todos y cada uno de los conceptos y los correspondientes períodos, por los que se le reconocen las cantidades de dinero. Ante la falta de tales elementos, el juzgador no tiene parámetros para determinar qué cantidades de dinero y bajo que conceptos los recibió el trabajador. En este sentido, la Cámara no estaba en la obligación de apreciar el documento privado de finiquito y mucho menos de otorgarle valor probatorio.

En cuanto a lo sostenido por la recurrente en lo relativo a que en el documento de finiquito, el trabajador reconoció que era un contrato temporal, de conformidad a las actividades que realizaba, cabe citar que en jurisprudencia sostenida por esta Sala, específicamente, en la sentencia de las diez horas con treinta y tres minutos del diez de junio de dos mil veintiuno, bajo la casación con referencia 12-CAL-2020, se sostuvo lo siguiente: "[...] que el acta notarial (...) no constituye un contrato de trabajo, ya que no contiene los elementos contemplados en el art. 23 CT; de tal forma, que un acta notarial no es el instrumento idóneo para documentar un contrato. Debiéndose considerar, además, que la calidad de temporal de un trabajador, puede comprobarse únicamente mediante el contrato de trabajo escrito, ello debido a lo dispuesto en el art. 25 CT, norma que dispone que, a falta de estipulación, los contratos se presumirán celebrados por tiempo indefinido [...]".

En consideración de la jurisprudencia citada, para esta Sala, no existe la posibilidad que de las afirmaciones que constan en el documento de finiquito que firmó el trabajador demandante, se puedan tener por establecidas y por comprobadas las condiciones y estipulaciones bajo las cuales prestó su servicio, dado que las mismas, se pudieron haber tenido por comprobadas únicamente por medio del respectivo contrato de trabajo.

Concluyendo con el análisis del vicio alegado, este Tribunal sostiene, que la falta de reconocimiento de valor probatorio del documento privado autenticado de finiquito, no hace incurrir a la Cámara en el error de derecho invocado, dado que al carecer el documento aludido de elementos básicos e indispensables para su validez en su literalidad, como lo son las cantidades de dinero que oportunamente recibió el trabajador y bajo que conceptos se le reconoció el pago de los mismos, generó que la Cámara considerara al documento controvertido como carente de todo valor probatorio.

Por las razones expuestas, se concluye que la Cámara Segunda de lo Laboral con sede en esta ciudad, no cometió el error de derecho que le atribuye la licenciada [...], por lo que resulta procedente declarar no ha lugar a casar la sentencia de mérito por este submotivo."

Sala de lo Civil, número de referencia: 170-CAL-2021, fecha de la resolución: 03/02/2022

INFORMES DE AUDITORÍA

REQUISITOS PARA QUE PUEDA SER VALORADO EN PROCESOS LABORALES

"Error de derecho en la apreciación de la prueba documental, precepto infringido el art. 402 CT

Del análisis del recurso se advierte, que el recurrente basa su reclamo en que la Cámara sentenciadora, negó el valor de plena prueba que, conforme al art. 402 CT, tiene el documento denominado como *"informe de auditoría interna"*. A su criterio, con dicho informe se acreditaba la excepción de pérdida de confianza, y los perjuicios económicos que el trabajador demandante había causado al empleador. Además, afirma que el referido documento es idóneo, y que no fue contradicho por la parte contraria, ni se promovió el incidente de falsedad respectivo.

En razón de lo anterior, se advierte que el agravio que alega el recurrente consiste en que la Cámara sentenciadora, no dio el valor probatorio respectivo, al informe de auditoría interna, con el cual se probaban las causales 3° y 8^{0} del art. 50 CT, como justificativas y determinantes con respecto a las eximentes de responsabilidad del despido.

A efecto de ilustrar sobre las consideraciones de la Cámara con relación a la prueba documental, se transcriben los pasajes pertinentes de la sentencia: *"(...) En el caso de la auditoría contable, la profesión que dota de conocimientos para poder llevar a cabo ese tipo de documentos es la Contaduría Pública, por lo que se requiere de los conocimientos de un experto en dicha profesión. Este profesional debe cumplir una serie de requisitos que lo habilitan para ejercer la contaduría pública a nivel nacional, específicamente para poder llevar a cabo una auditoria es por ello que se hace referencia expresa a lo establecido en la Ley Reguladora del Ejercicio de la Contaduría, que en su artículo 4 establece cuales son los requisitos para poder llevar a cabo una auditoria, estableciendo que: (...) Sólo quienes sean autorizados para ejercer la contaduría pública podrán ejercer la función pública de auditoría. Con el objeto* de *ser* autorizados para el ejercicio de auditorías externas especializadas, los auditores también deberán cumplir los requisitos que establezcan otras Leyes y ser inscritos en los registros correspondientes (...) Ante lo anterior, se entiende que para poder llevar a cabo una auditoria se debe contar con la autorización previa como contador público, lo cual se describe en el artículo 3 de la citada Ley, que al momento de regular lo relativo a dicho permiso, hace referencia al Consejo de Vigilancia de la Contaduría Pública, que es la única institución encargada de la autorización de los contadores. Una vez ventilados dichos aspectos, se hace referencia a la calidad que habilita al señor el señor JANO como supuesto Auditor Interno, y al señor MH, como Supuesto Gerente Financiero, para realizar este tipo de auditorías, aspecto que generaba duda en virtud de la ausencia de sello, cuestión que fue expuesta en primera instancia por la parte actora por medio de su escrito de Fs. […] de la pp., pues dichas personas, si bien es cierto pueden gozar de los conocimientos

para poder desarrollar una auditoria (lo cual no se estableció tampoco), lo cierto en el presente caso es que no acreditaron los requisitos que los habilitaban para dicha actividad, como es el registro en el consejo mencionado con anterioridad. En consecuencia, la prueba documental relacionada (informe de auditoría), no puede ser tomado en cuenta para establecer las excepciones alegadas, pues no cuenta con la validez para ello (...)" (sic).

Cabe señalar, que el error de derecho en la apreciación de la prueba, se configura "(...) cuando el juzgador la aprecia incorrectamente dándole un valor distinto al que le asigna la ley, negándole todo valor; desestimando una prueba producida, aplicando incorrectamente el sistema preferencial de pruebas que establecen las normas procesales. También se ha establecido vía jurisprudencia!, que la actividad del juzgador supone en primer lugar, que debe considerarse la pertinencia, conducencia y forma en que las pruebas hayan sido solicitadas o producidas en el proceso, para luego valorar si hacen fe o no, por lo que uno de los casos en que se comete error de derecho en la apreciación de la prueba, es que ésta sea conducente y pertinente; y el juzgador le haya negado el valor que la ley le ha otorgado (sentencia de casación de las once horas cincuenta minutos del nueve de septiembre de dos mil veintiuno, con referencia 107-CAL-2020).

Con base en lo expuesto, se advierte que la Cámara sentenciadora, negó el valor de plena prueba al *"informe de auditoría interna"*, firmado por los señores JANO y MH, el primero en calidad de auditor interno y el segundo, como gerente financiero, agregado a folios […] de la pieza principal; por considerar que dicho documento no fue sellado para demostrar las calidades de los suscriptores, y su autorización por el Consejo de Vigilancia de la Contaduría Pública para ejercer la profesión de auditor. Asimismo, la Cámara argumentó que para el ejercicio de algunas profesiones se exige demostrar la capacidad técnica que habilita a las personas para la realización de un peritaje.

En lo relativo a las auditorías, dicho tribunal señaló que la Ley Reguladora del Ejercicio de la Contaduría, en el art. 4, establece que podrán ejercer la función pública de auditoría, aquellas personas autorizadas para ejercer la contaduría pública, circunstancia que, según la Cámara, no fue acreditada en el proceso, por lo tanto, dichos documentos no fueron tomados en cuenta para establecer las excepciones alegadas.

Debe tenerse en cuenta que en el documento denominado "informe de auditoría interna", agregado de folios […] de la pieza principal, se expresa que el señor EARM, que desempeñaba el cargo de contador general dentro de los negocios del demandado, incurrió en faltas en el desempeño de su trabajo, al modificar varias declaraciones extemporáneamente, lo que ocasionó multas al demandado por un total de $15,283.11, afectando el flujo de efectivo, por el desembolso de $305,662.23, más los interés correspondientes del pago a la Dirección General de Impuestos Internos, del Ministerio de Hacienda.

Sobre ello se determina, que es un documento privado conforme a los arts. 402 CT, y 332 CPCM, pues este último establece que dichos documentos, son atribuidos a la autoría de los particulares; y además, incluye aquellos que no han

reunido las formalidades que la ley exige para los instrumentos públicos. Sobre este punto, es necesario aclarar, que el documento con el cual se pretendió demostrar una serie de faltas en el manejo contable de los negocios del demandado (sociedades), no puede hacerse por medio de un documento como el agregado al proceso, pues este únicamente está firmado por los señores JANO, como supuesto auditor interno, y MH, como supuesto gerente financiero, sin ninguna garantía de la fidelidad de lo que contiene el documento. En tal sentido, cabe señalar, que en el caso de las auditorías contables, quien las realiza debe aplicar conocimientos técnicos especializados, y por lo tanto, dicho profesional debe estar registrado ante el Consejo de Vigilancia de la profesión de Contaduría Pública y Auditoría, de lo cual no existe acreditación alguna.

Por otra parte, cabe señalar, que el recurrente pretende que se le otorgue valor a un documento privado que conforme al art. 402 CT, hace plena prueba, si este no ha sido impugnado por la parte contraria. Sin embargo, es de aclarar, que de acuerdo al párrafo anterior, el extremo a probar requiere de conocimiento especializado, por lo que, es necesario que sea realizado por un profesional, aplicando conocimientos técnicos; es decir, que el documento denominado como *"informe de auditoría interna"*, debía reunir los requisitos indispensables para que se acreditan los hechos alegados como excepción, por medio de la prueba pericial, conforme al art. 375 CPCM."

CUANDO EL AD QUEM LE RESTA VALOR PROBATORIO POR NO CUMPLIR CON LOS REQUISITOS LEGALES, NO INCURRE EN LA INFRACCIÓN DE ERROR DE DERECHO EN LA APRECIACIÓN DE LA PRUEBA

"De acuerdo con lo anterior, resulta evidente que la Cámara sentenciadora, no tenía opción de resolver en forma diferente, pues el documento en análisis no reunía los requisitos legales, para considerarse prueba de las excepciones alegadas, relativas a la pérdida de confianza y por ocasionar el trabajador grave perjuicio al demandado.

Asimismo, es de mencionar que, los documentos establecidos en el art. 402 CT, no pueden considerarse como plena prueba en forma automática, sino que se debe tomar en cuenta la pertinencia, conducencia y forma en que las pruebas hayan sido solicitadas y producidas en el proceso, para luego valorar si hacen fe o no. Así, uno de los casos en que se comete error de derecho en la apreciación de la prueba, se presenta cuando siendo conducente y pertinente, el juzgador le haya negado el valor que la ley le ha otorgado.

En el presente caso, el documento analizado, no era pertinente para acreditar las faltas contables cometidas por el demandante. Y es que, de acuerdo a lo expuesto, un informe de auditoría contable debe hacerse por personas autorizadas y con conocimientos especializados en la materia; por lo tanto, debido a la naturaleza del extremo a probar, debió de reunir los requisitos que la ley establece.

Asimismo, debe señalarse que, este tribunal en sentencia pronunciada en el inicidente con referencia 222-CAL-2019, de fecha veintiuno de octubre de dos mil diecinueve -entre otras-sostuvo "que la regla de valoración establecida en el Código de Trabajo, relativa a la prueba instrumental, no es absoluta, en tanto que, no todo instrumento por el solo hecho de ser auténtico, público o privado, hará plena prueba en los casos donde sea introducido como tal, ya que, además de esa calidad, estos deben reunir otras características propias de la prueba, como es la pertinencia es decir, debe guardar relación con el objeto de la misma; útil, no deberá de admitirse aquella prueba que, según las reglas y criterios razonables, no sea idónea o resultare superflua para comprobar los hechos controvertidos -art. 319 Código Procesal Civil y Mercantil- y finalmente debe ser lícita es decir que "Las fuentes de prueba deberán obtenerse de forma lícita, quedando expedita a las partes la posibilidad de denunciar su origen u obtención cuando sean contrario a la ley. La práctica de los medios probatorios en forma contraria a lo previsto por las leyes procesales determinará la nulidad del medio" correspondiente. Sin embargo, la fuente de prueba podrá ser utilizada siempre que su aportación se hubiera realizado conforme a las normas legales" art. 316 CPCM".

En definitiva, el tribunal de segunda instancia, no cometió el error de derecho en la apreciación de la prueba, al negarle el valor de plena prueba al documento denominado "informe de auditoría interna"; contrario a ello, dicha sentencia está fundada en un proceso lógico e intelectivo, en la que se dieron razones suficientes del porqué de su fallo, requisitos que exige el sistema de valoración de la sana crítica. Consecuentemente resulta procedente declarar no ha lugar a casar la sentencia de mérito."

Sala de lo Civil, número de referencia: 141-CAL-2022, fecha de la resolución: 18/07/2022

INTERPRETACIÓN ERRÓNEA DE LEY

INEXISTENCIA, DADO QUE SE REALIZÓ UN ANÁLISIS COMPLETO PARA DETERMINAR SI OPERABAN A FAVOR DEL TRABAJADOR LAS PRESUNCIONES ESTABLECIDAS EN EL ART. 414 CT, ANTE LA FALTA DE CONTRATO ESCRITO

"Interpretación errónea

Disposición citada como infringida art. 413 CT.

[...]

De lo expuesto se advierte que, a juicio del recurrente, la Cámara interpretó erróneamente el art. 413 CT, al ampliar su alcance y establecer en su sentencia, que la falta de presentación del contrato de trabajo es un presupuesto normativo adicional para que opere y proceda la presunción de despido contenida en el artículo 414 CT.

Con respecto al vicio de interpretación errónea, esta Sala ha sostenido en su jurisprudencia lo siguiente: "(...) la interpretación errónea se produce cuando el

juzgador aplica el precepto legal correcto, atinado, pero se equivoca por desatender su tenor literal, o bien por haber ido más allá de la intención del legislador o bien por haberlo restringido. (...) Por lo anterior se requiere de dos condiciones: 1°) que el juzgador aplique al caso concreto la norma adecuada; y 2°) que al hacerlo interprete equivocadamente la norma, ya sea ampliando o restringiendo su contenido, es decir, la interpretación errónea recae directamente sobre la ley" (auto pronunciado en el incidente con referencia 177-CAL-2020, de fecha treinta de noviembre de dos mil veinte).

Para determinar si el Tribunal de segunda instancia, incurrió en el vicio alegado, resulta necesario analizar la fundamentación de su sentencia: "[...] y tomando en cuenta que en el proceso la parte patronal no presento el contrato escrito, razón por la cual operan las presunciones establecidas en el art. 413 y 414 C.T. se toman como ciertas las condiciones alegadas en la demanda, en cuanto a la relación laboral y el despido del cual fue objeto el trabajador [...]" (sic).

De la lectura integra de la sentencia se advierte, que la Cámara realizó un análisis completo para determinar si operaban a favor del trabajador demandante las presunciones establecidas en el art. 414 CT (independientemente si era o no la disposición legal aplicable al caso concreto). Por tanto, no es cierto lo que aduce el recurrente en cuanto a la interpretación errónea alegada, ya que si bien, la redacción del párrafo controvertido, no es del todo clara, no cabe duda, de que la Cámara tuvo por ciertas las condiciones y estipulaciones de trabajo alegadas por el trabajador en la demanda (las cuales debieron constar en el contrato de trabajo), con base en la presunción establecida en el art. 413 CT.

Por la razón expuesta, la Cámara no ha cometido el vicio de interpretación errónea del art. 413 CT, y la sentencia no será casada por este vicio.

En vista de que la sentencia fue casada en cuanto al submotivo de aplicación indebida del art. 414 CT, se pronunciará la sentencia que conforme a derecho corresponde.

III. JUSTIFICACIÓN DE LA SENTENCIA

De conformidad a lo establecido en el análisis la aplicación indebida del art, 414 CT, alegada por el recurrente, la justificación de esta sentencia estará encaminada a determinar si al trabajador, señor KJMA, le corresponde el derecho de pago de la indemnización por despido injusto y demás prestaciones laborales reclamadas en su demanda. También este tribunal debe pronunciarse acerca del fundamento del recurso de apelación, la existencia de la relación y el contrato de trabajo, y el despido indirecto alegado en la demanda.

El licenciado […], al mostrarse parte ante la Cámara de la Segunda Sección de Oriente con sede en Usulután, y presentar agravios en el recurso de apelación interpuesto, expresó lo siguiente: 1) que en sentencia el juez estableció que se configuró lo necesario para aplicar a favor del trabajador la presunción establecida en el artículo 414 del Código de Trabajo; sin embargo, y para el caso en concreto, la jueza omitió considerar lo sucedido en la audiencia conciliatoria de las doce horas del día treinta y uno de octubre del año dos mil diecinueve, en la que el apoderado judicial de la sociedad ofreció como medida conciliatoria

el reinstalo al trabajador en las mismas condiciones en que estaba trabajando y el trabajador no aceptó el reinstalo, situación que imposibilitó que operara a su favor la citada presunción, por lo que la jueza erró al aplicarla. 2) Que el testigo de cargo, señor BEA, en su declaración no expuso sobre la fecha ni la hora del despido que se le atribuye al empleador, por lo que el juez no podía presumir más hechos de los que las partes puedan probar, máxime cuando no existía ni indicio de prueba, y siendo que en la audiencia de testigos no se comprobó la fecha y la hora, en que se cometió el despido alegado, se cometió infracción a los artículos 416 CPCM y 461 CT, dado que el testigo debe dar razón de su dicho y tener conocimiento de los hechos controvertidos; y 3) Que en la relación de los hechos planteados en la demanda sobre el supuesto despido del señor MA, se estableció un despido indirecto, sin embargo el testigo de cargo presentado, en su declaración menciona hechos diferentes sobre lo planteados en la demanda, es decir, que su declaración va encaminada a comprobar un despido de hecho, con lo que se vulnera el principio de congruencia procesal y no se cumple con el plano fáctico de los hechos fijados en el juicio.

En cuanto a los aspectos controvertidos por el licenciado […], en el recurso de apelación, se hacen las siguientes consideraciones:

Con respecto a que no operaba a favor del trabajador la presunción de despido establecida en el artículo 414 CT, (inconformidad que motivó que la sentencia recurrida fuera casada) tal aspecto será retomado únicamente para cumplir con las formalidades y el análisis que esta sentencia amerita.

Tal como se estableció en los razonamientos realizados por esta Sala, se reitera que no concurrieron los presupuestos procesales para que operara la misma a favor del trabajador, ya que si bien, la demanda se interpuso dentro de los quince días hábiles siguientes del hecho que la motivó y se tuvo por comprobada la existencia de la relación de trabajo, no se comprobó la calidad de representante patronal de la persona a la que se le atribuyó la realización del despido indirecto alegado en la demanda, art. 55 CT (requisito que debe ser comprobado según la integración normativa que caracteriza al derecho laboral), y, además el trabajador en la audiencia conciliatoria no aceptó el reinstalo a sus labores ofrecido por el apoderado de la demandada en las mismas condiciones en las que se venía desempeñando, propuesta que a juicio de esta Sala, fue válida y justa, para que sea considerada en tal sentido (no es requisito indispensable que el propio empleador o patrono, por medio de su representante legal se haga presente a dicha audiencia y la proponga), y basta que quien lo represente, esté legalmente facultado para hacer su ofrecimiento; y a pesar de ello, el trabajador no externó las razones de por qué no aceptaba dicha propuesta de arreglo.

En lo relativo a la segunda inconformidad, respecto a que el testigo BEAC, en su declaración no expuso sobre el día y la hora en que sucedió el despido; y la tercera de las inconformidades, en cuanto a que con el dicho del referido testigo no se podía tener por comprobado el despido indirecto alegado en la demanda, porque su declaración va encaminada a comprobar otros hechos; se analizará su declaración para determinar la existencia de tales deficiencias.

[...]

Analizada la declaración del testigo de cargo, señor BEAC, se advierte, que este no expresó ni fue cuestionado en cuanto a las razones o el vínculo por el cual tenía conocimiento de la relación de trabajo entre el trabajador, señor KJMA y la sociedad [….], así como tampoco manifestó las razones por las que conocía sobre los demás elementos respecto de los cuales declaró, como la fecha y el lugar en que inició a laborar el trabajador demandante, el horario y la jornada de trabajo, las labores que desempeñaba, el salario devengado, la forma de pago y en especial sobre el despido indirecto alegado en la demanda.

De otorgársele valor probatorio a dicha declaración, se contradiría la Jurisprudencia de esta Sala, en la que se ha establecido que *"la declaración de un (...) testigo puede llegar a ser prueba suficiente, siempre que produzca un convencimiento completo en el juez acerca de los hechos que relata durdo una explicación concluyente, respecto de las circunstancias de tiempo, modo y lugar por las cuales llegó al conocimiento de los mismos"* (sentencia de las diez horas con veinte minutos del diez de octubre de dos mil dieciséis, bajo la referencia 259-CAL-2014); y es que el testigo debe dar razón de su dicho, es decir, exponer de manera clara y precisa por qué conoce los hechos de manera directa, y expresar el tiempo y forma en que ocurrieron, entre otros elementos.

Por lo que a juicio de esta Sala, y al no lograrse identificar, de lo depuesto por el testigo, señor BEAC, los elementos mínimos para determinar las razones por las que tuvo conocimiento directo sobre los hechos controvertidos, su declaración debe ser desestimada por este tribunal, al no cumplirse con lo establecido en los arts. 354 y 357 CPCM.

En consideración a que la declaración del testigo de cargo ha sido desestimada por este tribunal, resulta inoficioso resolver sobre los otros hechos sobre los que el recurrente impugnó su declaración por medio del recurso de apelación.

Por otra parte cabe señalar, que la existencia de la relación laboral y del contrato de trabajo que vinculó a las partes se tiene por comprobado con el ofrecimiento de reinstalo a sus labores al trabajador demandante por parte del apoderado de la sociedad demandada; las estipulaciones y condiciones de trabajo alegadas por el trabajador en su demanda y que debieron constar en el contrato de trabajo, se presumen ciertas de conformidad a lo establecido en el art. 413 CT, y al no haberse alegado excepción que controvierta tales extremos de la demanda.

No obstante lo anterior, no se comprobó el despido indirecto relacionado en la demanda, así como tampoco la calidad de representante patronal de la persona que lo realizó; ni opera a favor del trabajador la presunción de despido establecida en el art. 414 CT, por las razones indicadas en párrafos precedentes, por lo que al no haberse comprobado los extremos establecidos en la demanda, la sociedad demandada será absuelta de las pretensiones del trabajador."

Sala de lo Civil, número de referencia: 73-CAL-2021, fecha de la resolución: 13/01/2022

PÉRDIDA DE CONFIANZA

OCURRE CUANDO EL TRABAJADOR FALTA A LA HONRADEZ Y ES DESHONESTO EN EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES, QUIEBRA LA RELACIÓN DE CONFIANZA, TRANSGREDIENDO LA BUENA FE CONTRACTUAL, QUE ES UNO DE LOS PRINCIPIOS QUE INSPIRAN LA RELACIÓN

"Recapitulando en el tema de las excepciones, este tribunal enfatiza que pueden oponerse a partir de la contestación de la demanda, en la etapa probatoria y hasta antes del cierre del proceso (tratándose de las materiales); en tanto, las partes pueden controvertir argumentos y presentar pruebas para oponerse a las presentadas por la contraria, es decir, el cierre del proceso pone fin al debate; sin embargo, aun dictado el auto de cierre, el juzgador puede, si así lo estima pertinente, realizar actividades en torno a la prueba (arts. 394, 396 inc. 2º, 398 y 416 CT).

Hechas las consideraciones en cuanto a la interpretación de los arts. 394 y 416 CT, la carga probatoria impuesta al empleador y las condiciones a favor del trabajador, se procede a verificar si el demandado interpuso el mecanismo de defensa en tiempo, tal como lo afirmó en el recurso de alzada.

Se advierte de la pieza principal (a folios […]), que la apoderada de la sociedad demandada, licenciada […], presentó escrito por medio del cual opuso y alegó la excepción de terminación de contrato sin responsabilidad para el empleador, de conformidad a la causal 3ª del art. 50 CT *"Por la pérdida de la confianza del patrono en el trabajador, cuando éste desempeña un cargo de dirección, vigilancia, fiscalización u otro de igual importancia y responsabilidad".*

La apertura a pruebas fue notificada al actor y demandada por medio del sistema de notificación electrónica (SNE) el veinte de mayo de dos mil veintiuno, por lo que el plazo para el período de prueba estaba comprendido desde el veinticuatro al veintiocho de mayo de dos mil veintiuno; y el proceso fue cerrado el veintitrés de septiembre del mismo año, siendo que el escrito relacionado en el párrafo anterior fue presentado el diez de agosto también del dos mil veintiuno. Y para acreditar la eximente de responsabilidad, la abogada litigante presentó únicamente prueba documental.

Por lo tanto, este tribunal sostiene que la excepción fue alegada antes del cierre del proceso, en consecuencia, el tribunal de primera instancia debió haberla analizado y también la prueba documental presentada.

En consecuencia, se procede al estudio de la excepción opuesta por la demandada, los hechos alegados más la prueba documental incorporada.

[...]

Partiendo de los argumentos expuestos y la prueba agregada al proceso se advierte, en primer lugar que, la relación laboral que existió entre el trabajador y la sociedad demandada, así como el contrato de trabajo y sus condiciones (salario), no han sido un punto en contienda en el juicio, debido a que la empleadora la reconoció, por ende, es un hecho admitido (art. 314 ord. 1º CPCM).

Considerando que se alega la pérdida de confianza en el trabajador, debe mencionarse que esta es entendida según la *"RAE como la esperanza firme que se tiene de alguien o algo, constituye la condición fundamental o el rasgo esencial para convertir la relación laboral con estos trabajadores en una relación laboral especial, en razón de las funciones que desempeñan dentro de la empresa, con unos efectos jurídicos propios y distintos a los que se generan con los trabajadores ordinarios y con una exigencia cualificada de la acción de actuar de buena fe pues a ellos se exigirá más que al común de los trabajadores"* Espinoza Escobar, Javier H. (Profesor principal de Derecho del Trabajo de la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo), La calificación del personal de dirección o de confianza: Entre los hechos y las formas.

Es decir, la confianza constituye un elemento fundamental en la relación de trabajo, siendo depositada por el empleador en razón de las funciones que desempeña dentro de la empresa. Pero a la prestación de servicios se unen los deberes del trabajador, aspectos consustanciales a la misma, como los de obediencia, diligencia y buena fe.

Para efectos del tema de la confianza en el trabajador, únicamente trataremos lo relativo a la buena fe. Este deber está implícito en toda relación contractual, e implica una relación de confianza profesada entre dos sujetos, que conforma una idea de compromiso en el correcto cumplimiento de sus respectivas obligaciones y de cooperación en aras de la actividad productiva.

Desde esta óptica y concerniente a la relación laboral, el trabajador debe realizar un cumplimiento fiel de su prestación, pero también significa que debe manifestarlo en dos sentidos: de forma activa, realizar una conducta diligente y de cooperación; y de modo pasivo, evitando ser desleal, absteniéndose de realizar conductas que sean dañosas para los intereses del empleador (divulgación de secretos, concurrencia de actividades, entre otras).

De tal forma que, el fundamento jurídico de estos deberes lo encontramos en el art. 31 CT, de forma específica y para los trabajadores cuya normativa es aplicable, pues en la legislación de trabajo hay consignadas muchas más obligaciones para estos.

Una de las manifestaciones del deber de buena fe, estriba en la prohibición de ser desleal con el empleador, puesto que el trabajador está sometido a una obligación de fidelidad o lealtad; por ello, no debe buscar satisfacer su propio interés o el de un tercero en detrimento de los de la sociedad o institución para la cual trabaja, ya que de ser así, se incumple con este deber, y se incurre en un conflicto de intereses, es decir, cuando en vez de actuar procurando el interés superior de la empresa, privilegia su interés personal o el de un tercero.

De ahí que, si el trabajador falta a la honradez y es deshonesto en el desempeño de sus funciones, quiebra la relación de confianza transgrediendo la buena fe contractual, que es uno de los principios que inspiran la relación, de ahí su consideración como causa de despido. (resaltado lo hace este tribunal). Alemán Páez, Francisco, Jiménez García, Juan y Vega López, Julio J., Derecho del Trabajo I, Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Vicerrectorado de Planificación y Calidad, calificación del personal de dirección o de confianza: Entre los hechos y las formas."

PARA COMPROBAR QUE EL TRABAJADOR HA VIAJADO AL EXTERIOR SIN AUTORIZACIÓN DE SU EMPLEADOR, NO BASTA CON PRESENTAR CONSTANCIA EXTENDIDA POR EL GERENTE DE RECURSOS HUMANOS, HAY QUE PROBAR QUE SE REALIZÓ EL VIAJE

"Como primera causa del despido, la abogada litigante sostiene que el demandante realizó diferentes viajes costeados por […] S. A. de C.V. durante más de un año, para los que utilizó dinero en efectivo; sin embargo, no presentó a la unidad correspondiente registro de los gastos o de viáticos autorizados al exterior, perjudicándole económicamente. Referente a ello se observa, que sólo se incorporó al proceso una constancia extendida por la gerente de recursos humanos la señora NEAA, en la que se hace notar que no existió solicitud para los gastos, y tampoco gastos de viaje (comprobantes o facturas), o pago de viáticos; es decir, se refiere a que el demandante no tenía autorización para costear los viajes con fondos de la empleadora demandada; aunque, tal documento no es suficiente para acreditarlo, puesto que el hecho principal "que el señor EKPR viajó" no está probado; por tanto, esta circunstancia no se puede considerar válida para el despido del trabajador.

Pero, Concretamente, a juicio de este tribunal el trabajador demandante señor, EKPR, transgredió el deber de buena fe, lo que a su vez quebró la relación de confianza, por haber solicitado contrataciones de personal a través de la Cooperativa […] de R.L., la que prestaba servicios a su empleadora […], S.A. de C.V.; personal que estaría destinado a la gerencia de estudios [...], dirigida por su persona; Sobre ello únicamente constan solicitudes (memorándums y prórrogas) de forma directa al gerente de proyectos; por lo que se evidencia que se obviaban los procedimientos y parámetros de contratación, ya que no se promovió ningún tipo de competencia o evaluación de personal.

Igualmente se observa de las certificaciones (folios […]) que solicitaba personal de forma específica, es decir, le proponía al señor JC, gerente de proyectos de […], S.A. de C.V. a quien debía contratarse, lo que aconteció por diferentes períodos de tiempo, en los años dos mil dieciséis, dos mil diecisiete, dos mil dieciocho y dos mil diecinueve.

De manera que, el trabajador demandante, señor EKPR, vulneró la relación de confianza transgrediendo la buena fe contractual, al no haber cumplido los procesos de contratación de personal que beneficiaban a su empleadora, en tanto que, por desempeñar el cargo de gerente de estudios debía velar por sus intereses; y por el contrario, no lo hizo, dado que solicitó la contratación de personal de forma directa al gerente de proyectos, sin promover competencia alguna; hecho que constituye un acto de deslealtad con la sociedad demandada; en tanto, corresponde declarar ha lugar a la excepción de terminación de contrato sin responsabilidad para el empleador, de conformidad a la causal 3ª del art. 50 CT."
Sala de lo Civil, número de referencia: 172-CAL-2022, fecha de la resolución: 08/12/2022

PRINCIPIO DE CONGRUENCIA PROCESAL

EL AD QUEM NO ESTÁ EN LA OBLIGACIÓN DE PRONUNCIARSE SOBRE UN ASPECTO QUE NO FUE CONTROVERTIDO POR LA PARTE INTERESADA EN EL RECURSO DE APELACIÓN, Y QUE PODRÍA CAUSAR UN MAYOR AGRAVIO A UNA DE LAS PARTES

"Violación al art. 419 CT

Previo a resolver el vicio sometido a estudio, se destaca que serán transcritos los pasajes pertinentes del recurso, dejando fuera todos aquellos aspectos que resultaron intrascendentes, no vinculados al submotivo que se denuncia.

[...]

En el caso de autos, se advierte que a juicio de la recurrente, la Cámara tenía la obligación de revisar la condena emitida por el juez de primera instancia en su sentencia, sin embargo y contrario al principio de congruencia procesal, confirmó la sentencia condenatoria, cuando la misma no correspondía a los hechos establecidos en la demanda, ya que el fin de la relación contractual, según se estableció en la demanda, ocurrió en otra fecha y no, en la que se estableció en la sentencia del juez.

En cuanto al vicio invocado, cabe citar "que este se configura cuando se omite aplicar la norma jurídica que debió ser aplicada. Es decir, que la violación de ley ataca un vicio cometido sobre la norma objetivamente considerada y no puede versar sobre la valoración que debió concederse a determinado medio probatorio" (auto de las once horas diecisiete minutos del diecisiete de diciembre de dos mil veinte, bajo la referencia 197-CAL-2020).

Con respecto al principio de congruencia procesal, el cual en materia laboral se encuentra enunciado en el art. 419 CT, esta Sala en sentencia de las diez horas con veinticinco minutos del treinta y uno de enero de dos mil veinte, bajo la referencia 241-CAL-2019, estableció lo siguiente: "[...] La congruencia está vinculada directamente con el derecho a la protección jurisdiccional y el principio dispositivo, pues la tutela judicial efectiva viene a reconocer de manera expresa, la posibilidad que tiene toda persona de acudir al órgano estatal competente para plantearle, vía pretensión procesal, cualquier vulneración inconstitucional en la conservación, defensa, mantenimiento y titularidad de sus derechos, siendo, que la falta de respuesta evidencia una clara denegación de justicia por la vía de omitir la protección solicitada; y en relación a la facultad de disposición que tienen las partes de la relación jurídico procesal, su inobservancia se da cuando por exceso la sentencia concede más de lo que el actor solicitó (ultra, petita); así mismo cuando concede una cosa distinta a lo pedido, es decir, se pronuncia sobre determinados extremos al margen de lo suplicado por las partes (extra petita) y también si se dejan incontestadas y sin resolver algunas de las pretensiones sostenidas por las partes (cifra petita)".

[...]

Expresadas las consideraciones realizadas por la Cámara, se advierte que esta estableció en su sentencia, que el juez hizo una condena parcial, absolviendo a la demandada del pago de indemnización (por el período comprendido del dos de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil diecinueve). Asimismo manifestó que no le correspondía a esa instancia, pronunciarse sobre el pago de esas cantidades de dinero, en primer lugar, porque la defensora pública laboral del trabajador no recurrió en apelación, ni se adhirió al recurso, mostrando tácitamente su conformidad con la sentencia emitida por primera instancia, y en segundo lugar, para no agravar más la condición de la parte apelante.

En ese sentido, a juicio de esta Sala, el razonamiento y la justificación sostenida por la Cámara Segunda de lo Laboral de esta ciudad, para no pronunciarse en cuanto a un aspecto que no fue controvertido en la sentencia dictada por el Juzgado de lo Civil de San Vicente, son lógicos y jurídicamente válidos, y más aún, cuando el hecho controvertido –el cual no fue impugnado-causaría de manera evidente, un mayor detrimento o perjuicio a los intereses de la apelante.

Bajo ese contexto cabe citar, que si bien las cámaras de lo laboral o esta Sala cuando conocen como tribunal de segunda instancia, están facultadas para conocer y analizar lo acontecido ante el juez, con la finalidad de pronunciar un fallo más justo, equitativo y apegado a derecho, la prohibición de no agravar (más) la condición del apelante, es una excepción a esta regla.

Siguiendo esa línea de pensamiento, la Cámara no estaba en la obligación de reformar la sentencia impugnada en cuanto a la condena de indemnización por despido injusto de una relación de trabajo continua que inició el día dieciocho de mayo de dos mil quince, y finalizó el treinta y uno de diciembre de dos mil diecinueve.

Por tales razones, esta Sala considera que la Cámara no cometió violación al principio de congruencia procesal, establecido en el art. 419 CT, ya que no estaba en la obligación de pronunciarse sobre un aspecto que no fue controvertido por la parte interesada en el recurso de apelación (trabajador demandante) y que causaba mayor agravio a una de las partes (demandada), por lo que la sentencia no será casada por este vicio."

Sala de lo Civil, número de referencia: 170-CAL-2021, fecha de la resolución: 03/02/2022

INEXISTENCIA DE VIOLACIÓN

"Violación del art. 419 CT

La inconformidad expuesta por el licenciado […], radica en que en la demanda se reclamó el pago de indemnización por despido injusto, con base al art. 58 CT, sin embargo, la Cámara no tuvo por comprobada una relación laboral continua o permanente, sino una relación de un contrato a plazo, con base en el art. 59 CT, y al haber tenido por comprobado un despido anterior al vencimiento del plazo del último contrato suscrito, el tribunal de alzada determinó que a la trabajadora demandante debía pagársele los días que faltaban para el vencimiento

del plazo del contrato, situación que no fue reclamada por el actor; y con base en el principio de congruencia, no podía condenarse a lo que no se reclamó en la demanda.

En cuanto al vicio invocado, cabe citar "que este se configura cuando se omite aplicar la norma jurídica que debió ser aplicada. Es decir, que la violación de ley ataco un vicio cometido sobre la norma objetivamente considerada y no puede versar sobre la valoración que debió concederse a determinado medio probatorio" (auto de las once horas diecisiete minutos del diecisiete de diciembre de dos mil veinte, bajo la referencia 197-CAL-2020).

[...]

Finalmente, el tribunal de alzada estableció en su sentencia: *"[...] No obstante lo anterior, habiéndose probado que la demandante fue contratada de forma temporal, en tres periodos diferentes, la fecha (...)* que se tomará como inicio de la relación laboral será el uno de marzo de dos mil diecinueve, tal como se establece en el último contrato firmado por las partes materiales en contienda y no la consignada en la demanda; asimismo, se arriba a la conclusión que a la demandante no le asiste el derecho para reclamar la pretensión de indemnización por despido injusto en base al Art. 58 del Código de Trabajo, si no que le asiste el derecho a reclamar tal pretensión en base al Art. 59 del mismo cuerpo legal, al haberse demostrado que fue despedida sin causa justificada antes del vencimiento del plazo contenido en el último contrato, siendo procedente condenar a la demandada al pago de los salarios correspondientes al período que faltaba para el vencimiento del plazo contenido en el contrato de fs. […] de la pieza principal, es decir del veintiuno al treinta y uno de diciembre de dos mil diecinueve en concepto de indemnización por despido injusto[...]" (sic).

Habiéndose delimitado los argumentos planteados por la Cámara en su sentencia, es menester analizar si efectivamente existe incongruencia en su sentencia, en los términos expuestos por el impetrante.

Con relación al principio de congruencia procesal en materia laboral se encuentra regulado en el art. 419 CT, este tribunal en fallos anteriores, ha considerado lo siguiente: "[...] La congruencia está vinculada directamente con el derecho a la protección jurisdiccional y el principio dispositivo, pues la tutela judicial efectiva viene a reconocer de manera expresa, la posibilidad que tiene toda persona de acudir al órgano estatal competente para plantearle, vía pretensión procesal, cualquier vulneración [...] en la conservación, defensa, mantenimiento y titularidad de sus derechos, siendo, que la falta de respuesta evidencia una clara denegación de justicia por la vía de omitir la protección solicitada; y en relación a lo facultad de disposición que tienen las partes de la relación jurídico procesal, su inobservancia se da cuando por exceso, la sentencia concede más de lo que el actor solicitó (ultra petita); así mismo cuando concede una cosa distinta a lo pedido, es decir, se pronuncia sobre determinados extremos al margen de lo suplicado por las partes (extra petita) y también si se dejan incontestadas y *sin resolver algunas de las pretensiones sostenidas por las partes (citrapetita) "(sentencia de casación de fecha dieciséis de septiembre de dos mil veintiuno, con referencia 40-CAL-2021).*

El principio de congruencia implica que al momento de sentenciar, el juez o magistrado, debe establecer una correlación entre las pretensiones y las excepciones planteadas por las partes y lo resuelto, de tal manera que exista una lógica consecuencia de lo pedido con lo concedido.

De las anteriores conceptualizaciones y para los fines de este recurso, es menester resaltar, que la sentencia debe guardar estrecha relación con las pretensiones y los hechos controvertidos y probados por las partes, es decir, no resolver más ni menos ni cosa distinta, de lo pedido o probado en el proceso; asimismo la sentencia no sólo debe remitirse a los hechos o pretensiones intentadas y discutidas por las partes, sino que, además, debe de extenderse a la prueba, columna fundamental del derecho de defensa y al debido proceso.

Para que la incongruencia tenga lugar en la sentencia, se requiere que la desviación o el desajuste entre el fallo judicial y los términos en que las partes hayan formulado sus pretensiones suponga una modificación sustancial del objeto procesal, con la consiguiente indefensión y sustracción a las partes del verdadero debate contradictorio, produciéndose un fallo no congruente con las pretensiones de las partes.

Ahora bien, según el recurrente, la Cámara incurrió en el vicio alegado debido a que no se resolvió, conforme a lo establecido en la demanda y su petitorio, sin embargo, de lo establecido en la sentencia de la Cámara Primera de lo Laboral, se advierte que, al estudiar la excepción de terminación del contrato por expiración del plazo, de conformidad al art. 48 CT, alegada por el apoderado de la empleadora concluyó, luego de analizar y valorar la prueba documental y testimonial aportada por las partes, que *"habiéndose probado que la demandante fue contratada de forma temporal, en tres períodos diferentes (...) asimismo se arriba a la conclusión que a la demandante no le asiste el derecho para reclamar la pretensión de indemnización por despido injusto en base al Art. 58 del Código de Trabajo, si no que le asiste el* derecho a reclamar tal pretensión en base al art. 59 del mismo cuerpo legal, al haberse demostrado que fue despedida sin causa justificada antes del vencimiento del plazo contenido en el último contrato".

Bajo esa línea de pensamiento, si en la demanda se estableció que se reclamaba el pago de indemnización por despido injusto, conforme a lo establecido en el art. 58 CT, y la Cámara al analizar la pretensión, la excepción de terminación del contrato por el cumplimiento del plazo y la prueba presentada, determinó que la trabajadora, señora MJMM, desempeñó sus labores por medio de contratos de carácter temporal firmados de manera sucesiva, y no de manera permanente, como se estableció en la demanda, por lo que a la trabajadora le correspondía el pago de los salarios por el período que faltaba para el vencimiento del plazo contenido en el contrato, según lo establecido en el art. 59 CT; conclusión que no infringe el principio de congruencia procesal, en virtud de que se condenó con base a lo *litigado y las pruebas vertidas en el mismo proceso.*

Por lo que, contrario a lo expuesto por el recurrente, la aplicación del principio en comento, por parte de la Cámara es clara e innegable, dado que este fue el que la condujo a condenar a la demandada con base en el art. 59 CT, al determinar que la naturaleza de la contratación que vinculó a las partes era un contrato de carácter temporal y no permanente.

Finalmente, en cuanto a la vulneración alegada por el recurrente, respecto de que los hechos sobre los que condenó la Cámara no correspondía a lo establecido en la demanda ni a la prueba aportada en el proceso, cabe resaltar, que la demandada en ningún momento se ha encontrado en una situación de indefensión como lo afirmó el licenciado […], dado que, en virtud de la excepción alegada y la prueba documental presentada por su representada, se comprobó la naturaleza de la contratación de la trabajadora, señora MJMM; por lo que tal aspecto, no constituye un elemento nuevo en la relación de trabajo, sobre el cual no tuviera conocimiento la asociación demandada.

En conclusión, el tribunal de alzada en su sentencia no condenó ni a más, ni a menos, ni a cosa distinta de lo pedido, si no a lo que se determinó en el proceso con base a la prueba aportada por las partes.

Por las razones expresadas, la Cámara Primera de lo Laboral, con sede en esta ciudad, no cometió la violación alegada y la sentencia no será casada por este submotivo."

Sala de lo Civil, número de referencia: 260-CAL-2021, fecha de la resolución: 31/03/2022

VULNERACIÓN DEL ART. 419 CT, CUANDO NO SE MANIFIESTA EN CUANTO A LA INCONFORMIDAD PLANTEADA POR EL APELANTE

"Violación del art. 419 CT

[...]

La inconformidad expuesta por el licenciado [...], radica en que el tribunal de alzada debió analizar únicamente si con el dicho del testigo de cargo, se lograba establecer el extremo solicitado por el apelante (el nombre y el cargo de la persona que realizó el despido del trabajador demandante); sin embargo, dicho tribunal realizó un estudio del proceso, en el que incluyó el análisis de las excepciones opuestas y alegadas por el apoderado de la demandada (aspecto que no fue solicitado por el apelante), incurriendo de esa forma en una violación al art. 419 CT, al conceder una sentencia "extra petita".

En cuanto al vicio invocado, cabe citar "que este se configura cuando se omite aplicar la norma jurídica que debió ser aplicada. Es decir, que la violación de ley ataca un vicio cometido sobre la norma objetivamente considerada y no puede versar sobre la valoración que debió concederse a determinado medio probatorio" (auto de las once horas diecisiete minutos del diecisiete de diciembre de dos mil veinte, bajo la referencia 197-CAL-2020).

Con relación al principio de congruencia procesal, el que en materia laboral se encuentra regulado en el art. 419 CT, este tribunal en fallos anteriores, ha considerado lo siguiente: "(...) La congruencia está vinculada directamente con el derecho a la protección jurisdiccional y el principio dispositivo, pues la tutela judicial efectiva viene a reconocer de manera expresa, la posibilidad que tiene toda persona de acudir al órgano estatal competente para plantearle, vía pretensión procesal, cualquier vulneración (...) en la conservación, defensa, mantenimiento

y titularidad de sus derechos, siendo, que la falta de respuesta evidencia una clara denegación de justicia por la vía de omitir la protección solicitada; y en relación a la facultad de disposición que tienen las partes de la relación jurídico procesal, su inobservancia se da cuando por exceso, la sentencia concede más de lo que el actor solicitó (ultra petita); así mismo cuando concede una cosa distinta a lo pedido, es decir, se pronuncia sobre determinados extremos al margen de lo suplicado por las partes (extra petita) y también si se dejan incontestadas y sin resolver algunas de las pretensiones sostenidas por las partes (citrapetita) (...)" (sentencia de casación de fecha dieciséis de septiembre de dos mil veintiuno, con referencia 40-CAL-2021).

El principio de congruencia exige que, al momento de sentenciar, el juez o magistrado, debe establecer una correlación entre las pretensiones y las excepciones planteadas por las partes y lo resuelto, de tal manera que exista una lógica consecuencia de lo pedido con lo concedido.

De las anteriores conceptualizaciones y para los fines de este recurso, es menester resaltar, que la sentencia debe guardar estrecha relación con las pretensiones y los hechos controvertidos y probados por las partes (tal y como lo establece el art. 419 CT), es decir, no resolver ni más, ni menos, ni cosa distinta de lo pedido o comprobado en el proceso. Asimismo, la sentencia no sólo debe remitirse a los hechos o pretensiones intentadas y discutidas por las partes, sino que, además, debe extenderse a la prueba, columna fundamental del derecho de defensa y del debido proceso, en la medida que resulte necesario para resolver lo pedido por las partes.

Para que la incongruencia tenga lugar en la sentencia, se requiere que la desviación o el desajuste entre el fallo judicial y los términos en que las partes hayan formulado sus pretensiones, suponga una modificación sustancial del objeto procesal, con la consiguiente indefensión y sustracción a las partes del verdadero debate contradictorio, produciéndose un fallo no congruente con las pretensiones de las partes.

Para determinar si la Cámara Segunda de lo Laboral, con sede en San Salvador, incurrió en el vicio alegado por el recurrente, resulta oportuno considerar los siguientes argumentos expuestos en la sentencia impugnada: "(...) el licenciado [...] centra su inconformidad con los hechos que, si se probó el nombre y cargo de persona que realizó el despido con el testigo de cargo presentado, quien erró en su declaración en la fecha que mencionó en que ocurrió ese acto, pero fue producto de los nervios que sentía (...) Con las declaraciones de los testigos de cargo señores (...) y [...], tal y como consta en acta y Fs. [...]de la pieza principal (...) el segundo de los declarantes, tampoco merece credibilidad en cuanto al despido se refiere, pues expuso que trabajaba juntamente con el demandante, y que la fecha de su ingreso fue el primero de enero de dos mil dieciocho, mencionando también la jornada, horarios, salario de él, y que el actor fue despedido a las tres de la tarde del día diecinueve de diciembre de dos mil diecinueve, por el señor RJGF, en su calidad de "Gerente General"; quien tiene facultades de contratar y despedir personal, es decir, que relaciona una fecha diferente de la plasmada en la demanda de mérito, en la que ocurrió ese hecho (...)". [...]

Habiéndose delimitado los argumentos planteados por la Cámara en su sentencia, es menester analizar si efectivamente existe incongruencia en los argumentos expuestos por esta, bajo los términos expuestos por el impetrante.

Así se advierte, que el tribunal de alzada omitió pronunciarse, respecto de si con el dicho del testigo de cargo, señor [...], se había comprobado el nombre y el cargo de la persona que realizó el despido (principal inconformidad del recurso de apelación).

Ante tal deficiencia, a juicio de esta Sala, la Cámara Segunda de lo Laboral de esta ciudad, cometió una infracción al principio de congruencia procesal, dado que no se manifestó en cuanto a la inconformidad planteada por el apelante, y la fundamentación de su sentencia devino en valorar otros aspectos y analizar las excepciones opuestas y alegadas por el apoderado de la demandada, sobre los cuales no debió haberse pronunciado, sin haber resuelto previamente las inconformidades contenidas en el recurso de apelación. Por tanto, la sentencia será casada en cuanto a la violación al art. 419 CT.

IV. JUSTIFICACIÓN DE LA SENTENCIA

Con base a lo antes expresado, esta Sala pronunciará la sentencia que conforme a derecho corresponde, relacionada directamente con la infracción planteada por el recurrente en el recurso de apelación.

En este sentido, se advierte que la inconformidad expresada por el recurrente se sintetiza en el hecho de que, a su juicio, con la declaración del testigo, señor [...], se comprobó el nombre y el cargo de la persona que, según la demanda, realizó el despido del trabajador demandante, no obstante que el testigo se hubiera equivocado al relacionar la fecha en que ocurrió el despido alegado. [...]

Analizada la declaración del testigo de cargo, señor [...], este tribunal advierte, que si bien, depuso sobre el nombre y el cargo de la persona que, según la demanda, realizó el despido, no es posible acreditar tales hechos con su dicho, en vista de que los mismos fueron controvertidos en el proceso (tal y como consta a folios [...]) por medio de la declaración de parte contraria del representante legal de la sociedad demandada, quien negó que el señor [...], trabajara para su representada y que hubiera realizado el despido alegado en la demanda.

Además, de la declaración del testigo, señor [...], respecto de la relación de trabajo y el despido, se advierte lo siguiente: en primer lugar, la parte que lo propuso no realizó las preguntas pertinentes con las que se pudiera ilustrar al juzgador sobre el cargo que desempeñaba el testigo, las labores y el área en donde las desempeñaba para la sociedad demandada, así como la fecha en que conoció al trabajador demandante, esto con la finalidad de dar a conocer el vínculo laboral que tenía el testigo con el trabajador, señor [...]. En segundo lugar, se advierte que, a repreguntas del licenciado [...], el testigo expresó que había iniciado a laborar para la sociedad demandada en el año dos mil diecinueve, sin embargo, previo a ello, manifestó que vio laborar al trabajador demandante para la demandada por más de dos años, lo cual genera duda en cuanto a su dicho, ya que el despido alegado en la demanda ocurrió en el mismo año en que el testigo inició a laborar para la demandada, y la parte que lo propuso, no

realizó posteriormente las preguntas necesarias tendientes a aclarar, el por qué, si el testigo había iniciado a laborar en el mes de febrero de dos mil diecinueve, manifestó que había visto trabajar al trabajador [...], para esa sociedad por más de dos años.

Finalmente, y como tercer punto, el testigo manifestó que estuvo presente el día "diecinueve" de diciembre de dos mil diecinueve, a las tres de la tarde, cuando ocurrió el despido; y según la demanda, el despido ocurrió el veintitrés de diciembre de dos mil diecinueve. Sin embargo, a preguntas del licenciado [...], el testigo expresó que su horario de trabajo era de cinco de la tarde de un día a dos de la madrugada del día siguiente, y bajo ese contexto, la parte que propuso al testigo de cargo, no realizó las preguntas necesarias para ilustrar las razones por las cuales el testigo, señor [...], se encontraba en su lugar de trabajo, a la hora en que, según la demanda, ocurrió el despido (tres de la tarde), y cómo presenció el hecho, dado que no resulta lógico ni justificado, que se encontrara en ese lugar a esa hora, por el horario de trabajo en que desempeña sus labores.

En lo relativo al aspecto controvertido, este tribunal a través de la jurisprudencia ha establecido que "La valoración de la prueba testimonial conlleva, siempre, la investigación relativa a la veracidad del testimonio y la credibilidad objetiva, tanto de la fuente de percepción que el testigo afirma haber recibido, como en relación al contenido y a la forma de declaración; en otras palabras, en cuanto esté demostrada la razón suficiente por la que emite su testimonio, esto es, que justifiquen la verosimilitud de su presencia en donde ocurrieron los hechos, de la idoneidad de su conocimiento del hecho adquirido, entre otros, de los factores que deben influir en la decisión del juzgador" (sentencia de las once horas quince minutos del diez de marzo de dos mil veintidós. Ref. 185-CAL-2021).

En ese sentido, y en vista de que, en el caso de autos, se han advertido una serie de inconsistencias en la declaración del testigo, señor [...] (las que fueron citadas en párrafos anteriores), no se le puede otorgar credibilidad a su declaración en cuanto al hecho del despido, el nombre y el cargo de la persona que lo realizó, ya que están precisamente vinculadas al cómo, cuándo y por qué tenía conocimiento de los mismos.

Por lo tanto, y debido a que la declaración del testigo de cargo, señor [...], fue analizada y desestimada, a juicio de esta Sala, y en virtud a los principios de congruencia procesal y de comunidad de la prueba, es necesario corroborar la demás prueba vertida en el proceso.

En este sentido, cabe señalar, que la relación de trabajo y sus condiciones, aunque no fueron aspectos controvertidos, se tienen por comprobadas con la declaración de parte contraria del representante legal de la sociedad demandada, señor [...], quien aceptó el vínculo laboral existente entre el trabajador demandante, señor [...] y la sociedad […] sociedad Anónima de Capital Variable. El contrato individual de trabajó que vinculó a las partes no se acreditó de manera directa, pero se presume su existencia conforme a lo establecido en el art. 20 CT. De igual manera, al no haberse presentado, se presumen ciertas las condiciones laborales alegadas en la demanda, y que debieron comprobarse por

medio del contrato de trabajo, el cual no fue presentado, siendo su falta atribuible al empleador, por lo que tales condiciones se presumen según lo establecido en el art. 413 CT.

La declaración de la testigo [...], no proporciona los elementos mínimos necesarios a este tribunal para que su deposición sea valorada de manera favorable para el actor, en virtud de que, con su dicho, no se acreditó el lugar donde trabajaba y por consiguiente no logró determinarse el vínculo con el trabajador demandante ni con la sociedad demandada, contrario a ello, la testigo declaró que el trabajador señor [...], trabajaba para el señor [...], quien no es el demandado en este proceso, por lo que al no existir en el dicho de la declarante, elementos para particularizar a la demandada en el proceso, no se tomará en cuenta su dicho.

En cuanto al hecho del despido, la parte actora no presentó prueba documental con la que se acreditara tal hecho, y el representante legal de la sociedad demandada, en la declaración de parte contraria que rindió, negó que el señor [...] (persona a quien se le atribuye haber realizado el despido), laborara para su representada y que él hubiera realizado el despido, por lo que el resultado de esa declaración fue adverso para el actor.

De igual manera, se advierte que no opera a favor del trabajador demandante la presunción de despido establecida en el art. 414 CT, en virtud de que la demanda no fue presentada dentro de los quince días hábiles siguientes de ocurrido el hecho que la motivo (según la demanda el despido ocurrió el día veintitrés de diciembre de dos mil diecinueve y la demanda fue presentada el día tres de febrero de dos mil veinte), y no se comprobó el cargo de representante patronal de la persona que según la demanda realizó el despido.

Ahora bien, el licenciado [...], al mostrarse parte como apoderado laboral judicial y administrativo de la sociedad […], alegó la improponibilidad de la demanda, argumentando que el despido expresado en la demanda fue ejecutado por el señor [...], en su calidad de gerente general de su representada, sin embargo, el referido señor no ejecutó ese despido, y por otra parte, él no posee el cargo que se le atribuye en la demanda, pues este cargo lo posee el señor [...], quien a su vez ostenta la calidad de representante legal de la demandada.

De igual forma opuso y alegó las excepciones contenidas en las causales 3ª, 16ª y 20ª del art. 50 CT, el último ordinal relacionado con el ord. 2 del art. 31 del mismo código, fundamentado las mismas, en el hecho de que al trabajador demandante, como gerente operativo de la sociedad demandada, se le giraron instrucciones en el sentido de que debía velar por el bienestar y cuidado de los bienes muebles que se encontraban en el centro de trabajo, y que no se podían sacar de ese lugar, para su beneficio o para el de un tercero, sin contar con la autorización del gerente general y representante legal de la sociedad, señor [...]; no obstante ello, el demandante, el día sábado veintiuno de diciembre de dos mil diecinueve, a eso de las diecinueve horas y quince minutos, sin autorización, sacó del centro de trabajo tres mesas, las llevó y las cargó a un vehículo que lo esperaba afuera del lugar y se retiró con los referidos muebles, incumpliendo así

con las instrucciones que le fueron dadas (desobedeciendo las órdenes del empleador), lo que produjo la pérdida de la confianza en el trabajador demandante, pues por su cargo, era el principal llamado a cuidar de los bienes muebles que estuvieran dentro del centro de trabajo.

Con respecto a la improponibilidad de la demanda alegada por el apoderado de la demandada, cabe citar que esta Sala en sentencia del once de noviembre de dos mil veintiuno, en el incidente de casación con referencia 135-CAL-2021, en cuanto a la oposición y alegación de varias excepciones dentro de un mismo proceso, sostuvo lo siguiente: "(...) el sujeto pasivo de la pretensión puede interponer la excepción de improponibilidad de la demanda por falta de legitimación activa y por el principio de eventualidad una causal de despido, pues se refieren a hechos y circunstancias diferentes (...) en el caso de autos se advierte que, por una parte, la demandada opuso la excepción de improponibilidad de la demanda alegando que el despido no pudo darse en la forma en la que relacionó el demandante; y por otra, invocó una causal justificativa de despido (...) planteó dos líneas de defensa opuestas y excluyentes, pues por medio de una alega que el despido nunca pudo suceder en la forma en la que el trabajador aduce y por medio de la segunda acepta implícitamente que el despido ocurrió (...)".

Analizadas las excepciones opuestas por el licenciado [...], cabe señalar, que las mismas resultan excluyentes entre sí, ya que por un lado, con la improponibilidad de la demanda, se expone la inexistencia del despido alegado en la demanda y, por el otro, las excepciones de terminación del contrato sin responsabilidad para el patrono (causales 3ª, 16ª y 20ª del art. 50 CT), se intenta justificar el despido alegado en la demanda, estrategia de defensa procesal, que contradice el principio de veracidad regulado en el art. 13 CPCM.

Bajo esa línea argumentativa, la improponibililidad de la demanda, fundamentada en la inexistencia del despido, debido a que la persona a la que se le atribuye haber realizado el despido, no tenía ese cargo, no será objeto de análisis por este tribunal, pues se torna irrelevante valorar prueba con la finalidad de determinar la representación patronal que se le atribuye al señor [...], como gerente general de la sociedad demandada, y posteriormente, analizar hechos totalmente contrarios (justificación de un despido sin responsabilidad para el empleador).

Con respecto a las excepciones contenidas en las causales 3ª, 16ª y 20ª del art. 50 CT, la última causal relacionada con el ord. 2° del art. 31 CT, para comprobarlas, el licenciado [...], presentó la declaración del testigo de descargo señor [...], y la declaración de parte contraria del trabajador demandante. [...]

Cabe destacar que la deposición del testigo de descargo, va encaminada a comprobar la comisión de una falta por parte del trabajador, derivada de lineamientos, órdenes o instrucciones con la finalidad específica de que previo retiro de bienes muebles o artículos del centro de trabajo, por parte del trabajador, debe tener la autorización respectiva; sin embargo, a juicio de esta Sala el dicho del testigo, señor [...], no es suficiente para determinar la falta atribuida al trabajador con relación a las causales alegadas, dado que su dicho, si bien,

se centró en la falta que se le atribuye, no existe prueba documental ni de otra naturaleza en el juicio, con respecto a las instrucciones que recibió el trabajador para tal efecto, por parte del gerente general de la sociedad, ni de ningún tipo de reglamento interno de la empresa, por medio del cual se pueda determinar con certeza, que el trabajador los infringió o incumplió, ya que los mismos servirían de parámetros o referentes, para establecer en primer lugar, la existencia de la instrucción incumplida, y como segundo aspecto, la sanción que corresponde a esa falta.

En cuanto a las causales de terminación del contrato sin responsabilidad para el empleador, específicamente las enmarcadas en el art. 50 CT, esta Sala se pronunció al respecto en la sentencia de las nueve horas treinta y tres del veintisiete de mayo de dos mil diecinueve, del incidente de casación, con referencia 405-CAL-2018, bajo los siguientes términos: "(...) Cabe destacar además, que las causales de terminación de contrato sin responsabilidad para el patrono reguladas en el art. 50 del Código de Trabajo, si bien se enmarcan dentro del poder disciplinario otorgado al empleador, para sancionar conductas de los trabajadores que infringen las instrucciones que se les imparten, este no es absoluto, dado que la ley pone límites para la protección de los derechos fundamentales del trabajador, de ahí, que la causal 16ª en análisis está sustentada en el principio de la proporcionalidad que conlleva la obligación de ponderar la gravedad de la conducta del trabajador para poderla sancionar, debiendo existir un equilibrio entre la sanción a aplicar y la conducta a castigar; es por ello, que conforme al principio de la gradualidad, la falta menor amerita la aplicación de una sanción leve, en tanto una falta grave faculta al empleador para aplicar sanciones más graves. Siendo el despido la de más alto rango (...)" (sic).

En consideración de la citada jurisprudencia, y al analizar la falta que se le atribuye al trabajador demandante para justificar su despido, a juicio de esta Sala, tal medida (despido injustificado), no es proporcional a la falta cometida, en virtud de que, como ya se expresó, no se comprobó de manera objetiva el lineamiento, orden o instrucción que el trabajador supuestamente incumplió.

Por otra parte, la declaración de parte contraria del trabajador demandante, no se llevó a cabo por su incomparecencia, no obstante su legal notificación y citación (según consta folios [...]). Ahora bien, de la lectura del escrito por medio del cual se solicitó la referida diligencia (que corre agregado a folios [...]), se advierte, que no logran determinarse elementos con los que puedan comprobarse las causales de terminación del contrato sin responsabilidad para el empleador, dado que las afirmaciones establecidas en el citado escrito, van encaminadas únicamente a comprobar la inexistencia del despido alegado en la demanda y no la justificación del mismo.

En consecuencia, para este tribunal, las causales 3ª, 16ª y 20ª del art. 50, la última causal con relación al ord. 2° del art. 31 CT, alegadas por el apoderado de la sociedad demandada, no fueron demostradas con la prueba testimonial ni con la declaración de parte contraria realizada por el trabajador demandante, y no existiendo otro tipo de prueba que hubiera sido la idónea para establecer los hechos sostenidos para comprobar las excepciones opuestas y alegadas, el despido alegado en la demanda no se ha logrado justificar.

No obstante lo anterior, y en lo que respecta específicamente a la oposición y alegación de la excepción amparada en la causal 3ª del art. 50 CT, esta Sala pronunció sentencia en el incidente de casación con referencia 346-CAL-2012, de las diez horas cuarenta y cinco minutos del diecisiete de agosto de dos mil quince, en la que sostuvo lo siguiente: "cuando se alega en especial la causal justificativa 3ª del art. 50 Tr, la prestación de servicios y el despido implícitamente se reconocen por el patrono requerido, no siendo entonces necesario acreditar la identificación y la calidad de representante patronal de quien despide".

Consecuencia lógica de haberse alegado una causal justificativa de despido por pérdida de confianza, por parte del patrono en el trabajador demandante y no haberse comprobado, es que resulte irrelevante que se demuestre quién realizó el despido del trabajador, pues hay un reconocimiento tácito del empleador de dar por terminada la relación laboral debido a la pérdida de confianza en el trabajador; en otras palabras, el despido se perfecciona con la declaración manifiesta del empleador a través de la causal alegada, por lo tanto, lo que debió de probar la sociedad demandada, es la justificación del acto, y no el acto propiamente dicho.

En este sentido, y por las razones establecidas en párrafos anteriores, al haberse alegado y no probado la excepción establecida en la causal 3ª del art. 50 CT, resulta innecesario comprobar la calidad de representante patronal de la persona que, según la demanda, efectuó el despido, y en consecuencia, lo que corresponde es condenar a la sociedad demandada al reclamo de indemnización por despido injusto y demás prestaciones laborales reclamadas en la demanda.

En cuanto al reclamo de pago de salarios adeudados por días laborados y no remunerados (del período comprendido del dieciséis al veintidós de diciembre de dos mil diecinueve), reclamados en la demanda, este tribunal considera que el representante legal de la demandada reconoció que el trabajador demandante laboró para su representada durante ese período, y al no constar en autos el pago de los mismos por parte de la demandada, ni que esta se haya mostrado inconforme con ese reclamo, lo procedente es condenar al pago de los mismos." *Sala de lo Civil, número de referencia: 109-CAL-2022, fecha de la resolución: 09/06/2022*

PRINCIPIO DE REVERSIÓN DE LA CARGA PROBATORIA

APLICACIÓN EN MATERIA LABORAL

"La carga probatoria es "una conducta que impone la ley a *quienes cree que están en la mejor* condición para poder esclarecer *una situación específica* dentro de un proceso, que en caso de no ser cumplida podría *generarle* efectos perjudiciales" Toyama Miyagusuku, Jorge e Higa García, *Alfonso*. La Prueba en el Derecho *laboral*: El Proceso Inspectivo y la Justicia Oral.

En el proceso laboral, lleva la carga probatoria el empleador, por tal motivo ante el despido, deberá probar que existió causa legalmente justificada, sino, se presume (art. 55 inc. 3° CT).

De esa forma, el legislador en el Código de Trabajo, establece a favor del trabajador una serie de presunciones, tales como las establecidas en los arts. 413 y 414, para citar ejemplos, desde luego deben concurrir ciertos presupuestos para su aplicación. A diferencia de otros procesos como el civil, en el que, le corresponde al demandante probar sus afirmaciones.

Es así que, en virtud de la reversión de la carga probatoria, y estableciéndose los presupuestos según requiera la presunción, el trabajador queda liberado de la exigencia probatoria que demandan sus aseveraciones.

Esta desigualdad a la que se hace referencia, tiene otro tratamiento por parte del legislador; por ello los trabajadores tiene el derecho de asociarse libremente (sindicación), negociar con el empleador (negociación colectiva), con el fin de formalizar un acuerdo vinculante y de interés común (contrato colectivo de trabajo) e incluso tomar medidas de coerción de forma directa (la huelga). Así también, la normativa de trabajo propicia y establece principios destinados a favorecer fundamentalmente al trabajador, conocidos como los principios rectores del derecho laboral, como por ejemplo el de la norma más favorable."

Sala de lo Civil, número de referencia: 151-CAL-2022, fecha de la resolución: 17/11/2022

Relaciones:

Sala de lo Civil, número de referencia: 172-CAL-2022, fecha de la resolución: 08/12/2022

PRUEBA DOCUMENTAL

EL AD QUEM NO COMETE LA INFRACCIÓN ALEGADA CUANDO EL DOCUMENTO OBJETO DE RECLAMO NO ES PARTE DE LA PRUEBA DOCUMENTAL APORTADA AL PROCESO

"Error de hecho en la apreciación de la prueba documental, con infracción al art. 402 CT

Al fundamentar el submotivo invocado, el recurrente expuso, que para la Cámara, el instrumento consistente en un acta notarial, no tenía valor probatorio, por no reunir los requisitos establecidos en el art. 402 CT, dado que no fue extendido por la Dirección General de Trabajo. No obstante, según el recurrente, en este documento se estipuló [...] que la trabajadora demandante reconoció que da por terminado el contrato de trabajo, lo cual le da *amplia* validez *al instrumento*, otorgando además *un finiquito* en dicha acta, por *cualquier prestación laboral* y además *textualmente* dice *que ella está* de acuerdo con *que se termine su relación* con la sociedad […]., *que es una* clara *manifestación* de su voluntad [...]" (sic).

Asimismo, el licenciado […] argumenta que la disposición referida, no sólo contempla esos requisitos sino que también se refiere a la terminación del contrato por mutuo consentimiento entre las partes, o despido sin causa legal; por tal motivo, sostiene, que no es cierto que el documento en cuestión esté en contravención a la ley, sino por el contrario, en este se estipuló que la trabajadora demandante reconoció que daba por terminado el contrato de trabajo, lo que le proporcionó validez al instrumento, y a su vez está revestido con la fe pública.

Además, expresa que en el acta de que se trata, se otorgó un "finiquito por cualquier prestación laboral" y también se consignó que la trabajadora estaba de acuerdo en terminar "su relación con la sociedad […]., que es una clara manifestación de su voluntad". Según el recurrente, el acta es un medio idóneo, pues así lo prescribe el Código de Trabajo.

Por ello, sostiene que el error por parte de la Cámara se dio en la apreciación del instrumento público, al interpretar que el acta "constituye solo el despido, pero en el despido puro no existe la intervención de la voluntad de la parte laborante solo la patronal", sin embargo, si existe una manifestación de voluntad, la que es, estar de acuerdo en la terminación del contrato de trabajo, esencialmente porque no se alegó la existencia de ningún vicio del consentimiento.

Finalmente el recurrente sostuvo que, respecto del documento en análisis, el tribunal de alzada argumentó que debió haber sido emitido por el Ministerio de Trabajo, por medio de una hoja de terminación de contrato; no obstante, para el impetrante, únicamente se requiere del cumplimiento de ciertas formalidades, como que, se trate de un instrumento público o en hoja extendida por el Director General de Inspección de Trabajo o juez competente, lo que para el caso concreto se cumplió por haberse extendido el finiquito en acta notarial, que es un instrumento público, por lo que debe dársele la validez que la ley le confiere. Para sustentar su tesis cita jurisprudencia de este tribunal.

Habiendo expuesto y delimitado el objeto de estudio, de conformidad a la infracción invocada por el abogado de la empleadora, es viable analizar si efectivamente la Cámara propició el yerro expuesto. En ese marco, este tribunal, en su jurisprudencia ha determinado que estamos en presencia de un error de hecho en la valoración de la prueba, cuando: "[...] el juzgador no ve prueba donde la hay, o ve prueba donde no la hay; y puede ocurrir también al equivocarse en la apreciación del contenido de un documento, tergiversándolo o simplemente omitiéndolo como si no constara en él. Es decir, el juzgador tiene por demostrado un hecho, sin existir en autos la prueba que lo acredite; o no tiene por acreditado un hecho, a pesar de existir en el proceso prueba pertinente e idónea [...]" (sic). (Sentencia pronunciada en el incidente de casación clasificado bajo la referencia 30-CAL-2018, del veinte de junio de dos mil dieciocho).

De lo planteado por el recurrente, es factible observar, que su queja radica principalmente, en atribuir al tribunal de segunda instancia el error en la apreciación del acta notarial*(en la que se otorgó un finiquito por cualquier prestación laboral);* en el sentido de que no dio por acreditado que existía una manifestación de voluntad por parte de la trabajadora en cuanto a dar por terminado el contrato

de trabajo, pues dicho tribunal únicamente determinó que en el despido solo hubo la intervención de la parte empleadora no así de la trabajadora; es decir, según el recurrente no se tomó en cuenta la voluntad de la trabajadora manifestada en el acta en referencia.

Por lo anterior, es procedente remitirnos al pronunciamiento de la Cámara Primera de lo Laboral, con sede en esta ciudad; específicamente en lo que respecta a la prueba documental objeto del submotivo alegado. Dicho tribunal expuso: "[...] el impetrante sostiene que con la prueba documental de descargo se ha logrado acreditar en autos que la trabajadora demandante laboraba para la sociedad […] y no para su representada; incorporando (...) los documentos: i) recibo de pago de fs. […] de la pieza principal; ii) recibos de pago de fs. […] dé este incidente; y, iii) planillas preelaboradas para el pago mensual de cotizaciones, de fs. […] de este incidente [...]" (sic). El tribunal de alzada, a continuación de haber descrito la prueba documental aportada, procedió a su análisis, y de ello se advierte que sostuvo "[...] los recibos de pago de fs. […] de la pieza principal y fs. […] de este incidente (...) resultan insuficientes para desvirtuar la existencia de una relación laboral entre las partes en contienda (...) están orientados o encaminados a probar el pago de una prestación laboral específica, como es la indemnización por despido pero de la sociedad […]., quien no es parte en el caso en análisis [...]" (sic).

Asimismo expresó que las planillas preelaboradas para el pago mensual de cotizaciones, agregadas de fs. [...] del incidente, de igual manera no están orientadas a desvirtuar la relación laboral, pues únicamente se presume la prestación de servicios de ciertos trabajadores; sin embargo, no es relevante que el nombre de la trabajadora estuviera consignado en dichas planillas, pues se trata de otra sociedad empleadora y no de la demandada.

Así concluye el tribunal de alzada el estudio de la prueba documental aportada al proceso. Sin embargo, respecto del acta notarial que el impugnante argumenta que existe error en su análisis, no hay consideración alguna, dado que tampoco se menciona como agregada al proceso. Precisamente sobre ello se debe señalar, que los documentos de folios […] de la pieza principal y […] del incidente de casación, son recibos de pago en concepto de indemnización por despido más vacaciones anuales, de otra sociedad identificada bajo la razón social […]. No se trata entonces de la sociedad demandada sino de otra, y además no son actas notariales.

Este tribunal ha constatado que el recurrente, licenciado […], en el escrito de folios […] de la pieza principal, ofreció presentar el finiquito laboral con el propósito de desacreditar las pretensiones de la actora; documento sobre el que se ha argumentado en el recurso de casación que estaba contenido en el acta notarial controvertida; a pesar de ello, no obra en el proceso, pues únicamente consta agregada la prueba documental que fue detallada por la Cámara en los literales i), ii) y iii), considerando número 5 de la sentencia controvertida.

En el proceso de mérito, solamente consta el acta de la audiencia conciliatoria que se llevó a cabo en la Dirección General de Trabajo, del Ministerio de Trabajo, producto del trámite administrativo promovido por la trabajadora demandante en la referida entidad (folios […] de la pieza principal). Sobre esta,

también la Cámara realizó las respectivas acotaciones en el considerando 6.2 de la sentencia. Y en síntesis, toda la prueba documental analizada no le proporcionó elementos de certeza ni credibilidad para acreditar el planteamiento de la sociedad demandada en cuanto a que el tribunal de primera instancia desestimó indebidamente las excepciones de pago y la de falta de legítimo contradictor, en el sentido de que no era la demandada la empleadora de la actora.

Lo anterior, dio lugar a que el tribunal de segunda instancia desestimara los agravios propuestos en el recurso de apelación y confirmara la sentencia condenatoria del Juzgado Segundo de lo Laboral de esta ciudad.

Por consiguiente, claramente se advierte que los argumentos del recurrente, relativos a que la Cámara cometió error de hecho en la apreciación de la supuesta acta notarial, que se afirma contenía un finiquito, no tienen razón de ser, y son carentes de veracidad, pues el documento no está agregado a los autos, y por ello, no ha podido ser apreciado.

Por otra parte, el abogado […], conocía el contenido de la sentencia de segunda instancia, precisamente porque interpuso el recurso de casación. En consecuencia debió conocer que no existía análisis por parte de la Cámara sobre el acta notarial que ha señalado, por tal motivo se le exhorta a dar fiel cumplimiento a los principios éticos de veracidad, lealtad, buena fe y probidad procesal (art. 13 CPCM), pues siendo apoderado de la demandada debe actuar apegado a estos.

En ese orden de ideas, se concluye que en el caso de mérito, no existe la infracción atribuida por el impetrante al tribunal de alzada, que consiste en error de hecho en la apreciación de la prueba documental con infracción al art. 402 CT; puesto que el documento sobre el que descansa la inconformidad (acta notarial), no es parte de la prueba documental aportada al proceso, es decir, no obra en autos; por esta razón no fue parte del análisis probatorio materializado por la Cámara. De modo que no concurre el motivo de casación invocado por el recurrente y no procede casar la sentencia pronunciada por la Cámara."

Sala de lo Civil, número de referencia: 102-CAL-2022, fecha de la resolución: 18/07/2022

PRUEBA TESTIMONIAL

EL AD QUEM NO COMETE EL VICIO ALEGADO CUANDO MANIFIESTA QUE LO DEPUESTO POR EL TESTIGO DE CARGO LE GENERÓ CONVICCIÓN Y CERTEZA EN CUANTO A LOS HECHOS SOBRE LOS QUE TESTIFICÓ, CONSIDERANDO FÚTIL QUE NO DIJERA SU CARGO Y EL CARGO DE LA PERSONA A QUIEN SE LE ATRIBUYÓ EL DESPIDO

"Error de derecho en la apreciación de la prueba testimonial Preceptos infringidos arts. 461 CT, y 356 CPCM

En cuanto al error de derecho en la apreciación de la prueba testimonial que se le atribuye al tribunal de segunda instancia, el licenciado […] expresó que en primera instancia, la actora presentó al testigo señor, WICM, a quien la

Cámara le dio *"total credibilidad"*, no obstante que, en reiteradas ocasiones el testigo manifestó que las "cosas" le constaban porque la demandante le había dado la información, afirmación que, según el recurrente, evidencia que era un testigo de referencia; es más, agrega el impetrante, que el testigo manifestó en su declaración que fue compañero de trabajo de la demandante, pero en ningún momento se estableció la fecha en la que fueron compañeros de trabajo. Por lo que el juez de primera instancia consideró, que el actor no logró acreditar el despido alegado, ya que no se aportó prueba directa con la que se determinara la participación del señor JREE, en el despido de hecho alegado en la demanda, y por esa razón, según el apoderado de la demandada, la valoración de la declaración del testigo fue excesiva o abusiva por parte de la Cámara sentenciadora, cometiendo de esa manera el error de derecho en la apreciación de la prueba testimonial de cargo,

[...]

Se advierte que, la inconformidad del recurrente radica principalmente en dos aspectos, el primero, que la Cámara apreció de manera abusiva la declaración del testigo de cargo, señor WICM, porque era un testigo de referencia, y por lo tanto, su declaración no merecía credibilidad. Esto como resultado de que a preguntas del abogado de la actora, el testigo manifestó en reiteradas ocasiones, que las "cosas" le constaban *"porque la demandante le había manifestado dicha información";* y que además, la apreciación que el tribunal de alzada realizó del dicho del referido testigo, quien manifestó que fue compañero de trabajo de la demandante, pero en ningún momento se estableció por medio de su deposición, la fecha en la que fueron compañeros de trabajo. Por lo que, a juicio del impetrarte, la declaración del testigo de cargo, se apreció de manera excesiva.

El segundo aspecto denunciado es con relación a la apreciación que realizó el tribunal sentenciador de las declaraciones de las testigos de descargo, señoras MHDE y RSMDC, quienes, a su juicio, fueron *"claras y unánimes en* manifestar" que el día en el que ocurrió el despido alegado en la demanda, solamente ellas se encontraban en su lugar de trabajo, no así la señora MJIDR, ni el licenciado JREE (empleador), a quien se le atribuye haber realizado el despido. Sin embargo, la Cámara sentenciadora, les restó valor probatorio a sus declaraciones por considerar que a las testigos se les había sugerido sus respuestas por medio de las preguntas que realizó el abogado de la demandada; cometiendo así el error de derecho en la apreciación de la prueba testimonial de descargo, en vista de que las valoró de forma arbitraria, al realizar su apreciación según su voluntad o capricho, sin tomar en cuenta el sistema de valoración de la sana crítica, y sin expresar las razones de su decisión.

Para determinar la existencia ele la supuesta valoración arbitraria cometida por la Cámara en su sentencia, resulta oportuno iniciar el análisis respecto del testigo de cargo, señor CM.

[...]

Cabe señalar que en cuanto al error de derecho en la apreciación de la prueba testimonial, esta Sala ha sostenido a través de su jurisprudencia, v.g., sentencia de las once horas tres minutos del trece de octubre de dos mil veinte con referencia 55-CAL-2020, entre otras, que se comete, cuando se valora la prueba

con un sistema distinto al de la sana crítica, o cuando la valoración de la prueba "supuestamente" al amparo de dicho sistema de apreciación, en realidad se ha realizado en forma irracional, abusiva o arbitraria; y que la valoración de una prueba es irracional o absurda, cuando el juzgador analiza el medio probatorio mediante un argumento que adolece de sentido, o que es contrario a la razón; es abusiva, cuando la apreciación es excesiva o indebida; y arbitraria, al actuar siguiendo su voluntad o capricho, sin ajustarse a las leyes o a la razón.

Ahora bien, de lo argumentado por el recurrente con relación a que el testigo de cargo debió haber sido considerado como *"un testigo de referencia"* porque en reiteradas ocasiones manifestó que las cosas le constaban porque la trabajadora demandante se las había dicho. Al respecto se advierte que la Cámara, en la motivación de su sentencia, con respecto a la declaración del testigo de cargo, señor WICM, hace ver que en tan solo una ocasión manifestó que tenía conocimiento de la fecha de ingreso de la demandante, a su lugar de trabajo, porque esta se lo había dicho. En ese sentido, el testigo de cargo no puede ser considerado como testigo de referencia, como lo sostiene el recurrente.

En cuanto a lo argumentado por el recurrente respecto de que el testigo de cargo no expresó desde que fecha fue compañero de trabajo de la demandante, ni qué cargo desempeñaba para la sociedad demandada, cabe señalar que tales omisiones no son determinantes para desacreditarlo ni para desestimar su declaración, ya que la relación de trabajo que lo vinculó con la empleadora no fue un aspecto en discusión, pues el testigo manifestó que fue compañero de la demandante y que también trabajó para la demandada, además que se encontraba presente el día, lugar y hora del despido, aspectos sobre los que no fue deslegitimado en cuanto a su dicho.

Más bien, el argumento de la sentencia de la Cámara se centró en lo declarado por el testigo respecto al hecho del despido, ya que consideró que ese testimonio daba muestras *"de seguridad y verosimilitud",* porque detalló la hora y fecha en la que ocurrió, y además porque expresó que le constaba porque estuvo presente cuando ocurrió, junto con la trabajadora demandante, señora MJIDR y el demandado, señor JREE. Asimismo, el tribunal de alzada consideró que las respuestas dadas por el citado testigo, realizadas en el contrainterrogatorio, no permitieron que hubiere dudas sobre el hecho del despido, tal y como se estableció en la demanda, lo que llevó a la Cámara a concluir que la declaración del testigo, CM, merecía credibilidad, resultando irrelevante que no expresara el cargo que ostentaba el testigo o el cargo del demandado JRE, para la sociedad demandada, ya que el testigo en su deposición claramente había expresado que laboró para la demandada y que fue compañero de trabajo de la demandante, respecto de lo cual no fue cuestionado oportunamente por parte del apoderado de la sociedad demandada.

En este sentido, resulta evidente que en la sentencia recurrida, el tribunal de alzada manifestó porqué lo depuesto por el testigo de cargo, le generó convicción y certeza en cuanto a los hechos sobre los que testificó (hora y fecha del despido, entre otros), considerando fútil el hecho de que el testigo no dijera su

cargo y el cargo de la persona a quien en la demanda se le atribuyó el despido, cuando previamente había dado manifestaciones de "seguridad" respecto de lo que declaraba. Además de que no fueron hechos controvertidos por la contraparte. Por lo que la apreciación realizada por la Cámara sentenciadora no puede ser considerada como "excesiva o abusiva", y por tal razón, la sentencia no será casada, con respecto a la valoración de la declaración del referido testigo."

PROCEDE LA VULNERACIÓN ALEGADA CUANDO EL AD QUEM LE NIEGA CREDIBILIDAD A LOS TESTIGOS DE DESCARGO, POR CONSIDERAR QUE CON LAS PREGUNTAS REALIZADAS POR EL APODERADO DE LA DEMANDADA SE LES SUGERÍA LA RESPUESTA, SITUACIÓN QUE EL APODERADO DE LA ACTORA NO OBJETÓ AL RESPECTO, ENTENDIÉNDOSE SU ACEPTACIÓN

"Continuando con el análisis de las inconformidades del recurrente en cuanto al análisis de la Cámara respecto de la prueba testimonial, resulta oportuno referirnos a las declaraciones de las testigos de descargo.

[...]

En lo relativo a la apreciación que realizó el tribunal de segunda instancia, de las declaraciones de las testigos presentadas por la demandada, señoras MHDE y RSMDC, se advierte que consideró que lo depuesto por ellas no era suficiente para tener por comprobadas las excepciones alegadas, ya que las preguntas realizadas por el apoderado de la sociedad demandada, sugerían las fechas de sus respuestas.

Partiendo de lo sostenido por la Cámara en su sentencia, se advierte que se equivoca al considerar que el abogado de la demandada sugirió las respuestas (fechas) que darían sus testigos, y que por tal razón perdían credibilidad.

Al respecto, se debe tener presente que mediante el interrogatorio directo el abogado que ofrece la prueba testimonial lo hace a través de preguntas generalmente abiertas por medio de las que pretende obtener una respuesta narrativa del testigo, es decir, un relato completo, preciso, y a la vez confiable y creíble, que le evidencie al juez el detalle de los hechos conocidos por el testigo.

En este sentido, se advierte, que las preguntas formuladas por el abogado de la parte patronal, no sugieren la respuesta que se desea obtener, ya que no limitan o circunscriben la respuesta del testigo a una respuesta cerrada. De ninguna manera el referido profesional ha sugerido las fechas en las preguntas realizadas a las testigos, contrario a ello, es notorio y evidente que por la forma en que están estructuradas las preguntas, estas contienen la fecha en que ocurrió el hecho del supuesto despido alegado en la demanda (dieciséis de noviembre de dos mil veinte); es decir, lo que se pretende con las mismas es ubicar la declaración de las testigos en ese día específico, y a partir de ello, realizar las demás preguntas.

Otro aspecto que se debe tomar en cuenta, es que el apoderado de la trabajadora demandante no mostró su inconformidad con las preguntas que realizó el apoderado de la sociedad demandada a las testigos de descargo, ni objeto al respecto, entendiéndose su aceptación en cuanto al desarrollo de la audiencia.

Por lo tanto, la Cámara comete el error de derecho al negarle credibilidad a las testigos de descargo y considerar que con las preguntas realizadas por el apoderado de la demandada, se les sugería la respuesta, por lo que la sentencia será casada por este vicio.

V. JUSTIFICACIÓN DE LA SENTENCIA

Conforme a lo antes expresado, esta Sala pronunciará la sentencia que conforme a derecho corresponda, relacionada directamente con la infracción planteada por el recurrente en el recurso de apelación.

[...]

Se advierte, que la inconformidad expresada por el recurrente radica en que, a la juez de primera instancia, no le generó convicción la declaración del testigo de cargo, señor WICM, y lo desestimó porque no expresó que cargo desempeñaba para la sociedad demandada, y tampoco expresó el cargo de la persona que realizó el despido.

Analizado el fundamento del recurso de apelación interpuesto por el […], en su calidad de apoderado especial laboral de la señora MJIDR, se advierte, que la relación de trabajo y sus condiciones, no fueron aspectos controvertidos en el referido proceso por la demandada, por lo que el análisis se limitará a los extremos procesales sostenidos por las partes en cuanto al hecho del despido.

Así se advierte, que el primer agravio expuesto por el licenciado […], respecto a la apreciación que realizó el Juzgado Cuarto de lo Laboral, de la declaración del testigo de cargo, señor WICM, es un aspecto sobre el cual este tribunal ya se pronunció en el considerando IV. párrafo 8 de esta sentencia, al analizar el recurso de casación a través del error de derecho en la valoración de la prueba testimonial, con infracción al art. 461 CT, concluyendo que el hecho de que el testigo haya omitido expresar el cargo que desempeñaba para la sociedad demandada, tales elementos, no eran determinantes para desestimar su declaración, ni para desacreditarlo, ya que las respuestas aportadas por el testigo dependieron de la forma en que fue estructurado su interrogatorio y además porque el testigo fue concluyente respecto de cómo, cuándo y porque sabe los hechos sobre los que fue cuestionado, específicamente en cuanto al despido alegado en la demanda, ya que estuvo presente cuando despidieron a la trabajadora demandante.

Por otra parte, y con respecto a que el testigo no expresó el cargo que desempeñaba el señor EE (persona a la que se le atribuye el despido), a juicio de esta Sala, no es un aspecto que deslegitime su dicho o que le reste credibilidad, porque tal y como a folios […] de la pieza principal mediante en formato de disco digital de video, al ser interrogado por el abogado de la actora sobre quien fue la persona que efectuó el despido de doña MJIDR, contestó que fue el señor JREE, y que le constaba porque él estaba presente. Y en el contrainterrogatorio efectuado por el apoderado de la demandada, contestó que vio a JREE, el día del despido, y que en el lugar del despido estuvo presente la señora IDR, el señor EE y el declarante. Además, cabe señalar que en virtud del principio de comunidad de la prueba, tal aspecto no era un obstáculo para colegir la calidad del referido señor, ya que al considerar la declaración de parte contraria rendida

por el representante legal de la demandada (señor EE), que consta a folios […] de la pieza principal, en formato de disco digital de video, manifestó que poseía tal calidad; y según demanda, la trabajadora demandante manifestó que *"el día dieciséis de noviembre de dos mil veinte, aproximadamente a eso de las ocho horas con treinta minutos, el señor JREE, con facultades para despedir, dirigir y administrar trabajadores, pues es el representante legal de la sociedad, y quien me contrató, me manifestó que a partir de ese momento estaba despedida de mi trabajo".*

Bajo ese contexto, la declaración del testigo, señor WICM, aportó suficientes elementos para tener por comprobado el despido alegado en la demanda.

Por otra parte, al analizar lo actuado por la demandada en primera instancia, se advierte que a folios […] de la pieza principal, se mostró parte el licenciado […], como apoderado general judicial de la sociedad […], Sociedad Anónima de Capital Variable, quien contestó la demanda en sentido negativo, y posteriormente, por medio de escrito agregado de folios […] de la pieza principal, opuso y alegó las excepciones siguientes: prescripción de la acción, falta de legitimación del derecho para reclamar el pago de indemnización, vacación y aguinaldo proporcional, improponibilidad de la pretensión planteada en la demanda, falta de veracidad y buena fe por parte de la demandante y falta de presunciones a favor de la demandante. […]

Cabe señalar, que el recurrente presentó prueba testimonial para comprobar las excepciones alegadas, sin embargo, del análisis de las excepciones opuestas y alegadas, ninguna de ellas tiene relación con la prueba testimonial presentada, es decir, no hay pertinencia entre los hechos alegados y la prueba aportada. Por tal razón la prueba testimonial de descargo, consistente en las declaraciones de las testigos, señoras MHDE y RSMDC, no será objeto de análisis, dado que la misma no guarda relación con los hechos expuestos, a través de los mecanismos de defensa "excepciones" planteados por el apoderado de la demandada, es decir, que no son conducentes respecto de los hechos que se pretendían establecer en el proceso.

Previo a pronunciar sentencia, y en virtud de que la relación, el contrato de trabajo y sus condiciones no fueron aspectos controvertidos, y las excepciones opuestas y alegadas fueron desestimadas, se determinará si se comprobó el despido alegado en la demanda, y en su defecto si opera a favor de la trabajadora la presunción establecida en el art. 414 CT.

Para comprobar el despido la actora presentó al testigo, señor WICM, declaración que oportunamente fue analizada, tal y como se manifestó en párrafos precedentes, concluyéndose que, el referido testigo de cargo, expresó el lugar, día y hora en que aconteció el despido, y que lo realizó el señor JREE, quien según la declaración de parte contraria al minuto 1:39, reconoció que es el representante legal de la sociedad demandada, y que en tal calidad tiene las facultades de contratar y despedir empleados, lo cual quedó registrado en formato de disco digital de video, a folios […] de la pieza principal.

La presunción de despido establecida en el art. 414 CT, no opera a favor de la trabajadora en virtud de que si bien, la demanda fue presentada dentro de los quince días hábiles de ocurrido el hecho que la motivo (despido alegado en la demanda) en la audiencia conciliatoria, el licenciado […], en calidad de apoderado de la demandada, le ofreció a la trabajadora demandante el reinstalo a sus labores, en las mismas condiciones en que venía desempeñándolas, conservando su antigüedad y las demás condiciones de ley, sin embargo, el mismo no fue aceptado por la trabajadora, configurándose el segundo presupuesto legal para que no opere la citada presunción (inciso 5° del art. 414 CT).

Por lo que habiéndose acreditado de manera directa el despido de la trabajadora, señora MJIDR, con la declaración del testigo, señor WICM, se condenará a la demandada al pago de la indemnización por despido injusto y las demás prestaciones laborales reclamadas."

Sala de lo Civil, número de referencia: 264-CAL-2022, fecha de la resolución: 24/11/2022

ERROR DE DERECHO EN LA APRECIACIÓN DE LA PRUEBA, POR NO EXTERNAR LAS RAZONES QUE LO MOTIVARON A INFERIR QUE EL TESTIGO ERA EL MISMO QUE LE RESTRINGIÓ EL INGRESO AL TRABAJADOR A SU CENTRO DE TRABAJO, A PESAR DE QUE EN LA DEMANDA NO SE DETERMINÓ

"Error de derecho en la apreciación de la prueba testimonial, con infracción al art. 461 CT

Con relación a la infracción invocada, el recurrente sostiene que, el tribunal de segunda instancia le restó valor probatorio al testigo de descargo porque [...] en la demanda se dijo que "el vigilante" le había impedido el ingreso a su centro de trabajo y que por tanto se había producido el despido reclamado en dicho libelo y por ello su declaración no goza de imparcialidad ya que a él se le acreditó el impedimento del ingreso de la demandante a la empresa, por lo que, lo hace poco creíble y no merece fe [...]" (sic).

Por ello, asegura el recurrente que la Cámara valoró arbitrariamente la prueba testimonial en referencia, al haberlo hecho conforme a su voluntad o capricho, sin ajustarse a la razón, pues la persona idónea para declarar respecto a que a la trabajadora demandante se le negó el ingreso al centro de trabajo, el día y hora señalado en la demanda, era quien estuvo en la entrada del mismo; en este sentido, afirma que cualquier otra persona habría sido un testigo de referencia sin ningún valor probatorio.

Por tal motivo, a juicio del recurrente, el testigo descalificado por la Cámara, quien manifestó las circunstancias de tiempo, modo y lugar, debió merecerle fe a la Cámara igual que al tribunal de primera instancia.

Y finalmente, el abogado […] expresa, que es arbitraria la valoración del tribunal de alzada debido a que, sin pruebas, dedujo que se trataba de la misma persona que supuestamente le impidió el ingreso al centro de trabajo a la trabajadora demandante, aun cuando no se logró identificar por la actora, tampoco en la demanda, ni en sus declaraciones, la identidad de esa persona.

Es así, que puede observarse en síntesis, que la queja de la empleadora, es que el tribunal de segunda instancia valoró de forma arbitraria la declaración del testigo de descargo a pesar de ser idóneo, y además que, para la Cámara no gozaba de imparcialidad por habérsele atribuido la acción de negar el ingreso a la trabajadora al centro de trabajo.

Con respecto a la infracción objeto de estudio en esta sentencia, debe estimarse que el error de derecho en la apreciación de la prueba testimonial, ha sido conceptualizado por esta Sala, en reiterada jurisprudencia; v.g., la sentencia de las diez horas veintisiete minutos del veintidós de diciembre de dos mil veintiuno, clasificada bajo el número de referencia 100-CAL-2021, en la cual se sostuvo que *"[...] es absurda, cuando el juzgador analiza el medio probatorio mediante un argumento que adolece de sentido o que es contrario a la razón; es abusivo, cuando la apreciación es excesiva o indebida; y arbitraria, al actuar siguiendo su voluntad o capricho, sin ajustarse a las leyes o a la razón [...]".*

Efectuada la definición de la infracción invocada por el recurrente, corresponde remitirnos al pronunciamiento proveído por la Cámara Segunda de lo Laboral, con sede en esta ciudad, específicamente en lo relativo a la prueba testimonial: *"[...] el apoderado de la sociedad demandada, aportó la declaración del testigo de descargo señor […], tal y como consta en acta y audiovisual de Fs. […] de la pieza principal, quien expresó que, entre las cuatro y media del día doce de octubre de dos mil veinte, estuvo brindando seguridad a la entrada principal de la empresa, y que ese día la trabajadora no ha llegado a la empresa, y que le consta porque tuvo turno de veinticuatro horas (...)*

El tribunal de alzada continúa con los fundamentos de la sentencia y manifiesta que: *(...) Como puede apreciarse, luego de revisar y examinar esa declaración, y dado que, en el presente caso, el interés del señor […], como testigo de descargo presentado por la parte demandada, van inherente a la manera de cómo se argumenta el despido en la demanda de mérito, pues se le imputa que en su cargo de "vigilante" que, le impidió el ingreso a la trabajadora a su centro de trabajo en el horario de labores correspondiente, y relata que éste realizó una llamada a la señora […], como "Gerente General" de la parte demandada, quien le dijo que ella no podía ingresar porque estaba despedida, es lógico que, su declaración no goza de imparcialidad, ya que a él se le está acreditando el impedimento del ingreso a la actora a la empresa, por lo que, hace poco creíble y no merece fe en su dicho, para establecer lo expuesto por el apoderado de la parte patronal, en su escrito de Fs. […] de la p.p. [...]"(sic)*, (el resaltado es de la Cámara)

En el caso en estudio, se advierte que, el argumento principal de la Cámara, para desestimar al testigo de descargo, señor […], fue el hecho de que le atribuyó tener interés como testigo de descargo, y aseveró que era *"inherente a la manera de cómo se argumenta el despido en la demanda"*, pues como vigilante le impidió el ingreso a la trabajadora al centro de trabajo. Circunstancia por la que el tribunal de alzada, consideró que su declaración no gozaba de imparcialidad.

De esa forma se evidencia que, el análisis, consideraciones y la conclusión del tribunal de segunda instancia, se limitó a que el testigo de descargo era el vigilante de la sociedad demandada y había restringido el ingreso a la trabajadora al centro de trabajo; ese hecho resultó determinante para concluir que era poco creíble y que no le merecía fe para probar el planteamiento de la demandada en cuanto a que el despido nunca ocurrió, pues la trabajadora no se presentó al centro de trabajo.

Atinente a esa estimación, debe observarse que la Cámara utilizó la frase "es lógico" para establecer que el testigo tenía interés; sin embargo, la única razón que expresó fue que tenía interés en las resultas del proceso. Bajo ese supuesto, debería entenderse que si un agente de seguridad (vigilante) no le permite el ingreso a cierto trabajador a su centro de trabajo, sería contraproducente ofertarlo como testigo en un juicio porque el juez lo rechazaría por tener interés (causa de parcialidad subjetiva).

A lo anterior debe agregarse, que en la demanda de folios […] (pieza principal), sólo se relacionó que *"el vigilante le impidió el acceso al centro de trabajo",* sin distinguir de quién se trataba, es decir sin individualizarlo con su nombre; por lo cual es válido preguntarse ¿de qué manera la Cámara infirió que el testigo que declaró, señor […], era el agente que le restringió el acceso a la trabajadora demandante?; ya que del examen realizado a la sentencia no se advierte que se haya consignado razonamiento al respecto.

Lo precedente, es importante considerarlo debido a que, es del conocimiento de todos, que los agentes de seguridad trabajan bajo la modalidad de turnos, razón por la que, era necesario establecer quién era el agente que trabajó el turno del doce de octubre de dos mil veinte, fecha en que ocurrió el supuesto despido indirecto, según la demanda. De esa forma, se podría vincular si el testigo que declaró a petición de la sociedad demandada era el mismo agente de seguridad que estaba a cargo de la vigilancia la fecha relacionada.

Y es que, tratándose de los motivos de parcialidad que pudieran afectar el testimonio de un testigo, como el citado por el tribunal de segunda instancia, el interés en el resultado del proceso, si bien podría presumirse, esto está gobernado siempre por las exigencias de racionalidad; debido a que, las presunciones (para el caso judiciales) no sólo cumplen la función de dar razones para creer que ciertos hechos han ocurrido, sino que además las proporcionan para considerar probados esos hechos. En este sentido, era indispensable que la Cámara expresara la máxima de experiencia que lo llevó a excluir el testimonio del testigo de descargo al afirmar que no gozaba de imparcialidad, pues en la demanda no estaba determinado quién era el agente que no le permitió el ingreso a la trabajadora demandante (el resaltado es de esta Sala).

Por la consideración anterior, debe aclararse que no es indispensable ni obligatorio que en la demanda se determine el nombre del agente de seguridad o de la persona que le restringe el acceso al trabajador al momento que se presente al centro de trabajo, todo está guiado por las condiciones particulares de cada caso.

En los términos expuestos en los párrafos anteriores, y tomando en cuenta la queja del recurrente respecto de la sentencia del tribunal de alzada, se advierte que la conclusión de la valoración del testigo de descargo, señor […], se basó exclusivamente en que estimó que tenía interés en el proceso, es decir, era parcial y no merecía fe en su dicho, esto, por la forma en que se relataron los hechos en la demanda. Por consiguiente, para este tribunal, la Cámara no apreció la deposición del referido testigo de conformidad a la sana crítica, al no haber externado las razones, sean basadas en la lógica o máximas de la experiencia que la motivaron a inferir que ese testigo era el mismo que le restringió el ingreso a la trabajadora a su centro de trabajo a pesar de que en la demanda no se determinó, y por tanto era parcial por el interés en el juicio.

A lo precedente debe añadirse, que la valoración, de acuerdo a la sana crítica, es libre, pero razonada; por ello esta Sala ha sostenido en reiterada jurisprudencia que esto "implica la libertad del juzgador de valorar los distintos medios practicados sin sujeción a una regla legal. Pero, tal como lo han estimado los doctrinarios procesalistas, la libre valoración no significa libérrima u omnímoda apreciación de la prueba, sino que ha de ser interpretada, como manifiestan determinados preceptos, como valoración conforme a las llamadas reglas de la sana crítica. Estas reglas de la sana crítica no son reglas legales, sino normas comunes a todo ser humano, no exclusivas de los jueces y magistrados, basadas en la razón, la lógica y en definitiva, en las máximas de la experiencia" sentencia de casación, de las diez horas veintiséis minutos del veintidós de julio de dos mil diecinueve, clasificada con la referencia 48-CAL-2019.

Finalmente, por los motivos expuestos, se concluye que la Cámara Segunda de lo Laboral, con sede en esta ciudad, incurrió en la infracción de error de derecho en la apreciación de la prueba testimonial de descargo, por haber infringido el art. 461 CT, al valorarla en contravención a la sana crítica; por tanto, corresponde casar la sentencia, y pronunciar la que conforme a derecho corresponde (art. 537 CPCM)."

Sala de lo Civil, número de referencia: 82-CAL-2022, fecha de la resolución: 18/07/2022

VULNERACIÓN AL ART. 461 DEL CT. CUANDO NO SE MOTIVA EN LEGAL FORMA LA PERTINENCIA, IDONEIDAD, UTILIDAD Y SU RELACIÓN CON LOS DEMÁS MEDIOS DE PRUEBA VERTIDOS EN EL PROCESO, INFRINGIENDO LAS REGLAS DE LA SANA CRÍTICA

"Error de derecho en la apreciación de la prueba testimonial, art. 461 CT

Como puede apreciarse, el recurrente basa su reclamo en el hecho de que la Cámara Segunda de lo Laboral de esta ciudad, no exteriorizó las razones de por qué los testigos presentados por la actora, le generaron credibilidad en cuanto al cargo y a las facultades de la persona que realizó el supuesto despido de la trabajadora demandante, pues según el recurrente, no *"brindaron ninguna razón lógica del porque se acredita la Representación Patronal, simplemente han citado lo declarado por los testigos."*

A efecto de ilustrar las consideraciones de la Cámara, con relación a la prueba testimonial, se transcriben los pasajes pertinentes de la sentencia "(...) La parte patronal, por medio del licenciado […], argumenta que el juzgador de primera instancia realizó una errónea valoración de la prueba; señala, por una parte, valoró erróneamente los testigos aportados por la parte actora. Además, afirma que no se tomó en cuenta la declaración del representante legal de la sociedad ya que este negó el despido, y por otra, alega que dada dicha negación, no debió emplearse la presunción de despido contenida en el artículo 414 del Código de Trabajo (...) la calidad de Representante Patronal atribuida a la señora [...] se acredita mediante la deposición de testigos de parte actora (ver acta y DVD de folios […] p.p.) ya que ambos testigos manifestaron que la señora [...] es Generalista de Recursos Humanos desde que ellos ingresaron a laborar para la sociedad demandada. Asimismo, manifestaron que parte de sus funciones es gestionar personal, realizar cuestiones administrativas relacionadas a Recursos Humanos y el cese de personal (...) lo anterior implica que independientemente que el art. 3 del C.T. no se denomine el cargo "Generalista" debe entenderse que los que aparecen (directores, gerentes, administradores, caporales) son meramente ejemplificativos, pues lo que realmente determina si se trata de un representante patronal son sus funciones, sobre todo cuando se trata de personas que no están nominadas de forma explícita en el citado artículo (...)".

[...]

En el caso en estudio, se advierte que, el argumento principal de la Cámara, para acreditar la representación patronal de la señora […], fue el hecho de que los testigos de cargo, depusieron que la referida señora, desempeñaba el cargo de "generalista de recursos humanos" desde que ellos ingresaron a trabajar a la sociedad demandada. Además, consideró que los testigos declararon que, parte de las funciones que realizaba la señora Q eran las de *"gestionar personal, realizar cuestiones administrativas relacionadas a recursos humanos y el cese de personal".*

Cabe señalar que, en sentencia de casación, pronunciada a las diez horas veintisiete minutos del dieciocho de julio de dos mil dos veintidós, en el incidente con referencia 82-CAL-2022, esta Sala sostuvo que: *"(...) la valoración, de acuerdo a la sana crítica, es libre, pero razonada; por ello esta Sala ha sostenido en reiterada jurisprudencia que esto "implica la libertad del juzgador de valorar los distintos medíos practicados sin sujeción a una regla legal. Pero, tal como lo han estimado los doctrinarios procesalistas, la libre valoración no significa libérrima u omnímoda apreciación de la prueba, sino que ha de ser interpretada, como manifiestan determinados preceptos, como valoración conforme a las llamadas reglas de la sana crítica. Estas reglas de la sana crítica no son reglas legales, sino normas comunes a todo ser humano, no exclusivas de los jueces y magistrados, basadas en la razón, la lógica y en definitiva, en las máximas de la experiencia (...)."*

En consideración a lo anteriormente expuesto, se advierte que la Cámara no realizó el menor esfuerzo de verificar las circunstancias de tiempo, modo y lugar de los hechos que narró cada testigo. Es decir, no hay evidencia de una funda-

mentación que justifique por qué le otorgó valor probatorio a cada declaración. De tal manera que, esta Sala considera que existió una falta de fundamentación al no expresar el tribunal de segunda instancia, un juicio razonado de por qué motivo le mereció fe la prueba vertida en el juicio, principalmente lo dicho por los testigos de cargo, faltando con ello a la obligación de valorar la prueba conforme a la sana crítica, según lo dispuesto en el art. 461 del Código de Trabajo.

En razón a lo anterior, se concluye que la Cámara Segunda de lo Laboral, con sede en esta ciudad, incurrió en la infracción de error de derecho en la apreciación de la prueba testimonial de cargo, al valorarla en contravención a la sana crítica (art. 461 CT); por tanto, corresponde casar la sentencia y pronunciar la que conforme a derecho corresponde (art. 537 CPCM).

III. JUSTIFICACIÓN DE LA SENTENCIA

De acuerdo a lo expuesto en párrafos que preceden, la justificación de esta sentencia debe estar encaminada a dilucidar los puntos de agravio planteados por el recurrente en el recurso de alzada correspondiente.

[...]

Por tanto, el punto medular radica en establecer, si en el presente caso, eran aplicables los efectos jurídicos que producen los arts. 414 y 3 del CT; por lo que es oportuno hacer las acotaciones siguientes:

El art. 414 CT, dispone en sus incisos 1° y 2°, la presunción legal de veracidad de las afirmaciones contenidas en la demanda, mediante la cual, como efecto procesal, se invierte la carga de la prueba, de manera que un despido puede establecerse con base en dicha presunción, si se cumplen con los requisitos que tal disposición establece. Para el caso, si el patrono no concurriere a la audiencia conciliatoria sin justa causa o concurriendo manifestare que no está dispuesto a conciliar.

Así pues, se advierte a folios […] de la pieza principal, que el representante legal de la demandada no compareció a la audiencia conciliatoria, no obstante su legal citación.

Por otra parte, el inciso 4° del referido artículo, regula las condiciones necesarias o requisitos que deberán cumplirse para que tenga lugar la presunción, entre estos, que la demanda se interponga dentro del término de quince días hábiles siguientes a aquél en que ocurrieron los hechos alegados, y que en autos llegue a establecerse, *por lo menos, la relación de trabajo.*

Para determinar si la presunción es aplicable al caso de autos, es necesario constatar los referidos requisitos. Así, se advierte que, según consta en la demanda, a folios […] de la pieza principal, la trabajadora manifestó que fue despedida el nueve de julio de dos mil veintiuno, por lo que, al tener en cuenta el plazo de quince días hábiles que establece la disposición legal en cuestión, la demanda se presentó dentro del plazo, el día treinta de ese mes; cumpliendo así, el requisito que exige el art. 414 CT.

Con relación a la acreditación de la relación de trabajo, se advierte que los testigos de cargo, señores […], (cuyas deposiciones están grabadas en el dispositivo que corre agregado a folios […] de la pieza principal); expusieron que

conocen a la trabajadora demandante desde que ingresó a laborar, por haber sido compañeros de trabajo. Asimismo, coinciden en expresar el horario, jornada, salario, funciones y el cargo que la trabajadora desempeñaba en la sociedad demandada. Aunado a lo anterior, la relación de trabajo quedó reconocida por el representante legal de la sociedad demandada, con la declaración de parte contraria, al haber negado el despido de la trabajadora demandante.

Establecidos los presupuestos del art. 414 CT (referentes a la relación laboral, horario, salario y subordinación de la trabajadora demandante con la demandada), debe tomarse en cuenta que uno de los requisitos para que tenga efectos la presunción de despido, conforme a dicha disposición, es que tiene que constar en el proceso, prueba que acredite la calidad de la persona a quien se le atribuye el despido, requisito indispensable para que éste produzca sus efectos jurídicos, pues resultaría ilógico que se presumiera un despido, que no podría serio, por haberlo realizado una persona distinta a las que enuncia el inciso segundo del art. 55 del Código de Trabajo.

Expuesto lo anterior, cabe señalar que en la demanda de referencia, la trabajadora expuso que laboró para y a las órdenes de la demandada, desde el dieciocho de abril de dos mil dieciséis, hasta el nueve de julio de dos mil veintiuno, fecha en la que fue despedida por la señora […], quien labora en dicha sociedad como representante de recursos humanos, para la cuenta […] de la demandada. [...]

Como puede observarse, los testigos de cargo depusieron conforme a lo preguntado, y suministraron datos que concuerdan con lo alegado en la demanda; principalmente respecto de las facultades de la señora […] (dirigir, administrar, contratar y despedir personal).

En ese sentido, y conforme al art. 3 CT, la señora […] se considera una representante patronal. Además, en el caso de autos, no fue presentada prueba que demostrara lo contrario, por ejemplo el contrato de trabajo de la referida señora.

En consecuencia, se concluye que, en el caso bajo análisis, se acreditó un despido de hecho con responsabilidad patronal, con base en las presunciones contenidas en los arts. 3 y 414, ambos del CT; ya que los testigos […], generaron certeza suficiente para acreditar la relación de trabajo y la calidad de la persona que materializó el despido.

Por lo tanto, el argumento del licenciado […], referente a que en el caso de autos, no era aplicable la presunción de despido contenida en el art. 414 CT, ya que, el representante legal de la demandada, al momento de rendir su declaración de parte contraria, negó el despido, pierde sustento.

Y es que, debe aclararse que el hecho de negar el despido, no constituye prueba en contrario, ya que, tal y como lo argumentó la Cámara, son simples afirmaciones de “parte” que siempre requieren ser acreditadas en el proceso a través de los medios legalmente admisibles; ya que es precisamente el despido injustificado el hecho alrededor del cual debe versar y aportarse la prueba (art. 312 CPCM). Al respecto, es necesario mencionar que la demandada no invocó mecanismo de defensa alguno, ni aportó prueba para desacreditar los hechos que se le atribuyeron en la demanda.

En consecuencia, lo procedente es condenar a la demandada al pago de la indemnización reclamada por la trabajadora demandante, por haberse acreditado vía presunción el despido, no así en cuanto a las vacaciones completas, ya que no consta prueba alguna que acredite tal pretensión."

Sala de lo Civil, número de referencia: 175-CAL-2022, fecha de la resolución: 11/08/2022

Relaciones:

Sala de lo Civil, número de referencia: 149-CAL-2022, fecha de la resolución: 08/09/2022

QUEBRANTAMIENTO DE LAS FORMAS ESENCIALES DEL JUICIO

PARA QUE PROCEDA ES INDISPENSABLE QUE QUIEN LO INVOCA HAYA RECLAMADO LA SUBSANACIÓN DE LA FALTA, HACIENDO USO OPORTUNAMENTE Y EN TODOS SUS GRADOS DE LOS RECURSOS ESTABLECIDOS POR LA LEY, SALVO QUE EL RECLAMO FUERE IMPOSIBLE

"Falta de apertura a pruebas en cualquiera de las instancias cuando la ley lo establezca, salvo que el reclamo fuere imposible

Preceptos infringidos los arts. 577 y 578 relacionados con el art. 581 ordinal 1°), (todos los preceptos del CT) [...]

Previo análisis, cabe señalar que, de conformidad al art. 590 CT, cuando se interpone el recurso por quebrantamiento de las formas esenciales del juicio, es indispensable que quien lo invoca haya reclamado la subsanación de la falta, haciendo uso oportunamente y en todos sus grados de los recursos establecidos por la ley, salvo que el reclamo fuere imposible (el resaltado es propio).

Sin embargo, en el caso de autos, se advierte que el licenciado […], al desarrollar el concepto de la infracción manifestó que "con relación a la aplicación del artículo 590 C.T. no podía mi persona, reclamar dicho quebrantamiento de una forma esencial en el proceso, sino hasta con la presentación de este recurso de casación, pues fue hasta con el fallo dado en segunda instancia, que mi persona tuvo conocimiento del quebrantamiento de unas las formas esenciales del juicio, como lo es no haberse otorgado la prueba en segunda instancia y por ello dejar de conocer por la excepción alegada".

En este sentido, resulta evidente que el impetrante incumplió con el requisito de admisibilidad que exige el art. 590 CT; pues no reclamó la subsanación de la supuesta falta cometida por el tribunal de alzada, mediante los recursos que franquea la ley. Asimismo, de lo expuesto en el concepto de la infracción, no se advierte que la denuncia de la falta de apertura a pruebas, haya sido imposible.

Al respecto, esta Sala no puede pasar inadvertido el hecho de que a folios [...] consta el auto por medio del cual el tribunal de alzada, le declaró al recurren-

te, sin lugar (a tener por alegada y opuesta la excepción de "falta de credibilidad del testigo". En este sentido resulta evidente la mera inconformidad del actor con lo resuelto por la Cámara en dicho auto. En consecuencia el recurso será declarado inadmisible por incumplir con el requisito establecido en el art. 590 CT."
Sala de lo Civil, número de referencia: 23-CAL-2022, fecha de la resolución: 02/02/2022

RECURSO DE CASACIÓN

DECLARATORIA DE INADMISIBILIDAD CUANDO EL PLANTEAMIENTO DEL IMPETRANTE NO ES CLARO, SINO POR EL CONTRARIO TIENE CONTRADICCIONES, PUES POR UNA PARTE SOSTIENE QUE EL AD QUEM INCURRE EN ERRÓNEA APLICACIÓN DEL ART. 383 CT, PERO LUEGO EXPRESA INFRACCIÓN AL PRINCIPIO DE CONGRUENCIA

"Errónea aplicación del art. 383 inc. 1° CT y del art. 218 CPCM, y consecuente vulneración al principio de congruencia"

De la lectura del escrito de interposición del recurso de casación, se advierte que la abogada de la demandada sostiene, que el Juzgado de lo Laboral de Santa Tecla (juez dos), aplicó erróneamente la figura procesal de la modificación y ampliación de la demanda, aun cuando la parte demandante en ningún escrito lo solicitó. En ese sentido afirma, que el tribunal de primera instancia de forma oficiosa amplió la demanda, sin definir los extremos procesales sobre los que debatirían las partes.

Sostiene a su vez, que tal infracción fue avalada por la Cámara Segunda de lo Laboral al confirmar "el punto de alteración del proceso" ya que fue alegado (el yerro) en apelación; no obstante, fue consentida la modificación o ampliación de la demanda, al haber resuelto que con la asistencia a la audiencia de conciliación dicho acto procesal quedó convalidado.

Sobre ello expresa, que el tribunal de segunda instancia, en su sentencia, consideró que "si la Juzgadora A Quo incurrió o no en una infracción del *artículo 383* del Código de Trabajo, es irrelevante, y que con la asistencia a la audiencia de conciliación dicho acto procesal quedó convalidado".

Por lo anterior, argumenta que la actuación de la Cámara, dio lugar a una nulidad de carácter absoluto, art. 232 literal c) CPCM, pues el tribunal otorgó más de lo solicitado por la parte demandante, lo que vulneró el principio de congruencia. Además, manifiesta que se configuró la nulidad absoluta porque se infringieron los derechos constitucionales de audiencia y defensa.

Finalmente, la abogada recurrente solicita que *"[...] sea revocada la Sentencia emitida por el Juzgado de lo Laboral de Santa Tecla, Juez Dos y además de ello también la sentencia que en este acto se recurre, la cual es la de la Cámara Segunda de lo Laboral de San Salvador, ya que el Juzgador oficiosamente aplicó erróneamente lo regulado en el artículo 383 del Código de Trabajo, ya que la parte demandante no solicitó o peticionó que se ampliara la demanda o Que se mo-*

dificara, transgrediendo esta actuación del Juzgador el Principio de Congruencia artículo 218 del Código Procesal Civil y Mercantil (...)se anule todo lo actuado hasta el último acto procesal válido, que en nuestro caso es hasta la resolución en la cual se tiene por realizadas las prevenciones a la parte actora [...]" (sic).

Dada la exposición de la recurrente, se vuelve necesario mencionar que las infracciones de fondo en el recurso de casación están determinadas en el art. 588 CT. Para el caso, se citarán únicamente (entre las que tratan sobre errores en cuanto a la norma aplicable para resolver el caso) la de aplicación indebida e interpretación errónea.

Estos vicios en la aplicación de las disposiciones legales son excluyentes, pues la primera tiene lugar al aplicar para resolver el fondo del asunto, un supuesto legal a un caso no regulado por él; a diferencia, la segunda se produce cuando el juzgador, al analizar una disposición legal que es pertinente para resolver el caso concreto, la restringe, amplía o altera su sentido.

Lo anterior se trae a consideración debido a que la abogada recurrente ha nombrado la infracción "errónea *aplicación*". Por tal razón, el estudio del submotivo se ha centrado en distinguir si existe error solamente al referirse al mismo en cuanto a su nominación, o si en realidad existe falta de fundamentación al invocarse.

En primer lugar, debe observarse que la abogada litigante elude el requisito relativo a razonar en párrafos separados la infracción de cada precepto legal citado como infringido (arts. 383 inc. 1° CT y 218 CPCM).

A pesar de esto, según la demandada, la Cámara Segunda de lo Laboral, con sede en esta ciudad, propició el yerro al confirmar la decisión del tribunal de primera instancia, en cuanto a que se consideró ampliada la demanda de forma oficiosa; es decir, de esta manera sostiene que se infringió el art. 383 inc. 1° CT.

Por otra parte, de lo expuesto se advierte, que el concepto no guarda relación con la infracción de interpretación errónea (aplicación errónea), puesto que se está alegando el asentimiento de la condena de primera instancia, y desde luego que, esto no encaja en lo que debe entenderse por interpretación errónea de una norma, ya que, debió explicarse la exegesis de la Cámara respecto de los dos preceptos legales que citó como infringidos, vale decir, indicar cuál es el error atribuido (restringió, amplió, alteró o tergiversó el contenido de las disposiciones legales) y además citar la interpretación que corresponde según el recurrente.

En otro orden de ideas, el planteamiento de la impetrante no es claro, sino por el contrario tiene contradicciones, pues por una parte sostiene que la Cámara incurre en la errónea aplicación del art. 383 CT, pero luego expresa que el vicio que cometió, y también el tribunal de primera instancia, es infracción al principio de congruencia (art. 218 CPCM) al haber resuelto que con la asistencia a la audiencia conciliatoria y la contestación de la demanda en sentido negativo, el acto quedó convalidado(refiriéndose a la ampliación de la demanda).

Es importante mencionar que el principio de congruencia está debidamente regulado en el art. 419 CT, por tal motivo no es aplicable supletoriamente el art. 218 CPCM.

Partiendo del razonamiento anterior, debe señalarse que el principio de congruencia tiene afectación cuando "[...] por exceso la sentencia concede más de lo que el actor solicitó (ultra petita); así mismo cuando concede una cosa distinta a lo pedido, es decir, se pronuncia sobre determinados extremos al margen de lo suplicado por las partes (extra petita) y también si se dejan incontestadas y sin resolver algunas de las pretensiones sostenidas por las partes (citrapetita)" (sentencia pronunciada en el incidente de casación clasificado bajo referencia 188-CAL-2022, de las diez horas veintitrés minutos del veinte de julio de dos mil veintidós). Configurado en el inciso 7° del art. 588 CT "cuando el fallo omitiere resolver puntos planteados".

Por consiguiente, en el presente recurso se evidencia no sólo falta de relación entre el submotivo y lo que se sostiene como infracción, sino también contradicción, ya que, los supuestos para la interpretación errónea consisten en que la Cámara aplique los preceptos legales mencionados al caso, pero dándoles un sentido que no tienen, y además deben ser pertinentes, pero siempre debe tratarse de normas que resuelven el asunto en discusión. En cambio en la infracción al principio de congruencia puede tratarse sobre aspectos procesales o de fondo, según los puntos controvertidos en el recurso de apelación. En síntesis, los argumentos se contraponen.

Así, de este modo, se advierte, que la recurrente incumple las formalidades establecidas en el art. 528 CPCM, ord. 2°, en el sentido de que únicamente expone en el concepto de la infracción que al avalar la decisión del tribunal de primera instancia, en cuanto a la modificación de la demanda se cometió la infracción, pero no realiza una identificación precisa en la resolución impugnada, sobre cómo se infringió el inc. 1° del art. 383 CT, es decir, no se ha sostenido de manera concreta un yerro en la aplicación de la disposición legal.

Consecuentemente, la falta de pertinencia y fundamentación en su configuración no permiten la admisión del submotivo, por tanto, se inadmite."

Sala de lo Civil, número de referencia: 151-CAL-2022, fecha de la resolución: 10/08/2022

DECLARATORIA DE INADMISIBILIDAD CUANDO NO REÚNE LOS REQUISITOS DE PERTINENCIA Y FUNDAMENTACIÓN

"Errónea interpretación y aplicación del art. 383 inc. 1° CT, y falta de congruencia interna de la sentencia por ampliar y modificar la demanda sin petición del demandante

En este apartado la apelante sostiene que la parte demandante en ningún escrito realizó la petición de ampliar y modificar la demanda, sin embargo, el juzgador de forma discrecional la benefició, dado que en el auto de las once horas cuarenta minutos del veinticinco de marzo de dos mil veintiuno, la amplió y modificó, a pesar que el demandante sólo subsanó prevenciones; por ello sostiene que se vulneró el principio de congruencia interna y externa de la sentencia.

De la inconformidad de la apelante se observa que de forma genérica trata lo relativo a la ampliación y modificación de la demanda, sin describir concretamente porqué motivo se produjo la infracción, pues únicamente se refiere a que el demandante fue prevenido, y posteriormente evacuó las prevenciones. Por esta razón, esta Sala no puede dilucidar sobre el posible error atribuido a la Cámara.

Del mismo modo, al referirse a la vulneración al principio de congruencia (interna y externa), particularmente sólo menciona que esto ocurrió en virtud que el juzgador amplió y modificó la demanda; por ello se debe aclarar que la infracción de requisitos internos de la sentencia se divide en las siguientes modalidades: a) por haber otorgado más de lo pedido por el actor (ultra petita); b) por haber otorgado menos de los resistido por el demandado (infra petita); c) por haber otorgado algo distinto a lo solicitado (extra petita); o, d) por haber dejado de resolver algún punto solicitado por las partes (citra petita). A diferencia, cuando se trata de requisitos externos de la sentencia se clasifica en: I) omitir la relación de los hechos probados; II) la falta de fundamentación jurídica; y, III) oscuridad en la redacción del fallo. Resolución de las ocho horas seis minutos del nueve de marzo de dos mil veintidós, clasificada bajo el número de referencia 38-CAC-2022.

Lo anterior de conformidad al art. 523 ord. 14° CPCM, que no es aplicable al ámbito laboral puesto que lo relativo a la falta de congruencia está regulado en el art. 419 CT.

En síntesis, para este tribunal el agravio no se fundamentó debidamente."

Sala de lo Civil, número de referencia: 151-CAL-2022, fecha de la resolución: 17/11/2022

Relaciones:

Sala de lo Civil, número de referencia: 172-CAL-2022, fecha de la resolución: 08/12/2022

REPRESENTACIÓN PATRONAL

LA INFRACCIÓN ALEGADA, EN RELACIÓN AL ART. 414 DEL CT, NO OPERA CUANDO EL AD QUEM JUSTIFICA LAS RAZONES POR LAS CUALES NO LA TUVO POR ACREDITADA

"1. Violación al art. 414 CT

Cabe señalar, que la violación de ley se configura cuando se omite aplicar la norma jurídica que debió ser aplicada al caso concreto. Es una infracción que no debe confundirse con cualquier preterición u omisión de normas jurídicas resultantes de una causa distinta de la equívoca elección realizada. Es decir, que la violación de ley constituye un vicio cometido sobre la norma objetivamente considerada, y no puede versar sobre la valoración que debió concederse a determinado medio probatorio, resolución pronunciada por esta Sala (referencia 142-CAL-2022, de las diez horas veinticuatro minutos del ocho de junio de dos mil veintidós).

[...]

En síntesis, la inconformidad radica en que la Cámara concluyó que por no haberse acreditado en el proceso, la representación patronal de la persona a quien se le atribuyó en la demanda realizó el despido, no aplicaría el precepto señalado como infringido. Sin embargo, a criterio de la licenciada [...], dicho extremo fue acreditado con la certificación de las diligencias seguidas en el Ministerio de Trabajo y Previsión Social (expediente 0429/19), en las que consta el poder General Administrativo y Judicial, otorgado a la señora [...].

[...]

Al analizar los argumentos de la Cámara sentenciadora se advierte, que justificó en su sentencia, las razones por las que no tuvo por acreditada la representación patronal de la persona a quien se le atribuyó en la demanda, haber realizado el despido de la demandante, señora [...], con el cargo de coordinadora de relaciones laborales de la sociedad demandada. A criterio del tribunal de alzada, la certificación de las diligencias de conciliación celebradas en el Ministerio de Trabajo y Previsión Social (la que contiene el poder Administrativo Judicial) que se incorporaron al proceso, no eran suficientes para determinar las facultades a que refiere el art. 3 CT, que permitieran concluir que se trataba de una representante patronal.

Analizado los argumentos de la recurrente y los fundamentos del tribunal de alzada, se hacen las siguientes consideraciones:

El submotivo alegado por la recurrente implica la inaplicación de la disposición que debió ser aplicada al caso concreto; es decir, la infracción debe recaer sobre los presupuestos objetivos contenidos en la disposición alegada como infringida (art.414 CT), En ese sentido, se advierte de los argumentos de la Cámara, que no aplicó la presunción de despido, precisamente, por insuficiencia de prueba respecto de la representación patronal atribuida a la señora [...], persona a quien se le atribuyó en la demanda realizó el supuesto despido. Es decir, que no cabía la aplicación del art, 414 CT, por las razones antes expuestas.

En consecuencia, la Cámara sentenciadora no cometió la violación de ley denunciada por la defensora pública laboral, licenciada [...]; por lo que resulta procedente declarar sin lugar la casación de la sentencia por este submotivo,"

Sala de lo Civil, número de referencia: 228-CAL-2022, fecha de la resolución: 20/10/2022

SUSTITUCIÓN PATRONAL

EL PATRONO SUSTITUTO RESPONDERÁ SOLIDARIAMENTE CON EL SUSTITUIDO POR LAS OBLIGACIONES LABORALES NACIDAS ANTES DE LA SUSTITUCIÓN; PERO, DICHA RESPONSABILIDAD SÓLO TENDRÁ LUGAR DURANTE EL TÉRMINO DE LA CORRESPONDIENTE PRESCRIPCIÓN

"Interpretación errónea del art. 6 CT

Cabe señalar, que esta Sala en el auto interlocutorio pronunciado a las nueve horas cuarenta y tres minutos del veintiséis de enero de dos mil veintidós,

en el incidente clasificado con referencia 14-CAL-2022, estableció que: *"(...) la interpretación errónea de ley, se configura cuando el juzgador, no obstante haber elegido adecuadamente la norma aplicable al caso de que se trata, le da un sentido, alcance o limitación que no tiene; de tal manera que éste sólo tiene lugar cuando el juzgador aplica la norma (...)"*

En ese sentido, la interpretación errónea constituye un submotivo de fondo, y como tal, implica la infracción directa de una disposición legal, por ende, no recae en valoración de prueba, sino que se configura cuando el juzgador le da al precepto legal que aplica en la sentencia un sentido más amplio, restringido o simplemente diferente a aquel que se colige de su texto.

Por tanto, el análisis de esta sentencia se limitará a determinar si efectivamente el tribunal de alzada amplió, restringió o tergiversó el sentido del precepto señalado como infringido (art. 6 C.T).

Así se advierte, que desarrollar el concepto de la infracción, el recurrente manifestó lo siguiente: [...]

Se advierte que el agravio del licenciado […], radica principalmente en que, a su juicio, el art, 6 CT, no hace alusión a los requisitos necesarios para que opere la figura de la sustitución patronal, sino más bien, se refiere a los efectos que produce la misma. No obstante, la Cámara interpretó erróneamente la referida disposición legal, al exigirle al trabajador demandante que probara que existió una relación laboral con la sociedad sustituida, con el fin de establecer que efectivamente sucedió la figura de la sustitución patronal.

El art. 6 del Código de Trabajo, en lo pertinente, prescribe: "La sustitución de patrono no es causa de terminación de los contratos de trabajo, ni afectará los derechos originados con motivo de la prestación de los servicios, salvo que aquéllos fueren mejores en la empresa del patrono sustituto, con la cual la que se adquiere se hubiere fusionado. El patrono sustituto responderá solidariamente con el sustituido, por las obligaciones laborales nacidas antes de la sustitución; pero dicha responsabilidad sólo tendrá lugar durante el término de la correspondiente prescripción. Son a cargo exclusivo del nuevo patrono las obligaciones laborales que nazcan después de la sustitución; sin embargo, mientras el sustituido no diere aviso de ésta al personal de la empresa por medio de la Inspección General del Trabajo, ambos patronos responderán solidariamente de las obligaciones dichas. En los casos de riesgos profesionales, jubilación y otros semejantes en que se hubieren contraído, voluntaria o forzosamente, obligaciones que deben pagarse en forma de pensión, el patrono sustituto será el único responsable y quedará obligado a su pago, a partir de la sustitución".

EL ADQUIRENTE ASUME LA CATEGORÍA DE PATRONO NUEVO, CON TODOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES PASADOS, PRESENTES Y FUTUROS DERIVADOS QUE SURJAN CON MOTIVO DE LAS RELACIONES DE TRABAJO

"Cabe señalar que la sustitución patronal es una de las manifestaciones del principio de continuidad del contrato de trabajo, que opera sobre la base de novaciones subjetivas, y en la que un nuevo patrono sustituye al anterior, como

parte del contrato de trabajo, sin solución de continuidad en las prestaciones, y sin pérdida de identidad contractual. Es la transmisión de la propiedad de una empresa o de uno de sus establecimientos, en virtud de la cual, el adquirente asume la categoría de patrono nuevo, con todos los derechos y obligaciones pasados, presentes y futuros derivados que surjan con motivo de las relaciones de trabajo (sentencia de la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, de las nueve horas treinta y cinco minutos del veinticuatro de octubre de dos mil catorce. Exp. 09-000794-0166-LA).

Respeto a la figura de la sustitución patronal, esta Sala en sentencia pronunciada a las diez horas veintiséis minutos del dieciocho de abril de dos mil dieciocho en el incidente clasificado con referencia 326-CAL-2017, estableció que no es exigible al trabajador prueba de la misma, "(...) Esto es, por la dificultad o hasta imposibilidad por parte del trabajador para presentar, para citar como ejemplo, la escritura de fusión de la empresa (...)".

EL TRABAJADOR NO ESTÁ EN LA OBLIGACIÓN DE PROBAR LA SUSTITUCIÓN PATRONAL, PERO SI DEBE ESTABLECER LA RELACIÓN LABORAL QUE EXISTIÓ TANTO CON EL PATRONO SUSTITUTO COMO CON EL SUSTITUIDO

"Dicho lo anterior, y para determinar si la Cámara cometió el vicio que se le atribuye, es necesario remitirnos a lo que manifestó en su sentencia: "(...) en cuanto a la inconformidad del recurrente de la sustitución patronal alegada en la demanda de mérito, debemos de exponer que la figura de la sustitución patronal, consiste en el cambio de titular de los establecimientos, negocios o empresas, es decir, cambio de empleador o patrono por otro, por diversas causas o medios, entre lo que sobresalen una compraventa de empresa, cesión, venta forzosa, fusión, absorción, etc., es así que en ningún momento sufre variaciones esenciales en las actividades del día a día que representan el giro ordinario de la organización; es un simple acuerdo, para algunos tratadistas, de carácter comercial entre el empleador sustituido y el empleador sustituto, y no tiene efecto alguno en los contratos de trabajo firmados con el antiguo empleador, por tanto estos seguirán teniendo plena vigencia y aplicación. En pocas palabras, esta institución jurídica busca el respeto a los derechos adquiridos y jamás crear condiciones de trabajo que vayan en detrimento de esos derechos (...)".

Asimismo, el tribunal sentenciador sostuvo lo siguiente: "(...) Cómo se puede observar de dicha figura, particularmente del inciso tercero antes mencionado, quien debe realizar actos externos y observables ante la Inspección General de Trabajo y el trabajador mismo sobre la sustitución patronal, es el patrono, lo que tiene pleno sentido y lógica, pues es la parte patronal la que se encuentra en mejor posición para demostrar dichos extremos, no siendo razonable que se invierta el sentido y fin de esta norma, y se considere que la prueba de la sustitución patronal es exigible al trabajador, o peor aún, deducir repercusiones

negativas o perjudiciales a la parte trabajadora a partir del incumplimiento de esta supuesta exigencia (...) en el presente caso el actor plantea en su demanda haber ingresado inicialmente para la sociedad […], SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, el día veinticuatro de marzo de dos mil ocho, luego a la sociedad demandada […] SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, el día veintidós de julio de dos mil diecinueve, habiéndose establecido el despido aludido, el cual no fue justificado como ya se dijo, es necesario establecer la fecha de ingreso que servirá de parámetro para una futura condena (...)" (lo subrayado es de la Cámara).

[...]

Al analizar la sentencia de la Cámara se colige que su fundamento radicó en el hecho de que, en el caso de autos, el trabajador demandante planteó en la demanda haber ingresado a laborar inicialmente para la sociedad […], Sociedad Anónima de Capital Variable, el veinticuatro de marzo de dos mil ocho, y luego para la sociedad demandada ([…], Sociedad Anónima de Capital Variable), el veintidós de julio de dos mil diecinueve; sin embargo, dicho tribunal consideró que la fecha de ingreso de labores para la primera sociedad ([…], Sociedad Anónima de Capital Variable), no se estableció en forma directa ni a través de la presunción del art, 413 CT, tal y como lo aduce el trabajador demandante en la demanda. En vista de ello, la Cámara consideró que la única prestación de servicios que se logró acreditar en el proceso fue con la sociedad […], Sociedad Anónima de Capital Variable. Por lo cual, tomó como fecha de ingreso, para efectos de la condena respectiva, el veintidós de julio de dos mil diecinueve.

En ese orden de ideas, resulta evidente que el tribunal de alzada no amplió ni restringió o tergiversó los efectos del art. 6 CT, es más se apegó al contenido literal del mismo, al establecer en su sentencia, en el considerando 6.1.1, que es obligación exclusiva del empleador sustituido *"(...) realizar actos externos y observables ante la Inspección General de Trabajo y al trabajador mismos sobre la sustitución patronal, es el patrono, lo que tiene pleno sentido y lógica, pues es la parte patronal la que se encuentra en mejor posición para demostrar dichos extremos, no siendo razonable que se invierta el sentido y fin de esta norma, y se considere que la prueba de la sustitución patronal es exigible al trabajador "*

En este sentido la Cámara no cometió el vicio alegado por el recurrente, por el hecho de no condenar a la sociedad […] S. A. de C. V., al pago total de la indemnización reclamada en la demanda por el actor, en vista de que no se estableció en el proceso, la relación laboral con la primera sociedad, tal y como se advirtió en párrafos precedentes.

Consecuentemente, resulta procedente declarar no ha lugar a casar la sentencia de mérito por la interpretación errónea del art, 6 CT."

Sala de lo Civil, número de referencia: 108-CAL-2022, fecha de la resolución: 19/05/2022

TESTIGO DE CARGO

PROCEDE LA VULNERACIÓN ALEGADA, CUANDO LAS APRECIACIONES Y RAZONAMIENTOS UTILIZADOS POR EL AD QUEM PARA DESESTIMAR LA DECLARACIÓN NO CONSTITUYEN UN FUNDAMENTO VÁLIDO Y CONFORME A LA SANA CRÍTICA

"Error de derecho en la apreciación de la prueba testimonial
Disposición citada como infringida, art. 461 CT
[...]

Como se advierte, a criterio del recurrente, la Cámara cometió error de de derecho al apreciar la declaración de la testigo, señora ACJF, ya que le restó eficacia probatoria porque se equivocó al citar el año en que ocurrieron los hechos sobre los que depuso.

Este tribunal a través de la jurisprudencia ha establecido que "La valoración de la prueba testimonial conlleva, siempre, la investigación relativa a la veracidad del testimonio y la credibilidad objetiva, tanto de la fuente de percepción que el testigo afirma haber recibido, como en relación al contenido y a la forma de declaración; en otras palabras, en cuanto esté demostrada la razón suficiente por la que emite su testimonio, esto es, que justifiquen la verosimilitud de su presencia en donde ocurrieron los hechos, de la idoneidad de su conocimiento del hecho adquirido, entre otros, de los factores que deben influir en la decisión del juzgador", (sentencia de las diez horas cuarenta minutos del once de abril de dos mil dieciocho. Ref. 277-CAL-2017).

Para determinar si la Cámara Primera de lo Laboral, con sede en San Salvador, incurrió en el vicio alegado por el recurrente, resulta oportuno considerar el criterio sostenido en la sentencia impugnada: "[...] En el caso de autos de conformidad al acta de audiencia conciliatoria agregada a fs. […] de la pieza principal, el reinstalo se llevaría a cabo el día once de noviembre de dos mil diecinueve, a las nueve horas en el lugar del emplazamiento, y en aras de acreditar /a parte actora que el trabajador demandante se presentó de forma oportuna –lugar, día y hora- para reanudar las labores, solicitó: 1) señalamiento de audiencia para presentar la declaración de la testigo señora ACJF, que fue registrada mediante acta y formato digital de audio y video (DVD), de fs. […] de la pieza principal (...) señalamiento de audiencia para que el señor MAMC, en su calidad de representante legal de la sociedad demandada, rindiera declaración de parte contraria, la cual fue incorporada al expediente judicial mediante acta y formato digital de audio y video (DVD), de fs. […] de la pieza principal (...) Del análisis minucioso realizado a los referidos medios de prueba citados en el párrafo que antecede, se advierte, que la testigo señora ACJF, manifestó que el trabajador no pudo reanudar sus labores porque no lo recibieron diciéndole que no había autorización para que él entrara a la empresa, lo cual le consta porque ella lo acompañó –al trabajador- *el día once de noviembre de mil novecientos diecinueve*; en ese sentido, con su dicho no se puede tener por acreditado que el actor se haya presentado de forma oportuna a reanudar las labores, pues expresó un año totalmente diferente

al señalado para verificarse el reinstalo -dos mil diecinueve- y no se le hicieron preguntas tendientes a establecer en qué lugar se presentó y la hora en que se presentó el trabajador [...]" (sic)(el resaltado es de esta Sala).

En cuanto a la postura sostenida por la Cámara en su sentencia, en específico lo relativo a la declaración de la testigo de cargo, señora ACJF, a juicio de esta Sala, dicha apreciación fue demasiado rigurosa al no considerar factores que pueden incidir en su dicho, tales como el estado de nerviosismo en el que posiblemente se encontraba por la falta de costumbre de presentarse como testigo ante un juez (y todos los demás elementos subjetivos que tal experiencia involucra), ya que el hecho de que, en el caso de autos, no haya mencionado de manera correcta el año en que acompañó al trabajador demandante para que fuera reinstalado, no implicaba necesariamente que no lo hubiera hecho o que no hubiera presenciado lo acontecido.

Y es que, conforme a reglas del sistema de valoración de la sana crítica, no se puede obviar el hecho de que el testigo se puede encontrar nervioso al momento de declarar, lo que puede influir de manera negativa, y dar como resultado un error, una contradicción o una confusión en su declaración.

Asimismo, se advierte que, la Cámara no realizó el más mínimo esfuerzo por tratar de integrar y comprender los elementos que conforman la declaración de la testigo de cargo, contrario a ello se evidencia un análisis sumamente estricto, al haberse considerado en su razonamiento, como fecha válida y cierta el año de "mil *novecientos diecinueve*", como el año en el que la testigo acompañó al trabajador demandante para que se llevara a cabo su reinstalo. Apreciación contraria a la razón, ya que evidentemente los hechos expuestos no pudieron acontecer en ese año.

De igual forma, con respecto al hecho de que no se comprobó con el dicho de la testigo, el lugar y la hora en que ocurrieron los hechos relacionados en el reinstalo acordado, cabe señalar, que al analizar la prueba de forma integral, es decir, en su conjunto, se advierte que los hechos sobre los que no depuso la testigo de cargo en su declaración, se tienen por comprobados con la declaración de parte contraria del representante legal de la sociedad demandada, por lo que resultaría arbitrario, que los hechos aceptados por él, no se tuvieran por ciertos o válidos dentro del proceso, sólo por el hecho de que la deposición de la testigo fue omisa en esos aspectos.

Con base en lo expuesto, a juicio de esta Sala, las apreciaciones y razonamientos con los que la Cámara Primera de lo Laboral, con sede en San Salvador, desestimó la declaración de la testigo de cargo, señora ACJF, no constituyen un fundamento válido y conforme a la sana crítica, ya que como sistema de valoración de la prueba testimonial, las razones expuestas por el tribunal de segunda instancia, no están fundadas en un proceso lógico y razonable para desestimar su dicho.

Con base en las razones expuestas, se concluye que la Cámara cometió el vicio que se le atribuye respecto a la valoración del testimonio de la señora ACJF, por lo que resulta procedente declarar ha lugar a casar la sentencia de mérito.

III. JUSTIFICACIÓN DE LA SENTENCIA

Conforme a lo antes expresado, esta Sala pronunciará la sentencia que conforme a derecho corresponda, relacionada directamente con la infracción planteada por el recurrente en el recurso de apelación.

[...]

La inconformidad expresada por el recurrente radica en que, el juez de primera instancia tuvo por comprobados los elementos probatorios que omitió aportar la testigo en su declaración, con la declaración de parte contraria del representante legal de la sociedad demandada; sin embargo, no se estableció (por ningún medio de prueba), que el trabajador se presentara oportunamente al lugar de trabajo y que no pudiera reanudar sus servicios por causa imputable al patrono o a sus representantes.

Cabe señalar, que el argumento del licenciado […], en relación a que con la declaración de la testigo de cargo, señora ACJF, no se comprobó la hora en que el trabajador, señor ODZC, llegó a las instalaciones de la demandada para que surtiera efectos el reinstalo acordado, se advierte que, en el acta de las diez horas con quince minutos del día cuatro de noviembre de dos mil diecinueve (que corre agregada a folios […] de la pieza principal), con relación al reinstalo ofrecido por el apoderado de la demandada, consta lo siguiente: "el *Licenciado* […] MANIFIESTA: Que no son ciertos todos y cada uno de los conceptos vertidos por el trabajador en su demanda, pero con ánimo de solucionar el presente conflicto le ofrece en esta audiencia al trabajador demandante el reinstalo a sus labores, en las mismas condiciones en las que las había venido desempeñando y conservando su antigüedad, para lo cual deberá presentarse el día once de noviembre del presente año, a las nueve horas al lugar del emplazamiento y será recibido por el encargado de recursos humanos señor ÁR, para que el demandante sea destacado al lugar donde desarrollaba sus labores que es el Club [...], San Salvador[...]" (sic).

Posteriormente, el defensor público laboral, licenciado […], presentó escrito al Juzgado Primero de lo Laboral, el día veinte de noviembre de dos mil diecinueve, por medio del cual hizo del conocimiento de esa instancia judicial, que el reinstalo acordado por medio de la audiencia conciliatoria de las diez horas y quince minutos del día cuatro de noviembre de dos mil diecinueve, no se llevó a cabo porque al presentarse a reanudar sus labores el trabajador (en la fecha, hora y lugar señalado), no le fue permitido el ingreso a las instalaciones del centro de trabajo y no se le proporcionó motivo, ni razón por la cual no se le permitió el ingreso; y la persona que lo atendió (que era la guardia de turno), le manifestó que no tenía instrucciones para dejarlo ingresar a las instalaciones de la demandada.

En vista de lo expuesto por el licenciado […], se mandó a oír a la demandada para que se pronunciara al respecto, tal como consta en el auto de las diez horas del día veintiuno de noviembre de dos mil diecinueve (que corre agregado a folios […] de la pieza principal), quien no se pronunció sobre el requerimiento realizado (como consta a folios […] de la pieza principal).

Para el caso en estudio, es necesario citar que, el sistema de valoración de la sana crítica "consiste en una valoración conjunta de la prueba, conforme a las reglas de la lógica, la psicología y la experiencia, mediante las que el juzgador otorga a cada medio probatorio un determinado valor, así como al conjunto de ellos. Esta labor judicial importa porque deberán darse las razones que inducen a otorgar un determinado valor probatorio. De omitirse plasmar las razones por las que se tomó determinada decisión, la sentencia podrá considerarse como arbitraria, al no poseer la fundamentación mínima necesaria para ilustrar a las partes qué motivó el fallo en tal sentido, porque no se tuvieron por comprobados tales hechos o por qué determinada prueba fue desestimada, o considerada como impertinente o inútil, entre otros casos", (sentencia de las once horas diecisiete minutos del veinte de diciembre de dos mil diecinueve, con referencia 253-CAL-2019).

En el caso de autos, la prueba que es objeto de controversia, es el testimonio de la testigo de cargo, señora ACJF y la declaración de parte contraria (del representante legal de la demandada). La testigo, señora JF, en lo referente al hecho del reinstalo, expuso que el trabajador demandante le pidió que le sirviera de testigo, porque iba a empezar de nuevo en la empresa a trabajar. Que el día en que el trabajador le dijo que lo acompañara, "*el once de noviembre de mil novecientos diecinueve",* lo acompañó y no lo recibieron, y le dijeron que no lo podían recibir porque no había autorización para que él entrara a la empresa y no se reincorporó.

El representante legal de la sociedad demandada en su declaración manifestó que el demandante *"llegó tarde el día señalado para su reinstalo",* pero que la persona que lo iba atender tenía otros compromisos, y ya no lo pudo recibir. Declaración con la que se corrobora lo sostenido por la testigo de cargo, en lo relativo a que el trabajador demandante se presentó a la empresa con la intención de reanudar sus labores, pero que no se le permitió el ingreso a las instalaciones de la demandada, y consecuentemente la persona que se designó para realizar el reinstalo no lo atendió (el resaltado es de la Sala).

Por otra parte, no existe prueba en el proceso por medio de la cual se corrobore lo manifestado por el representante legal de la demandada, en cuanto al hecho de que el demandante llegó tarde, esto debido a que la demandada no presentó prueba ni opuso ni alegó excepciones.

Es así, que con lo depuesto por la testigo de cargo, señora ACJF, quien acompañó al trabajador demandante y presenció, que a éste no se le permitió el ingreso a las instalaciones de la sociedad demandada en la fecha en que se había acordado el reinstalo (ver postura de la Sala en el considerado II de los fundamentos de derecho esta sentencia), goza de credibilidad al haber expresado los motivos por los cuales le constaban los hechos sobre los que declaraba. Y y al considerar su dicho con lo depuesto por el representante legal de la demandada, se tienen los elementos de prueba suficientes para determinar que el reinstalo no se llevó a cabo por el incumplimiento de la parte demandada.

En tal sentido, y a juicio de esta Sala, el que no se llevara a cabo el reinstalo del trabajador, señor ODZC, (independientemente si éste llegó unos minutos tarde o porque no se le permitió el ingresó a las instalaciones de la demandada), le es atribuido a la empleadora, ya que las posibles causas de inflexibilidad en la hora en que debía de efectuarse, y el impedimento de ingreso del trabajador a sus instalaciones, no dependían de él, por el contrario, se logró comprobar que el trabajador, señor ODZC, se presentó al lugar en que se realizaría el reinstalo, a la hora y el día acordado, pero al no haber sido atendido la medida no fue cumplida.

Previo a pronunciar sentencia, y en virtud de que la relación, el contrato de trabajo y sus condiciones no fueron aspectos controvertidos, ni se opusieron ni alegaron excepciones, esta Sala aplicará a favor del trabajador la presunción de despido establecida en el inc. 3° del art. 414 CT, por haberse presentado el trabajador oportunamente al lugar, día y hora señalados por el apoderado de la demandada en audiencia conciliatoria y no pudo reanudar sus servicios por causa atribuible al patrono o a sus representantes.

Por lo que se condenará a la demandada al pago de la indemnización por despido injusto y las demás prestaciones laborales reclamadas.

Con respecto al reclamo de pago de los salarios adeudados por días laborados y no remunerados (del período comprendido del quince al veintiuno de septiembre de dos mil diecinueve), a juicio de esta Sala no se comprobó que el trabajador ODZC, haya trabajado de manera efectiva durante ese período, razón por la cual se absolverá a la demandada del pago de ese reclamo."

Sala de lo Civil número de referencia: 185-CAL-2021, fecha de la resolución: 10/03/2022

TESTIGO DE DESCARGO

INEXISTENCIA DEL VICIO ALEGADO, CUANDO SE DESESTIMA SU DECLARACIÓN POR OSTENTAR LA CALIDAD DE REPRESENTANTE PATRONAL, YA QUE PODRÍA TENER INTERÉS EN LAS RESULTAS DEL PROCESO

"Error de derecho en la apreciación de la prueba testimonial

Precepto infringido art. 461 CT

En cuanto al vicio de error de derecho en la apreciación de la prueba testimonial que se le atribuye a la Cámara, el recurrente en el escrito de interposición del recurso de casación expresó lo siguiente: [...] en esta declaración hubo de parte de la Cámara una violación a las reglas de la sana crítica, al generar una valoración arbitraria sobre la declaración del testigo, ya que las mismas reglas, establecen que, el juez debe considerar bajo elemento de lógica, pertinencia, idoneidad, la prueba que tiene o ha sido recabada por el Tribunal, en ese sentido, el solo hecho de considerar que el cargo del testigo lo hace merecedor de rechazo, se vuelve una arbitrariedad en la valoración, pues, las circunstancias.

por medio de las cuales declara un testigo, son las que deben valorarse, sobre todo en un sistema como éste, en tal sentido, como se expuso en la declaración, la persona que estaba presente junto con el supuesto ejecutor del despido, era el declarante, quien expuso de manera clara, las razones por las cuales, se encontraban juntos, situación que fue completamente obviada por la Cámara, y que era importante para verificar si dicha prueba y sobretodo, dicha persona, era idónea para emitir tales declaraciones. En ese sentido, resulta que, la sola calidad de una persona, no debe ser causal para desestimar su declaración y mucho menos para intuir que su declaración es parcializada, sobre todo, cuando no existe evidencia objetiva de tales circunstancias. Por esas razones, considero que, la Cámara, cometió un error en la valoración de la prueba, pues solamente desacredito la prueba aportada, por mi testigo, por una creencia personal de los mismos, sin un fundamento objetivo que conllevara a tales deducciones, y sobre todo, que ni siquiera en su razonamiento, dejó evidencia de cuáles eran los motivos por los que asume que las declaraciones del testigo de descargo, son parcializadas, con lo cual denota, que dejó de lado las reglas fundamentales del sistema de valoración, y de manera arbitraria procede a rechazar la validez de su declaración [...]" (sic).

Se advierte que la inconformidad del recurrente radica en que, a su juicio, la Cámara, al valorar la declaración del testigo de descargo, cometió violación a las reglas de la sana crítica, dado que, de forma arbitraria (a juicio del recurrente), desacreditó al testigo por considerar que su declaración era parcial, por desempeñarse como supervisor en la sociedad demandada; no obstante ello, expresa el licenciado [...], que el testigo de manera clara expuso en su declaración, las razones por las cuales estaba junto al supuesto ejecutor del despido. Y en ese sentido, la calidad de una persona, no es suficiente motivo para no apreciar su declaración, y mucho menos, para determinar que la misma está parcializada, sobre todo, cuando no existe evidencia objetiva de tales circunstancias.

Para determinar la existencia de la valoración arbitraria alegada por el recurrente, es imperioso analizar lo sostenido por la Cámara en su sentencia, la que en lo pertinente sostuvo: [...] 10. Del desfile probatorio del testigo de descargo, se advierte que en el minuto 5:40 del formato digital DVD que consta a fs. […], el señor SEF, a preguntas del apoderado de la sociedad demandada, manifestó que efectivamente este señor (WM) se encontraba en un lugar distinto al que se alega en la demanda de mérito que sucedió el despido, pues -en su declaración manifestó- le consta que dicho señor el día veinticinco de noviembre de dos mil diecinueve a las quince horas, se encontraba en el edificio tp4, que está ubicado en la Avenida olímpica setenta y cinco avenida sur, porque él (testigo) estaba presente. Sin embargo, lo expuesto por este en su declaración, no merece fe a los suscritos, pues consta -también de su declaración- que ostenta el cargo de supervisor dentro de la sociedad demandada, lo cual le convierte en una persona que tiene interés en las resultas del proceso, y potencialmente conforme lo establece el Artículo 356 del Código Procesal Civil y Mercantil dicha circunstancia podría ser motivo de parcialidad en su testimonio, por lo cual no se le dará validez a su declaración, debiendo en consecuencia desestimar lo expuesto por el apoderado de la patronal en esta instancia [...]" (sic).

De lo expuesto por la Cámara se advierte que le negó valor probatorio al testigo por el solo hecho de ostentar la calidad de representante patronal, dado que el testigo, señor SEF, tenía el cargo de supervisor dentro de la sociedad demandada.

En cuanto al error de derecho en la apreciación de la prueba testimonial, esta Sala ha sostenido a través de su jurisprudencia, v.g., sentencia de las once horas tres minutos del trece de octubre de dos mil veinte con referencia 55-CAL-2020, entre otras, que se comete, cuando se valora la prueba con un sistema distinto al de la sana crítica, o cuando la valoración de la prueba "supuestamente" al amparo de dicho sistema de apreciación, en realidad se ha realizado en forma irracional, abusiva o arbitraria; y que la valoración de una prueba es irracional o absurda, cuando el juzgador analiza el medio probatorio mediante un argumento que adolece de sentido, o que es contrario a la razón; es abusiva, cuando la apreciación es excesiva o indebida; y arbitraria, al actuar siguiendo su voluntad o capricho, sin ajustarse a las leyes o a la razón.

En virtud de lo anterior, resulta importante tener presente, que los jueces o magistrados, al dictar sus fallos, deben motivarlos adecuadamente, exteriorizando las razones de hecho y de derecho de por qué llegan a determinada conclusión. Partiendo de un examen de los hechos expuestos por las partes, y de un análisis individual y luego integral, de la prueba aportada al proceso. Para ello, deben ajustarse en todo momento a las reglas de la lógica, a las máximas de la experiencia y a la psicología (reglas de la sana crítica), que son normas comunes a todo ser humano, no exclusivas de los jueces y magistrados. Ello, con la finalidad de evidenciar la racionalidad, coherencia e imparcialidad empleadas en la decisión. En consecuencia, debe imperar el razonamiento o justificación del por qué la prueba sometida al análisis del juzgador merece fe o credibilidad.

El argumento principal de la Cámara, para desestimar al testigo de descargo, fue la circunstancia de que este desempeña el cargo de supervisor *"dentro de la sociedad demandada",* es decir, que tiene la calidad de representante patronal, y por tal razón, podría tener interés en las resultas del proceso.

En ese sentido, si bien, nada impide que la declaración de un testigo que tenga la calidad de representante patronal deba ser apreciada conforme a las reglas del sistema de valoración de la sana crítica, el juzgador con base a la psicología, la lógica y la experiencia, decidirá el grado de credibilidad que le genera la misma; y en tal sentido, resulta jurídicamente válido que se desestime su dicho.

Bajo ese contexto, esta Sala es del criterio de que si una persona que ostenta un cargo, que implícitamente involucra funciones de dirección y/o administración, es presentado como testigo, su grado de credibilidad para el juzgador, podría variar de la del testigo que no tiene esa calidad, dado que el primero se puede ver indirectamente presionado por el empleador para que su dicho no sea imparcial, esto como consecuencia de la innegable protección de los intereses que conlleva la relación de trabajo que los vincula (representante patronal-empleador).

De tal manera que, el razonamiento y la conclusión de la Cámara, que le condujo a desestimar la declaración del testigo de descargo, señor SEF, es justificada.

Consecuentemente, y al no haber acontecido el error de derecho en la apreciación de la prueba testimonial, la sentencia recurrida no será casada."

Sala de lo Civil, número de referencia: 217-CAL-2021, fecha de la resolución: 17/03/2022

Relaciones:

Sala de lo Civil, número de referencia: 260-CAL-2021, fecha de la resolución: 31/03/2022

VOTO CONCURRENTE DE LA MAGISTRADA DAFNE YANIRA SÁNCHEZ DE MUÑOZ

PRUEBA ELECTRÓNICA

ALCANCE DE LOS MEDIOS TECNOLÓGICOS EN LA ACTIVIDAD PROBATORIA

"Dafne Yanira Sánchez de Muñoz, magistrada de la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia, en el incidente de casación 22-CAL-2022, emito voto concurrente, por estar de acuerdo con la decisión que antecede, no así con algunos de sus fundamentos, según lo especificaré más adelante. Sustento mi voto en las razones que expongo a continuación.

En la sentencia que antecede, entre otras cosas, se ha declarado lo siguiente: "a) Declárase no ha lugar a casar la sentencia recurrida por la causa genérica de infracción de ley, y por el submotivo de error de derecho en la apreciación de la prueba documental, con respecto al art. 402 CT (...)". Y entre los argumentos que fundamentan dicha decisión se encuentran los siguientes:

"De los anteriores razonamientos de la Cámara se advierte, que no otorgó valor probatorio a las capturas de pantalla de la aplicación telefónica de Whatsapp (aportadas como prueba documental de descargo), con las que se intentaba establecer que el trabajador demandante se apropió indebidamente de cierta cantidad de dinero (...) Con base en lo expuesto, cabe señalar que, para esta Sala, la parte demandada no ha logrado evidenciar de forma inequívoca, cómo obtuvo (del dispositivo móvil) las impresiones simples de captura de pantalla de la conversación telefónica de la red social WhatsApp (...) De igual forma no se ha establecido fehacientemente que dicha conversación corresponde al supuesto cliente (...) Asimismo, a juicio de este tribunal, el documento en análisis no proporciona seguridad en cuanto a la integridad o invariabilidad de su contenido (...) De igual forma cabe señalar, *que es menester que ante la oferta de un documento como el controvertido, se acompañe del medio de almacenamiento que lo contiene, para que sea analizado y considerado, de conformidad con lo establecido en el art. 397 CPCM"* -resaltado propio-.

No comparto algunas de las anteriores consideraciones, porque, a mi juicio, tal forma de abordar el aspecto relativo al uso de la prueba digital o electrónica, restringe el derecho a probar en el juicio, al mismo tiempo que impone una regla de derecho que desconoce el principio de libertad probatoria.

Para explicar mi voto, haré referencia a los siguientes aspectos temáticos: a) sociedad, tecnología y derechos fundamentales; b) teoría de la prueba, con énfasis en los medios y fuentes de prueba, así como lo relativo a la proposición y valoración de la prueba digital o electrónica. Agotado lo anterior, expondré mi postura sobre la resolución del presente caso.

a) Sociedad, tecnología y derechos fundamentales

Los sistemas de justicia modernos en general y la lógica de los procesos judiciales en particular, responden a las reglas y principios que rigen la vida en sociedad. La estructura y funcionamiento de los procesos está determinada por el desarrollo económico, social, político, jurídico y cultural de los pueblos, así como por el desarrollo tecnológico e ideológico de los mismos. Los procesos y sus diversas fases se configuran en un contexto histórico. No es extraño, por ejemplo, que hasta hace un par de décadas algunos plazos procesales y el computo de los mismos se definieran por la distancia que había que recorrer para notificar el contenido de una resolución (el "término de la distancia" -véase, por ejemplo, los artículos 209 y 211 del derogado Código de Procedimientos Civiles); que las actuaciones procesales fueran estrictamente actuaciones escritas ("el proceso escrito" y todas sus implicaciones rituales); y que la prueba de determinados hechos objetivos solo pudiera realizarse de forma indirecta, aproximada o tentativa (la prueba de paternidad, por ejemplo).

En cambio, en la actualidad, es innegable la posibilidad de notificar una resolución por medios técnicos (telefax o correo electrónico -Sistema de Notificación Electrónica-); de recibir, documentar y resguardar las actuaciones procesales por medios de almacenamiento electrónico (como las audiencias del procesal oral, cuya celebración, incluso, hoy puede hacerse de forma virtual en modalidad sincrónica -artículo 203-A CPCM-; o la recepción de demandas por medio de correo electrónico, según lo ha hecho la Sala de lo Constitucional de esta Corte[1]); y de proponer y reproducir la prueba científica (reconocida desde 1994, en el artículo 51 de la Ley Procesal de Familia; así como en el derecho procesal común -artículo 375 CPCM-). Esto, sin duda alguna, ha sido el resultado del establecimiento de una *realidad tecnológica emergente* que incide en la estructura y funcionamiento de los procesos judiciales.

Los cambios del mundo extraprocesal repercuten significativamente en el mundo procesal, no solo porque los procesos judiciales son *instrumentos* del Estado (y, en tanto que instrumentos, modificables en atención al fin que persiguen -que no es otro que el de resolver pretensiones jurídicamente relevantes-), sino también porque la *función valorativa* de los procesos, es decir, la realización de la justicia, les exige asumir reglas, estrategias y formas adecuadas para corroborar lo que en el ámbito de la realidad material acontece. Pierde razón de ser el proceso, en la medida en que la justicia que declara, no logra dar cuenta de la realidad material en la que se realiza. Así, la íntima relación entre justicia y tecnología es indiscutible.

También es incuestionable el nexo entre tecnología y sociedad. La sociedad contemporánea es conocida como la sociedad de la información. Este calificativo responde a una de sus principales cualidades: la facilidad para crear, distribuir y manipular la información, a través del uso de la tecnología. En este sentido, la tecnología describe "el uso del conocimiento científico para especificar modos de hacer cosas de una manera reproducible"[2]. La sociedad contemporánea vive una revolución tecnológica, cuyas raíces se hunden no solo en el campo de la información, sino también en el de las telecomunicaciones. Por ello, no es extraño que se hable con mucha frecuencia sobre las TIC's (Tecnología de la Información y las Comunicaciones) y que su uso cada día sea más intenso, expansivo y progresivo (compras por Internet, videollamadas, mensajería instantánea, comunidades virtuales, etc.). Y es que la revolución industrial, que inicia con el empleo de la fuerza del vapor y que continúa con la producción y control de la electricidad, en la actualidad, se traduce en una revolución tecnológica, la cual da un "nuevo" paso a través del amplio control de la información y las telecomunicaciones[3]. Por eso se habla de las nuevas tecnologías, es decir, la aplicación del conocimiento científico para especificar modos de hacer cosas en lo que corresponde a la información y a las telecomunicaciones.

La sociedad contemporánea, entonces, testifica acerca de una *realidad tecnológica emergente* en los ámbitos de la información y las telecomunicaciones, cuyo objeto central incide en la estructura y funcionamiento de los procesos judiciales. Y es que, así como existe una dimensión social de la revolución tecnológica, también existe una dimensión jurídica-procesal de la misma. Tal dimensión no solo abarca la realidad intraprocesal, como la recepción virtual de las demandas, la notificación electrónica de las resoluciones o la celebración de audiencias virtuales; sino también la introducción de elementos extraprocesales *cuya génesis anida en el uso de esas nuevas tecnologías* y cuyo objeto está relacionado de modo esencial con la actividad jurisdiccional. Así, la introducción al proceso de información contenida en capturas de pantalla (pantallazo[4] o screenshot), de elementos audiovisuales descargados de redes sociales (Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, etc.), de registros de mensajería instantánea (WhatsApp, Telegrama, Signal, etc.), de datos contenidos en correos electrónicos (Gmail, Outlook, Yahoo!, etc.), en sitios web (YouTube, Wikis, etc.) en otras aplicaciones, es una actividad procesal relevante que exige el entendimiento, uso y reproducción de las nuevas tecnologías. En pocas palabras, la dimensión jurídico-procesal de la revolución tecnológica contempla lo relativo a la actividad probatoria en todas sus dimensiones (proposición, admisión, reproducción y valoración de la prueba).

Ahora bien, esta revolución también hace eco en otros aspectos jurídicos, como lo relativo al reconocimiento, promoción y protección de los derechos fundamentales. En efecto, en la sociedad contemporánea, el individuo se sitúa dentro de una realidad tecnológica que le confiere determinados cursos de acción en relación a su condición de persona (titular de prerrogativas y obligaciones). Algunos de esos cursos de acción solo son viables en la medida en que a la persona se le reconocen y garantizan sus derechos fundamentales.

El derecho fundamental a la libertad de expresión, cuyo anclaje constitucional se encuentra en el artículo 6, "es el derecho de toda persona a buscar, *recibir y difundir*, sin interferencia indebida del Estado o los particulares, i*deas, pensamientos, opiniones, juicio de valor e informaciones de toda índole*, a través de la palabra, de la escritura, en forma impresa o artística, *o por cualquier otro medio, sin consideración de fronteras, derecho que no puede estar sujeto a censura sino a responsabilidades ulteriores"* (resaltado propio). Esta definición ha sido adoptada por la Sala de lo Constitucional, a través de la resolución pronunciada el diecinueve de mayo de dos mil catorce, en el proceso de amparo clasificado bajo la referencia 43-2012. Reconociendo el contenido de dicha definición, puede afirmarse que, en virtud de este derecho, toda persona puede recibir y difundir información, también a través de las herramientas y aplicaciones que ofrecen las nuevas tecnologías de la información y de las telecomunicaciones. No existe razón alguna para vedar su ejercicio en este ámbito de la realidad. En tal sentido, la información generada sobre la base de estas tecnologías, constituye materia relevante que potencialmente puede ser objeto de interés en un proceso judicial. Por ello, debe reconocerse la posibilidad de que tal información pueda introducirse al juicio, por medio de la actividad probatoria, sin necesidad de superar obstáculos irracionales, desproporcionales o ilegales.

El derecho a la prueba es un derecho fundamental. En efecto, se erige como un derecho de naturaleza procesal elevado a rango constitucional, como manifestación del derecho al debido proceso, el cual, a su vez, es una manifestación del derecho a la protección jurisdiccional, cuyo fundamento normativo descansa en el artículo 2 Cn. La Sala de lo Constitucional, mediante sentencia pronunciada el diecinueve de septiembre de dos mil dieciséis, en el proceso de amparo 604-2015; ha reconocido tal naturaleza. El derecho a la prueba, en tanto que derecho fundamental, incide en la configuración de las reglas y principios que rigen el proceso, de modo que las partes litigantes gozan de la suficiente libertad para proponer y reproducir la prueba que estimen conveniente a su estrategia procesal, en la medida en que esta cumpla con los criterios de proposición, admisión, reproducción y valoración. El derecho a la prueba, entonces, garantiza que se puedan introducir al juicio aquellas fuentes de información *cuya génesis anida en el uso de esas nuevas tecnologías* y cuyo objeto está relacionado de modo esencial con el debate procesal. En ese orden de ideas, estimo que el derecho a la prueba permite que las autoridades judiciales adopten, dentro del marco de la legalidad, las medidas necesarias para que las partes litigantes puedan informarles sobre el contenido y alcance de los hechos controvertidos, con el fin de persuadir a *la verdad* del acaecimiento de los mismos.

La forma de introducir al proceso ese tipo de información es el tema central de este voto. Y para hacer referencia a tal actividad, es necesario tomar en cuenta lo que se ha denominado la *prueba digital o electrónica.* El estudio de este tipo de prueba toma en cuenta dos aspectos: primero, que el entendimiento de la prueba digital o electrónica exige tomar como marco de referencia la realidad que produce y reproduce la t*ecnología de la información y de las telecomunicaciones*;

y, segundo, que su entendimiento exige el respeto y garantía de los derechos fundamentales, con especial referencia a la libertad de expresión y el derecho a la prueba. Y sobre esto, ya me he ocupado *supra.*

b) Teoría de la prueba, con énfasis en los medios y fuentes de prueba.

Tomando en cuenta los aportes de la doctrina, la prueba es la actividad procesal que define el contenido y el alcance de una realidad[5]. En otras palabras, la prueba es la delimitación y reproducción de un segmento de la realidad extraprocesal en cuanto a su contenido y alcance. El objeto de la prueba, por excelencia, son las afirmaciones de las partes, planteadas en sus alegaciones iniciales o en las alegaciones complementarias (sobre hechos nuevos o de nuevo conocimiento). Así lo establecen los artículos 307, 313 ordinal 1º y 312 CPCM. Cuando un testigo declara sobre un hecho controvertido lo que hace es segmentar el contenido y el alcance de un evento acaecido, definiendo y reproduciendo verbalmente lo que se produjo en la realidad debatida. Similar situación ocurre con el resto de medios probatorios. En otras palabras, la prueba es el puente entre la realidad material y la realidad construida o revelada en el proceso.

La introducción de los hechos o la información al proceso sigue determinadas reglas legales. La teoría de la prueba circunscribe o reduce esta actividad a cuatro etapas. La proposición, la admisión, la reproducción y la valoración de la prueba. En este voto centraré mi atención en la primera, no obstante que ligeramente me referiré a algunas cuestiones asociadas a la última etapa."

PROPOSICIÓN DE LA PRUEBA

"La proposición de la prueba

Como regla general, la proposición incluye la oferta y la aportación de la prueba. La oferta implica enunciar e identificar las fuentes de prueba que se introducirán al proceso, a través de los correspondientes medios de prueba. Por ejemplo, se puede ofertar la declaración testimonial, determinando la identidad del testigo y enunciando la finalidad de su proposición. Esto implica, además, la singularización del medio de prueba (artículo 310 CPCM).

A grandes rasgos, la aportación conlleva la presentación material de la *fuente de prueba,* dependiendo de la naturaleza de las mismas. Tratándose del *medio probatorio* de la prueba documental, la fuente de prueba (cartas, recibos, actas notariales, escrituras públicas o privadas, etc.), se presentan junto a la demanda y demás alegaciones iniciales (contestación de la demanda, reconvención y contestación de la reconvención). Similar situación ocurre con la prueba pericial de parte (artículos 276 ordinal 7º *in fine*, 288 inciso 3º y 377 CPCM). En el caso de la declaración de testigos o la declaración de parte, por su naturaleza, su aportación no se realiza de forma material junto a las alegaciones iniciales. En tales supuestos, basta con identificar a los declarantes. Similar situación ocurre con el reconocimiento judicial. Como excepción a la regla mencionada, es posible ofertar la prueba sin aportarla. Esto tiene lugar, por ejemplo, cuando la

parte que la propone, no está en las condiciones de poder disponer de la correspondiente fuente de prueba (generalmente de tipo documental). Lo anterior tiene fundamento en las reglas del derecho procesal común (artículos 276, 288 y 289 CPCM).

Como se observa, en la proposición de la prueba intervienen dos figuras propias de la actividad probatoria: la *fuente de prueba y el medio de prueba*[6]. La regla procesal establece que, solo en la conjunción de ambas instituciones es posible la formación de la prueba en el proceso."

AL PROPONER LA PRUEBA DIGITAL O ELECTRÓNICA HAY QUE TOMAR EN CUENTA LA FUENTE DE LA PRUEBA, EL MEDIO DE LA PRUEBA Y LA PRUEBA EN SÍ

"Para establecer la forma de proponer la prueba digital o electrónica es importante aclarar estos tres conceptos. Primero, la *fuente de prueba* es la persona o el objeto que contiene la información relevante al proceso (de naturaleza preprocesal). Segundo, el *medio de prueba* es el canal diseñado por el legislador para que la fuente de prueba pueda ingresar al juicio (de naturaleza procesal-instrumental). Y tercero, *la prueba* es la información vertida en el juicio por medio de la fuente de prueba, por cuyos elementos se determina el acaecimiento de un hecho (de naturaleza procesal-valorativa). Si no se acredita el contenido y el alcance de un segmento de la realidad (es decir, el hecho controvertido), simplemente no existe prueba. Así, el testimonio de la escritura matriz de un contrato individual de trabajo, es la fuente de prueba, mientras que el medio de prueba es la prueba documental (instrumento público). El contenido y alcance de las condiciones de trabajo y demás prestaciones labores señaladas en el referido testimonio sería la prueba. Asimismo, el testigo "z" por medio de su saber es la fuente de prueba, mientras el medio de prueba es el interrogatorio de testigos (conocido también como "declaración testimonial"). El contenido y alcance de su declaración (por ejemplo, sobre el despido laboral) sería la prueba.

En otros términos, la fuente de prueba (el testimonio de la escritura matriz o la persona del testigo), en tanto que precede al juicio, solo ingresa al debate procesal en la medida que atraviesa los canales diseñados por el legislador para dichos fines. Esos canales no son otros que los medios de prueba reconocidos por el derecho procesal común (CPCM). Dichos medios son, según su denominación legal, los siguientes: prueba documental (artículos 330 y sig.), declaración de parte (artículos 344 y sig.), interrogatorio de testigos (artículos 354 y sig.), prueba pericial (artículos 375 y sig.), reconocimiento judicial (artículos 390 y sig.), y medios de reproducción del sonido, voz o de la imagen y almacenamiento de la información (artículos 396 y sig.) -todos del CPCM-. Estas mismas reglas aplican en el ámbito del derecho procesal laboral, por cuanto la regulación relativa a la actividad probatoria que establece el CPCM, se extiende a todas las áreas del derecho procesal, que se sujetan a su supletoriedad, como sucede en este caso, según el artículo 602 CT. Tan determinante es este aspecto que, pese

a que el Código de Trabajo regula el medio de prueba de "la confesión" (artículo 400), en la actualidad su aplicación ha sido superada (o por lo menos debe superarse), por cuanto lo aplicable son las reglas del medio de prueba de declaración de parte (por ser equivalentes, mas no iguales).

En todo caso, lo que interesa advertir es que, la prueba solo puede generarse en la conjunción adecuada de la fuente de prueba y los medios de prueba; y que los únicos medios de prueba existentes, en la actualidad, son los que reconoce el CPCM. Y aun y cuando el artículo 330 inciso 2º CPCM, dispone que "Los medios de prueba no previstos por la ley serán admisibles siempre que no afecten la moral o la libertad personal de las partes o de terceros", lo cierto es que, en la *actualidad,* no se advierte la existencia de otros medios de prueba diferentes a los señalados. Sin embargo, lo que importa destacar es que el legislador ha concedido a las partes un amplio margen de libertad probatoria en cuanto a la acreditación de sus intereses procesales, como manifestación del derecho a la protección jurisdiccional, en la dimensión del derecho al debido proceso, particularmente en lo relativo al derecho a la prueba (artículo 2 Cn)."

DEFINICIÓN

"Proposición de la prueba digital o electrónica

La prueba electrónica es "cualquier información obtenida a partir de un dispositivo electrónico o medio digital que sirva para adquirir convencimiento de la certeza de un hecho, siempre que sea correctamente obtenida, constituyendo así pruebas exactas, veraces y objetivas"[7]. Y en concordancia con lo *supra* expuesto, puede afirmarse que la prueba digital o electrónica es la delimitación y reproducción de un segmento de la realidad extraprocesal que ha sido generada, procesada, almacenada y/o reproducida en dispositivos electrónicos (generalmente adscritos al uso de las nuevas tecnologías). En este sentido, las reglas relativas a la proposición de la prueba digital o electrónica giran fundamentalmente en torno a la configuración de las *fuentes de prueba.* Esto es así, porque el carácter digital o electrónico del entorno en el que descansa la fuente probatoria que pretende hacerse valer en el proceso, es un asunto asociado a una realidad preprocesal, ajena al juicio y de orden material. Se trata de información, relevante al juicio, que está contenida en un *objeto* de singular naturaleza: digital o electrónico.

El uso de las nuevas tecnologías ha estimulado el surgimiento de la prueba digital o electrónica, por cuanto se refiere a información generada y contenida en el contexto de una nueva realidad: lo digital o electrónico. En tal sentido, soy categórica al señalar que, en principio, el esfuerzo intelectual no se debe centrar en identificar si el legislador ha creado un canal especial para que la información generada en instrumentos electrónicos o en espacios digitales pueda ingresar al juicio. Más bien, lo primero que debe hacerse, es identificar la naturaleza de la fuente de prueba. La *fuente precede al medio*, y en ese orden debe efectuarse el esfuerzo intelectual dirigido al desahogo de los elementos de prueba."

FORMA DE INTRODUCIRLA AL PROCESO

"Al identificar la naturaleza de la fuente de prueba digital o electrónica, se advierte que se trata de un tipo de realidad intangible o inmaterial, que se exterioriza en formato auditivo, visual o audiovisual. Por tanto, la forma de introducir al proceso información generada en un contexto digital (con uso de las nuevas tecnologías de la información y las telecomunicaciones), como la contenida en capturas de pantalla, en elementos audiovisuales descargados de redes sociales (Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, etc.), en registros digitales de mensajería instantánea (WhatsApp, Telegrama, Signal, etc.), en datos contenidos en correos electrónicos (Gmail, Outlook, Yahoo!, etc.), en sitios web (YouTube, Wikis, etc.), o en diversas aplicaciones (editores de fotos, videos, texto, audio, etc.); no se adecua totalmente a las reglas de introducir al proceso las fuentes de prueba tangibles.

Sin embargo, esto no implica que no pueda introducirse este tipo de prueba al proceso. Por el contrario, la protección y garantía de los derechos fundamentales, como la libertad de expresión y el derecho a la protección jurisdiccional, en la dimensión del derecho al debido proceso (particularmente en lo relativo al derecho a la prueba), así como el principio de libertad probatoria, permiten, según señalé antes, el aprovechamiento de este tipo de información en el debate procesal. Pero esto, como ya lo dije, requiere que la fuente de prueba (de naturaleza intangible) se vierta o se aporte en un soporte tangible, para que pueda transitar o fluir a través de los medios de prueba existentes, hasta llegar al centro del debate procesal.

Así, por ejemplo, es posible que la información contenida en un contexto digital, como un sitio web, pueda aprehenderse a través de una captura de pantalla que adquiera la forma de documento impreso (documento privado) o por medio de una declaración acerca de su contenido visual, a la que la ley le reconoce valor probatorio (acta notarial, que es un documento público); o por medio de la proyección visual de su contenido, el cual se identifica y aprecia directamente por el juzgador (reconocimiento judicial); por medio de la narración personal que da cuenta de su contenido (declaración testimonial o de parte); o por la exploración, recepción y extracción de la información vertida en determinado soporte (prueba pericial; y medios de reproducción del sonido, voz o de la imagen y almacenamiento de la información).

Debo aclarar que los medios de reproducción del sonido, voz o de la imagen y almacenamiento de la información (artículos 396 y sig. CPCM), como las películas, cintas de video, disquetes flexibles, discos duros, CD's, DVD's u otros medios de grabación, no han sido previstos por el legislador con exclusividad y especialidad, para introducir a través de ellos toda la prueba que puede surgir en el contexto del uso de las nuevas tecnologías de la información y las telecomunicaciones. Es verdad que son medios productos del creciente y evidente desarrollo tecnológico; pero también es cierto que no conservan el monopolio de la introducción de las fuentes de prueba, cuya génesis anida en contextos digitales,

virtuales, informativos o electrónicos. Esto es así, porque, como ya lo apunté, la *cuestión determinante* no está en identificar el medio de prueba idóneo, sino en la consideración de la naturaleza de la fuente de prueba, y por tanto, en cómo esta puede incorporarse al juicio a través de los diferentes medios de prueba disponible. En consecuencia, no debe estimarse que la forma de introducir al juicio las fuentes de prueba derivadas de entornos de naturaleza digital o electrónica (propias de las nuevas tecnologías) es, únicamente, haciendo uso de los medios de reproducción del sonido, la voz o la imagen.

Por tanto, una vez identificada la fuente de prueba digital, resultará necesario introducirla al proceso a través de algunos de los medios de prueba reconocidos por el ordenamiento jurídico, sin perder de vista que la elección del medio es una opción de las partes, quienes asumen las consecuencias jurídicas derivadas. Por ejemplo, asume las reglas relativas al valor probatorio asignado, según el medio de prueba que eligió utilizar; ya que el sistema de valoración de la prueba está aparejado al tipo de medio de prueba seleccionado y no a la fuente de prueba introducida. Las partes deben ponderar, en cada caso, cuál de los medios probatorios disponibles le satisface en sus aspiraciones procesales. Por ejemplo, al litigante le corresponde definir si la información contenida en una página web puede acreditarla con mayor eficacia haciendo uso de la prueba documental o de la prueba testimonial; o haciendo un uso conjunto de los referidos medios.

Incluso, una vez que se ha introducido la fuente de prueba en la forma que he señalado, es posible que su contenido sirva como un parámetro que ilustra sobre el acaecimiento de un hecho, pero que en el fondo goza del beneficio de la excepción de prueba (artículo 314 CPCM). Puede suceder que se trate de hechos notorios o admitidos. La jurisprudencia nacional se ha pronunciado sobre el primer caso. Por ejemplo, existe diversos precedentes constitucionales en lo que se ha sometido a control judicial actuaciones consumadas a través de contextos digitales y cuya prueba ha sido posible haciendo uso de fuentes de prueba digitales (capturas de pantallas de tweets); pero que se han introducido al proceso como impresiones (documentos privados) o señalando el hipervínculo del sitio web (que en el fondo implica una forma de reconocimiento judicial). En algunos de estos casos se expresó que “es un hecho público y notorio ampliamente divulgado” la actuación que se sometía a control judicial, de modo que no era objeto de prueba. Por ejemplo, puede consultarse la resolución pronunciada a las diez horas del trece de mayo de dos mil veinte, por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, dentro del proceso de habeas corpus 327-2020.

En casos como el mencionado, la introducción de una captura de pantalla o la remisión a un sitio web través de un hipervínculo, sirve de marco preliminar sobre la existencia de un hecho que, dado su carácter público y notorio, está exento de prueba. En otras ocasiones, los elementos mencionados constituyen auténticas fuentes de prueba, que deben apreciarse conforme a las reglas de

cada medio probatorio; sobre todo cuando la naturaleza de los hechos controvertidos obliga a adoptar un marco de apreciación probatoria más amplio, tal y como sucede en aquellos casos en los que, por ejemplo, se denuncia la ilegalidad de las actuaciones materiales constitutivas de vía de hecho, consistentes en el bloqueo virtual del acceso a la cuenta institucional de la red social de twitter de una institución pública y de la cuenta personal del titular de la misma. Al respecto, puede examinarse la resolución pronunciada por la Cámara de lo Contencioso Administrativo, a las nueve horas cincuenta minutos del veintidós de junio de dos mil diecinueve, dentro del proceso clasificado bajo la referencia 00089-l8-ST-COPC-CAM. Lo interesante, en todo caso, no es solo la variada casuística en la que toma importancia la prueba digital o electrónica, sino también la forma de introducir la fuente de información digital, ya sea que sirva como una simple referencia o como una fuente de prueba robusta.

Reitero, la fuente de prueba digital puede incorporarse a través de los diversos medios de prueba existentes. Puede suceder, por ejemplo, que la información contenida en un sistema de mensajería instantánea se incorpore bajo el medio de prueba documental (habiendo impreso las correspondientes imágenes), en cuyo caso se le reconoce su validez y eficacia probatoria, mientras no se establezca, a través de otros medios de prueba, que su conformación o la información que declara, no corresponde a la verdad. Sin embargo, mientras esto no suceda, la fuente de prueba digital introducida a través de los medios reconocidos, posee la suficiente eficacia para que sea apreciada y valorada. Por tanto, si la parte a la que le desfavorece dicha fuente no controvierte su conformación material o su contenido, *pudiendo hacerlo*, el juez no debe desacreditar automáticamente dicha fuente. El operador de justicia no puede asumir una actitud de desconfianza sobre las fuentes de prueba que se le presentan, en aquellos casos en que la parte contraria tolera, consiente, o admite el contenido y alcance de las mismas. Y es que la sociedad en general y los procesos en particular giran, jurídicamente hablando, sobre la base de la buena fe. Ahora bien, el operador de justicia puede examinar con mayor rigor los requisitos de proposición, admisibilidad, reproducción y valoración de la prueba, cuando la naturaleza de las pretensiones lo exige (por ejemplo, asociadas a materia de orden público -como las formas de constituir familia, el establecimiento o desplazamiento de la filiación, la fijación de alimentos, etc.-; o en materia de protección de la niñez y adolescencia), o cuando la garantía del derecho de defensa lo avala (por ejemplo, cuando el demandado es de paradero ignorado o carece de asistencia técnica efectiva).

Finalmente, debo señalar que, dado el carácter manipulable de la información contenida en espacios digitales, es admisible que, como requisito de proposición de las fuentes de prueba digital, el juez requiera que se autentique el contenido de la misma, por los medios legalmente admisibles.”

CUANDO LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN LAS CAPTURAS DE PANTALLA DE UNA APLICACIÓN DE MENSAJERÍA INSTANTÁNEA NO SE REDARGUYE DE FALSA O INCOMPLETA, DEBE ESTIMARSE SU EFICACIA PROBATORIA

"Resolución del presente caso

En la resolución que antecede, no se otorgó valor probatorio a las capturas de pantalla de la aplicación telefónica de WhatsApp, aportadas como prueba documental, bajo el argumento de que la parte demandada no acreditó cómo obtuvo las impresiones de captura de pantalla, ni que la conversación corresponda al supuesto cliente; y, a juicio de la Sala, el documento no proporciona seguridad en cuanto a la integridad o invariabilidad de su contenido. Además, se sostuvo que es necesario acompañar el medio de almacenamiento que contiene la información, para que sea analizado y considerado de conformidad al artículo 397 CPCM.

A mi juicio, en aquellos casos en los que se presentan fuentes de prueba generadas en un sistema de comunicación que registra la transmisión de datos, y cuando tal registro es accesible y controlable para los sujetos que intervienen en el mismo, como sucede con los sistemas de mensajería instantánea que reportan y conservan los datos en dispositivos electrónicos (tanto de la parte demandante, como de la de la parte demandada). Si una de ellas no impugna el contenido de la información incorporada al proceso a través de los medios de prueba legalmente disponibles (como sucede con los documentos privados -capturas de pantalla-), *pudiendo hacerlo,* es posible concluir que admite los hechos declarados o descritos en las fuentes de prueba. En este tipo de casos, el carácter bilateral de la recepción, control y registro de la comunicación sustenta dicha conclusión. Este efecto, desde luego, puede impedirse en la medida en que exista justa causa, alegada y acreditada por el sujeto en controversia.

La jurisprudencia de esta Sala, al referirse a la eficacia probatoria de las impresiones del contenido de una página web o de correos electrónicos, ha sostenido que "la eficacia probatoria del mismo, dependerá de la actitud procesal de la parte contraria quien podría o no impugnarla a través de los medios establecidos para tal efecto, por lo que en caso de no hacerlo, la misma tendría plena eficacia probatoria" (sentencia pronunciada a las catorce horas cuarenta y cinco minutos del veinticuatro de agosto de dos mil dieciséis, dentro del incidente de apelación clasificado bajo la referencia 12-APL-2016). Comparto lo expuesto en este precedente, en lo relativo a que la eficacia probatoria de las capturas de pantalla depende de la actitud procesal de la parte demandada. Y en concordancia con lo expuesto en este voto, esa actitud debe analizarse con especial atención sobre todo cuando el carácter bilateral de la recepción, control y registro de la comunicación amplia las posibilidades de impugnar la prueba ofertada por la contraparte.

En el caso del sistema de mensajería instantánea de WhatsApp, la transmisión de los mensajes se produce sobre la base de dispositivos que reciben y resguardan dicha información, la cual, en principio, es accesible y controlable

por ambas partes de la comunicación. Por tanto, si la información contenida en las capturas de pantalla no se redarguye de falsa o incompleta, debe estimarse su eficacia probatoria."

SI LAS IMPRESIONES DE CAPTURA DE PANTALLA DE LOS MENSAJES ENVIADOS A TRAVÉS DE UNA APLICACIÓN DE MENSAJERÍA INSTANTÁNEA, NO SE HAN GENERADO ENTRE DEMANDANTE Y DEMANDADA, SINO ENTRE LA DEMANDADA Y UN TERCERO, SE DEBE ACREDITAR EL ORIGEN, TITULARIDAD Y AUTENTICIDAD DE DICHA INFORMACIÓN

"Ahora bien, en el presente caso, la parte demandada presentó impresiones de captura de pantalla, pretendiendo acreditar que el actor se apropió indebidamente de una suma de dinero, por la venta de una motocicleta. Se presentó un informe de auditoría, en el que se concluye que el trabajador se apropió indebidamente de la suma de dinero, luego de haberse realizado una "validación" vía teléfono y mensajería instantánea de WhatsApp, sobre el valor cancelado por el cliente al comprar la motocicleta. En este sentido, la comunicación registrada por medio de WhatsApp no se ha generado entre demandante y demandada, sino entre la demandada y un tercero. Por tanto, la posibilidad de que el demandante pueda acceder, controlar o verificar el contenido y autenticidad de dicha información, se ve reducida. En consecuencia, la parte demandada sí debía acreditar el origen, titularidad y autenticidad de dicha información, es decir, la información contenida en las capturas de pantalla presentadas como prueba documental, a través de cualquiera de los medios de prueba admisibles, según se ha expuesto. Por esa razón comparto la decisión que se ha emitido, en cuanto a no casar la resolución impugnada.

Sin embargo, no comparto el criterio relativo a que, en este tipo de casos, es necesario acompañar el medio de almacenamiento que contiene la información, para que sea analizado y considerado de conformidad al artículo 397 CPCM. Sustento mi postura en dos aspectos. Primero, que, tal y como ya lo expuse, el litigante puede incorporar las fuentes de prueba *cuya génesis anida en el uso de esas nuevas tecnologías*, y cuyo objeto esté relacionado de modo esencial con sus intereses procesales, haciendo uso de los diversos medios de prueba legalmente reconocidos por el ordenamiento jurídico; y según el medio de prueba seleccionado, así serán las reglas probatorias aplicables. En este caso, las impresiones de captura de pantalla se propusieron como medios de prueba documental.

Segundo, que, el contenido del artículo 397 CPCM permite concluir que la necesidad de presentar el medio de almacenamiento que contiene la información descrita en las impresiones de captura de pantalla, es procedente *cuando la otra parte lo pidiera,* situación que no se ha presentado en este caso. Por tanto, establecer como regla general, que la oferta de un documento requiere presentar el medio de almacenamiento que lo contiene, constituye una infracción de derecho, derivada de la aplicación errónea de la referida disposición legal.

A mi juicio, las partes tienen la posibilidad de ofertar prueba contenida en fuentes digitales, y hacer uso de los medios de prueba que resulte posible, con el fin de validar, reforzar o robustecer el contenido de aquellas. Sin embargo, esto no significa que, el no incorporar el dispositivo que almacena la información generada en contextos digitales, traiga como consecuencia la imposibilidad de valorar su contenido. En cambio, si la contraparte pide que se presente dicho dispositivo y dicho requerimiento avalado por el juez no se cumple, es posible desvirtuar o desacreditar la prueba, salvo que se hayan ofertado y desahogado otros medios de prueba que suplen la falta de presentación del dispositivo.

En consecuencia, acompaño la decisión que antecede, no así en los aspectos que he señalado en este voto.

Así mi voto."

Sala de lo Civil, número de referencia: 22-CAL-2022, fecha de la resolución: 02/06/2022

Relaciones:

Sala de lo Civil, número de referencia: 82-CAL-2022, fecha de la resolución: 18/07/2022

VOTO DISIDENTE DE LA MAGISTRADA DAFNE YANIRA SÁNCHEZ DE MUÑOZ

PRINCIPIO DE CONGRUENCIA

VULNERACIÓN DEL ARTÍCULO 419 CT, CUANDO EL AD QUEM RESUELVE SOBRE LA BASE DE COSA DISTINTA A LA SOLICITADA EN EL RECURSO DE APELACIÓN

"Dafne Yanira Sánchez de Muñoz, magistrada de la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia, en el incidente de casación 109-CAL-2022, emito voto disidente con base en los artículos 602 CT, y 20 y 220 CPCM, por no estar de acuerdo con la decisión que antecede, no obstante haber firmado la respectiva resolución, tal como lo dispone el referido artículo. Fundamento mi voto en las consideraciones que expongo a continuación.

En la sentencia con cuyo contenido disiento, se ha decidido, entre otros, lo siguiente: "a) Cásase la sentencia recurrida por la causa genérica de infracción de ley, y por el submotivo de violación al art. 419 CT. b) Decláranse sin lugar las excepciones de terminación del contrato sin responsabilidad para el patrono por las causales establecidas en los numerales 3ª, 16ª y 20ª del art. 50, relacionada la última causal con el ord. 2° del art. 31 CF; c) Condénase a la sociedad (...)".

Antecedentes

En síntesis, en primera instancia se absolvió a la parte demandada (entidad patronal) del pago de indemnización por despido injusto, vacación y aguinaldo proporcionales, por no haberse comprobado el despido alegado. Sin embargo, se le condenó al pago del salario adeudado por días laborados y no remunerados. El trabajador demandante interpuso recurso de apelación en contra de dicha decisión.

Según consta en autos, en el recurso de apelación se pidió revocar la sentencia impugnada, por causar agravio al trabajador. El argumento central contenido en el escrito de dicho recurso, es el siguiente: “SI se probó con el nombre y el cargo de la persona que se dice realizo el despido, con la declaración del testigo (...) y en cuanto a la fecha que se dice ocurrió el despido dicho testigo por los nervios erro en decir otra fecha” (sic) (resaltado propio). Así las cosas, se advierte que el recurso de apelación tenía por objeto la revisión de la valoración de la prueba testimonial, en cuanto a la existencia del despido.

En segunda instancia, al resolverse el recurso de apelación, se revocó la decisión impugnada, en cuanto a la absolución de pagar indemnización por despido injusto, vacación y aguinaldo proporcionales; se declaró sin lugar las excepciones alegadas por la parte demandada; y se condenó a esta al pago de indemnización por despido injusto, vacación y aguinaldo proporcionales, así como al pago de salarios caídos en ambas instancias.

En efecto, luego de examinar las pruebas de cargo aportadas, incluidas las declaraciones testimoniales, la Cámara de segunda instancia concluyó que, “con los medios de prueba aportados por la parte actora, no se puede establecer directamente, ni presuncionalmente el despido alegado en los términos de la demanda” (sic) (resaltado propio). Sin embargo, el tribunal de alzada observó que la parte demandada, en escrito agregado al expediente, opuso excepción de improponibilidad de la demanda, alegando la inexistencia del despido; al mismo tiempo que invocó casuales de despido sin responsabilidad del empleador, específicamente las causales 3ª, 16ª y 20ª del artículo 50 del Código de Trabajo. Está ultima causal en relación con el ordinal 2.° del artículo 31 de ese mismo cuerpo normativo.

Seguidamente, el tribunal de alzada determinó que el argumento de inexistencia del despido y el argumento de despido sin responsabilidad del empleador eran excluyentes, razón por la cual no fue tomada en cuenta la excepción de improponibilidad. Finalmente, concluyó que las causales de despido sin responsabilidad “no fueron demostradas en autos”, y que, en consecuencia, “el despido de cual fue objeto el trabajador demandante no se encuentra justificado en autos” (sic). En otras palabras, el motivo por el cual se revocó la sentencia apelada consiste en que la parte demandada alegó causales de despido que no pudo probar, y con ello aceptó, implícitamente, haber despedido al trabajador.

Frente a tal decisión, la parte demandada y, a su vez, apelada, interpuso recurso de casación, el cual fue admitido por el motivo genérico de infracción de ley y por el submotivo de violación del artículo 419 CT. El argumento central de dicho submotivo de casación consiste en que, la Cámara de segunda instancia “se pronuncia sobre determinados extremos que no son los que a solicitado la parte que apeló” (sic).

Sobre mis motivos de disidencia

En la sentencia que antecede, esta Sala ha sostenido que, “el tribunal de alzada omitió pronunciarse, respecto de si con el dicho del testigo de cargo (...), se había comprobado el nombre y el cargo de la persona que realizó el despido

(principal inconformidad del recurso de apelación). Ante tal deficiencia, a juicio de esta Sala, la Cámara Segunda de lo Laboral de esta ciudad, cometió una infracción al principio de congruencia procesal, dado que no se manifestó en cuanto a la inconformidad planteada por el apelante, y la fundamentación de su sentencia devino en valorar otros aspectos y analizar las excepciones opuestas y alegadas por el apoderado de la demandada, sobre las cuales no debió haberse pronunciado, sin haber resuelto previamente las inconformidades contenidas en el recurso de apelación (...)" (sic) (resaltado propio).

Sin embargo, en realidad, el argumento que fundamenta el submotivo de casación consiste en que el tribunal de alzada resolvió sobre la base de aspectos que no fueron solicitados por la parte apelante, mas no en que dicho tribunal haya dejado de pronunciarse sobre los puntos de apelación oportunamente alegados. Este error refleja una confusión entre las modalidades de incongruencia por omisión y de incongruencia por referirse a cosa distinta a la solicitada. Además, viola uno de los aspectos más elementales del sistema de impugnación, como es la concepción del agravio.

En efecto, en la medida en que esta Sala casa la sentencia dictada en apelación, por no haberse manifestado el tribunal de segunda instancia sobre "la inconformidad planteada por el apelante"; ha perdido de vista que ese punto debió ser alegado, en todo caso, por la parte que oportunamente interpuso el recurso de apelación; pero que tal situación resulta imposible, por cuanto la sentencia de segunda instancia fue favorable a la parte apelante. Lo antes expresado implica, entonces, que esta Sala ha reconfigurado el verdadero argumento impugnativo del casacionista y ha establecido como agravio, una cuestión que en el fondo no genera a aquel ninguna afectación; es decir, que ha adoptado un argumento que no procede, para casar la sentencia.

Al recurrente no le genera ningún agravio el hecho de que, presuntamente, no se haya dado respuesta a lo solicitado por la contraparte en segunda instancia. Por ende, la causalidad del vicio de casación no se corresponde con el interés que el recurrente pretende hacer valer en este grado de conocimiento. De allí que, la razón que ha servido de fundamento para casar la sentencia de apelación, parte de una situación jurídicamente imposible. La sentencia de segunda instancia debe casarse, pero no por las razones aducidas por esta Sala.

De todo lo expresado, cabe concluir que, la Cámara de segunda instancia violó el artículo 419 CT, por haberse pronunciado sobre cuestiones no solicitadas en el escrito de apelación. Según lo expuse supra (en los antecedentes), el recurso de apelación tenía por objeto la revisión de la valoración de la prueba testimonial, en cuanto a la existencia del despido. Sin embargo, el tribunal de alzada, como bien lo indica esta Sala, fundamentó su sentencia en otros aspectos. Por ejemplo, analizó las excepciones alegadas por la parte demandada, pese a que en el escrito de apelación en ningún momento se le solicitó que procediera en tal sentido.

Lo mismo ocurrió con el examen de las causales de despido sin responsabilidad del patrono, ya que el tribunal de alzada las examinó sin que se le solicitara. Incluso, el examen de las mismas le llevó a tener por reconocido el despido de forma implícita, lo cual sirvió de base para revocar la sentencia impugnada y condenar a la sociedad demandada. Al respecto, el tribunal de segunda instancia razonó de la siguiente manera: "(...) este Tribunal Colegiado confirma que aun cuando el despido impetrado, no se encuentra establecido en juicio de manera directa ni presuncional, el mismo al haber alegado la parte demandada unas causales de despido (...) conlleva que la prestación del servicio, y el despido impetrado implícitamente se reconocen, por ello es irrelevante acreditar la calidad de representante patronal de la persona que se señala como ejecutora del hecho, pues la oposición queda delimitada a probar las causas invocadas como eximente de responsabilidad, lo cual no ocurrió (....)" (sic).

Al respecto, no debe olvidarse que, el recurso de apelación no permite la revisión íntegra de lo actuado en primera instancia, sino únicamente en lo que a los puntos impugnados concierne. Esto constituye un límite y una garantía impuesta en segunda instancia por el principio de congruencia. Por ello, no es cierto que el tribunal de alzada estaría habilitado para valorar otros aspectos y analizar las excepciones interpuestas por la parte demandada, si hubiera "resuelto previamente las inconformidades contenidas en el recurso de apelación", como se da a entender en la sentencia que antecede. Este razonamiento está íntimamente vinculado con el alcance de las potestades atribuidas a esta Sala, cuando decide casar la sentencia impugnada por un motivo de fondo, según lo explicaré más adelante.

Como consecuencia de lo expuesto, la sentencia impugnada debió ser casada por ser incongruente, al referirse a cuestiones no solicitadas en el recurso de apelación, pues con ello viola el contenido del artículo 419 CT, que establece que "Las sentencias laborales recaerán sobre las cosas litigadas y en la forma en que hayan sido disputadas, sabida que sea la verdad por las pruebas del mismo proceso (...)" (resaltado propio). Dicha norma especial exige congruencia en las sentencias dictadas en materia laboral, al prescribir que deben recaer sobre las cosas litigadas en la forma que hayan sido disputadas. En segunda instancia, la disputa procesal se define por lo solicitado en el recurso de apelación. Por tanto, la sentencia del tribunal de segunda instancia debe ceñirse a los límites que impone el principio congruencia, salvo que se trate de una pretensión sobre la cual debe pronunciarse de oficio (vale aclarar que esta última situación no se ha presentado en este caso, pues lo que hizo fue examinar de oficio alegaciones vertidas por la parte demandada en primera instancia y, seguidamente, deducir consecuencias sobre el fallo impugnado).

En consecuencia, lo procedente es casar la sentencia, por el motivo de fondo de infracción de ley y por el submotivo de violación del artículo 419 CT, al resolverse sobre la base de cosa distinta a la solicitada en el recurso de apelación."

Sala de lo Civil, número de referencia: 109-CAL-2022, fecha de la resolución: 09/06/2022

VOTO DISIDENTE DE LA MAGISTRADA DAFNE YANIRA SÁNCHEZ DE MUÑOZ

ERROR DE DERECHO EN LA APRECIACIÓN DE LA PRUEBA

PROCEDENCIA

"Dafne Yanira Sánchez de Muñoz, magistrada de la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia, en el incidente de casación 151-CAL-2022, emito voto disidente con base en los artículos 602 CT, y 20 y 220 CPCM, por no estar de acuerdo con una parte de la decisión que antecede, no obstante haber firmado la respectiva resolución, tal como lo dispone el referido artículo. Fundamento mi voto en las consideraciones que expongo a continuación.

En la resolución con cuyo contenido disiento parcialmente, se ha decidido, entre otros, lo siguiente: "**a) Inadmítese** el recurso por el motivo genérico de infracción de ley, y el motivo especifico de (...) errónea interpretación del art. 281 CT, por existir error de derecho en la apreciación de las pruebas (...) **c) Inadmítese** las peticiones de nulidad alegadas en el recurso de mérito".

Sobre el error de derecho en la apreciación de la prueba

Entre los fundamentos que sustentan la inadmisión del submotivo de "errónea interpretación del artículo 281 del Código de Trabajo, ya que en la apreciación de las pruebas haya habido error de derecho" (según lo denominó la recurrente en su escrito de casación), se encuentran los siguientes:

"Con relación a este planteamiento, debe observarse, que se han invocado dos submotivos "interpretación errónea y error de derecho", los que no pueden concurrir puesto que la queja radica en haberle dado valor probatorio al contrato colectivo a pesar de haberse presentado en copia certificada, lo que no tiene, de ninguna manera, relación con los errores en la interpretación del precepto legal invocado como infringido".

Sobre este punto, comparto la idea de que, en este tipo de casos, no es posible alegar la errónea interpretación de un precepto legal, por cuanto el punto de impugnación se refiere a la valoración de la prueba por haberse realizado con infracción de una norma de derecho, sin que la interpretación de esta sea un aspecto a considerar. En otras palabras, el error de derecho es el resultado de haber valorado un medio de prueba desatendiendo la forma que la ley dispone para ello, con la aclaración de que el error recae sobre la actividad intelectiva del juzgador (en relación a la prueba), y no sobre el contenido del precepto legal. El error en la apreciación de la prueba, entonces, no constituye una infracción que recae directamente sobre la normativa jurídica (en cuyo caso sí estaría justificado hablar de errónea interpretación, violación o aplicación indebida de la ley).

No obstante, al dar lectura al escrito que contiene el recurso de casación, advierto que la recurrente ha desarrollado el concepto de la infracción sin hacer énfasis en lo que en realidad constituiría el submotivo de errónea interpretación, por cuanto no centra su impugnación en la interpretación del artículo 281 CT, sino que más bien, su argumentación se encamina a denunciar que la Cámara

de segunda instancia otorgó valor probatorio a un documento que, en función de los hechos que pretende acreditar, no cumple con los requisitos que la ley establece. Por tanto, el concepto de la infracción ha sido desarrollado de forma adecuada. De ahí que, a mi juicio, los argumentos expuestos en la resolución que antecede no son válidos para inadmitir el recurso.

Asimismo, en dicha resolución se ha expresado que "(...) el error de derecho *conlleva particularmente la negación del valor probatorio a determinado medio presentado* en el proceso; sin embargo, esto, es opuesto a lo descrito por la abogada (...), puesto que, su inconformidad trata sobre el hecho de que la Cámara *le otorgó valor probatorio a la copia certificada del contrato colectivo de trabajo,* a pesar de existir disposición legal (art. 281 CT), que de forma expresa prescribe cómo debe acreditarse la existencia del relacionado documento (...)" (resaltado propio). Al respecto, no comparto la conceptualización que se ha hecho del error de derecho. Entender que el error de derecho procede únicamente contra *la negación del valor probatorio* implica restringir el contenido y alcance de este submotivo de casación.

En cuanto al error de derecho, la jurisprudencia casacional ha establecido que, "[...] existe error de derecho en la valoración de la prueba, *cuando el juzgador la aprecia incorrectamente dándole un valor distinto al que le asigna la ley,* negándole todo valor, desestimando una prueba producida, aplicando incorrectamente el sistema preferencial de pruebas que establecen las normas procesales, o cuando la apreciación de la prueba efectuada supuestamente al amparo de la sana crítica haya sido arbitraria, abusiva o absurda [...]" (resaltado propio) (véase la sentencia pronunciada en el incidente de casación 257-CAL-2021, el veintisiete de enero de dos mil veintidós).

Como puede observarse, la jurisprudencia ha dispuesto que existe *error de derecho en la valoración de la prueba,* ***al darle un valor distinto****;* es decir, no solo cuando se deniega su valor. A mi juicio, una forma de apreciar incorrectamente la prueba, es dándole un valor que, por méritos de la ley, no le corresponde; como cuando el medio de prueba no es idóneo para acreditar los hechos controvertidos, por ser diferente al medio que la ley ha previsto para dichos efectos.

El error de derecho, por tanto, está destinado a controlar las potestades del juez relativas a la apreciación de la prueba. Este error "se produce cuando al apreciar las pruebas, esto es, al estimar el valor o mérito que conforme a la Ley tienen, en una palabra, al valorarlas, se les aplican equivocadamente las normas establecidas para ello, infringiéndose esos preceptos sobre valorización de cada uno de los medios de prueba que la ley admite (...) el error de derecho no recae directamente sobre la ley, sino en la apreciación que se hace de las pruebas en relación con las reglas legales de valorización de las mismas " (Vid. ROMERO CARRILLO, Roberto, *La normativa de casación,* Ediciones Último Decenio, Departamento de Publicaciones, Ministerio de Justicia, San Salvador, 1992, p. 110)

De lo expuesto, puede advertirse que el error de derecho se produce cuando el juez atribuye o niega valor, a un medio de prueba, en infracción a una norma de derecho que dispone la forma en que ese medio puede tener eficacia pro-

batoria. Así, por ejemplo, si la ley establece que determinado medio de prueba debe valorarse conforme a las reglas del valor tasado, se incurre en error de derecho si se aprecia bajo otro sistema de valoración de la prueba (legalmente establecido), o cuando se le desconoce el valor que, conforme a dicho sistema, le corresponde.

En consecuencia, el error de derecho recae directamente sobre la actividad intelectiva del juez (sobre la prueba), a partir del contenido de una norma asociada a la valoración probatoria. Por tanto, para que tal error se produzca no necesariamente debe tratarse de un supuesto en el que se *niega el valor probatorio;* podría tratarse, por ejemplo, del supuesto contrario (otorgándole valor), tal como la situación que se ha planteado en el recurso objeto de análisis. Lo relevante es que la valoración probatoria infrinja el parámetro legal.

A mi juicio, el recurso debe admitirse respecto del submotivo al que se ha aludido como "errónea interpretación del artículo 281 del Código de Trabajo, ya que en la apreciación de las pruebas haya habido error de derecho" (según lo denominó la recurrente); en los términos acá expuestos.

Sala de lo Civil, número de referencia: 151-CAL-2022, fecha de la resolución: 10/08/2022

VOTO DISIDENTE DE LA MAGISTRADA DAFNE YANIRA SÁNCHEZ DE MUÑOZ

RECURSO DE CASACIÓN

ASPECTOS GENERALES

"Modo de proceder al casar una sentencia por motivos de fondo

El artículo 537 CPCM, cuyo contenido es aplicable al presente caso, según lo dispuesto en el artículo 602 CT, dispone que "Si se casare la sentencia en cuanto al fondo, se dictará la que en su lugar corresponda". Por tanto, establece el modo de proceder cuando el tribunal de casación decide casar una sentencia por motivos de fondo, como sucede en el presente caso.

El contenido de la citada disposición legal expresa que, el tribunal de casación dictará la sentencia que "en su lugar corresponda". Pese a la claridad de su redacción, tal disposición exige un análisis para determinar los alcances de la facultad que confiere al tribunal. Esto es así porque el modo de proceder de esta Sala, al casar una sentencia por motivos de fondo, está íntimamente asociado con las potestades que le confiere la regulación del recurso de casación; y tales facultades constituye uno de los contenidos más emblemáticos y discutidos, históricamente, dentro de la teoría de la casación.

Para explicar lo anterior, es necesario realizar algunas consideraciones sobre la casación. Al respecto, es pertinente destacar que, en sus orígenes, la casación aparece como el instrumento adoptado por el "poder real" para anular las decisiones de los parlamentos (tribunales de última instancia) que contravenían las disposiciones normativas del Monarca.

La casación aparece como un mecanismo de control del poder judicial, es decir, para combatir sus excesos y censurar sus sentencias. Ahora bien, una vez la Revolución Francesa consolidó sus efectos y los poderes del Monarca desaparecieron, la casación dejó de ser exclusivamente un instrumento político de control judicial, y se le asignó la histórica función de defender la correcta aplicación de la ley. En una etapa ulterior también se encargó de defender su adecuada interpretación. Se habla, así, de la defensa del ius constitutionis,esto es, la defensa del derecho objetivo (lo que en la actualidad comprende la aplicación e interpretación correcta de la ley y la unificación de la jurisprudencia).

Con el devenir de los años, y dado el predominio de la concepción de la división de poderes (ahora mejor conocida como división orgánica de funciones), la casación no solo tiene por objeto la defensa la ley (en cuanto a su aplicación e interpretación correcta -función nomofilactica-), sino también la loable función de uniformar la jurisprudencia de los tribunales. La uniformidad jurisprudencial cohesiona el estrato social, fomenta la unidad jurídica y estandariza la forma de realizar los valores y principios integrados en la ley. De esta forma, la casación, desde la óptica del ius constitutionis, tiene por objeto defender y fomentar la vigencia objetiva de la ley y, a su vez, promover la unidad de la jurisprudencia. Solo asegurando la adecuada aplicación e interpretación de la ley es posible asegurar la unidad legítima de la jurisprudencia.

En ese orden de ideas, la casación permite establecer el modo correcto de aplicar e interpretar los preceptos legales y, además, viabiliza la anulación de las sentencias y actuaciones procesales que infringen el contenido y alcance de la ley. Como se observa, la casación ha cumplido y cumple una función constitucional, al procurar el respeto y la promoción de los grandes valores, principios y reglas que rigen la vida en sociedad. Incluso, la casación es uno de los instrumentos fundamentales del Estado para la consecución de la seguridad jurídica. Es innegable el rol trascendental que desempeña.

Por otra parte, la casación también permite corregir las injusticias que sufren las partes en los procesos judiciales, como consecuencia de la infracción de la ley, ya sea en el acto de aplicarla o de interpretarla. Esta prerrogativa se subsume en lo que se ha dado a llamar el ius litigatoris; es decir, el derecho según el interés de los litigantes. Esta última concepción es la que exalta la naturaleza de la casación como auténtico medio de impugnación. A pesar de esta finalidad, la casación se instituye sobre la base de un interés superior, un interés público, como es el interés de uniformar legítimamente la jurisprudencia, lo cual exige la aplicación e interpretación correcta de la ley. Tan cierto es esto, que la casación no constituye instancia y deviene como un recurso extraordinario, lo que se traduce, por una parte, en que el debate sobre los hechos en este grado de conocimiento está sumamente restringido y, por otra parte, en que su procedencia es posible solo por la adecuada configuración de determinados motivos y submotivos.

La casación no es una tercera instancia (como sí lo era el extinto recurso de súplicas), razón por la que el tribunal de casación no puede juzgar los asuntos

sometidos a su conocimiento con la misma libertad que lo hacen los tribunales de primera y de segunda instancia. Y es que, a diferencia de los jueces de instancia, que juzgan los hechos, según el mérito de las pruebas y el derecho invocado; el tribunal de casación juzga estrictamente el derecho, y solo en casos excepcionales también revisa determinados hechos. Por eso se afirma que la función del tribunal de casación es la de fiscalizar jurídicamente la decisión de los jueces.

Por tanto, los fines de la casación están determinados por el ius constitutionis y el ius litigatoris. Y pese a la dificultad que puede aparejar en su comprensión (sobre todo para los jueces de instancia que están acostumbrados a priorizar el ius litigatoris), el designio principal de la casación, según su esencia histórica, gira en torno al primero de ellos. Sin embargo, los tribunales de casación se esfuerzan por buscar un equilibrio entre la finalidad pública y el interés particular de cada caso.

Sin embargo, esa finalidad perseguida por el legislador, se desvía cuando el tribunal de casación excede los límites de las potestades que se le confieren, para lograr su función primordial: el control judicial de la aplicación e interpretación del derecho, con el ánimo de alcanzar su uniformidad; y asume poderes de decisión que no posee."

POTESTADES DEL TRIBUNAL CASACIONAL

"Para identificar las potestades del tribunal de casación, es necesario armonizar el contenido del artículo 537 CPCM con la singular naturaleza del instituto de la casación. Por tanto, la expresión relativa a que, "Si se casare la sentencia en cuanto al fondo, se dictará la que en su lugar corresponda", no debe interpretarse en el sentido de que el tribunal de casación puede emitir la sentencia "que corresponda" con amplios márgenes de decisión. Por el contrario, dicho tribunal posee grandes potestades, pero dentro de unos contornos bien definidos, los cuales deben ser respetados como exigencia del máximo principio de legalidad.

Potestad de casación y potestad resolutiva

La casación por vicios de fondo, es decir, por infracción de ley o doctrina legal, permite que el tribunal de casación ejerza dos potestades distintas, si bien, íntimamente relacionadas: la casación y la potestad resolutiva

La potestad de casar consiste en enjuiciar la legalidad de una sentencia o de una decisión judicial, impugnada a través de esta vía. Implica la facultad de verificar si el juez, al dictar su decisión, aplicó indebidamente, inaplicó o aplicó erróneamente un precepto legal, y si tal juicio intelectivo incidió en la resolución de la controversia; o, en su caso, si el tribunal ignoró el contenido y alcance de la doctrina legal. En estricto sentido, la casación se perfecciona y agota cuando el tribunal de casación concluye con la fiscalización jurídica de la decisión impugnada, estimando o desestimando el motivo y submotivo de casación invocado.

Es en este momento cuando se materializa la defensa de la ley, porque se determina si la sentencia debe mantenerse, o si, por el contrario, debe anularse y, en consecuencia, expulsarse de la realidad jurídica. Si se estima el recurso, el tribunal de casación censura la aplicación o interpretación errónea de la ley, pues a través de su función negativa suprime todo efecto de la sentencia impugnada. De esta forma la casación cumple con su designio primordial.

Una vez casada la sentencia por un vicio de fondo, es necesario definir qué se sucederá con la controversia que pende y que aún espera una solución jurídica. Al respecto, en sus orígenes, la casación no permitía al tribunal de casación emitir una decisión que le pusiera fin a la controversia, por cuanto su única función era juzgar la sentencia, el derecho, y nunca los hechos. De esta forma, habilitaba el sistema de reenvío, que en términos generales consistía en la remisión del proceso a un tribunal legalmente competente, para que emitiera la decisión que pusiera fin a la controversia. Dicho tribunal podía ser el mismo que había dictado la sentencia casada, o uno diferente. Posteriormente, el sistema de reenvió se superó y se confirió una función positiva al tribunal de casación, habilitándose para que pronunciara una sentencia de fondo sobre la controversia pendiente de solución. Este último sistema es el que se ha adoptado por la legislación salvadoreña, siempre y cuando la casación obedezca a la existencia de un motivo de fondo.

Cuando el tribunal de casación ejerce su función positiva, dictando una solución de fondo a la controversia pendiente, en estricto sentido ya no ejerce la potestad de casación propiamente dicha; pues la misma se agotó cuando decidió anular la sentencia impugnada. Más bien, se encuentra ya, en ejercicio de la potestad resolutiva. Sin embargo, esta potestad está vinculada por los efectos de la anulación dictada en cada caso, porque es una consecuencia de esta. Así las cosas, la potestad resolutiva no puede desatender las consideraciones y prescripciones adoptadas al casar; y tampoco puede ir más allá de las facultades lógicas que de aquella se derivan. Por ejemplo, si la casación fue estimada por haberse incurrido en un vicio de incongruencia, el ejercicio de la potestad resolutiva debe respetar tales valoraciones, evitando así, incurrir nuevamente en el vicio que dio lugar a la casación. No es cierto, entonces, que la potestad resolutiva le confiera poderes ilimitados al tribunal de casación."

ALCANCE DEL TRIBUNAL CASACIONAL EN EL MOMENTO RESOLUTIVO

"Poder resolutivo del tribunal de casación

Llegados a este punto, lo que interesa establecer es el alcance de las potestades del tribunal de casación en el momento resolutivo. Para tal finalidad, es oportuno insistir en que la casación no es una instancia, ya que, ni la potestad de casar, ni la potestad resolutiva conllevan una absoluta libertad para examinar los argumentos que sustentan las alegaciones iniciales (demanda, contestación de la demanda, reconvención y contestación de la reconvención), las peticiones es-

pecíficas (ya sean pretensiones o excepciones), los hechos o la prueba. La doctrina nacional se ha pronunciado en el sentido de que, “Si la sentencia recurrida es casada, el Tribunal debe pronunciar la que fuere legal (...) Para pronunciar la sentencia, aquel debe basarse en la misma prueba o material que le sirvió al de segunda instancia para dictar la suya (...)”. El tribunal de casación, para resolver, toma como marco de referencia el orden de cosas existente hasta la segunda instancia, sin posibilidad de examinar aspectos que, procesalmente, se dieron por agotados en momentos previos.

Además, el tribunal de casación, en el momento resolutivo, tampoco se constituye en una entidad que subroga al tribunal de alzada. En tal sentido, no es jurídicamente correcta la concepción según la cual, en su función positiva, el tribunal de casación, al estimar el recurso por un vicio de fondo, se convierte en un tribunal de apelaciones. Es verdad que el tribunal de casación, en la mayoría de los casos en que decide casar una sentencia por un vicio de fondo, ejerce su función positiva sobre la base de los elementos procesales vertidos o establecidos hasta el momento de la segunda instancia, pero esto no equivale a que asuma de manera ficticia la posición del tribunal de alzada que debía resolver de forma correcta la controversia.

Más bien, los alcances de las potestades del tribunal, al casar una sentencia por motivo de fondo, vienen determinados por el ejercicio de la función fiscalizadora que le corresponde desempeñar en cada caso, según el motivo, el submotivo y el concepto de la infracción invocados al sustentar el recurso.

Así, cuando el motivo, submotivo y concepto de la infracción invocados, permiten al tribunal de casación examinar si el que conoció de la alzada aplicó indebidamente una disposición legal; en caso que la sentencia de apelación sea casada, el tribunal de casación debería limitarse a resolver la controversia sin abocarse a asuntos que debieron discutirse en primera instancia. Por ejemplo, no puede producir la prueba que indebidamente se dejó de producir, resolver excepciones que quedaron pendientes de respuesta, deducir consecuencias jurídicas a partir de las alegaciones formuladas, o cualquier otra cuestión cuyo momento de debate corresponde a la primera instancia. Caso contrario, la casación no solo implicaría la anulación de la sentencia de segunda instancia, sino que también afectaría otros momentos procesales cuya legalidad no fue sometida a control casacional.

En cambio, si el motivo, submotivo y concepto de la infracción invocados permiten que el tribunal de casación examine la aplicación de una disposición legal, que rige la apreciación o valoración de la prueba, la técnica casacional permite que el tribunal de casación asuma un margen de control más amplio, al punto que, si bien su sentencia de casación se limitaría a anular la sentencia de segunda instancia, al dictar su sentencia de fondo, como manifestación de su función positiva, el tribunal de casación podría pronunciarse de manera distinta, en cuanto al sentido de apreciación o valoración de la prueba; y valorarlas aun de forma diferente a la establecida en la sentencia de primera instancia.

En el caso antes mencionado, la sentencia de fondo del tribunal de casación tendría una amplitud mayor, por cuanto el examen de la prueba consistiría en el análisis de un material constituido en primera instancia. En otras palabras, la casación, en este tipo de casos, permite trascender del examen realizado en la sentencia de apelación que fue casada en su oportunidad. En efecto, el examen de la apreciación o valoración de la prueba, que se realiza a partir de un submotivo de fondo, requiere el estudio de actuaciones efectuadas en primera instancia (la declaración del testigo, de la propia parte, etc.). Esta forma de proceder se justifica, precisamente, porque la función fiscalizadora que conlleva la casación depende de los motivos, submotivos y conceptos de la infracción oportunamente invocados en cada caso."

EL TRIBUNAL DE CASACIÓN DEBE LIMITARSE A RESOLVER LA CONTROVERSIA, SIN ABOCARSE A ASUNTOS QUE DEBIERON DISCUTIRSE EN PRIMERA INSTANCIA

"Como consecuencia de lo expuesto, si el motivo, submotivo y concepto de la infracción, están orientados a examinar exclusivamente la congruencia de la sentencia de segunda instancia, el tribunal de casación, al casar la sentencia de segunda instancia, se debería limitar a pronunciar la que corresponda, sobre la base de los hechos establecidos hasta la segunda instancia; pero tomando en consideración lo planteado en el recurso de apelación. No podría examinar cuestiones planteadas en primera instancia, y cuya revisión no fue solicitada en apelación, precisamente porque la función fiscalizadora de la casación, en ese tipo de casos, no habilita esa forma de proceder. Si, no obstante, lo hiciera, entonces el mismo tribunal de casación iría más allá de los alcances que la potestad de casación (función negativa) despliega, en tanto que la potestad resolutiva (función positiva) no puede extenderse más allá de la situación que condujo a casar la sentencia.

Así, sería un contrasentido, por ejemplo, que se establezca la incongruencia de la sentencia de segunda instancia, base de la anulación, y que, no obstante, al ejercer la potestad resolutiva, el propio tribunal de casación excede los límites de la congruencia procesal, al asumir potestades que el alcance de su función fiscalizadora, para ese caso concreto, no le cubra. Esta situación es la que se ha presentado en este caso.

Resolución del presente caso

Después de casar la sentencia de segunda instancia (en ejercicio de la función negativa), en la providencia judicial que antecede, se ha procedido a dictar la sentencia que pone fin a la presente controversia (en ejercicio de la función positiva). Estoy de acuerdo con esa forma de proceder, no así con las potestades resolutivas que se asumieron. Y es que luego de tomar en consideración los supuestos básicos del caso (y que habían sido establecidos hasta el momento de la segunda instancia), como los hechos controvertidos y la prueba producida, se dio respuesta a la cuestión que generó el debate en segunda instancia, en exceso al alcance la potestad resolutiva en el caso concreto, pues esta Sala concluyó que, "en el caso de autos, se han advertido una serie de inconsistencias en la declaración del testigo (...) no se le puede otorgar credibilidad a su declaración

en cuanto al hecho del despido, el nombre y el cargo de la persona que lo realizó, ya que están precisamente vinculados al cómo, cuándo y por qué tenía conocimiento de los mismos" (resaltado propio).

Fue en el acto en que se dio respuesta al punto controvertido en segunda instancia, que se delimitaron los alcances de la potestad resolutiva del tribunal de casación. Por tanto, esta Sala no estaba habilitada para extender su análisis al examen de cuestiones que, según el motivo, submotivo y concepto de la infracción invocados, estaban fuera del ámbito de su disponibilidad.

Al considerar que no se le podía otorgar credibilidad al testigo, no podía tenerse por acreditado el despido y, en consecuencia, la pretensión del demandante debió desestimarse. Sin embargo, bajo el argumento del principio de congruencia y el principio de comunidad de la prueba, esta Sala decidió "corroborar las demás pruebas vertidas en el proceso" (aunque en realidad no solo hizo eso, sino que dedujo consecuencias jurídicas a partir de las alegaciones efectuadas por la parte demandada). Tal extralimitación desnaturaliza la función que la casación debe desempeñar en este caso, ya que la Sala ha decidido abocarse al examen de alegaciones efectuadas por la parte demandada en primera instancia, al dar solución a la presente causa.

En efecto, al igual que la Cámara de segunda instancia, esta Sala examinó la excepción de improponibilidad de la demanda y las causales de despido sin responsabilidad del patrono, alegadas por la parte demandada en primera instancia. Seguidamente, expresó que la excepción de improponibilidad de la demanda, que se sustenta en la inexistencia del despido, es excluyente con el argumento de despido sin responsabilidad del empleador, razón por la cual aquella no fue objeto de análisis. Y respecto a las causales de despido, concluyó que no fueron comprobadas. En tal sentido, esta Sala sostuvo que, "Consecuencia lógica de haberse alegado una causal justificativa de despido por pérdida de confianza, por parte del patrono y no haberse comprobado, es que resulte irrelevante que se demuestre quien realizó el despido del trabajador (...)". Fue así como esta Sala, ejerciendo su potestad resolutiva, estimó la pretensión del demandante, lo cual se traduce en la condena de la sociedad demandada al pago de la indemnización por despido injusto y de las demás prestaciones laborales.

Tal decisión no la comparto, por cuanto, en este caso, la función positiva de la casación no habilitaba a que esta Sala se abocara al examen de las excepciones efectuadas por la parte demandada en primera instancia, en vista de que, al no ser un punto controvertido en segunda instancia, su estudio excede los límites del principio de congruencia, que era en esencia la regla de derecho que debía aplicarse e interpretarse adecuadamente, según las finalidades de este extraordinario recurso, como condición de la defensa de la ley y de la uniformidad de la jurisprudencia.

A mi juicio, la sentencia debió desestimar la pretensión del demandante, según las consideraciones ya expuestas.

Así mi voto.

Sala de lo Civil, número de referencia: 109-CAL-2022, fecha de la resolución: 09/06/2022

VOTO DISIDENTE DE LA MAGISTRADA DAFNE YANIRA SÁNCHEZ DE MUÑOZ

RECURSO DE CASACIÓN

EL RECURSO NO PROCEDE CUANDO NO EXISTE ARGUMENTACIÓN IMPUGNATIVA ASOCIADA AL CONTENIDO DEL ARTÍCULO 284 CPCM, DISPOSICIÓN CONSIDERADA VULNERADA, RESPECTO DEL CUAL EL JUEZ A QUO DEBIÓ PRONUNCIARSE; Y, SI AL AD QUEM SE HUBIERA PRONUNCIADA AL RESPECTO NO HABRÍA INCIDIDO EN LA DECISIÓN

"Dafne Yanira Sánchez de Muñoz, magistrada de la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia, en el incidente de casación 168-CAL-2022, emito voto disidente con base en los artículos 602 CT, y 20 y 220 CPCM, por no estar de acuerdo con la decisión que antecede, no obstante haber firmado la respectiva resolución, tal corno lo dispone el referido artículo. Fundamento mi voto en las consideraciones que expongo a continuación.

En la sentencia respecto de la cual disiento, se ha decidido, entre otros, casar la sentencia impugnada, por el motivo de infracción de ley, y por el submotivo relativo a cuando el fallo omitiere resolver puntos planteados. Entre los fundamentos que sustentan dicha decisión se encuentran los siguientes:

"No obstante, la apelante en el primer agravio referente a la errónea interpretación y errónea aplicación de los arts. 394, 396 inc. 2° y 416 CT, argumentó que la contestación de la demanda está referida a controvertir los hechos planteados en la misma, y que, la terminación contractual sin responsabilidad para el empleador constituye una excepción, pues esta, de ninguna manera podría considerarse como una forma de contestar la demanda con el propósito de extinguir a sustanciación del derecho o la pretensión, para ello, trajo a consideración el contenido e interpretación del art. 284 CPCM. Sobre el alegato anterior, no hay respuesta por parte de la Cámara, teniendo en cuenta que, el fundamento de la sentencia, en lo que respecta al primer agravio, está orientado a resolver lo relativo a la excepción interpuesta, el momento procesal oportuno y la forma para alegarla. De modo que, el tribunal de alzada omitió resolver el planteamiento de la abogada apelante en lo tocante al art. 284 CPCM".

Asimismo, en la sentencia que precede se sostiene que, "(...) al finalizar el examen de los considerandos de la sentencia de la Cámara Segunda de lo Laboral, con sede en esta ciudad, se concluye que efectivamente dicho tribunal cometió la infracción atribuida al omitir resolver el planteamiento de la abogada apelante en lo relativo al art. 284 CPCM; por tanto, corresponde casar la sentencia, y pronunciar la que conforme a derecho corresponde (art. 537 CPCM)".

Al respecto, debe tomarse en cuenta que, según se expresa en la misma sentencia respecto de la que emito este voto (páginas 3 y 4) el submotivo de casación que concierne, tiene lugar cuando "(...) la sentencia concede más de lo que el actor solicitó (ultra petitita); cuando conceda una cosa distinta a lo pedido, es decir, se pronuncia sobre determinados extremos al margen de lo suplicado por las partes (extra petita) y también si se dejan incontestadas y sin resolver

algunas de las pretensiones sostenidas por las partes (citrapetita)". Como se observa, el submotivo se configura sobre la base de que el tribunal competente no resuelve las *pretensiones o solicitudes* planteadas por las partes.

En segunda instancia, las pretensiones o solicitudes a resolver por el tribunal, son las que se plantean en el escrito de apelación o en su contestación, según el caso. Por tanto, en este caso, para calificar la configuración del submotivo de casación invocado, es necesario examinar los agravios o puntos de apelación formulados en el escrito de alzada.

Al analizar el recurso de apelación, se puede observar que la apelante, al exponer el primer agravio, invocó la "Errónea interpretación y errónea aplicación de los arts. 396 inciso segundo, 394 y 416 del Código de Trabajo". En esa parte del recurso, la recurrente únicamente hizo alusión al artículo 284 CPCM, para sostener que, al alegar la existencia de un despido justificado, lo hizo planteando tal aspecto como una excepción. Y en la parte petitoria del recurso, la apelante solicitó que se tuviera por interpuesto el recurso de apelación, entre otras razones, por la errónea aplicación e interpretación del artículo 284 CPCM.

Por tanto, la apelante no expresó agravios en cuanto a dicha disposición legal, sino que se limitó a citar su contenido para sustentar sus alegatos. En su recurso de apelación, no fundamentó, por ejemplo, la aplicación indebida, la aplicación errónea o la inaplicación de dicha disposición legal, como sí lo hizo respecto de los artículos 396 inciso 2°, 394 y 416 del Código de Trabajo.

Lo anterior es sumamente relevante para definir el marco de actuación del tribunal de alzada, en vista de que, ante la ausencia de uno de los elementos esenciales de un punto de apelación, como es la fundamentación del mismo, el referido tribunal no pudo, por ejemplo, haber concluido que el artículo 284 CPCM ha sido aplicado o interpretado erróneamente. De hacerlo, estaría supliendo la queja deficiente de la parte apelante y, a su vez, extendiendo indebidamente su ámbito de conocimiento, al resolver una cuestión respecto de la cual no se han aportado los elementos básicos para hacerlo. La Cámara sería incongruente si emitiera una resolución de fondo, respecto de una petición que no constituye, auténticamente, una petición impugnativa.

Tomando en cuenta la referida falta de fundamentación, lo que procedía era que la Cámara expresara que no podía entrar a resolver de fondo lo relativo al artículo 284 CPCM. Sin embargo, tal omisión no encaja en el vicio invocado, ya que el mismo solo tiene lugar cuando la omisión incide en la decisión de fondo. En este caso, el que no haya expresado la situación antes mencionada, no incide en la decisión que ha dictado, porque su pronunciamiento no afectaría en nada el fondo del asunto resuelto en la misma.

En ese sentido, es necesario tomar en consideración, en primer término, que el vicio de casación invocado (cuando el fallo omitiere resolver puntos planteados), se refiere a la omisión de resolver planteamientos relacionados con la *causa de pedir* (dar más de lo pedido, menos de los resistido, cosa diferente a la solicitada u omitir hacerlo), es decir, que los mismos deben estar relacionados

con auténticas pretensiones o excepciones. Tratándose de la segunda instancia, y según lo planteado en este caso, el vicio se refiere a la omisión de resolver los puntos de apelación.

En este caso, la petición relacionada con el artículo 284 CPCM, como ya lo he expresado, no cumple los requisitos para constituirse como un punto de apelación, de modo que no debía resolverse sobre el *fondo* del mismo en el fallo de la Cámara. Y el hecho de que la Cámara no haya expresado nada sobre su falta de fundamentación, tampoco configura el vicio denunciado, en vista de que un pronunciamiento de tan sentido, se limita a calificar *un requisito formal* de la petición que se planteó de forma deficiente, aspecto que no es objeto del vicio relativo a "Cuando el fallo omitiere resolver puntos planteados" (artículo 588 numeral 7 del Código de Trabajo).

Por otra parte, de acuerdo con la técnica casacional, para que una sentencia sea casada, es necesario que el vicio que se le atribuye tenga la capacidad suficiente para incidir en el contenido o alcance del fallo, En otras palabras, para que la casación proceda, es necesario que exista relación causal entre la infracción y la decisión pronunciada, de tal modo que, si la infracción no se hubiere cometido, la decisión sería distinta.

Precisamente, esa misma lógica es la que inspira el contenido del artículo 538 CPCM, el cual dispone que "El tribunal de casación desestimará el recurso cuando, *no obstante existir error en la fundamentación jurídica de la sentencia impugnada por ocurrir vicioso defectos que produzcan la infracción o errónea aplicación de la norma de derecho utilizadas para resolver el caso, se establezca que la sentencia es correcta y ajustada a derecho conforme a otros fundamentos y motivas jurídicos de derecho. En este caso, el tribunal de casación se limitará a corregir la motivación, dándole al fallo la adecuada fundamentación jurídica".*

En ese orden de ideas, el contenido del artículo 538 CPCM (si bien no resulta aplicable directamente en este caso, por referirse al error en la fundamentación, y no a la omisión de pronunciamiento), permite concluir que, la simple infracción a una norma de derecho, no es suficiente para casar una sentencia.

A mi juicio, la infracción denunciada no existe. Sin embargo, hago alusión al contenido del artículo 538 CPCM, con el fin de razonar que, el que la Cámara haya omitido las razones que le impedían pronunciarse, de fondo, sobre el artículo 284 CPCM (debido a un defecto formal, como es la falta de fundamentación), resulta una cuestión intrascendente que no permite casar la sentencia impugnada.

En conclusión, he advertido dos situaciones: que no existe argumentación impugnativa asociada al contenido del artículo 284 CPCM, respecto del cual el tribunal de alzada debió pronunciarse; y que, si bien la Cámara no hizo pronunciamiento alguno al respecto, el haberlo realizado, no habría incidido en el contenido y alcance de su decisión. En consecuencia, no existe razón alguna para casar la sentencia impugnada.

Por tanto, no comparto la decisión de casar la sentencia impugnada, ni el contenido de la sentencia pronunciada en consecuencia.

Así mi voto."

Sala de lo Civil, número de referencia: 168-CAL-2022, fecha de la resolución: 20/10/2022

VOTO DISIDENTE DE LA MAGISTRADA DAFNE YANIRA SÁNCHEZ DE MUÑOZ

CUANDO EL FALLO OMITIERE RESOLVER PUNTOS PLANTEADOS

LA SENTENCIA IMPUGNADA NO DEBIÓ DE HABER SIDO CASADA, YA QUE DEL ANÁLISIS SE EVIDENCIA QUE NO EXISTIÓ LA OMISIÓN QUE SE LE ATRIBUYE AL AD QUEM

"Dafne Yanira Sánchez de Muñoz, magistrada de la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia, en el incidente de casación 151-CAL-2022, emito voto disidente con base en los artículos 602 CT, y 20 y 220 CPCM, por no estar de acuerdo con la decisión que antecede, no obstante haber firmado la respectiva resolución, tal como lo dispone el referido artículo. Fundamento mi voto en las consideraciones que expongo a continuación.

En la sentencia respecto de la cual disiento, se ha decidido, entre otros, *casar* la sentencia impugnada, por la causa genérica de infracción de ley, y por el submotivo relativo a cuando el fallo omitiere resolver punto planteados. Entre los fundamentos que sustentan dicha decisión se encuentran los siguientes:

"Del incidente de apelación (folios […]), se advierte que la abogada apelante (...) basó la impugnación en seis puntos (...). En la inconformidad relativa a la nulidad del fallo y de la sentencia estimatoria, por falta de fundamentación (incongruencia interna y externa de la sentencia), la apelante argumentó que había incongruencia en la sentencia del tribunal de primera instancia, dado que aplicó supletoriamente el Código Procesal Civil y Mercantil a pesar de que existe disposición legal para la interposición de las excepciones en el CT, es decir, no hay falta de regulación, pues solamente cuando no se regula expresamente es posible la remisión que establece el art. 602 CT; y que la sustanciación y tramitación de las excepciones está regulada en el art. 394. En consecuencia de lo anterior, la abogada recurrente afirma que a decisión del tribunal de primera instancia es cuando a aplicar supletoriamente el CPCM es nulidad de forma absoluta. *Sobre el alegato que precede, no hay respuesta por parte de la Cámara (...)" De tal forma, el tribunal de alzada omitió resolver el planteamiento de la abogada (...) en los concerniente a que no se estaba frente a los supuestos para aplicar el CPCM, pues la tramitación de las excepciones debía hacerse de conformidad al art. 394 CP"* (resaltado propio).

Debe tomarse en cuenta que, según se expresa en la misma sentencia respecto de la que emito este voto (página 4), el submotivo de casación que concierne, tiene lugar cuando "(...) la sentencia concede más de lo que el actor solicitó (ultra petita); así mismo cuando concede una cosa distinta a lo pedido, es decir, se pronuncia sobre determinados extremos al margen de lo suplicado por las partes (extra petita) y también si se dejan incontestadas y sin resolver algunas de las pretensiones sostenidas por las partes (citrapetita)".

Según se advierte, el submotivo se configura sobre la base de que el tribunal competente no resuelve las *pretensiones o solicitudes* planteadas por las partes. En segunda instancia, las pretensiones o solicitudes a resolver por el tribunal,

son las que se plantean en el escrito de apelación o en su contestación, según el caso. Por tanto, en este caso, para calificar la configuración del submotivo de casación invocado, es necesario examinar los agravios o puntos de apelación formulados en el escrito de alzada.

Al analizar el recurso de apelación, se puede observar que la apelante, luego de exponer el cuarto agravio, relativo a la "Errónea interpretación y errónea aplicación del art. 281 del Código de Trabajo", alegó la *nulidad del fallo y de la sentencia estimatoria por falta de fundamentación, por incongruencia interna e incongruencia externa de la sentencia*. En síntesis, sostuvo que en el presente caso no era aplicable de forma supletoria el CPCM, motivo por el cual "deviene" la nulidad absoluta. Además, pidió que en caso de que no se tuviera por establecida la nulidad, se tuviera por interpuesta y probada la *excepción de terminación de contrato sin responsabilidad para el patrono, con sustento en el artículo 50 numeral 3 del Código de Trabajo.*

Por tanto, se advierte que la apelante denunció un vicio de nulidad y, eventualmente, pidió que se tuviera por interpuesta una excepción. Tales planteamientos constituyen auténticas peticiones, interpuestas a través del recurso de apelación, cuya omisión de resolver configura el vicio de casación alegado. Según la sentencia que precede, el tribunal de alzada omitió resolver lo relativo a la nulidad. Por tanto, es necesario examinar el contenido de la sentencia impugnada, para verificar si aquella fue resuelta o no.

Al dar lectura a la sentencia del tribunal de alzada, se advierte que, en el párrafo dos de los fundamentos de derecho, dicho tribunal advirtió que la apelante había denunciado una serie de nulidades, por lo cual estimó necesario entrar a conocer de ellas, aclarando que, en caso de no prosperar, se resolverían los demás agravios. En tal sentido, y después de realizar algunas valoraciones conceptuales acerca de las nulidades, en el párrafo 2.2 de sus fundamentos de derecho (página [...]), expresó que "lo expuesto por la recurrente no constituye un vicio de nulidad, sino que una serie de inconformidades al atacar la fundamentación y motivación de la señora Jueza A quo en su decisión judicial, por lo que, *las nulidades deben de ser declaradas sin lugar en esta instancia,* sin embargo, sus argumentos serán considerados como puntos de estudio en este incidente" (resaltado propio).

Como se observa, el tribunal de alzada dio respuesta a la denuncia de nulidad. Y a pesar de que, en el fallo de su sentencia, la Cámara se limitó a *confirmar la sentencia recurrida*, sin señalar, expresamente, que declaraba sin lugar las nulidades alegadas, tal cuestión constituye una mera formalidad que no incide en el contenido de su resolución, en cuanto que se que pronunció en el sentido de que las nulidades no procedían. Por tanto, no es cierto que la Cámara omitió resolver lo relativo a la denuncia de nulidad.

Incluso, en su recurso de casación, la abogada recurrente es imprecisa al momento de fundamentar el submotivo en estudio, por cuanto, al hacer referencia al punto que ahora se analiza, expresa que "Con la lectura del recurso de apelación que se interpuso en la Cámara Segunda de lo Laboral, se establece el

agravio planteado en la misma, el cua*l fue omitido su pronunciamiento, es decir, no se argumentó o motivó dicho agravio planteado, deviniendo de dicha actuación la nulidad de la Sentencia que se recurre, por omisión de pronunciamiento"*. Es decir, la recurrente confunde la omisión de resolver con la falta de fundamentación. Por tanto, es pertinente distinguir ambas situaciones.

La incongruencia tiene lugar cuando no existe correspondencia entre las peticiones planteadas por las partes y lo decidido por el juzgador; es decir, cuando no existe relación entre las pretensiones del actor o las excepciones del demandado, y lo resuelto por el juez. Así, existe incongruencia cuando la sentencia concede más de lo pedido (*ultra petita o plus petita*) o cosa distinta a la pedida por el demandante *(extra petita),* cuando se concede menos de lo resistido por el demandado *(citra petita)*, o cuando se dejan de resolver las peticiones debidamente planteadas por el demandante o el demandado *(omisión de resolver).* Dichas situaciones pueden producirse respecto de lo solicitado en primera instancia o en segunda instancia, y al presentarse, dan lugar a la infracción de los artículos 419 CT.

Por su parte, la falta de fundamentación consiste en la ausencia o en la deficiente exposición de los argumentos que conducen al juzgador a adoptar una decisión en particular. Dichos argumentos se construyen sobre la base de los hechos, el derecho y la prueba desahogada en el juicio. Por tanto, la ausencia de argumentos o la deficiente exposición de los mismos, puede referirse a los hechos, al derecho o a la prueba (lo cual no debe confundirse con los errores de valoración de la prueba, ni con la falta de relación de los hechos probados).

La motivación o fundamentación de la sentencia es un presupuesto básico de toda decisión judicial. Su inobservancia puede configurarse en primera instancia, en segunda instancia, o en casación. Los tribunales infringen el deber de motivar, cuando emiten una decisión que carece de una línea argumentativa que permita advertir que la misma es jurídicamente correcta. Lo anterior tiene lugar, por ejemplo, cuando dictan una sentencia asociada a un concepto jurídico indeterminado, sin que previamente se haya razonado por qué la situación que se analiza encaja en tal concepto. Lo que interesa es que el justiciable conozca las premisas argumentativas en las que se sustenta la decisión, con el fin de que puedan asentir en su contenido y alcance, o para que puedan reaccionar a través de la correspondiente impugnación.

Con frecuencia se incurre en el error de confundir la omisión de resolver con la falta de fundamentación. Sin embargo, tienen un contenido totalmente distinto. Y es que, a pesar de que ambas se caracterizan por expresar un defecto en el ejercicio de poder jurisdiccional (para el caso, la omisión de resolver, o la deficiente o inexistente fundamentación), cabe hacer la siguiente distinción: la primera, como ya se dijo, se produce al no existir correspondencia entre las peticiones y lo resuelto, en el sentido de que se deja de dar respuesta a lo solicitado por el actor o por el demandado; mientras que la segunda se genera cuando, pese a que hay respuesta a las peticiones, la misma carece total o parcialmente de las premisas argumentativas que le sirven de sustento.

También, en ocasiones se afirma, de manera errónea, que existe falta de fundamentación, cuando no se comparten las razones expuestas por el tribunal para adoptar una decisión. En tal supuesto, no se trata de falta de fundamentación, porque, aunque las razones o la decisión como tal no se compartan, en realidad existen argumentos que sustentan la respectiva resolución. En estas circunstancias se pueden alegar otro tipo de infracciones, como, por ejemplo, la interpretación errónea, la aplicación indebida o la inaplicación de ley, según corresponda. Se trata de infracciones que inciden en aspectos de fondo del debate, respecto de los cuales se puede generar la inconformidad con los argumentos adoptados por el tribunal.

Tomando en cuenta lo anterior, estimo que, en el presente caso, no existe la omisión que se le atribuye a la Cámara, por cuanto la misma fue clara al considerar que *las nulidades debían ser declaradas sin lugar en esa instancia*. Además, no debe perderse de vista que la recurrente no logra configurar el vicio denunciado, sino que hace referencia a la falta de motivación, cuestión que es objeto de control casacional a través de un submotivo de casación diferente al invocado. Por otra parte, es pertinente destacar que, en la sentencia y en el recurso de casación interpuesto, no existe relación, ni análisis, de la presunta norma infringida, lo cual es una condición elemental para casar una sentencia.

Por tanto, no comparto la decisión de casar la sentencia impugnada, ni el contenido de la sentencia pronunciada en consecuencia.

Así mi voto."

Sala de lo Civil, número de referencia: 151-CAL-2022, fecha de la resolución: 17/11/2022

VOTO PARCIALMENTE DISIDENTE DE LA MAGISTRADA DAFNE YANIRA SÁNCHEZ DE MUÑOZ

RECURSO DE CASACIÓN

LA SENTENCIA QUE SE EMITE DEBE SER ACORDE A LA VALORACIÓN DE LA PRUEBA TESTIMONIAL DE CARGO Y DE DESCARGO EN SU CONJUNTO, A LA LUZ DE LA SANA CRÍTICA; POR LO QUE, NO ES VIABLE PRESCINDIR DE LA REVISIÓN DE LA VALORACIÓN DE LA PRUEBA TESTIMONIAL DE DESCARGO

"Dafne Yanira Sánchez de Muñoz, magistrada de la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia, en el incidente de casación 269-CAL-2022, emito voto parcialmente disidente con base en los artículos 602 CT, y 20 y 220 CPCM, por no estar de acuerdo con una parte de la decisión que antecede, no obstante haber firmado la respectiva resolución, tal como lo dispone el referido artículo. Fundamento mi voto en las consideraciones que expongo a continuación.

En la sentencia respecto de la cual disiento, entre otros, se ha resuelto lo siguiente: "a) Cásase la sentencia recurrida por la causa genérica de infracción de ley, y el submotivo de error de derecho en la apreciación de la prueba testimonial, citando como disposición vulnerada el art. 461 CT. b) Decláranse sin lugar las excepciones opuestas y alegadas por el licenciado (...). c) Condénase a la demandada sociedad (...) a pagar al trabajador (...)".

Antecedentes

El abogado recurrente interpuso recurso de casación, por el submotivo de error de derecho en la apreciación de la prueba testimonial, invocando como precepto infringido el artículo 461 del Código de Trabajo (CT). En el concepto de la infracción, entre otros, sostiene que en primera instancia se recibió la declaración de una testigo de cargo, quien recibió total credibilidad por la Cámara de segunda instancia; y que se recibió la declaración de dos testigos de descargo, a quienes la referida Cámara les restó valor probatorio, "por considerar que a las testigos se les sugirió la respuesta".

En la sentencia que precede, se estimó dicho submotivo de casación, al advertirse que, "las preguntas formuladas por el abogado de la parte patronal, no sugieren la respuesta que se desea obtener, ya que no limitan o circunscriben las respuestas de las testigos a una respuesta cerrada". En ese sentido, se casó la sentencia y se procedió a dictar la correspondiente sentencia en su sustitución. Lo anterior en atención al contenido del artículo 537 CPCM, cuyo contenido es aplicable al presente caso, según lo dispuesto en los artículos 588 numeral 6) y 602 CT, el cual dispone que "*Si se casare la sentencia en cuanto al fondo, se dictará la que en su lugar corresponda".*

Ahora bien, la sentencia que se pronuncia en lugar de la sentencia casada, se dicta tomando en consideración el estado del proceso alcanzado en segunda instancia. Sin embargo, el tribunal de casación, al dictar dicha sentencia, ejerce sus potestades resolutivas tomando en cuenta el submotivo de casación y el concepto de la infracción que dieron lugar a casar la sentencia. Así, por ejemplo, si el submotivo se refiere a un vicio de incongruencia de la sentencia de segunda instancia, el tribunal de casación deber resolver las peticiones planteadas en segunda instancia, sin revisar cuestiones suscitadas o peticiones planteadas en primera instancia. Sin embargo, si el vicio se refiere a la errónea valoración de la prueba, es posible que los poderes del tribunal se extiendan a examinar cuestiones acaecidas en primera instancia (esto dependerá de que la revisión de la prueba también sea objeto del recurso de alzada).

En el presente caso, advierto que, en el recurso de apelación planteado por la parte demandada, *entre otros*, se alegó que la testigo de cargo tenía un interés ("que se le pagara a su ex compañero") y que no manifestó "el motivo del porqué ella se encontraba presente el día del supuesto despido" (sic), pese a que las testigos de descargo fueron unánimes en manifestar que el día "dieciséis de noviembre, a las 8:30 am, del año 2020, solamente se encontraban ellas en su lugar de trabajo". En síntesis, la parte recurrida advierte que existe contradicción en el dicho de las testigos de cargo y de descargo. Por ello, se alega que "*el juez debió hacer una valoración en conjunto de las pruebas vertidas* tanto de cargo y descargo".

En consecuencia, al haberse casado la sentencia por un submotivo directamente relacionado con la apreciación de la prueba testimonial, y al haberse planteado en el recurso de alzada aspectos relacionados con la valoración de la prueba, efectuada por el juez de primera instancia, la sentencia que sustituye a la sentencia casada debe pronunciarse sobre la prueba testimonial de cargo y de descargo, con el fin de resolver el proceso conforme a Derecho corresponde.

No obstante, en la sentencia respecto de la cual emito este voto, se sostiene que "para comprobar las excepciones alegadas el recurrente presentó prueba testimonial; sin embargo, las mismas no guardan relación con los hechos expuestos, a través de los mecanismos de defensa "excepciones" planteados por el apoderado de la demandada, es decir, que no son conducentes respecto de los hechos que se pretendían establecer en el proceso. Por tal razón las declaraciones de las testigos de descargo, señoras MHE y RSMC, *no serán objeto de análisis"* (resaltado propio).

No comparto el anterior criterio, debido que, a mi juicio, no es viable prescindir de la revisión de la valoración de la prueba testimonial de descargo, por cuanto la misma constituye uno de los principales puntos de impugnación de la alzada, y esta debe ser resuelta íntegramente, una vez casada la sentencia de segunda instancia. Además, de que el submotivo de casación estimado en este grado de conocimiento, vincula al tribunal de casación a apreciar la prueba testimonial de forma correcta.

Por tanto, a mi juicio, es necesario examinar la prueba testimonial de cargo y de descargo en su conjunto, a la luz de la sana crítica, para emitir la resolución que conforme a derecho corresponde. Y considerando que ese medio no ha sido examinado, no se ha agotado el análisis del material probatorio que permita llegar a la convicción de que el presunto despido ha tenido lugar en los términos alegados. Por tanto, dada la relevancia que pudiera tener el análisis de dicho medio de prueba, es que no acompaño la sentencia dictada por esta Sala, en lo relativo a la decisión de fondo que amerita el presente asunto. Es así como acompaño la decisión que casar la sentencia, más no la que se ha pronunciado en sustitución de esta, por las razones ya expuestas.

Así mi voto."

Sala de lo Civil, número de referencia: 269-CAL-2022, fecha de la resolución: 01/12/2022

VOTO PARCIALMENTE DISIDENTE DE LA MAGISTRADA DAFNE YANIRA SÁNCHEZ DE MUÑOZ

EXCEPCIONES

CUANDO LOS HECHOS Y SITUACIONES QUE CONSTITUYEN LA EXCEPCIÓN SE CONOCEN CON ANTERIORIDAD A LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA, LA MISMA DEBE ALEGARSE CON LA CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA, CASO CONTRARIO, DEBERÁ DE RECHAZARSE POR INTERPONERSE DE FORMA EXTEMPORÁNEA

"Dafne Yanira Sánchez de Muñoz, magistrada de la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia, en el incidente de casación 172-CAL-2022, emito voto parcialmente disidente con base en los artículos 602 CT, y 20 y 220 CPCM, por no estar de acuerdo con una parte de la decisión que antecede; no obstante haber firmado la respectiva resolución, tal como lo dispone el último de los referidos artículos. Fundamento mi voto en las consideraciones que expongo a continuación.

En la sentencia respecto de la cual disiento, se ha resuelto, entre otros, lo siguiente: "a) Cásase la sentencia recurrida por la causa genérica de infracción de ley y el submotivo relativo a cuando el fallo omitiere resolver puntos planteados. b) Declárase haber lugar a la excepción de terminación de contrato sin responsabilidad para el empleador, de conformidad a la causal 3ª del art. 50 CT. c) Absuélvese a la sociedad demandada (...)".

Sin embargo, si bien comparto la decisión de casar la sentencia impugnada, soy del criterio de que no procede estimar la excepción alegada, ni absolver a la parte demandada. Las razones las expongo a continuación.

Sobre la resolución de la excepción interpuesta

En la resolución que precede, luego de estimar el submotivo de casación invocado, se ha procedido a justificar la sentencia que se dicta en sustitución de la impugnada, tomando en consideración los puntos de agravio expuestos por la parte apelante en su recurso de alzada.

En ese sentido, se procedió a examinar el agravio relativo a *la errónea interpretación y aplicación de los artículos 394 y 416 CT*. En dicho punto, en esencia, se analizó cuál es el momento oportuno para que la parte demandada pueda alegar excepciones, tomando en consideración que el juzgado de primera instancia consideró que, dicho momento procesal, lo constituye la *contestación de la demanda.*

Agotado el análisis correspondiente, en la sentencia respecto de la cual emito este voto, se expresa lo siguiente: "Recapitulando en el tema de las excepciones; este tribunal enfatiza que *pueden oponerse a partir de la contestación de la demanda, en la etapa probatoria y hasta antes del cierre del proceso* (tratándose de las materiales); en tanto, las partes pueden controvertir argumentos y presentar pruebas para oponerse a las presentadas por la contraria, es decir, el cierre del proceso pone fin al debate (...)" (resaltado propio).

Sobre la base de las anteriores consideraciones, se advirtió que la abogada de la parte demandada, opuso y alegó la excepción de terminación de contrato sin responsabilidad para el empleador, por la causal 3ª del artículo 50 CT, *antes del cierre del proceso*. En tal sentido, se consideró que las excepciones se interpusieron en un momento procesal oportuno.

Seguidamente, se procedió a examinar el contenido de dichas excepciones. Agotada dicha fase, se declaró "haber lugar a la excepción de terminación de contrato sin responsabilidad para el empleador, de conformidad a la causal 3ª del art. 50 CT"; y, en el fallo, se absolvió a la sociedad demandada, de los reclamos planteados por la trabajadora.

Sin embargo, considero que, en el presente caso, las excepciones no fueron planteados en el momento procesal oportuno, tal como lo analizo y expongo a continuación.

Normativa aplicable para definir la etapa procesal para alegar excepciones

El artículo 393 CT, establece lo siguiente: *"La excepción de incompetencia de jurisdicción por razón del territorio*, deberá oponerse dentro del término comprendido entre la fecha de la citación a conciliación y la fecha de la audiencia conciliatoria".

Por su parte, el artículo 394 CT, dispone lo siguiente: *"Las demás excepciones de cualquier clase podrán oponerse en el momento en que, de acuerdo con este Código, resultare oportuno, en cualquier estado del juicio y en cualquiera de las instancias; y su oposición deberá hacerse en forma expresa"* (resaltado propio).

Como se advierte, la normativa laboral prevé un espacio procesal amplio para alegar excepciones, al disponer que las mismas pueden interponerse "(...) en el momento en que, de acuerdo con este Código resultare oportuno, en cualquier estado del juicio". Sin embargo, dicha regulación, resulta en una *indeterminación, la cual debe ser precisada conforme* a los principios y garantías procesales, y, por supuesto, en absoluto respeto a los derechos de las partes en contienda; teniendo en cuenta la especial naturaleza del derecho laboral, y las normas y principios constitucionales aplicables.

A partir de las anteriores consideraciones, resulta clara la necesidad de precisar, a partir de los parámetros expresados, el margen procesal dentro del cual es procedente alegar y oponer las excepciones.

Trasladándonos a la sentencia respecto de la que emito el voto, puede advertirse que se ha realizado un esfuerzo interpretativo del artículo 394 CT, en relación al contenido del artículo 416, ambos del CT. Este último dispone que, *vencido el término probatorio, producidas las pruebas en él, se señalará día y hora, con tres días de anticipación por lo menos, para declarar cerrado el proceso. Dictado el auto de cierre, sin perjuicio de lo dispuesto en el Art. 398, no se admitirá a las partes prueba de ninguna clase en primera instancia, y se pronunciará sentencia dentro de los tres días siguientes.*

Del análisis conjunto de las mencionadas disposiciones, se ha concluido en la sentencia, que las excepciones pueden oponerse *a partir de la contestación de la demanda, en la etapa probatoria y hasta antes del cierre del proceso.*

Sin embargo, considero que el artículo 416 CT, solo puede constituir uno de los aspectos a tomar en cuenta para la delimitación de los momentos procesales en los que se pueda alegar y oponer excepciones. La base para la definición que se pretende, debe ser más amplia, tal como se mencionó al inicio de este voto

Así, la oportunidad para alegar y oponer excepciones, se ve limitada por el derecho de defensa de la contraparte, el principio de legalidad, y el principio de buena fe.

En relación con el primer aspecto, debe considerarse que, las excepciones de cualquier clase *(diferente a la excepción de incompetencia en razón del territorio), pueden alegarse y admitirse, siempre y cuando no se restrinja el derecho y la oportunidad de la contraparte para reaccionar en debida forma en su defensa.* Este derecho fundamental se integra al núcleo del derecho a un debido proceso que, a su vez, constituye un componente del derecho a la protección jurisdiccional, reconocido en el artículo 2 inciso 1º in fine Cn.

Por tanto, los derechos constitucionales antes mencionados exigen que la posibilidad de alegar excepciones que prevé el artículo 394 CT, se limite a un marco temporal, en el transcurso del proceso, delimitado, en primer término, por

el *principio de contradicción,* en el sentido de que debe existir la posibilidad real de que la contraparte pueda defenderse, alegando y aportando las pruebas pertinentes, con relación a la excepción que se ha interpuesto en su contra.

Por otra parte, resulta esencial que el planteamiento de *excepciones y sus consecuencias procesales, no conduzca a la alteración de la estructura legalmente prevista para el juicio laboral, de tal manera que no exija la creación o habilitación de otras fases procesales, adicionales a las previstas por el legislador.*

La alteración de la estructura del proceso implicaría una violación al principio de legalidad, previsto en el artículo 86 inciso 3º Cn y desarrollado de manera precisa en el art. 3 CPCM. También podría conllevar a la vulneración de la seguridad jurídica, que exige la certeza del derecho. Y es que, si bien la normativa del Código de Trabajo genera problemas para determinar hasta qué momento se pueden alegar excepciones (diferentes a la de incompetencia por razón del territorio), esto no puede implicar una potestad a los juzgadores para crear un *proceso ad-hoc,* mediante la ampliación, modificación o creación de etapas procesales.

Con base en lo expuesto, no resulta conforme a la Constitución, admitir excepciones que se opongan en una etapa en la que, dado el carácter *sorpresivo* de aquellas, produzcan una limitación a la posibilidad de reacción de la contraparte, o conduzcan al juzgador a tomar decisiones que alteren el diseño del proceso laboral. Esto sucede, por ejemplo, cuando la excepción se interpone después del término probatorio y antes del cierre del proceso.

Por otra parte, y desde otro punto de vista, a efecto de dilucidar el punto analizado, resulta indispensable tomar en consideración, *la naturaleza de la excepción alegada. No puede admitirse, por ejemplo,* excepciones que se planteen en una fase que pueda reflejar un abuso del derecho o una práctica procesalmente fraudulenta.

Por tanto, resulta necesario analizar en cada caso, la *naturaleza de la excepción alegada*, porque puede suceder que la excepción sea consecuencia de un hecho sobrevenido, o de carácter extraprocesal, como cuando el empleador alega excepciones cuyos hechos han ocurrido con posterioridad a la contestación de la demanda. Por ejemplo, cuando alega el pago, el reinstalo, u otro tipo de acuerdo, producidos después del término probatorio y antes del cierre del proceso. En estos casos sería razonable admitir la excepción aún en esas fases procesales y debe considerarse opuesta de forma oportuna; decisión que resulta respetuosa del derecho de defensa y de los principios de legalidad y de seguridad jurídica.

Sin embargo, es necesario considerar también, aquellos casos en los que el empleador alegue, después del término probatorio y antes del cierre del proceso, una excepción relacionada con hechos o situaciones que sucedieron con anterioridad a la promoción del juicio (por ejemplo, una causa de despido sin responsabilidad para el empleador, tal como la pérdida de confianza, que fue alegada en este proceso). En estos casos no resulta acorde a los principios y derechos antes relacionados, el tener por interpuesta la excepción, en esa etapa procesal.

El actuar del patrono en los términos antes expuestos, podría resultar violatorio del principio de buena fe, en vista de que el empleador, conoce las razones por las cuales dio por terminada la relación laboral, desde antes que el trabajador inicie el proceso. Además, podría traer como consecuencia la restricción o anulación del derecho de defensa. A la vez, puede conducir a alterar la estructura del proceso prevista por el legislador, con la consecuente violación al principio de legalidad.

En conclusión, soy del criterio de que la interpretación del artículo 394 CT, a la luz de los derechos y principios relacionados, es la que se ajusta al marco constitucional y legal, incluyendo los principios que nutren al derecho laboral. Y en tal sentido, el cambio de criterio que se plantea en la sentencia, respecto de la línea jurisprudencial establecida en el precedente 359-CAL-2022, debe ceñirse en el sentido que acá planteo.

Sobre lo acontecido en el presente caso

El término de prueba, en el presente caso, transcurrió en el período comprendido entre el *veinticuatro y el veintiocho* de mayo de dos mil veintiuno. Y el escrito, por medio del cual se opuso y alegó la excepción de terminación de contrato sin responsabilidad para el empleador, por la causal 3ª del art. 50 CT, fue presentado el *diez de agosto de dos mil veintiuno.*

Y tal como se expone en la sentencia que precede, se dejó sin efecto el señalamiento del cierre del proceso, y el mismo se reprogramó para el *veintitrés de septiembre de dos mil veintiuno,* con el fin de garantizar la defensa de la parte actora.

Como se observa, la parte demandada alegó y opuso excepción, después del término de prueba y antes del cierre del proceso. Dicha excepción es la causal de despido sin responsabilidad para el empleador, por *pérdida de la confianza*, prevista en el artículo 50 causal 3ª CT.

Dada la naturaleza de los hechos y situaciones que la sustentan, dicha excepción no fue interpuesta en una etapa procesal oportuna, ya que los mismos se conocían desde antes de la incoación del juicio laboral. Y porque, precisamente mediante ellas, el patrono ha pretendido justificar la legalidad del despido del demandante. Por tanto, constituyen la esencia de la defensa de la parte demandada.

De lo expuesto se concluye que, en el presente proceso, la excepción que se comenta debió alegarse en la contestación de la demanda. De tal manera que, al conocerse los hechos y situaciones que constituyen la excepción, con anterioridad a la interposición de la demanda, y tomando en cuenta la naturaleza de la excepción alegada; se garantice plenamente y, por tanto, con un margen de tiempo suficiente, el derecho de defensa del trabajador.

Además, no debe perderse de vista que, el juzgado de primera instancia se vio forzado a alterar la estructura del proceso, al dejar sin efecto el cierre del mismo, y reprogramarlo para un momento ulterior.

Por tanto, a mi parecer, la excepción fue interpuesta extemporáneamente. De allí, que no comparto la decisión de entrar a conocer de las mismas, y re-

solverla; y, en consecuencia, tampoco con la decisión de absolver a la parte demandada. Lo procedente era desestimar los agravios en el recurso de apelación, dejando incólume la decisión impugnada.

Así mi voto."

Sala de lo Civil, número de referencia: 172-CAL-2022, fecha de la resolución: 08/12/2022

VOTO PARCIALMENTE DISIDENTE DE LA MAGISTRADA DAFNE YANIRA SÁNCHEZ DE MUÑOZ

EXCEPCIONES

LAS EXCEPCIONES DE PÉRDIDA DE CONFIANZA Y POR REVELAR SECRETOS DE LA EMPRESA, ALEGADAS POR LA SOCIEDAD DEMANDADA, FUERON INTERPUESTAS EXTEMPORÁNEAMENTE, AL NO SER PRESENTADAS CON LA CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA, YA QUE LOS HECHOS SE CONOCÍAN CON ANTERIORIDAD A LA INTERPOSICIÓN DE LA DEMANDA

"Dafne Yanira Sánchez de Muñoz, magistrada de la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia, en el incidente de casación 167-CAL-2022, emito voto parcialmente disidente con base en los artículos 602 CT, y 20 y 220 CPCM, por no estar de acuerdo con una parte de la decisión que antecede; no obstante haber firmado la respectiva resolución, tal como lo dispone el último de los referidos artículos. Fundamento mi voto en las consideraciones que expongo a continuación.

En la sentencia respecto de la cual disiento, se ha resuelto, entre otros, lo siguiente: "a) Cásase la sentencia recurrida por la causa genérica de infracción de ley y el submotivo de interpretación errónea del art. 281 CT. b) Declárase haber lugar a la excepción de terminación de contrato sin responsabilidad para el empleador, de conformidad a las causales 3ª y 4ª del art. 50 CT. c) Absuélvese a la sociedad demandada (...)".

Sin embargo, si bien comparto la decisión de casar la sentencia impugnada, soy del criterio de que no procede estimar la excepción alegada, ni absolver a la parte demandada. Las razones las expongo a continuación.

Sobre la resolución de la excepción interpuesta

En la resolución que precede, luego de estimar el submotivo de casación invocado, se ha procedido a justificar la sentencia que se dicta en sustitución de la impugnada, tomando en consideración los puntos de agravio expuestos por la parte apelante en su recurso de alzada.

En ese sentido, se procedió a examinar el agravio relativo a la *errónea interpretación y aplicación de los artículos 394 y 416 del Código de Trabajo* (CT). En dicho punto, en esencia, se analizó cuál es el momento oportuno para que la parte demandada pueda alegar excepciones, tomando en consideración que el juzgado de primera instancia consideró que, dicho momento procesal, lo constituye la *contestación de la demanda.*

Agotado el análisis correspondiente, en la sentencia respecto de la cual emito este voto, se expresa lo siguiente: "Recapitulando en el tema de las excepciones, este tribunal enfatiza *que pueden oponerse a partir de la contestación de la demanda, en la etapa probatoria y hasta antes del cierre del proceso* (tratándose de las materiales); en tanto, las partes pueden controvertir argumentos y presentar pruebas para oponerse a las presentadas por la contraria, es decir, el cierre del proceso pone fin al debate (...)" (resaltado propio).

Sobre la base de las anteriores consideraciones, se advirtió que la abogada de la parte demandada, opuso y alegó la excepción de terminación de contrato sin responsabilidad para el empleador, por las causales 3ª y 4ª del artículo 50 CT, *antes del cierre del proceso*. En tal sentido, se consideró que las excepciones se interpusieron en un momento procesal oportuno, y no de forma extemporánea, como lo sostuvo el juzgado de primera instancia y la Cámara de segunda instancia (en la sentencia impugnada y casada).

Seguidamente, se procedió a examinar el contenido de dichas excepciones. Agotada dicha fase, se declaró "ha lugar a la excepción de terminación de contrato sin responsabilidad para el empleador, de conformidad a las causales 3ª y 4ª del art. 50 CT"; y, en el fallo, se absolvió a la sociedad demandada, de los reclamos planteados por la trabajadora.

Sin embargo, considero que, en el presente caso, las excepciones no fueron planteadas en el momento procesal oportuno, tal como lo analizo y expongo a continuación.

Normativa aplicable para definir la etapa procesal para alegar excepciones

El artículo 393 CT, establece lo siguiente: *"La excepción de incompetencia de jurisdicción por razón del territorio,* deberá oponerse dentro del término comprendido entre la fecha de la citación a conciliación y la fecha de la audiencia conciliatoria".

Por su parte, el artículo 394 CT, dispone lo siguiente: *"Las demás excepciones de cualquier clase podrán oponerse en el momento en que, de acuerdo con este Código, resultare oportuno, en cualquier estado del juicio y en cualquiera de las instancias; y su oposición deberá hacerse en forma expresa"* (resaltado propio).

Como se advierte, la normativa laboral prevé un espacio procesal amplio para alegar excepciones, al disponer que las mismas pueden interponerse "(...) en el momento en que, de acuerdo con este Código resultare oportuno, en cualquier estado del juicio". Sin embargo, dicha regulación, resulta en una *indeterminación, la cual debe ser precisada conforme* a los principios y garantías procesales, y, por supuesto, en absoluto respeto a los derechos de las partes en contienda; teniendo en cuenta la especial naturaleza del derecho laboral, y las normas y principios constitucionales aplicables.

A partir de las anteriores consideraciones, resulta clara la necesidad de precisar, a partir de los parámetros expresados, el margen procesal dentro del cual es procedente alegar y oponer las excepciones.

Trasladándonos a la sentencia respecto de la que emito el voto, puede advertirse que se ha realizado un esfuerzo interpretativo del artículo 394 CT, en relación al contenido del artículo 416, ambos del CT. Este último dispone que, *vencido el termino probatorio, producidas las pruebas en él, se señalará día y hora, con tres días de anticipación por lo menos, para declarar cerrado el proceso. Dictado el auto de cierre, sin perjuicio de lo dispuesto en el Art. 398, no se admitirá a las partes prueba de ninguna clase en primera instancia, y se pronunciará sentencia dentro de los tres días siguientes.*

Del análisis conjunto de las mencionadas disposiciones, se ha concluido en la sentencia, que las excepciones pueden oponerse *a partir de la contestación de la demanda, en la etapa probatoria y hasta antes del cierre del proceso.*

Sin embargo, considero que el artículo 416 CT, solo puede constituir uno de los aspectos a tomar en cuenta para la delimitación de los momentos procesales en los que se pueda alegar y oponer excepciones.

La base para la definición que se pretende, debe ser más amplia, tal como se mencionó al inicio de este voto.

Así, la oportunidad para alegar y oponer excepciones, se ve limitada por el derecho de defensa de la contraparte, el principio de legalidad, y el principio de buena fe.

En relación con el primer aspecto, debe considerarse que, *las excepciones de cualquier clase (diferente a la excepción de incompetencia en razón del territorio), pueden alegarse y admitirse, siempre y cuando no se restrinja el derecho y la oportunidad de la contraparte para reaccionar en debida forma en su defensa.* Este derecho fundamental se integra al núcleo del derecho a un debido proceso que, a su vez, constituye un componente del derecho a la protección jurisdiccional, reconocido en el artículo 2 inciso 1º in fine Cn.

Por tanto, los derechos constitucionales antes mencionados exigen que la posibilidad de alegar excepciones que prevé el artículo 394 CT, se limite a un marco temporal, en el transcurso del proceso, delimitado, en primer término, por el *principio de contradicción*, en el sentido de que debe existir la posibilidad real de que la contraparte pueda defenderse, alegando y aportando las pruebas pertinentes, con relación a la excepción que se ha interpuesto en su contra.

Por otra parte, resulta esencial *que el planteamiento de excepciones y sus consecuencias procesales, no conduzca a la alteración de la estructura legalmente prevista para el juicio laboral, de tal manera que no exija la creación o habilitación de otras fases procesales, adicionales a las previstas por el legislador.*

La alteración de la estructura del proceso implicaría una violación al principio de legalidad, previsto en el artículo 86 inciso 3º Cn y desarrollado de manera precisa en el art. 3 CPCM. También podría conllevar a la vulneración de la seguridad jurídica, que exige la certeza del derecho. Y es que, si bien la normativa del Código de Trabajo genera problemas para determinar hasta qué momento se pueden alegar excepciones (diferentes a la de incompetencia por razón del territorio), esto no puede implicar una potestad a los juzgadores para crear un *proceso ad-hoc*, mediante la ampliación, modificación o creación de etapas procesales.

Con base en lo expuesto, no resulta conforme a la Constitución, admitir excepciones que se opongan en una etapa en la que, dado el carácter *sorpresivo* de aquellas, produzcan una limitación a la posibilidad de reacción de la contraparte, o conduzcan al juzgador a tomar decisiones que alteren el diseño del proceso laboral. Esto sucede, por ejemplo, cuando la excepción se interpone después del término probatorio y antes del cierre del proceso.

Por otra parte, y desde otro punto de vista, a efecto de dilucidar el punto analizado, resulta indispensable tomar en consideración, la *naturaleza de la excepción alegada*. No pueden admitirse, por ejemplo, excepciones que se planteen en una fase que pueda reflejar un abuso del derecho o una práctica procesalmente fraudulenta.

Por tanto, resulta necesario analizar en cada caso, la *naturaleza de la excepción alegada*, porque puede suceder que la excepción sea consecuencia de un hecho sobrevenido, o de carácter extraprocesal, como cuando el empleador alega excepciones cuyos hechos han ocurrido con posterioridad a la contestación de la demanda. Por ejemplo, cuando alega el pago, el reinstalo, u otro tipo de acuerdo, producidos después del término probatorio y antes del cierre del proceso. En estos casos sería razonable admitir la excepción aún en esas fases procesales y debe considerarse opuesta de forma oportuna; decisión que resulta respetuosa del derecho de defensa y de los principios de legalidad y de seguridad jurídica.

Sin embargo, es necesario considerar también, aquellos casos en los que el empleador alegue, después del término probatorio y antes del cierre del proceso, una excepción relacionada con hechos o situaciones que sucedieron con anterioridad a la promoción del juicio (por ejemplo, una causa de despido sin responsabilidad para el empleador, tal como la pérdida de confianza, que fue alegada, entre otras, en este proceso). En estos casos no resulta acorde a los principios y derechos antes relacionados, el tener por interpuesta la excepción, en esa etapa procesal.

El actuar del patrono en los términos antes expuestos, podría resultar violatorio del principio de buena fe, en vista de que el empleador, conoce las razones por las cuales dio por terminada la relación laboral, desde antes que el trabajador inicie el proceso. Además, podría traer como consecuencia la restricción o anulación del derecho de defensa. A la vez, puede conducir a alterar la estructura del proceso prevista por el legislador, con la consecuente violación al principio de legalidad.

En conclusión, soy del criterio de que la interpretación del artículo 394 CT, a la luz de los derechos y principios relacionados, es la que se ajusta al marco constitucional y legal, incluyendo los principios que nutren al derecho laboral. Y en tal sentido, el cambio de criterio que se plantea en la sentencia, respecto de la línea jurisprudencial establecida en el precedente 359-CAL-2022, debe ceñirse en el sentido que acá planteo.

Sobre lo acontecido en el presente caso

El término de prueba, en el presente caso, transcurrió en el período comprendido entre el *dos y el once de junio de dos mil veintiuno*. Y al examinar los autos, se advierte que, mediante escrito de fecha *treinta de julio de dos mil veintiuno*, recibido por el juzgado ese mismo día, la parte demandada alegó y opuso las excepciones de terminación de contrato sin responsabilidad para el empleador, por las causales 3ª y 4ª del art. 50 CT.

Y tal como se expone en la sentencia que precede, se dejó sin efecto el señalamiento del cierre del proceso, y el mismo se reprogramó para el *nueve de septiembre de dos mil veintiuno,* con el fin de garantizar la defensa de la parte actora.

Como se observa, la parte demandada alegó y opuso excepciones, después del término de prueba y antes del cierre del proceso. Dichas excepciones son las causales de despido sin responsabilidad para el empleador, por *pérdida de la confianza, y por revelar secretos de la empresa*, según lo previsto en el artículo 50 causales 3ª y 4ª, respectivamente, CT.

Dada la naturaleza de los hechos y situaciones que las sustentan, dichas excepciones no fueron interpuestas en una etapa procesal oportuna, ya que los mismos se conocían desde antes de la incoación del juicio laboral. Y porque, precisamente mediante ellas, el patrono ha pretendido justificar la legalidad del despido del demandante. Por tanto, constituyen la esencia de la defensa de la parte demandada.

De lo expuesto se concluye que, en el presente proceso, las excepciones que se comenta debieron alegarse en la contestación de la demanda. De tal manera que, al conocerse los hechos y situaciones que constituyen las excepciones, con anterioridad a la interposición de la demanda, y tomando en cuenta la naturaleza de las excepciones alegadas; se garantice plenamente y, por tanto, con un margen de tiempo suficiente, el derecho de defensa del trabajador.

Además, no debe perderse de vista que, el juzgado de primera instancia se vio forzado a alterar la estructura del proceso, al dejar sin efecto el cierre del mismo, y reprogramarlo para un momento ulterior.

Por tanto, a mi parecer, las excepciones fueron interpuestas extemporáneamente. De allí, que no comparto la decisión de entrar a conocer de las mismas, y resolverlas; y, en consecuencia, tampoco con la decisión de absolver a la parte demandada. Lo procedente era desestimar los agravios en el recurso de apelación, dejando incólume la decisión impugnada."

Sala de lo Civil, número de referencia: 167-CAL-2022, fecha de la resolución: 01/12/2022

NOTAS

1 Durante el contexto de la cuarentena domiciliar obligatoria, como reacción a la pandemia de la covid-19, la Sala de lo Constitucional habilitó la recepción de demandas a través de su correcto electrónico institucional. Véase, entre otras, la resolución pronunciada a las diez horas con cincuenta y cuatro minutos del veintiséis de marzo de dos mil veinte, dentro del proceso de habeas corpus 148-2020.

2 Harvey Brooks y Daniel Bell, cfr. **CASTELLS, Manuel**, *La sociedad red*, traducido al castellano por Carmen Martínez Gimeno, Alianza Editorial, p. 56.

3 Amplíese en **CASTELLS, Manuel,** *La sociedad red*, traducido al castellano por Carmen Martínez Gimeno, Alianza Editorial, páginas. 57-66.

4 La doctrina denomina a las capturas de pantalla (o *screenshot* en inglés) con el nombre de pantallazos. Y aunque no es un término comúnmente utilizado en la jerga jurídica nacional, en otras latitudes su uso resulta bastante frecuente. Al respecto, puede consultarse: **ROJAS ROSCO**, **Raúl**, *"La prueba digital en el ámbito laboral ¿Son válidos los pantallazos?, en AA.VV., La prueba electrónica. Validez y eficacia procesal,* Ricardo Oliva León y Sonsoles Valero Barceló (Coords.), Juristas del futuro (eBook), 2016. Asimismo, OLMOS GARCÍA, Mercedes, *La prueba digital en el proceso civil. Verificación y régimen legal,* Trabajo de fin de grado, bajo la tutoría de Luis F. Bermejo Reales, Universidad Pontificia Comillas, Madrid, 2017.

5 Vid. **OLMOS GARCÍA, Mercedes**, *La prueba digital en el proceso civil. Verificación y régimen legal,* Trabajo de fin de grado, bajo la tutoría de Luis F. Bermejo Reales, Universidad Pontificia Comillas, Madrid, 2017, p. 11.

6 Sobre estos conceptos, se ha dicho: "Las fuentes de prueba son los elementos que existen en la realidad, y los medios consisten en las actividades que es preciso desplegar para incorporar las fuentes al proceso. La fuente es anterior al proceso y existe independientemente de él; el medio se forma durante el proceso y pertenece a él. La fuente es lo sustancial y material; el medio, lo adjetivo y formal" (Vid. **MONTERO AROCA, Juan,** *La prueba,* Consejo General del Poder Judicial, Madrid, 2000, p. 45). También puede examinarse **OLMOS GARCÍA, Mercedes,** *Ob. cit.*, p. 11.

7 Vid. **BUENO DE MATA, E.**, *La prueba electrónica..., cfr*. **SÁNCHEZ HERNÁNDEZ, José**, *Estudio de la prueba electrónica en el proceso penal: especial referencia a las conservaciones de WhatsApp,* Trabajo de fin de título, Dirigido por Dra. Dª Marta del Pozo Pérez, Universidad de Salamanca, 2016, p. 8.

ÍNDICE

MATERIA: CIVIL Y MERCANTIL

Acción reivindicatoria de dominio sobre bienes afectados con servidumbre de electroducto y tránsito 1

Imposibilidad de estimar la pretensión debido a que se tiene certeza de la constitución de un derecho real sobre la propiedad que se pretende reivindicar, y no se determinó la ilegalidad de la servidumbre sobre la misma..... 1

Acción reivindicatoria..... 4

No puede probarse el derecho de dominio con la certificación registral, en virtud que esta no prueba el dominio sin justificar la imposibilidad de la obtención título en su reposición, lo cual tiene lugar siempre que se comprueba la pérdida del mismo 4

La prueba de la propiedad no se acredita con cualquier tipo de instrumento, sino con el título original debidamente inscrito en el registro respectivo..... 6

La parte actora, en el supuesto de encontrarse imposibilitada de tener en su poder el título original, debió reponer el mismo dirigiendo su petición al funcionario correspondiente, a fin de que le emita una nueva certificación del acta de remate y adjudicación en pago..... 6

No se acreditó debidamente el derecho de dominio, por la inobservancia de la jurisprudencia dictada por la sala de lo civil, respecto de las reglas establecidas en el art. 35 LTODARPRH 7

Procede casar la sentencia por aplicación indebida del artículo 375 del Código Procesal Civil y Mercantil, ya que la prueba pericial no es de obligatorio cumplimiento para singularizar el inmueble objeto de un proceso reivindicatorio 9

La ley ha concedido la acción reivindicatoria como una medida de protección al dominio, la cual tiene por objeto el reconocimiento del dominio y la restitución de la cosa a su dueño por el tercero que la posee 11

Certificaciones extendidas por el Registro de la Propiedad Raíz e Hipotecas 14

Valor probatorio 14

Contrato de promesa de venta 15

Inexistencia de aplicación errónea de los artículos 1360 y 1425 del Código Civil; pues, en el caso particular, al no formalizarse la venta por causa imputable a cualquiera de las partes, la acción pertinente a ejercer es la del artículo 1424 del Código Civil 15

El precio y el objeto son parte de la promesa de venta; por tanto, el incumplimiento del contrato se verifica hasta la finalización del plazo establecido 19

Inexistencia de la inaplicación del artículo 1431 del Código Civil, al comprobarse que la cámara en ningún momento desconoce la intención de las partes contratantes, atendiendo a la naturaleza del contrato de promesa de venta 19

Contratos de prestación de servicios profesionales 21

Ausencia de la infracción del artículo 98 inciso 1° CPCM, puesto que ha sido aplicado por ambas instancias 21

Cosa juzgada 22

La cancelación de la inscripción registral de la hipoteca y de la dación en pago no pueden ser objeto de un nuevo juzgamiento; debido a la cosa juzgada y a la imposibilidad de que un juez pueda anular la decisión de otro juez, a través de un proceso declarativo común 22

Se configura cuando las partes intervinientes, el objeto del litigio y la causa de pedir son los mismos en ambos procesos 23

Declaratoria indebida de la improcedencia de apelación 25

Procede ordenar a la cámara de segunda instancia la admisión de la alzada respecto de las finalidades contempladas en los numerales 2° y 3° del artículo 510 del Código Procesal Civil y Mercantil, una vez casado el auto impugnado 25

Procedencia 27

Procede casar el auto definitivo impugnado, en virtud que no se determina la inobservancia de forma sustancial de los requisitos de admisibilidad, resultando injustificado el rechazo de la apelación por razones formales 29

Los juzgadores, a fin de potenciar el derecho de defensa y contradicción, al momento de analizar un recurso, deben evitar rigorismos formales excesivos, y se encuentran en la obligación de hacer un esfuerzo intelectivo en su conjunto..... 31

En aplicación del principio *jura novit curia*, el juzgador se encuentra facultado para suplir la falta de precisión petitoria, cuando esté comprendida en una petición de naturaleza genérica 32

Declaratoria indebida de la inadmisibilidad de la apelación..... 32

Procede casar el auto impugnado, al haber negado la cámara el acceso a la justicia en segunda instancia, conculcando a los recurrentes derechos constitucionales y la norma invocada como infringida 32

Requisitos formales y de contenido de la alzada..... 33

Esta Sala considera que se configura la vulneración al derecho de audiencia y defensa, ya que limitó a la parte recurrente el ser oída en la segunda instancia, con lo cual también vulneró su derecho a la protección jurisdiccional 35

Procede casar el auto impugnado por vulneración del derecho a la protección jurisdiccional, al haber rechazado la cámara la alzada bajo un argumento rigorista que limita el derecho a recurrir..... 36

Denegación de prueba legalmente admisible..... 39

El auto impugnado debe confirmarse, pues no se verifica un concepto concreto que desarrolle la infracción invocada y que esté relacionado con la finalidad específica relativa a revisar una denegación de prueba 39

Esta Sala está facultada para determinar que el motivo concreto por rechazo indebido de la prueba no cumple con el elemento de pertinencia necesario para el análisis de la referida infracción, por lo que deberá declararse su inadmisibilidad..... 39

La sentencia impugnada será casada por este motivo de forma 41

Doctrina legal 43

Se produce infracción al vulnerar la jurisprudencia pronunciada por la Sala de lo Civil, surgida de la aplicación e interpretación del artículo 35 de la Ley Relativa a las Tarifas y otras Disposiciones Administrativas del Registro de la Propiedad Raíz e Hipotecas 43

Finalidad del recurso de casación..... 45

Definición de doctrina legal 45

Ejecución forzosa 48

Improcedencia del recurso de casación contra las resoluciones dictadas en esta fase..... 48

Extemporaneidad del recurso de casación 49

Trae como consecuencia la declaratoria de inadmisibilidad..... 49

Improcedencia del recurso de casación 51

Contra el auto simple que declara la nulidad de diferentes actuaciones procesales y ordena continuar con la sustanciación del proceso..... 51

Contra la resolución que resuelve la nulidad alegada, por tratarse de un auto simple..... 52

El documento que sirvió de base al proceso es un testimonio de escritura pública de mutuo hipotecario, por lo que no siendo un título valor el que ha dado origen al juicio ejecutivo mercantil, la resolución de que se ha recurrido no es objetable mediante el recurso de casación..... 53

Incongruencia de la sentencia 54

Ausencia de la infracción alegada 54

Esta Sala considera que ha habido incongruencia por haber omitido resolver dos puntos planteados en el recurso de apelación interpuesto 55

Infracción de los requisitos internos de la sentencia 57

Se produce por incongruencia en la sentencia, cuando la Cámara omite pronunciarse sobre un punto objeto de la apelación 57

Principios de motivación y congruencia 58

La omisión de una causa de pedir se vincula al debido proceso y al derecho de defensa, y la vulneración de este derecho hace que se incurra en el vicio de forma invocado 60

Infracción de requisitos externos de la sentencia 62

Configuración 62

La infracción denunciada, por haber omitido relacionar hechos probados, ha sido cometida por la Cámara sentenciadora, por lo que deberá declararse haber lugar a casar la sentencia que se ha hecho mérito ... 64

Intereses legales 66

La Cámara sentenciadora aplicó debidamente el inciso primero del artículo 1964 del Código Civil, dado que los contratantes no pactaron ningún tipo de intereses, y de conformidad con dicha disposición legal, no puede haber condena al pago de intereses legales 66

El inciso 2º del artículo 1964 del Código Civil, denunciado por el recurrente, no es pertinente para resolver el caso en litigio 68

Intereses moratorios 69

Ausencia de infracción, ya que la Cámara no aplicó el caso la regla 2° del artículo 1430 del Código Civil 69

Nulidad de contrato de arrendamiento 71

Se produce de oficio, por carecer de facultad o autorización para subarrendar un inmueble que es propiedad del Estado y, en consecuencia, para ejecutar otros negocios sobre el bien estatal 71

Nulidad de dación en pago 76

Procede casar el auto impugnado por infracción del artículo 277 del Código Procesal Civil y Mercantil 76

Procede anular la decisión de segunda instancia que rechazó liminarmente por improponible la pretensión de nulidad de instrumento de dación de pago..... 77

Nulidad del testamento..... 77

El vicio de aplicación errónea de la norma ha tenido lugar al interpretar que los artículos 292 y 293 del Código de Familia establecen como presupuesto procesal para promover un proceso de nulidad testamentaria, la declaratoria de incapacidad del testador..... 77

No existe legitimación procesal pasiva, pues si bien la notario ha tenido intervención en la realización del instrumento público cuya nulidad se pretende, no puede ostentar la calidad de parte demanda..... 79

Procede anular la decisión de la Cámara de Segunda Instancia y ordenar la reposición de la audiencia de apelación 80

Nulidad procesal insubsanable..... 81

Procede por haber incurrido la Cámara en infracción, no solo en cuanto a las formalidades imperativas del acto, sino en cuanto a los efectos prácticos para el ejercicio del derecho a recurrir, lesionando el derecho de defensa de la parte agraviada..... 81

La nulidad puede ser declarada en cualquier estado del proceso, esto incluye la segunda instancia y este grado de conocimiento, ya que la interposición de un recurso suspende la formación de la cosa juzgada tanto formal como material..... 82

El control de oficio de las nulidades procesales insubsanables es distinto a la denuncia de nulidad en vía de recurso a la que se refiere el art. 238 CPCM 83

No se puede declarar la nulidad de una parte de la sentencia, que es un todo, conforme a lo establecido en el inciso final del art. 212 Y 217 CPCM, pues no existe una divisibilidad de la sentencia..... 85

La Cámara no debió anular parcialmente la sentencia apelada, sino resolver sobre la cuestión o cuestiones objeto del proceso, incluso respecto de los cuales únicamente dispuso anular, debiendo haber conocido del fondo de las mismas 87

Nulidad procesal..... 88

Requisitos para su admisión..... 88

Nulidades alegadas en el recurso de casación..... 89

Solamente resulta viable la denuncia de nulidad en recursos que sean procedentes y que cumplan con los requisitos de admisión..... 89

Nulidades de inscripciones registrales..... 89

Al haberse declarado inadmisible el recurso de casación, respecto al motivo relativo a las nulidades de inscripciones, se confirma la desestimación de las mismas, debido a que con la inadmisión del recurso de casación adquirió firmeza esa decisión..... 89

Procede la anulación de todo lo actuado en lo referente a la acción reivindicatoria..... 90

Petición de herencia..... 91

Procede casar el auto impugnado, por interpretación errónea del artículo 1186 del Código Civil, ya que tendrá legitimación para actuar como parte demandante cualquier persona que pruebe poseer vocación sucesoral respecto de la herencia de que se trata..... 91

Prescripción extintiva de la acción ejecutiva..... 94

El plazo de prescripción, tanto la acción ejecutiva como la ordinaria, debe contabilizarse a partir del momento en que la obligación se vuelve exigible..... 94

Las disposiciones legales invocadas, tanto civiles como mercantiles, no prevalecen o predominan en el caso bajo examen, sino que se aplican de manera supletoria para realizar la forma del plazo de la prescripción..... 96

Procede casar la sentencia confirmatoria respecto de la pretensión de existencia de obligación mercantil..... 97

Prescripción extintiva de la acción hipotecaria..... 98

Esta sala advierte que la Cámara incurre en un error al inobservar el plazo de vencimiento de la hipoteca abierta..... 98

Procede acceder a la pretensión del actor, por cuanto no sólo ha vencido el plazo de la hipoteca abierta, sino que las acciones derivadas de las obligaciones crediticias relacionadas han sido declaradas prescritas judicialmente 100

Debido a la evolución del derecho hipotecario, en materia mercantil se han desarrollado aspectos que difieren de la regulación civil..... 101

Proceso de expropiación..... 103

Improcedencia del recurso de casación, puesto que la Ley de Expropiación de Terrenos para las Obras de Electrificación Nacional, ni el derecho adjetivo común establecen la impugnación por la vía casacional.... 103

Proceso de nulidad de diligencias de remedición de inmueble 104

La denuncia de aplicación errónea del artículo 15 de la LENJVYOD, no ha sido cometida por la cámara sentenciadora, pues las diligencias preliminares de exhibición de documentos no han sido consideradas como un presupuesto procesal para incoar la demanda 104

Para mejor proveer y esclarecer si se realizó o no la citación de todos los colindantes y acreditar si el notario cumplió con el procedimiento que indica la ley de la materia, es necesario que se aplique la excepción del art. 7 inc. 3° CPCM, en el sentido que el juez de primera instancia ordene que se presenten las diligencias originales de remedición ... 105

Configurado el motivo de inaplicación de ley; y dado que es necesario incorporar prueba para mejor proveer, procede anular la sentencia dictada en primera instancia 106

Revisión de la aplicación de las normas que rigen los actos y garantías del proceso 107

La finalidad del recurso de apelación está destinada a denunciar en segunda instancia nulidades procesales que pueden ser cometidas en el trámite del proceso o en la sentencia de fondo..... 107

Revisión de los hechos probados que se fijen en la resolución, así como la valoración de la prueba..... 108

Procede casar el auto impugnado, ya que a partir de los argumentos proporcionados es posible deducir la finalidad y objeto sobre el cual recae la revisión solicitada 108

Revisión de sentencia firme 109

Existe el vicio denunciado que hacen proceder a que se deje sin efecto la sentencia objeto de revisión; y en consecuencia, se rescindirá la sentencia impugnada por no estar ajustada conforme a derecho 109

Revisión del derecho aplicado para resolver las cuestiones objeto de debate 112

No se aplicó la figura de la cosa juzgada, no se configuraba el supuesto de enriquecimiento sin causa previsto en el 240 CN; de lo cual se deduce que el "error in iudicando" está referido a la inaplicación de estas normas, de modo que es viable admitir el recurso por esa razón 112

Revocatoria del auto de admisión de la casación 112

Voto disidente de la magistrada Dafne Yanira Sánchez de Muñoz 112

No existe razón legal alguna para denegar el recurso de revocatoria en contra del auto que admite el recurso de casación 112

Se revocará el auto mediante el cual se admitió el recurso de mérito, declarándose improcedente el mismo, debido a que el asunto que pretende el recurrente que sea revisado, ya no puede ser objeto de recurso, por haber adquirido firmeza durante el proceso 114

Servidumbre de electroducto y tránsito 116

La interpretación de las pruebas realizada por el tribunal de alzada, contraría el sentido otorgado a las disposiciones legales invocadas, debido a que se niega la oponibilidad frente a terceros de la servidumbre, sin que sea posible desconocer la constitución de ese derecho real 116

El dominio de un inmueble debe formalizarse a través de un instrumento público con el cual se perfeccionen todos los derechos que de éste se desprenden, tales como la tradición, posesión y demás derechos reales en torno al mismo 120

La interpretación de las pruebas realizada por el tribunal de alzada, contraría el sentido otorgado a las disposiciones legales, debido a que se niega la oponibilidad frente a terceros de la servidumbre de mérito, y en este caso, no es posible desconocer la constitución de ese derecho real 122

Sociedades cooperativas 124

Procede casar la sentencia por aplicación errónea del artículo 19 romano I del Código de Comercio, dado que la sociedad ha optado en su forma de asociarse de la manera en que se rigen las sociedades de personas, y en lo aplicable a su funcionamiento, se rige por las reglas de una sociedad anónima 124

Procede casar la sentencia por inaplicación del artículo 44 inc. 1 del Código de Comercio, al haber concluido la Cámara que la sociedad cooperativa estaba sujeta a las disposiciones de una sociedad de capital y no a las reglas de las sociedades de personas, ignorando con ello la voluntad de asociarse como característica principal de éstas..... 127

Procede casar la sentencia por aplicación indebida del artículo 156 del Código de Comercio, ya que al haberse concluido que la sociedad cooperativa se rige por las reglas de un sociedad de personas, se advierte que no se siguió el trámite establecido por dicha cooperativa para la admisión de nuevos socios o miembros 127

Procede desestimar la pretensión consistente en requerir judicialmente el cumplimiento de la obligación de inscripción en el libro de registro de accionistas y expedición de certificado de acciones..... 128

Suspensión del plazo para contestar la demanda 131

Imposibilidad de configurarse el impedimento por justa causa, ya que ante la ausencia por incapacidad del administrador único de la sociedad, puede entrar en funciones el administrador único suplente, quien es llamado a sustituirle..... 131

Para la tramitación de la suspensión de plazos se aplican las reglas generales de las cuestiones incidentales, las cuales pueden ser planteadas durante la tramitación del proceso y no después de decidido el asunto objeto del litigio mediante la sentencia respectiva 133

Tercería de dominio..... 134

Siendo el auto que decide sobre la tercería de dominio, un auto simple, el mismo carece de impugnabilidad objetiva en apelación y en casación 134

Voto concurrente de la magistrada Dafne Yanira Sánchez de Muñoz.. 136

Contrato de promesa de venta..... 136

La demanda de resolución del contrato es improponible, motivo por el cual, aún y cuando se incurrió en la infracción por inaplicación del artículo 1431 del Código Civil, no es procedente casar la sentencia de segunda instancia, sino corregir los fundamentos de la misma..... 136

Voto concurrente de la magistrada Dafne Yanira Sánchez de Muñoz.. 142

Improcedencia del recurso de casación 142

Cuando la decisión impugnada no produce efectos de cosa juzgada material 142

Voto concurrente de la magistrada Dafne Yanira Sánchez de Muñoz.. 143

Naturaleza de las resoluciones de segunda instancia 143

La providencia judicial dictada en segunda instancia, mediante la cual se confirma, revoca, anula o modifica una decisión pronunciada en primera instancia, constituye una sentencia definitiva..... 143

Voto disidente de la magistrada Dafne Yanira Sánchez de Muñoz..... 144

Revisión de sentencia firme..... 144

Imposibilidad de resolver el proceso de revisión y rescindir la sentencia impugnada, cuando lo que legalmente corresponde es convocar y celebrar la respectiva audiencia única..... 144

Voto disidente de la magistrada Dafne Yanira Sánchez de Muñoz..... 148

Recurso de casación..... 148

No procede rechazar el recurso de casación sobre la base de que la resolución impugnada se ha dictado en una Fase de ejecución..... 148

Voto disidente de la magistrada Dafne Yanira Sánchez de Muñoz..... 151

Nulidad procesal insubsanable..... 151

Es improcedente declarar de oficio, en el mismo auto de admisión del recurso, la nulidad de las actuaciones procesales ejecutadas en segunda instancia, pues con ello se vulnera el derecho de defensa y el derecho de recurrir de la parte recurrida..... 151

Voto disidente de la magistrada Dafne Yanira Sánchez de Muñoz..... 153

Proceso de expropiación..... 153

La legalidad de las actuaciones realizadas por los tribunales en materia expropiatoria deben estar sujetas al control de la jurisdicción contencioso administrativa..... 153

Voto disidente de la magistrada Dafne Yanira Sánchez de Muñoz..... 158

Recurso de casación..... 158

Posibilidad de conocer sobre el motivo que declaró improcedente el recurso de apelación, no obstante que el proceso ejecutivo esté fundado en un contrato de mutuo y no en un título valor..... 158

Voto disidente de la magistrada Dafne Yanira Sánchez de Muñoz..... 160

Suspensión de plazos..... 160

Procede convocar y celebrar la audiencia única, siguiendo las reglas del proceso abreviado, para que las partes expresen sus planteamientos, a fin de garantizar sus derechos de audiencia y defensa 160

Voto disidente de la magistrada Dafne Yanira Sánchez de Muñoz..... 161

Resoluciones de segunda instancia..... 161

La providencia judicial dictada en segunda instancia mediante la cual se confirma, revoca, anula o reforma una decisión pronunciada en primera instancia, constituye una sentencia definitiva dentro del incidente de apelación..... 161

Voto disidente de la magistrada Dafne Yanira Sánchez de Muñoz..... 162

Nulidades alegadas en el recurso de casación..... 162

La Sala de lo Civil no está facultada legalmente para calificar y resolver el vicio de nulidad alegado, antes que el recurso de casación haya sido admitido; tampoco puede resolverse la denuncia de nulidad en el mismo auto de admisión 162

Inexistencia de precepto legal que habilite a la Sala de lo Civil a calificar o resolver las peticiones de nulidad procesal antes de pronunciarse sobre la admisibilidad del recurso de casación..... 163

Imposibilidad que la Sala de lo Civil en el auto de admisión del recurso de casación efectúe valoraciones relacionadas con el fondo del mismo 164

Los vicios de nulidad sustantiva deben resolverse al momento de dictar una resolución sobre el fondo del recurso, luego de que se haya agotado el trámite del incidente de casación..... 165

La potestad de control de oficio de las nulidades sustantivas está sujeta a límites..... 165

Voto disidente de la magistrada Dafne Yanira Sánchez de Muñoz..... 166

Intereses legales..... 166

Configuración de la infracción al artículo 1964 inciso 1° del Código Civil 166

La mora en el cumplimiento de las obligaciones de pagar una suma de dinero habilita el reclamo del interés legal, por constituir una avaluación de prejuicios legal por mora, sin que este reclamo tenga como condición el ejercicio de una pretensión indemnizatoria, ni la necesidad de probar la existencia de los daños cuando solo se cobran intereses. 168

Si la obligación es de pagar una cantidad de dinero y el deudor ha incurrido en mora, la avaluación legal de perjuicios consiste en que el legislador habilita automáticamente el reclamo del interés legal, en los casos que prevé la regla P del artículo 1430 del Código Civil..... 170

Voto disidente de la magistrada Dafne Yanira Sánchez de Muñoz..... 171

Acción reivindicatoria de dominio sobre bienes afectados con servidumbre 171

El análisis probatorio que ha realizado la Sala en su sentencia, solo habría sido posible, en el caso de que la interpretación errónea analizada en la sentencia de casación, se refiriera a algún aspecto relacionado con la revisión de la valoración de la prueba, situación que no se ha dado en el presente caso 171

Voto disidente de la magistrada Dafne Yanira Sánchez de Muñoz..... 173

Proceso de nulidad de diligencias de remedición de inmueble 173

Ordenar que se presenten las diligencias originales de remedición, constituye una actividad que refleja la introducción de prueba de oficio y no la simple potestad de ordenar diligencias para mejor proveer, con el fin de esclarecer algún punto oscuro o contradictorio, que regula el art. 7 inciso 3° CPCM..... 173

Voto disidente de la magistrada Dafne Yanira Sánchez de Muñoz..... 177

Sociedades cooperativas 177

Se concluye que es una sociedad cooperativa sujeta al régimen normativo general de las sociedades anónimas y con regulación especial en lo relativo a la admisión de socios 177

Imposibilidad de advertir que la cámara haya otorgado un significado equivocado al artículo 19 romano I del Código de Comercio, por concluir que la sociedad demandada sea una sociedad de naturaleza anónima o regida por las normas propias de dicha clase de sociedad . 180

Ausencia de infracción al artículo 44 inciso 7° del Código de Comercio, ya que al no ser la sociedad demandada una sociedad de personas, no le era aplicable dicha disposición legal..... 181

Ausencia de aplicación indebida del artículo 156 inciso 1° del Código de Comercio, ya que por tratarse de una sociedad cooperativa con régimen de sociedad anónima, no debería existir la negativa de inscribir a la demandante en el libro de accionistas..... 182

Voto disidente de la magistrada Dafne Yanira Sánchez de Muñoz..... 183

Procedencia del recurso de casación 183

No comparto que en esta etapa del incidente se afirme que el recurso de casación interpuesto es improcedente, por el hecho de que la resolución impugnada es un auto simple que no admite apelación ni casación..... 183

Voto parcialmente disidente de la magistrada Dafne Yanira Sánchez de Muñoz 186

Acción reivindicatoria de dominio 186

La advertencia de un defecto que vuelve improponible la demanda reivindicatoria de dominio, no habilita a esta sala a realizar un pronunciamiento de fondo sobre las pretensiones de nulidad, como es la confirmación de las mismas 186

La certificación registral del título constituye prueba idónea del derecho de dominio; sin embargo, el legislador en el artículo 35 LTODARPRH, ha establecido un orden preferente en relación con los medios para acreditar el mismo 187

Voto razonado de la magistrada Dafne Yanira Sánchez de Muñoz 188

Extemporaneidad del recurso de casación 188

Al no haberse interpuesto revocatoria respecto de la decisión impugnada, los argumentos para declarar extemporáneo el recurso de casación son innecesarios 188

Del contenido del artículo 506 del Código Procesal Civil y Mercantil, no se deriva ninguna idea que permita definir el momento en que comienza a trascurrir el plazo para interponer el recurso de casación 189

Es innecesario e improcedente hacer referencia al artículo 501 inciso 2° del Código Procesal Civil y Mercantil, cuando previamente al recurso de casación no se ha interpuesto solicitud de aclaración 189

MATERIA: FAMILIA

Alimentos 190

Improcedencia contra resoluciones dictadas en procesos de divorcio, en lo concerniente a la obligación de alimentos, ya que se trata de una pretensión susceptible de reforma, siendo su resolución de aquellas que no causan autoridad de cosa juzgada material 190

Declaratoria judicial de unión no matrimonial 191

La debida acreditación de la calidad de heredero o herederos del conviviente fallecido es un presupuesto procesal que no puede eludirse previo a la admisión de la demanda 191

Si el juez de primera instancia admite la demanda sin que se haya acreditado la calidad de herederos del conviviente fallecido o el nombramiento de un curador, dicho acto constituye un vicio que acarrea nulidad insubsanable de lo actuado 194

Diligencias de ejecución forzosa 195

Improcedencia del recurso de casación 195

Diligencias de declaratoria de incapacidad y nombramiento de tutor 196

Improcedencia del recurso de casación, por no causar autoridad de cosas juzgada, ya que son susceptibles a modificación 196

Pérdida de la autoridad parental 198

No se configura la causal segunda contemplada en el art. 240 del CF, cuando el supuesto abandono por parte del padre no ha sido con el ánimo de dañar y afectar moralmente al niño; ya que tal situación, es a consecuencia de la relación disfuncional que sostienen ambos progenitores 198

Proceso de divorcio 202

Nulidad de las actuaciones cuando la parte demandada alega excepciones y éstas no son resueltas dentro del proceso 202

Cuando en los procesos hay menores de edad involucrados, los juzgadores tiene la obligación de brindarles la oportunidad de opinar y pronunciarse en aquellas circunstancias que atañen a sus derechos, caso contrario procederá declarar la nulidad de las actuaciones 202

Recurso de casación 205

Improcedencia contra la resolución dictada en segunda instancia que confirma la declaratoria de inadmisibilidad de la demanda 205

Recurso de revisión 207

Su conocimiento sólo es posible respecto de sentencias que adquirieren estado de cosa juzgada material, y que fueron dictadas en procesos tramitados a partir de la vigencia del Código Procesal Civil y Mercantil 207

Requiere para su procedencia que se recurra de una sentencia que tenga efectos de cosa juzgada 208

Resoluciones pronunciadas en la fase de ejecución de la sentencia.. 208

Los actos procesales que se realizan en la fase de ejecución tienen como finalidad lograr o satisfacer concretamente el interés de la parte, que ya tiene previamente un derecho cierto declarado judicialmente ... 208

Las resoluciones pronunciadas en la fase de ejecución no admiten casación 209

Sala de lo Civil 209

Facultad para declarar de manera oficiosa cualquier nulidad insubsanable 209

Uso de la vivienda familiar 210

El recurso de casación, por su finalidad y naturaleza, no concibe la impugnación en esta clase de procedimientos, puesto que sus efectos no son objeto de control por dicha vía recursiva..... 210

Voto concurrente de la magistrada Dafne Yanira Sánchez de Muñoz.. 212

Alimentos 212

Improcedencia contra la sentencia que modificó la decisión pronunciada en primera instancia, en lo relativo a la prestación de alimentos y al pago de vivienda; no por la naturaleza de la resolución, sino por el contenido de lo resuelto 212

Voto concurrente de la magistrada Dafne Yanira Sánchez de Muñoz.. 213

Recurso de casación..... 213

Improcedencia contra la resolución dictada en segunda instancia, que confirma la declaratoria de inadmisibilidad de la demanda, no por la naturaleza de la resolución (auto), sino por el contenido de lo resuelto (que no adquiere efectos de cosa juzgada)..... 213

Voto concurrente de la magistrada Dafne Yanira Sánchez de Muñoz.. 214

Procesos de familia..... 214

El que un juez de primera instancia no resuelva sobre las excepciones planteadas en el proceso, no constituye un motivo para que la Sala de lo Civil declare de oficio la nulidad de lo actuado 214

Parámetros que deben de tomarse en cuenta al momento de oír a un niño, niña o adolescente dentro de un proceso 216

El derecho del niño, niña o adolescente a "opinar y ser oído" depende de que su interés pueda verse afectado por la eventual decisión que se adopte en el proceso..... 217

Voto concurrente de la magistrada Dafne Yanira Sánchez de Muñoz.. 219

Recurso de casación..... 219

Procede contra resoluciones dictadas en la fase de ejecución forzosa, aplicando supletoriamente el Código Procesal Civil y Mercantil..... 219

Voto disidente de la magistrada Dafne Yanira Sánchez de Muñoz..... 221

Declaratoria de nulidad por falta de legitimación procesal pasiva 221

No se puede considerar como una nulidad insubsanable, por ende, la misma no puede ser tramitada dentro de la admisión del recurso de casación; específicamente, en procesos de declaratoria judicial de unión no matrimonial, cuando no se ha establecido quién es el heredero del conviviente fallecido 221

MATERIA:LABORAL

Aplicación de mensajería instantánea 225

Requisitos para que las impresiones de las conversaciones de la aplicación telefónica de whatsapp, se analicen y consideren prueba 225

La decisión tomada por el tribunal de alzada, para desestimar la prueba documental referida, es justificada y válida 226

Aplicación indebida de doctrina legal 227

Cuando de la sentencia a la que se hace referencia no configura doctrina legal, sino jurisprudencia..... 227

Aplicación indebida de ley 228

No existe vulneración del art. 347 CPCM, cuando el ad quem no tiene por aceptados los hechos que se le pretendían atribuir al trabajador, por la no comparecencia de éste a rendir la declaración de parte contraria, ya que la declaración del testigo de cargo constituía prueba en contrario 228

Procede al aplicar indebidamente la presunción de despido contenida en el art. 414 CT, ya que no se probó la calidad de representante patronal de quien ejecuto el despido, ni el trabajador aceptó el ofrecimiento de reinstalo..... 232

Cámaras de videovigilancia 233

Requisitos para que los videos se analicen y consideren como prueba 233

Contrato colectivo de trabajo..... 234

El documento idóneo para probar su existencia es la certificación extendida por el departamento correspondiente del Ministerio de Trabajo y Previsión Social..... 234

Interpretación errónea del art. 281 CT. Cuando el ad quem considera que para comprobar su existencia, basta con presentar copias simples 234

Contratos sujetos al derecho administrativo 236

Propios del funcionamiento de las instituciones públicas 236

La celebración, cumplimiento, ejecución y extinción está sujeto al derecho administrativo y, por ende, el conocimiento de las controversias que se susciten con relación a los mismos corresponde a la jurisdicción contencioso administrativa, y no a la laboral..... 238

Cuando el fallo omitiere resolver puntos planteados..... 239

Declaratoria de inadmisibilidad cuando el recurrente no tiene la calidad de apelante en segunda instancia 239

El ad quem comete la vulneración alegada en relación al art. 284 CPCM, cuando omite resolver la excepción interpuesta por la parte demandada 240

Denuncia de nulidad procesal de actuaciones en vía de recurso 242

Requisitos que deben cumplirse para su admisión..... 242

Dentro del examen de admisibilidad del recurso de casación no es procedente calificar la admisibilidad de las denuncias de nulidad..... 244

La denuncia no será admitida cuando el recurrente no describe el tipo de nulidad alegada, ni los argumentos que demuestren la configuración del supuesto de nulidad, sino que pretende que se anule la sentencia dictada en primera instancia..... 245

Despido indirecto 245

No es ejecutado directamente por el patrono o sus representantes, sino en el que se recurre a determinadas conductas para hacerlo; tal como negarle el ingreso al trabajador al centro de trabajo, por medio del personal de la empresa..... 245

Causal excepcional de terminación del contrato de trabajo cuyo propósito es provocar la terminación de la relación laboral con una estrategia distinta..... 247

Diferencia entre despido directo 248

Para condenar al pago de las prestaciones reclamadas en la demanda, es necesario probar el hecho de que al trabajador no le fue permitido el ingreso al centro de trabajo, en el horario que le corresponde desarrollar las actividades encomendadas..... 250

Documento privado autenticado de terminación de contrato individual de trabajo por mutuo acuerdo..... 252

El ad quem no comete la infracción alegada cuando el documento objeto de reclamo contiene inconsistencia que no permiten desacreditar las presunciones que operan a favor del trabajador..... 252

Error de hecho en la apreciación de la declaración de parte contraria 254

Procede la infracción alegada cuando no se justifican las razones del por qué no le mereció fe la declaración de parte contraria..... 254

Error de hecho en la apreciación de la prueba..... 262

El *ad quem* no comete el vicio alegado cuando en el documento objeto de reclamo se omite consignar el segundo apellido de la persona que ejecutó el despido, ya que no es suficiente para inferir que se trata de dos personas diferentes; pues de ser así, debió acreditarse en el proceso 262

No existe la infracción alegada cuando con las pruebas vertidas en el proceso no puede dar por acreditado el despido con el solo dicho del demandante 264

Excepción de falta de requisitos en la demanda..... 268

Cuando el trabajador demandante omite expresar su estado civil y nacionalidad en la demanda, tal omisión es un requisito de forma que no afecta de manera directa o indirecta al objeto del proceso, por lo tanto no puede ser objeto de nulidad..... 268

Alegar que se omitió relacionar las generales del representante legal de la sociedad demandada, es una mera inconformidad que no puede enmarcarse en una excepción, ya que no constituyen mecanismos de defensa que ataque el fondo del asunto controvertido 269

Excepción de improponibilidad de la pretensión..... 271

Supuestos que habilitan la improponibilidad..... 271

La improponibilidad no procede cuando el recurrente pretende un pronunciamiento sobre el fondo del asunto, ya que su argumento consiste en alegar que el despido no aconteció y la trabajadora no tenía el derecho a reclamar el pago de la indemnización..... 271

Excepción de pérdida de confianza..... 272

Procedencia 272

Excepción de prescripción de la acción de indemnización por despido 275

Plazo para que prescriba la acción de reclamo de indemnización por despido de hecho..... 275

Excepción por falta de legitimación activa 276

El reclamo de pago de indemnización por despido injusto le surge al trabajador, no por el hecho de haber sido despedido injustamente, como lo argumenta el recurrente, sino por la mera calidad de trabajador que posee 276

Excepción por falta de presunciones 278

No se puede configurar como una excepción, pues no tiene como objetivo atacar el fondo de la controversia de la que trata el proceso; en este sentido, si concurren los presupuestos para aplicar la presunción de despido establecida en el art. 414 CT, el juez está obligado a presumirla 278

Excepción por falta de veracidad y buena fe 278

Alcance del principio de buena fe 278

No tiene lugar cuando el recurrente no explica por qué enmarca su reclamo en el principio de veracidad y buena fe, ya que sus argumentos son aspectos que solo se pueden determinar mediante los mecanismos de defensa pertinentes y de la prueba presentada en el proceso . 279

Excepciones 280

El ad quem comete el vicio casacional “cuando el fallo omitiere resolver puntos planteados”, al tramitarlas aplicando supletoriamente el Código Procesal Civil y Mercantil y no como expresamente lo establece el Código de Trabajo 280

Momento procesal para interponerlas 281

Antes del cierre del proceso, las partes disponen de igualdad de condiciones para defenderse y controvertir las pruebas 285

Si se interpone en el séptimo día del término probatorio, ésta debe de admitirse siempre y cuando no se solicite audiencia para la presentación de testigos 289

Procedencia de la excepción de pérdida de la confianza 290

Finiquito 298

Documento objeto de reclamo carece de valor probatorio, no posee elementos básicos e indispensables para su validez en su literalidad, como son las cantidades de dinero que recibió el trabajador y en qué conceptos 298

Informes de auditoría 302

Requisitos para que pueda ser valorado en procesos laborales 302

Cuando el *ad quem* le resta valor probatorio por no cumplir con los requisitos legales, no incurre en la infracción de error de derecho en la apreciación de la prueba 304

Interpretación errónea de ley 305

Inexistencia, dado que se realizó un análisis completo para determinar si operaban a favor del trabajador las presunciones establecidas en el art. 414 CT, ante la falta de contrato escrito 305

Pérdida de confianza 309

Ocurre cuando el trabajador falta a la honradez y es deshonesto en el desempeño de sus funciones, quiebra la relación de confianza, transgrediendo la buena fe contractual, que es uno de los principios que inspiran la relación 309

Para comprobar que el trabajador ha viajado al exterior sin autorización de su empleador, no basta con presentar constancia extendida por el gerente de recursos humanos, hay que probar que se realizó el viaje 311

Principio de congruencia procesal 312

El ad quem no está en la obligación de pronunciarse sobre un aspecto que no fue controvertido por la parte interesada en el recurso de apelación, y que podría causar un mayor agravio a una de las partes 312

Inexistencia de violación 313

Vulneración del art. 419 CT, cuando no se manifiesta en cuanto a la inconformidad planteada por el apelante 316

Principio de reversión de la carga probatoria 323

Aplicación en materia laboral 323

Prueba documental 324

El *ad quem* no comete la infracción alegada cuando el documento objeto de reclamo no es parte de la prueba documental aportada al proceso 324

Prueba testimonial 327

El ad quem no comete el vicio alegado cuando manifiesta que lo depuesto por el testigo de cargo le generó convicción y certeza en cuanto a los hechos sobre los que testificó, considerando fútil que no dijera su cargo y el cargo de la persona a quien se le atribuyó el despido 327

Procede la vulneración alegada cuando el *ad quem* le niega credibilidad a los testigos de descargo, por considerar que con las preguntas realizadas por el apoderado de la demandada se les sugería la respuesta, situación que el apoderado de la actora no objetó al respecto, entendiéndose su aceptación 330

Error de derecho en la apreciación de la prueba, por no externar las razones que lo motivaron a inferir que el testigo era el mismo que le restringió el ingreso al trabajador a su centro de trabajo, a pesar de que en la demanda no se determinó..... 333

Vulneración al art. 461 del CT. Cuando no se motiva en legal forma la pertinencia, idoneidad, utilidad y su relación con los demás medios de prueba vertidos en el proceso, infringiendo las reglas de la sana crítica 336

Quebrantamiento de las formas esenciales del juicio..... 340

Para que proceda es indispensable que quien lo invoca haya reclamado la subsanación de la falta, haciendo uso oportunamente y en todos sus grados de los recursos establecidos por la ley, salvo que el reclamo fuere imposible 340

Recurso de casación..... 341

Declaratoria de inadmisibilidad cuando el planteamiento del impetrante no es claro, sino por el contrario tiene contradicciones, pues por una parte sostiene que el ad quem incurre en errónea aplicación del art. 383 CT, pero luego expresa infracción al principio de congruencia..... 341

Declaratoria de inadmisibilidad cuando no reúne los requisitos de pertinencia y fundamentación 343

Representación patronal 344

La infracción alegada, en relación al art. 414 del CT, no opera cuando el ad quem justifica las razones por las cuales no la tuvo por acreditada.. 344

Sustitución patronal..... 345

El patrono sustituto responderá solidariamente con el sustituido por las obligaciones laborales nacidas antes de la sustitución; pero, dicha responsabilidad sólo tendrá lugar durante el término de la correspondiente prescripción 345

El adquirente asume la categoría de patrono nuevo, con todos los derechos y obligaciones pasados, presentes y futuros derivados que surjan con motivo de las relaciones de trabajo..... 346

El trabajador no está en la obligación de probar la sustitución patronal, pero si debe establecer la relación laboral que existió tanto con el patrono sustituto como con el sustituido 347

Testigo de cargo..... 349

Procede la vulneración alegada, cuando las apreciaciones y razonamientos utilizados por el ad quem para desestimar la declaración no constituyen un fundamento válido y conforme a la sana crítica..... 349

Testigo de descargo..... 353

Inexistencia del vicio alegado, cuando se desestima su declaración por ostentar la calidad de representante patronal, ya que podría tener interés en las resultas del proceso..... 353

Voto concurrente de la magistrada Dafne Yanira Sánchez de Muñoz.. 356

Prueba electrónica 356

Alcance de los medios tecnológicos en la actividad probatoria 356

Proposición de la prueba 360

Al proponer la prueba digital o electrónica hay que tomar en cuenta la fuente de la prueba, el medio de la prueba y la prueba en sí 361

Definición 362

Forma de introducirla al proceso..... 363

Cuando la información contenida en las capturas de pantalla de una aplicación de mensajería instantánea no se redarguye de falsa o incompleta, debe estimarse su eficacia probatoria..... 366

Si las impresiones de captura de pantalla de los mensajes enviados a través de una aplicación de mensajería instantánea, no se han generado entre demandante y demandada, sino entre la demandada y un tercero, se debe acreditar el origen, titularidad y autenticidad de dicha información..... 367

Voto disidente de la magistrada Dafne Yanira Sánchez de Muñoz..... 368

Principio de congruencia..... 368

Vulneración del artículo 419 CT, cuando el ad quem resuelve sobre la base de cosa distinta a la solicitada en el recurso de apelación 368

Voto disidente de la magistrada Dafne Yanira Sánchez de Muñoz..... 372

Error de derecho en la apreciación de la prueba 372

Procedencia 372

Voto disidente de la magistrada Dafne Yanira Sánchez de Muñoz..... 374

Recurso de casación..... 374

Aspectos generales..... 374

Potestades del tribunal casacional..... 376

Alcance del tribunal casacional en el momento resolutivo..... 377

El tribunal de casación debe limitarse a resolver la controversia, sin abocarse a asuntos que debieron discutirse en primera instancia 379

Voto disidente de la magistrada Dafne Yanira Sánchez de Muñoz..... 381

Recurso de casación..... 381

El recurso no procede cuando no existe argumentación impugnativa asociada al contenido del artículo 284 CPCM, disposición considerada vulnerada, respecto del cual el juez a quo debió pronunciarse; y, si al ad quem se hubiera pronunciada al respecto no habría incidido en la decisión 381

Voto disidente de la magistrada Dafne Yanira Sánchez de Muñoz..... 384

Cuando el fallo omitiere resolver puntos planteados..... 384

La sentencia impugnada no debió de haber sido casada, ya que del análisis se evidencia que no existió la omisión que se le atribuye al ad quem 384

Voto parcialmente disidente de la magistrada Dafne Yanira Sánchez de Muñoz..... 387

Recurso de casación..... 387

La sentencia que se emite debe ser acorde a la valoración de la prueba testimonial de cargo y de descargo en su conjunto, a la luz de la sana crítica; por lo que, no es viable prescindir de la revisión de la valoración de la prueba testimonial de descargo..... 387

Voto parcialmente disidente de la magistrada Dafne Yanira Sánchez de Muñoz..... 389

Excepciones..... 389

Cuando los hechos y situaciones que constituyen la excepción se conocen con anterioridad a la presentación de la demanda, la misma debe alegarse con la contestación de la demanda, caso contrario, deberá de rechazarse por interponerse de forma extemporánea 389

Voto parcialmente disidente de la magistrada Dafne Yanira Sánchez de Muñoz 394

Excepciones 394

Las excepciones de pérdida de confianza y por revelar secretos de la empresa, alegadas por la sociedad demandada, fueron interpuestas extemporáneamente, al no ser presentadas con la contestación de la demanda, ya que los hechos se conocían con anterioridad a la interposición de la demanda 394